

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**

**Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho  
Internacional Privado**



**TESIS DOCTORAL**

**El derecho a la verdad en relación con violaciones graves de  
los derechos humanos.**

**Análisis de su génesis, evolución y estado actual en el  
ordenamiento jurídico internacional**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Jorge Rodríguez Rodríguez**

Directores

**Ana Gemma López Martín  
Javier Chinchón Álvarez**

**Madrid, 2017**

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

**FACULTAD DE DERECHO**

Departamento de Derecho internacional Público y  
Derecho internacional Privado



**EL DERECHO A LA VERDAD  
EN RELACIÓN CON VIOLACIONES GRAVES  
DE LOS DERECHOS HUMANOS.  
ANÁLISIS DE SU GÉNESIS, EVOLUCIÓN  
Y ESTADO ACTUAL EN EL ORDENAMIENTO  
JURÍDICO INTERNACIONAL**

Tesis Doctoral

**Jorge Rodríguez Rodríguez**

DIRECTORES:

Ana Gemma López Martín  
Javier Chinchón Álvarez

**Madrid, 2016**



*Quien controla el pasado controla el futuro.  
Quien controla el presente controla el pasado.*

**George Orwell, 1984**



*-Atticus, ¿vamos a ganar el caso?*

*-No, cariño.*

*- Entonces, ¿por qué...?*

*-Solo porque fuéramos derrotados cien años antes de haber comenzado no es razón suficiente para no volver a intentarlo.*

**Harper Lee, *Matar a un ruiseñor*.**



## AGRADECIMIENTOS

Para mí, escribir una tesis doctoral, no se ha correspondido solo con el tiempo dedicado a su investigación y escritura, sino que, además, ha comprendido todo un conjunto de aventuras y desventuras, tanto profesionales como personales, generadas por el camino. Vivencias en las que, afortunadamente, no he estado solo; pues, si así hubiera sido, hubiera sido imposible poder completar esta tarea sin haber perecido en el intento. Por ello, para ellos, para vosotros, las siguientes palabras.

En todo epígrafe de “agradecimientos” que he leído de cualquier tesis doctoral, la dedicatoria inicial, casi por sistema, va dirigida a aquellas instituciones, públicas o privadas, que con su aportación económica ayudaron a que el doctorando en cuestión pudiera realizar su trabajo sin tener que acudir a ayudas de familiares, buscar trabajos a tiempo parcial o ingeniar cualquier otra peripecia con la cual ganarse un sustento para poder continuar con la que es (o debiera ser) su ocupación central: realizar una tesis doctoral.

En mi caso, pese a no haber disfrutado de este tipo de financiación, sí he contado con recursos económicos que, entre otras cosas, me permitieron estudiar el máster que precedió a mi entrada al curso de doctorado, cursar dos estancias de investigación y concluir la tesis en Madrid. Esa financiación no vino de ninguna institución pública, sino gracias a mis padres. A ellos no solo les debo cada una de estas páginas, sino toda mi educación desde párvulos hasta el punto final de esta tesis. Y ayuda que va mucho más allá de lo meramente económico, sino que sin su apoyo moral y continuas charlas y ánimos cotidianos seguramente no hubiera podido iniciar el camino que ahora termina. Por ellos, y solo por ellos, todo esto ha sido posible.

También, claro, todo esto no hubiera sido posible sin dos personas que apostaron por mí desde el primer momento; a mis dos directores, los profesores Ana Gemma López Martín y Javier Chinchón Álvarez. A la primera, por confiar en mí y en este proyecto y por darme todas y cada una de las facilidades y apoyos necesarios, en especial en este último año, tanto para integrarme lo mejor posible en la vida universitaria y del departamento, como para terminar satisfactoriamente esta tarea.

Al segundo, por su incansable apoyo tanto profesional como personal desde el primer momento de nuestro encuentro (allá por 2011) hasta hoy día. Y relación que espero que continúe en el tiempo. Posiblemente no se imaginaría que cuando él escribía el apartado dedicado al derecho a la verdad de su propia tesis doctoral, donde recogía:



“este documento demuestra un creciente desarrollo del derecho a la verdad que, probablemente, acabará por desbordar los límites sostenidos en este apartado”, él sería el codirector de una tesis que pretendía analizar ese mismo desarrollo. Por ello, y por ser un auténtico maestro y mentor, gracias.

Este agradecimiento es extensible a una tarea que ha caminado a mi lado al mismo tiempo que la tesis avanzaba: mi colaboración con la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde di mis primeros pasos profesionales en el mundo de la protección de los derechos humanos. A sus más regulares colaboradores: Esther Beceiro, Cristian Velasco, el profesor Carmelo Faleh y muy especialmente a su presidente, y también maestro para mí, el profesor Carlos Villán Durán. Mis más sinceros agradecimientos por todo lo que he crecido y sigo creciendo a su lado.

También agradecer a los integrantes del Instituto Holandés de Derechos Humanos su trato durante los meses de 2013 que estuve trabajando con ellos. En especial a las profesoras Brianne McGonigle Leyh, Diana Contreras Garduño y Anja Mihr. Igualmente, este agradecimiento es extensible al profesor Felipe Gómez Isa por su atención y apoyo en mi estancia en el Instituto de Derecho Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto; relación que espero podamos mantener en el tiempo.

Por supuesto, agradecer todo el apoyo recibido por parte de toda mi familia, tanto de Granada, como de Pamplona, Barcelona y Quesada. En especial a la memoria y el recuerdo de mi tío Antonio.

Igualmente, quiero dedicar todo este trabajo a la memoria de tres de mis abuelos: Pepe, Antonio y Lucía, y mi bisabuelo Esteban, fusilado en la Guerra Civil e inspiración central en el estudio del tema que en este trabajo se aborda.

A mi abuela Paqui, por todos los momentos vividos con ella y los que me quedan aún por vivir.

También, y muy especialmente, a mis “primastras”, Elisa y Delia, y “primastros políticos”, Berni y Mikel, por ser, ellos cuatro, referencias en muchos aspectos de mi vida.

Por supuesto, mi eterna gratitud a todos aquellos amigos que me han acompañado a lo largo de todo este periplo, tanto en Madrid como en Granada:

Agradecer todo el apoyo que me han brindado, y no solo durante estos años, sino durante casi quince, a todos los que han compartido conmigo vivencias y experiencias durante el verano en el Campamento Nhorte. Este agradecimiento es especialmente

significativo para: Violeta, Oliva, Gonzalo, Dani, María, Miki, Ana, Raúl e Irene. Y espero que, para Pablo, Jorge, Rubén y Andrea, por su juventud, esto que aquí presento contribuya a inspirarles en el largo camino que aún les queda por atravesar en sus estudios y futura vida laboral.

A Pili porque pese a que no hemos convivido nunca en la misma ciudad, no nos hace falta para lo que realmente importa.

A Juan por ser la voz de la experiencia y el consejo.

Agradecer, por supuesto, a Esther, Erica y Hugo todos estos años de amistad, compañía, viajes y conciertos.

A Blanca por todo lo pasado y todo lo que somos.

Especial gratitud a aquellos que han compartido y sufrido conmigo este último año de trabajo, agobios y nuevas vivencias: Paula, Darío, Felipe, Cristian y, especialmente, a Jorge y Elisa.

A Esther, porque este es un gran paso en mi vida académica de la que ella ha sido parte desde mi primer año de universidad.

Por supuesto, mi más sincero agradecimiento a Alberto, Felipe, Luís y Gerardo, por estar siempre presentes durante más de diez años de amistad (y los que vendrán).

A Ángela por toda una vida y a Silvia por la que le queda por vivir.

Todo esto no habría sido posible sin “mi familia”: Joshué, Mavi, Omar, Aroa, Carlitos, Ana y Raúl. Sin el camino que hemos recorrido, lo que nos hemos dejado y lo que hemos ganado, esto no habría sido posible.

Y, por último, cada una de las palabras que siguen, son por y para mi hermana, Lucía.

Porque sigamos aprendiendo y disfrutando el uno del otro allá donde estemos.



# ÍNDICE

<b>RESUMEN</b> .....	<b>21</b>
----------------------	-----------

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>24</b>
-----------------------	-----------

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>27</b>
---------------------------	-----------

1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.....	27
2. FUENTES DE CONOCIMIENTO Y METODOLOGÍA.....	34
3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO.....	39

## **PARTE I. GÉNESIS Y PRIMEROS AVANCES EN LA GESTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD (1970-1990)**

<b>CAPÍTULO I. LA APARICIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</b> .....	<b>45</b>
---	-----------

1. LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESAPARECIDOS EN CONFLICTO ARMADO.....	48
2. EL PROTOCOLO I ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES.....	50
3. EL DERECHO A LA VERDAD EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.....	54

3.1 Consideraciones previas sobre los mecanismos convencionales de Naciones Unidas.....	54
3.2. La práctica del Comité de Derechos Humanos.....	59
3.3. Los procedimientos especiales de la Resolución 1235 (XLII) del ECOSOC.....	63
3.3.1. <i>Consideraciones iniciales</i> .....	63
3.3.2. <i>Grupo de Trabajo ad hoc encargado de investigar la situación de los derechos humanos en Chile</i> .....	66
3.3.3. <i>Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias</i> .....	67
4. EL DERECHO A LA VERDAD EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRIMERAS APROXIMACIONES.....	70
4.1. Exposición inicial.....	70
4.2. El derecho a la verdad y la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El surgimiento del derecho a la verdad colectivo y el derecho de los menores a “no conocer”.....	73
4.3 El derecho a la verdad y la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La <i>verdad</i> como el fin de la investigación judicial.....	79

<b>CAPÍTULO II. PRÁCTICA ESTATAL. EL SURGIMIENTO DE LAS PRIMERAS COMISIONES DE LA VERDAD.....</b>	<b>85</b>
1. CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS.....	85
2. ESTUDIO DE CASOS.....	90
2.1 Pakistán.....	90
2.2. Uganda.....	91
2.3. India.....	93
2.4. Portugal.....	94
2.5. Ghana.....	94
2.6. Bolivia.....	96
2.7. Argentina.....	99
2.8. Perú.....	102

2.9. Uruguay.....	104
2.10. Uganda (II).....	106
2.11. Zimbabue, Filipinas, Zanzíbar.....	108
3. VALORACIÓN FINAL.....	109

## **PARTE II. EL DESARROLLO EN LA IMPLANTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD (1990-2000)**

### **CAPÍTULO III. LA DEFINICIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.....113**

1. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: LA DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE 1992 Y SU CONEXIÓN CON EL DERECHO A LA VERDAD.....	113
2. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: EL “INFORME JOINET” Y EL DEBATE SOBRE LA VERDAD JUDICIAL/ EXTRAJUDICIAL, E INDIVIDUAL/COLECTIVA.....	121
3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS.....	135

### **CAPÍTULO IV. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. EL ENCAJE DE LA VERTIENTE COLECTIVA DEL DERECHO A LA VERDAD EN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 1969.....143**

1. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.....	143
2. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.....	147

**CAPÍTULO V. PRÁCTICA ESTATAL. LA PROLIFERACIÓN DE LOS  
MEDIOS EXTRAJUDICIALES PARA INVESTIGAR LOS ABUSOS DE  
DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL PASADO.....155**

1. ESTUDIO DE CASOS.....	156
1.1. Chile.....	156
1.2. Nepal.....	160
1.3. Chad.....	161
1.4. El Salvador.....	162
1.5. Polonia.....	167
1.6. Alemania.....	169
1.7. Honduras.....	175
1.8. Paraguay.....	179
1.9. Guatemala.....	181
1.10. Sri Lanka.....	185
1.11. Haití.....	186
1.12. Burundi.....	189
1.13. Sudáfrica.....	192
1.14. Checoslovaquia / República Checa.....	202
1.15. Brasil.....	203
1.16. Ecuador.....	205
1.17. Estonia, Letonia y Lituania.....	206
1.18. Uzbekistán.....	213
1.19. Nigeria.....	214
1.20. Argentina.....	216
1.20.1. Fundamentos legales de los juicios por la verdad.....	221
1.20.2. Fundamentos técnico – formales de los juicios por la verdad.....	224
2. VALORACIÓN FINAL.....	230

**PARTE III. PROGRESOS FUNDAMENTALES EN EL AFIANZAMIENTO DEL  
DERECHO A LA VERDAD (2000 – 2010)**

**CAPÍTULO VI. AVANCES EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA  
VERDAD EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS  
DERECHOS HUMANOS Y SU APUNTALAMIENTO EN EL MARCO  
CONVENCIONAL.....235**

1. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES  
UNIDAS: LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS SOBRE EL  
DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS  
NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DE  
VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL  
HUMANITARIO A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER  
REPARACIONES DE 2005.....235
2. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO DE DERECHOS  
HUMANOS.....242
  - 2.1. Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad.....242
  - 2.2. Resolución 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos. El vínculo  
entre el derecho a la verdad y el derecho a la información.....248
  - 2.3. Decisión 2/105, Resolución 9/11 y Resolución 12/12 del Consejo de  
Derechos Humanos. La cuestión de los archivos y de la protección de  
testigos.....253
3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA CONVENCION INTERNACIONAL  
PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS CONTRAS LAS  
DESAPARICIONES FORZADAS DE 2006.....259
4. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ DE  
DERECHOS HUMANOS. EL AFIANZAMIENTO Y DESARROLLO DEL  
DERECHO LA VERDAD COLECTIVO.....267
5. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA RESOLUCIÓN 1235 (XLII)  
DEL ECOSOC.....277



5.1. La interrelación entre verdad con la justicia, la reparación y el acceso a la información en la práctica del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.....	277
5.2. El derecho a la verdad y la detención arbitraria.....	281
5.3. Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. ¿El derecho a la verdad como norma de <i>ius cogens</i> ?.....	283

## **CAPÍTULO VII. PROGRESOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LA CUESTIÓN DE LA AUTONOMÍA DEL DERECHO A LA VERDAD.....289**

1. RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS SOBRE EL DERECHO A LA VERDAD.....	289
2. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.....	290
3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.....	295
3.1. La determinación de la posición y vinculación jurídica de las vertientes individual y colectiva del derecho a la verdad dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.....	296
3.2. La posición y concreción de la verdad extrajudicial (o histórica) en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.....	303

## **CAPÍTULO VIII. PRÁCTICA ESTATAL. EL AUMENTO MÁS DESTACADO DE LA ACTUACIÓN ESTATAL EN ESTE ÁMBITO.....311**

1. ESTUDIO DE CASOS.....	312
1.1. Corea del Sur.....	312
1.2. Sierra Leona.....	316
1.3. Costa de Marfil.....	321
1.4. Uruguay.....	322
1.5. México.....	324

1.6. Eslovaquia.....	325
1.7. Panamá.....	326
1.8. Bosnia y Herzegovina.....	328
1.9. Perú.....	333
1.10. República Federal de Yugoslavia.....	338
1.11. Timor Oriental.....	340
1.12. Granada.....	341
1.13. Ghana.....	342
1.14. Paraguay.....	343
1.15. Chile.....	346
1.16. Argelia.....	348
1.17. Rumanía.....	349
1.18. Argentina.....	351
1.19. Marruecos.....	355
1.20. República Democrática del Congo.....	357
1.21. Colombia.....	358
1.22. Tailandia.....	364
1.23. Liberia.....	366
1.24. Bulgaria.....	367
1.25. República Checa.....	368
1.26. Ecuador.....	369
1.27. Kenia.....	372
1.28. Islas Salomón.....	374
1.29. Guatemala.....	375
1.30. Brasil.....	377
2. VALORACIÓN FINAL.....	379

**PARTE IV. CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD Y**  
**PROBLEMAS PARTICULARES SURGIDOS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO**  
**(2010-2015)**

**CAPÍTULO IX. SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE  
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LA DEFINITIVA  
CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD COLECTIVO EN EL  
MARCO CONVENCIONAL.....383**

1. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. LA ACTUALIZACIÓN DEL SIGNIFICADO DEL ARTÍCULO 2.3. DEL PIDCP.....	383
2. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA.....	389
3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA.....	395
4. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS.....	400
5. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA RESOLUCIÓN 1235 (XLII) DEL ECOSOC.....	401
5.1. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Especial referencia al comentario general sobre el derecho a la verdad y las desapariciones forzadas.....	401
5.2. Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. La concreción del acceso a la información dentro del contenido del derecho a la verdad.....	407
5.3. Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. La “rendición de cuentas” y el derecho a la verdad.....	411
5.4. Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Concreción y avances en su interrelación con los derechos a la justicia, reparación y no repetición y en la materialización de su modalidad colectiva.....	415

6. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. ESPECIAL ATENCIÓN AL VALOR JURÍDICO DE LA RESOLUCIÓN 68/165.....	422
---	-----

## **CAPÍTULO X. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. AVANCES EN LA AUTONOMÍA DEL DERECHO A LA VERDAD.....443**

1. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.....	443
2. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.....	446

## **CAPÍTULO XI. ESTADO DEL DERECHO A LA VERDAD DENTRO DEL SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LAS PRIMERAS DECISIONES DEL TEDH.....457**

1. CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.....	457
2. EL DERECHO A LA VERDAD EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.....	459

## **CAPÍTULO XII. PRÁCTICA ESTATAL. EXPERIENCIAS RECIENTES Y VALORACIÓN DE CONJUNTO.....469**

1. ESTUDIO DE CASOS.....	470
1.1. Colombia.....	470
1.2. Honduras.....	478
1.3. Tailandia.....	480
1.4. República Bolivariana de Venezuela.....	482
1.5. Corea del Sur.....	484

1.6. Costa de Marfil.....	486
1.7. Brasil.....	487
1.8. México.....	489
1.9. Nepal.....	492
1.10. Túnez.....	494
2. VALORACIÓN DE CONJUNTO.....	495
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>503</b>

## **ANEXOS**

### **I. BIBLIOGRAFÍA**

1. Monografías.....	521
2. Obras generales.....	527
3. Artículos en revistas científicas especializadas.....	529
4. Contribuciones en obras colectivas.....	540

### **II. JURISPRUDENCIA**

1. Jurisprudencia internacional.....	552
2. Jurisprudencia interna.....	560

### **III. LEGISLACIÓN**

1. Tratados internacionales.....	561
2. Legislación interna.....	562

### **IV. DOCUMENTACIÓN**

1. Documentos de la ONU.....	570
2. Documentación del ámbito regional americano.....	588
3. Informes de Comisiones de la Verdad.....	590
4. Documentos de Organizaciones No Gubernamentales.....	592
5. Otra documentación.....	595

## **RESUMEN**

El derecho a la verdad viene gozando de importante repercusión e interés habida cuenta del gran protagonismo que le han otorgado los órganos protectores de derechos humanos de los distintos sistemas de protección (en especial el universal y el interamericano) desde mediados de los años ochenta. A ello habría de sumársele los numerosos mecanismos que desde los años setenta los Estados han implementado para que tanto las víctimas como la sociedad pudieran conocer lo sucedido tras la perpetración de violaciones graves de derechos humanos, en forma de comisiones extrajudiciales de investigación, legislación de desclasificación de archivos o cualquier otro medio que pudiera permitir que las víctimas y la ciudadanía tuvieran acceso a este tipo de información.

La proliferación de toda esta práctica a nivel interno de los Estados, y en las propias instituciones internacionales protectoras de derechos humanos, ha promovido la aparición de un intenso debate tanto a nivel doctrinal como institucional en torno a dos cuestiones principales acerca del derecho a la verdad. Primero, qué vinculación jurídica ostenta este derecho. Y, segundo, qué significado puede adscribirsele. Ambas cuestiones serán el objeto central de la presente tesis, aunque circunscrito a qué estarán obligados los Estados para con este derecho tras la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.

Debido a que pretendemos brindar una visión lo más completa posible del derecho a la verdad dentro del ordenamiento internacional, nuestro análisis se centrará en el estudio tanto de la práctica protagonizada por los órganos de protección de los derechos humanos de los sistemas universal, interamericano y europeo; como la emprendida por los Estados. De esta forma, podremos contar con una visión del derecho a la verdad tanto dentro del Derecho internacional convencional, como del Derecho internacional general, que ahondará no solo en su posición concreta en el ordenamiento internacional, sino también en todos aquellos nexos que con este derecho se han averiguado; entre los que sobresalen: la justicia, la reparación y la información.

Esta disparidad de apreciación de la naturaleza y contenido del derecho a la verdad llegará incluso a los distintos sistemas de protección. En concreto, la principal

causa de diferenciación entre los mismos será la manera en la que la vertiente colectiva del derecho a la verdad será materializada. Es decir, aquella que concreta el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre ocurrido tras la perpetración de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos; vertiente típicamente desligada del proceso penal.

De hecho, nos encontramos ante dos tendencias diferenciadas a la hora de dar cobertura al derecho a la verdad colectivo, al haber concluido que la verdad individual queda afianzada dentro de la obligación de los Estados de investigar penalmente con las debidas garantías una violación de derechos humanos. La primera de ellas será la imperante dentro de los organismos convencionales del sistema universal, en la cual los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas tendrán la obligación no solo de incoar procedimientos penales orientados a investigar violaciones de derechos humanos (cada uno dentro de su propia competencia), sino también la de crear mecanismos extrajudiciales orientados a investigar las causas, consecuencias y demás hechos que tuvieron lugar durante una comisión de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, en aras de que se conozcan públicamente y no se vuelvan a cometer en un futuro.

Por su parte, dentro de los sistemas interamericano y europeo, pese a que se contará igualmente con un reconocimiento de ambos tipos de derecho a la verdad dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la vertiente colectiva responderá únicamente a la obligación de los Estados de dar a conocer públicamente los resultados de la investigación penal que previamente se hubiera incoado; sin considerar la creación de comisiones extrajudiciales de investigación de obligatoria constitución dentro del derecho a la verdad colectivo.

De otro lado, la práctica de los Estados para con el derecho a la verdad colectivo será de análisis indispensable para conocer su posición dentro del Derecho internacional general; en concreto, si, tal y como ha afirmado cierto sector doctrinal, se puede afirmar que el derecho a la verdad posee raigambre consuetudinaria. Sin embargo, tras el estudio de la práctica de ciento treinta y seis Estados, no puede colegirse que estemos ante un comportamiento generalmente aceptado como derecho, en aplicación del literal del art. 38 de la Corte Internacional de Justicia. Misma opinión puede desprenderse tras

la lectura de la Resolución 68/165 de 18 de diciembre de 2013 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad.

Por último, la práctica estatal al respecto sí que abre la puerta a la posibilidad, aunque bastante remota a nuestro parecer por lo difícil de su probación, a la vigencia de una costumbre regional que vincule a quince Estados de América Latina y el Caribe a crear mecanismos extrajudiciales de investigación tras la comisión de violaciones graves de derechos humanos.



## **ABSTRACT**

The right to the truth has, lately, enjoyed an important repercussion due to the practice of the human rights protection organs, which belongs to the different human rights protection systems – especially the Universal and the Interamerican one, since the eighties. The same importance can be also applicable to the State's practice. Since the seventies, a remarkable number of States have implemented several mechanisms with the purpose of societies and victims knew what had happened after the commission of human rights violations. This mechanism could be non judicial investigating commissions, desclassification of archives legislation or any other which allow both the society and the victims to access to this kind of information.

The proliferation of this practice, on an internal and international level, has promoted the appearance of an intense debate inside the doctrine around two central topics. The first one, what is the legal status of the right to the truth. And the second one, what is its global meaning. Both will be the central questions of this thesis, but restricted to the commission of serious human rights violations.

Indeed, our objective is to get a complete understanding of the right to the truth. That is why our analysis will be focus on the study of the practice of the human rights protection organs of the Universal, Interamerican and European systems and the one carried out by the States. Thus, we will count on the vision of the right to the truth on the general and conventional International Law. Also, we will study the diverse links existing with the right to the truth, especially intense with the justice, reparations and information.

The different perceptions of the right to the truth will go even beyond. This right does not have an equal judicial binding, nor a similar content, within the previous systems. In particular, the principal cause of disagree will be the way of implement the collective aspect of the right to the truth – the one that materialize the right of the society to know the truth after the commission of massives and systematic human rights violations; aspect non related to the criminal trial.

In fact, we find two trends to implement this collective right. On the one hand, the one followed by three conventional organs of the Universal protection system. The States Party of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention

Against Torture and the International Convention for the Protection of All Person From Enforced Disappearance have the international obligation to create non judicial commission destined to investigate the causes, consequences and other facts which happened during a period of massive and systematic human rights violations. The purpose of this obligation will be that those terrible violations being publicly known in order not to be repeated in the future.

On the other hand, within the Interamerican and European systems, although they also recognize both types of right to the truth, inside the American Convention on Human Rights and the European Covenant on Human Rights and Fundamental Freedoms, respectively, the collective aspect will just be protected by the publication of the results of the criminal trial. Those international courts do not consider the creation of non judicial commission as an obligation within the meaning of the collective right to the truth.

Concerning the practice of the States about the collective right to the truth, will be essential its analysis to know its place on the general International Law and, in particular, if this right could be understood as customary law. However, after the study of a hundred and thirty six States could not be concluded that the State's practice on the collective right to the truth respond to "a general practice accepted as law", following the article 38 of the statute of the International Court of Justice. We arrive to this very conclusion after reading the Resolution 68/165 of the General Assembly of the United Nations, 18<sup>th</sup> December 2013, about the Right to the Truth.

Finally, this same practice does provide us the possibility to consider the existence of a regional costum that will bind to fifteen State of Latin America and Caribbean. However, it would be fairly difficult to confirm this assessment.



# INTRODUCCIÓN

## 1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Tal y como reza el título de la presente tesis doctoral, el objeto de la misma se centra en el análisis de la génesis, el desarrollo y la situación actual del derecho a la verdad en el ordenamiento jurídico internacional; labor que, sin duda, entraña diversas dificultades. Una de ellas, seguramente la primera, se refiere al mismo concepto, tan polisémico, de la *verdad*. Y es que estamos ante un término que ha sido objeto central de reflexión y polémica dentro de disciplinas tan alejadas (pero no ajenas) para nuestro campo como, entre otras, la filosofía<sup>1</sup> o la historia<sup>2</sup>; resultando, además, que la *verdad*, aún para el jurista, alude a una idea carente de un contenido estrictamente jurídico o, al menos, claramente identificable dentro de las fronteras del mundo del derecho.

Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a la transformación o conversión de la *verdad* en una categoría propia dentro del Derecho internacional, hasta el punto de que se ha convertido en una mención o referencia presente en un muy amplio, y creciente, número de documentos y decisiones de órganos nacionales y/o internacionales, así como de la práctica estatal. Su germen normativo puede situarse en la regulación de los conflictos armados (esto es, del Derecho internacional Humanitario –DIH–), dentro de la obligación de los Estados de buscar a los desaparecidos en estos contextos. Pero a partir de ello, su alcance y dimensiones no han cesado de extenderse.

La obligación de búsqueda establecida en el DIH empezó a ser también tenida en cuenta dentro del Derecho internacional de los Derechos Humanos (DIDH), en sus distintos sistemas de protección, en un proceso casi paralelo a la propagación de numerosos gobiernos dictatoriales a lo largo de todo el continente americano;

---

<sup>1</sup> Interesantes son las reflexiones sobre la “verdad” de Michel Foucault: FOUCAULT, M., *La verdad y las formas jurídicas*, Barcelona, Gedisa, 2009; o Friedrich Nietzsche: NIETZSCHE, F., *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y otros fragmentos de filosofía del conocimiento*, Madrid, Tecnos, 2012.

<sup>2</sup> El campo de la historia referido a la “verdad” está ligado, no tanto a intentar dilucidar una definición al uso, sino a cómo el historiador, como la persona que transmite un determinado relato, puede incidir en determinar qué se cuenta y cómo se cuenta. En concreto, Eric Hobsbawm afirma sobre el papel del historiador: “[existen] muchos intentos de sustituir la historia por el mito y la invención [que] no son simples bromas pesadas de tipo intelectual. Después de todo, tienen el poder de decidir lo que se incluye o no en los libros de texto”. “Es muy importante que los historiadores recuerden la responsabilidad que tienen y que consiste ante todo en permanecer al margen de las pasiones políticas” (HOBSBAWN, E., *Sobre la historia*, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 19 – 20).

terminando por adquirir unos perfiles propios claramente reseñables. En este sentido, las muestras que ejemplifican la asunción de lo anterior en contextos alejados del DIH las encontramos ya, por un lado, en la preocupación que por este particular mostró la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG) acerca de las violaciones de derechos humanos durante y tras el golpe de Estado de Pinochet; y, por otro, en plena efervescencia del drama de los “desaparecidos” por la dictadura de las Juntas Militares en Argentina, en las reivindicaciones de las Madres (después Abuelas) de la Plaza de Mayo por “saber la verdad” acerca de lo que allí estaba aconteciendo. En otras palabras, estaríamos ante la demanda de las víctimas directas de estos actos, y la sociedad que los sufrió, de conocer lo que pasó, cómo pasó, quién lo hizo y por qué<sup>3</sup>.

Esta exigencia fue llevada ante distintos órganos protectores de derechos humanos del sistema universal e interamericano (y solo más recientemente ante el europeo), cuya práctica generada a lo largo de los años, junto a las políticas adoptadas en no pocos Estados tras haber sufrido un período de violaciones graves de derechos humanos, han conformado el proceso de formación y desarrollo de lo que hoy en día se conoce como el *derecho a la verdad*.

No obstante, ni en todos, ni para todos los órganos internacionales de protección de derechos humanos -tampoco para todos los Estados-, este derecho poseía (ni posee) un alcance jurídico o un contenido idéntico u homogéneo. Situación que *mutatis mutandi* es igualmente identificable en la doctrina, que desde finales de los años ochenta hasta nuestros días ha tratado el contenido y carácter jurídico del derecho a la verdad. En efecto, para referirse al mismo se han utilizado numerosos “apelativos” que intentaban (e intentan) establecer la posición con la que este ‘derecho’ cuenta dentro del ordenamiento internacional; aunque, a primera vista, sin que en la mayoría de estas ocasiones se supiera con certeza la vinculación que los Estados habrían de tener con relación al mismo.

De esta forma, el derecho a la verdad se nos presenta como una noción que según en qué contextos y en qué ámbitos poseerá un contenido y una vinculación jurídica diferentes, cuando no contrapuestos. Entre las etiquetas con las que se le ha calificado

---

<sup>3</sup> Sobre las acciones de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo puede consultarse: GONZÁLEZ BRINDAS, A., “Abuelas-Madres de la Plaza de Mayo: la construcción social de la memoria”, en GÓMEZ ISA, F., (dir.) *El derecho a la memoria*, Bilbao, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. Universidad de Deusto, 2006, pp.588-592.

encontramos, por ejemplo, los siguientes: “principio emergente”<sup>4</sup>; “principio rector”<sup>5</sup>; “concepto en desarrollo doctrinal y jurisprudencial”<sup>6</sup>; o derecho sinónimo (es decir, que comparte contenido) del derecho a una investigación efectiva<sup>7</sup>, del derecho a saber (propio del DIH)<sup>8</sup>, o del derecho a ser informado<sup>9</sup>. Estos posicionamientos, que podrían centrar su atención en la misma existencia de un derecho a la verdad autónomo, diferenciado y vigente en el Derecho internacional (general, aunque también convencional), pueden ser respondidos invocando otro tipo de posiciones que han definido al derecho a la verdad como Derecho internacional consuetudinario<sup>10</sup> o, incluso, como *ius cogens*<sup>11</sup>. Así las cosas, cabría recordar lo que bien señaló Juan Méndez en 2011, esto es, que en lo relativo a la situación de este derecho en el ordenamiento internacional: “la discusión recién ha comenzado en la comunidad internacional”<sup>12</sup>.

<sup>4</sup> MÉNDEZ, J., “Derecho a la verdad frente a las graves violaciones de derechos humanos”, en ABREGÚ, M., COURTIS, C., *La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997, pp. 517 – 540.

<sup>5</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997, párr. 49.

<sup>6</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, Fondo, sentencia de 3 de noviembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 34*, párr. 86.

<sup>7</sup> LÓPEZ ULLA, J.M., “El ‘derecho a la verdad’ en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, *Persona y derecho*, vol.69, 2013, núm.2, pp. 147 – 148.

<sup>8</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 2005/66*, 20 de abril de 2005.

<sup>9</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue*, Doc. A/68/362, 4 de septiembre de 2013, párr. 14; COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 2005/66*, 20 de abril de 2005.

<sup>10</sup> Puede consultarse, entre otros: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción. Octavo informe revisado anual y lista de Estados que desde el 1º de enero de 1985 han proclamado, prorrogado o levantado el estado de excepción, presentado por el Sr. Leandro Despouy, Relator Especial, nombrado en cumplimiento de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/20, 26 de junio de 1995, p.57, párr. 40; TAPPATÁ DE VALDEZ, P., “Comisiones de la Verdad: un instrumento de las transiciones a la democracia”, *CPA ESTUDIOS / WORKING PAPERS*, vol. 6, 2003, pp.1-2; NEWMAN – PONT, V., “Falso o verdadero (¿El derecho a la verdad es norma imperativa internacional?)”, *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, vol. 14, 2009, p. 61; FAJARDO ARTURO, L.A., “Elementos estructurales del derecho a la verdad”, *Civilizar*, vol. 12, 2012, p. 30; DYKMANN, K., “Impunity and the Right to the Truth in the Inter-American System of Human Rights”, *Iberoamericana*, vol.7, 2007, núm.26, p.45.

<sup>11</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy*, Doc. E/CN.4/2006/52, 23 de enero de 2006, párr. 16.

<sup>12</sup> MÉNDEZ, J., “Responsabilización por los abusos del pasado”, en REÁTEGUI, F. (ed.), *Justicia transicional. Manual para América Latina*, Brasilia – Nueva York, Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil - Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011, p.202.

El estado de cosas resumido es lo que nos animó a emprender esta investigación, cuyo objeto principal es estudiar sistemáticamente el contenido, significado y naturaleza jurídica de lo que a lo largo de los años se ha ido construyendo bajo el término de derecho a saber - derecho a la verdad. En otras palabras, con este trabajo se pretende discernir qué y cómo es el derecho a la verdad, ya dentro del Derecho internacional convencional (universal o regional), ya dentro del Derecho internacional consuetudinario; y cómo y cuál ha sido el camino que se ha recorrido para alcanzar su último significado en los diferentes campos en donde ha sido tratado. Labor que se pretende acompañar de un análisis de todas las cuestiones problemáticas que han venido surgiendo a lo largo de estos años, junto con nuestras opiniones sobre los interrogantes que aún parecen abiertos.

Ahora bien, es importante precisar que siendo múltiples y complejas las conexiones existentes entre este derecho y otros ámbitos muy diversos (piénsese, por ejemplo, en la relación cada vez más consolidada entre derecho a la verdad – transparencia – calidad democrática), nuestra investigación se circunscribirá a un contexto o ámbito jurídico específico: el derecho a la verdad en relación con la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Así, aunque se incluirán algunas breves referencias a otras dimensiones, esta delimitación del objeto de estudio pretende poder conformar un análisis exhaustivo pero al tiempo, coherente y abarcable en un trabajo de esta naturaleza. A este respecto, es importante entonces clarificar aquí qué entendemos por “grave violación de derechos humanos”, labor para cual referiremos, de entre las muchas menciones posibles, al documento de trabajo presentado por Stanislav Chernichenko ante la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías sobre la “Definición de las violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos”<sup>13</sup>:

En primer lugar, por “derechos humanos” tomaremos la definición allí recogida, a cuyo tenor estaremos ante “aquellos derechos y libertades esenciales para configurar el estatuto jurídico de la persona en la comunidad en la que vive – requisito previo para una existencia humana digna en la sociedad moderna”<sup>14</sup>.

En segundo lugar, por “violación” (grave), no se considerarán “todas las infracciones de los derechos de la persona (...). Por ejemplo, la imposición ilícita de un

---

<sup>13</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en las esferas de que se ha ocupado la Subcomisión. Definición de las violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos como crímenes internacionales*, E/CN.4/Sub.2/1993/10, 8 de junio de 1993.

<sup>14</sup> *Ibid*, párr. 5.

tributo o gravamen de menor importancia no se puede considerar como violación de los derechos humanos”<sup>15</sup>. En este sentido, acudiremos a una teoría doctrinal bajo la cual por violación de derechos humanos se entenderán “aquellos actos que atentan de forma más directa contra la dignidad del ser humano”<sup>16</sup>.

En tercer lugar, y enlazando con lo anterior, en cuanto al concepto de “grave” hemos de precisar que prestaremos atención a los escenarios en que, no solo sean las víctimas individuales las afectadas, sino también (y en su caso) la propia comunidad que las ha sufrido por el impacto que estas acciones puedan tener en ella. Ello repercutirá en el estudio acerca de si la sociedad pudiera llegar a erigirse como sujeto activo del derecho a la verdad. Ciertamente, esta mención aproxima el concepto de “violaciones graves” al de las denominadas violaciones “masivas” y “sistemáticas” de derechos humanos, en el entendimiento de que toda violación masiva y sistemática será, al menos por lo cuantitativo, una violación grave; pero no toda violación grave será necesariamente masiva y sistemática. La cuestión, en todo caso, a precisar adecuadamente en este apartado es que nuestro estudio abarcará las “violaciones graves”, sea que afecten en exclusiva a los derechos humanos de una persona física, sea que lo hagan a la sociedad en su conjunto.

Aclarado lo anterior, hay que reconocer que la problemática más intensa en lo relativo al derecho a la verdad remite a los casos en que en general podemos identificar violaciones “masivas” y “sistemáticas” de los derechos humanos. Con todo, la misma definición inequívoca de estos dos conceptos es una tarea ciertamente compleja. Así, si continuamos con el documento de base ya citado, cabría indicar que las violaciones con carácter “masivo” son aquellas que se contraponen directamente a los casos individuales y también las que indiquen que “la situación de derechos humanos en un Estado determinado es deplorable”<sup>17</sup>. Sin embargo, el término “masivas” genera un problema conceptual debido a que es imposible poder llegar a determinar cuántos casos individuales son necesarios para que una violación pase de individual (la cual sí es fácil

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> CHINCHÓN ÁLVARES, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz. Hacia un modelo para el castigo de los crímenes del pasado a través de la experiencia iberoamericana*, Madrid, Ediciones Parthenon, 2007, p.229. En este mismo sentido sobre la dignidad humana como valor supranacional: VILLÁN DURÁN, C., *Curso de derecho internacional de los derechos humanos*, Madrid, Trotta, 2002, p. 92.

<sup>17</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en las esferas de que se ha ocupado la Subcomisión. Definición de las violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos como crímenes internacionales*, E/CN.4/Sub.2/1993/10, 8 de junio de 1993, párr. 6.



de determinar) a masiva<sup>18</sup>. Por su lado, por violación “sistemática”, se dice que responden a situaciones donde las violaciones “son la norma”, en contraposición con un hecho aislado<sup>19</sup>. Esto es, para que una violación pueda ser “sistemática” ha de ajustarse a un plan preconcebido. Al igual que en el caso anterior, ello nos genera también algunas dudas, por ejemplo: ¿qué grado de organización debe requerirse para identificar un conjunto de violaciones como sistemáticas?<sup>20</sup>

Sin entrar de lleno en otras disciplinas fuera del DIDH<sup>21</sup>, en lo que nos ocupa puede solventarse esta cuestión acudiendo al estándar propuesto por Medina Quiroga, quien ha identificado una serie de elementos que hubieran de concurrir para que un acto pueda ser identificado como “masivo” y/o “sistemático”. Entre ellos encontramos: elemento cuantitativo, al ser necesario un cierto número de víctimas; permanencia en el tiempo de las violaciones; elemento cualitativo, en el que se integrarán: tipos de derechos violados, carácter de la violación, tipo de víctimas afectadas; y planificación de las violaciones<sup>22</sup>.

El punto clave es que, como ya avanzamos, la comisión de este tipo de violaciones ha abierto el debate acerca de la posibilidad de que los Estados deban atender a dos obligaciones en relación con el derecho a la verdad (individual y colectiva), una vez hubieran padecido una situación de violaciones graves de derechos humanos y la necesidad, en consecuencia, de que se articulen mecanismos que dieran respuestas a estas dos reivindicaciones. De esta forma se pronunció Juan Méndez, en una de las primeras y más completas referencias doctrinales sobre el derecho a la verdad, y la existencia de un derecho a la verdad colectivo:

“Lo cierto es que la acumulación de experiencias y la creciente atención que la opinión pública internacional presta a este tema, han generado dialécticamente la aparición de principios emergentes en Derecho internacional, uno de cuyos más

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, párr. 13.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia... op.cit.*, p. 225.

<sup>21</sup> A este respecto es interesante la conexión realizada entre los conceptos “violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos” y “crímenes internacionales”, propia del Derecho Penal Internacional. Sobre este nexo véase: LÓPEZ MARTÍN, A.G., “Los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de Derechos Humanos en Derecho Internacional”, *Anuario Jurídico y Económico Esculiariense*, vol. 47, 2014, pp. 133-162; CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia... op.cit.*, pp. 223 – 229; OLLÉ SESÉ, M., *Justicia universal para crímenes internacionales*, Madrid, La Ley, 2008, pp. 247 – 257.

<sup>22</sup> MEDINA QUIROGA, C., *The Battle of Human Rights. Gross, Systematic Violations and the Inter-American System*, Londres, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 11.

claros preceptos es que, en presencia de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos más fundamentales (a la vida, a la integridad física de las personas, al debido proceso o a un juicio justo), el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar a quienes resulten responsables, y a revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo que pueda establecerse sobre los hechos y circunstancias de tales violaciones”<sup>23</sup>.

Así las cosas, no abordar en esta investigación el derecho a la verdad respecto a las víctimas individuales de graves violaciones a sus derechos esenciales, conformaría un estudio parcial pues, como veremos, no es solo que sea precisamente en estos casos cuando comienza a configurarse este derecho, sino que su desarrollo y consolidación continua hasta nuestros días. Pero a su vez, obviar los contextos en que estas violaciones pueden caracterizarse como de masivas y/o sistemáticas, dejaría fuera de su ámbito (al menos en su gran parte) el estudio sobre lo que se ha conocido como vertiente colectiva del derecho a la verdad. Esto es, una de las cuestiones donde la evolución de este derecho ha sido más intensa en los últimos años, como también lo han sido las discusiones y problemas que inevitablemente debemos examinar en este trabajo.

La misma relevancia y actualidad de un estudio unificado como el que aquí se propone puede encontrarse, por referir un par de ejemplos, en casos como el de Colombia y en su reciente “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, aprobado en diciembre de 2015 y a la espera de aplicación al momento de redacción de este trabajo. En su diseño son amplias las referencias al derecho la verdad (en su dimensión individual y colectiva), y pensamos que a luz de lo acontecido hasta la fecha, no serán pocas ni menores las discusiones sobre si este Estado, primero, cuenta con obligaciones vigentes para con este derecho y, en caso afirmativo, de dónde emanan, cuál es su contenido concreto y, sobre todo, si son respetadas o no en este Sistema.

En este mismo sentido, no debemos dejar de mencionar que la elección de este tema viene, igualmente, amparada por nuestra experiencia más cercana debido al debate doctrinal generado en torno a él en nuestro país. La protección que España ha brindado al derecho a la verdad ha sido también objeto de un acalorado debate, avivado por los

---

<sup>23</sup> MÉNDEZ, J., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p. 517.

requerimientos que a tal efecto emanan de instancias internacionales, en concreto, de determinados organismos protectores del sistema universal de derechos humanos. Y es que dentro de este sistema, se ha requerido al Estado que adopte medidas en aras de que las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo vean satisfecho un derecho que, según estos órganos, España está obligada internacionalmente a respetar. La falta de concordancia del comportamiento de España con lo que sostienen y reiteran estos órganos (y con lo que entiende, a su vez, parte de la doctrina), abre de nuevo o mantiene abiertas, en fin, las puertas a intentar discernir su verdadero alcance y significado.

En conexión con lo recién referido, y a partir de la demilitación anterior sobre el objeto de esta investigación, es importante señalar también que este estudio no se circunscribirá al tratamiento del derecho a la verdad dentro de las transiciones a la paz y/o la democracia, esto es, dentro de la así denominada en la Organización de Naciones Unidas, justicia de transición<sup>24</sup>. En efecto, pese a que parte importante de la práctica estatal que se analizará en derecho a la verdad se ha dado dentro de estos contextos, y ha sido ampliamente tratada por la “disciplina transicionalista”, en concreto, gracias a la proliferación de las comisiones de la verdad creadas a lo largo de estos períodos, el objeto del trabajo lo compondrá el derecho a la verdad tras la perpetración de graves violaciones de derechos humanos, también en períodos no transicionales y en las distintas manifestaciones en las que se haya materializado, es decir, más allá de lo que supone la creación de este tipo de comisiones.

## **2. FUENTES DE CONOCIMIENTO Y METODOLOGÍA**

En cuanto a las fuentes primarias utilizadas en esta investigación, anotar que se han correspondido, junto con la práctica estatal, con los documentos generados por cada uno de los órganos que componen los distintos sistemas de protección de los derechos humanos a los que nos referiremos: el universal, el interamericano y el europeo. Por su parte, el sistema africano, construido en torno a la Unión Africana, no formará parte de este estudio debido a que no se han encontrado referencias relevantes en ninguno de los organismos que la componen que hayan tratado o se hayan referido al derecho a la

---

<sup>24</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*, Doc. S/2004/616, 3 de agosto de 2004.

verdad. A su vez, dentro de la primera parte haremos referencia, igualmente, al DIH por considerarlo, como ya hemos anotado, el germen de lo que serán, posteriormente, los primeros pasos del derecho a la verdad en el DIDH.

Cada uno de los sistemas de protección anteriores será estudiado según la vinculación jurídica que a nuestro juicio y como explicaremos en detalle, ostenta la práctica de sus órganos. Especificando un poco más, dentro del sistema universal de protección el estudio se basará en la posición del derecho a la verdad dentro de tres tratados internacionales principales. Para ello nos serviremos de la interpretación, que de las obligaciones internacionales contraídas por los Estados, han realizado los órganos competentes al respecto: el Comité de Derechos Humanos (Comité DH) del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP); el Comité contra la Tortura (Comité CT) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT); y el Comité contra la Desaparición Forzada (Comité DF) de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CDF). Por otro lado, serán analizadas las Resoluciones de la AG y de la antigua Comisión, actual Consejo de Derechos Humanos (Comisión DH – Consejo DH) que tuvieran estrecha o especial relación con el alcance y contenido del derecho a la verdad. Igualmente, nos referiremos dentro del sistema universal a la práctica de aquellos órganos que han venido tratando el derecho a la verdad dentro del contenido de su mandato<sup>25</sup>: el Grupo de Trabajo ad hoc sobre la situación de los derechos humanos en Chile, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada (GTDFI), Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria (GTDA), el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (REIMA), el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (RELE), el Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos

---

<sup>25</sup> Han sido obviados aquellos de los que, pese a ser examinados, no se han encontrado práctica alguna en referencia al derecho a la verdad: Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Haití; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Iraq; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Somalia; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

en la lucha contra el terrorismo (RELT) o el Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (REVJR).

En segundo lugar, dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos nos basaremos en la posición de este derecho dentro del articulado de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de 1969, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como sustento principal. Como útil y necesario complemento para ello estudiaremos también el derecho a la verdad dentro de los distintos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).

Y, en tercer lugar, en lo concerniente al sistema europeo, nos referiremos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y su (reciente) interpretación del derecho a la verdad dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) de 1950.

Por otro lado, en cuanto al derecho consuetudinario, será examinada la práctica estatal sobre derecho a la verdad, aunque, hemos de precisar, especialmente centrada en su modalidad colectiva. Al respecto, y sin entrar aquí en discusiones sustantivas que se verán más adelante, esta atención específica viene justificada por el medio utilizado para materializar el derecho a la verdad individual, esto es, a través de una investigación y proceso penal. En esta parte del estudio se incorporarán los datos generales de la práctica estatal en este sentido, pero no así su examen detallado, pues ello obligaría a discriminar minuciosamente los elementos típicos del derecho a la verdad de los propios del derecho a la justicia dentro del proceso penal. Es decir, una tarea que requeriría de un desarrollo propio y tan singularizado que nos alejaría del objeto completo de nuestro trabajo.

Dentro del análisis de la práctica de los Estados para con el derecho a la verdad colectivo, se estudiará la práctica de aquellos que siguiendo la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pueden considerarse como “Estados especialmente interesados”. Esto es, en lo que nos ocupa, serán examinados aquellos Estados que han sufrido una época de violaciones graves de derechos humanos, y dentro de este grupo se identificarán aquellos que emprendieron acciones orientadas hacia el derecho a la verdad colectivo, y se analizarán qué tipo de medidas se implementaron, cómo y por qué se hizo así. Para ello nos serviremos de su propia legislación interna, resoluciones judiciales y todo aquello que pudiera facilitarnos averiguar la posición de cada Estado

examinado sobre este derecho. Sin olvidar, de su parte, la posición adoptada por las entidades estatales ante algunos documentos internacionales, señaladamente algunas Resoluciones de la AG, y muy especialmente la Resolución 68/165<sup>26</sup>.

En este punto es necesario hacer una indicación singular: el estudio del total de esta práctica supone una ardua labor debido al volumen de información al que nos enfrentamos, primero, para su recopilación y, posteriormente, para su sistematización e interpretación. Sin embargo, las mayores dificultades las encontramos, sobre todo, en lo que concierne a la búsqueda de la documentación estatal, al obligarnos a navegar, *inter alia*, por los distintos boletines o diarios oficiales (cada uno con su lengua oficial propia) de cada Estado que se hubiera pronunciado acerca del derecho a la verdad, en busca de la legislación correspondiente o de cualquier otra actuación que hubiera supuesto, en consecuencia, práctica estatal de útil análisis para alcanzar nuestros objetivos<sup>27</sup>. Ante la imposibilidad de contar con los recursos económicos necesarios para poder trabajar *in situ* en aquellos países objeto de nuestro interés (o al menos en los que consideramos más destacables, como hubiera sido lo deseable), la investigación a este respecto se ha basado en la búsqueda telemática de dicha información, con las limitaciones que ello comporta. Y es que en el caso de algunos Estados, la legislación, por cuestiones de orden interno, no es públicamente accesible. Ello trae como consecuencia que nos hayamos basado, solo en casos muy puntuales, en las citas que al respecto han realizado autores que sí han tenido acceso directo a ese tipo de información o han podido estudiar de primera mano el contexto en el que dicha legislación fue aprobada.

La consulta de todos estos documentos pertenecientes tanto a la práctica de los organismos internacionales antes comentados, como a la de los Estados, así como a los trabajos doctrinales que nos han ayudado a su interpretación, ha sido realizada gracias a los fondos disponibles en las bibliotecas de las Facultades de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Granada y del Instituto de Derecho de Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Igualmente, han sido consultados

---

<sup>26</sup>ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *El derecho a la verdad*, Doc. A/RES/68/165, 21 de enero de 2014.

<sup>27</sup> Esta ardua labor a lo que nos hemos enfrentado a lo largo de este proceso viene a confirmar lo que ya apuntaba Carlos Jiménez Piernas: “Respecto a la *práctica estatal*, conviene informar sobre las graves dificultades encontradas para conseguir los materiales de la práctica sobre todo de los Estados en desarrollo. La universalización de la SI no compagina bien con los obstáculos que sufre la consecuente universalización de los procesos normativos de su ordenamiento, solo paliados por el protagonismo informativo de las Organizaciones Internacionales universales y regionales”. JIMÉNEZ PIERNAS, C., “La práctica internacional y sus medios de prueba...”, *op.cit.*, p. 590.

los fondos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Utrecht (SIM), así como los de la Biblioteca de la Academia de Derecho internacional de La Haya.

Como último apunte acerca de las fuentes utilizadas, la doctrina que se ha manejado a lo largo del estudio ha sido imprescindible al suponer un claro sustento para la interpretación del conjunto de la práctica interna e internacional. Como hemos apuntado anteriormente, la mayor parte de los trabajos consultados se circunscriben dentro del régimen propio de la justicia de transición, al amparo de la actualidad con la que cuentan, hoy en día, las comisiones de la verdad dentro de los escenarios típicos de las transiciones políticas a la paz y la democracia. Igualmente, nos encontramos ante numerosos estudios acerca de la posición con la que este derecho cuenta dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH, referida en su mayor parte a las desapariciones forzadas, por la creciente importancia de este derecho para los países de América Latina y la continua llegada de casos ante la jurisdicción de este tribunal sobre los abusos cometidos durante las etapas dictatoriales en estos países; algo que se contrapone a la falta de doctrina sobre el derecho a la verdad en otros sectores del ordenamiento como el sistema europeo, cuya jurisprudencia a este respecto aún está en camino de ir definiéndose; o su relación con el derecho a la información.

La importancia tanto de la creación de las comisiones de la verdad, como el amplio trato brindado al derecho a la verdad por parte del tribunal de San José, ha supuesto la aparición de otra categoría de estudios que pretendían, como es nuestro caso, ahondar en la naturaleza y vinculación jurídica de este derecho. No obstante, el hecho de que se haya tomado como base principalmente solo estos aspectos, desmereciendo (en la mayoría de los casos) otras vertientes existentes y la práctica de otros organismos, redundaba en que contemos con conclusiones que, aunque acertadas en muchas ocasiones, sean válidas simplemente para este tipo de ámbitos, no pudiendo, en consecuencia, ser entendidas o extrapolables como valoraciones generales sobre la posición del derecho a la verdad en el ordenamiento internacional. Y es que será, precisamente, en este vacío donde pretendamos asentar la presente investigación.

Definidas las fuentes, las características que le son propias a la investigación en Derecho en general y al Derecho internacional público en particular, condicionaron la elección de la **metodología de investigación** a implementar. Debido a que, como hemos ya expuesto, pretendemos abordar, por un lado, la práctica de los Estados en

derecho a la verdad desde 1970; y, por otro, la normativa internacional que regula (o ha venido regulando) las distintas vertientes o significados vinculados con el derecho a la verdad, el método inductivo ha sido el escogido, en tanto que es el que mejor se adapta a la finalidad a la que pretendemos arribar; pues de la selección de los anteriores caracteres concretos intentaremos construir una teoría general.

Esta vía de conocimiento basada en lo que concierne al Derecho internacional, como nos recuerda Carlos Jiménez Piernas, “en la libre observación de la realidad internacional” y “relacionada con una fundamentación sociológica del Derecho” se construye a través de “la identificación o determinación de las normas mediante la observación de su vigencia efectiva en la SI [sociedad internacional]”<sup>28</sup>. Esta identificación y posterior estudio de la normativa interna e internacional nos proporcionará los elementos necesarios a los que posteriormente habremos de referirnos para un estudio lo más completo posible sobre el significado del derecho a la verdad tras la comisión de las más graves violaciones de derechos humanos en los diferentes sectores del ordenamiento internacional.

No obstante, este rol principal con el que ha de contar el método inductivo no desmerecerá la aplicación de la lógica deductiva. En efecto, la interpretación y aplicación en Derecho del conjunto de la normativa anterior habrá de estar dirigida por el régimen que le es propio al Derecho internacional público, pues será en el que se encuadre el estudio del total de la legislación anterior, tanto nacional como internacional, así como en la doctrina correspondiente.

### **3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO**

Habiendo definido el objeto, las fuentes y la metodología de estudio, hemos de reseñar que su estructura estará claramente presidida por el carácter temporal que se le pretende dar a la investigación, con motivo, como ya argumentamos, de mostrar y demostrar la génesis y evolución del contenido y la vinculación jurídica del derecho a la verdad. Así, la división del trabajo consta de cuatro partes; cada una coincidente con un período concreto de tiempo.

---

<sup>28</sup> JIMÉNEZ PIERNAS, C., “La práctica internacional y sus medios de prueba (guía breve para abogados jóvenes)”, en JIMÉNEZ PIERNAS, C. (ed.), *Iniciación a la práctica en Derecho internacional y Derecho comunitario europeo*, Madrid, Marcial Pons – Universidad de Alcalá, 2003, p. 588.



La primera se extiende entre los años 1970 y 1990. La elección de este primer marco temporal viene determinada por ser en la década de los setenta donde aparecerán las primeras referencias dentro del Derecho internacional (en concreto en el marco del DIH) de lo que denominaremos “el germen del derecho a la verdad”. Del mismo modo, será también durante este período cuando aparezcan los primeros mecanismos no judiciales que los Estados implementaron para investigar violaciones graves de derechos humanos perpetradas dentro de su jurisdicción. Serán, así, estos primeros pasos los que centren el desarrollo de la primera parte de este trabajo. Ello comprenderá la práctica del DIH (en este período encontramos, en lo que nos ocupa, las únicas referencias dentro de este campo del ordenamiento internacional), así como su paso al DIDH dentro de los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos (capítulo II) y de los primeros comportamientos de los Estados al respecto (capítulo III).

La segunda parte analizará el período comprendido entre 1990 y el año 2000. En ella se empezarán a estudiar las primeras referencias concretas al derecho a la verdad en los sistemas universal e interamericano, así como la distinta vinculación jurídica y de contenido atribuible a las vertientes individual y colectiva; las cuales, pese a que ya aparecieron en la primera parte, serán examinadas en profundidad en esta segunda. De igual modo, cobra especial atención el desarrollo de la práctica estatal por contener, posiblemente, algunas de las experiencias más remarcables sobre la materialización del derecho a la verdad colectivo. Sobre su estructuración, cada capítulo de esta parte se corresponderá con cada uno de los sistemas de protección estudiados: el universal (capítulo IV) y el interamericano (capítulo V). Por último, el capítulo VI se dedicará a la práctica estatal durante esta época.

La tercera parte, primera década de los 2000, analizará alguno de los progresos más notables dentro del afianzamiento del derecho a la verdad en el ordenamiento internacional. La mayoría de los mismos aparecerán dentro del Derecho internacional convencional, en concreto, dentro del sistema universal; aunque no desmerecerá atención los avances ocurridos en el sistema interamericano, en lo concerniente sobre todo a la jurisprudencia de la Corte IDH. De forma paralela, acerca de la práctica estatal, es necesario puntualizar que durante esta etapa encontramos la mayor proliferación de mecanismos estatales orientados a la defensa del derecho a la verdad colectivo. Esta parte seguirá una estructura idéntica a la anterior: dos capítulos (VII y VIII) dedicados a la evolución del derecho a la verdad dentro del sistema universal e interamericano y uno (capítulo IX) a la práctica estatal.

Finalmente, la cuarta y última, incorporará el estudio de lo acontecido entre los años 2010 y 2015. En esta parte se tratarán algunas de las polémicas singulares que aparecieron durante esta etapa final del trabajo. Objeto central de atención merecerá la adopción de la primera Resolución temática de la AG sobre el derecho a la verdad y las posibles consecuencias jurídicas que la misma podría acarrear. En este mismo sentido, se realizará una valoración final y en conjunto de toda la práctica estatal examinada a lo largo del intervalo temporal examinado en este trabajo (1970 – 2015), en aras de averiguar sus posibles efectos jurídicos dentro del Derecho internacional general. A ello habrá de sumársele la aparición de las primeras sentencias del TEDH acerca de la posición del derecho a la verdad en aplicación del CEDH. La estructura de esta parte será la siguiente: los capítulos X, XI y XII se corresponderán con el estudio de los sistemas universal, interamericano y europeo, respectivamente. Por su parte, el capítulo XIII estará dedicado a las últimas experiencias nacionales en derecho a la verdad.

Conocida la evolución del derecho a la verdad dentro de los distintos sectores del DIDH, y los desarrollos que encontremos al respecto dentro de la práctica de los Estados, podremos acabar ofreciendo unas conclusiones sobre el carácter propio de este derecho dentro de los distintos contextos analizados, acerca de cómo y por qué se ha llegado a concretar de esa manera, así como respecto a los interrogantes o cuestiones que siguen pendientes de resolución completa.

La tesis termina con unos anexos en los que se recogen los materiales bibliográficos, jurisprudenciales, legales y documentales utilizados para llevar a cabo esta investigación.



## **PARTE I**

# **GÉNESIS Y PRIMEROS AVANCES EN LA GESTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD (1970-1990)**



# CAPÍTULO I

## LA APARICIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se dice que la guerra es tan antigua como la propia humanidad. Ya desde la antigüedad estaba presente la idea de que era necesario fijar ciertas limitaciones, pues una situación de conflicto armado no puede amparar o justificar cualquier comportamiento. Para ejemplificar esta afirmación, y remontándonos siglos atrás, la Iglesia Católica poseía el poder suficiente para prohibir a los caballeros cristianos el uso de ciertas armas<sup>29</sup>. De igual modo, en los tiempos de Luís XIV se estableció una especial atención al cuidado de los heridos durante el combate y mediante decreto de 1708 se aprobó un servicio médico permanente “à la suite des armées et dans les places de guerre”<sup>30</sup>. Sin embargo, muchas de las normas que regulaban las actividades armadas eran consideradas más códigos de honor que leyes de obligado cumplimiento, o eran referidas a meros principios de “humanitarismo”; no constituían, por tanto, estrictas reglas jurídicas<sup>31</sup>.

Como a continuación nos dispondremos a analizar, dentro de estas normas limitadoras de las acciones dentro del conflicto armado (las cuales conforman el llamado *ius in bello* o DIH) será donde situemos la aparición de lo que posteriormente será denominado derecho a la verdad. En concreto, será imprescindible la referencia explícita a las consecuencias dejadas por una de las acciones que más se prodigan dentro de todo conflicto armado: las desapariciones forzadas.

En efecto, a lo largo del siglo XX son numerosas las referencias que encontramos dentro de la regulación de los conflictos armados dirigidas a que los Estados contingentes tomaran toda una serie de medidas orientadas a la búsqueda de los desaparecidos en combate y, como consecuencia, crearan organismos cuya función específica era el registro, la búsqueda y la notificación a la parte interesada de los datos del desaparecido en caso de su descubrimiento. A este respecto cabe referirse a las

---

<sup>29</sup> GREEN, L.C., *The contemporary law of armed conflict*, Manchester, 3ª ed., Manchester University Press, 2008, p.29.

<sup>30</sup> BUTLER, G., MACCOBY, S., *The Development of International Law*, Londres, Longmans, Greens and Co., 1928, p.134.

<sup>31</sup> STACEY, R.C., “The age of chivalry”, en HOWARD, M., *The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World*, New Haven CT, Yale University Press, 1994, p.27 y ss.

llamadas Oficinas nacionales de información y la Agencia Central de búsquedas. La primera mención a esta primera institución se encontraba ya en el artículo 14 de la Convención II relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre firmada en La Haya el 29 de julio de 1899. Posteriormente, sería también incluida en el artículo 14 de la Convención IV relativa a las Leyes y Usos de la Guerra igualmente firmada en La Haya en 1907; y en los artículos 77 y 123 del Convenio III de Ginebra relativo a mejorar la situación de los prisioneros de guerra de 1949.

En este mismo sentido es menester al menos enumerar aquellas disposiciones que ya dentro de los Convenios de Ginebra de 1949 iban dirigidas a la búsqueda, no ya de los desaparecidos (cuya regulación específica aparecería más tarde y será analizada *infra*), sino de los heridos o náufragos en combate, en justa previsión de que pudiera llegar a desconocerse su paradero durante un conflicto armado. Cabe, por tanto, resaltar los artículos 15<sup>32</sup> y 16<sup>33</sup> del Convenio I para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña<sup>34</sup>. El artículo 18<sup>35</sup> del Convenio II para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar<sup>36</sup>. Y, por último, el artículo 16 del Convenio IV relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra<sup>37</sup>, que en su inciso segundo establece que “si las exigencias militares lo permiten cada una de las Partes en conflicto favorecerá las medidas tomadas para la búsqueda de los muertos y de los heridos”.

---

<sup>32</sup> “En todo tiempo, y especialmente después de un combate, las Partes en conflicto tomarán sin tardanza todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos y a los enfermos, para protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y proporcionarles la asistencia necesaria, así como para buscar a los muertos e impedir que sean despojados. Siempre que las circunstancias lo permitan, se concertará un armisticio, una interrupción del fuego o acuerdos locales que permitan la recogida, el canje y el traslado de los heridos abandonados en el campo de batalla. Podrán concertarse, asimismo, acuerdos locales entre las Partes en conflicto para la evacuación o el canje de los heridos y de los enfermos de una zona sitiada o cercada, así como para el paso del personal sanitario y religioso y de material sanitario con destino a dicha zona”.

<sup>33</sup> “Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea posible, toda la información adecuada para identificar a los heridos, a los enfermos y a los muertos de la parte adversaria caídos en su poder. Estos datos deberán, si es posible, incluir: a) designación de la Potencia a la que pertenecen; b) destino o número de matrícula; c) apellidos; d) nombre o nombres; e) fecha de nacimiento; f) cualquier otro dato que figure en la tarjeta o en la placa de identidad; g) fecha y lugar de la captura o del fallecimiento; h) datos relativos a las heridas, la enfermedad o la causa del fallecimiento”.

<sup>34</sup> Convenio I para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, adoptado en Ginebra el 12 de agosto de 1949. Ratificado por España el 4 de agosto de 1952. BOE núm.236, de 23 de agosto de 1952, pp.3823-3830. A octubre de 2014 cuenta con 196 Estados Parte.

<sup>35</sup> “Después de cada combate, las Partes en conflicto tomarán sin tardanza todas las medidas posibles para buscar y recoger a los náufragos, a los heridos y a los enfermos, para protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y proporcionarles la asistencia necesaria, así como para buscar a los muertos e impedir que sean despojados. Siempre que sea posible, las Partes en conflicto concertarán acuerdos locales para la evacuación por vía marítima de los heridos y de los enfermos de una zona sitiada o cercada y para el paso del personal sanitario y religioso, así como de material sanitario con destino a dicha zona”.

<sup>36</sup> Convenio II para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, adoptado el 12 de agosto de 1949. Ratificado por España el 4 de agosto de 1952. BOE núm. 239 de 26 de agosto de 1952, pp.3870-3876. A octubre de 2014 cuenta con 196 Estados Parte.

<sup>37</sup> Convenio IV relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, adoptado en Ginebra de 12 de agosto de 1949. Ratificado por España el 4 de agosto de 1952. BOE núm.246 de 2 de septiembre de 1952, pp.3997-4017. A junio de 2016 cuenta con 196 Estados Parte.

Ahora bien, ¿cuáles son las características propias de un acto de desaparición forzada que produce esa conexión con este inicial derecho a la verdad? Con carácter general son tres los elementos fundamentales que caracterizan tales actos: la privación de libertad, la denegación de información y la sustracción de la protección de la ley. Pero, sobre todo, la mayor peligrosidad de la desaparición forzada se centra en la situación en la que se encuentra el desaparecido.

Siguiendo lo dispuesto por Carmelo Faleh:

“(…) el desaparecido queda en una posición de quiebra o vulneración múltiple y continuada en el disfrute de la práctica totalidad de sus derechos. El principal derecho negado como consecuencia de la desaparición es su derecho a la libertad y seguridad personales. Pero la desaparición con mucha frecuencia viola o hace peligrar su derecho a la vida y a la integridad física y mental”<sup>38</sup>.

De todo lo anterior se desprende que la desaparición forzada constituye un delito pluriofensivo, es decir, tiene relación con la conculcación de varios derechos, recogidos muchos de ellos en lo que después, como veremos, serán distintos tratados internacionales de protección de derechos humanos. Caso paradigmático será, como analizaremos *infra*, el del PIDCP<sup>39</sup>, tratado que ocupará un lugar privilegiado durante la segunda mitad del siglo XX en la protección de los derechos tanto del desaparecido, como de sus familiares.

En este sentido, es un hecho que el conocimiento del paradero del desaparecido constituirá durante este período temporal (ya fuere en el DIH o en el Derecho internacional de los Derechos Humanos [DIDH]) el punto de partida que posteriormente

---

<sup>38</sup> FALEH PÉREZ, C., “La obligación internacional del Estado de prevenir e investigar los casos de desaparición forzada o involuntaria de personas”, RIPOL CARULLA, S., VILLÁN DURÁN, C., (dirs.), *Justicia de transición. El caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, 2011, p. p.71. En este mismo sentido, GÓMEZ CAMACHO, J.J., “La desaparición forzada de personas: avances en el derecho internacional”, *Revista Mexicana de Política Exterior*, núm.66, 2007, pp.35-37. Por su parte, es interesante reproducir en este contexto las palabras de Federico Andreu Guzmán: “(...) forced disappearance *per se* constitutes a violation of the right to security of the person; of the right to protection under the law; of the right not to be deprived arbitrarily of one’s liberty; of the recognition of the legal personality of every human being; and of the right not to be subjected to torture or to other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. ANDREU GUZMÁN, F., “The Draft International Convention on the Protection of All Persons from Forced Disappearance”, *The Review of the ICJ - Impunity, crimes against humanity and forced disappearance*, núm.62 – 63, 2001, p.2.

<sup>39</sup> Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, ratificado por España el 27 de abril de 1977. BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977, pp. 9337 a 9343. A junio de 2016 cuenta con 168 Estados Parte.



desembocará en el derecho a la verdad tal y como lo entendemos en la actualidad. En consecuencia, a lo largo de este capítulo se analizarán los primeros avances dados en la investigación de los casos de desapariciones forzadas en conflicto armado, con las Resoluciones de la AG y el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo I<sup>40</sup>) como mecanismos principales.

## **1. LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESAPARECIDOS EN CONFLICTO ARMADO.**

La preocupación por la proliferación por todo el mundo de las desapariciones forzadas en conflictos armados propició la aprobación de dos Resoluciones en el seno de dos foros internacionales de vital importancia para la necesaria consolidación del derecho a la verdad<sup>41</sup>.

Por un lado, la Resolución V de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja realizada en Teherán en 1973, llamaba a los Estados parte en conflictos armados a:

“ (...) que, durante las hostilidades y después del cese de las mismas, ayuden a localizar y a cuidar las sepulturas, faciliten la exhumación y la devolución de los restos mortales y provean información sobre los desaparecidos en campaña; pide también a las partes en un conflicto armado que colaboren con las Potencias protectoras, el CICR y su Agencia Central de Búsquedas, así como con todos aquellos organismos apropiados que se instituyan con esta finalidad, particularmente las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, para llevar a cabo la misión humanitaria de informar sobre la situación de los muertos y desaparecidos, incluyendo los pertenecientes a los terceros países que no son parte en el conflicto armado”<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977. Ratificado por España el 7 de noviembre de 1978. BOE núm. 177 el 26 de julio de 1989, pp. 23828- 23863. A junio de 2016 cuenta con 174 Estados Parte.

<sup>41</sup> SANDOZ, Y., SWINARSKI, C., ZIMMERMANN, B., (eds), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Ginebra, Martinus Nijhoff Publishers – Comité Internacional de la Cruz Roja, 1987, p.343.

<sup>42</sup> XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA, Resolución V, Tehrán, 1973. Disponible en: <http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdln8.htm> (Consultado el 6 de junio de 2016).

Posteriormente en 1974, es este mismo espíritu el que inspiró la Resolución 3220 (XXIX) de 6 de noviembre de 1974 sobre “Asistencia y cooperación para localizar a las personas desaparecidas o muertas en conflicto armado” de la AG. En tal Resolución se establecen dos extremos de interesante consideración a los efectos que nos interesan:

“Reafirma, la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra de 1949 a todos los conflictos armados, tal como se estipula en estos convenios. (...) Pide a las partes en conflicto armado (...) que adopten todas las medidas a su alcance para ayudar a localizar e identificar las tumbas de los muertos para facilitar su exhumación y la devolución de los restos si así lo solicitaran las familias y para proporcionar información sobre las personas desaparecidas en acción”<sup>43</sup>.

Sin embargo, la AG no se limitó a la anterior Resolución, sino que esta constituyó la primera de una larga serie que abarca mucho más allá de los límites temporales de este epígrafe y en las que enfatizaba su profunda preocupación por la situación en la que se encontraban los sometidos a desaparición forzada y sus familiares<sup>44</sup>. En ese sentido, de especial importancia será la sucesión de Resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Chile tras el golpe de Estado del general Pinochet<sup>45</sup>. En efecto, la AG por medio de estas Resoluciones empezó a consolidar las obligaciones estatales de prevenir las desapariciones forzadas y de averiguar el paradero de las personas desaparecidas como un derecho también propio de la protección de los derechos humanos, es decir, del DIDH<sup>46</sup>.

De hecho, la aplicación de los estándares propios de la defensa de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas dentro del DIH al régimen general de protección de derechos humanos, el cual será posteriormente analizado, quedó ya patente en su Resolución 33/173 de 20 de diciembre de 1978 sobre personas desaparecidas; en ella ya

---

<sup>43</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, “Asistencia y cooperación para localizar a las personas muertas o desaparecidas en conflicto armado”, Resolución 3220 (XXIX), 6 de noviembre de 1974, párr.1-2.

<sup>44</sup> Véase epígrafe 6 del capítulo IX.

<sup>45</sup> La preocupación de Naciones Unidas sobre la situación de Chile tras el golpe de Pinochet queda patente con la creación de un Grupo *ad hoc* sobre la situación de los derechos humanos en ese país, el cual se analizará en este mismo capítulo.

<sup>46</sup> Con respecto a la situación de los derechos humanos en Chile, la AG se ha pronunciado en numerosas ocasiones mostrándose sumamente preocupado, no solo por las desapariciones forzadas, sino por toda una consolidación de un estado de violación sistemática de derechos humanos. En concreto pueden consultarse las siguientes Resoluciones, que como hemos comentado, muchas de ellas superan el límite temporal impuesto en este epígrafe: 3219 (XXI) de 6 de noviembre de 1974; 3448 (XXX) de 9 de diciembre de 1975; 31/124 de 16 de diciembre de 1976; 32/118 de 16 de diciembre de 1977; 83/175 de 20 de diciembre de 1978; 34/179 de 17 de diciembre de 1979; 35/188 de 15 de diciembre de 1980; 36/157 de 16 de diciembre de 1981; 37/183 de 17 de diciembre de 1982; 38/102 de 16 de diciembre de 1983; 39/121 de 14 de diciembre de 1984; 40/145 de 13 de diciembre de 1985; 42/147 de 7 de diciembre de 1987; 43/158 de 8 de diciembre de 1988; 44/166 de 15 de diciembre de 1989.

no se especificaba que estos sucesos afectaban al conflicto armado. En este mismo sentido se recogía: “[p]rofundamente conmovida por la angustia y el pesar que estas circunstancias causan a los familiares de las personas desaparecidas, especialmente a los cónyuges, hijos y los padres”. De esta forma, la AG no se estaba pronunciando únicamente sobre la situación de “peligro para la vida, a la libertad y a la seguridad físicas de esas personas”<sup>47</sup>, sino también sobre el sufrimiento que el desconocimiento del paradero tiene para las familias del desaparecido. Esta concepción, el desconocimiento del paradero como causa de tortura, será tenido en cuenta posteriormente por numerosos organismos de protección de derechos humanos y dará pie a uno de los nexos más específicos de las desapariciones forzadas con el derecho a la verdad.

A partir, entonces, de las menciones que hemos recogido, es evidente que la AG alertó rápidamente de que la práctica de las desapariciones forzadas, junto con la exigencia de las obligaciones que derivarían de ella (búsqueda del paradero), no constituía una cuestión exclusiva del régimen de los conflictos armados, sino que se trataba de un problema de dimensiones más amplias.

## **2. EL PROTOCOLO I ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES.**

Pese a que ya hemos advertido que hay disposiciones dentro de tres de los Convenios de Ginebra de 1949 orientadas a la búsqueda de heridos y náufragos en conflicto armado (es decir, no se aludía directamente, como vimos a los desaparecidos en combate), el mayor avance en el derecho convencional sobre los derechos de las víctimas de desaparición forzada en conflicto armado se dio con la adopción del Protocolo I: primer tratado que explícitamente reconoció la existencia del derecho que, atendiendo a su artículo 32: “asiste a las familias de personas desaparecidas a conocer la suerte de sus miembros”; lo que se ha terminado por denominar, comúnmente, como “derecho a saber” o “derecho a conocer”. Por su parte, también fue aprobado

---

<sup>47</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Personas desaparecidas*, Resolución 33/173, Doc. A/RES/33/173, 20 de diciembre de 1978.

paralelamente el Protocolo II adicional a estos mismos Convenios<sup>48</sup>. Este tratado, sin embargo, contenía únicamente una mención respecto a la búsqueda de heridos, enfermos, náufragos y fallecidos, similar al sentido que prevaleció en los convenios de Ginebra anteriores<sup>49</sup>.

El artículo 32 del Protocolo I se concibió como un principio esencial en la aplicación e interpretación de los artículos de la Sección III (del 32 al 34) de ese tratado internacional, los cuales versan sobre la protección de las personas desaparecidas, es decir, cualquier interpretación que se realice de los artículos de la Sección III debe realizarse de modo que el derecho de las familias a saber donde están sus seres queridos siempre quede protegido.

La inclusión en el Protocolo I de este derecho fue parte de un intenso debate dentro de la Conferencia Diplomática de Reafirmación y Desarrollo del Derecho internacional Humanitario aplicado a los conflictos armados (la Conferencia), cuya tarea era la de “crear por primera vez en veinticinco años una nueva legislación para la protección de víctimas de la guerra”<sup>50</sup>. La mera inclusión de esta problemática dentro del seno de la Conferencia estaba motivada por intentar:

“To mitigate the suffering of the families of those who disappeared in war by removing the uncertainty about their fate and to give them an opportunity to remember their dead in the place where their remains lay was a fundamental humanitarian principle”<sup>51</sup>.

A pesar de la clara importancia y la preocupación que este tema suscitaba, hubo delegaciones en contra de su inclusión como tal en el articulado del Protocolo<sup>52</sup>. Concretamente el Gobierno alemán se pronunció entonces de forma explícitamente

---

<sup>48</sup> Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977. Ratificado por España el 7 de noviembre de 1978. BOE núm. 177 el 26 de julio de 1989, pp.23828 – 23863.

<sup>49</sup> Artículo 8: “Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y náufragos a fin de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos”.

<sup>50</sup> FORSYTHE, D.P., “The 1974 Diplomatic Conference on Humanitarian Law: some observations”, *American Journal of International Law*, vol.69, 1975, pp.77-91.

<sup>51</sup> REGISTRO OFICIAL DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA EN LA REAFIRMACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS, VOL.XI, Ginebra, 1975, Doc. CDDH/II/SR.19, p.185, párr.70.

<sup>52</sup> La propuesta de la inclusión de esta premisa dentro de los trabajos de la Conferencia fue a propuesta de los delegados de Francia, Chipre y la Santa Sede.

contraria a la formación de este derecho durante una de las sesiones de la Conferencia. El representante de Alemania contempló que lo contenido en el artículo 32 hacía referencia a un simple principio y no a un deber individual o subjetivo de los familiares<sup>53</sup>. De igual opinión fue lo sostenido por el Reino Unido:

“The activities of the Parties to the conflict were certainly not mainly prompted by the fundamental right of families to know what had happened to their relatives but by the desire to win the war (...) [He did not considered that] it could be said that it was the fundamental right of families to know what had happened to their relatives although it was a basic need”<sup>54</sup>.

Otras delegaciones tampoco apoyaron la inclusión de esta premisa ya que “it merely stated the motive behind the article, which could surely be taken for granted”<sup>55</sup>.

Esta defensa en contra del reconocimiento de lo anterior como un derecho subjetivo, y su mero mantenimiento como un principio, fue rebatida por el Gobierno estadounidense. El representante de este Estado alegó a la necesaria superación de lo establecido en la ya examinada Resolución 3220 de la AG, que precisamente apelaba a la necesidad de que las familias conozcan el paradero de sus familiares, al constituir esta una “necesidad humana básica”, que:

“The paragraph had been included in response to a strong feeling of many delegations and institutions that it was important to express in the Protocol the idea that families had a right to know what had happened to their relatives. United Nations General Assembly resolution 3220 (XXIX), which the Working Group had studied when drawing up the present text, stated in the last preamble that “the desire to know (...) is a basic human need”, but the next under consideration went even further by referring to the right”<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> HENCKAERTS, J.M., DOWALD-BECK, L., *El derecho internacional humanitario consuetudinario, Práctica: vol.II*, Cambridge, Comité Internacional de la Cruz Roja – Cambridge University Press, 2005, p.2769.

<sup>54</sup> REGISTRO OFICIAL DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA EN LA REAFIRMACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS, VOL.XI, Ginebra, 1975, Doc. CDDH/II/SR.35, p.371, párr.49.

<sup>55</sup> REGISTRO OFICIAL DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA EN LA REAFIRMACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS, VOL.XII, Ginebra, Doc. CDDH/II/SR.76, 1976, p.231, párr.26.

<sup>56</sup> *Ibid*, párr.29.

De entre las intervenciones que defendieron su carácter como derecho subjetivo destacamos aquí la realizada por la Santa Sede:

“Its [amendment] purpose was to remedy an omission, namely the absence of any reference to families, and to call the attention of all representatives – legal experts, politicians, doctors and soldiers – and their States to the suffering caused to families as a result of armed conflicts. It was not only separation, but anxiety, uncertainty and lack of news for months, or even years, in the case of both families and prisoners. *It was not merely a question of feelings but one of respect for a fundamental right which had never been officially recognized and which was often overlooked.* Indeed, in some countries the fate of certain civilians was deliberately kept secret. Unless specific mention was made of families, the bureaucrats dealing with the present provision would recognize only the technical, not the humanitarian, aspect of the problem”<sup>57</sup>.

La formulación final del artículo 32 que ya señalamos, esto es, la consolidación convencional del derecho de las familias de personas desaparecidas a conocer la suerte de sus miembros, supuso en lo que se corresponde al objeto de esta investigación, el afianzamiento de tal derecho dentro del Derecho internacional humanitario; constituyendo un primer paso importante para la posterior evolución y desarrollo de lo que acabará siendo entendido como el derecho a la verdad. De hecho, numerosos organismos internacionales como el GTDFI, o la propia Corte IDH se han amparado en el artículo 32 del Protocolo I para, progresivamente, concretar el significado y alcance del derecho a la verdad, como iremos estudiando.

Por otra parte, y aunque menos innovador y sin tanta trascendencia como la del artículo 32, el artículo 33 del Protocolo I recogía toda una serie de medidas que los Estados contendientes habían de tomar a fin de “buscar [...] las personas cuya desaparición haya señalado una Parte adversa”. Para facilitar esta labor, el artículo 33 establecía que se debería registrar, según lo dispuesto en el artículo 138 del Convenio

---

<sup>57</sup> REGISTRO OFICIAL DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA EN LA REAFIRMACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS, VOL.XI, 1975, Doc. CDDH/II/SR.35, p. 363, párr.2. Sin cursiva en el original.

IV de Ginebra de 1949<sup>58</sup>, información sobre las personas cuando estas estuvieran detenidas, encarceladas o en cualquier otra forma de cautiverio, así como facilitar y efectuar la búsqueda y el registro de la información relativa a los desaparecidos si hubieran fallecido.

De lo hasta ahora visto podemos sostener que ya en 1977 el embrión del derecho a la verdad poseía una sólida base jurídica dentro de la regulación de los conflictos armados, en relación con la búsqueda de los desaparecidos en combate, bajo la denominación de “derecho a saber”. Esta base será el antecedente necesario para su posterior evolución dentro del DIDH, que coincidirá en parte con algunos de los hitos en el DIH que hemos examinados, tal y como veremos en detalle a continuación.

### **3. EL DERECHO A LA VERDAD EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS**

#### **3.1 Consideraciones previas sobre los mecanismos convencionales de Naciones Unidas.**

Una parte muy importante del sistema universal de protección está fundamentado sobre la base de distintos tratados internacionales, es decir, en el DI convencional. Sin embargo, los tratados internacionales vigentes en esta época no reconocían aún al derecho a la verdad dentro de su articulado, por lo que será clave examinar los mecanismos mediante los cuales los Comités que monitorean los diferentes tratados internacionales han interpretado su contenido para poder, de esa manera, amparar y defender los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas; es decir, lo que ya apuntamos que será la base fáctica inicial sobre la que se contruirá el derecho a la verdad. Este orden de ideas, conviene recordar al menos que las desapariciones forzadas supusieron uno de los capítulos más negros dentro de la proliferación de los regímenes

---

<sup>58</sup> “Los datos recibidos por la oficina nacional de información y por ella transmitidos habrán de ser suficientes para que se pueda identificar con exactitud a la persona protegida y avisar rápidamente a su familia. Incluirán, para cada persona, por lo menos, el apellido, los nombres, el lugar y la fecha completa de nacimiento, la nacionalidad, el domicilio anterior, las señales particulares, el nombre del padre y el apellido de la madre, la fecha y la índole de la medida tomada con respecto a la persona, así como el lugar donde fue detenida, la dirección a la que pueda dirigirse la correspondencia, el nombre y la dirección de la persona a quien se deba informar. Se transmitirán asimismo con regularidad, si es posible cada semana, datos relativos al estado de salud de los internados enfermos o heridos de gravedad”.

fascistas en Europa durante los años cuarenta (Alemania, Italia, España o Portugal<sup>59</sup>) y los años setenta. Por su parte, las dictaduras militares de América Latina en países como Haití, Brasil y Guatemala fueron auténticos pioneros en hacer desaparecer al adversario político durante los años sesenta<sup>60</sup>; práctica que menos de una década después inundó el Cono Sur americano: Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina cuentan con iguales experiencias<sup>61</sup>. La expansión de esta práctica trajo consigo, en consecuencia, un aumento de la preocupación por la falta de un mecanismo adecuado que diera respuesta a las demandas que planteaban los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente de aquellas que habían sufrido desaparición forzada.

Como es bien sabido, los Estados, al manifestar su consentimiento en un tratado internacional, se obligan a cumplir sus disposiciones; de esta forma pasan a ser considerados como Estados Parte una vez la norma convencional entra en vigor<sup>62</sup>. El consecuente cumplimiento del tratado será controlado por los órganos garantes que, en su caso, se encuentran determinados en la norma convencional. Estos órganos disponen

---

<sup>59</sup> Las primeras referencias históricas de la práctica de la desaparición forzada se remontan a la dictadura nacionalsocialista. La directiva *Nacht und Nebel*, firmada por Wilhem Keitel (de ahí el otro nombre por el fue conocida, *Keitel Order*), a órdenes del propio Adolf Hitler, disponía lo siguiente: “In all other cases the prisoners are in the future to be transported to Germany secretly, and further dealings with the offenses will take place here; these measures will have a deterrent effect because: A. the prisoner will vanish without leaving a trace, B. no information may be given as to their whereabouts or their fate”. Véase, HALL, C.K., “Enforced disappearance of persons”, en TRIFFTERER, O., (ed), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: ‘ObserverS’, Notes, Article by Article*, Baden, Nomos, 1991, p.151. Igualmente véanse: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión*, Doc. E/CN.4/2002/71, 8 de enero de 2002, p.7; OTT, L., *Enforced Disappearance in International Law*, Cambridge, Intersentia, 2011, p.3. El texto completo de la directiva *Nacht und Nebel* puede consultarse en: [http://www.loc.gov/rr/frd/Military\\_Law/pdf/NT\\_Nazi\\_Vol-VII.pdf](http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Nazi_Vol-VII.pdf) (Consultado el 6 de junio 2016).

<sup>60</sup> VRACKX, A., “A long road towards universal protection against enforced disappearance” *International Peace Information Service*, 2006, p.4. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/265422157\\_A\\_long\\_road\\_towards\\_universal\\_protection\\_against\\_enforced\\_disappearance](https://www.researchgate.net/publication/265422157_A_long_road_towards_universal_protection_against_enforced_disappearance) (Consultado el 6 de junio de 2016).

<sup>61</sup> A pesar de la ingente cantidad de bibliografía y referencias al respecto, una visión de estas experiencias basadas en la constitución y trabajo de las comisiones de la verdad puede consultarse en: HAYNER P., *Verdades innombrables... op.cit.*

<sup>62</sup> Sin embargo, no conviene olvidar el carácter preponderante que juega el Estado en el establecimiento de “sus propias técnicas del control”, que como muy acertadamente ha establecido Carlos Fernández de Casadevante, se manifiestan en cuatro facultades principales: “en la posibilidad de excluir o modificar obligaciones del convenio de que se trate mediante el recurso a la técnica de las reservas; en los requisitos que deben cumplirse no solo para que el particular pueda demandar al Estado sino incluso, en determinadas circunstancias, para que otro Estado pueda denunciarle; en la facultad que posee de aceptar o no el sometimiento a determinados órganos (Comisiones y/o Tribunales específicos); en la posibilidad que tiene de suspender o restringir determinados derechos”, FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., (dir.), *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Madrid, 4ªed., Dilex, 2011, pp.77-78.



de diversos mecanismos y competencias, mediante los cuales monitorean el cumplimiento de las obligaciones estatales dispuestas en el tratado.

Dichos mecanismos serán la base sobre la cual podremos entender el alcance del significado del derecho a la verdad dentro de los tratados que aquí procederemos a analizar; por lo que será necesario exponer, al menos brevemente, nuestra posición sobre el valor jurídico de las decisiones de estos órganos.

De forma resumida, los mecanismos de control del cumplimiento de las disposiciones del tratado, así como de la interpretación del mismo, que es preciso señalar aquí en atención a lo que será determinante para nuestro estudio, son los siguientes:

- *Informes periódicos de los Comités*: mediante este procedimiento (el que se utiliza con mayor frecuencia<sup>63</sup>), los Estados se obligan<sup>64</sup> a presentar de forma periódica un informe en el que se desarrollen las medidas y las disposiciones de orden interno que están llevando a cabo para cumplir con las obligaciones que emanan del respectivo tratado internacional y el grado de cumplimiento de estas. Una vez recibido el informe, el Comité pertinente emitirá unas observaciones finales (OF) en las que evalúa finalmente el cumplimiento del tratado por parte del Estado examinado. La naturaleza de este procedimiento de informes periódicos es meramente preventivo, esto es, no es un mecanismo estrictamente protector de una violación ya cometida<sup>65</sup>. No se pretende, por tanto, concluir acusando al Estado de violar las normas contenidas en el tratado del que el Comité es garante, sino de identificar los problemas con los que cuenta para respetar los derechos afianzados en el tratado en cuestión.

Sin embargo, en cuanto a la relevancia jurídica de las OF, en contraste con la presentación del informe ante los Comités, parte de la doctrina pone en entredicho la relevancia jurídica con la que estas cuentan y, por tanto, su oponibilidad a los Estados<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> RIPOLE CARULLA, S., “La respuesta desde el sistema universal de los derechos humanos a las violaciones graves de los derechos y libertades fundamentales”, en SOROETA LICERAS, J., *Cursos de Derechos Humanos de Donostia – San Sebastian. Volumen III*, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 2002, p.162.

<sup>64</sup> Al encontrarse recogido este procedimiento dentro de los tratados, y habiendo los Estados manifestado su consentimiento en obligarse en los mismos, la presentación de los informes se convierte en obligación internacional, la cual se incumple en caso de no presentarse. Este incumplimiento además vaciaría de contenido todo el mecanismo de supervisión de informes periódicos. KELLER, H.; ULFSTEIN, G., *UN Human Rights Treaty Bodies. Law and Legitimacy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp.30-35.

<sup>65</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso de derecho internacional...op.cit.*, pp.385-399.

<sup>66</sup> KELLER, H., y ULFSTEIN, G., *UN Human Rights Treaty Bodies... op.cit.*, p.31. Esta es la opinión también compartida por el Tribunal Supremo, el cual sostuvo acerca de las OF del Comité DH: “En este sentido, comprobamos cómo, desde estos órganos vigilantes del cumplimiento del Pacto, se han efectuado

Nuestra posición es divergente y, en este sentido, nos referiremos solamente a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*, en donde se refirió explícitamente a la interpretación realizada en los informes finales a Israel adoptados por el Comité DH y por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en aras de justificar su pronunciamiento sobre la aplicación del DIDH a los territorios bajo ocupación israelí<sup>67</sup>. Este ejemplo ilustra perfectamente que, independientemente de que las OF *per se* no tengan fuerza jurídica vinculante, estas no hacen más que señalar las violaciones que los Estados han cometido para con un tratado internacional concreto. En efecto, la no adecuación del comportamiento del Estado a lo dictado por el Comité pertinente no redundará en responsabilidad jurídica estatal ante el propio Comité, sino ante el tratado que es el instrumento que vincula jurídicamente<sup>68</sup>.

- *Observaciones generales* (OG): el propósito de estas observaciones es la interpretación del alcance de las obligaciones contenidas en el tratado, lo que dará a los Estados una útil guía de a qué deben atenerse en la aplicación de este. En una línea parcialmente similar a lo recién explicado, aunque estas observaciones no cuentan con naturaleza jurídica vinculante, sí que constituyen una importante y acreditada interpretación del tratado al que se refieran<sup>69</sup>, debido a la labor de garante que posee el Comité en cuestión. Las OG definen y especifican a qué se está obligando el Estado una vez pasa a ser parte del mismo. La falta de adecuación a su contenido supondría entonces y a nuestro entender, un incumplimiento de ese tratado internacional, es decir, de su contenido según la interpretación del órgano de control al que los Estados le han conferido tal capacidad.

---

recomendaciones al Estado español sobre la derogación de la ley de amnistía (Resolución 828 de 26 de septiembre de 1984 del Consejo de Europa; observación General 20 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 10 de marzo de 1992), o se ha recordado la imprescriptibilidad de los delitos y violaciones de derechos humanos (Comité de Derechos Humanos, 94 periodo de sesiones, Observancia final n° 5 sobre España). Se trata de recomendaciones y observaciones y no de denuncias de incumplimiento”. TRIBUNAL SUPREMO, sentencia 101/2012, 27 de febrero de 2012, FJ. 3.

<sup>67</sup> I. C. J. *Reports* 2004. Asunto relativo a las *consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*, 9 de julio de 2004., párrs.107-113.

<sup>68</sup> De idéntica manera se ha pronunciado Carlos Fernández de Casadevante el cual ha afirmado: “no está de más recordar que las recomendaciones que formulan estos órganos internacionales de control poseen efectos jurídicos, dado que los Estados objeto de las mismas deben seguirlas”, FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., (dir.), *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, *op.cit.*, p.80.

<sup>69</sup> NOWAK, M., “The International Covenant on Civil and Political Rights”, en GÓMEZ ISA, F., y DE FEYTER, K., (eds.), *International Human Rights Law in a Global Context*, Bilbao, Universidad de Deusto, 2009, p.287-288.

• *Comunicaciones individuales*: mediante este sistema las víctimas podrán “demandar” a los Estados ante los Comités pertinentes tras la violación de uno de los derechos establecidos en los tratados de los que el Estado es parte y siempre que recojan este tipo de procedimientos, una vez agotados los recursos internos correspondientes. Lo que se obtendrá de éstos será un pronunciamiento sobre la existencia o no de una conculcación de algunos de los derechos del tratado que estos órganos monitorean y la forma de reparación a la víctima. El dictamen del Comité no constituye *stricto sensu* un fallo judicial, pues no estamos hablando de un órgano jurisdiccional<sup>70</sup>. No obstante, según ha expresado el propio Comité DH, este dictamen reviste la apariencia formal de una sentencia judicial, al incluir “la imparcialidad y la independencia de los miembros del Comité, la ponderada interpretación del lenguaje del [tratado] y el carácter determinante de las decisiones”<sup>71</sup>. En efecto, si las OG señalaban cuál era el significado último de una determinada obligación, los Comités mediante sus decisiones establecerán si el Estado se ha amoldado al comportamiento que pudiera serle exigido. Estos podrán, así, determinar si el Estado ha incumplido o no con sus obligaciones internacionales. La comunicación concreta del Comité no posee fuerza obligatoria expresa, como ocurría con las decisiones de los mecanismos jurisdiccionales, como tampoco la poseía las OF o las OG, sin embargo, el Comité sí estará señalando una violación del tratado concreto ante el cual el Estado sí está obligado.

Partiendo de lo anterior, esto es, de nuestra posición acerca del valor jurídico de la actuación de los Comités que se analizarán a lo largo del trabajo, procedamos a analizar los primeros pasos del Comité DH con respecto al derecho a la verdad.

---

<sup>70</sup> FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., (dir.), *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, op.cit., p.88.

<sup>71</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observación general núm. 33. Obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, Doc. CCPR/C/GC/33, 25 de junio de 2009, párr.11. Sobre la “apariencia judicial” de los dictámenes de los Comités puede consultarse: HANSKI, R., y SCHEIN M., *Leading Cases of the Human Rights Committee*, Turku, 2ªed, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, 2007, p. 23.

### 3.2. La práctica del Comité de Derechos Humanos.

El PIDCP, adoptado en 1966, supuso el afianzamiento convencional de los derechos civiles y políticos avanzados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Entre los derechos recogidos en el articulado del PIDCP no encontramos al derecho a la verdad, por lo que podríamos hacer aquí nuestras las palabras de Jo. M. Pasqualucci en referencia a la vigencia del derecho a la verdad en los tratados internacionales de protección de derechos humanos: “Although the most widely [States] ratified international human rights treaties do not explicitly provide for a right to know the truth, such a right may be considered to arise from the States' conventional duty to ensure human rights”<sup>72</sup>.

Ahora bien, si nos centramos en la actividad del Comité DH, ciertamente sería muy difícil responder a la pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que el Comité reconoció la existencia del derecho a la verdad? Lo sería porque no creemos que hubiera una respuesta concreta, sino que más bien su reconocimiento responde a una evolución en la forma en que ha ido interpretando las disposiciones que componen su articulado; o más bien, en una adaptación de los mismos a las nuevas realidades que se le iban presentando<sup>73</sup>.

En efecto, el aumento de las desapariciones forzadas a lo largo de toda Latinoamérica produjo la llegada a la competencia del Comité DH de toda una serie de casos, no ya solo de estos hechos en concreto, sino de distintas violaciones de derechos humanos perpetradas en estos Estados. El primer caso remitido ante el Comité DH que alega un hecho de desaparición forzada lo encontramos en el caso *Bleier c. Uruguay* de 1982<sup>74</sup>. Ante la desaparición de Eduardo Bleier en octubre de 1971, y la consecuente inacción del Estado a proporcionar información sobre su paradero, el Comité DH consideró lo siguiente:

---

<sup>72</sup> PASQUALUCCI, J. M., “The whole truth and nothing but the truth: truth commissions, impunity and inter inter-American human right system”, *Boston University International Law Journal*, vol.12, 1994, núm.321, p.330.

<sup>73</sup> MÉNDEZ, J., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p.517.

<sup>74</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Bleier c. Uruguay*, Comunicación 30/1978, Doc. CCPR/C/15/D/30/1978, 29 de marzo de 1982. De 1982 también identificamos el caso *Hugo Gilmet Dermit c. Uruguay*, donde el Comité DH empujaba al Estado a establecer cómo se sucedieron los hechos que rodearon a la muerte de un estudiante mientras se encontraba en custodia de autoridades del Estado. La obligación, por tanto, de aclarar los hechos en los que una violación de derechos humanos fue cometida va más allá del propio hecho de desaparición forzada. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Hugo Dermit c. Uruguay*, Comunicación 84/1981, Doc. CCPR/C/17/D/84/1981, 21 de octubre de 1982, párr.11.a).

“(…) urges the Uruguayan Government to reconsider its position in this case and to take effective steps (i) *to establish what has happened to Eduardo Bleier* since October 1971 to bring to justice any persons found to be responsible for his death, disappearance or ill-treatment; and to pay compensation to him or his family for any injury which he has suffered; and (ii) to ensure that similar violations do not occur in the future”<sup>75</sup>.

Mediante este pronunciamiento el Comité DH sienta la obligación de que los Estados han de determinar cómo sucedieron los hechos, lo que se traducirá en la incoación de una investigación orientada a tal fin. La investigación de las circunstancias en las que se produjo la desaparición será la primera de las obligaciones que el Comité DH identificó con un hecho de desapariciones forzadas.

Un paso más allá se dio en el caso *Almeida de Quinteros c. Uruguay* en 1983<sup>76</sup>, donde se refirió por vez primera a los familiares de una persona desaparecida como víctimas<sup>77</sup>, debido a “the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by *the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts*”<sup>78</sup>.

Concretamente el Comité DH les atribuyó el derecho a conocer el paradero de, en este caso, su hija desaparecida, debido a que su desconocimiento implicaba un sufrimiento asimilable a la tortura, prohibición recogida en el artículo 7. Habiendo considerado el Comité DH violado este artículo, el Estado estaba obligado a:

“(a) to establish what has happened to Elena Quinteros since 28 June 1976, and secure her release; (b) to bring to justice any persons found to be responsible for her disappearance and ill treatment; (c) to pay compensation for the wrongs suffered; and (d) to ensure that similar violations do not occur in the future”<sup>79</sup>.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, párr.15.

<sup>76</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *caso Almeida de Quinteros c. Uruguay*, Comunicación 107/1981, Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, 21 de julio de 1983.

<sup>77</sup> *Ibid.*, párr.14.

<sup>78</sup> *Ibid.* El resaltado es nuestro.

<sup>79</sup> *Ibid.*, párr.16. El párrafo completo del razonamiento del Comité DH en este caso dispone: “The Committee understands the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts. The author has the right to know what has happened to her daughter. In these respects, she too is a victim of the violations of the Covenant suffered by her daughter in particular, of article 7”, *Ibid.*, párr.14.

De este modo se empezaba a producir lo que avanzamos dentro del epígrafe dedicado al DIH: el Comité DH aludió a un derecho (“derecho a saber” o “a conocer”, como ya lo denominamos) que aparentemente hasta entonces estaba solo consolidado en la regulación de los conflicto armados; pues como ya vimos, el artículo 32 del Protocolo I de 1977 establecía que: “las actividades de las Altas Partes contratantes (...) deberán estar motivada(s) ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”. Derecho que, como apuntamos, ya había sido mencionado igualmente en la Resolución 33/173 de la AG de 1978.

Contemplamos así cómo este “derecho a saber” fue rebasando el campo de actuación de la regulación del conflicto armado para consolidarse como un derecho propio de la protección de derechos humanos por parte del Comité DH, pero no meramente idéntico.

El derecho de las víctimas de desaparición forzada a conocer el paradero de sus seres queridos se traduce en la consecuente obligación del Estado de averiguar, no solo su suerte, sino también las circunstancias en que esa desaparición ha ocurrido. Encontramos aquí una diferencia sustancial entre la concepción del “derecho a saber” propio del DIH y la forma de entenderla ahora por el Comité DH. En efecto, mientras la primera estaba limitada únicamente a conocer el paradero del desaparecido, es decir, su ubicación física, la segunda posee un rango más amplio, pues los familiares tienen el derecho a conocer “what has happend”, o lo que es lo mismo, no solo dónde se encuentra, sino todo lo que ha rodeado a la desaparición. Esta interpretación se acerca así a un concepto de “conocer la verdad sobre lo ocurrido” más amplio<sup>80</sup>.

Por otro lado, la angustia producida por la desaparición también ponía encima de la mesa la problemática del carácter continuo o permanente de la desaparición forzada (ya que esa sensación no desaparecería hasta que el paradero del desaparecido fuera hallado), sobre todo en lo que a la obligación de investigar se refiere. Así, si el hecho hubiese ocurrido (y acabado) antes de la entrada en vigor del PIDCP para el Estado cuya responsabilidad se exigía ante el Comité DH, este no estaría obligado por el articulado del Pacto pues no le sería oponible en el momento de la comisión del hecho.

---

<sup>80</sup> Por “circunstancias”, según Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon, podemos entender el conocimiento de tiempo, modo, lugar y razones por las cuales el crimen es cometido, UPRINMY, R., SAFFON, M.P., “Verdad judicial y verdades extrajudiciales: la búsqueda de una complementariedad dinámica”, en HOYOS VÁSQUEZ, G., (ed.), *Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia*, Bogotá, Goethe-Institut e Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, 2007, p.155. Nosotros seguiremos a lo largo del trabajo este entendimiento de “circunstancias” dentro de la verdad judicial pero incorporándole el conocimiento, también, de la identidad de los victimarios.

Sin embargo, la angustia del familiar ante el desconocimiento del paradero de su ser querido se prolonga hasta que se conoce la suerte corrida por el desaparecido.

En el caso *S.E. c. Argentina* de 1990<sup>81</sup>, el Comité DH consideró: “con respecto a las violaciones ocurridas que continuaron después de la entrada en vigor del Pacto, tiene la obligación de investigar a fondo las presuntas violaciones y de proporcionar los recursos correspondientes a las víctimas o a sus familiares”<sup>82</sup>. La obligación, por tanto, de investigar continuará hasta que la persona desaparecida sea hallada o se conozca su suerte, independientemente de cuándo fue cometida la desaparición.

Un caso distinto es, sin embargo, lo que se contempla en el último inciso del párrafo citado: la obligación de proporcionar un recurso efectivo a la víctima o sus familiares, derecho consagrado en el artículo 2.3 del Pacto. Este artículo dispone:

“a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.

La conexión del derecho a un recurso efectivo con el derecho a la verdad es fácilmente asimilable, en el sentido en el que se entiende en el Pacto. Habiendo reconocido la importancia de una investigación para poder llegar a discernir lo ocurrido, el recurso efectivo otorga a la víctima el primer paso necesario para que esta sea iniciada; la víctima, con él, interpela al Estado a que inicie una investigación para averiguar lo ocurrido, si este de oficio todavía no ha intervenido.

En consecuencia, apreciamos que el Comité DH adoptó, como parte central de su práctica en lo relativo a las desapariciones forzadas, derechos existentes en DIH y posteriormente mencionados por la AG, aunque dándoles una dimensión más amplia. El Comité DH, durante esta época, empezó a considerar dentro del PIDCP el derecho de los familiares a conocer la suerte y el paradero del desaparecido. De esta forma, se amplía el espectro de este requerimiento al conocimiento de las circunstancias en que estas desapariciones se perpetraron.

---

<sup>81</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *S.E. c. Argentina*, Comunicación 275/1988, Doc. CCPR/C/38/D/275/1988, 4 de abril de 1990.

<sup>82</sup> *Ibid.*, párr.15. Puede consultarse igualmente: COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *R. A. V. N. c. Argentina*, Comunicación 345/1988, Doc. CCPR/C/38/D/345/1988, 5 de abril de 1990, párr.5.4.

### **3.3. Los Procedimientos especiales de la Resolución 1235 (XLII) del ECOSOC.**

#### ***3.3.1. Consideraciones iniciales.***

Al contrario de lo que ocurre con los mecanismos convencionales, cuyos pronunciamientos están sustentados en un tratado internacional determinado, los mecanismos extraconvencionales están establecidos en virtud de las Resoluciones de los órganos competentes de las respectivas OI que las adoptan y en sus textos constitutivos como su fundamentación última.

Puede decirse que la principal diferencia entre ambos sistemas de protección es su vinculación jurídica debido al papel que juega el consentimiento de los Estados en cada uno de ellos. En efecto, el sistema convencional está basado en que son los propios Estados los que prestan su consentimiento en obligarse a cumplir las obligaciones que emanan de los tratados internacionales: es lo que los vinculaba jurídicamente. Por su parte, el sustento normativo de los mecanismos extraconvencionales del sistema universal no es otro que “la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones que la desarrollan, y son el resultado directo de la evolución de la práctica de la ONU, en particular de su Comisión DH”<sup>83</sup>.

El motivo principal de la creación de estos mecanismos vino condicionado por el mal funcionamiento y deficiencias del sistema convencional de protección. Según José Luis Gómez del Prado:

“The international system of conventional mechanism is slow and leaves outside its scope not only a number of States which are not parties to the two Covenants and other international conventions but also types of violations which have not been foreseen in those instruments. Moreover, the optional quasi-judicial procedures, in addition of being voluntarily, are not foreseen in all the international human rights treaties”<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los Derechos Humanos (I)”, en DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Madrid, Tecnos, 18.ª ed., 2013, p.687.

<sup>84</sup> GÓMEZ DEL PRADO, J.L., “The Extra-conventional protection of human rights”, en GÓMEZ ISA, F., y DE FEYTER, K., (eds.), *International Human Rights Law... op.cit.*, p.559.



Debido a ello, fue creado en 1967 mediante Resolución del ECOSOC el Procedimiento 1235 que:

“Autoriza a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de conformidad con lo previsto en la resolución 8 (XXIII) de la Comisión, a examinar la información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales que ilustran la política de apartheid practicada en la República de Sudáfrica y en el Territorio del África Sudoccidental bajo la responsabilidad directa de las Naciones Unidas”<sup>85</sup>.

Al contrario de lo que ocurre con los mecanismos convencionales cuyo fin es el control del cumplimiento de un catálogo específico de derechos<sup>86</sup> mediante unas determinadas instancias internacionales, el sistema extraconvencional, de naturaleza humanitaria, está basado en la investigación de “la información pertinente sobre las violaciones notorias de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”<sup>87</sup>, ya sean centradas en un país determinado o relacionadas con una determinada práctica represiva. Esta Resolución permitía al mecanismo concreto “ofrecer a las víctimas de las violaciones un cauce procesal mediante el cual canalizar sus denuncias con una finalidad originariamente promotora de los derechos humanos, a través de los informes analíticos de tales órganos”<sup>88</sup>.

Esta situación general, poco a poco, fue evolucionando hasta llegar a la actual, en la que, junto con esta primera faceta humanitaria y de promoción general de derechos humanos, se añadió la protección de los derechos de la víctima individual.

---

<sup>85</sup> CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes*, Resolución 1235 (XLII), 6 de junio de 1967.

<sup>86</sup> GONZALEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Curso de Derecho Internacional Público*, Navarra, Thomson-Civitas, 4.ªed., 2008, p.844.

<sup>87</sup> CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes*, Resolución 1235 (XLII), 6 de junio de 1967, párr.2.

<sup>88</sup> VILLÁN DURÁN, C., “El funcionamiento de los mecanismos extraconvencionales de protección internacional de los derechos humanos”, en JIMÉNEZ PIERNAS, C. (ed.), *Iniciación a la práctica en Derecho internacional... op.cit.*, p. 279. Puede consultarse una visión más global de los procedimientos especial de la Resolución 1235, junto con sus antecedentes (*Procedimiento 1503*) en: RIPOL CARULLA, S., “La respuesta desde el sistema universal...”, *op.cit.*, pp. 165 – 171.

La constitución de estos mecanismos, no ligada expresamente al consentimiento explícito de los Estados, que permite diferenciar mejor entre protección convencional y extraconvencional<sup>89</sup>, conlleva que, al contrario de lo que pudiera ocurrir con un Comité cuyos pronunciamientos tienen como base un artículo concreto de un tratado internacional, el mecanismo extraconvencional basará su práctica en el conjunto de normas que se hayan determinado en su mandato constitutivo, las cuales orientan así la labor del mismo. Por ejemplo, en el caso de los mandatos geográficos, el organismo encargado de promover los derechos humanos tendrá en cuenta para realizar su labor todos los tratados internacionales de derechos humanos en los que haya consentido ese Estado, además de otros documentos internacionales, como pudiera ser la DUDH<sup>90</sup>. Todo ello será la base jurídica en la cual el mecanismo extraconvencional fundamentará su pronunciamiento.

Los instrumentos que seguidamente procederemos a analizar son mecanismos instaurados por la (entonces) Comisión de Derechos Humanos (Comisión DH) respecto a una práctica determinada de violaciones de derechos humanos (mecanismos temáticos<sup>91</sup>) o las producidas en un determinado Estado (mecanismos geográficos). La selección de los mismos, en cada una de las épocas estudiadas, ha venido determinada según la práctica de cada uno para con el derecho a la verdad<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> En palabras de Rossana González “Estos poderes extraconvencionales de control no gozan de un marco general de legitimidad preestablecido en el que fundamentar sus actividades (...) son los Estados destinatarios los que a través de su consentimiento, expreso o tácito, van legitimando sus actuaciones”. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, R., *El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanos y degradantes*, Granada, Editorial Universidad de Granada, 1998, p.254.

<sup>90</sup> GÓMEZ DEL PRADO, J.L., “The Extra-conventional protection of human rights”, en GÓMEZ ISA, F., y DE FEYTER, K., (eds.), *International Human Rights Law... op.cit.*, p.566.

<sup>91</sup> A pesar de que se ha referido al derecho a la verdad (Doc.A/HRC/ 4/33, 15 de enero de 2007, párrs. 64-65; Doc. A/HRC/7/3, 15 de enero de 2008, párr.75), obviaremos referirnos al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes debido a que se trata de un pronunciamiento muy aislado, no aportando una opinión que fuera de validez a los efectos de este trabajo.

<sup>92</sup> La falta de inclusión de mandatos geográficos (exceptuando el Grupo *ad hoc* encargado de investigar la situación de los derechos humanos en Chile) es debido a la escasez de pronunciamientos claros y relevantes sobre el derecho a la verdad que nos ayuden a descifrar su significado y autonomía dentro del DI. Los únicos mecanismos temáticos que se han aproximado muy tímidamente al derecho a la verdad son: Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Camboya (Doc. E/CN.4/1997/85, 31 de enero de 1997, párr.74); Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití (Doc. A/50/714, 1 de noviembre de 1995, párr.42; Doc. A/54/366, 20 de septiembre de 1999, párr.32); Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar (Doc. A/HRC/65/368, 15 de septiembre de 2010, párr. 61 y 74; Doc. A/HRC/66/365, 16 de septiembre de 2011, párr.73 y ss; Doc. A/67/383, 25 de septiembre de 2012, párr.80 y ss); Experto independiente designado por el Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Somalia (Doc. A/HRC/7/26, 17 de marzo de 2008, párr.13 y 76).

### ***3.3.2. Grupo de Trabajo ad hoc encargado de investigar la situación de los derechos humanos en Chile.***

La proliferación de las violaciones de derechos humanos en Chile, especialmente las relacionadas con las desapariciones forzadas, fueron el germen para la creación dentro del seno de la Comisión DH del primer mandato geográfico, al amparo de la Resolución 1235 del ECOSOC, con competencias para investigar la situación de un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos que no estuvieran relacionadas con el apartheid, la discriminación racial o descolonización (prácticas que habían inspirado en un principio la creación de este tipo de mecanismos).

El Grupo de Trabajo *ad hoc* encargado de investigar la situación de los derechos humanos en Chile fue constituido mediante Resolución de la Comisión DH el 27 de febrero de 1975<sup>93</sup> y debía presentar informes periódicamente tanto a la AG como a la Comisión DH. La preocupación por la práctica de las desapariciones forzadas dentro del Grupo iba en aumento debido a que las denuncias que llegaban iban dedicadas casi exclusivamente a esta práctica, sobre todo desde la presentación del primer informe a la AG<sup>94</sup>. Ya en su séptimo informe el Grupo dispuso:

“Durante su estancia en Chile, el Grupo se dio directamente cuenta de la importancia que tenía para los parientes de las personas desaparecidas y, cada vez más, para muchos sectores de la sociedad chilena la obtención de respuestas claras y veraces en los casos de las personas desaparecidas. Esas respuestas (...) son esenciales para la tranquilidad de las familias afectadas (...). Ese mismo derecho - "el derecho de las familias a conocer la suerte de sus familiares"- se formula también en el Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 1949”<sup>95</sup>.

Como ya vimos, el Protocolo I recogió en su artículo 32 el derecho de las familias a conocer la suerte de sus miembros dentro de conflicto armado. Sin embargo, el Grupo se refirió a este tratado, como también hiciera la propia AG y el Comité DH, fuera de

---

<sup>93</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 8 (XXXI)*, 27 de febrero de 1975.

<sup>94</sup> GARCÉS, M., NICHOLLS, N., *Para una Historia de los DD.HH en Chile*, Santiago de Chile, LOM Ediciones – Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, 2005, p.80-81.

<sup>95</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Informe del Consejo Económico y Social. Protección de los derechos humanos en Chile*, Doc. A/33/331, 25 de octubre de 1978, párr. 418.

este contexto lo que reitera la posibilidad de que este derecho pueda ser extensible a cualquier situación en la que se haya cometido una desaparición forzada.

A su vez, la mera creación del Grupo, su visita a Chile y la identificación de los derechos de los que son parte activa no solo desaparecidos, sino también sus propias familias, constituye uno de los primeros precedentes de la emergencia del derecho a la verdad en el sistema universal de protección.

### ***3.3.3 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.***

El GTDFI ha sido uno de los organismos de protección de derechos humanos más prolíficos en lo que al desarrollo del derecho a la verdad se refiere. Fue establecido en 1980 por la Comisión DH y supuso el primer mandato temático que se constituía dentro de su seno. Su competencia se define en los métodos de trabajo que se basan en el mandato establecido inicialmente en la Resolución 20 (XXXVI) de la Comisión DH. A su vez, el mandato fue desarrollado por esta misma y su sucesor en 2006 (el Consejo DH), en otras resoluciones que extienden el mandato del GTDFI cada tres años<sup>96</sup>.

El mandato del GTDFI consiste en ayudar a las familias a determinar la suerte y el paradero de sus parientes desaparecidos. El GTDFI actúa como canal de comunicación entre las familias y los Gobiernos interesados y tiene por objeto velar porque los distintos casos de desapariciones que las familias hayan señalado a su atención sean investigados por las autoridades nacionales con el fin de aclarar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas.

La primera referencia del GTDFI al derecho a la verdad data de su primer informe, fechado a 22 de enero de 1981, donde *inter alia* examina los derechos que específicamente son violados por la práctica de las desapariciones forzadas:

“La información presentada al Grupo muestra que la ausencia forzada de una persona puede representar también la violación de varios de los derechos

---

<sup>96</sup> Los fundamentos jurídicos del GTDFI dimanar de la Carta de las Naciones Unidas, el PIDCP, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)<sup>96</sup>, la Resolución 1235 (XLI) del ECOSOC y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Declaración DF)<sup>96</sup>, de la cual es su órgano garante. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias*, Doc. A/HRC/19/58/Rev.1, 2 de marzo de 2012, Anexo II (*Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias*), párr.1.

humanos de los familiares de la persona desaparecida. Su derecho a una vida de familia se puede considerar como el principal derecho violado, pero también pueden resultar directamente afectados otros derechos de carácter económico, social y cultural; por ejemplo, la ausencia de uno de los padres puede tener efectos desfavorables para el nivel de vida de la familia, la asistencia sanitaria y la educación. En otro lugar se han señalado ya los efectos desfavorables de la desaparición de uno de los padres para la salud mental de los hijos. Por último, el Protocolo adicional I del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 ha reconocido el derecho de las familias, a conocer la suerte que han corrido sus miembros, y este derecho de los familiares a ser informados del paradero y de la suerte de los miembros de la familia desaparecidos está reflejado en varias resoluciones de órganos de las Naciones Unidas”<sup>97</sup>.

Concretamente, y como ya hiciera anteriormente el Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre la situación de derechos humanos en Chile en 1978, el GTDFI hizo referencia al derecho a la verdad en términos propios del DIH con mención al artículo 32 del Protocolo I de 1977. En efecto, el GTDFI ahondó en las posibles repercusiones que podría traer consigo la comisión de un hecho de desaparición forzada. Entre ellas, el GTDFI consideró violados “leyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (...) en mayor o menor grado todos los derechos fundamentales de esas personas”<sup>98</sup>.

Del mismo modo, también se pronunció sobre cuáles serían los derechos violados a los familiares del desaparecido: derecho a una vida familiar, derechos económicos, sociales y culturales (específicamente se resentiría el nivel de vida familiar en caso de ser desaparecido uno de los padres; así como la asistencia sanitaria y la educación) y el derecho a conocer la suerte que ha corrido uno de sus miembros y su derecho a ser informados sobre su paradero<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. E/CN.4/1435, 22 de enero de 1981, párr.187.

<sup>98</sup> *Ibid.* En concreto, respecto al PIDCP ya hemos visto cuáles son los derechos específicos que viola la desaparición forzada de ese tratado internacional y cuál empezó a ser su relación con el derecho a la verdad. Relación que como veremos irá en evolución conforme vaya avanzando la práctica del Comité DH.

<sup>99</sup> Concretamente el GTDFI dispuso: “La información presentada al Grupo muestra que la ausencia forzada de una persona puede representar también la violación de varios de los derechos humanos de los familiares de la persona desaparecida. Su derecho a una vida de familia se puede considerar como el principal derecho violado, pero también pueden resultar directamente afectados otros derechos de carácter económico, social y cultural; por ejemplo, la ausencia de uno de los padres puede tener efectos

Por último, apuntaremos también el interés mostrado por el GTDFI ante las desapariciones forzadas en menores. En su citado primer informe se apuntó que:

“Cuando se trata de una mujer embarazada, un niño o un refugiado que sufren desaparición forzada, o involuntaria., se violan también derechos específicamente reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos; por ejemplo, el derecho de todo niño a medidas de protección. Un examen de los derechos económicos, sociales y culturales garantizados por los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos demuestra que la mayor parte de ellos se deniegan en mayor o menor grado cuando se produce una desaparición forzada o involuntaria”<sup>100</sup>.

Esta mención tan amplia a los derechos violados en la desaparición del menor fueron acotados en el informe del GTDFI de 1983. En él, ya no solo se refiere a la desaparición de niños, sino también a la desaparición de recién nacidos. La irrupción en Argentina de una práctica sistemática de robo de recién nacidos a madres víctimas de desaparición forzada, provocó que el GTDFI se pronunciara acerca de los derechos concernientes a los menores y, concretamente, respecto a la protección de la identidad personal del menor. Es decir, a que el menor que ha sido desprendido de su vínculo materno tenga derecho a conocer su verdadera identidad. En este caso el GTDFI se limita a enumerar una serie de normas de protección de derechos humanos y del DIH, tanto universales como de ámbito regional, que regulan la protección de la identidad del menor<sup>101</sup>. La conexión entre la identidad del menor y el derecho a la verdad la

---

desfavorables para el nivel de vida de la familia, la asistencia sanitaria y la educación. Por último, el Protocolo I adicional del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 ha reconocido el derecho de las familias a conocer la suerte que han corrido sus miembros y este derecho de los familiares a ser informados del paradero y de la suerte de los miembros de la familia desaparecidos está reflejado en varias resoluciones de órganos de las Naciones Unidas”. *Ibid.* Este mismo párrafo se encuentra reproducido en otros dos informes posteriores del GTDFI, concretamente en: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. E/CN.4/1983/14, 21 de enero de 1983, párr.134; COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. E/CN.4/1984/21, 9 de diciembre de 1983, párr.155.

<sup>100</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. E/CN.4/1435, 22 de enero de 1981, párr.186. Este párrafo es reproducido en: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. E/CN.4/1983/14, 21 de enero de 1983, párr.133.

<sup>101</sup> “a) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre, y la Convención Americana declara además que toda persona tiene derecho a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. Estas disposiciones son especialmente pertinentes en el caso de los informes sobre niños nacidos estando sus

desarrollaremos, en todo caso, más profundamente en el análisis de la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) durante este período.

#### **4. EL DERECHO A LA VERDAD EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRIMERAS APROXIMACIONES**

##### **4.1. Exposición inicial.**

La Carta de la OEA fue suscrita el 30 de abril de 1948 en la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá<sup>102</sup>. Durante esa misma Conferencia también fue aprobada la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana). Sin embargo, esta Declaración no era, en un inicio y en sí misma, jurídicamente vinculante para los Estados Miembros de la OEA; siendo que no será hasta 1959 (con el triunfo de la revolución cubana como telón de fondo) cuando apareciera un mecanismo de supervisión de los derechos contenidos en la Declaración Americana. En efecto, la Comisión IDH fue creada mediante una Resolución de la OEA<sup>103</sup> como un órgano de promoción de los derechos humanos contenidos en aquella Declaración pero con la carencia de no contar con los instrumentos y las competencias necesarias para asegurarlos de forma efectiva. El hecho

---

madres en cautividad; y b) En el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra y en los Protocolos de los Convenios de Ginebra, figuran disposiciones detalladas destinadas a lograr la identificación de los niños separados de sus familias como consecuencia de una guerra. Estas normas disponen, entre otras cosas, que la Potencia ocupante tomará cuantas medidas sean necesarias para conseguir la identificación del niño y registrar su filiación, y que en ningún caso podrá proceder a modificaciones de su estatuto personal la obligación de las partes contendientes de constituir una Oficina oficial de información encargada de transmitir informes sobre las personas protegidas que se hallen en su poder, oficina que deberá tener una sección encargada de tomar las medidas convenientes para identificar a los niños cuya filiación resulte dudosa; la obligación de la parte en conflicto de hacer una ficha detallada de identidad en el caso de evacuación de niños; y la obligación de las partes contendientes de tomar las medidas pertinentes para que todos los niños menores de 12 años puedan ser identificados mediante una placa de identidad o cualquier otro recurso”. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. E/CN.4/1984/21, 9 de diciembre de 1983, párr.158.

<sup>102</sup> A junio de 2016 ha sido suscrita por 35 Estados de las Américas, miembros de este modo de la OEA.

<sup>103</sup> Concretamente en dicha declaración se expresaba: “RESUELVE (...) Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y la tendrá las atribuciones específicas que este le señale”. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, *Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Acta Final*, Doc. OEA.Ser.F/II.5, Santiago de Chile, 12-19 de agosto de 1959, p.11.

de que una Comisión de estas características no emanara de un tratado internacional da muestras de la falta de motivación, por parte de los Estados durante aquella época, a comprometerse, jurídicamente hablando, en el respeto por los derechos humanos<sup>104</sup>.

Empero, los promotores de tal institución, con las limitaciones antes comentadas, en opinión de Edmundo Vargas Carreño:

“(…) no pudieron imaginar que esa estructura normativa que ellos estaban estableciendo sería desafiada años después por masivas y crueles violaciones de derechos humanos, inéditas hasta aquel entonces en América Latina y que resultaron expresivas de un verdadero terrorismo de Estado, para el cual, obviamente, esa estructura no estaba prevista”<sup>105</sup>.

Es por ello que, ante tales circunstancias, la Comisión IDH se encontraba en una situación jurídica ambigua, pues no podía operar en contra de la voluntad de los Estados miembros de la OEA al haberse constituido a través de una mera Resolución de la Asamblea General de la OEA y no de un tratado internacional<sup>106</sup>.

La Comisión IDH estuvo centrada durante sus primeros años de funcionamiento en la investigación particular de la situación de los derechos humanos (que serían aquellos que conformaban la Declaración Americana) en los Estados miembros de la OEA y en la promoción de los mismos<sup>107</sup>. No obstante, estas atribuciones iniciales no eran suficientes para el desempeño efectivo de su labor, por lo que fueron ampliándose progresivamente con la interpretación de su estatuto primero y, posteriormente, con la reforma del mismo<sup>108</sup>. Tras estas reformas y la adopción de la Convención Americana

---

<sup>104</sup> CERNA, C., “The Interamerican Commission on Human Rights: its Organization and Examination of Petitions and Communications”, en HARRIS D., LIVINGSTONE S., (eds), *The Inter-American System of Human Rights*, Nueva York, Clarendon Press-Oxford, 1998, p.66.

<sup>105</sup> VARGAS CARREÑO, E., “Prólogo”, en PINTO, M., *La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993, p.16, citado por FÁUNDEZ LEDESMA, H., *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales*, San José, Instituto Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 3ªed, 2004, p.35.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Según Felipe González Morales, entre las funciones de la Comisión IDH en sus años iniciales de funcionamiento se encontraban: “la preparación de estudios e informes que considerara necesarios para el desempeño de sus funciones; la promoción de los derechos humanos; la formulación de recomendaciones a los gobiernos en estas materias; la solicitud de información a los Estados acerca de las medidas adoptadas a nivel interno; y el servir como órgano de consulta de la OEA en materia de derechos humanos”. GONZÁLEZ MORALES, F., “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros aspectos”, *Anuario de Derechos Humanos*, vol. 5, p. 36.

<sup>108</sup> FÁUNDEZ LEDESMA, H., *El Sistema Interamericano... op.cit.*, pp.46-52.



de Derechos Humanos<sup>109</sup> (CADH), la Comisión IDH contó con competencia tanto para tramitar comunicaciones individuales<sup>110</sup>, realizar visitas *in loco*<sup>111</sup> o preparar informes sobre países<sup>112</sup>.

En 1969 la adopción de la CADH transformó el sistema interamericano de protección de derechos humanos, al incorporar en este tratado la Corte IDH y brindar nuevas funciones a la Comisión IDH<sup>113</sup>.

La actividad de la Corte IDH ha sido perfectamente resumida por Sergio García Ramírez, que la presidió desde 2004 a 2007: “la Corte IDH no tiene atribuciones para emitir condenas penales, que se reservan a la justicia local; tampoco define la responsabilidad penal de los autores de las violaciones, pero recibe y valora pruebas que conducen a establecer la responsabilidad internacional del Estado”<sup>114</sup>.

A pesar de que la CADH no contiene referencia alguna al derecho a la verdad, la Corte IDH, a través de lo que ha sido denominado por Álvaro Francisco Amaya como “efecto reflejo”, lo ha ido progresivamente incluyendo como derecho objeto de protección dentro de su jurisdicción<sup>115</sup>. Este “efecto reflejo” consiste en que, al igual que hemos visto que ocurre dentro del PIDCP en relación con los hechos de desapariciones forzadas, la CADH no recogía protección alguna sobre estas, por lo que la Corte IDH tuvo que realizar una interpretación extensiva sobre el significado de ciertos artículos de la CADH para brindar protección a las víctimas de tales actos y

---

<sup>109</sup> Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José (Costa Rica) el 22 de noviembre de 1969 en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA); entró en vigor el 18 de julio de 1978. A septiembre de 2014 había sido ratificada por 25 Estados miembros de la OEA y denunciada por Trinidad y Tobago y por la República Bolivariana de Venezuela.

<sup>110</sup> Para una explicación en profundidad sobre las denuncias individuales dentro del sistema de la Comisión IDH puede consultarse, FÁUNDEZ LEDESMA, H., *El Sistema Interamericano... op.cit.*, pp.40-41.

<sup>111</sup> Para una explicación en profundidad sobre el funcionamiento de las visitas *in loco* puede consultarse, *Ibid.*, pp.42-46. Es necesario seguir teniendo en cuenta que una de estas primeras funciones de la Comisión IDH pre adopción de CADH: recibir y analizar peticiones individuales de aquellos Estados que aleguen que alguno de sus derechos incluidos en la Declaración Americana ha sido violado por un Estado miembro de la OEA, en la actualidad sigue estando vigente con independencia de si este ha ratificado o no la CADH.

<sup>112</sup> GONZÁLEZ MORALES, F., “La Comisión Interamericana...”, *op.cit.*, pp.39 – 41.

<sup>113</sup> Véase art. 33 de la CADH. Para un análisis en profundidad sobre la CADH puede consultarse: FÁUNDEZ LEDESMA, H., *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos...op.cit.*, p.53 y ss.

<sup>114</sup> GARCÍA RAMÍREZ, S., “Reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, en VV.AA, *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Memoria del Seminario*, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2ªed., 2003, Tomo I, p.154.

<sup>115</sup> AMAYA VILLARREAL, A F., “Efecto reflejo: La práctica judicial en relación con el derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, *International Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional*, núm.10, 2007, pp.131-152.

“obligar a los Estados a proteger y garantizar derechos no contenidos en la Convención”<sup>116</sup>. Entre ellos, como veremos a continuación, el derecho a la verdad.

#### **4.2. El derecho a la verdad y la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El surgimiento del derecho a la verdad colectivo y el derecho de los menores a “no conocer”**

Tradicionalmente, la doctrina ha afirmado que la evolución del derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad dentro de los países de América Latina ha venido liderada en mayor medida por iniciativas nacionales y por la actuación de las Naciones Unidas en estos Estados<sup>117</sup>. Sin embargo, la posición del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y en concreto la de la propia Comisión IDH, ha sido de vital importancia para que el derecho a la verdad haya jugado un papel fundamental en el desarrollo de las transiciones hacia la paz y la democracia en los Estados latinoamericanos.

Como hemos venido reiterando, durante el período que nos ocupa la proliferación de violaciones de derechos humanos, y concretamente de la desaparición forzada, hizo que los distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos hubieran de dar protección jurídica a las víctimas y a los familiares objeto de tales prácticas represivas. Dentro de la OEA, y antes que ningún otro órgano del sistema universal, la Comisión IDH fue la primera que apeló al derecho a la verdad de forma directa e inequívoca como derecho que los Estados debían respetar para una mayor vigencia a los derechos humanos de conformidad con la CADH<sup>118</sup>.

La Comisión IDH se pronunció por primera vez respecto al derecho a la verdad en 1986 en su Informe Anual 1985/1986 en el capítulo V (“Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, de conformidad con

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, p.133.

<sup>117</sup> DYKMANN, K., “Impunity and the Right to the Truth...”, *op.cit.*, p.45. En un sentido parecido, Ellen Lutz ha afirmado: “In a region in wich gross violations of human rights have been commonplace, it is no surprise that the OAS, an internacional organization composed of sovereign states, traditionally placed low priority on measures to remedy those violations”. LUTZ, E., “Responses to Amnesties by the Inter-American System for the Protection of Human Rights”, en HARRIS D., LIVINGSTONE S., (eds), *op.cit.*, p.348. Esta afirmación la podremos comprobar dentro de la práctica estatal de los Estados en materia de derecho a la verdad a partir del capítulo II, donde varias comisiones latinoamericanas fueron creadas bajo el auspicio de Naciones Unidas.

<sup>118</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe Anual 1985-1986*, OEA/Ser.L/V/II.68 Doc. 8 rev. 1, 26 de septiembre de 1986.

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”). Concretamente expuso:

“Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos. Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de expresión, la que —claro está— deberá ejercerse responsablemente; la formación de comisiones investigadoras cuya integración y competencia habrán de ser determinadas conforme al correspondiente derecho interno de cada país, o el otorgamiento de los medios necesarios para que sea el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias”<sup>119</sup>.

Estas palabras de la Comisión IDH venían al amparo de la experiencia vivida en los países objeto de su visita durante ese último año (Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Suriname) y de las deficiencias encontradas no solo en la protección de los derechos humanos, sino en la calidad democrática de los Estados y, a lo que nosotros concierne, en la investigación y esclarecimiento de los abusos del pasado. Debido a ello, encontramos en esta mención a la “verdad”, la primera en la que esta se independiza del campo propio de las desapariciones forzadas para situarse en el terreno de las violaciones de derechos humanos en un sentido amplio; lo cual, amplía aquí el contenido material del derecho a la verdad.

Tanto la investigación, como la eventual sanción de los responsables fueron catalogados por la propia Comisión IDH en este informe como casi de “asuntos internos” de los Estados, y ante los cuales “poco es el aporte que ella —así como cualquier órgano internacional— puede efectuar”<sup>120</sup>. La Comisión IDH otorgaba libertad a los Parlamentos nacionales en la gestión de las responsabilidades individuales por los abusos del pasado, es decir, en la procedencia o no de adoptar leyes de amnistía<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, p.205.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> La Comisión IDH, si estableció que “solo los órganos democráticos apropiados —usualmente el Parlamento— tras un debate con la participación de todos los sectores representativos, son los únicos llamados a determinar la procedencia de una amnistía o la extensión de esta, sin que, por otra parte,

En contraposición con esta postura, la Comisión IDH sí se pronunció sobre la necesidad de que las violaciones del pasado fueran esclarecidas, o lo que es lo mismo, la obligación de que se supiera la verdad de lo ocurrido como medio para que estas no se repitieran en un futuro. Estos dos asuntos (la investigación y el esclarecimiento de lo ocurrido), aunque pudieran parecer idénticos, fueron vistos desde una perspectiva diferente por la Comisión IDH al establecer que: “[t]al acceso a la verdad supone (...) la formación de comisiones investigadoras (...), o (...) el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias”<sup>122</sup>.

En este párrafo la Comisión IDH no concede a la investigación judicial un papel esencial para el esclarecimiento de los hechos, sino meramente optativo pues la averiguación de la verdad puede darse igualmente a través de otros medios como las comisiones investigadoras<sup>123</sup>. La independencia del método elegido para llegar a la verdad (ya sea judicial o extrajudicial<sup>124</sup>) nos muestra la gran importancia brindada por la Comisión IDH a este derecho, ya que lo esencial es que finalmente se conozca la verdad de lo acontecido, sin importar tanto la vía que se elija para ello<sup>125</sup>.

Los sujetos activos de este derecho, según se establece en el Informe, serían tanto la sociedad que tendría “el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en los que aberrantes delitos llegaron a cometerse a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”, como las familias que tendrían el derecho “a conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos”. De esta forma, por primera vez, un órgano de protección de derechos humanos otorgó al

---

puedan tener validez jurídica las amnistías decretadas previamente por los propios responsables de las violaciones”. *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> En este mismo sentido puede consultarse igualmente la opinión de Doug Cassel, en: CASSEL, D., “Lecciones de las Américas: Lineamientos para una Respuesta Internacional ante la Amnistía de Atrocidades”, *Revista IIDH*, vol.24, 1996, pp.292 y ss. Para un análisis más general sobre este Informe de la Comisión IDH y su significado puede consultarse: LUTZ, E., “Responses to Amnesties...”, *op.cit.*, pp.349 y ss.

<sup>124</sup> Es necesario apuntar que nos estamos moviendo en un terreno propio del derecho a la verdad, no a la justicia. La obligatoriedad de iniciar un proceso penal tras una época de violaciones masivas de derechos humanos es un tema paralelo. Aquí apelamos a la investigación judicial como un método posible para averiguar la verdad de lo acontecido, no para sanción de los responsables.

<sup>125</sup> Aunque a nuestro parecer los resultados no serían equiparables, a pesar de que ambos contendrían “la verdad” sobre los acontecimientos. Empero, una investigación penal está presidida por un objetivo principal: la búsqueda de responsabilidades, es decir, en palabras de la propia Comisión IDH: “las que, en todo caso, deberán ser siempre individuales y establecidas después de un debido proceso por un tribunal preexistente que utilice para la sanción la ley existente al momento de la comisión del delito”. Podemos apreciar por tanto que, a pesar de que la búsqueda de responsabilidades trae consigo la revelación de la verdad, esta no es la prioridad del proceso penal y por ende, esta verdad sería bastante más limitada que la que podría obtenerse de una comisión orientada específicamente a la averiguación de los hechos, sin estar limitada por avatares procesales.

derecho a la verdad una dimensión colectiva que hacía las veces de método para evitar la repetición de tales sucesos en un futuro. Los motivos de esta declaración pudieran residir en que, a pesar de que la Comisión IDH se mostraba cuanto menos tímida a la hora de determinar la compatibilidad entre la CADH y las leyes de amnistía, el derecho a la verdad se erigía como una exigencia a la que los Estados debían atender, prevaleciendo incluso sobre el derecho a la justicia (al poder ser este limitado mediante una ley de amnistía), independientemente de sus medidas internas. Constituía, en fin, un límite a los efectos de las leyes de impunidad, sin importar la forma en la que esta ley fuera aprobada.

En efecto, como hemos comprobado, la Comisión IDH valoró sus posibles contribuciones a las políticas de transición de los Estados miembros de la OEA como ínfimas, sin embargo, siguiendo lo también analizado por Doug Cassel al respecto, la Comisión IDH otorgó dos directrices a los Estados que se encontraban en esta situación: primero, “solo las amnistías otorgadas por cuerpos electos democráticamente y no las auto-amnistías promulgadas por el régimen abusivo tienen validez legal”. Y, en segundo lugar: “aun las amnistías promulgadas democráticamente, deben respetar la necesidad de investigar, porque ambas, la sociedad y las familias de las víctimas tienen derecho a saber”<sup>126</sup>. La Comisión eleva así el derecho a saber la verdad a una posición privilegiada pues, aunque una ley de amnistía fuera aprobada de forma democrática, la obligación de averiguar la verdad no va a desaparecer pese a que la adopción de esta sí supondría que los culpables no fueran a ser penalmente sancionados<sup>127</sup>.

Otro aspecto referente al derecho a la verdad tratado por la Comisión IDH durante este período histórico es el tendente a (utilizando las palabras de la Asamblea General de la OEA), “la situación de los hijos menores de personas desaparecidas que fueron separados de sus padres y son reclamados por miembros de sus legítimas familias”.

En el Informe Anual 1987-1988 de 16 de septiembre de 1988<sup>128</sup> la Comisión IDH, a petición de la Asamblea General de la OEA<sup>129</sup>, realizó un detallado análisis sobre la política de las dictaduras de las Juntas Militares en Argentina (1976-1983) acerca de la

---

<sup>126</sup> CASSEL, D., “Lecciones de las Américas...”, *op.cit.*, pp.292-293.

<sup>127</sup> Esta argumentación de dar cobertura al derecho a la verdad independientemente de que una ley de amnistía fuera adoptada por el Estado, la veremos repetida en la fundamentación de la práctica seguida por Sudáfrica. Véase, I. 13 del capítulo V.

<sup>128</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe Anual 1987-1988*, OEA/Ser.L/V/II.74 Doc. 10 rev.1, 16 de septiembre de 1988.

<sup>129</sup> Dicho pedido fue realizado mediante la resolución AG/RES 809 (XVII’0787).

desaparición forzadas de niños menores de edad. El destino de estos, según refleja el informe, podía ser:

- Primero: el mismo que seguían los mayores de edad desaparecidos durante este período en Argentina, es decir, su posterior ejecución extrajudicial y el ocultamiento de los restos mortales.
- Segundo: su devolución a la familia natural después de un largo tiempo retenidos en un centro clandestino de detención. Y
- Tercero: el secuestro de la mujer embarazada, la sustracción del bebé y la entrega de este a una familia afín al régimen. Esta última situación era la más corriente de entre las descritas<sup>130</sup>.

En cualquiera de los casos descritos, la Comisión IDH estimó el derecho de los padres a “conocer el paradero de esos niños y a participar en su educación y crianza, de la manera que más convenga al desarrollo y bienestar del niño”<sup>131</sup>. Por su parte, la Comisión IDH también reconoció el derecho de los menores desaparecidos a conocer su verdadera identidad, la cual es desconocida para ellos una vez son apartados de su familia biológica. En este caso, el sujeto activo del derecho a la verdad serían tanto los padres a los que se les debía reconocer la paternidad, como los menores que desean conocer su verdadera identidad. Igualmente, la Comisión IDH establece con respecto a la situación de estos menores que: “[t]ienen asimismo derecho a recuperar la memoria de sus padres naturales, y a saber que ellos no los abandonaron. Tienen derecho a tener contacto con la familia natural a efectos de nutrir y dar continuidad a esa memoria efectiva”<sup>132</sup>.

Como situación controvertida, recogida por la Comisión IDH, se encuentra el caso en que los padres “adoptivos” hayan participado directamente (como autores o cómplices) en la desaparición y/o ejecución de los familiares biológicos. Este paradigmático caso ha sido analizado por Klass Dykmann, el cual se pregunta si ante

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, párrs.331-345. Puede consultarse igualmente, GONZÁLEZ BRINDAS, A., “Abuelas-Madres de la Plaza de Mayo...”, *op.cit.*, pp.588-592. La práctica argentina sobre la recuperación de la verdad sobre estos hechos la analizaremos *infra* en el epígrafe correspondiente a la práctica de este Estado. Sobre el impacto de los hechos de desapariciones forzadas en menores puede consultarse: SARKIN, J., “Integrating transitional justice and disarmament, demobilisation and reintegration. The need to achieve rehabilitation, reintegration and reconciliation for child soldiers and child victims of enforced disappearances”, en DERLUYN, I., MELS, C., PARMENTIER S., VANDENHOLE W., *Re-Member. Rehabilitation, Reintegration and Reconciliation of War-Affected Children*, Cambridge, Intersentia, 2012, pp.84-88.

<sup>131</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe Anual 1987-1988*, OEA/Ser.L/V/II.74 Doc. 10 rev.1, 16 de septiembre de 1988, capítulo V, punto 5.

<sup>132</sup> *Ibid.*

situaciones tan sensibles (sobre todo al haber menores implicados), el menor pudiera tener “el derecho a no saber”<sup>133</sup>, motivado por lo difícil que podría resultar para él asumir su verdadera situación. Este autor ejemplifica esta posibilidad con el caso de una mujer uruguaya, secuestrada al nacer en Argentina durante la dictadura y apropiada por un agente de la inteligencia argentina con el que vivió diecisiete años. Una vez su familia denunció el secuestro de la menor y se reclamó su paternidad, esta era reticente a conocer su verdadera identidad<sup>134</sup>.

Ante este tipo de situaciones, si reconociéramos que el interés superior del menor es el de “no conocer”, este entraría en directa oposición con el derecho de los padres biológicos a participar en la crianza y el bienestar del niño. El dilema incluso podría extrapolarse más allá si se entrara en el terreno del derecho a la privacidad e intimidad de aquél que no quiere conocer la identidad de sus padres biológicos<sup>135</sup> (es decir, no pretende ejercer su derecho a la verdad); circunstancia que se enfrentaría al derecho a la verdad de los padres. La Comisión IDH, por su parte, estableció que:

“En los casos en que la sustracción la cometió una persona que participó en la desaparición forzada de los padres verdaderos, o en su tortura y ejecución, o se hizo cómplice de tales atrocidades, la Comisión estima que la salud mental y física del niño exige la inmediata separación del mismo de ese núcleo familiar”<sup>136</sup>.

En este caso, la Comisión IDH estima que el derecho a la verdad de los padres biológicos se encontraría por encima del derecho a la intimidad del menor aprehendido<sup>137</sup>, sin considerar que estaríamos ante la presencia de dos derechos no

---

<sup>133</sup> DYKMANN, K., “Impunity and the Right to the Truth...”, *op.cit.*, p.53.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> LUDWIN KING, E. B., “A Conflict of Interests: Privacy, Truth, and Compulsory DNA Testing for Argentina’s Children of the Disappeared”, *Cornell International Law Journal*, vol. 44, 2011, núm. 535, pp.537-538.

<sup>136</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe Anual 1987-1988*, OEA/Ser.L/V/II.74 Doc. 10 rev.1, 16 de septiembre de 1988, párr. 342.

<sup>137</sup> Es necesario aclarar que en numerosos casos es posible que el que fue secuestrado como menor, no lo sea en el momento de requerir la paternidad de sus familiares biológicos. Igualmente es necesario apuntar que por “interés superior de menor” descartaremos dentro de esta categoría cualquier discurso que pudiera apelar a este razonamiento como manera de impedir cualquier averiguación de la verdad (pretensión igualmente legítima) y por conectar en numerosas ocasiones con posiciones relacionadas con la impunidad. A este respecto, traemos a colación las palabras de Ana González Bringas, que describe las posiciones contrarias a los intentos por parte de organizaciones no gubernamentales (como las Abuelas de la Plaza de Mayo) de búsqueda de los menores, como: “Apelar, de forma cínica (...) para la justificación de la apropiación, a sentimientos de compasión y falsa preocupación por el bienestar del menor. Se defendía un trauma que se quería evitar al menor al sustraerlo nuevamente del entorno conocido”. GONZÁLEZ BRINDAS, A., “Abuelas-Madres de la Plaza de Mayo...”, *op.cit.*, p.600.

jerarquizados: la verdad no se encuentra por encima de la intimidad, ni viceversa<sup>138</sup>. A este respecto deberían primar criterios como la proporcionalidad y la atención a las circunstancias personales y particulares de cada uno de los casos, sin que haya necesariamente una respuesta única y uniforme ante este conflicto.

Apreciamos, por ende, un gran paso adelante en los anteriores pronunciamientos de la Comisión IDH, sobre todo en lo que respecta al derecho a la verdad colectivo. Así, a pesar de que consideramos preocupante la falta de menciones más justificadas y contundente respecto a la compatibilidad de la CADH y las leyes de amnistía en esta época, la referencia por vez primera al derecho a la verdad como derecho independizado de las desapariciones forzadas, afianzado como derecho propio de cualquier violación de derechos humanos y como un derecho colectivo, el cual debía ser respetado incluso con una ley de estas características vigente, constituirá una base sólida en la que ir construyendo la posición del derecho a la verdad dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

#### **4.3. El derecho a la verdad y la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La *verdad* como el fin de la investigación judicial.**

El caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*<sup>139</sup>, de 29 de septiembre de 1988, es no solo la primera sentencia contenciosa de la Corte IDH, sino también la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre el papel que juega “la verdad” dentro de la investigación sobre violaciones de derechos humanos y, concretamente en este caso, sobre las desapariciones forzadas.

En él se demanda al Estado hondureño por la desaparición de Manfredo Velásquez una vez este se encontraba bajo su custodia, así como por su posterior falta de colaboración en la investigación. Fue presentado a la Corte IDH por la Comisión IDH, a la cual llegaron en 1982 tres casos sobre desapariciones forzadas ocurridas en

---

<sup>138</sup> LUDWIN KING, E. B., “A Conflict of Interests: Privacy, Truth, and Compulsory DNA Testing for Argentina’s Children of the Disappeared”, *op.cit.*, p. 561.

<sup>139</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, Fondo, 29 de septiembre de 1988, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, N° 4. Para un análisis completo y en profundidad sobre los antecedentes y el iter procesal de este caso dentro del sistema interamericano de derechos humanos puede consultarse: DEODHAR, N.S., “Recent developments in international organizations. First contentious case before the Inter-American Court of Human Rights”, *American University Journal of International Law Review*, vol.3, 1988, núm.283.



Honduras<sup>140</sup>. Después de haber indagado en cada uno de ellos, y no haber obtenido respuestas sobre el paradero de ninguna de las víctimas, la Comisión IDH dedujo que el Gobierno de Honduras no había “ofrecido pruebas concluyentes que permiti[eran] establecer que no son verdaderos los hechos denunciados”<sup>141</sup>. El caso sería remitido así a la Corte IDH para que fuera esta finalmente la que determinara si Honduras había incurrido o no en violación de la CADH.

La Corte IDH en esta sentencia sienta las bases de una de las obligaciones estatales con más recorrido dentro de su jurisprudencia: el deber de garantía de los derechos reconocidos en la CADH, el eje en el que seguidamente nos moveremos para entender la primera relación entre el derecho a la verdad y la CADH.

Este deber se encuentra afianzado en el artículo 1.1:

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

El deber de respeto, de un lado, puede ser identificado tanto con obligaciones de hacer como de no hacer pues, “en virtud del mismo, los Estados se comprometen a no violar, por acción u omisión, los derechos humanos consagrados en los textos mencionados (...). El contenido del deber de garantía, sin embargo, estaría referido a las obligaciones del Estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigarlas una vez ocurridas, procesar y sancionar a sus autores, en su caso, y reparar los daños, materiales y morales, causados. Respondería, de tal modo, al conjunto de obligaciones que el Estado ha de cumplir cuando se presume la existencia de una violación de los derechos humanos, no estando circunscrito por tanto al comportamiento inicial que el Estado debe adoptar para respetar esos derechos, sino a una obligación

---

<sup>140</sup> Los otros dos son el caso *Fairén Garbí y Solís Corrales c. Honduras* (caso 7951 de 26 de junio de 1987. Sentencia de la Corte IDH de 15 de marzo de 1989), y el caso *Godínez Cruz c. Honduras* (caso 8097 de 26 de junio de 1987. Sentencia de la Corte IDH de 20 de enero de 1989).

<sup>141</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *resolución 22/86*, caso 7920, 18 de abril de 1986, Considerando, párr.2.

posterior de respuesta ante ellas”<sup>142</sup>. En efecto, siguiendo este razonamiento, y tal y como ha sostenido la propia Corte IDH, cualquier violación de alguno de los derechos de la CADH decretada por ella, implicaría que el artículo 1.1 hubiera sido igualmente infringido<sup>143</sup>.

En suma, el deber de garantía no responde a un compendio de obligaciones que el Estado ha de realizar antes de que la violación sea cometida, sino que este deber recoge las obligaciones del Estado una vez se presume la existencia de una infracción contra los derechos humanos. Así, los Estados “están obligados a tomar las medidas necesarias para corregir los daños infligidos en cada una de las violaciones de un derecho”<sup>144</sup>. Estaríamos por tanto ante la respuesta que el Estado debe dar ante una violación de alguno de los derechos integrados en la CADH<sup>145</sup>. De este modo la Corte IDH identifica dentro del deber de garantía las siguientes obligaciones:

“Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”<sup>146</sup>.

---

<sup>142</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: Hacia un modelo para el castigo de los crímenes del pasado a través de la experiencia latinoamericana*, Madrid, Ediciones Parthenon, 2007, pp.236 y 237.

<sup>143</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, Fondo, sentencia de 29 de septiembre de 1988, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, Núm. 4, párr.162.

<sup>144</sup> MÉNDEZ, J., “Responsabilización por los abusos...”, *op.cit.*, p.80.

<sup>145</sup> Para un desarrollo más elaborado sobre este concepto, véase: CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz... op.cit.*, pp.235-269.

<sup>146</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, Fondo, 29 de septiembre de 1988, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, Núm. 4, párr.166. Una matización importante a los efectos de cuándo se activan las obligaciones implícitas al deber de garantía será que estas podrán ser oponibles a los Estados incluso cuando la violación no haya sido cometida por agentes estatales, es decir, se activarán igualmente ante la infracción de un particular: “Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”, párr. 172.

Al efecto que a nosotros nos interesa, dentro de las obligaciones que hemos visto que se integran dentro del deber de garantía, nos centraremos en la obligación de investigar.

La conexión existente entre la verdad e investigación, según lo ha establecido la Corte IDH, reside en que la averiguación de aquélla es la finalidad de esta. La investigación ha de estar ineludiblemente orientada al conocimiento de la verdad de los hechos y, concretamente en casos de desapariciones forzadas, esa verdad se correspondería con el paradero de la persona desaparecida. Y es que, como bien apunta Ana Gemma López Martín: “investigar no es sino conocer la verdad, y no se puede conocer la verdad sin una adecuada investigación”<sup>147</sup>.

En efecto, al igual que hemos visto en los casos referentes al Comité DH, la Corte IDH, aún en esta época, no reconoce de forma explícita el derecho a la verdad, sino que concibe la verdad como el objetivo último al que debe orientarse una investigación judicial. Este término se identificará en cualquier caso como algo que va más allá de la búsqueda del paradero del desaparecido<sup>148</sup>. Así puede apreciarse en el caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*:

“En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”<sup>149</sup>.

---

<sup>147</sup> LÓPEZ MARTÍN A. G., “El estatuto jurídico de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos en Derecho Internacional”, en FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C. (dir.), *Nuevos desarrollos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: los derechos de las víctimas*, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, p. 84.

<sup>148</sup> GALAIN PALERMO, P., “Relaciones entre el ‘derecho a la verdad’ y el proceso penal. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en STEINER, C., (ed.) *Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional*, Berlín, Konrad Adenauer Stiftung e.V., 2011, p.255.

<sup>149</sup> *Ibid.*, párr.177.

La investigación se configura, pues, como un deber ineludible para los Estados. La apelación a la verdad no hace más que añadir un deber de diligencia a la propia investigación: hacia dónde debe estar encaminada<sup>150</sup>. Se configura, por ende, como un deber de comportamiento y no de resultado, pues no se infringe en caso de que no se obtengan los resultados requeridos (pues encontramos situaciones en las que es imposible obtenerlos). Particular al que volveremos de inmediato.

No obstante, es importante precisar ya aquí que pese a que algunos autores han opinado lo contrario<sup>151</sup>, a nuestro parecer el derecho a la verdad no es la finalidad del proceso judicial, sino una consecuencia accesorio al mismo e inevitable; por ejemplificar con el paso final, de la lectura de la sentencia (si todas las garantías judiciales han sido respetadas, claro) la víctima conocerá la verdad de lo sucedido<sup>152</sup>.

Aclarado lo anterior, siguiendo con el desarrollo de la búsqueda de la verdad dentro de la obligación de investigar, en el caso particular de la investigación de desapariciones forzadas, dentro del contencioso *Godínez Cruz c. Honduras* de 1989, la Corte IDH atribuyó a este deber de investigación un carácter continuo:

“El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso si en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a los individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”<sup>153</sup>.

Quizá sea en estos casos de investigación de desapariciones forzadas donde se puede apreciar con mejor claridad el significado dado por la Corte IDH a la obligación de investigar como de medio y no de resultado, pues es posible encontrarnos ante

---

<sup>150</sup> En este sentido puede consultarse: FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, “La obligación de investigación efectiva en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: especial referencia a la práctica española”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, vol. 26, 2013, pp. 18 – 20.

<sup>151</sup> OLIVEIRA, A., GUEMBE, M.J., “La verdad, derecho de la sociedad”, en ABREGÚ, M., COURTIS, C., *La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997, p. 553.

<sup>152</sup> Tema que analizado en profundidad en el epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>153</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Godínez Cruz c. Honduras*, sentencia de 20 de enero de 1989, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, No. 5, párr.191.

numerosas ocasiones en las que, debido a las características propias del caso, el paradero del desaparecido no pueda ser hallado. Sin embargo, será importante saber conjugar esta “obligación de medio” con el reconocimiento por parte de la propia Corte IDH del carácter continuo de las desapariciones forzadas. La Corte IDH consideró que aunque no se dé con el paradero de la persona desaparecida, sigue subsistiendo la obligación de investigar del Estado<sup>154</sup>. Esta opinión estaría en concordancia con la práctica del Comité DH en los primeros casos de desapariciones forzadas llegados ante su competencia.

La importancia brindada a la averiguación de la verdad (en este caso, al descubrimiento del paradero del desaparecido) se ejemplifica con la mención a que:

“Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”<sup>155</sup>.

La Corte IDH con esta posición pretende limitar el alcance que tendrían posibles leyes de amnistías (“circunstancias legítimas de orden interno”) que pudieran adoptarse. Estas medidas internas, que sí impedirían que el culpable fuera penalmente sancionado, no deberían limitar la obligación del Estado de investigar y averiguar el paradero del desaparecido. Se seguiría de este modo, y en cierto modo, con lo estipulado por la Comisión IDH en su Informe Anual 1986-1987.

Como cierre a este epígrafe sobre la actuación de la Corte IDH en este período histórico, añadir que en ambos casos comentados (*Velásquez Rodríguez c. Honduras* y *Godínez Cruz c. Honduras*), este tribunal encontró violado el artículo 1.1 por falta de investigación de la desaparición de una persona. Este artículo constituirá, por tanto, la primera piedra de toque en el reconocimiento del derecho a la verdad dentro de la

CADH.

---

<sup>154</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, 29 de septiembre de 1988, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, N° 4, párr.181. Una opinión contraria al entendimiento de la obligación de investigar hasta que se halle la verdad como una obligación de medio, puede hallarse dentro del voto disidente de dos miembros del Comité DH, caso *Cifuentes Elgueta c. Chile*. Véase epígrafe 4 del capítulo VI.

<sup>155</sup> *Ibid.*

## **CAPÍTULO II**

### **PRÁCTICA ESTATAL. EL SURGIMIENTO DE LAS PRIMERAS COMISIONES DE LA VERDAD**

#### **1. CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS.**

El objetivo principal tanto de este, como de los subsiguientes apartados del resto de Partes de este trabajo dedicados a la práctica estatal, será la evaluación del comportamiento de los Estados en torno a las diferentes modalidades del derecho a la verdad, que ya se hicieron presentes en el desarrollo de esta primera parte: la individual y la colectiva<sup>156</sup>. Con ello pretendemos valorar su estatus, en su caso y en cada una de sus dimensiones, como derecho internacional consuetudinario; pero tal y como explicaremos en lo que sigue, prestando especial atención a una de ellas.

Al respecto, conviene apuntar que la prueba de la existencia de una norma consuetudinaria, en aras de determinar su alcance y contenido, es siempre una empresa de complicado abordaje debido a la dificultad de probar de forma clara el cumplimiento de sus requisitos. De hecho, como afirma Giorgio Gaja: “the Court never attempted to give a full demonstration of the existence of what the same Court defines as necessary requirements for the existence of a customary rule of international law”<sup>157</sup>.

James Crawford se refirió a esta misma problemática en los siguientes términos:

“The problem with establishing customary international law is that it seems impossible. To a court deciding a current controversy which requires the application of current rules of law, complete information on the twin elements of

---

<sup>156</sup> Un análisis más pormenorizado del contenido de estas dos modalidades puede verse en epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>157</sup> GAJA, G., “The protection of general interests in the international community. General Course on Public International Law”, *Recueil Des Cours*, vol. 364, 2012, p. 40. Esta falta de precisión le ha valido algunas críticas a la Corte Internacional de Justicia por parte de la doctrina ya que, según sostiene Ben Chigara: “sometimes international tribunals declare a new norm of customary international law without the slightest regard whether or not there is evidence of [State practice] or [*opinio iuris*] on the matter (...) Sometimes evidence of only one of the two elements of customary international law will suffice, a kind of baby produced from an unfertilized ovum”. CHIGARA, B., *Legitimacy Deficit in Custom: A Deconstructionist Critique*, Aldershot, Ashgate, 2001, p. 19.

State practice and *opinio iuris* will rarely be available. Assertion based on these elements will be approximations”<sup>158</sup>.

La complejidad para determinar la existencia de una norma consuetudinaria reside en la amplitud con la que sus dos elementos constitutivos vienen enunciados en el artículo 38. 1 b) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el cual establece que: “[l]a Corte cuya función es decidir conforme al Derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: (...) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”<sup>159</sup>. A tenor del citado precepto, es necesario que concurra una práctica de los Estados –elemento objetivo o material–, junto con la *opinio iuris* o convicción jurídica –elemento subjetivo o espiritual–. Estos elementos aluden a categorías del comportamiento de los Estados complejos como para poder fijar con exactitud unos criterios claros y precisos que prueben que el nacimiento de un derecho consuetudinario es un hecho consumado.

El primero de estos elementos, la práctica, alude a una “repetición generalizada, constante y uniforme de un determinado comportamiento jurídicamente relevante”<sup>160</sup>, en el sentido de que ante una situación dada, los Estados decidan comportarse de una determinada manera.

Este comportamiento debe ser, en primer lugar, *generalizado*<sup>161</sup>. Para ello nos fijaremos en la actuación no ya de los Estados interesados, pues ello llevaría a tener que examinar la práctica de todos los Estados de la comunidad internacional en tanto que todos ellos pueden mostrar su práctica respecto al derecho a la verdad ante (cualquier) violación de los derechos humanos, sino singularmente en los especialmente interesados, en el sentido de lo estipulado por la CIJ en su opinión consultiva *sobre la*

---

<sup>158</sup> CRAWFORD, J., “Chance, order, change: the course of International Law. General Course on Public International Law”, *Recueil Des Cours*, vol. 365, 2013, p.49. Sin embargo, aunque pudiera parecer que este ejercicio es algo únicamente reservado a los jueces, James Crawford se refiere a que: “from an analytical perspective, a judge is in no better a position to identify custom than anyone else: scholars routinely do”, p. 51.

<sup>159</sup> Para James Crawford, los elementos que componen este artículo (“costumbre internacional”, “práctica generalmente aceptada” y “derecho”) parecen encontrarse en el orden equivocado. Este autor propone que el artículo se entendería mejor si hubiese sido redactado: una práctica generalmente aceptada como derecho, como evidencia de costumbre internacional”. *Ibid.*, p.49.

<sup>160</sup> GONZALEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Curso de Derecho Internacional... op.cit.*, p.199.

<sup>161</sup> Sobre este requisito de la práctica, “la generalidad”, Huub Meijers, ha afirmado, atendiendo a la práctica de la Corte Internacional de Justicia, que: “[The Court] did not demand that *all* States whose interests are especially affected by the possible regulation be participants in the practice creating rule”. MEIJERS, H., “How Is International Law Made? – The Stage of Growth of International Law and the Use of Its Customary Rules”, *Netherlands Yearbook of International Law*, vol. 9, 1978, núm. 3, p.16.

*legalidad o de la amenaza o el empleo de armas nucleares*<sup>162</sup>. En nuestro caso y en atención al objeto de este trabajo, por Estados especialmente interesados entenderemos aquellos donde han tenido lugar o han sufrido violaciones graves –masivas o sistemáticas– de derechos humanos. Será a estos a los que nos remitiremos, y hecha esta primera distinción, prestaremos especial atención a examinar específicamente si han creado algún mecanismo para hallar la verdad de lo ocurrido; en concreto, la verdad colectiva o global.

Ello así, porque como ya hemos visto, el proceso judicial será el encargado de materializar la vertiente individual del derecho a la verdad, debido a la propia naturaleza del mismo. Así, aunque conviene recordar aquí que el principal propósito de la incoación de una investigación judicial, y del proceso penal en sí, a nuestro entender es en esencia la determinación de la responsabilidad penal de un individuo concreto sobre un hecho determinado, es ciertamente evidente la conexión del proceso penal con la verdad. Sea, como ya hemos analizado, desde su inicio a través de una investigación judicial, sea de manera más patente y en su caso, con la sentencia donde se detallen cómo fueron cometidos los hechos, quiénes participaron en su perpetración y qué grado de responsabilidad puede serles imputable.

Esta estrecha conexión de la vertiente individual con el proceso penal es lo que justifica que le presentemos atención, pero precisando que sobre ella, nuestro estudio será más limitado. Esto es, referido a identificar y enumerar aquellos Estados que ante violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos han incoado investigaciones judiciales para discernir las circunstancias y la responsabilidad de los implicados. En consecuencia, no entraremos en un análisis detallado de estos casos debido a que no aportarían elementos de juicio de relevancia para el objeto, y sobre todo posibilidades de este trabajo. Pues, quedando fuera de toda duda la obligación de los Estados de incoar una investigación judicial tras la comisión de graves violaciones de derechos humanos, en el derecho convencional<sup>163</sup> y general<sup>164</sup> discriminar, en la práctica estatal

---

<sup>162</sup> La CIJ, para pronunciarse sobre la existencia de una norma consuetudinaria que pudiera regular el uso de las armas nucleares, examinó especialmente la práctica de los Estados que las poseían. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, Opinión consultiva *sobre la legalidad o de la amenaza o el empleo de armas nucleares*, 8 de julio de 1996, p.61, párr. 64.

<sup>163</sup> Véase, por ejemplo, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948, el PIDCP, la Convención contra la Tortura o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

<sup>164</sup> Tal y como afirma Javier Chinchón: “Resultaría ciertamente difícil encontrar voces que no compartiesen la plena vigencia de, por utilizar las palabras del Comité de Derechos Humanos, ‘la obligación general de investigar las alegaciones de violaciones [a los derechos humanos] con rapidez, a fondo y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales’. Más aún si el supuesto a



en este punto, las notas y matices solo propios al derecho la verdad supondría, en sí mismo, un (otro) trabajo de investigación.

Situación muy distinta, y a la cual consecuentemente dedicaremos un estudio profundo sobre la práctica estatal, es la que ocupa la vertiente colectiva del derecho a la verdad. En contraste con la situación anterior, y como se ha venido comprobando en esta primera parte del estudio, no contamos con ningún tratado internacional perteneciente a ningún sistema de protección de derechos humanos que ampare en su articulado esta modalidad del derecho a la verdad. Y es que, como se ha demostrado, hasta la fecha solo la Comisión IDH se refirió a ella en su Informe Anual 1985/1986. Por todo ello, será interesante conocer qué mecanismos fueron creando los Estados para materializar la vertiente colectiva del derecho a la verdad a lo largo del ámbito de este trabajo.

En segundo lugar, como es sabido ese comportamiento ha de ser *uniforme*, en el sentido de homogéneo, con una identidad sustancial en el contenido de la práctica de los Estados interesados<sup>165</sup>. A este respecto, tomaremos como elemento de juicio que el comportamiento estatal esté dirigido a un mismo fin, en nuestro caso y principalmente: la averiguación de la verdad colectiva. Ahora bien, esta “uniformidad” no ha de ser considerada como un sinónimo de “clonación”, sino que tal y como afirma Yoram Dinstein: “it is necessary to distil only the generic core of the action that can be repeated on other sets of circumstances”<sup>166</sup>. Este “generic core”, que en nuestro caso representaría el “buscar la verdad”, será al que aludiremos para probar la práctica de los Estados como uniforme.

Como último elemento del componente material de la costumbre se encuentra la *constancia*. El Estado “debe mantener el mismo comportamiento en sus sucesivas actuaciones, respondiendo con conductas idénticas o equivalentes ante circunstancias

---

considerar fuesen violaciones graves, masivas y sistemáticas a estos derechos”. CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “La obligación internacional del Estado de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado”, en RIPOL CARULLA, S., VILLÁN DURÁN, C. (dirs.), *Justicia de transición. El caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, 2011. p.26.

<sup>165</sup> GONZALEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Curso de Derecho Internacional... op.cit.*, p.157.

<sup>166</sup> DINSTEIN, Y., “The interaction between customary law and treaties”, *Recueil des Cours*, vol. 322, 2006, p.284.

análogas”<sup>167</sup>. Constituye, en fin, “la repetición de los precedentes y excluye las respuestas contradictorias”<sup>168</sup>.

En cuanto al segundo componente de formación de la costumbre, la *opinio iuris* o elemento subjetivo, se refiere a la prueba fehaciente de que los Estados se comportan de ese modo concreto por considerar que se encuentran ante una norma jurídicamente vinculante. Lo que realmente queda contrastado mediante la *opinio iuris* es el consentimiento individual y, en su caso, consenso general de los Estados de que así se comportan como base de derechos y obligaciones<sup>169</sup>. La asunción de ese comportamiento como obligatorio es esencial en cualquier caso y es aquí donde reside su dificultad, pues sin consentimiento en obligarse la obligación carecería de sentido<sup>170</sup>. La *opinio iuris*, al fin y al cabo, “is an unmediated expression of consent in a world without institutions. (...) [I]t’s a free standing expression of an individual State’s will, independent of any outside force”<sup>171</sup>.

Si la determinación de la existencia del elemento material es una labor que, en principio, parece relativamente sencilla al tratarse de una cuestión objetiva, no sucede lo mismo con el elemento espiritual, pues, dado el carácter subjetivo del mismo, puede resultar ciertamente difícil precisar los motivos que determinan la actuación de un Estado y, en consecuencia, la existencia de la necesaria convicción jurídica. No obstante, la labor se ve facilitada gracias a que opera una presunción a favor de la *opinio iuris*, siempre que se haya demostrado la existencia de una práctica jurídicamente relevante<sup>172</sup>.

Es por ello que, en el marco de la presente investigación, resulta especialmente importante –como ya se ha apuntado– el análisis de la práctica estatal en la materia –el estudio de casos a que nos referiremos en el siguiente y consecutivos apartados–, a los efectos de determinar si estamos ante una *práctica jurídicamente relevante* en el sentido anteriormente mencionado y, por ende, constitutiva de una norma consuetudinaria que consagre el derecho a la verdad.

---

<sup>167</sup> CARNERERO CASTILLA, R., “Las normas consuetudinarias internacionales”, en LÓPEZ MARTÍN, A.G. (ed.), *Derecho Internacional Público*, 3ª ed., Dilex, Madrid, 2015, p.141.

<sup>168</sup> GONZALEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., SAENZ DE SANTA MARÍA, P., *Curso de Derecho Internacional...* *op.cit.*, p.200.

<sup>169</sup> *Ibid.*, p.161.

<sup>170</sup> CRAWFORD, J., “Chance, order, change...”, *op.cit.*, p.54.

<sup>171</sup> *Ibid.*, p.67.

<sup>172</sup> CARNERERO CASTILLA, R., “Las normas consuetudinarias...” *op.cit.*, p.147.

## 2. ESTUDIO DE CASOS.

A partir de las premisas generales ya establecidas, en esta parte concreta del estudio (décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado), siguiendo la investigación emprendida por Tricia Olsen, Leigh Payne y Andrew Reiter<sup>173</sup>, contamos con setenta y ocho Estados donde tuvieron lugar violaciones graves -masivas o sistemáticas- de derechos humanos<sup>174</sup>, esto es, especialmente interesados. De entre ellos, treinta y uno<sup>175</sup> implementaron procesos judiciales (de los que se derivaría el conocimiento de la verdad individual, como ya hemos establecido), mientras que únicamente doce decidieron crear un mecanismo que averiguasen la verdad colectiva<sup>176</sup>. A continuación analizaremos el contexto en el que estos doce instrumentos fueron creados en aras de poder probar su *opinio iuris*.

### 2.1. Pakistán.

La primera comisión creada para la investigación de un período de violaciones de derechos humanos fue constituida en Pakistán mediante decreto presidencial de Zulfikar Ali Bhutto, en diciembre de 1971. La denominada *Hamoodur Rahman Commission* (así nombrada debido a que estaba presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hamoodur Rahman) tenía como mandato investigar:

“(...) the circumstances in which the Commander, Eastern Command, surrendered and the members of the Armed Forces of Pakistan under his command laid down

---

<sup>173</sup> OLSEN, T.D., PAYNE, L.A., REITER, A.G., *Transitional Justice in Balance. Comparing Processes, Weighing Efficacy*, Washington D.C., United State Institute of Peace Press, 2010, pp. 165 – 171.

<sup>174</sup> Afganistán, Arabia Saudí, Argentina, Angola, Bangladesh, Birmania, Brasil, Bolivia, Burkina Faso, Camerún, Camboya, Chad, China, Congo, República Checa, Chile, Colombia, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, España, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Gambia, Haití, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Irán, Irlanda del Norte, Israel, Kenia, Laos, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Papúa Nueva Guinea, Perú, Portugal, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, República de Yemen, Rumanía, Somalia, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Timor Oriental, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, URSS, Uruguay, Zimbabue, Zanzíbar.

<sup>175</sup> Afganistán, Argentina, Birmania, Bolivia, Congo, Corea del Sur, Filipinas, Gambia, Ghana, Grecia, Haití, Irán, Iraq, Kenia, Liberia, Madagascar, Mauritania, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Portugal, Rumanía, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Túnez, Uruguay.

<sup>176</sup> Argentina, Bolivia, Filipinas, Ghana, India, Pakistán, Perú, Portugal, Uganda, Uruguay, Zimbabue, Zanzíbar.

their arms and a cease-fire was ordered along the borders of West Pakistan and India and along the cease-fire line in the State of Jammu and Kashmir”<sup>177</sup>.

Esta comisión, sin embargo, no contó con mucha trascendencia a nivel internacional. Su informe final de julio de 1972 (aunque la investigación fue reabierta en 1974 y el informe actualizado data de 23 de octubre de 1974), debido a las numerosas críticas con las que contaba en contra de la actuación del Ejército pakistaní<sup>178</sup>, no llegó a hacerse público hasta décadas después.

## 2.2. Uganda.

El siguiente ejemplo de comisión de investigación durante esta época se dio en Uganda en junio de 1974. Mediante decreto presidencial, y al amparo de la legislación ugandesa (concretamente de su *Commission of Inquiry Act* de 15 de agosto de 1914<sup>179</sup>), fue constituida la *Commission of Inquiry into the Disappearances of People in Uganda since 25 January, 1971*. El recién autonombado Presidente Idi Amin Dada constituyó este mecanismo como respuesta ante la presión internacional por las numerosas desapariciones de civiles, perpetradas por el Ejército, ocurridas en los primeros años de su mandato<sup>180</sup>.

En concreto el mandato de la comisión establecía que esta era constituida:

“WHEREAS it is alleged that some people have disappeared from Uganda since the Military take-over on 25th January, 1971.

---

<sup>177</sup> GOVERNMENT OF PAKISTAN, *Hamoodur Rahman Commission Supplementary Report to the Commission's Official Inquiry into the 1971 India-Pakistan War*, Rockville, Arc Manor, 2007, p.7.

<sup>178</sup> AMIN, A.H., *India Pakistan Wars-1947 to 1971- A Strategic and Operational Analysis*, Strategicus and Tacticus, 2010, p.659.

<sup>179</sup> Esta ley facultaba a La ley de 1914 facultaba al Presidente crear una comisión para investigar: “(...) the conduct of any officer in the public service of Uganda, the conduct of any chief, the conduct or management of any department of the public service or of any public or local institution, or into any matter in which an inquiry would be for the public welfare”. Art. 1, *Commission of Inquiry Act*, 15 de agosto de 1914. Un análisis más en profundidad sobre esta commission puede verse en: HAYNER, P., *Verdades innombrables...* *op.cit.*, pp. 87-88; CARVER, R., “Called to Account: How African Governments Investigate Human Rights Violations”, *African Affairs*, vol.89, 1990, núm. 156, pp.397-400.

<sup>180</sup> Para más información sobre esta comisión puede consultarse: HAYNER, P., *Verdades innombrables...* *op.cit.*, pp. 87-88; CARVER, R., “Called to Account...”, *op.cit.*, pp.397-400; UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, *Truth Commission: Uganda, 1974*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/truth-commission-uganda-74> (Consultado el 6 de junio de 2016); TRIAL, *Truth Commission in Uganda*. Disponible en: <http://www.trial-ch.org/index.php?id=962&L=5>, (Consultado el 6 de junio de 2016).

WHEREAS some of these alleged missing persons ought to be dead and others still living whether taken elsewhere”<sup>181</sup>.

Como se desprende de la lectura de lo anterior, la proliferación de la práctica de desapariciones forzadas empezaba ya a ser considerada como un problema al que los Estados habían de hacer frente con los medios a su alcance. Sin embargo, el carácter con el que contó la investigación liderada por esta comisión, más ajustado al de un tribunal judicial, difería un poco del de las comisiones de la verdad que se empezarían a instaurar en la década de los ochenta, más cercanas estas del prototipo actual de comisión de la verdad. Igualmente, y aunque constituye un notable avance la creación de una comisión de este calado, no contó con apoyo suficiente de las propias instituciones a la hora de ejecutar su trabajo, como se desprende de los impedimentos de algunos sectores del Gobierno para que los comisionados accedieran a cierta información<sup>182</sup>, lo que pone en entredicho la predisposición del Estado a que se conocieran las circunstancias de lo ocurrido.

Según Richard Carver, la investigación emprendida por esta comisión: “had similar powers to those of the High Court to compel witnesses to attend and to call for evidences o be produced”. A pesar de ello, el propio autor, remitiéndose al informe final de la comisión, estableció que: “in its report the Commission made clear that it was not a criminal investigation”<sup>183</sup>.

---

<sup>181</sup> Disposición legal núm. 2, 30 de junio de 1974.

<sup>182</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...* *op.cit.*, p. 87.

<sup>183</sup> CARVER, R., “Called to Account...”, *op.cit.*, pp.397-398.

### 2.3. India.

Tres años después de la creación de la comisión anterior, la India fue el siguiente Estado en crear un mecanismo que averiguara lo ocurrido durante su período represivo. La *Shah Commission of Inquiry* fue creada por el Gobierno indio en 1977 para investigar los crímenes producidos durante el período denominado *The Emergency*<sup>184</sup>. Durante los veintiún meses que duró este estado de emergencia, proclamado por la presidenta Indira Ghandi el 25 de junio de 1975 por cuestiones de unidad y estabilidad<sup>185</sup>, las estimaciones afirmaban que se produjeron entre diez mil y cincuenta mil arrestos sin juicio posterior y una estricta censura impuesta a los medios de comunicación<sup>186</sup>.

La salida de Indira Ghandi del poder tras las elecciones de marzo de 1977, precipitó la creación de la *Shah Commission of Inquiry*, constituida el 28 de mayo de 1977 en virtud de la sección 3 de la *Commissions of Inquiry Act* de 1952<sup>187</sup>.

En atención al texto de su mandato, esta comisión fue constituida debido a:

“(...) a widespread demand from different sections of the public for an inquiry into several aspects of allegations of abuse of authority, excesses and malpractices committed and actions taken or purported to be taken in the wake of the Emergency. (...). And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making inquiry into a definitive matter of public importance, that is, excesses, malpractices and misdeeds during the Emergency”<sup>188</sup>.

Según recogió Neil Kritz, la razón de constitución de la comisión y los procedimientos que ante ella se desarrollaron iban orientados a: “determining the truth”<sup>189</sup>. Algo que se deduce de la lectura de su mandato, pues la propia constitución de la comisión suponía dar oportuna respuesta a las demandas de la sociedad de conocer los excesos que se cometieron durante una época determinada.

---

<sup>184</sup> PALMER, N.D., “India in 1975: Democracy in Eclipse”, *Asian Survey*, vol. 16, 1976, núm.2, pp.99 y ss.

<sup>185</sup> *Ibid.*, p.103.

<sup>186</sup> *Ibid.*, pp.101-102.

<sup>187</sup> KRITZ, N.J. (ed.), *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. Vol.III*, Washington D.C., United States Institute of Peace, 1995, p.235.

<sup>188</sup> Ministry of Home Affairs Notification, Nueva Delhi, 28 de mayo de 1977.

<sup>189</sup> KRITZ, N. (ed.), *Transitional Justice... op.cit.*, p.240.

## 2.4. Portugal.

Tras la conclusión de la dictadura de Salazar en 1974, la administración del Gobierno entrante, siguiendo los pedidos de la sociedad dirigidos a “‘purge’ society of the past”<sup>190</sup>, creó, en abril de 1977, la *Commission on the Black Book on the Fascist Regime*. Este organismo estaba dirigido, no ya a una investigación profunda sobre los hechos, sino a denunciar los abusos cometidos por el régimen dictatorial anterior, la violencia policial o la censura<sup>191</sup>.

Para la ejecución de los trabajos, los cuales se tradujeron en la publicación de veintidós libros<sup>192</sup>, la comisión pudo acceder a documentación recogida en archivos pertenecientes a la dictadura, lo cual significó la divulgación pública de información acerca del funcionamiento del régimen represivo hasta entonces desconocida por la sociedad<sup>193</sup>.

## 2.5. Ghana.

La desaparición y posterior asesinato de tres jueces y un militar retirado el 30 de junio de 1982 propició que el Gobierno presidido por J. J. Rawlings promoviera la creación de una investigación de los hechos dentro del Ministerio del Interior. No obstante, esta iniciativa fue duramente rechazada por la población ya que se consideraba que adolecería de una gran falta de objetividad e independencia<sup>194</sup>, pues se sospechaba de la participación en los hechos de miembros del Gobierno<sup>195</sup>.

Como respuesta a estas presiones, el Gobierno adoptó una ley que contenía la creación de un nuevo mecanismo para la investigación de estos hechos: la *Special*

---

<sup>190</sup> COSTA PINTO, A., “Settling Accounts with the Past in a Troubled Transition to Democracy: The Portuguese Case”, en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR, P., GONZÁLEZ – ENRÍQUEZ, C., *The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratizing Societies*, Nueva York, Oxford University Press, 2001, p.80.

<sup>191</sup> *Ibid.*, pp.80-81.

<sup>192</sup> CLOSA MONTERO, C., *Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States*, Madrid, Instituto de Políticas y Bienes Públicos – CSIC, 2008, p.239.

<sup>193</sup> Esta comisión, a pesar de que realizó una labor de difusión de importante información sobre violaciones de derechos humanos, no ha sido calificada como una auténtica comisión de la verdad dentro de la doctrina especializada en el tema. Autores como Mark Freeman la han identificado como “thematic commission of inquiry”, debido a que estas comisiones: “tend to focus more on analysis of public policy than on victims or on individuals fact – finding”. FREEMAN, M., *Truth Commissions... op.cit.*, p. 56.

<sup>194</sup> CARVER, R., “Called to Account...”, *op.cit.*, p.400.

<sup>195</sup> AFRICA WATCH, “Ghana: Revolutionary Injustice - Abuse of the Legal System Under the PNDC Government”, *Human Rights Watch*, vol. IV, 1992, p.9.

*Investigations Board* (SIB)<sup>196</sup>. La SIB, constituida mediante la Ley 15 aprobada por el *Provisional National Defence Council* (PNDC, partido del Gobierno por entonces) de 1982, no se trataba de un órgano judicial, sino que era un mecanismo de investigación extrajudicial, con garantías de mayor independencia en su investigación<sup>197</sup>, que tal y como reiteraron en su reunión inaugural:

“We wish to stress that this Special Investigating Board is essentially a fact-finding body. This is not a trial, and no one is here to prosecute, and no one comes here to be prosecuted. We think that the principal task of all those who take part in this Inquiry, including counsel who may appear to assist and advise witnesses, is to assist the board in eliciting the facts and elucidating the truth of the matters under enquiry”<sup>198</sup>.

La separación de funciones entre un mecanismo de esta naturaleza y la investigación que podrían emprender los tribunales dan muestras de que los Estados ante determinadas circunstancias (como pudiera ser en este caso reivindicaciones de la sociedad de una investigación imparcial de los hechos) optaban, ya por entonces, por instituir órganos extrajudiciales para aclarar lo ocurrido ante un acontecimiento violatorio de derechos humanos. La SIB recomendó el juzgamiento de diez personas involucradas en los hechos, de los cuales solo cinco lo fueron finalmente<sup>199</sup>. Aunque solo unos pocos nombres fueran ligados a los acontecimientos, ello puede ser ya visto como un paso adelante en la recuperación de la verdad sobre lo ocurrido.

---

<sup>196</sup> The Special Investigation Board (Kidnapping and Killing of Specified Persons) Law, 1982 (PNDC Law 15).

<sup>197</sup> En este caso, la SIB estaba constituida por tres miembros nombrados por el PNDC y otros dos entre el colegio de abogados y colectivos eclesiásticos, lo que suponía una mayor independencia en su investigación, que una liderada por el Ministerio del Interior. CARVER, R., “Called to Account...”, *op.cit.*, p. 401.

<sup>198</sup> Fragmento extraído del informe final de la SIB, citado en: *Ibid.*, p. 402.

<sup>199</sup> *Ibid.*



## 2.6. Bolivia.

Ya en la década de los ochenta empezaron a constituirse comisiones extrajudiciales con un enfoque distinto al de las anteriores por ser su objetivo principal no solo los hechos pasados, sino también la perspectiva de las víctimas como elemento central de la investigación, componente diferenciador entre una mera comisión de investigación y lo que entendemos por comisión de la verdad. Este elemento también influye en la propia motivación de los Estados a la hora de constituir un mecanismo u otro. Una comisión de la verdad no investiga únicamente un hecho concreto, sino que da respuesta a una demanda de las víctimas: conocer la verdad de lo sucedido; de ahí que el enfoque centrado en las víctimas sea fundamental y el trabajo no se base en un simple relato histórico o académico de lo acontecido.

La primera de las comisiones de los años ochenta, aún con el apelativo de “investigación”, fue establecida en Bolivia mediante el Decreto supremo núm. 19241 de 28 de octubre de 1982. La Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos, fundada a los pocos días de la recuperación de la democracia por el presidente Hernán Siles Zuazo, tenía por objeto:

“(…) analizar, investigar y determinar la situación de los ciudadanos desaparecidos en Territorio Nacional, estando autorizada para requerir información de cualquier persona o institución, teniendo acceso a la documentación que juzgue conveniente y demanda auxilio de la fuerza pública en sus investigaciones y procesamientos de denuncia, debiendo hacer públicas sus conclusiones en el término de 90 días a partir de la fecha de su constitución”<sup>200</sup>.

La comisión así, tal y como afirma Priscilla Hayner, “impedía una investigación completa de la verdad, ya que no cubría los casos de tortura, detención ilegal y prolongada, ni tampoco los abusos de otra índole”<sup>201</sup>.

La falta de un precedente específico claro dentro del contexto latinoamericano<sup>202</sup> hace que la creación de esta primera comisión cree cierta incertidumbre respecto a lo

---

<sup>200</sup> Artículo 2, Decreto Supremo 19241, 28 de octubre de 1982.

<sup>201</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...* op.cit., p.89.

<sup>202</sup> Eduardo González Cueva considera que las transiciones a la democracia que empezaban a desarrollarse en distintos países latinoamericanos a lo largo de la década de los ochenta únicamente contaban con la influencia política de la transición española, ocurrida en la segunda mitad de la década de

que motivó al Gobierno entrante a su creación<sup>203</sup>. Sin embargo, si atendemos al contenido del propio decreto, su considerando contempla:

“Que como resultado de los regímenes autoritarios se han tenido que lamentar en el país la suerte de los ciudadanos desaparecidos de los mismos que es preciso *establecer su real situación de acuerdo a las disposiciones legales que proclaman los derechos y deberes de las personas*”<sup>204</sup>.

Aunque, al igual que ocurría con las comisiones anteriores, el fundamento principal de la creación de esta comisión pudiera residir en una demanda de la sociedad civil de conocer el paradero de las personas desaparecidas, así como las circunstancias en que estos hechos se llevaron a cabo, de la lectura del párrafo anterior se aprecia la aparición de unas primeras notas de lo que constituiría el nacimiento de una norma jurídica que obligaba a los Estados a averiguar el paradero de las personas desaparecidas, “de acuerdo a las disposiciones legales que proclaman los derechos y deberes de las personas”.

¿Cuáles podrían ser estas *disposiciones legales* que obligaban a Bolivia a crear una comisión de investigación de las personas desaparecidas? A octubre de 1982, Bolivia había ya ratificado el PIDCP<sup>205</sup> y la CADH<sup>206</sup>, sin embargo, del estudio sobre la práctica de los sistemas universal e interamericano hemos comprobado que aunque se empezaba ya a vislumbrar el inicio de una interpretación integradora de este derecho dentro de estos tratados, aún no estaba lo suficientemente afianzada, pues ni el Comité DH y la Corte IDH todavía no habían llegado a referirse a la vertiente colectiva del derecho a la verdad ni a mecanismo alguno que la pudiera materializar. Debido a ello, las disposiciones legales a las que Bolivia hace referencia para justificar la creación de

---

los setenta. Según este autor: “El modelo español de una transición pactada, que aislaba del escenario político cualquier demanda de justicia, era la única referencia comparativa disponible para los demócratas civiles que navegaban las transiciones. Entre un modelo que guardaba silencio ante el tema de la justicia y las demandas de la sociedad civil, los líderes civiles tenían que encontrar un camino propio”. GONZÁLEZ CUEVAS, E., “¿Hacia dónde van las comisiones...”, *op.cit.*, p.343.

<sup>203</sup> En el plano internacional esta comisión tampoco ha contado con mucha repercusión (puede que por la falta de un informe final concluyente). En concreto Priscilla Hayner recoge en su libro, respecto a los miembros de la Comisión ugandesa de 1986 (que será tratada posteriormente), que “era el segundo organismo de este tipo en el mundo después del de Argentina”. *Ibid.*, p.88. Es decir, obviaba la constitución, no únicamente de las comisiones de Pakistán de 1971, Uganda de 1974 y de la India y Portugal de 1977, sino de la propia comisión boliviana.

<sup>204</sup> El resaltado es nuestro.

<sup>205</sup> Ratificado el 12 de agosto de 1982.

<sup>206</sup> Ratificada el 20 de junio de 1979.

la comisión, pudiera dejar entrever la existencia de una norma aún no afianzada en un tratado internacional, pero que sí formaría parte del Derecho internacional general y que obligara a los Estados a buscar a sus personas desaparecidas.

Las recomendaciones de la Comisión IDH en su informe final sobre la visita *in loco* a Bolivia en 1981 iban, de hecho, en este sentido:

“a) Tomar todas las medidas que sean necesarias para prevenir nuevas violaciones al derecho a la vida, y efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer las circunstancias irregulares en que ocurrieron muertes de personas cuya responsabilidad se atribuye a autoridades gubernamentales, sancionando con todo el rigor de la ley a aquellos que resulten responsables”<sup>207</sup>.

La creación de la comisión de la verdad respondería, por tanto, a esta incipiente preocupación por la falta de un instrumento jurídico que facultara a los Estados a dar una respuesta concreta al problema de los desaparecidos; preocupación que también afectaba a los organismos de protección de derechos humanos como se ha demostrado con los anteriores casos individuales del Comité DH y en las recomendaciones de la Comisión IDH<sup>208</sup>. La respuesta dada tanto por estos organismos internacionales, como por Bolivia, sin embargo, iba orientada a la misma dirección: obligación de realizar una investigación orientada a conocer el paradero de los desaparecidos y las circunstancias en que los hechos fueron cometidos<sup>209</sup>.

---

<sup>207</sup> COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia*, Doc. OEA/Ser.L/V/II.53 doc.6 rev.2, 13 de octubre de 1981, Conclusiones y Recomendaciones.

<sup>208</sup> Véase epígrafes 3.2 y 4.2 del capítulo I.

<sup>209</sup> La Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos reunió ciento cincuenta y cinco testimonios de desapariciones ocurridas entre 1967 y 1982. También fueron localizados restos de algunos de los desaparecidos, sin embargo, ningún caso se llegó a investigar de manera concluyente, HAYNER, P., *Verdades innombrables... op.cit.*, p.89.

## 2.7. Argentina.

Únicamente un año después de la constitución de la comisión boliviana, el Gobierno de facto de las Juntas Militares en Argentina veía como se perdía la guerra de las Malvinas contra Reino Unido. Esta derrota dejaba, en consecuencia, su posición ante la ciudadanía muy debilitada. La caída del régimen dictatorial precipitó la inmediata proclamación de elecciones presidenciales (celebradas el 30 de octubre de 1983) en las que Raúl Alfonsín (candidato que había prometido durante la campaña electoral que no respetaría la ley de autoamnistía adoptada por la última Junta Militar<sup>210</sup>) se alzó con la victoria.

El nuevo Presidente electo se encontró con un país en una situación muy similar a la de Bolivia en 1982 pero en donde, al contrario de este, contaba con una sociedad civil que había venido reivindicando su derecho a conocer lo que sucedía con sus desaparecidos durante los primeros años de la dictadura<sup>211</sup> y con un número de víctimas (sobre todo en lo referente a desaparecidos) mucho mayor<sup>212</sup>.

Jaime Malamud-Goti, asesor presidencial de Raúl Alfonsín, declaró en una entrevista a Pricilla Hayner que, mediante la creación de una comisión de investigación sobre los crímenes del pasado, “los argentinos eran conscientes de que estaban

---

<sup>210</sup> Ley 22924 de 22 de septiembre de 1983.

<sup>211</sup> De entre estas asociaciones destacan las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Para una visión más concreta sobre las acciones emprendidas por estas organizaciones durante la dictadura y la transición argentina véanse: GONZÁLEZ BRINGAS, A., “Abuelas-Madres de Plaza de Mayo: la construcción social de la memoria”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.), *El derecho a la memoria*, op.cit., pp.579-615; CARLOTTO, E., “Niños desaparecidos por motivos políticos en la república Argentina (1976-1983). La labor de abuelas de Plaza de Mayo”, en MÉNDEZ, J., ABREGÚ, M., MARIEZCURRENA, J., *Verdad y Justicia...* op.cit., pp.87-94; CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES: <http://www.cels.org.ar/cels/?info=detalleTpl&ids=6&lang=es&ss=133> (Consultado el 6 de junio de 2016).

<sup>212</sup> El Comité Impulsor del juicio contra el general Luís García Meza Tejada (dictador boliviano entre 1980 y 1981), estableció que tras el golpe militar dado en 1971 se registraron más de catorce mil detenciones ilegales, muchas de las cuales fueron sometidas a torturas; más de seis mil exiliados; y setenta desapariciones forzadas. CUYA, E., “Las comisiones de la verdad...”, op.cit., p.39. Por su parte la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos pudo recoger testimonio de ciento cincuenta y cinco casos de desaparecidos. HAYNER, P., *Verdades innombrables...* op.cit., 89. Por su parte, la situación de Argentina en 1983 era mucho más cruenta. En efecto, si por algo se caracterizó el Gobierno de facto de las Juntas Militares fue por la institucionalización de la práctica de la desaparición forzada (asimilable a la aniquilación de judíos durante la dictadura nacionalsocialista, debido a creación de un entramado administrativo orientada a la eliminación del “enemigo”). La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), llegó a tomar siete mil declaraciones a víctimas y testigos que fueron vitales para documentar ocho mil novecientos sesenta desaparecidos. No obstante, esta cifra no es definitiva pues las estimaciones de la CONADEP eran que ese número era mucho mayor debido a que hubo numerosos casos de desapariciones forzadas que no fueron denunciados. Las estimaciones actuales de desaparecidos son de treinta mil desaparecidos. Véase, COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS, *Nunca Más*, Buenos Aires, 8ª ed., Eudeba, 2009, prólogo a la 8.ª edición.

siguiendo el ejemplo de un país vecino, Bolivia”<sup>213</sup>. En efecto, Argentina tenía a su alcance un precedente dentro de su entorno, algo con lo que Bolivia no pudo contar y, al igual que esta, la Comisión IDH realizó una visita *in loco* al país en 1980 (es decir, un año antes de la de Bolivia), en la cual se ponía de manifiesto las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se estaban cometiendo y se recomendaba:

- “1. En relación a aquellas muertes que han sido imputadas a autoridades públicas y a sus agentes, abrir las investigaciones correspondientes y enjuiciar y sancionar, con todo el rigor de la ley, a los responsables de esas muertes.
2. En lo que corresponde a los desaparecidos, dar cumplimiento a las recomendaciones que a este respecto y con carácter preliminar la Comisión hizo al Gobierno argentino el 20 de septiembre de 1979<sup>214</sup> y, en consecuencia, informar circunstancialmente sobre la situación de estas personas.
3. Para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición, crear un registro central de detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en breve plazo, las detenciones practicadas; ordenar que esas detenciones sean llevadas a cabo por agentes debidamente identificados e impartir instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a lugares específicamente destinados a este objeto”<sup>215</sup>.

---

<sup>213</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, p.64.

<sup>214</sup> “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de su visita de observación *in loco* a la República Argentina, se permite formular al Gobierno argentino las siguientes recomendaciones preliminares: I. Desaparecidos: La Comisión estima que el problema de los desaparecidos es uno de los más graves que en el campo de los derechos humanos confronta la República Argentina. En tal sentido la Comisión recomienda lo siguiente: a) Que se informe circunstancialmente sobre la situación de personas desaparecidas, entendiéndose por tales aquellas que han sido aprehendidas en operativos que por las condiciones en que se llevaron a cabo y por sus características, hacen presumir la participación en los mismos de la fuerza pública. b) Que se impartan las instrucciones necesarias a las autoridades competentes a fin de que los menores de edad desaparecidos a raíz de la detención de sus padres y familiares y los nacidos en centros de detención, cuyo paradero se desconoce, sean entregados a sus ascendientes naturales u otros familiares cercanos. c) Que se adopten las medidas pertinentes a efecto de que no continúen los procedimientos que han traído como consecuencia la desaparición de personas. Al respecto, la Comisión observa que se han producido recientemente casos de esta naturaleza que como todos los demás deben ser esclarecidos lo antes posible. (...). III. Métodos de Investigación: En lo referente a los métodos de investigación, la Comisión recomienda lo siguiente: Que se investiguen a fondo las denuncias acerca de la utilización de torturas y otros apremios ilegales en los procedimientos de investigación de las personas detenidas, que los responsables de actos de esa naturaleza sean sancionados con todo el rigor de la ley y se tomen las medidas necesarias para prevenir la aplicación de tales métodos”. *Ibid.*, Introducción.

<sup>215</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina*, Doc. OEA/Ser.L/V/II.49 doc. 19, 11 de abril de 1980, Conclusiones y recomendaciones.

La CONADEP fue creada mediante el Decreto presidencial 187 de 14 de diciembre de 1983. En este decreto se remitía al marco jurídico que respaldaría la creación de la comisión. Concretamente, en su considerando se establecía:

“Que, sin embargo, como se ha dicho muchas veces, la cuestión de los derechos humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional.

Que, con respecto a esta última, su interés legítimo está contemplado en los proyectos enviados al Honorable Congreso de aprobación de una serie de pactos internacionales sobre derechos humanos, los que incluyen la jurisdicción obligatoria de un tribunal internacional competente en la materia.

Que, en consecuencia se considera apropiado integrar una comisión nacional de la que formen parte personalidades caracterizadas por su celo en la defensa de los derechos humanos y por su prestigio en la vida pública del país, para determinar lo sucedido a las personas desaparecidas”.

Como ya ocurrió con Bolivia, los tratados internacionales en protección de derechos humanos no justificaron la creación de la CONADEP, ya que al momento de su creación Argentina no era parte ni del PIDCP ni de la CADH<sup>216</sup>. Sin embargo, el Estado argentino empezaba a mostrar cierta predisposición a cumplir con los requerimientos de las víctimas en materia de derechos humanos.

La creación de la CONADEP no ha tenido para la doctrina ningún sustento jurídico específico<sup>217</sup> más allá de estrictas razones humanitarias; de dar respuesta a una demanda que llevaba largo tiempo siendo planteada dentro de la sociedad, como ocurrió con algunas comisiones de investigación de los años setenta. Estas razones se fundamentan dentro del considerando del decreto de constitución de la comisión, donde acerca de “la cuestión de los derechos humanos” se apela a dos actores interesados: la sociedad y la comunidad internacional.

---

<sup>216</sup> Argentina firmó el PIDCP el 19 de febrero de 1968 y lo ratificó el 8 de agosto de 1986. La CADH fue ratificada el 14 de agosto de 1984.

<sup>217</sup> ESPINOZA CUEVAS, V., ORTIZ ROJAS, M.L., ROJAS BAEZA, P., *Comisiones de la Verdad, ¿un camino incierto? Estudio comparativo de Comisiones de la Verdad en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Sudáfrica desde las víctimas y las organizaciones de derechos humanos*, Santiago de Chile, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - Asociación para la Prevención de la Tortura, 2003, p.16.

Los derechos humanos al referirse a las normas más elementales para una convivencia pacífica, su protección y defensa constituyen una materia de importancia global, tal y como se especifica en el mandato. Siguiendo este mismo razonamiento, si estas materias son un asunto global, el conocimiento de los hechos, que conculcaron estos mismos derechos, lo es a su vez. La CONADEP se erigió de este modo en el medio en el que Argentina daría a conocer a la sociedad y a la comunidad internacional los hechos violatorios de derechos humanos que ocurrieron dentro de su jurisdicción.

Su informe final, “Nunca Más”, el cual contó con una importante difusión<sup>218</sup>, establecía en su prólogo que lo que movió a la creación de la CONADEP no fue el resentimiento o la venganza, sino la verdad y la justicia; la búsqueda de “una justicia que se fundamente en la verdad”<sup>219</sup>.

La práctica en materia de derecho a la verdad de Argentina, por otro lado, no concluyó con la publicación del informe final de la CONADEP, sino que continuará con una extensa práctica entre la que encontraremos los conocidos como “juicios de la verdad”, (analizados en el capítulo siguiente) y una prolífica política en preservación y acceso a archivos contenedores de información acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de las Juntas Militares.

## **2.8. Perú.**

Durante esta época también se instituyeron dos comisiones de investigación en Perú, pero al contrario de sus predecesoras latinoamericanas, estaban centradas en la investigación de hechos concretos, más que en una investigación del contexto general en el que se dieron.

La primera de ellas fue constituida en 1983 debido a los enfrentamientos entre el movimiento guerrillero Sendero Luminoso y el Ejército peruano. En el caso concreto, la comisión creada en virtud de la Resolución suprema de 27 de enero de 1983 pretendía “contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclaman urgentemente la conciencia nacional y la opinión pública del resto del mundo” sobre los hechos ocurridos en la localidad de Uchuraccay donde, debido a estos enfrentamientos, ocho periodistas y un guía campesino fueron asesinados. Esta comisión, presidida por Mario Vargas Llosa, no

---

<sup>218</sup> Cuarenta mil ejemplares se vendieron el primer día. HAYNER, P., *Verdades innombrables... op.cit.*, p.65.

<sup>219</sup> COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS, *Nunca Más*, *op.cit.*, prólogo.

tuvo competencias judiciales o policiales a tenor de lo dispuesto por Fernando Belaude Terry, presidente de la Nación por aquel entonces<sup>220</sup>.

Sin embargo, la doctrina ha venido considerando que la creación de esta comisión, pese a que tenía como objetivo principal aclarar la verdad sobre lo sucedido, en última instancia su propósito consistía en la obtención de “respaldo académico” de la versión brindada de antemano por el Gobierno sobre los hechos. En efecto, con anterioridad a que la comisión iniciara sus trabajos los informes del Comando Político Militar de Ayacucho exoneraron al Estado de toda responsabilidad<sup>221</sup>, pues se identificó como autores de la masacre a veintisiete comuneros que, según este, fueron movidos por la “sed de venganza de los aborígenes andinos contra los blancos opresores”<sup>222</sup>.

Las deficiencias con las que contó la investigación emprendida por Mario Vargas Llosa pone de relieve que aunque la consecución de la verdad empezara ya a ser tenida en cuenta como un objetivo a alcanzar por el Estado tras un período de violaciones de derechos humanos, será necesario que el instrumento que se elija para tal efecto realice un trabajo que realmente se adecúe a este propósito. En este caso, por ejemplo, los miembros de la investigación únicamente estuvieron en el lugar donde se produjeron los hechos durante cuatro horas<sup>223</sup>.

Tres años después de la investigación emprendida sobre estos hechos, otro caso produjo la apertura de una nueva investigación extrajudicial: las matanzas de los penales de Perú, donde doscientos cincuenta prisioneros políticos, repartidos entre dos cárceles, fueron asesinados entre los días 18 y 19 de junio de 1986 por miembros de la Guardia Republicana y de la Marina de Guerra<sup>224</sup>. Esta comisión, creada dentro del Congreso de la Nación al igual que la de 1983, fue instaurada para la investigación de un hecho concreto y auspiciada por una intensa presión internacional para que se esclareciese la verdad de lo acontecido<sup>225</sup>.

---

<sup>220</sup> ARDILA MUÑOZ, D., “Las comisiones de la verdad en América Latina y South África: una comparación”, *Instituto de estudios para el desarrollo y la paz*, pp.8-9. Versión electrónica disponible en: [http://www.setianworks.net/indepazHome/index.php?view=article&id=147%3Alas-comisiones-de-la-verdad-en-america-latina-y-south-africa-una-comparacion&option=com\\_content&Itemid=74](http://www.setianworks.net/indepazHome/index.php?view=article&id=147%3Alas-comisiones-de-la-verdad-en-america-latina-y-south-africa-una-comparacion&option=com_content&Itemid=74) (Consultado el 6 de junio de 2016).

<sup>221</sup> CABRERA OROZCO, F., PASUY MITICANOY, L.A., *Los archivos y el deber de memoria del Estado colombiano en casos de violación de derechos humanos en el conflicto armado. La construcción del contexto y metodología para el estudio del caso. Tomo I*, Bogotá, Secretaría General - Alcaldía de Bogotá, 2011, p.45.

<sup>222</sup> *Ibid.*, p.49.

<sup>223</sup> *Ibid.*, p.46.

<sup>224</sup> CUYA, E., “Las comisiones de la verdad en América Latina”, *op.cit.*, p.35.

<sup>225</sup> *Ibid.*



Sin embargo, a pesar de que la comisión partía de la base de querer averiguar lo ocurrido, su propia composición impidió que esto sucediese. La comisión, formada por miembros afines y ajenos al Gobierno, presentó finalmente dos informes: uno exonerando al Estado de toda responsabilidad y otro incriminándolo<sup>226</sup>. La verdad, por tanto, a nivel interno no fue averiguada (tampoco a nivel judicial, donde los tribunales exculparon a los responsables civiles y militares de toda incriminación en las matanzas<sup>227</sup>), siendo necesario una sentencia de la Corte IDH para que las víctimas fueran reconocidas y reparadas<sup>228</sup>.

La práctica de Perú, no obstante, no finaliza en estas dos comisiones, sino que continuará en 2001 con la constitución de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú.

## **2.9. Uruguay.**

El contexto uruguayo cuenta con una experiencia altamente interesante en lo que a la gestión de las políticas de verdad se refiere. Tras la victoria de Julio María Sanguinetti en marzo de 1985, se crearían dos comisiones parlamentarias de investigación dentro de la estructura al efecto de la Cámara Baja, denominadas Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron y Comisión Investigadora sobre el Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, respectivamente.

A pesar de que pudiera parecer un loable intento por la recuperación de la verdad de lo ocurrido en dos escenarios distintos (las desapariciones forzadas por un lado y un hecho concreto por otro), los resultados por ellas alcanzados, al igual que ocurriera con las dos comisiones creadas en Perú, quedaron lejos de las expectativas puestas por la sociedad en ellas y no llegaron “a ninguna conclusión determinante”<sup>229</sup>.

La Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas contó con grandes límites impuestos por el Poder Legislativo debido al alcance tan escaso de su mandato, el cual impedía en gran medida un conocimiento global de lo ocurrido en

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, p.36.

<sup>227</sup> *Ibid.*, p.38.

<sup>228</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Neira Alegria y otros c. Perú*, Fondo, en *Serie C. núm.20*, sentencia de 19 de septiembre de 1996.

<sup>229</sup> MICHELINI, F., “El largo camino a la verdad”, *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, vol. 24, 1996, p. 160.

Uruguay durante la época dictatorial<sup>230</sup>. El informe final de la comisión, aunque demostró la desaparición de ciento sesenta y cuatro uruguayos durante ese período y la responsabilidad del Estado en todos ellos, falló a la hora de acreditar la existencia de un plan sistemático orquestado por el régimen dictatorial uruguayo<sup>231</sup>. Dicho informe, igualmente, no fue presentado oficialmente y hubo de ser modificado en su contenido debido a las presiones políticas recibidas<sup>232</sup>. En conclusión, según Alexandra Barahona de Brito, esta comisión no consiguió alcanzar una auténtica verdad nacional<sup>233</sup>.

Por su parte, la Comisión Investigadora sobre el Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini no arribó a resultado concluyente alguno<sup>234</sup>.

Sin embargo, los intentos por hallar la verdad en Uruguay dentro de este período no acabaron con el trabajo de estas dos comisiones<sup>235</sup>, sino que hemos de remitirnos a la Ley 15848 de 22 de diciembre de 1986. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado impedía el procesamiento por delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por cualquier funcionario militar o policial por motivos políticos o en el cumplimiento de sus funciones. Dentro de esta misma ley, el artículo 4 establecía lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.

El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos.

---

<sup>230</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, p.90.

<sup>231</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia... op.cit.*, pp. 396-397.

<sup>232</sup> *Ibid*; HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, p.91.

<sup>233</sup> BARAHONA DE BRITO, A., *Human Rights and Democratization in Latin America, Uruguay and Chile*, Nueva York, Oxford University Press, 1997, p.146.

<sup>234</sup> ERRANDONEA, J., “Justicia transicional en Uruguay”, *Revista del Instituto Interamericano de Derechos humanos*, vol. 47, 2008, p. 39.

<sup>235</sup> A las que debería añadir el trabajo llevado a cabo por el Servicio Paz y Justicia de Uruguay concretado en el informe “Uruguay Nunca Más”, que a pesar de contener un estudio mucho más completo sobre el régimen dictatorial que el contenido en el informe de la comisión parlamentaria de 1985, no constituye verdadera práctica estatal por ser originado por una organización no gubernamental.

El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada”.

Tras eliminar posibilidad alguna de que se emprenda una investigación judicial de los hechos, se abría la puerta con este artículo a que puedan producirse investigaciones fuera de este foro (e impele al Ejecutivo a que así sea). Esta apreciación posee especial relevancia pues pareciera instaurar un intercambio de verdad por justicia, al dejar abierta la posibilidad de que aunque los culpables no fueran procesados, el Poder Ejecutivo debiera liderar investigaciones orientadas al conocimiento de los hechos que produjeron la desaparición de personas hasta el 1 de marzo de 1985.

El Estado uruguayo incluía de este modo la incipiente necesidad de que las familias conocieran el paradero de sus seres queridos, pese a que se estaba impidiendo el procesamiento de los victimarios. El artículo 4, por tanto, sería acorde con lo ya expresado por el Comité DH en su comunicación 107/1981 del caso *Almeida de Quinteros c. Uruguay* de 21 de julio de 1983 donde se establecía que el Gobierno de Uruguay tenía la obligación de emprender una investigación sobre la desaparición de la víctima<sup>236</sup>.

## **2.10. Uganda (II).**

La segunda experiencia en comisiones de la verdad dada en Uganda también se desarrolló durante los años ochenta. El Presidente Yoweri Museveni, una vez derrocó a Milton Obote en enero de 1986, declaró que el respeto a los derechos humanos habría de ser una de sus preocupaciones centrales. En consecuencia creó, en mayo de 1986, la Comisión de Investigación sobre Violaciones de los Derechos Humanos. Esta comisión estudió la conculcación de derechos humanos que se habían dado en dicho país durante veinte años<sup>237</sup>. De esa manera se seguía la senda que venían marcando los Estados latinoamericanos que pretendían que la recuperación de la verdad fuera parte esencial de la gestión de su pasado represivo. Tal y como Joanna Quinn ha apuntado, la Comisión

---

<sup>236</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Almeida de Quinteros c. Uruguay*, Comunicación 107/1981, Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, 21 de julio de 1983, párr. 15.

<sup>237</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, pp.92-93; QUINN, J.R., “Constraints: The Un-Doing of the Ugandan Truth Commission”, *Human Rights Quarterly*, vol.26, 2004, p.406.

de Investigación sobre Violaciones de los Derechos Humanos “was Museveni's answer to dealing with the legacy of nearly twenty-five years of mass atrocity”<sup>238</sup>.

Sin embargo, aunque la intención del nuevo Presidente fue la de dar cobertura al derecho de la sociedad a conocer lo sucedido como se desprende de lo afianzado en su mandato<sup>239</sup> y que las actuaciones de sus comisionados habrían de ser las prescritas en el propio mandato “except in so far as the Commissioners consider it essential for ascertaining the truth”<sup>240</sup>, en la práctica no fue así. La escasez de fondos prestados por el Gobierno a la comisión provocó que tuviera que cesar en sus operaciones dos años después de haberlas comenzado; situación que volvió a repetirse en 1991<sup>241</sup>. En este mismo sentido, la amplitud de su mandato temporal (pues no poseía fecha límite para presentar su informe final) provocó una gran pérdida de interés por parte de la sociedad en el trabajo de la comisión con el transcurso del tiempo, a lo que se unió su falta de competencia para investigar los abusos que el Gobierno actual estaba cometiendo<sup>242</sup>.

La publicación del informe final, nueve años después de su constitución, contó con un escaso impacto entre el público pues, como ciertos autores han recogido, una gran parte de la sociedad no tuvo (ni ha tenido) acceso al mismo<sup>243</sup>. De hecho, es también impresión generalizada que la constitución de la comisión fue un intento por parte del Presidente Yoweri Museveni de legitimarse en el cargo<sup>244</sup>, más que de pretender respetar el derecho de las víctimas y sociedad a conocer lo ocurrido; idea que se desprende de los escasos medios económicos de los que fue dotada la comisión.

---

<sup>238</sup> QUINN, J.R., “Constraints: The Un-Doing...”, *op.cit.*, p.408.

<sup>239</sup> “To inquire into all aspects of violations of human rights, breaches of rule of law and excessive abuses of power, committed against persons in Uganda by the regimes in government”. Véase The Commission of Inquiry Act. Legal Notice núm. 5, 16 de mayo de 1986.

<sup>240</sup> *Ibid.*, p.257.

<sup>241</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, p.93.

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> *Ibid.*; QUINN, J.R., “Constraints: The Un-Doing...”, *op.cit.*, p.425.

<sup>244</sup> TRIAL, *Truth Commission in Uganda*. Disponible en: <http://www.trial-ch.org/en/resources/truth-commissions/africa/uganda.html> (Consultado el 6 de junio de 2016).

## 2.11. Zimbabwe, Filipinas y Zanzíbar.

Relacionado con lo recién explicado fue lo acaecido en las experiencias filipinas y zimbabuense. En efecto, en Zimbabwe bajo iniciativa del presidente Mugabe, fue constituida la llamada “Comisión Chihambakwe” con el fin de hallar la verdad sobre lo sucedido en la matanza producida en la región de Matabeleland en 1983, donde diez mil personas fueron asesinadas por miembros de la 5.<sup>a</sup> Brigada. No obstante, el informe final nunca llegó a hacerse público, pese a que este sí fue presentado al Presidente en 1984 y el Gobierno prometió que sería publicado<sup>245</sup>.

Aunque la investigación fue emprendida, la verdad siguió siendo desconocida, algo que también ocurrió en Filipinas donde, pese a que fue constituida una comisión de investigación en 1986 (*the Presidential Committee on Human Rights*) por la Presidenta, Corazón Aquino, no pudo terminar su trabajo tras un año de investigación debido a los continuos ataques que vinieron desde el Ejército<sup>246</sup>.

Por último, hemos de referirnos a una comisión que fue creada por el Gobierno de Zanzíbar para la investigación de un hecho ocurrido en 1988, en donde la policía abrió fuego contra una manifestación matando a dos personas. Debido a las amplias discrepancias entre la versión oficial de lo acontecido y los testimonios recogidos por las organizaciones de derechos humanos, el Gobierno se apresuró a crear una comisión que dilucidara lo ocurrido. Sin embargo, como ya ocurriera en otras experiencias, el informe no fue publicado<sup>247</sup>.

---

<sup>245</sup> EPPEL, S., NDLELA, D., RAFTOPOULOS, B., RUPIYA, M., *Developing a Transformation Agenda for Zimbabwe*, Ciudad del Cabo, Idasa's States in Transition Observatory- Zimbabwe Institute, 2009, p.16; HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, p.91.

<sup>246</sup> HAYNER, P., “Fifteen Truth Commissions – 1974 to 1994: A Comparative Study”, *Human Rights Quarterly*, vol. 16, 1994, núm.4, p.621. Véase igualmente sobre la labor de esta comisión el trabajo: JONES, S., “Will to Prosecute Past Offenders Lost in the Philippines”, *Human Rights Watch*, vol. 4, 1989.

<sup>247</sup> CARVER, R., “Called to Account...”, *op.cit.*, p. 395.

### 3. VALORACIÓN FINAL.

Como reflexión de conjunto tras lo analizado respecto a estas primeras experiencias de práctica estatal, puede concluirse que la aparición de estos mecanismos promovidos por los Estados, ante la falta de una norma jurídica concreta que regulara esta situación, se ajustaría a lo mantenido, por ejemplo, por Eulalia Petit: “no respond[ió] a la convicción de estar creando una norma internacional de validez general, sino que se acept[ó] la obligatoriedad jurídica de la solución adoptada por ser la respuesta óptima a la necesidad social que ha dado origen al comportamiento estatal”<sup>248</sup>.

Y es que con la creación de estas primeras comisiones, no puede observarse nada que permita sostener la existencia de elementos propios a la *opinio iuris sive necessitatis*. Dicho de otro modo más general, es un hecho que ninguno de los Estados pretendía nada parecido al nacimiento de una nueva norma consuetudinaria, sino que esta acción fue fruto de una acuciante exigencia social interna. Si bien, vale la pena apuntar que en lo fáctico del escenario internacional, precisamente este tipo de situaciones son los enclaves más apropiados para el potencial nacimiento de nuevas obligaciones internacionales, pues trayendo de nuevo aquí lo afirmado por González Campos, Sánchez Rodríguez y Sáenz de Santamaría: “en el proceso orgánico y dinámico de formación de la costumbre, el origen del comportamiento estatal aparece constituido por una exigencia social a la que trata de dar satisfacción esta norma consuetudinaria”<sup>249</sup>.

Acerca de los escenarios particulares que han sido examinados, destacamos la creación de la CONADEP, pues ella se convertirá en el primer prototipo de comisión extrajudicial, ejemplo para experiencias venideras (posiblemente hasta la sudafricana), por ser la primera que aglutinará las características que posteriormente se verán reflejadas en otras comisiones de su entorno. La investigación de las violaciones de derechos humanos desde el punto de vista de las víctimas será el eje diferenciador que la distinguirá de un mero órgano investigador.

---

<sup>248</sup> PETIT DE GABRIEL, E.W., “El Derecho Internacional Público: ¿necesidad o utopía?”, en RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J., PÉREZ VERA, E. (coords.), *Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. Tomo II*, Sevilla – Córdoba – Málaga, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2005, p.1045, nota 20.

<sup>249</sup> GONZALEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Curso de Derecho Internacional... op.cit.*, p. 197.



## **PARTE II**

### **EL DESARROLLO EN LA IMPLANTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD (1990 -2000)**





### **CAPÍTULO III**

## **LA DEFINICIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

### **1. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: LA DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE 1992 Y SU CONEXIÓN CON EL DERECHO A LA VERDAD.**

La AG inició esta nueva década con la misma preocupación sobre las desapariciones forzadas como terminó la anterior, donde ya comprobamos que incluyó referencias a derechos, por entonces, propios del derecho de los conflictos armados, dentro de sus requerimientos en protección de derechos humanos mediante su Resolución 33/173 de 1978.

Así, en su primera Resolución de este período sobre “la cuestión de las desapariciones forzadas” se mostraba:

*“Profundamente preocupada por la persistencia, en ciertos casos, de la práctica de desapariciones forzadas o involuntarias y por el hecho de que, en ciertos casos, las familias de las personas desaparecidas han sido objeto de intimidación y malos tratos”*<sup>250</sup>.

La insuficiencia durante esta época de contar únicamente con el GTDFI como único medio de prevención de las desapariciones forzadas y la necesidad de un mecanismo jurídico más específico de protección de las víctimas de esta práctica, propició la adopción en el seno de la AG de la Resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992 por la cual se aprobaba la Declaración sobre la protección de todas las personas

---

<sup>250</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias*, Resolución 45/165, Doc. A/RES/45/165, 18 de diciembre de 1990.

contra la desaparición forzosa (Declaración DF)<sup>251</sup>. Esta Resolución se adoptó catorce años después de la mencionada 13/173.

La adopción de la Declaración DF supuso un claro avance en el entendimiento por parte de la comunidad internacional de la amenaza que suponía el fenómeno de las desapariciones forzadas y la necesidad de combatirlas. La Declaración DF mostraba especial interés en la necesidad de que los Estados tomaran medidas adecuadas para la prevención de esta práctica, lo que incluía el deber de tipificar la desaparición forzada como delito dentro del ordenamiento interno<sup>252</sup>.

Uno de los debates que propició la Declaración DF fue su vinculación jurídica pues su adopción como Resolución de la AG dejaba dudas sobre la obligatoriedad de su contenido para los Estados. Sin embargo, factores tales como su adopción por unanimidad dentro del seno de la AG muestran el gran consenso por parte de la sociedad internacional acerca de la necesidad de erradicar esta práctica; señal esta de expresión de lo que parte de la doctrina ha considerado como la *opinio iuris* internacional<sup>253</sup>. Sin embargo, el análisis que a continuación planteamos no abordará este particular general, pues deberemos entrar en profundidad en el mismo cuando pasemos a examinar la Resolución 65/168 de la AG<sup>254</sup>.

No obstante, sí conviene apuntar que puede afirmarse el carácter consuetudinario de determinados artículos de la Declaración DF orientados (en lo que aquí interesa) a la prevención e investigación de los hechos de desaparición forzada. Y es que la prohibición de cometer desapariciones forzadas y la obligación de investigar las circunstancias de su comisión, junto con el paradero del desaparecido, se asumen, hoy día, como normas internacionales generales pues, aplicando la argumentación dada por María Fernanda Pérez Solla, ningún Estado en cuyo territorio se cometieran desapariciones forzadas podría defender su comisión alegando que es una práctica lícita o que pertenece al ámbito de sus asuntos internos<sup>255</sup>.

---

<sup>251</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 47/133*, 18 de diciembre de 1992.

<sup>252</sup> OTT, L., *Enforced Disappearance in International Law*, *op.cit.*, p.7.

<sup>253</sup> SCOVAZZI, T., y CITRONI, G., *The Struggle against Enforcement Disappearance and the 2007 United Nations Convention*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p.249; PEREZ SOLLA, M.F., *Enforced Disappearance in International Human Rights*, Carolina del Norte, McFarland & Company Publishers, 2006, p.10.

<sup>254</sup> Véase el epígrafe 6 del capítulo IX.

<sup>255</sup> PÉREZ SOLLA, M.F., *Enforced Disappearance in International Human Rights*, Carolina del Norte, McFarland & Company Publishers, 2006, p.21.

Entrando ya en el análisis del contenido propio de la Declaración DF, el derecho a la verdad no se incluye en ninguno de los veintinueve artículos que la componen. Ahora bien, al haber encontrado un estrecho vínculo entre la defensa de las víctimas de la desaparición forzada y el derecho a la verdad, apreciamos la existencia de varias normas que sí forman parte de sus atribuciones y contenido material<sup>256</sup>. Y es que la Declaración DF asumirá en su articulado varias disposiciones sobre desapariciones forzadas que habían aparecido ya en la práctica de varios órganos de protección de los derechos humanos y, como vimos, algunas sobre las que la propia AG había mostrado su preocupación en Resoluciones pasadas. Por ejemplo, como ya hemos anotado anteriormente en lo referido a la práctica del Comité DH y la Corte IDH hasta 1990, en casos de desapariciones forzadas la verdad se conectará con la averiguación del paradero de la persona desaparecida y con las circunstancias que rodearon a la desaparición. De esta forma ligaremos el derecho a la verdad con aquellas disposiciones que pretendan alcanzar este fin: el conocimiento de los hechos y la facilitación de la investigación de la misma.

Entre las disposiciones orientadas a iniciar una investigación encontramos el artículo 9.1. Este artículo consolida el derecho a un recurso efectivo de las víctimas de desapariciones forzadas<sup>257</sup> (derecho que ya encontrábamos recogido en el artículo 2.3 del PIDCP). A su vez, y como novedad y medio específico de iniciar una investigación sobre desapariciones forzadas, el artículo 13.1 dispone:

“Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna”.

---

<sup>256</sup> Igualmente en el epígrafe 5.1 del capítulo IX se analizará la interpretación del GTDFI sobre la verdad en la Declaración DF.

<sup>257</sup> “El derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o de individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva, es necesario para prevenir las desapariciones forzadas en toda circunstancia, incluidas las contempladas en el artículo 7 supra”.

En este precepto se afianza el deber de los Estados de realizar una investigación exhaustiva e imparcial ante cualquier indicio de que una persona haya podido ser víctima de desaparición forzada, independientemente de si esa información ha sido transmitida a través de una queja formal (la reconocida en el artículo 9). Este artículo recogería la segunda vía de inicio de búsqueda del paradero de la persona desaparecida tras el recurso efectivo: la investigación de oficio.

Por otro lado, encontramos también varios artículos dentro de la Declaración DF de marcado carácter preventivo. El artículo 9.2 reconoce el derecho de las autoridades a tener acceso “a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, así como a todo otro lugar donde haya motivos para creer que se pueden encontrar las personas desaparecidas”.

En un sentido similar a este, el artículo 10 recoge toda una serie de medidas encaminadas a la mejor localización de aquellas personas privadas de libertad con vistas a que se conozca su paradero y, por lo tanto, que no pasen a ser consideradas desaparecidas<sup>258</sup>.

Sin embargo, los avances más claros que se dieron con la aprobación de la Declaración DF en lo que concierne al derecho a la verdad los encontramos situados en el artículo 13. Las disposiciones que componen este artículo condensan dentro de la Declaración DF tanto derechos de las víctimas de desaparición forzada, como obligaciones estatales, entre ellas encontramos: la obligación de notificar los resultados de la investigación a las personas interesadas (también llamada “principio de máxima divulgación”<sup>259</sup>) en el artículo 13.4, y la obligación de seguir investigando hasta que no se haya averiguado la suerte de la persona desaparecida, en el artículo 13.6.

Con respecto al primero de ellos, hemos de recordar que la inclusión de esta obligación viene derivada de lo que se contempla en el propio preámbulo de la

---

<sup>258</sup> “1. Toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión. 2. Se deberá proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de esas personas y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los lugares transferencia, a los miembros de su familia, su abogado o cualquier otra persona que tenga interés legítimo en conocer esa información, salvo voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad. 3. En todo lugar de detención deberá haber un registro oficial actualizado de todas las personas privadas de libertad. Además, los Estados tomarán medidas para tener registros centralizados análogos. La información que figure en esos registros estará a disposición de las personas mencionadas en el párrafo precedente y de toda autoridad judicial u otra autoridad nacional competente e independiente y de cualquier otra autoridad competente facultada por la legislación nacional, o por cualquier instrumento jurídico internacional del que el Estado sea parte, que desee conocer el lugar donde se encuentra una persona detenida”.

<sup>259</sup> GALAÍN PALERMO, P., “Relaciones entre el ‘derecho a la verdad’ y el proceso penal...”, *op.cit.*, p. 260.

Declaración DF: “[r]ecordando su resolución 33/173<sup>260</sup>, (...) en la cual se declaró profundamente (...) conmovida por la angustia y el pesar causados por esas desapariciones”. Y también por la interpretación del artículo 7 del PIDCP del Comité DH respecto al sufrimiento de los familiares por el desconocimiento del paradero de sus seres queridos como un sentimiento similar a la tortura<sup>261</sup>.

La Declaración DF mediante este artículo resalta la importancia que tendrá el conocimiento de determinados extremos para las familias y obliga a los Estados a comunicar los resultados de la investigación a los interesados. De esta forma daba continuaba con la línea marcada por los anteriores organismos.

Así, en su artículo 13.4, la Declaración DF empezaba a conectar las obligaciones de los Estados para con los familiares de los desaparecidos con un derecho hasta ahora no tratado como es el derecho de información; derecho que con el tiempo empezará a contar con una vital importancia dentro del cumplimiento del derecho a la verdad.

Siguiendo el mismo orden de ideas que hemos planteado respecto a la conexión entre los derechos de los familiares de víctimas de desapariciones forzadas y la obligación de los Estados de brindar información, y de la lectura global de la Declaración DF, cabría preguntarse: ¿podríamos reconocer a toda la sociedad como *parte interesada* dentro de lo contemplado en el artículo 13.4, tal y como ya vimos que mantuvo la Comisión IDH?

El preámbulo de la Declaración DF define la desaparición forzada, en caso de producirse dentro de un plan sistemático, como un crimen de lesa humanidad<sup>262</sup>; situación que, por ende, afecta “a los valores más profundos de toda sociedad”. Si la comisión de desapariciones forzadas a gran escala afecta a la sociedad como un todo y los Estados deben brindar información sobre los resultados de la investigación a “la parte interesada”, la pregunta sería: ¿no estarían los Estados obligados a informar a toda la sociedad sobre lo sucedido en caso de una comisión sistemática de desapariciones forzadas?

Ahondando en esta línea, la sociedad se convertiría también en víctima y sería necesario reconocerle en determinados contextos (como, por ejemplo, el que ahora nos

---

<sup>260</sup> Puede verse un análisis de esta resolución en el epígrafe 1 del capítulo I.

<sup>261</sup> Recordemos el caso de COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Almeida Quinteros c. Uruguay*, Comunicación 107/1981, Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, 21 de julio de 1983, párr.14: “(...) the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts”. El resultado es nuestro.

<sup>262</sup> Concretamente el preámbulo establece: “Considerando que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad”.

ocupa: la desaparición sistemática de personas) derechos que el Estado ha de respetar. Este argumento adquirirá más importancia cuando nos encontremos ante una etapa de superación de violaciones masivas o sistemáticas de derechos donde no solo las víctimas individuales (incorporando dentro de esta categoría tanto los propios desaparecidos, como sus familiares), sino también la sociedad, se haya visto afectada al haberse conculcado “[sus] valores más profundos”. Por tanto, es posible mantener que el derecho a conocer la verdad de lo sucedido quedaría amparado tras una etapa de comisión sistemática de desapariciones forzadas por la publicación de los resultados de las investigaciones judiciales para que así toda la sociedad, como parte interesada, pudiera llegar a conocer lo sucedido, aunque solo la versión judicial de los hechos. Ello supondría una suerte de “verdad judicial colectiva” pero solo, según el alcance de esta Resolución, en referencia a las desapariciones forzadas.

Pasando ahora al contenido del artículo 13.6, este artículo se encuentra relacionado con todo lo anteriormente desarrollado respecto al artículo 13.4 y, como veremos también, lo está respecto al artículo 17.1<sup>263</sup>.

El artículo 13.6 recoge: “Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada”. Los motivos que amparan lo aquí recogido son los mismos que inspiraron al artículo 13.4: el sufrimiento de los familiares ante el desconocimiento del paradero del desaparecido. Y los que hicieron lo propio con el artículo 17.1: “Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. El carácter permanente de la desaparición forzada fue ya apuntado por el Comité DH en 1983<sup>264</sup> y por la Corte IDH en 1988 en el caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*<sup>265</sup>.

---

<sup>263</sup> “Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”.

<sup>264</sup> Véase epígrafe 3.2 del capítulo I. En especial el caso COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Almeida Quinteros c. Uruguay*, Comunicación 107/1981, Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, 21 de julio de 1983, párr.14: “(...) the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts”. El resaltado es nuestro.

<sup>265</sup> Para Reed Brody y Felipe González la inclusión de esta prerrogativa responde a lo contemplado en la comentada sentencia de la Corte IDH. BRODY, R., GONZALEZ, F., “Nunca Más: An Analysis of International Instruments on ‘Disappearances’”, *Human Rights Quarterly*, vol. 19, 1997, núm.2, p. 401. El párrafo 181 de esta sentencia establecía que: “El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida”.

Por último, la Declaración DF reconoció los hechos de desaparición forzada cometidos contra menores<sup>266</sup>. Su artículo 20.1 disponía que:

“Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres de víctimas de una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de la desaparición forzada y se esforzarán por buscar e identificar a esos niños para restituirlos a su familia de origen”.

Al contrario de lo que acontece con los demás casos de desapariciones forzadas, recordemos que en casos de menores sustraídos durante el cautiverio de la madre, no solo se está amparando el derecho del menor a no ser sometido a desaparición forzada, sino también el derecho a conocer su verdadera identidad (lo que correspondería con su verdad). Paralelamente se encuentra el derecho a la verdad de los padres que ampara que su paternidad sea oficialmente reconocida.

El artículo 20.2 se pronuncia en los siguientes términos:

“Habida cuenta de la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el párrafo precedente, deberá ser posible, en los Estados que reconocen el sistema de adopción, proceder al examen de la adopción de esos niños y, en particular, declarar la nulidad de toda adopción que tenga origen en una desaparición forzada. No obstante, tal adopción podrá mantener sus efectos si los parientes más próximos del niño dieran su consentimiento al examinarse la validez de dicha adopción”.

La Declaración DF identifica para todos los casos el interés superior del menor con la necesidad de que su verdadera identidad sea revelada; la adopción que se demuestre que ha sido fruto de una desaparición forzada, debe ser inmediatamente anulada. Sin embargo, ya pusimos de manifiesto en relación con la práctica de la Comisión IDH que este derecho a la identidad no es absoluto. En efecto, pueden darse ocasiones en las que el que fue sustraído como menor, no lo sea en el momento de

---

<sup>266</sup> Recordemos el informe anual de la Comisión IDH 1987-1988 en donde ponía de manifiesto las prácticas cometidas durante las Juntas Militares argentinas en torno a la aprehensión de menores nacidos durante el cautiverio de sus madres.



pretender comprobar su origen e identidad, por lo que este tendría el derecho a negarse a que su adopción fuera examinada mediante el ejercicio de su derecho a la intimidad.

Otro caso contradictorio sería en el que el todavía menor renuncia a su derecho a la verdad al no tener interés en conocer la identidad de su familia biológica. En estas circunstancias, si aplicásemos el artículo 20.2 de la Declaración DF, que reconoce que el interés del menor en cualquier caso es “la nulidad de toda adopción que tenga su origen en una desaparición forzada” (salvo consentimiento expreso de los familiares más próximos del niño), se estaría actuando en contra de los deseos del menor de edad.

La Declaración DF, como igualmente la Comisión IDH, no contempla que puedan darse casos en los que el que fue sustraído de su familia biológica no quiera saber cuál es su origen. Sin duda es indispensable el reconocimiento del derecho a la verdad tanto de los menores que han sido sustraídos, como de los padres que quieren que sea reconocida su paternidad. No obstante, el interés superior del menor no puede estar supeditado en una única dirección, pues la experiencia ha demostrado que, sobre todo en este tipo de casos, pueden darse varios escenarios.

Teniendo abiertas ambas opciones es, sin embargo, importante señalar que el reconocimiento del derecho del menor (o del posible ya adulto en el momento de que esta situación sea planteada) a *no saber* ha de constituir una decisión libre del propio sujeto. En efecto, la voluntad del menor no ha de estar viciada por presiones o injerencias por parte de sus familiares “no biológicos”, los cuales, a sabiendas de que se respetará su decisión, puedan interferir en ella.

En conclusión, la adopción de la Declaración DF supuso un gran progreso en lo referido a los derechos de las víctimas de violaciones de desapariciones forzadas. La Declaración DF, así mismo, recogía por primera vez una definición de desaparición forzada y, como apuntamos, condesaba en su texto varias reivindicaciones y obligaciones que venían desde largo tiempo siendo reclamadas tanto por las víctimas de desaparición forzada, como por organismos de protección de derechos humanos (como contemplamos en las primeras Resoluciones de la AG y los casos presentados ante el Comité DH durante los años ochenta). Pese a no contener al derecho a la verdad en su articulado, el hecho de que determinadas normas que forman parte nuclear de su significado material sí lo estén, constituirá un gran paso adelante para su continua consolidación y progresivo asentamiento y definición dentro del ordenamiento internacional. En efecto, disposiciones como: comunicar a las víctimas individuales de

desaparición forzada los resultados de la investigación e investigar el paradero de la persona desaparecida hasta que no se haya averiguado, se afianzaban ya como normas internacionales jurídicamente vinculantes. A su vez, tal y como hemos mantenido, en su artículo es posible sostener también la aparición de una más clara dimensión colectiva del derecho a la verdad.

## **2. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: EL “INFORME JOINET” Y EL DEBATE SOBRE LA VERDAD JUDICIAL-EXTRAJUDICIAL, E INDIVIDUAL-COLECTIVA**

Como es sabido, la ya mencionada Comisión DH fue establecida en 1946 como el órgano técnico político dentro de Naciones Unidas en el que tratar temas relacionados con los derechos humanos y las libertades fundamentales. La cuestión de la “verdad” apareció por primera vez en 1993 en uno de los órganos subsidiarios de la Comisión DH, la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección a las Minorías, en relación con un estudio encargado a Theo van Boven sobre la restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones de derechos humanos<sup>267</sup>. En este informe la verdad se encontraba recogida de forma aislada en las conclusiones del mismo como una medida orientada a la satisfacción y la no repetición como “[l]a verificación de los hechos y la revelación completa y pública de la verdad”<sup>268</sup>. Igualmente se apelaba a ella como un elemento importante en los procesos de transición, con en el contexto chileno como ejemplo<sup>269</sup>.

---

<sup>267</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993. Este estudio fue encargado mediante la resolución de la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección a las Minorías 1989/13 de 31 de agosto de 1989. A él también nos referiremos en el epígrafe sobre Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Véase epígrafe 1 del capítulo VI.

<sup>268</sup> Esta misma referencia será recogida dentro de la Resolución AG 60/147 sobre los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Véase epígrafe 1 del capítulo VI.

<sup>269</sup> Concretamente se afirmó que: “No debe olvidarse nunca que muchas víctimas y sus parientes y amigos insisten en que la primera exigencia de la justicia es que se ponga en claro la verdad”, *Ibid.*, párr.134; “Cabe observar que Chile ha hecho gran hincapié en la revelación de la verdad sobre las violaciones más graves de los derechos humanos que atañen al derecho a la vida”. *Ibid.*, párr.117.

Sin embargo, el reconocimiento y la práctica desarrollada por este órgano para con el derecho a la verdad vino de la mano de su “acción institucional de la lucha contra la impunidad”<sup>270</sup>. Un primer paso en esta dirección se dio gracias al experto independiente, Louis Joinet, mediante su informe sobre la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos (Informe Joinet<sup>271</sup>) publicado en 1997.

En efecto, este informe se presentó con base a lo expuesto en el informe final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de junio de 1993, también llamado “Declaración y Programa de Acción de Viena”<sup>272</sup>, que establecía:

“La Conferencia Mundial de Derechos Humanos ve con preocupación la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y apoya los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías por examinar todos los aspectos de la cuestión”<sup>273</sup>.

La preocupación por la impunidad que centró la conciencia de la comunidad internacional durante largo tiempo (desde los años setenta, según contempla el propio informe<sup>274</sup>) fue coronada con el Informe Joinet.

Esta serie de “principios rectores”<sup>275</sup> que componían el informe no pretendía obligar a los Estados a seguir las pautas en él establecidas para gestionar su período transicional, sino otorgar una serie de útiles herramientas para poder “encauzar las consecuencias de ciertas políticas de reconciliación a fin de que después de la primera

---

<sup>270</sup> BONET PÉREZ, J., ALIJA FERNANDEZ R. A., “Impunidad, derechos humanos y justicia transicional”, *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos*, núm. 53, 2009, p.47.

<sup>271</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997.

<sup>272</sup> CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS, *Declaración y Programa de Acción de Viena*, Doc. A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993. La aprobación de estos principios en 1997 estuvo precedida por un intenso debate en Europa sobre lo que se denominó “el debate de los historiadores” o “la polémica del revisionismo”, a raíz de los pronunciamientos de algunos autores sobre la existencia de campos de exterminio nazis y sobre la misma veracidad del holocausto. Véase, RINCÓN, T., *Verdad, justicia y reparación: la justicia de la justicia transicional*, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2010, p.54.

<sup>273</sup> *Ibid.*, párr.91.

<sup>274</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos... op.cit.*, párr.2.

<sup>275</sup> *Ibid.*, párr.49.

etapa, más bien de ‘conciliaciones’ (...) se puedan sentar los cimientos de una ‘reconciliación fuerte y duradera’”<sup>276</sup>.

Entre estos principios se encontraba el derecho a la verdad en sus dos vertientes, pues ya venían siendo definidas paulatinamente como hemos ido desarrollando por el Comité DH, la Corte IDH y la Comisión IDH, y a la fecha y como veremos, ya contábamos con varias experiencias nacionales de importante calado donde la búsqueda de la verdad constituía la parte central del mecanismo en cuestión<sup>277</sup>. Junto con el derecho a la verdad se apeló al derecho a la justicia, al derecho a obtener una reparación y a la no repetición. Estas cuatro disposiciones se configuraban, por tanto, como armas a disposición de los “escasos” Estados interesados en combatir la impunidad. No contaban, de esta manera, con vinculación jurídica<sup>278</sup>.

Derivado de esta interpretación y antes de entrar en el análisis pormenorizado del contenido de este informe, será interesante detenerse en la opinión que le merecían a Juan Méndez estos mismos “principios rectores”; opinión expresada en una de las primeras y más completas referencias doctrinales respecto al derecho a la verdad publicada en 1997, el mismo año que el Informe Joinet:

“(...) la acumulación de experiencias y la creciente atención que la opinión pública internacional presta a este tema, han generado dialécticamente la aparición de *principios emergentes en Derecho internacional*, uno de cuyos más claros preceptos es que, en presencia de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos más fundamentales (a la vida, a la integridad física de las personas, al debido proceso o a un juicio justo), el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar a quienes resulten responsables, y a revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo que pueda establecerse sobre los hechos y circunstancias de tales violaciones. (...). *Hablamos de ‘principio emergente’ porque reconocemos que*

---

<sup>276</sup> *Ibid.* A lo largo del análisis de la práctica de los Estados, se han identificados casos en los que los mandatos de las comisiones de la verdad han apelado a este informe como base jurídica que sostuviera el trabajo de la comisión, es decir, el derecho a la verdad. Véase en concreto las experiencias de Sierra Leona (epígrafe 1.1 del capítulo VIII) y Panamá (epígrafe 1.7 del capítulo VIII).

<sup>277</sup> Véase capítulo II.

<sup>278</sup> Los principios que en el informe se presentan estuvieron influenciados, según se contempla en el mismo, por, en primer lugar, los trabajos realizados por “los tribunales de opinión” ante la ausencia de una jurisdicción internacional. En segundo lugar, en los “Encuentros internacionales sobre la impunidad para los autores de violaciones graves de derechos humanos”, que tuvieron lugar en Ginebra en noviembre de 1992. En tercer lugar, el informe anteriormente comentado realizado por Theo van Boven. En cuarto y último lugar, el seminario internacional realizado en diciembre de 1996 en Santiago de Chile sobre “La impunidad y sus efectos sobre el proceso de democratización”.

*no se trata de una norma claramente descripta en un tratado internacional y cuya vigencia fuera, por ello, incuestionable. Se trata más bien de un modo llamativamente uniforme y pacífico de interpretar tales normas para situaciones que no fueron previstas en su momento. Esta es, por otra parte, la forma usual de generar Derecho internacional, especialmente en materia de derechos humanos, cuyo ‘desarrollo progresivo’ se cumple precisamente a través de opinio juris y jurisprudencia de órganos de protección que dan contenido enriquecedor a normas necesariamente escuetas. El hecho de que se trate de principios emergentes y no de normas convencionales claras no les resta eficacia como normas vinculantes. Por tratarse de la recta interpretación de normas cuya obligatoriedad no se discute, su eficacia corre la misma suerte que la de ellas”<sup>279</sup>.*

El término “principio emergente”, que aparece en el párrafo anterior, es sin duda uno de los más utilizados para referirse al derecho a la verdad (aunque hoy en día cada vez es menos frecuente). Bajo un prisma técnico-jurídico es un concepto difícil de clasificar y aún más de definir, al ser la naturaleza jurídica del derecho a la verdad, más aún la de su vertiente colectiva, como ya vimos, ciertamente controvertida durante esta época.

Este autor, en primer lugar, reconoce que no estamos hablando de una norma que esté amparada por un tratado internacional, sino del modo en el que ciertas normas, que sí lo estaban, hubieran de ser interpretadas en aras de formar un mecanismo necesario para impedir la impunidad. En efecto, esta manera de entender ciertas disposiciones contenidas en determinados tratados de defensa de derechos humanos sería el medio mediante el cual órganos tales como el Comité DH, la Corte IDH o la Comisión IDH reconocerían la existencia del derecho a la verdad en base a esos mismos tratados. Esta situación aparece con el surgimiento de nuevas circunstancias (como la proliferación de las desapariciones forzadas) que, al momento de adopción de, por ejemplo, el PIDCP o la CADH, no fueron contempladas. La aplicación, por ende, de lo que se refiere como estos “principios emergentes”, que de otro modo podría entenderse también como la interpretación cualificada y concurrente de las normas convencionales de referencia, sería la única manera de que esos tratados pudieran ser aplicados de forma eficaz y correcta en la lucha contra la impunidad.

---

<sup>279</sup> MÉNDEZ, J., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p. 517. Sin resaltado en el original.

Como se desprende de lo anterior, se atisba una diferencia en el modo mediante el cual Louis Joinet y Juan Méndez entienden que estos “principios” hayan de ser aplicados. Para el primero, ya hemos visto que estos no cuentan con vinculación jurídica alguna, sino que constituyen meras herramientas optativas a disposición de los Estados. En contraposición, para el segundo, el hecho de que estemos hablando (según la terminología por él utilizada) de “principios emergentes” no le resta obligatoriedad jurídica debido a que su aplicación corresponde a la correcta interpretación de determinadas normas amparadas por un tratado internacional.

En nuestra opinión, y en lo que a nuestros intereses respecta, si hablamos de la vinculación que los Estados en este momento tendrían para con el derecho a la verdad colectivo, reconocemos que, pese a que efectivamente es una norma que complementa eficazmente distintas disposiciones más amplias (como la obligación de los Estados de investigar), en estos momentos no ostentaría el estatus, no ya de “derecho”, como sostiene Juan Méndez, si no de norma que vinculase jurídicamente a los Estados, desde luego en el Derecho internacional general. Y es que será necesario un desarrollo más amplio dentro de la práctica estatal para que dicha norma pudiera considerarse como de derecho consuetudinario.

Aclarado lo anterior, la importancia con la que cuenta en determinados aspectos la lucha contra la impunidad, hace que debamos detenernos a examinar el contenido que se le asigna en el propio informe. En el mismo se describían cuatro derechos esenciales a respetar a cada víctima de estos crímenes: derecho a saber, derecho a la justicia, derecho a la reparación y garantías de no repetición.

El derecho a la verdad no aparece como tal, sino que lo hace en su Principio 1 como parte integrante de la vertiente colectiva del derecho a saber:

“Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan las violaciones”<sup>280</sup>.

---

<sup>280</sup> Para Juan Méndez el contenido de este derecho colectivo es: “(...) establecer la verdad sobre la estructura represiva que condujo a la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo las líneas de mando, las órdenes impartidas, los establecimientos que se hayan utilizado y los mecanismos utilizados

Sin embargo, también aparecía recogido dentro de la vertiente individual del derecho al saber en su Principio 3:

“Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”<sup>281</sup>.

Comprobamos cómo la vertiente colectiva aparece de nuevo como parte indispensable del derecho a la verdad. Y lo hace, no ya solo circunscrita a un determinado sistema regional (recordemos la primera mención a esta vertiente por parte de la Comisión IDH), ni respecto a un contexto determinado (desapariciones forzadas, como se recogía dentro de la Declaración DF), ni referido al contenido de un tratado internacional concreto (la interpretación dada por el Comité DH de ciertos artículos del PIDCP<sup>282</sup>), sino que apela a la calidad colectiva del derecho a la verdad como algo propio e intrínseco del mismo y aplicable en cualquier situación y contexto. En efecto, la separación realizada por Louis Joinet posee varias peculiaridades que nos acercarán en gran medida al contenido y alcance que puede adscribirse a cada una de estas vertientes.

La verdad individual, la que compete a víctimas o familiares, es la que Louis Joinet denomina “derecho a la verdad” y se identificará con lo que denominamos “verdad individual”, a la cual tienen derecho los familiares y que relacionaremos, a su vez, con la “verdad judicial”: la que emana de una sentencia judicial<sup>283</sup> y que ya venía

---

concientemente para asegurar la impunidad y el secreto de estas operaciones”. MÉNDEZ, J., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, pp.523-524.

<sup>281</sup> Según Juan Méndez el derecho a la verdad individual comprendería una verdad “circunstanciada” a cada víctima por ser “la obligación que el Estado y la sociedad debe a cada víctima”. En contraposición sobre lo que pudiera creerse, esta verdad no solo podría ser hallada en sede judicial, sino que como bien apunta el propio autor, la comisión de la verdad creada en Chile en los años noventa<sup>281</sup> tenía como mandato la individualización de cada uno de los casos investigados debido a la vigencia de la ley de amnistía dictada por Pinochet. De esta forma, con el mandato de la comisión chilena, pese a que el Estado estaba haciendo dejación de funciones respecto a sus obligaciones para con el derecho a la justicia, sí estaba respetando el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad. *Ibid.*, p.524.

<sup>282</sup> Para más datos, véase el apartado siguiente de este capítulo.

<sup>283</sup> Para un análisis del derecho a la verdad dentro de los procesos judiciales y más aún dentro del Derecho Internacional Penal y de la práctica de la Corte Penal Internacional, véase: MCGONIGLE LEYH, B., “The right to the truth in international criminal proceedings: an indeterminate concept from human rights

apareciendo dentro de la práctica del Comité DH y la Corte IDH. Esta vertiente, ya apuntamos *supra*, que se encuentra recogida dentro de las obligaciones generales y convencionales de los Estados a la hora de emprender una investigación judicial con las debidas garantías sobre una violación concreta de los derechos humanos<sup>284</sup>.

Por otro lado, la verdad a la que tiene la sociedad derecho, designada por Louis Joinet como derecho a saber *estricto sensu*, será algo muy diferente a lo que ya vimos que en el DIH se refería bajo ese concepto, en tanto que se identificará con lo que llamaremos “verdad extrajudicial” (aquí nombrada histórica<sup>285</sup>), a la que se accederá, según este informe, a través de vías no judiciales como las comisiones extrajudiciales de investigación y a la que también ayudará la preservación de archivos relacionados con las violaciones de derechos humanos. La simple publicación de las sentencias judiciales (a la que hemos denominado “verdad judicial colectiva” en el apartado anterior), opción que también reconocerá el Comité DH según el artículo 14 del PIDCP (así como otros órganos posteriormente) como se verá *infra*, producirá que la sociedad conozca únicamente una parte de la verdad (la judicial), sin embargo, ello no podrá ser visto en ningún caso como un reconocimiento integral del derecho a la verdad colectivo, sino solamente como un primer paso en esa dirección.

Como se irá poniendo de manifiesto a lo largo de todo el estudio, pero incidiendo en ello ya aquí, será imprescindible una adecuada complementación (y nunca sustitución) de ambas vertientes para poder alcanzar un entendimiento total y global sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado; la falta de alguna de ellas provocará que la víctima no sea reparada, ya que cada verdad está dirigida al conocimiento de una parte de la historia.

En primer lugar, en caso de que solo se conozca la verdad extrajudicial, aparte de comprometer la responsabilidad del Estado respecto a sus obligaciones internacionales en derecho a la justicia, también podría ocasionar que algunos elementos, tales como el

---

law”, en HAECK, Y., MCGONIGLE LEYH, B., BURBANO-HERRERA, C., CONTRERAS, D., *The Realization of Human Rights: When Theory Meets Practice. Studies in Honour of Leo Zwaak*, Utrecht, Intersentia, 2014, pp. 293-312. Igualmente: WEIGEND, T., “Is the criminal process about the truth?: A German perspective”, *Harvard Journal of Law and Public Policy*, vol. 26, 2003, pp. 157 – 173.

<sup>284</sup> Véase epígrafe 1 del capítulo II.

<sup>285</sup> Como ya se adelantó en el informe de 1993, el derecho a la verdad colectivo, o el derecho a saber *estricto sensu*, es entendido por parte de la Comisión DH como una medida orientada a la no repetición de las violaciones de derechos humanos, lo que para el Estado se concretará en un “deber de recordar”. En efecto, mediante el efectivo conocimiento de los acontecimientos pasados, la sociedad se blindará contra posibles tergiversaciones de la historia, o incluso contra la misma negación de esta. Tal y como se establece en el Principio 2: “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse”.



conocimiento de la identidad de los perpetradores, no lleguen a conocerse. Esta situación vendría dada debido a que, por ejemplo, el mandato de estos organismos extrajudiciales estuviera destinado únicamente a la investigación de algún hecho específico y se obviara dar a conocer los nombres de los perpetradores. También, poque aún haciéndolo, pueda pensarse en tener que descartar tal identificación, si no se cumplen a la hora de realizar su investigación con los estándares mínimos del derecho de defensa a la hora de afirmar sus conclusiones<sup>286</sup>. Si bien, dentro de la doctrina hay importantes opiniones que sostienen que el hecho de que los nombres de los victimarios aparezcan en el informe final de una comisión extrajudicial no debe entenderse como una vulneración de las garantías judiciales<sup>287</sup>. Juan Méndez sostiene su posición en que:

“(…) todo el tiempo damos nombres de personas en relación con actos antes de que éstos estén probados. La prensa cita nombres con frecuencia. La policía difunde nombres constantemente. Si se presume que alguien ha robado un coche, su nombre aparece impreso. Es una imputación, no un pronunciamiento de culpabilidad”<sup>288</sup>.

A nuestro entender, hay que compartir la reflexión dada por Juan Méndez, debido a que no podríamos entender un conocimiento de la verdad completa si esta no contuviera los nombres de los victimarios. Dicho de otro modo, la inclusión de los nombres de los victimarios en el informe final de una comisión extrajudicial es vital en cuanto a que en numerosos contextos, en los cuales la celebración de procesos no es posible, el informe final se erige como la única verdad conocida por las víctimas y la sociedad. Incluso en aquellos supuestos en que los responsables hayan eludido ser juzgados por los tribunales, el conocimiento público de su identidad cumpliría una función de “castigo” al permitir que al menos sean “juzgados” por las víctimas.

---

<sup>286</sup> Esta vertiente ha sido defendida por José Zalaquett que ha expresado: “aunque las conclusiones de una comisión de la verdad no tienen el efecto de aplicar sanciones legales, el hecho de mencionar por nombre, en un informe oficial y ampliamente difundido, a las personas consideradas culpables, sin que ellas hayan presentado su descargo, es el equivalente moral de una condena sin el debido proceso”. ZALAUQUETT, J., “Procesos de transición a la democracia y políticas de derechos humanos en América Latina” en GONZÁLEZ VOLIO, L. (ed.), *Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Ensayos en honor al profesor Fernando Volio Jiménez*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998, p.131.

<sup>287</sup> Puede verse la experiencia vivida en El Salvador. Véase epígrafe 1.4 del capítulo V.

<sup>288</sup> Citado en: HAYNER P., *Verdades innombrables... op.cit.*, p.178. Una posición contraria a la de este autor es la sostenida por Cristian Tomuschat, Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento Histórica de Guatemala. Puede consultarse en epígrafe 1.9 del capítulo V.

Ahora bien, lo anterior no ha de empecer para afirmar también que es necesaria la mejor adaptación posible de las garantías propias del proceso al mecanismo extrajudicial de investigación. En este sentido, Priscilla Hayner, experta contrastada en el funcionamiento de las comisiones de la verdad, ha establecido que a pesar de que cada comisión de la verdad deba adaptar su funcionamiento a la realidad que le toca investigar<sup>289</sup>, hay consenso dentro de la doctrina en la necesidad de que se respeten tres principios generales a la hora de que los nombres de los victimarios aparezcan en el informe final. Por un lado, será necesario que aquél que vaya a ser acusado por la comisión haya de ser previamente advertido de las acusaciones que se le imputan. Por otro, ha de brindársele la oportunidad de defenderse, bien mediante la presentación de alguna prueba de descargo, bien mediante su comparecencia ante la comisión (no se incluiría en estas posibilidades el careo con los testigos si hubiera posibilidad de que se les pusiera en peligro). Y, por último, en el informe final se expondrán las conclusiones a las que ha llegado la comisión sobre las responsabilidades individuales pertinentes, las cuales no han de por qué coincidir con la responsabilidad penal, siendo esta una competencia exclusiva de los tribunales<sup>290</sup>.

En segundo lugar, y derivado de lo explicado anteriormente a colación de la publicación de las sentencias judiciales, en caso de que las víctimas y la sociedad solo pudieran acceder a la verdad judicial (denominada en algunos foros como “verdad histórica limitada normativamente”<sup>291</sup>), dejarían de conocer hechos de suma importancia que, sin embargo, o no están judicializados y por tanto no serán susceptibles de ser llevados a juicio, o lo están pero serán tratados desde un prisma judicial. Estamos hablando de hechos tales como el contexto social en el que fueron cometidos, las motivaciones políticas por las que se realizaron, el entramado

---

<sup>289</sup> Según Douglas Cassel, en una declaración recogida por Priscilla Hayner, el sistema elegido por la comisión de la verdad de El Salvador para dar los nombres de los victimarios se basaba en “la realidad salvadoreña, en la que los testigos no tienen garantía de que no van a sufrir represalias y no se consideran a salvo. Teniendo en cuenta esta realidad, la *única* manera que tenía la comisión de llegar a la verdad era negar esas salvaguardas procesales habituales”, HAYNER P., *Verdades innombrables...* *op.cit.*, p.180. Para conocer distintas experiencias sobre la manera en que las comisiones de la verdad han abordado este asunto, véase pp.155-178.

<sup>290</sup> *Ibid.*, p.181.

<sup>291</sup> GALAIN PALERMO, P., “Relaciones entre el ‘derecho a la verdad’ y el proceso penal...”, *op.cit.*, p.264.

administrativo del régimen represor que las llevó a cabo o el sufrimiento al que fueron sometidas las víctimas<sup>292</sup>.

La sola utilización del procedimiento penal para llegar a conocer la verdad de los hechos supone un inconveniente a la hora de querer garantizar plenamente el derecho a la verdad de la sociedad. Y es que la verdad judicial, aunque necesaria e irremplazable, cuenta con numerosas carencias que la hacen incompleta.

Entre los límites del proceso penal para poder llegar a amparar el derecho a la verdad colectivo en su integridad y no solo la “verdad judicial colectiva”, María Saffon y Rodrigo Uprimny han hablado, por ejemplo, de su carácter fragmentario, al ser una verdad construida mediante la conjunción de distintos casos particulares, en donde se resolverá la responsabilidad individual caso por caso<sup>293</sup>.

Un segundo límite expuesto por estos autores responde a una cuestión anteriormente apuntada como es el carácter “unilateral” de la verdad judicial. Esta, al estar referida principalmente “a los elementos, significados y efectos propiamente

---

<sup>292</sup> Es interesante traer en relación con este extremo, y aunque desde una perspectiva algo alejada del derecho pero no ajena, lo recogido por Hannah Arendt sobre el proceso que se dio en Israel orientado a juzgar a Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS encargado de la gestión de las deportaciones de seres humanos a los distintos campos de concentración del Reich. Junto con las numerosas carencias (la mayoría de ellas de índole procesal) que la autora recoge en su libro, a nuestros intereses apuntaremos la siguiente: “El objeto del juicio fue la actuación de Eichmann, no los sufrimientos de los judíos, no el pueblo alemán, ni tampoco el género humano, ni siquiera el antisemitismo o el racismo”. A pesar de esta advertencia preliminar, Hannah Arendt pone de relieve a lo largo de su trabajo numerosos detalles en los cuales, debido a la gravedad e importante peso histórico de varias declaraciones testificales, tanto el fiscal como los jueces llevaron el proceso lejos de lo que debería de haber sido su único fin: determinar la responsabilidad penal del acusado. La autora igualmente recoge en comentario a la sentencia del tribunal de Israel que: “La sentencia dictada en el caso de Eichmann (...) no pudo ser más clara y más ajustada a la realidad: era preciso resistir todo intento de ampliar el alcance del juicio, ya que el tribunal no podía ‘permitir ser arrastrado a terrenos que caen fuera de la esfera que le es propia... El procedimiento judicial está dotado de medios específicamente suyos, establecidos por la ley, e invariables sea cual fuere el objeto del juicio’”. ARENDT, H., *Eichmann en Jerusalén*, Barcelona, Debolsillo, 9ª ed., 2013, p.17 y p.370. Para Martha Minow la constitución de tribunales jurisdiccionales *ad hoc* para el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos y su conocimiento de cara al público, trae consigo tres críticas principales: “The first is retroactivity. Individual defendants in these trials faced charges under norms that had not been previously, in violation of the rule of law’s commitment to apply clear, preexisting norms. The second is politicization. Rather than standing as independent institutions removed from political pressures and calculations, the tribunal’s very construction and deployment allegedly enacted politics, undermining the ideals of impartiality and universal norms. The final aspect can be named selectivity. Only small portions of those who could be charged with violations became the target of prosecutions for actions (...). As a result, the actual set of individuals who face prosecution is likely to reflect factors far removed from considered judgments about who deserves prosecution and punishment”, MINOW, M., *Between Vengeance and forgiveness*, Boston, Bacon Press Books, 1998, pp.30-31. Por su parte, para Tatiana Rincón, la verdad que intenta sustentar Louis Joinet es, citando a Michael Ignatieff, una verdad factual (relato de lo que ocurrió) y moral (el porqué ocurrió, configurado así como un juicio crítico sobre los hechos). La verdad histórica y la memoria colectiva que la sociedad verdaderamente logre alcanzar dependerán del modo en que esta sea preservada y respetada; protegida, así, de tergiversaciones y negacionismos. RINCÓN, T., *Verdad, justicia y reparación... op.cit.*, p.55.

<sup>293</sup> UPRIMNY YEPES, R., SAFFON SANÍN, M. P., “Derecho a la verdad: alcance y límites de la verdad judicial”, en UPRIMNY YEPES, R., (dir.), *Justicia transicional sin transición. Verdad, justicia y reparación para Colombia*, Bogotá, Ediciones Antropos, 2006, p.155.

jurídicos de los hechos y conflictos llevados ante los jueces”<sup>294</sup>, cualquier fenómeno social ocurrido durante el conflicto objeto del proceso se vería reducido a una visión estrictamente jurídica. Las víctimas, por tanto, no tendrán una interpretación o visión de lo acontecido desde un cariz distinto<sup>295</sup>. Como consecuencia a su vez de las características propias del proceso judicial, y de la falta de tratamiento conjunto de los casos, la víctima únicamente conocería las circunstancias por las que su caso concreto fue cometido, sin conocer la relación que pudiera haber con otros análogos<sup>296</sup>.

Por último, otro tipo de limitaciones se dan con la participación de las víctimas en el procedimiento, “pues estas solo podrían formar parte de ella en la medida en que estuvieran directamente vinculadas a cada proceso judicial, por ejemplo en calidad de parte civil”<sup>297</sup>.

Habiendo sentado todo lo anterior como base necesaria para entender la complementariedad entre las dos vertientes del derecho a la verdad, analizaremos a continuación las medidas propuestas en el Informe Joinet para concretar el derecho a la

---

<sup>294</sup> *Ibid.*

<sup>295</sup> Otros autores han hablado sobre la escasa participación de las víctimas dentro del proceso judicial pues según ha estipulado María Teresa Uribe de Hincapié: “En estos escenarios judiciales se contaría en principio con tres grandes protagonistas individuales: el juez, investido de autoridad como operador de la justicia y poseedor de habilidades y destrezas en el manejo de los códigos y las jurisprudencias; el perpetrador o victimario, acusado de un crimen atroz, y la víctima o la persona afectada, que demanda ser reparada. Pero rápidamente la víctima sale de la escena y el juicio se centra sobre el victimario que pasa a ser el protagonista principal”. URIBE DE HINCAPIÉ, M.T., “Esclarecimiento histórico y verdad jurídica: notas introductorias sobre los usos de la verdad”, en DE GAMBOA TAPIAS, C. (ed.), *Justicia transicional: teoría y praxis*, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2006, p.333. Esto es debido a que, como hemos anotado, el proceso penal versa sobre la responsabilidad penal de una persona determinada sobre un hecho concreto. La participación de la víctima se basará en dar su testimonio en exclusiva sobre el hecho el cual se está enjuiciando.

<sup>296</sup> UPRIMNY YEPES, R., SAFFON SANÍN, M. P., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, párr.155-156. Véase igualmente, MINOW, M., *Between Vengeance...* *op.cit.*, pp.58-59. En este mismo sentido, María Teresa Uribe de Hincapié estableció acerca de la mayor amplitud de la verdad extrajudicial: “Para los historiadores son de particular importancia los ‘marcos de la memoria’, los ejes culturales en los que se inscribe un hecho particular, así como la interpretación que el testigo haga de ese hecho, en consonancia con esos marcos, con independencia de la veracidad o falsedad sobre lo que atestigua pues para él resulta de mucho valor eso que se ha llamado memorias rivales, polifonías, pluralidad de voces en torno a la interpretación de lo acontecido. El sujeto del esclarecimiento histórico no es precisamente el individuo que después de un juicio resulta culpable o inocente, amnistiado o castigado, los individuos importan para la historia, pero el primer plano de este escenario está ocupado por colectivos, por grupos, instituciones o conjuntos de actores sociales y lo que está en el horizonte, es el establecimiento de responsabilidades históricas y políticas, no condenas o amnistías porque esto escapa a sus posibilidades y al sentido se su acción”. URIBE DE HINCAPIÉ, M.T., “Esclarecimiento histórico y verdad jurídica...”, *op.cit.*, p. 335.

<sup>297</sup> UPRIMNY YEPES, R., SAFFON SANÍN, M. P., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, párr.156. Otros autores también han apuntado ese fenómeno como una de las debilidades del proceso penal para averiguar la verdad colectiva; entre ellos, María Teresa Uribe de Hincapié: “En estos escenarios judiciales se contaría en principio con tres grandes protagonistas individuales: el juez, investido de autoridad como operador de la justicia y poseedor de habilidades y destrezas en el manejo de los códigos y las jurisprudencias; el perpetrador o victimario, acusado de un crimen atroz, y la víctima o la persona afectada, que demanda ser reparada. Pero rápidamente la víctima sale de la escena y el juicio se centra sobre el victimario que pasa a ser el protagonista principal”. URIBE DE HINCAPIÉ, M.T., “Esclarecimiento histórico y verdad jurídica...”, *op.cit.*, p.333.

verdad colectivo; pues entendemos, como ya hemos expuesto, que la vía principal para hallar la verdad individual será el proceso penal.

La primera de ellas será la constitución de una comisión extrajudicial de investigación, siguiendo lo mismo que dispuso la Comisión IDH en 1986 y el camino que muchos Estados decidieron emprender tras haber sufrido una situación de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos como medio para que la sociedad conociera lo sucedido. El motivo de la necesidad de su creación reside en la imposibilidad de que los tribunales de justicia puedan procesar a todos y cada uno de los culpables de las violaciones de derechos humanos<sup>298</sup>; razonamiento que habría de ser completado con los motivos a los que hemos aludido anteriormente acerca de que la verdad extrajudicial haya de ser hallada.

La necesidad de que se conozca la verdad es, por tanto, de un valor tal que se pretende la creación de instituciones orientadas únicamente a este fin, ante la imposibilidad en numerosas ocasiones de que los tribunales de justicia puedan realizar investigaciones en todos los casos. El fin último de estas comisiones es doble:

“(...) desmontar los mecanismos que desembocaron en la práctica cuasi administrativa de actos aberrantes, para impedir que vuelvan a producirse; por otra parte, conservar las pruebas para la justicia, pero también con miras a determinar que lo que los opresores calificaban de mentira, a fin de desacreditar a los defensores de los derechos humanos, se quedaba muy a menudo corto en relación con la verdad; así se podrá restituir su dignidad a esos defensores”<sup>299</sup>.

Si bien en numerosas ocasiones los tribunales, como se acaba de comentar, no cuentan con la estructura necesaria para poder investigar todos y cada uno de los crímenes perpetrados, los resultados de la investigación realizada por esta comisión extrajudicial sí podrán brindar pruebas que puedan incoar un posterior proceso penal; muestra clara de la complementariedad a la que aludíamos previamente. No obstante, debemos puntualizar que el informe recordaba que los resultados de la investigación de la comisión no sustituirán en ningún caso la obligación de juzgar. Debido a ello, se desarrollaron una serie de principios de recomendado cumplimiento para la constitución

---

<sup>298</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos... op.cit.*, párr.18.

<sup>299</sup> *Ibid.*, párr.19.

y funcionamiento de la comisión. A saber: garantías de independencia e imparcialidad<sup>300</sup>, garantías relativas a los testigos y a las víctimas<sup>301</sup>, las ya comentadas garantías relativas a las personas acusadas y dar publicidad del informe<sup>302</sup>.

Como segunda medida orientada a que la sociedad conozca la verdad sobre los acontecimientos pasados, se encuentra la preservación de los archivos<sup>303</sup>. Esta medida, sin embargo, no es simplemente una medida de difusión, sino que también puede ser entendida como una medida de protección de la historia, de resguardarla para que la sociedad tenga acceso a ella. En efecto, la obligación del Estado para con los archivos históricos será doble: tanto su protección como el libre acceso a los mismos. El informe contempla:

“Las disposiciones adoptadas a esos efectos abarcarán los siguientes ámbitos:

- a) medidas de protección y de represión para impedir la sustracción, la destrucción y la desviación;
- b) creación de un inventario de los archivos disponibles, en el que figuren los archivos en poder de terceros países, para, con su cooperación, poder comunicarlos y, en caso necesario, restituirlos;
- c) adaptación a la nueva situación de la reglamentación en materia de acceso y consulta de esos archivos, ofreciendo, en particular, a cualquier persona acusada

---

<sup>300</sup> El informe disponía que: “Las comisiones extrajudiciales de investigación deberán crearse por ley, bien por un acto reglamentario o por un instrumento convencional, en el contexto de un proceso de restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas. Sus miembros serán inamovibles durante la duración de su mandato, y gozarán de inmunidad. Si es necesario, una comisión deberá tener la posibilidad de solicitar la asistencia de la policía, hacer que se proceda a comparecencias y visitar los lugares de interés para las investigaciones. Otro factor importante de independencia estriba en la pluralidad de opiniones de los miembros de una comisión. Por último, habrá que establecer con toda claridad en sus estatutos que las comisiones no pretenden suplantar a la justicia, sino contribuir, como máximo, a salvaguardar la memoria y las pruebas. Su credibilidad estará igualmente garantizada por recursos financieros y humanos suficientes”. *Ibid.*, párr.21.

<sup>301</sup> “El testimonio de las víctimas y de los testigos que declaren a su favor solo podrá solicitarse con carácter voluntario. A los efectos de protección, cabrá admitir el anonimato únicamente en las condiciones siguientes: que se trate de una medida excepcional (salvo en caso de abusos sexuales); que el presidente y un miembro de la comisión estén habilitados para verificar la legitimidad de la solicitud de anonimato y, confidencialmente, la identidad del testigo; que en el informe se mencione el contenido del testimonio. Los testigos y las víctimas se beneficiarán de una asistencia psicológica y social, en el curso de su declaración, en especial, cuando hayan sido víctimas de torturas y abusos sexuales. Por último, habrá que indemnizarlos por los gastos que su testimonio les haya ocasionado”. *Ibid.*, párr.22.

<sup>302</sup> “Aunque puede estar justificada la confidencialidad de los trabajos, para evitar, por ejemplo, presiones a los testigos o para garantizar su seguridad, el informe, en cambio, deberá hacerse público y ser difundido lo más ampliamente posible. Los miembros de la comisión deberán gozar de inmunidad frente a toda querrela por difamación”. *Ibid.*, párr.24.

<sup>303</sup> Un análisis en profundidad sobre esta cuestión se hará en epígrafe 2.3 del capítulo VI.

en ellos la posibilidad de incorporar documentos a su expediente en ejercicio de su derecho de réplica”<sup>304</sup>.

La utilidad tanto de las comisiones extrajudiciales de investigación, como de la preservación de los archivos históricos, da una muestra de la existencia de una verdad que va más allá de la contenida en las resoluciones judiciales. Sin embargo, tal y como han afirmado acertadamente María Paula Saffon y Rodrigo Uprimny, la complementariedad “no significa que dichos mecanismos de búsqueda de la verdad puedan ser usados insistentemente, pues algunos son útiles para determinados efectos, pero desafortunados para otros propósitos”<sup>305</sup>. El éxito de una correcta articulación de ambos mecanismos residirá en un profundo análisis del contexto en el que nos encontremos, así como en la atención prestada a las demandas inmediatas de la sociedad.

En conclusión, el Informe Joinet constituye el primer reconocimiento dentro del sistema universal de protección de la existencia de, al menos, un “principio rector” que recogía el derecho de la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido. La importancia del contenido de este informe se pondrá de manifiesto en la práctica desarrollada por muchos órganos, entre ellos por la Comisión y Consejo DH en el inicio del nuevo milenio con la aprobación de toda una serie de Resoluciones e informes cuya base estaba sustentada por los Principios 1 y 3 del Informe Joinet.

---

<sup>304</sup> *Ibid.*, párr.25.

<sup>305</sup> UPRINMY, R., SAFFON, M.P., “Verdad judicial y verdades extrajudiciales...”, *op.cit.*, p.154.

### 3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS.

Ya vimos que durante el período histórico anterior el Comité DH, atendiendo al sufrimiento que producía el desconocimiento del paradero del desaparecido (violación del artículo 7), dictaminó la existencia de la obligación de los Estados de investigar las circunstancias en las que ciertos hechos fueron cometidos. Dicha investigación estaba conectada con el artículo 2.3 del Pacto, pues con ello la víctima interpela al Estado a emprenderla.

A partir de la década de los noventa las obligaciones de los Estados de investigar aquellos actos violatorios de derechos humanos se acentúan como muestran varias comunicaciones individuales llegadas ante el Comité DH<sup>306</sup>. Igualmente, varias son las OF a países en las cuales se apunta a la falta de investigación de ciertos hechos violatorios de derechos humanos por la entrada en vigor en ciertas leyes de amnistía<sup>307</sup>.

---

<sup>306</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Katombe L. Tshishimbi c. Zaire*, Comunicación núm.542/1993, Doc. CPR/C/56/D/542/1993, 4 de abril de 1996, párr.7; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *José Vicente y Amado Villafañe Chaparro et al c. Colombia*, Comunicación núm.612/1995, Doc. CCPR/C/60/D/612/1995, 14 de junio de 1994, párr.8.8; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Rodríguez c. Uruguay*, Comunicación núm. 322/1988, Doc. CCPR/C/51/D/322/1988, 9 de agosto de 1994, párr.12.4; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Celis Laureano c. Perú*, Comunicación núm. 540/193, Doc. CCPR/C/56/D/540/193, 16 de abril de 1996, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Federico Andreu c. Colombia*, Comunicación núm. 563/1993, Doc. CCPR/C/55/D/563/1993, 13 de noviembre de 1995, párr.8.

<sup>307</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Guatemala*, Doc. CCPR/C/79/Add.63, 3 de abril de 1996, párr.25; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Perú*, Doc. CCPR/C/79/Add.67, 25 de julio de 1996, párr.354; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Argelia*, Doc. CCPR/C/79/Add.95, 10 de agosto de 1998, párr.6.b); COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Lesotho*, Doc. CCPR/C/79/Add.106, 8 de abril de 1999, párr.17; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República del Congo*, Doc. CCPR/C/79/Add.118, 25 de abril del 2000, párr.12; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones final del Comité de Derechos Humanos: Irán*, Doc. CCPR/C/79/Add.25, 3 de agosto de 1993, párr.19; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones final del Comité de Derechos Humanos: Iraq*, Doc. CCPR/C/79/Add.84, 12 de noviembre de 1997, párr.8; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Francia*, Doc. CCPR/C/79/Add.80, 4 de agosto de 1997, párr.13; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Uruguay*, Doc. CCPR/C/79/Add.90, 8 de abril de 1998, párr.c); COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile*, Doc. CCPR/C/79/Add.104, 30 de marzo de 1999, párr.7; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Argentina*, Doc. CCPR/C/79/Add.46, 5 de abril de 1995, párr.153; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Senegal*, Doc. CCPR/C/79/Add.10, 28 de diciembre de 1992, párr. 5; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Niger*, Doc. CCPR/C/79/Add.17, 29 de abril de 1993, párr.7; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: El Salvador*, Doc. CCPR/C/79/Add.34, 18 de abril de 1994, párr.7; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones*



Fue precisamente en una de estas OF (Guatemala en 1996) cuando el Comité DH se refirió de forma explícita, y por primera vez, al derecho a la verdad (también, por primera vez, alejado del contexto propio de las desapariciones forzadas como la Comisión IDH ya hizo en 1986) en los siguientes términos:

“El Gobierno de Guatemala debería adoptar todas las medidas pertinentes para evitar casos de impunidad y, especialmente, para que las víctimas de violaciones de derechos humanos encuentren la verdad sobre esos actos, conozcan quiénes son sus autores y obtengan la indemnización adecuada”<sup>308</sup>.

¿A qué se está refiriendo aquí el Comité DH al hablar de “la verdad”? Vemos que en este párrafo el Comité DH exhorta al Estado a adoptar dos medidas distintas, ambas encaminadas a “traer una paz duradera a la sociedad guatemalteca”. Por un lado, medidas tendentes a “evitar casos de impunidad”, es decir, procesos judiciales dirigidos a juzgar a los culpables de haber cometido violaciones de derechos humanos. Y, por otro, métodos alternativos para que las víctimas conozcan la verdad de lo ocurrido. Esta separación entre medidas judiciales y medidas encaminadas al conocimiento de la verdad de los hechos hace que nos planteemos si el Comité DH pretende que esta verdad, que defiende que han de conocer las víctimas, deba ser hallada mediante un mecanismo extrajudicial, a pesar de que la verdad también pueda ser conocida, aunque con algunos matices importantes que ya hemos puesto de manifiesto, a través del proceso judicial.

Manteniendo la distinción ya realizada entre verdad judicial y extrajudicial, el Comité DH sigue separando ambos tipos de medidas pero conectándolas entre sí:

“Insta al Estado parte a que investigue las denuncias de violaciones de derechos humanos, pasadas y presentes, a que actúe en función de las conclusiones de sus

---

*finales del Comité de Derechos Humanos: México*, Doc. CCPR/C/79/Add.109, 27 de julio de 1999, párr.6.

<sup>308</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Guatemala*, Doc. CCPR/C/79/Add.63, 3 de abril de 1996, párr. 25. Pese a que en Guatemala, como veremos en el epígrafe sobre su práctica, se creó una comisión de la verdad en 1994, las deficiencias con las que contó su mandato (que analizaremos *infra*) produjeron un pronunciamiento del Comité DH en ese sentido.

investigaciones para poner a disposición de la justicia a los sospechosos, castigar a los autores e indemnizar a las víctimas de tales actos”<sup>309</sup>.

Así, el Comité DH vuelve a distinguir la investigación (sin especificar la naturaleza de la misma) del procesamiento judicial de los hallados culpables. Esta separación hace que podamos considerar que la investigación pueda estar liderada por un organismo no judicial, el cual, en caso de encontrar indicios de delito, remita sus averiguaciones a los tribunales para que estos emprendan acciones judiciales orientadas a juzgar a los sospechosos, condenarlos en su caso e indemnizar a las víctimas de los mismos.

Sin embargo, ¿en qué contextos alega el Comité DH que la investigación pueda estar liderada por un órgano de estas características? La comisión de un hecho aislado (no dentro de una situación de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos) implicaría, según lo hasta ahora dispuesto por el Comité DH, el inicio de una investigación penal que averiguara las circunstancias de lo ocurrido. Estas son las obligaciones que están reconocidas en el artículo 2.3 del PIDCP. Ya indicamos que este artículo entraría en conexión con la obligación del Estado de establecer las circunstancias sobre los hechos por ser el primer paso para poder iniciar una investigación. En efecto, el Comité DH a través de su OG núm.20 estipuló que:

“El artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto (...). El derecho a presentar denuncias contra los malos tratos prohibidos por el artículo 7 deberá ser reconocido en el derecho interno. Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por las autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz. El Comité ha observado que algunos Estados han concedido amnistía respecto de actos de tortura. Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos, de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro. Los Estados no pueden privar a los

---

<sup>309</sup> *Ibid.* párr.26.

particulares del derecho a una reparación efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible”<sup>310</sup>.

Esta OG fue utilizada por el propio Comité DH en el caso *Hugo Rodríguez c. Uruguay* de 1994, donde declaró que, a tenor de lo dispuesto anteriormente: “la responsabilidad de investigar recae en el Estado de conformidad con su obligación de proporcionar un recurso efectivo”<sup>311</sup>.

Sin embargo, encontramos que en este período el Comité DH empezó a apelar a otros órganos (ya veremos con qué clase de competencias), diferentes de los tribunales, para que lideraran la investigación que averiguara lo ocurrido en varios tipos de situaciones, a saber: grandes violaciones de derechos humanos, casos concretos o acontecimientos históricos no investigados hasta entonces. Todo ello debido a que en numerosas ocasiones el Comité DH no consideraba que los tribunales fueran el foro más adecuado para hallar las circunstancias de lo ocurrido, sobre todo por su falta de independencia en muchas ocasiones.

La primera vez que el Comité DH se refirió a estos organismos fue en unas OF a Burundi en 1994:

“El Comité recomienda al Estado Parte que inicie sin demora un proceso de reconciliación nacional. Este proceso debe ir acompañado de diferentes medidas concretas, como *el establecimiento de comisiones de investigación* integradas por personas pertenecientes a cada una de las etnias del país. Observadores imparciales extranjeros podrían aportar su apoyo a estas investigaciones, *que deberían permitir identificar a las personas responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos ocurridas en otoño de 1993, juzgarlas y sancionarlas* y expurgar los diferentes cuerpos del Estado”<sup>312</sup>.

---

<sup>310</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observación General núm. 20. Prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7)*, Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 10 de marzo de 1992, párr.14.

<sup>311</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Hugo Rodríguez c. Uruguay*, Doc. CCPR/C/51/D/322/1988, Comunicación núm. 322/1988, 9 de agosto de 1994, párr.12.3. Esta investigación, a pesar de que no se especifica la naturaleza de la misma, estaría orientada a la averiguación de la verdad judicial, pues el Comité DH la conecta con un recurso efectivo del art.2.3.

<sup>312</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Burundi*, Doc. CCPR/C/79/Add.41, 3 de agosto de 1994, párr.12. El resaltado es nuestro.

Como puede observarse de la lectura de este párrafo, el Comité DH recomendó al Estado la implantación de una comisión que permitiera identificar a los responsables de las violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos para que estos posteriormente fueran juzgados y sancionados por un tribunal. Sin volver a la discusión ya abordada en el apartado anterior, la relevancia de este pronunciamiento resulta evidente si atendemos a los acontecimientos que se desarrollaron a posteriori, pues Burundi, un año después, constituyó una comisión de la verdad con el mandato de investigar los hechos arriba descritos por el Comité DH<sup>313</sup>.

Pronunciamiento parecido fue el que realizó el Comité DH en sus OF sobre Zimbabue, donde en 1998, ante la proliferación de casos de violencia policial sobre la población civil, el Comité DH en sus OF estableció: “El Comité insta a que un órgano independiente e imparcial investigue todos los casos de supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía o del Ejército”<sup>314</sup>.

Otra circunstancia que motivó el nacimiento de estos organismos fue la proliferación en numerosos Estados de casos de falta de investigación de torturas y desapariciones forzadas. Ante la impunidad de la que gozaban estos hechos en ciertas ocasiones, o por falta de la debida diligencia en las investigaciones, el Comité DH reiteró en sus OF a varios países la necesidad de constituir: “órganos independientes de investigación” orientados a investigar la proliferación de estas prácticas<sup>315</sup>.

Hubo también recomendaciones emanadas por parte del Comité DH apelando a la constitución de órganos independientes orientados a investigar un hecho puntual. Tal fue el caso de Macedonia:

---

<sup>313</sup> Véase el epígrafe 1.12 del capítulo V.

<sup>314</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Zimbabwe*, Doc. CCPR/C/79/Add.89, 4 de abril de 1998, párr.16. Igual preocupación sobre la falta de una investigación sobre abusos policiales se dio en Zambia: “Le inquieta en particular el hecho de que se siga informando de malos tratos y tortura infligidos a personas privadas de libertad y de que los abusos presuntamente cometidos por oficiales de policía y miembros de las fuerzas de seguridad no son debidamente investigados por un órgano independiente”. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Zambia*, Doc. CCPR/C/79/Add.62, 3 de abril de 1996, párr. 12.

<sup>315</sup> Con respecto a hechos de tortura: COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: México*, Doc. CCPR/C/79/Add. 109, 27 de julio de 1999, párr.6; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Camerún*, Doc. CCPR/ 79/Add. 116, 4 de noviembre de 1999, párr.20; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República de Corea*, Doc. CCPR/C/79/Add.114, 1 de noviembre de 1999, párr.14. Con respecto a la constitución de órganos orientados a la investigación de desapariciones forzadas: COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Colombia*, Doc. CCPR/C/79/Add. 76, 5 de mayo de 1997, párr.9.

“El Comité manifiesta su grave preocupación ante los hechos de violencia étnica, con participación policial, ocurridos en Gostivar el 7 de julio de 1997 en los cuales tres personas perdieron la vida y centenares resultaron heridas. También le preocupan las informaciones que hacen pensar que no se respetan todas las garantías procesales en el plano de las autoridades locales. El Comité recomienda que estos hechos sean investigados exhaustivamente por un órgano independiente, que quienes sean declarados culpables reciban las debidas sanciones penales o disciplinarias y que se adopten todas las medidas necesarias para impedir que tales hechos se repitan en cualquier lugar del país”<sup>316</sup>.

Otra referencia, más genérica, fue la necesidad de instaurar órganos tendentes a la investigación y vigilancia de derechos humanos. Tal fue el caso en las OF al Líbano, donde, además, se apelaba a constituir una institución con facultad no solo para investigar, sino también para formular recomendaciones:

“El Comité alienta además al Estado Parte a que estudie la posible creación de una institución al estilo de los defensores del pueblo o de las comisiones nacionales independientes de derechos humanos, con facultades para investigar las violaciones de los derechos humanos y formular al Gobierno recomendaciones sobre las medidas de reparación”<sup>317</sup>.

Parecido es el caso las OF a Hong Kong de 1999: “Sigue preocupando al Comité que no exista un órgano independiente establecido por ley para investigar y vigilar las violaciones de los derechos humanos en la RAE [Región Administrativa Especial de Hong Kong] y la puesta en práctica de los derechos enunciados en el Pacto”<sup>318</sup>.

Igualmente ocurrió en las OF a Camboya en las cuales se dispuso que:

“El Comité está preocupado porque el Estado Parte no ha establecido aún un órgano independiente y legalmente constituido que se encargaría de supervisar el

---

<sup>316</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Macedonia*, Doc. CCPR/C/79/Add.96, 18 de agosto de 1998, párr.10.

<sup>317</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Líbano*, Doc. CCPR/C/79/Add.78, 1 de abril de 1997, párr.9.

<sup>318</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Hong Kong*, Doc. CCPR/C/79/Add.117, 12 de noviembre de 1999, párr.9.

cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, informar al respecto e investigar denuncias de violaciones de los derechos humanos”<sup>319</sup>.

El Comité DH, en sus OF a Iraq de 1997<sup>320</sup>, reconoció los esfuerzos del Estado por haber constituido un “comité no gubernamental encargado de las desapariciones”, sin embargo, se lamentó de no haber recibido información sobre sus competencias para investigar los casos de desaparición forzada o entregar los culpables a la justicia. En este mismo informe el Comité DH recomendó al Estado que: “todas esas denuncias se investiguen plena, pública e imparcialmente, que se dé publicidad a los resultados de dichas investigaciones y que los autores de esos actos sean puestos a disposición de la justicia”<sup>321</sup>.

En lo que nos ocupa, es interesante resaltar la apelación del Comité DH a la necesidad de publicitar los resultados de las investigaciones, mención que recuerda a lo ya establecido en la Declaración DF en 1992 en su artículo 13.4, y lo que ya hemos denominado como “verdad judicial colectiva”, aunque extrapolándolo ahora aquí al global de las violaciones de derechos humanos y no solo al contexto propio de las desapariciones forzadas. A pesar de que aquí el Comité DH está tratando con la obligación del Estado de investigar casos individuales (orientada a que las víctimas conozcan la verdad sobre lo sucedido), la apelación a que esa verdad se publicitase hace que ya no sea únicamente una verdad individual, sino que sea toda la sociedad la que conozca lo acontecido<sup>322</sup>. Sin embargo, cabría preguntarse ¿qué tipo o grado de publicidad habría que darle a la sentencia para cumplir lo requerido por el Comité DH? Recordemos que toda sentencia del Poder Judicial, según se desprende del artículo 14.1 del PIDCP y se concreta en la OG núm.13, es pública y accesible de manera general por la sociedad<sup>323</sup>, salvo “algunas excepciones estrictamente definidas”<sup>324</sup>. El conocimiento del público de la sentencia se da así por supuesto dentro de las propias garantías que

---

<sup>319</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Camboya*, Doc. CCPR/C/79/Add.108, 27 de julio de 1999, párr.10.

<sup>320</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Iraq*, Doc. CCPR/C/79/ Add.84, 12 de noviembre de 1997.

<sup>321</sup> *Ibid.*, párr.8.

<sup>322</sup> En el caso de la Declaración DF ya afirmamos que esa “parte interesada” a la que habría que notificar los resultados de la investigación también podría ser la sociedad en caso de violaciones masivas de derechos humanos, al poder ser considerada parte afectada.

<sup>323</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos*, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 12 de mayo de 2004, p. 155, párr.6.

<sup>324</sup> *Ibid.*

toda persona tiene en virtud de su derecho a la justicia<sup>325</sup>. Por tanto, entendemos que salvo que otra cosa se estipule, cada Estado velará por que las sentencias del Poder Judicial puedan ser accesibles al público en general.

De esta forma nos encontramos ante una de las primeras referencias dentro de la práctica del Comité DH en las que este reconoce la importancia de que el conocimiento de la verdad (judicial) sobre las violaciones de derechos humanos no quede aislado en el entorno individual, sino que también sea conocido por la colectividad. Este conocimiento generalizado sobre lo acontecido no es baladí, ya que a posteriori se ha relacionado con medidas orientadas a la reparación y no repetición.

---

<sup>325</sup> En el caso de España, esta obligación queda recogida en el art. 120.3 de la Constitución Española y concretado en el art. 107.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que habrán de elaborarse los libros electrónicos de sentencias, la recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales”.

**CAPÍTULO IV**  
**EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE**  
**DERECHOS HUMANOS. EL ENCAJE DE LA VERTIENTE**  
**COLECTIVA DEL DERECHO A LA VERDAD EN LA**  
**CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE**  
**1969**

**1. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA**  
**COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.**

Como se vio, en su primera referencia al derecho a la verdad en el Informe 1985/1986 la Comisión IDH no aportó base convencional alguna que sustentara su vigencia dentro de la CADH. Sin embargo, durante esta época la Comisión IDH irá progresivamente apelando a diferentes artículos de este tratado con este mismo fin.

La primera alusión convencional al derecho a la verdad dentro del articulado de la CADH, aunque de forma algo tibia e incompleta, la encontramos en el caso 10.580 de 12 de septiembre de 1995. En él se denunció que miembros del Cuerpo de Infantería de Marina de Ecuador habían puesto bajo custodia al señor Bolaños para examinar sus documentos de identificación y que nunca volvió a saberse de él. Tras la desaparición del señor Bolaños, su familia interpuso recurso de *habeas corpus* ante los tribunales competentes. Este recurso fue rechazado. Casi dos años después de la desaparición del señor Bolaños, sus familiares recibieron información de que había fallecido mientras se encontraba bajo custodia de la Infantería de Marina y que se había iniciado una investigación en torno a su muerte. Sin embargo, el Gobierno nunca determinó la responsabilidad de quienes, según las denuncias, torturaron y ultimaron al señor Bolaños.

La Comisión IDH, en referencia a las infracciones que el Estado había cometido del artículo 25 de la CADH, el derecho a un recurso efectivo, determinó que: “la familia de Manuel Bolaños tiene derecho a saber la verdad sobre lo que le ocurrió, las circunstancias de su detención y de su muerte, y a saber dónde se encuentran sus



restos”<sup>326</sup>. La verdad quedaba entonces subsumida como derecho que formaba parte del derecho a un recurso efectivo y, por tanto, relacionado con el derecho a la justicia. Por tanto, ¿a qué está obligado el Estado según el artículo 25?

La obligación del Estado de búsqueda de la verdad responde, según la Comisión IDH, a la obligación de investigar toda violación cometida bajo su jurisdicción, haciendo suyos los argumentos ya esgrimidos por la Corte IDH en el caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*<sup>327</sup>. Empero, la Comisión IDH no limitó el contenido del artículo 25 a la obligación del Estado de “agotar todas las medidas posibles para averiguar la verdad”, sino que también incluyó en ellas la obligación que tiene el Estado de brindar a los familiares aquella información que tienen derecho a conocer, obligación que ya vimos recogida dentro de la Declaración DF de 1992, entre otros<sup>328</sup>.

Esta conexión entre verdad e información se fue desarrollando progresivamente dentro de la interpretación realizada por la Comisión IDH acerca del derecho a la verdad. En efecto, en un caso posterior de 12 de marzo de 1997, la Comisión IDH, tras reiterar la necesidad de brindar un recurso efectivo a las víctimas para que estas conocieran la verdad<sup>329</sup> y afirmar que “los familiares tienen derecho a información sobre lo sucedido a su pariente”, concreta que “este derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido se basa también en la necesidad de información que permita reivindicar otro derecho”<sup>330</sup>.

El conocimiento de la verdad, o lo que es lo mismo, la posesión de información respecto a determinados extremos (como pudiera ser el saber el paradero de una persona desaparecida), redundaría en la consecución de otros derechos, *verbi gracia*, la

---

<sup>326</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 10/95. Caso 10.580. Ecuador*, 12 de septiembre de 1995, párr.45.

<sup>327</sup> Recordemos que contemplaba: “(...) los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, Fondo, sentencia de 29 de septiembre de 1988, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, Núm. 4, párr.166.

<sup>328</sup> En concreto, la Comisión estableció: “Pese a que el Gobierno estaba en posesión de información que la familia tenía derecho a conocer, inclusive dónde había sido recluido el señor Bolaños, las circunstancias de su deceso y la ubicación de sus restos, ni los familiares, ni los peticionarios, recibieron información alguna al respecto”, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 10/95. Caso 10.580. Ecuador*, 12 de septiembre de 1995, párr.46

<sup>329</sup> “El Estado de Ecuador está en omisión de su obligación de brindar un recurso legal sencillo, rápido y efectivo a la familia García, de modo que esta pueda conocer toda la verdad sobre lo que le sucedió a Manuel, incluidas las circunstancias de su tortura y muerte”. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 1/1997. Caso 10.258, Ecuador*, 12 de marzo de 1997, párr.73.

<sup>330</sup> *Ibid.*, párr.74.

reparación. En este informe concreto, las apelaciones a la necesidad de averiguar la verdad llegaron del análisis de los artículos 8, 25 y 1.1. El derecho a la verdad, por ende, seguía sin independizarse del campo propio del derecho a la justicia, que ya le proporcionó la Corte IDH en *Velásquez Rodríguez c. Honduras*.

Sin embargo, el avance más notorio se dio en el Informe 25/98 de 1998, acerca de los derechos conculcados por el Decreto Ley 2191 de 1978, promulgado por la Junta Militar de Augusto Pinochet.

En este informe por vez primera se fundamentó convencionalmente, y de forma directa y completa, el derecho a la verdad dentro la CADH. Un epígrafe dedicado a este derecho se refería a qué artículos de este tratado lo amparaban. Aparte de los ya comentados (artículos 1.1, 8 y 25), se incluyó una referencia al derecho a la libertad de pensamiento y expresión recogida en el artículo 13 de la CADH<sup>331</sup>, en su modalidad de libre acceso a la información.

La inclusión de la relación entre información y verdad dentro de la CADH es conectada por la Comisión IDH en dos facetas diferentes: la verdad como derecho individual y como derecho colectivo, las cuales, como vimos, debían ser respetadas incluso con la vigencia de una ley de amnistía, ya que tanto las víctimas directas como la sociedad tenían derecho a saber lo ocurrido<sup>332</sup>. Como ejemplo, en este informe la conexión entre derecho a la verdad y el libre acceso a la información es ubicada en ambas modalidades. En la colectiva ya que “permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos”<sup>333</sup> y la no repetición de los acontecimientos violatorios de derechos humanos<sup>334</sup>; y en la individual al permitir a los familiares conocer el paradero de sus seres queridos, lo que según lo establecido por la Comisión IDH supone, igualmente, “una forma de reparación”<sup>335</sup>.

En este mismo sentido, la Comisión IDH entendió que el decreto de amnistía promulgado por Pinochet estaba impidiendo a la sociedad chilena el acceso a determinada

---

<sup>331</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705. Chile*, 7 de abril de 1998, párr.85.

<sup>332</sup> Véase, epígrafe 4.2 del capítulo I.

<sup>333</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705. Chile*, 7 de abril de 1998, párr.88.

<sup>334</sup> Sobre la conexión entre las garantías de no repetición y el derecho a la verdad véase epígrafe 5.4 del capítulo IX.

<sup>335</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705. Chile*, 7 de abril de 1998, párr.88.

información sobre el modo en el que las violaciones de derechos humanos fueron cometidas, algo que no solo repercutiría a nivel global en “el desarrollo de los sistemas democráticos”, sino que: “[e]l derecho de una sociedad a conocer íntegramente sobre su pasado no solo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones”<sup>336</sup>.

Empero, pese a que la propia Comisión IDH había sustentado jurídicamente en el Informe 25/98 el derecho a la verdad en los cuatro artículos anteriores, esta únicamente encontró violados por parte del Estado chileno los artículos 8 y 25 en conexión con el artículo 1.1 y 2, sin considerar lo propio sobre el artículo 13, pues no consideró que ni en ese caso concreto (la aprobación del Decreto Ley 2191 de amnistía), ni en otros<sup>337</sup> el derecho a la verdad colectivo hubiese sido violado por el Estado.

En consencuencia, tras todo lo visto hasta ahora, podemos apreciar que el derecho a la verdad se habría ido transformando de mero derecho propio de los familiares de los desaparecidos, a derecho relacionado también con la justicia, la reparación, la no

---

<sup>336</sup> *Ibid.*, párr. 95.

<sup>337</sup> En el Informe 136/99, la Comisión IDH, siguiendo esta misma práctica, volvió a identificar el derecho a la libertad de información con ambas vertientes del derecho a la verdad apelando directamente al art. 13 como fuente de este derecho: “El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía. La Convención Americana protege el derecho a acceder y a recibir información en su artículo 13”. A pesar de esta remisión directa al art. 13, como en ocasiones anteriores, la Comisión IDH tampoco consideró violado este artículo. En concreto, la Comisión IDH se refirió a dos actuaciones del Estado salvadoreño en donde encontró violados los arts. 1.1, 8 y 25, que ejemplifican perfectamente la práctica seguida por este organismo respecto al derecho a la verdad. En primer lugar, la falta de una investigación diligente por parte de El Salvador, así como su obligación de sancionar y procesar a los responsables afecta, según la Comisión IDH, al derecho a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva de los arts. 1.1, 8.1 y 25 de la CADH. En segundo lugar, estos mismos artículos los encontró la Comisión IDH violados debido a la aprobación en El Salvador de una ley de amnistía que exoneró de responsabilidad penal a los ya condenados e impidió la investigación de otros delitos cometidos en su jurisdicción. Estos efectos que trajo consigo la Ley de Amnistía General de El Salvador impidieron, por tanto, la realización de los derechos a la justicia de las víctimas, violando las obligaciones del Estado de investigar, procesar y reparar amparadas en los arts. 1.1, 8 y 25. La Comisión IDH termina sentenciando: “El Estado salvadoreño ha violado el derecho a conocer la verdad en perjuicio de los familiares de las víctimas, de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que las víctimas pertenecían, y de la sociedad salvadoreña en su conjunto”. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 136/99, Caso 10.480, El Salvador*, 22 de diciembre de 1999, en especial, párrs.224, 238 y 240. Un pronunciamiento en el cual la Comisión IDH también encontró violado el derecho a la verdad individual se dio en el Informe 140/99, en el cual reconocía la obligación del Estado guatemalteco de investigar desapariciones y afianzaba el carácter permanente del delito de desaparición forzada: “El Estado no ha investigado adecuadamente los hechos ni ha ubicado los restos del Sr. Guarcas, con lo que se perpetúa la violación del derecho de su familia a saber la verdad sobre lo que le ocurrió. El Estado de Guatemala no cumplió con su deber de prevención y protección en este caso. Se mantendrá su responsabilidad internacional por las violaciones establecidas hasta que se hayan cumplido plenamente las medidas recomendadas por la Comisión”, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 140/99, Caso 11.275, Guatemala*, 21 de diciembre de 1999, párr.55. Esta misma interpretación del derecho a la verdad y su conexión con el derecho al libre acceso a la información se puede consultar en: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 1/99, Casos 10.480. El Salvador*, 27 de enero de 1999, párrs.147-156.

repetición y la libertad de información, como afianzamiento de su vertiente colectiva. Igualmente, y al contrario de la época anterior, la Comisión IDH identifica ya aquí los preceptos concretos de la CADH que ampararán jurídicamente este derecho. Aunque este será un tema aún que continuará abordándose.

## **2. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

Habiéndose sentado en el decenio anterior la inclusión del conocimiento de la verdad como elemento dentro del deber de garantía de los Estados en *Velásquez Rodríguez c. Honduras* (artículo 1.1), en este período histórico el avance más remarcable de la Corte IDH respecto al derecho a la verdad se dio con el caso *Castillo Páez c. Perú* de 1997<sup>338</sup>. Este caso ha sido identificado por parte de la doctrina como la primera referencia explícita de la Corte IDH al derecho a la verdad, pues se considera que la alusión a la verdad, efectuada en la sentencia de fondo del contencioso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, no suponía un reconocimiento de esta como un derecho en sí, sino que respondió a una mención aislada dentro del desarrollo de las obligaciones estatales de investigar, juzgar y sancionar<sup>339</sup>. Esta afirmación no deja de ser acertada pues recordemos que la verdad, en ese caso en concreto, la interpretamos como el fin último al que debía de ir dirigida la investigación; no era, por tanto, entendida como un derecho independiente.

Ya dentro del caso *Castillo Páez c. Perú*, en su escrito de alegaciones finales presentado ante la Corte IDH, la Comisión IDH “incluyó nuevos alegatos sobre la posible violación de los artículos 17 (Protección a la Familia) y del ‘derecho a la verdad’ en perjuicio del señor Castillo Páez”<sup>340</sup>.

---

<sup>338</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, Fondo, sentencia de 3 de noviembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 34*.

<sup>339</sup> AMAYA VILLARREAL, A. F., “Efecto reflejo: La práctica judicial en relación con el derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p.138.

<sup>340</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, Fondo, sentencia de 3 de noviembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 34*, párr.34. Esta es precisamente la razón por la cual Álvaro Francisco Amaya considera que el pronunciamiento de la Corte IDH sobre el derecho a la verdad en el caso *Castillo Páez c. Perú* fue consecuencia de “una solicitud expresa de la Comisión en su escrito de alegaciones finales, o en otras palabras, que no fue motivado *motu proprio* por la Corte en aplicación del principio *iura novit curia*”. *Ibid.*

Allí la Comisión IDH identificó como elementos constitutivos del derecho a la verdad los siguientes: conocimiento del paradero de los desaparecidos, de las circunstancias en las que se produjo su muerte (si fuera el caso) y de la identidad de los autores, así como el derecho de la sociedad en conjunto a conocer lo ocurrido como mecanismo de prevención<sup>341</sup>. Igualmente, la Comisión IDH afirmó que este derecho, en relación con las desapariciones forzadas, ya había sido reconocido por “varios organismos internacionales”<sup>342</sup>, como hemos venido estableciendo en sucesivos epígrafes. En efecto, pues determinadas interpretaciones sobre el derecho a la verdad, sostenidas hasta la fecha por diferentes organismos, concuerdan con los alegatos presentados por la Comisión IDH en este caso.

Por otro lado, también dentro de los alegatos, y en referencia a las desapariciones forzadas, la Comisión IDH afirmó que: “[e]l sistema interamericano ha reconocido el derecho a la verdad”<sup>343</sup>. El sustento que la Comisión IDH utilizó tras este argumento no fue únicamente su Informe Anual 1985/1986, sino que también alegó la jurisprudencia de la propia Corte IDH en el caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, en el cual, recordemos, se reconocía la obligación de los Estados de poner todos los medios a su alcance para investigar los casos de desaparición forzada hasta que se hallase el paradero y la suerte del desaparecido, al igual que el deber de conocer la identidad de los responsables. En este sentido, pero esta vez sí solo respaldado en su anterior informe, la Comisión IDH precisó:

“La Comisión ha reconocido el derecho a la verdad no solamente en favor de los familiares de los desaparecidos, sino también como un derecho propio de toda la sociedad. Con el objeto de prevenir futuras violaciones, el Estado tiene la obligación de demostrar a la sociedad que está comprometido con la defensa y protección de los derechos humanos”<sup>344</sup>.

Dentro de la sentencia en la que debía de pronunciarse sobre lo alegado por la Comisión IDH, la Corte IDH estipuló sobre el derecho a la verdad que: “se refiere a la

---

<sup>341</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, alegatos finales caso *Ernesto Rafael Castillo Páez*, 30 de junio de 1997, pp.21-22.

<sup>342</sup> *Ibid.*, p.21.

<sup>343</sup> *Ibid.*

<sup>344</sup> *Ibid.*, p.22.

formulación de un derecho no existente en la Convención Americana aunque pueda corresponder a un concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial”<sup>345</sup>.

Sin embargo, posteriormente, la Corte IDH sentenciaba:

“En relación con las violaciones a la Convención Americana anteriormente citadas, la Corte considera que el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron. Inclusive, en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. Corresponde por tanto al Estado, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas”<sup>346</sup>.

Es decir, pese a que la Corte IDH niega la existencia como tal del derecho a la verdad, pues corresponde a “un concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial”, por otro lado, sí reconoce la vigencia de parte del contenido que la Comisión IDH le confirió en sus alegatos finales. La única diferencia reseñable que pudiera darse entre las interpretaciones de estos órganos estaría en la existencia de una vertiente colectiva sobre la cual la Corte IDH no se pronunció. Sin embargo, lo que ya denominados y analizamos dentro del Informe Joinet como “verdad individual” o “verdad judicial”, sí queda afianzada dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH pese a que aún por entonces este tribunal no la denominaba “derecho a la verdad”. Concluimos, por tanto, que la práctica hasta ahora de este tribunal sobre la verdad individual y judicial será análoga a la del Comité DH durante esta época, dentro de las obligaciones de los Estados de investigar

---

<sup>345</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, sentencia de 3 de noviembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 34*, párr.86. Sin embargo, esta falta de reconocimiento del derecho a la verdad como un derecho autónomo, no redundó en una negación de la jurisprudencia sentada en *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, ya que la Corte IDH seguía manteniendo la existencia de, tanto la obligación de los Estados de investigar las violaciones de la CADH, como del derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos víctimas de desapariciones forzadas.

<sup>346</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, sentencia de 3 de noviembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 34*, párr. sentencia de 3 de noviembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 34*, párr. 90.

Por otro lado, dentro de las posibilidades que averiguamos para esta posible falta de mención directa al derecho a la verdad, pese a que se reconozca su contenido, encontramos lo argüido por Laurence Burgorgue y Amaya Úbeda de Torres cuando sostuvieron que:

“(…) la Comisión había afirmado la existencia de un ‘*derecho inalienable a la verdad*’ y ello ha tenido repercusiones importantes en su práctica contenciosa; en *Castillo Páez c. Perú*, la Comisión alegó la violación del derecho a la verdad y a la información de los familiares sin aportar base convencional directa alguna, lo que llevó a la Corte a considerar un tal derecho inexistente en el seno de la CADH”<sup>347</sup>.

En efecto, recordemos que al momento de confección de los alegatos finales de la Comisión IDH (1997), el derecho a la verdad no contaba con un extenso recorrido en el sistema interamericano. Pese a que su primera referencia convencional dentro de la CADH, aunque algo aislada, databa de 1995 (Informe 10/95), no sería hasta el Informe 25/98 (es decir, hasta 1998, un año después de la sentencia de *Castillo Páez c. Perú*) cuando la Comisión IDH concretara convencionalmente el derecho a la verdad en la CADH de forma específica. Así, por tanto, en el escrito final de alegaciones de la Comisión IDH sobre este caso, la apelación que realizó al derecho a la verdad no contó con sustento convencional alguno.

Entendemos, por tanto, que la Corte IDH no considerara al derecho a la verdad como un derecho autónomo propio de la CADH<sup>348</sup> al faltar base convencional para ello.

Por otro lado, el hecho de que parte del contenido (el referente a la verdad individual/judicial) que la Comisión IDH le adscribió en sus alegatos finales fuera considerado violado por el tribunal de San José, y a tenor de lo que ya dispuso en

---

<sup>347</sup> BURGORGUE-LARSEN, L., ÚBEDA DE TORRES, A., *Las decisiones básicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y jurisprudencia*, Pamplona, Civitas-Thompson Reuters, 2009, p.87.

<sup>348</sup> Parte de la doctrina ha interpretado que en caso de que no fuera así, es decir, que la Corte IDH afirmara que el derecho a la verdad están incluido en la CADH supondría: “traicionar de alguna manera la voluntad soberana de los Estados parte”. GARIBIAN, S., “Derecho a la verdad. El caso argentino”, en RIPOLE CARULLA, S., VILLÁN DURÁN, C., (dirs.), *Justicia de transición... op.cit.*, pp.59-60. Sin embargo para Kai Ambos, la Corte IDH fue considerada aliada de los nuevos gobiernos democráticos que precedieron a las dictaduras latinoamericanas en su lucha a favor del juzgamiento de los hechos del pasado. La Corte IDH y los nuevos gobiernos, en principio, persiguieron la misma política pro derechos humanos, AMBOS, K., BÖHM, M.L., “Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Tribunal tímido y tribunal audaz?”, en STEINER, C., *Sistema Interamericano de Protección... op.cit.*, pp.47-48.

*Velásquez Rodríguez*, sí puede defenderse que la Corte IDH ya entendía el derecho a la verdad como el modo mediante el cual ciertas normas ya afianzadas en el Derecho internacional son interpretadas para poder llenar vacíos legales, tal y como dispuso Juan Méndez, aunque aplicando ahora esta interpretación a la faceta individual del derecho a la verdad. Es decir, ante la necesidad de que las víctimas conocieran la verdad de lo sucedido, los artículos 1.1 y 25 de la CADH fueron interpretados de manera que del deber de garantía y prevención de los derechos recogidos en ella, surgiera la obligación de los Estados de investigar para averiguar la verdad (individual) de lo ocurrido; interpretación que resulta análoga a lo contemplado por el propio Comité DH durante esta época. Siguiendo a Yasmin Naqvi: “el derecho a la verdad es análogo a esas normas procesales, porque está ligado a la protección de los derechos humanos fundamentales y porque surge como la respuesta esperada de un Estado a una violación”<sup>349</sup>. En efecto, el derecho a la verdad aparece así como una útil disposición en manos de la Corte IDH para obligar a los Estados a investigar las violaciones de los derechos incluidos en la CADH.

En otro orden ideas, y de forma paralela a la construcción de su posición dentro de la CADH, el derecho a la verdad empezó a ser entendido por parte la Corte IDH como una medida de reparación de las víctimas. Los casos *Castillo Páez c. Perú* y *Loayza Tamayo c. Perú*<sup>350</sup> versaban sobre el bloqueo que suponía para los derechos de las víctimas la adopción de sendas leyes de autoamnistías proclamadas por Alberto Fujimori, las cuales produjeron una amnistía general y absoluta<sup>351</sup>. En su sentencia sobre reparaciones del caso *Castillo Páez c. Perú*, la Corte IDH retomó lo afirmado en su pronunciamiento sobre el fondo acerca de que, independientemente de que disposiciones de orden interno impidieran: “identificar a los individuos responsables por

---

<sup>349</sup> NAQVI, Y., “El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción?”, *International Review of the Red Cross*, núm.862, 2006, p.28.

<sup>350</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Loayza Tamayo c. Perú*, Fondo, sentencia de 17 de septiembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencia Núm. 33*.

<sup>351</sup> Citando lo dicho por la Corte IDH, Doug Cassel calificó las leyes de amnistía peruanas otorgadas por los Decretos-ley número 26.479 y 26.492 como una “amnistía general al personal militar, policial y civil, cualquiera fuere su situación militar, policial o funcional, que se encontrara denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes o militares por hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de su promulgación”, CASSEL, D., “La lucha contra la impunidad ante el sistema interamericano de derechos humanos”, en MÉNDEZ, J., ABREGÚ, M., MARIEZCURRENA, J., *Verdad y Justicia. Homenaje a Emilio F. Mignone*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001, p.385.



los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta”<sup>352</sup>.

Siguiendo esta jurisprudencia, la Corte IDH entendió que, respecto al caso peruano: “esa ley obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a los familiares de la víctima conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”<sup>353</sup>.

Como fundamento de este pronunciamiento la Corte IDH estima que:

“(…) el artículo 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y obtener una reparación por el daño sufrido (...). Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8.1 de la Convención Americana que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza”<sup>354</sup>.

La relación entre estos artículos de la CADH (1.1, 8.1 y 25) con el derecho a la verdad tiene su sustento en la conexión con la que cuenta este con los derechos a la reparación y la justicia. Según han establecido los jueces de la Corte IDH, Cançado Trindade y Abreu Burelli, en su voto razonado conjunto en la sentencia de reparaciones del caso *Loayza Tamayo c. Perú* la relación entre estos tres derechos empieza con el respeto al derecho de acceso a la justicia:

“(…) la doctrina contemporánea al respecto ha establecido la relación entre el derecho a la reparación, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia (que comienza por el acceso a la justicia). La realización de estos derechos se ve obstaculizada por medidas de derecho interno, tales como las llamadas autoamnistías atinentes a violaciones de los derechos humanos, que conducen a una situación de impunidad.

---

<sup>352</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de noviembre de 1998, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 43*, párr.103.

<sup>353</sup> *Ibid.*, párr.105.

<sup>354</sup> *Ibid.*, párr.106.

Dichas medidas son incompatibles con el deber de los Estados de investigar aquellas violaciones, imposibilitando la vindicación de los derechos a la verdad y a la realización de la justicia, así como, en consecuencia, del derecho a obtener reparación”<sup>355</sup>.

Esta interrelación queda ejemplificada en tanto que la sentencia de un tribunal judicial afecta en su totalidad, evidentemente, al derecho a la justicia al contemplar la responsabilidad penal de los victimarios. Ello supone, como venimos poniendo de manifiesto<sup>356</sup>, el conocimiento de una parte de la verdad, al desarrollar las circunstancias en las que los hechos fueron cometidos algo que, a su vez, redundaría en una parte de la reparación para la víctima en cuanto que los derechos anteriores han sido satisfechos.

Es debido a la importancia con la que cuentan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, por la cual cualquier medida interna que los Estados adopten que impida el inicio de una investigación, y por ende, el conocimiento de la verdad, violaría los artículos 8 y 25 de la CADH, en conjunción con el artículo 1.1.

Apreciamos, por tanto, que durante este período el derecho a la verdad pasó de ser considerado como un simple deber de diligencia a tener en cuenta durante la investigación (sobre todo en lo concerniente a la búsqueda de los desaparecidos), a empezar a poseer cierta importancia para el cumplimiento efectivo de otros derechos como los derechos a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El derecho a la verdad, aún sin ser considerado un derecho autónomo dentro de la CADH para la Corte IDH, sí comienza a erigirse como pieza clave para la satisfacción de otros derechos de análoga importancia a los intereses de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

---

<sup>355</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Loayza Tamayo c. Perú*, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de noviembre de 1998, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 42*. Voto razonado conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, párrs.2 y 3.

<sup>356</sup> Véase, epígrafe 2 del capítulo III.



## CAPÍTULO V

### PRÁCTICA ESTATAL. LA PROLIFERACIÓN DE LOS MEDIOS EXTRAJUDICIALES PARA INVESTIGAR LOS ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL PASADO

Durante esta época examinada, la necesidad social por el conocimiento del paradero de las personas desaparecidas y por las circunstancias en las que las violaciones manifiestas de derechos humanos se perpetraron, a la que ya hicimos referencia en el primer capítulo, volvió a aparecer en el decenio que aquí nos ocupa.

En total, hasta la década de los noventa se han identificado ciento dieciocho Estados que han sufrido distintos episodios de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos dentro de su jurisdicción<sup>357</sup>, de los cuales, durante esta década, veintiuno fueron los Estados que implementaron algún tipo de mecanismo orientado a conocer la verdad colectiva y extrajudicial de lo sucedido<sup>358</sup>. Por su parte, treinta y seis fueron los Estados que investigaron judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas bien durante esta época, bien durante la pasada<sup>359</sup>.

---

<sup>357</sup> OLSEN, T.D., PAYNE, L.A., REITER, A.G., *Transitional Justice...op.cit.*, pp. 165 – 171. Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbayán, Bangladesh, Bielorrusia, Birmania, Bolivia, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea Bissau, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda del Norte, Islas Salomón, Israel, Kenia, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Lituania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Paraguay, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, República Bolivariana de Venezuela, República Centroafricana, República Checa/República Eslovaca, República Dominicana, República Democrática del Congo, República de Yemen, Ruanda, Rumanía, Rusia/URSS, Senegal, Serbia y Montenegro/Yugoslavia, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor Oriental, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbequistán, Zimbabue, Zambia, Zanzíbar.

<sup>358</sup> Alemania, Brasil, Burundi, Chad, Chile, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Haití, Honduras, Letonia, Lituania, Nepal, Nigeria, Polonia, Paraguay, República Checa/República Eslovaca, Sri Lanka, Sudáfrica, Uzbequistán. Aparte, se analizará la experiencia de Argentina y sus juicios por la verdad. Argentina incoó estos procedimientos como complemento a las deficiencias que arrastró la comisión instaurada en la época pasada.

<sup>359</sup> Albania, Alemania, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Croacia, Corea del Sur, República Checa, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Gambia, Guatemala, Hungría, Indonesia, Irlanda del Norte, Israel, Letonia, Liberia, Lituania, Macedonia, Mali, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Ruanda, Rumanía, Serbia y Montenegro / República Federl de Yugoslavia, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Uganda, Zambia.

Al igual que en la etapa anterior y por las razones anteriormente argüidas, el desarrollo de la siguiente práctica estatal se referirá en exclusiva a los Estados que constituyeron mecanismos extrajudiciales en aras de que la sociedad conociera las circunstancias de lo ocurrido acerca de eventos violatorios de derechos humanos.

## 1. ESTUDIO DE CASOS

### 1.1. Chile.

A modo de inaugurar la década de los noventa, Chile, tras la pérdida del plebiscito por parte del general Augusto Pinochet, encaró su período transicional con una nueva democracia presidida por Patricio Aylwin. El recién nombrado Presidente electo se encontró, sin embargo, ante una difícil tesitura: cómo lidiar con un decreto de amnistía<sup>360</sup>, convalidado por la Corte Suprema de Chile<sup>361</sup> tanto a nivel interno como a nivel internacional<sup>362</sup>, que se apreciaba imposible de derogar en la práctica debido al propio funcionamiento del Poder Legislativo, donde las Fuerzas Armadas aún conservaban un férreo control<sup>363</sup>. En consecuencia, una investigación penal de las violaciones cometidas bajo el régimen de Pinochet se advertía así, y a todas luces, irrealizable. Será, por tanto, ante esta situación cuando las previas experiencias regionales sirvieron de base para la gestión del pasado en Chile, en concreto, la vivida en Uruguay.

En efecto, recordemos que la Ley uruguaya 15848 de 22 de diciembre de 1986 sobre la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, independientemente de que impidiera la incoación de una investigación penal, facultaba en su artículo 4 a que el Poder Ejecutivo iniciase investigaciones no judiciales sobre los hechos ocurridos en el pasado. Es decir, aunque se renunciase al derecho a la justicia de las víctimas, el derecho a la verdad debía ser concretado. En este mismo sentido, el propio Patricio Aylwin declararía que las experiencias de Argentina y Uruguay, “[Estados] que habían intentado resolver el problema por la vía judicial, no eran nada auspiciosa; en ambos

---

<sup>360</sup> Decreto de amnistía núm. 2191, 18 de abril de 1978.

<sup>361</sup> CORTE SUPREMA DE CHILE, caso *Insunza Bascuña, Iván Sergio (recurso de inaplicabilidad)*, 24 de agosto de 1990.

<sup>362</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia...* op.cit., p. 414.

<sup>363</sup> *Ibid.*, p.415.

países se había terminado, por mecanismos diversos, poniendo fin al asunto sin lograr hacer justicia ni esclarecer la verdad”<sup>364</sup>.

Esta fue la vía seguida por el Presidente Aylwin: ante la vigencia del Decreto 2191 de amnistía, promovió el 25 de abril de 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida popularmente como Comisión Rettig); la primera comisión extrajudicial en cuyo nombre propio aparece ya en apelativo “verdad”.

El Decreto supremo 355, de 25 de abril 1990, el cual contenía el mandato de la mencionada comisión, desarrollaba ampliamente los motivos que habían llevado al Poder Ejecutivo a crear un organismo específicamente encaminado a averiguar la verdad sobre lo ocurrido. Así se declaraba en su considerando:

“1º.- Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990;

2º.- Que solo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional;

3º.- Que solo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá reparar en alguna medida el daño causado”.

Ya vimos que las comisiones creadas en la década anterior invocaban a una necesidad social como la justificante de su creación, sin embargo, apreciamos que la Comisión Rettig apelaba al conocimiento concreto de la verdad como la causa de su instauración. Se convertía de ese modo en la primera comisión que recogía dicho concepto. El conocimiento de la verdad se antojaba pues indispensable para un futuro entendimiento entre las partes y como un paso previo a la acción de la justicia, a tenor de lo contenido en el punto dos. En estos términos fue declarado por el propio Presidente:

---

<sup>364</sup> AYLWIN, P., “La Comisión chilena sobre la Verdad y la Reparación”, *Ius et Praxis*, vol. 13, 2007, núm. 1, p.426.

“Considerando que lo fundamental para establecer la confianza entre los chilenos era esclarecer la verdad y que era indispensable proceder con rapidez, asumí la responsabilidad de poner rápidamente en marcha un camino distinto, que aún a riesgo de dejar pendiente el anhelo de plena justicia, nos permitiera avanzar en el esclarecimiento de la verdad y abriera puertas para el logro de la reconciliación”<sup>365</sup>.

Esto no quería significar que se pretendiera sustituir de plano la justicia por la verdad, sino que al momento de constitución de la comisión, ante la imposibilidad de investigar judicialmente, se optó por investigar extrajudicialmente. La asunción de la obligación de averiguar la verdad, no suponía desechar el camino de la justicia, pues tras un período de violaciones de derechos humanos empezaba a estar presente para algunos Estados (sobre todo latinoamericanos) la convicción de que la búsqueda de la verdad de lo ocurrido constituía una obligación jurídicamente vinculante. El artículo 1, por su parte, contemplaba:

“Créase una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tendrá como objeto contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y *sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos*”<sup>366</sup>.

A tenor de lo dispuesto en el considerando del decreto y en sus dos primeros artículos, parecía claro que la comisión pretendía dar respuesta a un derecho que era distinto al derecho a la justicia, al encontrarnos con dos foros diferenciados. Por un lado, los tribunales de justicia, encargados de averiguar las responsabilidades penales correspondientes y, por otro, la comisión de la verdad que hallará la verdad de lo ocurrido para, como se establece en el considerando: “facilitar[...] a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas [a las víctimas] como corresponde y permitir [...] reparar en alguna medida el daño causado”.

---

<sup>365</sup> *Ibid.*

<sup>366</sup> Sin cursiva en el original.

Las competencias de las que fue investida la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación dan otra visión del tipo de verdad que el Estado de Chile pretendía alcanzar. Al contrario de experiencias anteriores donde las comisiones priorizaban sus trabajos en la investigación de un plan global o conjunto de violaciones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tenía como mandato la búsqueda de la verdad individualizada de cada víctima. El artículo 1 del Decreto 355 establecía que la Comisión procuraría: “[r]eunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero”. Así fue contemplado en su propio informe final:

“Al asumir sus funciones, esta Comisión estimó su deber prioritario de conocer la verdad de lo ocurrido en cada uno de los casos de graves violaciones de derechos humanos. Solo desde la certeza de lo ocurrido en cada episodio individual, podría describirse un cuadro lo más completo posible de la globalidad del fenómeno de violación de estos derechos fundamentales. El conocimiento de esa verdad individual resultaba también indispensable para fundar desde allí medidas para reparar, en la medida de lo posible, el daño producido a las familias, individualizar a las víctimas y recomendar medidas destinadas a evitar que estos hechos volvieran a repetirse”<sup>367</sup>.

El Estado, a través de la creación de esta comisión de la verdad, estaba así dando respuesta conjunta a dos obligaciones: averiguar la estructura general de cómo las violaciones de derechos humanos fueron perpetradas y conocer la verdad detallada individual de cada una de las víctimas de ese plan global<sup>368</sup>.

Esta perspectiva tan amplia de lo ocurrido, con una vista a la vez global e individual, adoleció, sin embargo, de un gran déficit en lo que a su mandato material se refiere. La Comisión Rettig estaba facultada para la investigación de “las más graves violaciones de derechos humanos”, algo que fue interpretado como la investigación de “las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de

---

<sup>367</sup> COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, Santiago de Chile, Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996, p. 1.

<sup>368</sup> MÉNDEZ, J., “The Human Right to Truth: Lessons Learned From Latin America Experiences With Truth Telling”, en BORER, T.A. (ed.), *Telling the Truths: Truth telling and peace building in post-conflict societies*, Notre Dame, Notre Dame University Press, 2006, p.124; CORTÉS RODAS, F., “Los derechos de las víctimas de la violencia política a la verdad, la reparación y la justicia. Reflexiones sobre cuatro casos en América Latina”, *Estudios políticos*, vol. 31, 2007, p. 72.



muerte”. Se dejaba así fuera de los trabajos de la comisión los hechos que no la ocasionaron, por ejemplo, numerosos casos de tortura. Esto acarrearía, como analizaremos más adelante<sup>369</sup>, la creación de una nueva comisión de la verdad en Chile cuyo mandato se basará en el descubrimiento de la verdad de aquellas personas cuyas experiencias no fueron incluidas en los límites materiales de esta comisión.

## 1.2. Nepal.

En 1990, tras la superación del conocido como “período *panchayat*” (caracterizado por la falta de pluralidad política y la represión policial), el recién estrenado Gobierno de Krishna Prasad Bhattarai, instauró dos comisiones de investigación para conocer los hechos que allí se sucedieron. La primera de las comisiones, encabezada por el que se sospechaba que era antiguo colaborador del régimen *panchayat*, no salió adelante por la dimisión de dos de sus comisionados debido a la falta de independencia del Presidente de la comisión<sup>370</sup>. Esto obligó a constituir, el 31 de julio de 1990, una segunda comisión, la denominada *Commission of Inquiry to Locate the Persons Disappeared during the Panchayat Period*.

El conocimiento del paradero de los desaparecidos como parte de las obligaciones del Estado tras la comisión de actos de desapariciones forzadas, al igual que ya hemos venido comprobando a lo largo de esta década, empezaba a considerarse imprescindible en la protección de los derechos de las víctimas. Así fue recogido en el mandato de la comisión, el cual iba dirigido principalmente a la búsqueda e identificación de los lugares de detención donde estuvieron recluidas aquellas personas que desaparecieron en Nepal entre 1961 y 1990<sup>371</sup>, al igual que los perjuicios contra la propiedad que también tuvieron lugar durante ese período<sup>372</sup>. Pese a que el informe fue entregado el

---

<sup>369</sup> Véase epígrafe 1.15 del capítulo VIII.

<sup>370</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, p.94; UNITED STATE INSTITUTE OF PEACE, *Commission of Inquiry: Nepal 90*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/commission-inquiry-nepal-90> (Consultado el 6 de junio de 2016).

<sup>371</sup> UNITED STATE INSTITUTE OF PEACE, *Commission of Inquiry: Nepal 90*, op.cit.; PRASAD PANT, D., WASTI, P., LAMA, N. (eds.), *Profile of Disappeared Persons – Profile of the persons subjected to enforced disappearances during armed conflict in Nepal*, Kathmandu, Informal Sector Service Center, 2011, p. 4.

<sup>372</sup> PASIPANODYA, T., “A Deeper Justice: Economic and Social Justice as Transitional Justice in Nepal”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol. 2, 2008, p.392.

21 de abril de 1991, no fue publicado por el Gobierno hasta 1994 y sus recomendaciones nunca fueron puestas en marcha<sup>373</sup>.

### 1.3. Chad.

Tras los crímenes perpetrados bajo la dictadura de Hissène Habré durante la década de los ochenta en Chad, el nuevo Gobierno, mediante el Decreto presidencial 014 de 29 de diciembre de 1990, creó la *Commission of Inquiry into the Crimes and Misappropriations Committed by Ex-President Hissène Habré's regime, his Accomplices and/or Accessories*. La comisión de Chad fue constituida atendiendo a las ya mencionadas obligaciones del Estado tras un período de violaciones manifiestas de derechos humanos:

“(...) to investigate the illegal imprisonment, detentions, assassinations, disappearances, tortures and practices of acts of barbarity, the mistreatment, the other attacks on the physical or mental integrity of persons, and the violations of human rights and illicit trafficking in narcotics”<sup>374</sup>.

En concreto, también hemos de reseñar lo apuntado en relación con las funciones que les fueron atribuidas a los comisionados: “to confiscate and secure under seal all objects and premises required for elucidating the truth”<sup>375</sup>.

Sin embargo, las acusaciones de violaciones de derechos humanos al Gobierno de Idriss Déby pusieron en tela juicio los motivos últimos de creación de la comisión de la verdad al sospecharse que el Presidente en realidad lo que pretendía era la desacreditación del Gobierno de Hissène Habré<sup>376</sup>.

Estas sospechas, no obstante, no deberían de hacernos apartar el foco de atención de la importancia con la que contó el informe final de esta comisión pues estamos ante el primer organismo de estas características que llegó a publicar los nombres de los perpetradores; información que iba incluso acompañada de fotografías de los

---

<sup>373</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, p.94; PRASAD PANT, D., WASTI, P., LAMA, N. (eds.), *Profile of Disappeared Persons...op.cit.*, p.4.

<sup>374</sup> Decreto núm. 014/P.CE/CJ/90, 29 de diciembre de 1990. Artículo 2.

<sup>375</sup> *Ibid.*

<sup>376</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...op.cit.*, p.97.

implicados<sup>377</sup>. Igualmente, este informe final es el único registro existente en el que quedan retratadas las atrocidades acaecidas en Chad entre los años 1981 y 1990, lo que fue extremadamente útil para poder llegar a probar la implicación de Hissène Habré en las mencionadas violaciones de derechos humanos<sup>378</sup>.

#### 1.4. El Salvador.

La Comisión de la Verdad para El Salvador (CVES), por el modo en el que fue constituida, por el contenido de su mandato y por sus competencias ofrece uno de los ejemplos más notables en lo que a la recuperación de la verdad sobre un período represivo se refiere. Igualmente, muestra el valor que puede llegar a albergar el conocimiento de la verdad para alcanzar el fin de la reconciliación nacional.

Atendiendo a lo afirmado por Human Rights Watch, la CVES no contaba con ningún precedente ya que, en primer lugar, fue constituida a raíz de un acuerdo de paz<sup>379</sup>, al contrario de otras comisiones de su entorno ya analizadas como la chilena o la argentina, instauradas por los nuevos Gobiernos democráticos para investigar las atrocidades cometidas por los pasados Gobiernos *de facto*. En segundo lugar, la comisión operó bajo los auspicios de una organización internacional (ONU) y no bajo un nuevo Gobierno. En tercer y último lugar, se trataba de la primera investigación internacional, tras Núremberg, de unos hechos cometidos en un Estado soberano<sup>380</sup>.

En efecto, la CVES fue fundada de conformidad con los Acuerdos de Paz de El Salvador entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno salvadoreño, amparados por las Naciones Unidas (representadas por su Secretario General, Javier Pérez de Cuellar). El 27 de abril de 1991 se firmaría el Acuerdo de México que creaba y desarrollaba el mandato de la CVES, el cual fue

---

<sup>377</sup> *Ibid.*

<sup>378</sup> *Ibid.*; MANGA FOMBAD, C., “Transitional Justice in Africa: The Experience with Truth Commissions”, *Hauser Global Law School Program*, retrieved, vol. 21, 2012, p. 5. Publicación electrónica disponible en: [http://www.nyulawglobal.org/globalex/Africa\\_Truth\\_Commissions1.html](http://www.nyulawglobal.org/globalex/Africa_Truth_Commissions1.html),

<sup>379</sup> Sobre la identificación de la *opinio iuris* de los Estados en derecho a la verdad mediante la inclusión de una cláusula de creación de una comisión de la verdad en un acuerdo de paz firmado por el Estado, Yasmin Naqvi ha afirmado: “la inclusión de la obligación de establecer una comisión de la verdad en un acuerdo de paz puede, en sí mismo, constituir una prueba de la práctica del Estado de reconocer el derecho a la verdad tras la comisión de violaciones graves”. NAQVI, Y., “El derecho a la verdad en el derecho internacional...”, *op.cit.*, p. 21. En efecto, la firma de un Estado de un acuerdo el cual contuviera la obligación de crear un mecanismo orientado a hallar la verdad de lo sucedido, da muestras de un asunción como tal.

<sup>380</sup> HUMAN RIGHTS WATCH, “El Salvador. Accountability and Human Rights: the report of the United Nations Commission on the truth for El Salvador”, *News From Americas Watch*, vol IV, 1993, núm. 7, p.5.

posteriormente concretado en el Acuerdo de Chapultepec de 16 de enero de 1992 que pondría fin al conflicto<sup>381</sup>.

De lo recogido en el Acuerdo de México empezaba a hacerse visible que era necesario emprender una investigación sobre los crímenes cometidos por ambos bandos para poder llegar a un estadio de comprensión mutua. Tal y como relata Thomas Buerghental, uno de los tres comisionados que conformaban la CVES, a lo largo de las negociaciones ambos bandos empezaron a reprocharse la culpabilidad en los numerosos hechos atroces que se sucedieron durante los doce años de conflicto en El Salvador<sup>382</sup>. Sin embargo, a medida que estas avanzaban empezaba a hacerse más notorio que no podría llegarse a buen puerto si las acusaciones y contraacusaciones seguían siendo la tónica principal en las negociaciones de paz<sup>383</sup>. La idea de constituir un mecanismo para “desarrollar la confianza”<sup>384</sup> entre ambas partes era indispensable para un desarrollo pacífico de la transición.

El Acuerdo de Chapultepec consolidó este pacto sobre el necesario conocimiento de lo sucedido para una superación pacífica del conflicto. Sin embargo, como también ocurrió en otras experiencias estudiadas como la chilena, en la necesidad de alcanzar la verdad no se veía necesariamente una renuncia de plano a la justicia. Este Acuerdo establecía así que:

---

<sup>381</sup> El texto completo del mandato de la CVES (conformado por ambos acuerdos) puede consultarse en el anexo que acompaña al informe final de dicha comisión (“De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador”), adjunto al siguiente documento: CONSEJO DE SEGURIDAD, *Carta de fecha 29 de marzo de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General. De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador*, Doc. S/25500, 1 de abril de 1993, p.201 y ss.

Para un análisis pormenorizado sobre la firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador puede consultarse el detallado informe del Relator Independiente sobre El Salvador, Pedro Nikken: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Experto independiente sobre El Salvador, Sr. Pedro Nikken, designado por el Secretario General de conformidad con la resolución 1992/62, de 3 de marzo de 1992, de la Comisión de Derechos Humanos*, Doc. E/CN.4/1993/11, 15 de febrero de 1993.

<sup>382</sup> Este autor enumera toda una serie de acontecimientos ocurridos durante el conflicto de El Salvador lo que produjo que este obtuviera relevancia internacional: “el asesinato del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, la matanza de los seis sacerdotes jesuitas, la violación y asesinato de las cuatro religiosas estadounidenses, los asesinatos de alcaldes en las llamadas zonas conflictivas del país, el asalto a la Zona Rosa que produjo la muerte de, entre otros, cuatro guardias de la Embajada de Estados Unidos que se encontraban fuera de servicio, la masacre de El Mozote, los secuestros y asesinatos de personalidades nacionales importantes, y la desaparición, tortura y muerte de gran cantidad de civiles simpatizantes de uno u otro de los combatientes”. BUERGHENTAL, T., “La Comisión de la Verdad para El Salvador”, *Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Estudios Especializados en Derechos Humanos*, vol. 1, 1996, p.16.

<sup>383</sup> *Ibid.*

<sup>384</sup> *Ibid.*

“Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad<sup>385</sup>. Todo ello sin perjuicio del principio, que las Partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”<sup>386</sup>.

En el conocimiento de “la necesidad de esclarecer” será donde integremos, en este caso concreto, la asunción de que hallar la verdad sobre lo ocurrido empezaba a formar parte para El Salvador de su obligación internacional tras un período de violaciones de derechos humanos. Esta afirmación puede verse igualmente reflejada en el mandato de la propia CVES:

“La Comisión tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. La Comisión tendrá en cuenta: (...). b) La necesidad de crear confianza en los cambios positivos que el proceso de paz impulsa y de estimular el tránsito hacia la reconciliación nacional. (...). 2. La Comisión tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”<sup>387</sup>.

La urgencia o necesidad social a la que nos referíamos en el análisis de las primeras comisiones de la verdad se veía aquí también reflejada y conectada, ahora sí, con el conocimiento de la verdad.

Como ya ocurrió en Chile<sup>388</sup>, donde el mandato de la comisión de la verdad eximía las funciones jurisdiccionales de sus competencias, el Acuerdo de Chapultepec

---

<sup>385</sup> Recordemos que la CVEL ya había sido concretada en el Acuerdo de México.

<sup>386</sup> Acuerdo de Chapultepec, capítulo 1, punto 5.

<sup>387</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Carta de fecha 29 de marzo de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General*, Doc. S/25500, 1 de abril de 1993, pp.201-202.

seguía esta misma tónica: verdad y justicia no iban a suponer en ningún caso pasos alternativos, sino complementarios, al formar parte de dos obligaciones estatales diferentes<sup>389</sup>.

El derecho a la verdad, pese al escaso desarrollo por parte de los órganos de protección de derechos humanos, empezaba a mostrar su importancia en contextos en los cuales el conocimiento de lo sucedido era vital no solo para una auténtica reparación de las víctimas, sino para, como muestra el Acuerdo de Ginebra (preludio de los Acuerdos de Paz de El Salvador<sup>390</sup>), alcanzar los siguientes objetivos: terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña<sup>391</sup>.

A tenor de que lo anterior componía los puntos a alcanzar por ambas partes, la posterior creación de la CVES habría de suponer el mecanismo idóneo para lograr alguno de ellos como, por ejemplo, la reunificación de la sociedad salvadoreña y el consecuente respeto a los derechos humanos.

Una vez definida la búsqueda de la verdad como innegociable dentro del proceso transicional, el medio que se utilizaría a tal efecto fue también parte de las conversaciones. Como hemos venido observando a lo largo de este período, una de las razones principales para encargar a un organismo independiente la investigación ya sea de un hecho determinado, o de un período prolongado de violaciones de derechos humanos, ha sido los recelos a que esa investigación fuera liderada por el Poder Judicial o por un medio controlado por el Estado, tal y como ocurrió en la experiencia vivida en Ghana<sup>392</sup>. Parecido fue el caso de Nepal donde, pese a que fue constituido un medio específico para la investigación de un hecho determinado, al estar este presidido por una

---

<sup>388</sup> Para una comparativa entre las comisiones de la verdad implementadas en Chile y El Salvador véase, ENSALACO, M., "Truth Commissions for Chile and El Salvador: A Report and Assessment", *Human Rights Quarterly*, vol. 16, 1994, núm. 4, pp.656-675.

<sup>389</sup> Decreto 355, punto 2.

<sup>390</sup> Las negociaciones de paz que impulsaron tiempo después los Acuerdos de El Salvador entre el FMNL y el Gobierno comenzaron formalmente en los Acuerdos de Ginebra, con la ONU también como organismo mediador, el 4 de abril de 1990. En estos acuerdos se dispusieron el format, la metodología y los objetivos a alcanzar en las posteriores conversaciones de paz. POPOKIN, M., *Peace without justice: obstacles to building the rule of law in El Salvador*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2000, pp.82-83; COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Experto independiente sobre El Salvador... op.cit.*, p. 10.

<sup>391</sup> *Ibid.*

<sup>392</sup> Priscilla Hayner sostiene que las comisiones de la verdad suelen ser constituidas en contextos donde el sistema judicial es muy débil, y este no suele realizar su labor conforme a los estándares internacionales bien por corrupción, o porque poseen un sesgo político determinado. En cualquier caso, las posibilidades de que se lleve a cabo un proceso serio e imparcial suelen ser improbables. HAYNER, P., *Verdades innombrables... op.cit.*, p.129.

autoridad gubernamental, su pretendido carácter de imparcialidad quedaba puesto enteramente en entredicho.

Contando con estos precedentes, la composición del organismo era fundamental pues, teniendo presente que era necesario llevar a cabo una investigación de los hechos pasados, ninguna de las partes estaba dispuesta a que esta estuviera liderada ni por el Poder Judicial<sup>393</sup>, ni por un órgano compuesto por personal salvadoreño<sup>394</sup>. La solución que mejor se adaptaba a la realidad de las negociaciones era una comisión independiente formada, para que así fuera, por únicamente personal extranjero que investigara “graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”<sup>395</sup>.

Como última apreciación apuntar que, aunque el derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad de los hechos estuvo lo bastante presente dentro de las negociaciones de paz entre los bandos contendientes como para instaurar un mecanismo a tal efecto, los acontecimientos que sucedieron a la publicación del informe (15 de marzo de 1993) dieron un giro de ciento ochenta grados a la situación.

En efecto, una de las principales particularidades con las que contó la CVES (siguiendo así la práctica que inauguró la comisión de la verdad de Ghana) fue la potestad de publicar los nombres de los implicados en las violaciones de derechos humanos<sup>396</sup>, opción que se justificó, *inter alia*, en las deficiencias con las que contaba el Poder Judicial para depurar responsabilidades penales individuales<sup>397</sup>. En consecuencia, más de cuarenta altos cargos militares, judiciales y de la oposición armada fueron

---

<sup>393</sup> Y es que el FMNL apoyaba una reforma integral del mismo, lo que quitaba de la mesa de negociaciones, por el momento, una investigación judicial.

<sup>394</sup> BUERGHEMANTAL, T., “La Comisión de la Verdad para El Salvador”, *op.cit.*, pp.16-17.

<sup>395</sup> Esta competencia *ratione materiae* se adaptó como solución intermedia entre las posiciones iniciales de las partes, cuya intención inicial era la investigación de casos concretos. Sin embargo, a cada listado de casos presentado por una parte, le era seguida una contrarréplica con un listado más extenso, no generándose acuerdo alguno. La única opción viable era que fuera la propia comisión la que eligiera los casos a investigar. *Ibid.*, p.17; POPKIN, M., ROTH – ARRIAZA, N., “Truth as Justice: Investigatory Commissions in Latin America”, *Law & social inquiry*, vol. 20, 1995, núm.1, p.87.

<sup>396</sup> Interesante es traer aquí las reflexiones de Thomas Buerghental sobre la inclusión de los nombres de los perpetradores dentro del mandato de la comisión: “Los tres habíamos dado por sentado, de la manera más natural, que la investigación no quedaría completa a menos que se identificara a los responsables de tales hechos. Era un tema que resultaba tan obvio que no requería de mucho debate y explicar por qué (...). Cuando leí por primera vez el mandato de la Comisión, llegué a la conclusión de que una de nuestras tareas sería la de identificar a quienes habían cometido los graves hechos de violencia que habríamos de investigar”. BUERGHEMANTAL, T., “La Comisión de la Verdad para El Salvador”, *op.cit.*, p. 34. Sobre esta experiencia concreta de El Salvador puede consultarse: POPKIN, M., *Peace without justice... op.cit.*, pp.112 y ss. Para un análisis general véase epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>397</sup> SIEDER, R., “Políticas de guerra, paz y memoria en América Latina”, en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR, P., y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (eds.), *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002, p.259.

identificados como partícipes en los hechos<sup>398</sup>. Sin embargo, tras la publicación del informe y, por tanto, habiendo conocido la sociedad la identidad de los victimarios, la respuesta oficial “se concretó en el total desacuerdo y rechazo público de miembros de la oligarquía dominante, el poder ejecutivo, el estamento militar, y la Corte Suprema”<sup>399</sup>.

Esta disconformidad se consolidó cinco días después en forma de ley de amnistía<sup>400</sup>, la cual ha impedido que ninguno de los victimarios identificados en el informe final fuera juzgado y que así la verdad judicial<sup>401</sup> pudiera ser conocida<sup>402</sup>. Este tipo de decisiones no han favorecido el tránsito de El Salvador por el camino de la verdad abierto con la CVES.

### 1.5. Polonia.

La práctica sobre la investigación del pasado en Polonia constituyó un híbrido entre la búsqueda de la verdad y la investigación judicial. La *Chief Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation*, creada en 1991<sup>403</sup>, no se limitaría a la investigación de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial<sup>404</sup>, sino que también incluiría abusos cometidos bajo el régimen de Iósif Stalin, siendo la primera comisión creada para la investigación de la represión comunista tras la desaparición de la Unión Soviética.

El mandato de esta comisión, atendiendo a lo recogido por Brian Grodsky en una entrevista con Aleksander Bentkowski, ministro de justicia en 1991, era: “part historical and in part, as indicated by the name, legal, as the commission was designed to track

---

<sup>398</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...* op.cit., p.72.

<sup>399</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia...* op.cit., p. 366.

<sup>400</sup> Decreto legislativo núm. 486 de 20 de marzo de 1993.

<sup>401</sup> Recordemos que este concepto ya lo analizamos en el epígrafe 1.2. del presente capítulo en relación con las OF del Comité DH a Guatemala de 1996. Allí separamos la verdad que podría ser conocida a través de procesos judiciales (verdad judicial) de lo conocido en procesos extrajudiciales (verdad extrajudicial).

<sup>402</sup> MÉNDEZ, J., “The Human Right to Truth...”, op.cit., p. 126. Otro de los pasos atrás dados, aunque más en el terreno de las reparaciones que de la verdad, ha sido la falta de implementación de una sola de las recomendaciones que acompañaban al informe final de la CVES, p.127.

<sup>403</sup> Ley 45 – 195 de 5 de abril de 1991, Gazeta Wyborcza.

<sup>404</sup> La antecesora de esta comisión fue la *Central Commission for the Investigation of German Crimes in Poland*, creada en 1945. Esta comisión fue investida para la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura nazi en Polonia y, de esa manera, presentar pruebas dentro del marco de actuación de los juicios de Núremberg. ZAMOC, L., “Introductory note”, *Chelmino Extermination Camp*, University of San Diego. Disponible en: <http://pages.ucsd.edu/~lزامosc/gchelmno.html> (Consultado el 6 de junio de 2016).



down and prosecute Stalin-era rights abusers-a process that already had been initiated by the justice minister, even before the passage of this formal law”<sup>405</sup>.

La actividad de esta comisión, por tanto, daba respuesta a las demandas de verdad de la sociedad por su componente histórico y de carácter global y a las de las víctimas individuales, al individualizarse responsabilidades para que posteriormente fueran depuradas en sede judicial y conocerse de esa manera la verdad individual.

Como ya ocurriera con otros Estados post comunistas posteriormente, también fueron adoptados distintos mecanismos para que la sociedad conociera la actuación del régimen anterior. En efecto, como complemento a la creación de la comisión, el 19 de diciembre de 1998 se adoptó una ley que creaba el Instituto Nacional de la Memoria y la Comisión para la Persecución de los Crímenes contra la Nación Polaca. Las funciones de esta institución eran, atendiendo al artículo 1 de su ley constitutiva:

“(...) the recording, collecting, storing, processing, securing, making available and publishing of the documents of the state security authorities, produced and accumulated from July 22, 1944 until July 31, 1990, as well as the documents of the security authorities of the Third Reich and the Soviet Union relating to:

a) -The Nazi crimes, - the communist crimes, - other crimes against peace, humanity or war crimes, perpetrated on persons of Polish nationality or Polish citizens of other nationalities between September 1, 1939 until July 31, 1990.

b) Other politically motivated reprisals, instigated by the officers of the Polish law enforcement agencies or the judiciary or persons acting on their order which were disclosed in the contents of the rulings made on the strength of the Act, dated February 23, 1991, on considering as invalid the rulings made in the cases of persons oppressed for their activities for the cause of an independent Polish State (Journal of Laws No. 34, section 149, with later amendments).

c) The actions of the state security authorities described in artículo 5”.

La creación de estas instituciones, tal y como argumentó el Estado al requerimiento de la OACNUDH para la redacción del informe 21/7 sobre el derecho a la verdad, respondía a “offer availability of preserved records to users (individuals or

---

<sup>405</sup> GRODSKY, B., “Beyond Lustration. Truth-Seeking Efforts in the Post-Communist Space”, *Taiwan Journal of Democracy*, vol. 5, 2009, núm. 2, p.31.

institutions) on the clear conditions stipulated by normative legal acts and relevant internal regulations publicly known to interested parties”<sup>406</sup>.

Con la creación de estas instituciones se pretendía, así, la puesta pública de información referente a la época de violaciones de derechos humanos. No obstante, esta legislación hubo de ser complementada con una ley de depuración de la administración pública (*Polish Lustration Act*) de junio de 1997, mediante la cual el candidato a cualquier puesto de la administración pública debía de presentar un escrito en el cual establecía que no había pertenecido o colaborado con los servicios secretos del Partido Comunista. Esta declaración sería examinada por un tribunal, el cual inhabilitaría durante diez años al candidato en caso de haber mentido<sup>407</sup>.

### **1.6. Alemania.**

Pocos países cuentan con un historial tan marcado por el totalitarismo y el conflicto armado como Alemania durante el s. XX. Al horror que sufrió toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial, a Alemania hay que añadirle los cuarenta años de cruda dictadura comunista bajo el manto de la Unión Soviética, representada esta en el Este de Alemania por el *Sozialistische Einheitpartei Deutschlands* (SED).

El primer Gobierno tras la unificación alemana (iniciada tras la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989), tenía pues la importante y complicada tarea de llevar la democracia a la parte oriental de Alemania (Estado que no contaba con un Gobierno demócrata desde los años treinta), junto con la gestión de las medidas de justicia de transición necesarias para la superación de dos dictaduras distintas en el mismo territorio: la nacionalsocialista y la comunista.

Debido a que el espectro temporal de este trabajo comienza en 1970 y que la principal medida de recuperación de la verdad de la dictadura nazi fueron los juicios penales (teniendo como iconos a Núremberg y Tokio), junto con la aparición de numerosas investigaciones históricas acerca de este régimen, que han propiciado la gestación de un fuerte y casi inquebrantable consenso social sobre lo ocurrido durante el

---

<sup>406</sup> Tal contestación puede consultarse en: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Right to the truth – National Archives on Human Right”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/en/issues/truth/pages/truthIndex.aspx> (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>407</sup> DAVID, R., “Lustration Laws in Action: The Motives and Evaluation of Lustration Policy in the Czech Republic and Poland (1989-2001)”, *Law & Social Inquiry*, vol. 28, 2003, núm. 2, p. 411.

régimen nazi, las medidas que a continuación se analizarán serán las que se implementaron para la superación de la dictadura comunista.

Desde un prisma general de justicia de transición, estas han sido clasificadas por una parte de la doctrina como un compendio de juicios penales, purgas en la administración, justicia moral y recuperación de la verdad<sup>408</sup>.

En materia de verdad el nuevo Gobierno de unificación constituyó dos comisiones de investigación (la segunda orientada a cubrir las carencias de la primera) con la intención de arrojar así respuestas ante el desconocimiento del funcionamiento del aparato del Estado durante la dictadura del SED. Sin embargo, con anterioridad a la institución de ambas comisiones, y dentro también del análisis de medidas encaminadas al conocimiento de la verdad, hemos de referirnos a la gestión de los archivos contenedores de información, tema de alta relevancia a los efectos que nos ocupan.

Las protestas que precedieron y continuaron a la caída del muro de Berlín por parte de la población de Alemania del este se fundamentaban en que desde 1933 habían convivido dentro de un sistema opaco, donde la actividad de la administración era desconocida para toda la población. Este sistema ya no podía seguir convenciendo a la sociedad de que “it was doing its job – taking care of the people welfare”<sup>409</sup>. De esta forma, el inicio de lo que se pretendía que fuera una nueva época democrática debía estar presidido y liderado inexorablemente por toda una serie de medidas encaminadas al conocimiento de las actuaciones del pasado.

Como acabamos de contemplar que ocurrió en El Salvador y anteriormente en el Chad, la identidad de aquellos que habían participado en los actos de violación de derechos humanos formaba parte fundamental del conocimiento integral de la verdad. Sin embargo, al contrario de en estos contextos, el acceso a los archivos y la gestión inicial de los mismos fue otorgada con anterioridad a un organismo diferente al de la comisión de la verdad que se instituyó en Alemania en 1992 (*Enquete Kommission des Deutschen Bundestages* [*Enquete Kommission*, en adelante]). La *Behörde des Bundesbeauftragten*, llamada popularmente “Oficina Gauck” (debido al nombre de su presidente, Joackim Gauck), tuvo el encargo tras las primeras elecciones democráticas en marzo de 1990 de investigar todos los archivos de la *Staatssicherheit* (Stasi, la

---

<sup>408</sup> GLATTE, S., “Judging the (east) German Past. A Critical Review of Transitional Justice in Post-Communist Germany”, *Oxford Transitional Justice Research*, vol.5, 2011, p.9.

<sup>409</sup> GACUK, J., “Dealing with Stasi Past”, *Deadlus*, vol.123, 1994, núm.1, p.277.

policía secreta de la República Democrática Alemana) para conocer la identidad de sus miembros, sus colaboradores y las acciones que este cuerpo llevaba a cabo<sup>410</sup>.

La gestión de los archivos supone una de las principales medidas para el conocimiento del pasado represivo de un Estado y una de las políticas que mejor representa la gestión del legado dejado por las violaciones de derechos humanos en los antiguos países comunistas, como se irá viendo a lo largo del trabajo.

La *Stasiunterlagengesetz*<sup>411</sup>, ley promovida por esta misma oficina, supuso la apertura al público de toda la información gestionada por la Stasi, así como el uso de esa información para “political, judicial, and historical reckoning with the past”<sup>412</sup>. De esta libertad de uso de la información fue de la que posteriormente se benefició la investigación de la *Enquete Kommission*, pues cualquier ciudadano podía acercarse a la “Oficina Gauck” para conocer de primera mano el funcionamiento de la antigua policía del régimen; los nombres propios, las corporaciones públicas y privadas que con ella colaboraban, así como su propia ficha personal si la hubiere. La desclasificación supuso otorgar un poder a la ciudadanía sin precedentes<sup>413</sup>, ya que en palabras del propio Joachim Gacuk, el permiso de acceso a estos archivos suponía que: “[e]ach citizen was to be allowed to examine his or her own file to discover if and how the *Stasi* had acted”<sup>414</sup>.

El conocimiento de este tipo de información suponía una concreción tanto del derecho a la verdad de la sociedad a conocer la identidad de aquéllos que habían estado participando en la violación de derechos humanos durante cuarenta años, como del derecho a la no repetición de los hechos<sup>415</sup>. Es más, la apertura de los archivos ponía en marcha un efectivo sistema de purgas dentro de los organismos públicos del Estado, ya que cualquier ciudadano podía conocer el pasado de los servidores públicos, sabiendo de primera mano si alguien en particular había formado parte del Gobierno del SED o había colaborado con él de alguna manera. Las conocidas como *politische Aufarbeitung* (políticas de superación del pasado) permitían que cualquier servidor público (ya fuera cargo electo o no) fuera investigado para conocer si había pertenecido a la Stasi o había

---

<sup>410</sup> MÜLLER, J.W., “Alemania del Este: incorporación, verdad corrompida y doble división”, en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR, P., y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (eds.), *Las políticas hacia el pasado...* op.cit., pp. 388-392.

<sup>411</sup> StUG, ley de 20 de diciembre de 1991.

<sup>412</sup> GACUK, J., “Dealing with Stasi Past”, op.cit., p.279.

<sup>413</sup> MÜLLER, J.W., “Alemania del Este...”, op.cit., p.389.

<sup>414</sup> *Ibid.* Resaltado en el original.

<sup>415</sup> La conexión entre la no repetición y la verdad será analizada en el epígrafe 5.4 del capítulo IX.

sido colaborador externo (*Inoffizielle Mitarbeiter*<sup>416</sup>). Si tras este proceso se conocía que, en efecto, había habido colaboración de cualquier tipo, este estaba obligado a renunciar a su cargo<sup>417</sup>.

Habiendo controlado la gestión de los archivos que podían aportar importante material a los efectos de dar a conocer a la sociedad información sobre su propio pasado, la idea de crear una comisión que investigara los actos violatorios de derechos humanos cometidos bajo el régimen del SED seguía este mismo propósito.

La *Enquete Kommission* fue constituida recién estrenado el nuevo Parlamento alemán mediante la Ley 12/2597 de 14 de mayo de 1992, con el objetivo de dilucidar las causas y las consecuencias de la dictadura en Alemania oriental.

La fundación de esta comisión no estaban bajo ningún concepto viciada por “la justicia de los vencedores” (como sí fue el caso de los Juicios de Núremberg que se sucedieron al término de la Segunda Guerra Mundial), sino que fue iniciativa propia de la sociedad oriental alemana<sup>418</sup>, la cual pretendía una correcta gestión de su pasado histórico e ideológico como medio para evitar su repetición. No obstante, el mandato de la comisión apuntaba a la obligación del (nuevo) Estado alemán para con las víctimas:

“(...) the commission of inquiry appointed by the March 12, 1992 resolution of the Bundestag has a specific mandate. *It carries this obligation for the people of all of Germany*, but above all to the Germans in the new Federal Germany [German Länder], who had been subjected to dictatorial reforms of governments for nearly six decades; the Bundestag considers it an essential concern of the commission to offer them help in confronting the past and assessing personal responsibility”<sup>419</sup>.

---

<sup>416</sup> La Stasi, desde su fundación en 1950, había contado con doscientos cincuenta mil agentes a tiempo completo, de los cuales noventa y un mil quince seguían en activo a octubre de 1989. En cuanto a los agentes no oficiales (colaboradores), pues su número ascendía a seiscientos mil entre 1949 y 1989, de los cuales setecientos setenta y cuatro mil seguían en activo a diciembre de 1988. Esto significaba que había un miembro de la Stasi por cada cincuenta y cinco ciudadanos de la RDA. Véase, GLATTE, S., “Judging the (east) German Past...”, *op.cit.*, p. 16.

<sup>417</sup> *Ibid.*, p.279.

<sup>418</sup> BEATTIE, A., *Playing Politics with History: The Bundestag Inquiries into East Germany*, Nueva York-Oxford, Berghahn Books, 2008, p.24.

<sup>419</sup> El mandato de la comisión incidía, de hecho, en la necesidad social de la población de esta parte de Alemania por conocer lo ocurrido: “Many people are looking for clarification, struggling for orientation in dealing with their own and other’s responsibility and culpability; they are asking questions about the roots of the dictatorial system set in the SDZ/GDR [the former German Democratic Republic], about the political, mental and intellectual and emotional effects of the dictatorship; about the possibilities of political and moral rehabilitation if the victims”. Ley 12/2597 de 14 de mayo de 1992. Sin negrita en el original.

La investigación del pasado represivo de la antigua República Democrática Alemana (RDA) era una obligación de la cual era consciente el Estado alemán, en parte, por la necesidad de la sociedad de Alemania oriental de confrontar su largo pasado represivo<sup>420</sup>. La perspectiva que tomó, por tanto, la creación de la comisión iba dirigida, como algunos miembros de la cámara la denominaron, a: “search for truth”<sup>421</sup>, en alusión a que el pasado histórico de la RDA era totalmente desconocido por la sociedad<sup>422</sup>.

Una perspectiva importante que tomó en cuenta el mandato de la comisión fue la diferenciación entre la investigación que iba a emprender la comisión y una investigación histórica per se, la cual sería, en cualquier caso y atendiendo al literal del propio mandato, igualmente necesaria<sup>423</sup>. La diferencia sustancial entre ambas residiría en las distintas dimensiones en las que cada una de ellas se centrarían, pues los trabajos de la comisión no supondrían un mero repaso histórico al Gobierno de la RDA, sino, volviendo al contenido del mandato, “to make contributions to political-historical analysis and to political-moral assessment”<sup>424</sup>. Ello podría comportar, en última instancia, el inicio de depuraciones en la administración e, igualmente, una futura incoación de una investigación judicial.

Sin embargo, pese a que esta fue la predisposición inicial y la que motivó su creación, la realidad posterior distaría mucho de acercarse a lo que hemos venido exponiendo hasta ahora. Teniendo presente lo visto en El Salvador, cuya independencia fue fruto de la acertada elección de sus comisionados, la *Enquete Kommission* se sitúa en el polo opuesto pues fue fundada dentro de la estructura existente en Alemania para las comisiones de investigación parlamentarias, donde los comisionados eran elegidos proporcionalmente a la representación política del Parlamento<sup>425</sup>; la comisión estuvo formada por dieciséis parlamentarios, once académicos y presidida por Rainer Eppelman, antiguo opositor al Gobierno de la RDA.

---

<sup>420</sup> Para Holly Cartner: “(...) [t]he parliamentary commission is seen as a way to investigate and provide an accurate record of the events and practices that took place in East Germany under communist rule. The commission is not focused on the criminal activity of individuals... but is an effort to tell stories of the victims and the impact that the government policies had on people’s live”. Declaraciones recogidas en KRITZ, N.J. (ed.), *Transitional Justice: how emerging democracies reckon with former regimes. Vol.I*, Washington, United State Institute of Peace, 1995, p. 241.

<sup>421</sup> Declaraciones del parlamentario Gert Weisskirchen (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands*), reproducidas en: BEATTIE, A., *Playing Politics with History...* op.cit., p. 32.

<sup>422</sup> Apreciaciones del grupo parlamentario *Sozialdemokratische Partei Deutschlands*, véase: *Ibid.*

<sup>423</sup> El mandato reconocía que: “The commission of inquiry shall not forestall or replace the necessary historical research”. Ley 12/2597 de 14 de mayo de 1992.

<sup>424</sup> *Ibid.*

<sup>425</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...* op.cit., p.99.

Esta alta politización que sufrió la comisión (pues la mayoría de los comisionados parlamentarios pertenecían al partido del Gobierno) produjo que los requerimientos de las víctimas no fueran tenidos en cuenta. Rainer Eppelman sugirió que la comisión tuviera la potestad de participar en todo debate parlamentario que estuviera relacionado con las víctimas y perpetradores del período investigado. Esta opción pudiera haber hecho que el debate, o la visión sobre lo ocurrido durante la dictadura del SED, se hubiera focalizado más en la situación de las víctimas que como en realidad fue. Desgraciadamente su requerimiento no fue respaldado por los comisionados afines al partido del Gobierno ante la posibilidad de que se pusieran de manifiesto deficiencias en la gestión de la transición o hacer propuestas que le incomodaran<sup>426</sup>.

Esta falta de participación de la ciudadanía, y en concreto de las víctimas en los trabajos de la comisión, provocó que su mismo impacto en la sociedad, y el de su informe final, fuera bastante limitado<sup>427</sup>. Dicho informe, titulado *Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland* (publicado en 1994), contaba con más de quince mil páginas e incluía los testimonios de las víctimas, evaluaciones teóricas y políticas sobre las consecuencias de la dictadura y las recomendaciones pertinentes. Este informe no solo por el volumen de documentación, sino por la falta de información directamente relacionada con el padecimiento sufrido por las víctimas, fue visto más como un trabajo académico que como un proyecto que involucrara verdaderamente a la población<sup>428</sup>. Según Jan – Werner Müller, la falta de impacto, e incluso de profundidad y rigor con la que contó la *Enquete Kommission*, fue producto de una sensación de que “nada estaba en juego” y “solo logró presentar narraciones contradictorias y memorias selectivas que se organizaban en función de criterios partidistas”<sup>429</sup>.

En conclusión, y tras todo lo anteriormente analizado, podemos sostener que la búsqueda de la verdad como forma de reconocer públicamente el padecimiento de las víctimas, y como obligación del Estado alemán, fue lo que justificó la creación de la

---

<sup>426</sup> BEATTIE, A., *Playing Politics with History...* op.cit., p.65.

<sup>427</sup> A pesar de que la comisión no pidió a la ciudadanía que rindiera testimonio, llegó a realizar veinticinco audiencias públicas y ciento cincuenta audiencias fueron desarrolladas en el seno de distintos subcomités que tomaron declaración a testigos individuales, entre los que se encontraban representantes de grupos de ayuda a víctimas y también algunas de ellas. Véanse, HAYNER, P., *Verdades innombrables...* op.cit., p.100. Igualmente, MCADAMS, A.J., *Judging the Past in Unified Germany*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p.91.

<sup>428</sup> *Ibid.*, pp.90-91.

<sup>429</sup> MÜLLER, J.W., “Alemania del Este...”, op.cit., p.382. Este mismo autor, en este mismo sentido, recoge que “para los estudiosos de la dictadura germano-oriental esto [el informe final] puede equivaler a lo que representan las actas de los Juicios de Núremberg para los que estudian el Tercer Reich”, p.393.

comisión, sin embargo, coincidimos con Andrew Beattie en que la tendencia de muchos de los parlamentarios (y en general de la comisión en sí) fue la de deslegitimar al Gobierno de la RDA, más que relatar la verdad sobre la historia de las víctimas<sup>430</sup>.

### 1.7. Honduras.

Durante la década de los setenta y ochenta, Honduras estuvo salpicada por varias etapas de represión militar, ya fuera por la sucesión en el Gobierno de varios regímenes dictatoriales primero, ya fuera por la posterior connivencia de los Gobiernos civiles con las prácticas represivas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas<sup>431</sup>.

El establecimiento de Honduras como base de los Estados Unidos en su contienda contra Nicaragua convirtió su territorio en un nuevo escenario de la “Guerra Fría”<sup>432</sup> y trajo como consecuencia la radicalización del estamento militar durante los años ochenta. Esta situación se prolongó hasta el cese de las actividades norteamericanas en territorio hondureño y la subsiguiente convocatoria de elecciones entre finales de los años ochenta y comienzos de la década de los noventa<sup>433</sup>.

Con la consolidación de la estabilidad y la pacificación lograda por los Gobiernos civiles comenzaron a implementarse las primeras medidas transicionales. Entre estas medidas destacan, por ejemplo, la eliminación de la Dirección Nacional de Investigaciones, la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación, el Ministerio Público, el Fiscal Especial de Derechos Humanos o la Comisión de Alto Nivel para la

---

<sup>430</sup> BEATTIE, A., *Playing Politics with History... op.cit.*, pp.83-84.

<sup>431</sup> Estas prácticas represivas ocurridas durante la década de los ochenta fueron corroboradas por la Corte IDH en su ya comentada primera sentencia contenciosa: “La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que considera probados, a saber: a) Que en la República de Honduras, durante los años de 1981 a 1984, un número de personas, entre 100 y 150, desapareció sin que de muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna (testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa). b) Que tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados que actuaban con aparente impunidad, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas (testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa). c) Que la población consideraba como un hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías o por personal bajo su dirección (testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa)”. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, Fondo, 29 de septiembre de 1988, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, N° 4, párr. 147. Para un análisis sobre el papel de la verdad dentro de esta sentencia puede consultarse epígrafe 4.3 del capítulo I.

<sup>432</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia... op.cit.*, p.350.

<sup>433</sup> POPKIN, M., ROTH – ARRIAZA, N., “Truth as Justice...”, *op.cit.*, p. 89.



Prevención y Lucha contra la Violencia y la Delincuencia<sup>434</sup>. Como puede apreciarse, entre todo este conjunto de mecanismo resalta la ausencia de una estricta comisión de la verdad, a modo de las que hemos venido comprobando en la práctica de Estados del entorno de Honduras, como Argentina, Uruguay, Chile o El Salvador.

En efecto, pese a que es correcto afirmar que en Honduras no ha sido instaurada una comisión de estas características, por el contrario, la función que estas han encarnado dentro de las prácticas de los Estados (la investigación extrajudicial de los hechos) sí fue asumida por otro órgano, concretamente, por el Comisionado Nacional Para la Protección de los Derechos Humanos<sup>435</sup>.

En 1992 el por entonces Presidente, Rafael Leonardo Callejas Romero, mediante el Decreto núm. 26-92<sup>436</sup>, creó el mencionado Comisionado con funciones análogas a lo que en otras jurisdicciones se ha calificado como Ombudsman, Defensor del Pueblo o Procurador de los Derechos Humanos. Dentro de las motivaciones que dieron lugar a la creación de este instrumento encontramos referencias a la práctica que durante esta

---

<sup>434</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia... op.cit.*, p.353.

<sup>435</sup> Leo Valladares, primer Comisionado Nacional para la Protección de Derechos Humanos, sostuvo que debido al nuevo clima democrático y de respeto a los derechos humanos que se inauguró con la presidencia de Carlos Roberto Reina, no sería necesario la constitución de una comisión de la verdad. El Comisionado defendía esta afirmación alegando a “la capacidad de las autoridades democráticas para concluir judicial y administrativamente esta investigación preliminar”, debido a que el Gobierno de Honduras no se encontraba en una época de “cuestionamiento de su legitimidad, como fue el caso de los países que tuvieron que recurrir a ese tipo de comisiones”. La pertinencia de esta afirmación no deja de ser desafortunada ya que tras las experiencias estudiadas y conociendo la experiencia posterior de Honduras, donde la mayoría de las recomendaciones del informe no fueron implementadas ni ningún procedimiento judicial fue incoado, la legitimidad del Gobierno en cuestión no es óbice para que este decida iniciar o no una investigación de lo sucedido. Por un lado tenemos el ejemplo del Chad, donde el Presidente *de facto* Idriss Déby, ya analizamos, constituyó una comisión de investigación de los hechos ocurridos bajo el gobierno también *de facto* de Hissène Habré. Por otro lado, *supra* hemos comprobado cómo un Gobierno legítimo, como fue el alemán tras la caída del muro de Berlín, fundó dos comisiones para la averiguación de la verdad durante la dictadura del SED. La elección de que sea una comisión de la verdad la pertinente para la investigación de los hechos reside, primero, en la voluntad del Estado de respetar el derecho a la verdad de sus víctimas y de la sociedad; y, posteriormente, en confiar en la imparcialidad y objetividad del trabajo que realice este tipo de mecanismo, independientemente de que sea un Gobierno legítimo el que la funde.

<sup>436</sup> Decreto núm. 26-92, de 8 de junio de 1992. Este decreto fue posteriormente complementado con el Decreto Ejecutivo 6/51-92 de 8 de septiembre de 1992 para reafirmar su independencia. El Comisionado de este modo era elegido por el Presidente de una lista elaborada por la Comisión Nacional de Reconciliación (art. 4 Decreto 26-92) y podía ser únicamente cesado en sus funciones por el voto de dos tercios de dicha Comisión (art. 8 Decreto Ejecutivo 6/51-92). Dentro del propio informe final presentado por el Comisionado tras su investigación sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Honduras entre 1980 y 1993, contempló que su denominación procedía de la competencia del Presidente, según la Ley de Administración Pública, para nombrar “Comisionados” para determinadas tareas específicas. La decisión de que su nombramiento fuera a propuesta de la Comisión Nacional de Reconciliación provenía de la importancia de que el Comisionado tuviera un componente social, ya que dicha Comisión fue creada durante el proceso de pacificación y democratización de Centro América. Véase, COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, *Los hechos hablan por sí mismos: Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993*, Tegucigalpa, Editorial Guaymurás, 2.ª ed., 2002, p.25.

época venían siguiendo diferentes organismos de protección de derechos humanos. En lo concreto, el considerando del Decreto núm. 26-92 establecía:

“(…) numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, (...) recomiendan el establecimiento de sistemas y mecanismos específicos de prevención, protección y defensa a los derechos humanos, a fin de velar por la efectiva vigencia de estos derechos”<sup>437</sup>.

Respecto a las funciones encargadas al Comisionado destacan: vigilar el cumplimiento de las acciones y medidas para el respeto y defensa de los derechos humanos; velar por el respeto de los derechos humanos por parte del Estado y los particulares; prestar atención inmediata y dar debido seguimiento a cualquier denuncia sobre la violación a los derechos humanos; vigilar la aplicación de las normas en materia de derechos humanos y proceder a su ejecución cuando corresponda<sup>438</sup>.

A modo de resumen de su actividad, Leo Valladares, primer Comisionado y a la sazón responsable de realizar la investigación sobre lo acaecido en Honduras entre 1980 y 1993, resumió la pertinencia de haber creado un órgano de tales características en que: “[s]e había dejado sentir en Honduras la necesidad de crear una institución que como dependencia de las autoridades pudiera amparar a aquellas personas que eran víctimas de abusos, negligencia falta de acción de quienes estén obligados a cumplir las leyes”<sup>439</sup>. Será precisamente en este contexto de “cubrir” los vacíos de aquellos que hacían dejación de sus obligaciones, donde se encuadró la investigación del Comisionado.

La iniciativa de Leo Valladares contó con el apoyo de las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos, del Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Honduras, de la Comisión de la Verdad de El Salvador y de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos<sup>440</sup>.

---

<sup>437</sup> En el plano de la AG, el decreto hace referencia a la serie de resoluciones sobre “Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”, en donde se “[i]nvita a los Estados Miembros a que adopten las medidas apropiadas para el establecimiento de instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 34/49. Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos*, 23 de noviembre de 1979.

<sup>438</sup> COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, *Los hechos hablan por sí mismos... op.cit.*, p.26. El lista completo y oficial de funciones puede consultarse en Decreto núm. 26-92, de 8 de junio de 1992, art. 5.

<sup>439</sup> *Ibid.*, p.25.

<sup>440</sup> SIEDER, R., “Políticas de guerra, paz y memoria...”, *op.cit.*, p.258.

Siguiendo con el desarrollo de la pertinencia de haber iniciado una investigación de estas características en Honduras en esta época, pasaremos a la evaluación del informe de Leo Valladares, valioso documento a favor de la importancia de conocer la verdad dentro de una situación de postconflicto. Dentro de este informe, el Comisionado expuso que:

“Las recomendaciones de este informe se orientan por el principio de que hay que conocer la Verdad y hacer Justicia para lograr la necesaria reconciliación de todos los hondureños. Hemos creído que, por la salud moral del país, es indispensable conocer lo que realmente pasó con las desapariciones. Luego de conocer la verdad, la que solo quedará plenamente establecida con las investigaciones judiciales correspondientes viene el proceso de hacer justicia. Se trata de establecer responsabilidades, identificar plenamente y someter a juicio a los responsables ¿Cómo perdonar sin saber qué fue lo que ocurrió ni quién es el responsable? Solo después de conocer la verdad y practicar la justicia es posible el perdón y la reconciliación. No se puede perdonar a quien no se arrepiente y mucho menos a quien no se identifica. Si bien toda acción humana es perdonable, alcanzar la reconciliación solo se logra tras el conocimiento de la verdad y el establecimiento de la justicia”<sup>441</sup>.

Como ya se analizara en mandatos de anteriores comisiones a modo de justificar su creación, las virtudes que su constitución acarreó a efectos de reconciliación nacional fueron paralelas a las de la consecución de justicia. La investigación extrajudicial no sustituirá la necesaria instrucción judicial, pues, según expuso Leo Valladares, la verdad no será completa si ambas investigaciones no se complementan.

Leo Valladares definió el derecho a la verdad como “la facultad de los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, de conocer realmente qué pasó con sus familiares. Eso incluye entre otros extremos, todas las circunstancias de su captura, detención y eventual ejecución extrajudicial”<sup>442</sup>. Del mismo modo, también reconoció el carácter colectivo de este derecho, pues “se extiende también a todos los

---

<sup>441</sup> *Ibid.*, p. 406.

<sup>442</sup> COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, *Los hechos hablan por sí mismos... op.cit.*, p.390.

ciudadanos del país que fueron afectados por las violaciones, quienes tienen el derecho de saber qué pasó con sus conciudadanos y quiénes fueron los responsables”<sup>443</sup>.

Por otro lado, los fundamentos jurídicos que refrendaron la investigación liderada por el Comisionado (pues ya hemos comprobado la importancia brindada a la consecución de la verdad), como sus posteriores conclusiones, donde fue hallada una violación del derecho a la verdad, estuvieron basadas en la práctica de la Corte y la Comisión IDH y la de los Estados de su entorno<sup>444</sup>.

El Comisionado reconoció así que: “los nuevos desarrollos del Derecho internacional de los Derechos Humanos afirman que existe un derecho humano a conocer la verdad”. Esta afirmación vendría, por tanto, en concordancia con lo que hemos visto recogido en los mandatos de otras comisiones como Chile o El Salvador, donde se conectaba directamente la verdad con la necesidad social de investigar lo ocurrido. Ello amparaba, a su vez, la existencia de un desarrollo que desde años hemos comprobado que se da en este campo, con especial incidencia entre los Estados latinoamericanos.

## **1.8. Paraguay.**

Tras el descubrimiento de una serie de archivos el 22 de diciembre de 1992, posteriormente conocidos como “Archivos del Terror”<sup>445</sup> y que revelaban las prácticas represivas llevadas a cabo por el Gobierno de Alfredo Stroessner, se inició la aprobación de políticas dirigidas a la preservación de la memoria. Entre estos organismos se encuentran el Museo de la Justicia – Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos y el Plan Nacional para la Protección y Promoción

---

<sup>443</sup> *Ibid.*

<sup>444</sup> El Comisionado se remitió al caso de la Corte IDH, ya aquí analizado, *Velásquez Rodríguez c. Honduras* y al informe anual de la Comisión IDH de 1985-1986, y a los también informes de la Comisión IDH núm. 10 de 2 de octubre de 1992 y al 29/92 de 2 de octubre de 1992. Por su parte, aludió a las comisiones ya creadas de Argentina, Chile y El Salvador, como prueba de la práctica estatal de los países de su entorno; obvió las creadas en Bolivia y Uruguay.

<sup>445</sup> Según la UNESCO estos archivos comprenden: “documentos oficiales de la represión policial durante los treinta y cinco años de la dictadura de Alfredo Stroessner. El fondo documental de estos archivos aporta datos sobre la Operación Cóndor. Esa operación formó parte de la campaña de represión política, jalonada de asesinatos y actividades de los servicios secretos, que emprendieron en 1975 las dictaduras derechistas imperantes en el Cono Sur latinoamericano”. Véase, UNESCO, *Memoria del Mundo. Archivos del Terror*. Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-terror/> (Consultado el 10 de junio de 2016).

de los Derechos Humanos en el año 2000, que incluía la creación de una comisión de la verdad, la cual será comentada *infra*.

El Museo de la Justicia – Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos estaba orientado, según la Resolución 81 de 26 de marzo de 1993 de la Corte Suprema de Justicia, a “la preservación de los documentos y su contenido, en vista al valor jurídico, procesal e histórico mediante la aplicación de procedimientos modernos de control y manejo automatizado”.

La Corte Suprema de la Nación, órgano encargado de la gestión de estos archivos, pretendía “[c]onstruir un Banco de Datos permanente para atender las solicitudes de informes provenientes de las víctimas, familiares de las mismas, y los requerimientos provenientes de la justicia tanto nacional como internacional”<sup>446</sup> y hacer de este centro de documentación un lugar “que recuerde a los paraguayos y paraguayas una época de sufrimiento y lucha, al que puedan acceder no solo víctimas o familiares de los torturados o desaparecidos, sino de todos los jóvenes para que conozcan la parte oscura de nuestra historia que nunca debió existir”<sup>447</sup>.

Igualmente, y en respuesta al requerimiento de la OACNUDH en 2013 para la recopilación de práctica estatal en materia de archivos y derecho a la verdad<sup>448</sup>, Paraguay alegó la Ley 1099/97 sobre la “obligatoriedad del depósito de los documentos oficiales en el Archivo General de la Nación” de 21 de agosto de 1997 como práctica al respecto. Esta ley ordena que todos los archivos generados por los tres poderes del Estado sean conservados por diez años (artículo 1) y posteriormente entregados al Archivo General de la Nación para su preservación y custodia. Según el artículo 4 de esta misma ley la documentación de este archivo será de acceso público y será restringida solo por motivos de antigüedad o de conservación.

---

<sup>446</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, “Museo de la Justicia”. Disponible en: <http://www.pj.gov.py/contenido/132-museo-de-la-justicia/323> (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>447</sup> Las funciones de esta institución según alega el Ministerio de Relaciones Externas respondiendo a la OACNUDH para la elaboración del informe 21/7 sobre derecho a la verdad y archivos, son: “a) ORGANIZADORA Y CREADORA: mantener actualizadas las Bases de Datos; Conservar y preservar el fondo documental. FACILITADORA: i) Procesar e informar de la existencia o no de documentos solicitados por las víctimas y/o familiares para iniciar gestiones de reparación ante la Defensoría del Pueblo o ante la justicia; ii) Facilitar documentación a la justicia nacional y/o internacional en las causas abiertas por hechos violatorios de derechos humanos; iii) La asistencia y colaboración a estudiantes e investigadores que consultan la documentación en pantalla ya se encuentran digitalizada y ligada a las Bases de Datos (...). DIFUSORA Y FORMADORA: i) Charlas dirigidas a delegaciones de estudiantes de nivel medio y universitario de capital e interior del país; ii) organización y participación de eventos culturales, y, iii) capacitación permanente de personal destacado”. OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Right to the truth – National Archives on Human Right”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/en/issues/truth/pages/truthIndex.aspx> (Consultado el 15 de junio de 2016).

<sup>448</sup> *Ibid.*

Las políticas, sin embargo, con mayor impacto en materia de preservación de derecho a la verdad en Paraguay fueron adoptadas en la década siguiente.

### **1.9. Guatemala.**

Al igual que en las experiencias de El Salvador y Burundi, el proceso de transición de Guatemala no fue fruto de un triunfo de las fuerzas que pretendían instaurar una democracia<sup>449</sup> ni del desgaste político y social que sufrió un determinado Gobierno dictatorial, sino que fue producto de las negociaciones políticas entre dos partes: el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

No obstante, al contrario de lo que ocurrió en El Salvador, las posiciones en las que las partes se encontraban a la hora de negociar los acuerdos de paz en Guatemala eran mucho más desiguales de lo que por entonces eran en el país vecino. La URNG estaba ya a mediados de los años ochenta muy debilitada como fuerza militar lo que condicionó en gran medida las negociaciones de paz, pues el Ejército era reticente a la rendición de cuentas al poseer una posición mucho más fuerte que la de su adversario al disfrutar del apoyo y la complicidad del empresariado y clase política<sup>450</sup>.

Entre los motivos que el Ejército arguyó para justificar esta negativa inicial se encontraba su temor a que la investigación que se iniciara estuviera únicamente centrada en los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y obviara los de la contraparte, lo que haría que la polarización de la sociedad aumentara en vez de ayudar a su reconciliación<sup>451</sup>.

La posición del Gobierno cambió únicamente gracias a las presiones de la Iglesia (duramente castigada durante el conflicto), de colectivos de defensa de derechos humanos y de la ONU. Todos ellos favorecieron que el cumplimiento de la obligación de hallar la verdad de los hechos del pasado estuviera encima de la mesa de negociaciones<sup>452</sup>. Finalmente, el 23 de junio de 1994, un acuerdo de paz firmado en Oslo entre el Gobierno de Ramiro de León Carpio y la URNG, bajo el auspicio de Naciones Unidas, acordaba la constitución de una Comisión para el Esclarecimiento

---

<sup>449</sup> CORTÉS RODAS, F., “Los derechos de las víctimas de la violencia política a la verdad, la reparación y la justicia...”, *op.cit.*, p.66.

<sup>450</sup> SIEDER, R., “Políticas de guerra, paz y memoria...”, *op.cit.*, p.255-256.

<sup>451</sup> JOWDY, G., “Truth Commissions in El Salvador and Guatemala: A proposal for truth in Guatemala”, *Boston College Third World Law Journal*, vol. 17, 1997, p.305.

<sup>452</sup> *Ibid.*, p.256.

Histórico de las violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca (CEH<sup>453</sup>).

Tras la firma de este acuerdo, Rodrigo Asturias, líder de la URNG, declaró: “[w]e have for the first time been granted the right to know the truth. That is the most important step in order to put an end to the abuse”<sup>454</sup>. De esta forma, el mandato de la CEH reconocía “el derecho del pueblo de Guatemala a conocer plenamente la verdad sobre estos acontecimientos cuyo esclarecimiento contribuirá a que no se repitan estas páginas tristes y dolorosas y que se fortalezca el proceso de democratización en el país”<sup>455</sup>. El derecho a la verdad de la sociedad se convertía así en el sustento legal de la CEH. Sin embargo, el mandato contenía ciertas salvedades que limitaban el impacto de la verdad que la sociedad iba a poder conocer a través del trabajo realizado por la CEH<sup>456</sup>.

Una de las principales limitaciones con las que contó el mandato de la CEH fue la imposibilidad de individualizar responsabilidades, es decir, al contrario de la potestad que tenían los comisionados de la CVES de poder dar publicidad a la identidad de los victimarios identificados, la CEH tenía impuesta la siguiente cláusula: “Los trabajos, recomendaciones e informe de la Comisión no individualizarán responsabilidades, ni tendrán propósitos o efectos judiciales”.

---

<sup>453</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *La situación en Centroamérica: procedimiento para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo*, Doc. A/48/954, 1 de julio de 1994, anexo II.

<sup>454</sup> Declaraciones recogidas en: JOWDY, G., “Truth Commissions in El Salvador and Guatemala...”, *op.cit.*, p.306.

<sup>455</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS – CONSEJO DE SEGURIDAD, *La situación en Centroamérica: procedimiento para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo*, Doc. A/48/954 – S/1994/751, 1 de julio de 1994, anexo II, p. 13.

<sup>456</sup> Uno de los puntos también interesantes del mandato de la CEH es su composición. A pesar de haber sido promovida por una organización internacional, la CEH, al contrario de que lo que ocurrió con la CVES, no estaba compuesta únicamente de personal internacional, sino que se estimó que para este caso era más conveniente optar por una solución híbrida en cuanto a los comisionados que la iban a conformar: el presidente, Cristian Tomuschat, alemán, fue elegido por el Secretario General; los otros dos miembros de la CEH, Otilia Lux de Cotí y Edgar Alfredo Balsells Tojo, ambos guatemaltecos, fueron seleccionados siguiendo las recomendaciones de la sociedad civil y colectivos indígenas respectivamente. La garantía de independencia según los comisionados estaba garantizada debido a la imparcialidad de su presidente, sin embargo, fue también remarcado que el hecho de que la CEH contara también con comisionados nacionales produciría una sensación más de cercanía a la sociedad y promovería la participación en sus trabajos. Sobre la elección de los comisionados de la CEH véanse: SANFORD, V., *Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala*, Nueva York, Palgrave MacMillan, 2003, pp.257-258; HATCHER, R., “Truth and forgetting in Guatemala: an examination of *Memoria del Silencio* and *Nunca Más*”, *Canadian Journal of Latin American & Caribbean Studies*, vol. 34, 2009, núm. 67, p. 133; TOMUSCHAT, C., “Clarification Commission in Guatemala”, *Human Rights Quarterly*, vol. 23, 2001, núm. 2, p. 240.

Las razones que entonces se arguyeron para justificar esta falta de potestad de la CEH fue que, en caso de que se dieran los nombres de los perpetradores<sup>457</sup>, hubiese sido necesaria la creación de audiencias asimiladas a una vista judicial donde el implicado hubiera tenido derecho a defenderse. Igualmente, según Cristian Tomuschat, Presidente de la CEH, si se hubieran individualizado responsabilidades, el informe hubiera tenido que atender a asuntos propios del derecho penal como la negligencia, legítima defensa, el dolo, etc<sup>458</sup>. Siguiendo a algunos autores que defienden esta línea de actuación, esto podría constituir un beneficio para los propios propósitos de la comisión, pues la CEH, más que centrarse en averiguar la identidad de los perpetradores, podría poner el foco de actuación en la actividad desarrollada por las propias instituciones así como en las causas de inicio de la violencia, es decir, en una verdad más global<sup>459</sup>.

Por otro lado, estos argumentos se contraponían con los ya analizados de Thomas Buerghental, comisionado de la CVES, cuando alegó que: “la investigación no quedaría completa a menos que se identificara a los responsables de tales hechos”<sup>460</sup>.

Estas deficiencias, promovidas sobre todo por la ya comentada superioridad del Gobierno en las negociaciones de paz y recogidas en el propio Comité DH<sup>461</sup>, se vieron reforzadas por la aprobación, con anterioridad al inicio de los trabajos de la CEH, de la Ley de Reconciliación Nacional de 27 de diciembre de 1996<sup>462</sup>. Esta norma otorgaba amnistía a quien hubiera cometido delitos políticos durante el enfrentamiento armado (artículo 1) pero sin incluir, según el artículo 8, los delitos de genocidio, tortura, desapariciones forzosas y aquellos delitos que fueran considerados imprescriptibles.

El hecho de que la amnistía fuera concedida antes de la investigación de la CEH, y atendiendo al mandato de la misma, producía una considerable falta de colaboración

---

<sup>457</sup> Sobre este asunto también puede consultarse lo ocurrido dentro de la comisión creada en El Salvador. Véase epígrafe 1.4 del capítulo V.

<sup>458</sup> TOMUSCHAT, C., “Clarification Commission...”, *op.cit.*, p.243.

<sup>459</sup> CHAPMAN, A.R., BALL, P., “The Truth of Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa, and Guatemala”, *Human Rights Quarterly*, vol. 23, 2001, núm.1, p.13. Nuestro análisis y opinión sobre este tema puede consultarse en epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>460</sup> BUERGENTAL, T., “La Comisión de la Verdad para El Salvador”, *op.cit.*, p. 34. Véase, el epígrafe 1.4 del capítulo V y el análisis de la posición de la CVES respecto a la posibilidad de nombrar en el informe final a los victimarios.

<sup>461</sup> En las OF sobre Guatemala de 1996, ya recogimos en el pedido que hacía el Comité DH de “adoptar todas las medidas pertinentes para evitar casos de impunidad y, especialmente, para que las víctimas de violaciones de derechos humanos encuentren la verdad sobre esos actos, conozcan quiénes son sus autores y obtengan la indemnización adecuada”. Pese a que Guatemala creó la CEH, las carencias con las que contaba su mandato, sobre todo respecto a la imposibilidad de dar a conocer la identidad de los victimarios, provocó que el Comité DH tuviera que pronunciarse acerca de estos derechos de las víctimas, los cuales no habían sido respetados por los trabajos de la CEH. Sobre este pronunciamiento del Comité DH véase epígrafe 3 del capítulo III.

<sup>462</sup> Decreto núm. 145-1996



de los perpetradores con sus trabajos<sup>463</sup>. En efecto, al contrario de lo que se analizará en la práctica sudafricana, la concesión de amnistía no estuvo ligada a la participación de los victimarios en los trabajos de la comisión, lo que supuso una falta de incentivo para que estos confesaran las violaciones cometidas<sup>464</sup>.

Sin embargo, la interrelación entre verdad y justicia no quedó simplemente en el contenido del decreto de constitución de la CEH, sino que también estuvo presente en las recomendaciones de su informe final. El informe final, “Guatemala, memoria del silencio”, contemplaba en sus recomendaciones sobre “medidas para fortalecer al proceso democrático”:

“Que los poderes del Estado cumplan y hagan cumplir en todos sus términos y en relación con el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco la Ley de Reconciliación Nacional, persiguiendo, enjuiciando y castigando los delitos cuya responsabilidad penal no se extingue en virtud de dicha ley, particularmente, según dispone su artículo 8, *“los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”*”<sup>465</sup>.

La CEH pretendía así que las víctimas pudieran llegar a conocer tanto la verdad global fruto de su trabajo, como la individual en sede judicial. Esta posibilidad incluso había sido reconocida por el propio Gobierno según lo contenido en el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. Existía, por tanto, la base jurídica para que ciertos delitos (los no amnistiados) fueran investigados y la verdad individual y judicial fuera reconocida. No obstante, la práctica posterior, al igual que en el caso de El Salvador, no ha servido para concretar las recomendaciones de la comisión, debido, en su mayor

---

<sup>463</sup> SCHWEDERSKY, L., “Memory Politics in Guatemala: Linking the Battle over Truth with the Pursuit of Justice”, *Oxford Transitional Justice Research Working Paper Series: Debates*, febrero 2012, p.6.

<sup>464</sup> Debido a la ruptura de parte de las expectativas que la sociedad civil guatemalteca tenía puestas en la creación de la CEH, la Iglesia católica promovió su propio órgano de investigación: el proyecto de Recuperación de Memoria Histórica. Este mecanismo no gubernamental documentó en su informe seis mil testimonios recogidos en parroquias de todo el país, dando los nombres únicamente de unos pocos perpetradores por motivos de seguridad. SIEDER, R., “Políticas de guerra, paz y memoria...”, *op.cit.*, p.266. Al ser iniciativa de una organización privada, la REMHI no constituye práctica estatal en materia de derecho a la verdad.

<sup>465</sup> COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO, *Guatemala, memoria del silencio*, Guatemala, Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, 1999, Recomendaciones y Conclusiones, p. 72.

parte y a lo que a la búsqueda de una verdad judicial se refiere, a la debilidad del Poder Judicial<sup>466</sup>. No obstante, como se verá posteriormente, Guatemala sí implementó políticas dirigidas a la gestión y al acceso a archivos contenedores de información acerca de su pasado represivo, lo que supone un avance en el conocimiento de la verdad global de lo ocurrido.

### 1.10. Sri Lanka.

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Presidenta electa de Sri Lanka en 1994, se presentó a las elecciones de ese año bajo el mandato de respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia. Este mandato también incluía abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado<sup>467</sup>. En efecto, Sri Lanka había estado envuelta en un duro conflicto étnico que duró veinticinco años y que dejó tras de sí cien mil muertes. En estos años de violencia se encuentran los períodos que la Presidenta pretendía investigar: el conflicto armado entre las fuerzas del Gobierno y el Frente de Liberación Popular de 1987 a 1990 en el sur del país; y el que enfrentó también al Gobierno contra el Movimiento de Liberación de los Tigres de Tamil Eelam en el noroeste<sup>468</sup>.

Para ello la Presidenta, mediante proclamación presidencial, instauró en noviembre de 1994 tres comisiones que cubrirían, cada cual, la investigación de cada uno de los territorios del país: Comisión de Investigación sobre los Traslados o Desapariciones Involuntarios de Personas de las provincias Occidental, Meridional y Sabaragamuwa<sup>469</sup>; de las provincias Septentrional y Oriental<sup>470</sup>; y de las provincias Central, Noroccidental, Norte-Central y de Uva<sup>471</sup>.

---

<sup>466</sup> La CEH identificó la administración de justicia como: “una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco”, lo que “ha contribuido decisivamente a la impunidad y a la inaplicación de la ley Penal”. *Ibid.*

<sup>467</sup> PINTO-JAYAWARDENA, K. (ed.), *A Legacy to remember; Sri Lanka's commission of inquiry 1963-2002. A reference guide to commission reports with a Tabulated list of recommendations*, Homagama, Law and Society Trust, 2010, p.25.

<sup>468</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables... op.cit.*, p.103; UNITED STATE INSTITUTE OF PEACE, *Commission of Inquiry: Sri Lanka*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/commissions-inquiry-sri-lanka> (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>469</sup> Disposición presidencial 855/20, 25 de enero de 1995.

<sup>470</sup> *Ibid.*

<sup>471</sup> *Ibid.*

La motivación que movió a la Presidenta a la constitución de estas comisiones venía explicitada en los mandatos de las tres comisiones: “it has become necessary to ascertain the truth of such allegations”.

La búsqueda de los desaparecidos continuaba así siendo una obligación para los Estados que habían sufrido actos generalizados de desaparición forzada. Hallar el paradero de los mismos se convertía en el pilar central de las políticas de los regímenes que llegaban al poder tras estas etapas. En este capítulo, aparte de la experiencia de Sri Lanka, contamos con la práctica ya analizada de Nepal y Honduras, junto con Argentina, Uganda, Bolivia y Uruguay, examinada en el capítulo anterior. No obstante, aquellos Estados en donde las comisiones que se crearon estuvieron destinadas a investigar violaciones de derechos humanos en sentido amplio, no centradas en exclusiva en las desapariciones forzadas, incluyeron también este tipo de actos<sup>472</sup>.

Los tres informes conjuntos acreditaron la desaparición de veintisiete mil personas. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, la Presidenta no condenó públicamente las acciones de las fuerzas armadas debido al poder con el que contaban y al conflicto que se estaba desarrollando en Sri Lanka al momento de publicación de los informes (septiembre de 1997). No obstante, este informe, como en numerosos casos anteriormente acreditados, ayudó al posterior procesamiento de los victimarios<sup>473</sup>.

### **1.11. Haití.**

Tras las elecciones de 1990 Jean-Bertrand Aristide fue nombrado Presidente electo con un 67 por 100 de los votos. Únicamente seis meses después de su elección, fue derrocado por un golpe de Estado (el cual contó con la complacencia de los Estados Unidos), lo que le obligó a exiliarse a Venezuela y Washington<sup>474</sup>.

Con Aristide fuera del poder, desde 1991 y durante los tres años siguientes, sucesivos Gobiernos *de facto* fueron sucediéndose en el poder reprimiendo duramente

---

<sup>472</sup> Como ejemplo la comisión de la verdad de Chile tenía por mandato: “Para estos efectos se entenderá por graves violaciones las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte. En cumplimiento de su cometido la Comisión procurará: b) Reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero”. En El Salvador, un 25% de los casos acreditados correspondía a hechos de desaparición forzada. En el Chad, el mandato de la comisión establecía “to investigate the illegal imprisonment, detentions, assassinations, *disappearances*, tortures and practices of acts of barbarity”.

<sup>473</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables... op.cit.*, p.105.

<sup>474</sup> QUINN, J.R., *The politics of acknowledgement: truth commission in Uganda and Haiti*, Vancouver, University of British Columbia Press, 2010, p.57.

a la población sobre todo a todo aquel que fuera considerado partidario de Aristide. Todos estos Gobiernos tuvieron el beneplácito de Raoul Cédras, general de las fuerzas armadas durante ese tiempo. Cinco mil personas o más fueron asesinadas, mientras que otras fueron heridas, torturadas o violadas por miembros de la policía y las fuerzas armadas. Cincuenta mil personas emigraron a los Estados Unidos<sup>475</sup>.

La situación en Haití sufrió un cambio con el relevo en la administración estadounidense. Con el estreno en la presidencia de Bill Clinton, la política de los Estados Unidos respecto a Haití dio un giro de ciento ochenta grados debido a que el nuevo Presidente tenía como prioridad resolver el problema de los refugiados haitianos en suelo estadounidense. La solución pasaba por devolver al depuesto Aristedi al poder.

El 15 de octubre de 1994, junto con el apoyo veinte mil tropas de los Estados Unidos y el de la comunidad internacional en su conjunto, Jean-Bertrand Aristedi volvía a la presidencia de Haití y con él el requerimiento de numerosos exiliados haitianos y defensores de derechos humanos de que se acometiera la investigación de los crímenes ocurridos durante los tres años de Gobiernos militares<sup>476</sup>.

La *Commission Nationale de Vérité et de Justice* fue constituida mediante decreto presidencial de 28 de marzo de 1995. En su mandato se hacía referencia a la Constitución haitiana de 1987<sup>477</sup>, a la DUDH, a los tratados de derechos humanos a los Haití era Estado Parte<sup>478</sup>, al Acuerdo de la Isla de Gouvernor y al Pacto político de Nueva York<sup>479</sup>.

En el plano de verdad, el mandato de esta comisión establecía que: “seule la vérité complète et publieque permettra de satisfaire aux exigences élémentaires des principes de

---

<sup>475</sup> *Ibid.*

<sup>476</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables... op.cit.*, p.105. El germen de la creación de la *Commission Nationale de Verite et de Justice* se fue gestando en el exilio, concretamente entre los exiliados haitianos en Montreal, y financiados por *International Centre for Human Rights and Democratic Development*, agencia fundada por el Gobierno canadiense. El resultado de este trabajo fue la publicación de un informe denominado *Proposition pour une Commission de la Vérité en Haïti: Éléments constitutifs*. Véase, QUINN, J.R., “Haiti's Failed Truth Commission: Lessons in Transitional Justice”, *Journal of Human Rights*, vol. 8, 2009, núm. 3, p.268.

<sup>477</sup> En concreto el mandato apelaba al art. 136 (que regula la figura del Presidente de Haití como defensor de la Constitución) y a los derechos recogidos en el capítulo II del título III de la constitución: derechos relativos a la vida y la salud (sección A); derechos relativos a la libertad individual (sección B); derechos relativos a la libertad de expresión (sección C); derechos relativos a la libertad de conciencia (sección D); derechos relativos a la libertad de asociación y asamblea (sección E); derechos relativos a la educación (sección F); derechos laborales (sección G); derechos de la propiedad (sección H); derechos relativos a la libertad de información (sección I); derechos relativos a la seguridad (sección J).

<sup>478</sup> Entre ellos se encontraba el PIDCP, ratificado el 6 de febrero de 1991, y la CADH, ratificada el 14 de septiembre de 1977.

<sup>479</sup> Mediante estos dos últimos textos, firmados el 3 y el 13 de julio de 1993 respectivamente, Aristedi era nombrado de nuevo Presidente en su regreso del exilio a Haití, finalizando así el Gobierno militar imperante; amén de levantarse el embargo económico impuesto a Haití por las Naciones Unidas.

Justice et de créer les conditions indispensables à la réalisation d'un processus réel et effectif de transition et de réconciliation nationale”.

Al igual que otras comisiones anteriormente estudiadas en este período, como la chilena, la salvadoreña, o la investigación emprendida en Honduras, la búsqueda de reconciliación nacional pasaba por el reconocimiento de lo ocurrido en el pasado. La Comisión IDH, en su informe de 1995 sobre la situación de los derechos humanos en Haití, ya estableció que:

“La inexistencia de procedimientos jurídicos para realizar esta tarea no solo constituye una violación de la Convención Americana, sino que es también un grave obstáculo para que cicatricen las heridas de la sociedad a través de la verdad y la reconciliación. Hay muchos modelos para cumplir esta obligación, tanto nacionales como internacionales, pero la Comisión no sugirió ninguno en particular. La Comisión reiteró, no obstante, que la investigación de las violaciones a los derechos humanos era una responsabilidad irrenunciable”<sup>480</sup>.

La comisión tenía el mandato de concretar la obligación del Estado de establecer la verdad global sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre el 29 de septiembre de 1991 y el 15 de octubre de 1995, tanto en el interior como en el exterior del país, para lograr así la reconciliación de los haitianos<sup>481</sup>.

Al igual que vimos que ya ocurría en la práctica de países como Chad y El Salvador, la comisión de la verdad de Haití, según lo estipulado en el artículo 3, tenía competencia para investigar e identificar a los autores materiales y los cómplices de los crímenes cometidos desde el golpe de Estado de 29 de septiembre de 1992 para lograr así “une meilleure compréhension et connaissance publique et approfondie de la vérité”.

Vemos así como en las últimas experiencias analizadas, el conocimiento únicamente de los hechos que sucedieron en el pasado no cubrían las expectativas respecto a verdad con las que contaban las víctimas, sino que la identidad de los victimarios habría de ser parte fundamental de las investigaciones.

---

<sup>480</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe sobre la situación de derechos humanos en Haití*, Doc. OEA/Ser.L/V.88, 9 de febrero de 1995, párr. 257.

<sup>481</sup> Decreto presidencial de 28 de marzo de 1995, art. 2.

### 1.12. Burundi.

Tras las elecciones de 1993 y la proclamación de Melchior Ndadaye como el primer Presidente hutu de Burundi, un intento de golpe de Estado, que concluyó con su asesinato, desencadenó un espiral de violencia étnica entre los hutu y los tutsi que supuso la masacre de más de cincuenta mil personas<sup>482</sup>.

A tenor de estos sucesos el Gobierno pidió a las Naciones Unidas la instauración de una comisión internacional de investigación sobre los hechos ocurridos. Uno de estos pedidos estuvo integrado en el Acuerdo sobre un Pacto de gobierno, firmado el 10 de septiembre de 1994, entre las fuerzas de cambio democrático y los partidos políticos de la oposición<sup>483</sup>. En su artículo 36 se disponía que:

“Se solicita recurrir, en un plazo de 30 días, a una misión de investigación judicial internacional, compuesta por personalidades competentes y neutrales, para investigar el golpe de Estado del 21 de octubre de 1993, lo que los interlocutores políticos han convenido en denominar genocidio sin perjuicio del resultado de las investigaciones nacionales e internacionales independientes, y los diversos crímenes políticos perpetrados desde octubre de 1993”.

La solicitud de creación de una comisión de estas características fue tomada en cuenta por el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una declaración de 9 de marzo de 1995 sobre la situación en Burundi, en la cual recalca:

“El Consejo de Seguridad reafirma su opinión de que en Burundi la impunidad es un problema fundamental que pone en grave peligro la seguridad del país y destaca la importancia que asigna a que se proporcione asistencia para ayudar a fortalecer el sistema judicial nacional. En este contexto, subraya la función que podría desempeñar una comisión internacional que investigara el intento de golpe de 1993 y las matanzas subsiguientes, comisión que se establecería con arreglo al Pacto de gobierno”<sup>484</sup>.

---

<sup>482</sup> *Ibid.*, p.106; VANDERGINSTE, S., “Transitional Justice for Burundi: A Long and Winding Road”, *Workshop 10 – Alternative Approaches to Dealing with the Past*, 2007, pp. 5-6.

<sup>483</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Carta de fecha 8 de marzo de 1995 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Burundi ante las Naciones Unidas*, Doc. A/50/94, 8 de marzo de 1995, anexo.

<sup>484</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad*, Doc. S/PRST/1995/10, 9 de marzo de 1995.

Contando con la investigación de los hechos como camino indispensable y único hacia la recuperación de la verdad y como paso previo a la acción de la justicia, las dudas residían entonces en qué tipo de comisión se ajustaba más a la realidad de Burundi. Como respuesta a ello, el Consejo de Seguridad pidió a Pedro Nikken, antiguo Relator Independiente de las Naciones Unidas para El Salvador, un estudio sobre la viabilidad de la creación de una comisión de la verdad análoga a la creada en El Salvador, la cual, recordemos, fue creada también en el seno de las Naciones Unidas.

La respuesta de Pedro Nikken a este requerimiento fue clara: si lo que se pretende es una comisión que no solo averigüe lo sucedido, sino que ayude a terminar con el escenario de impunidad reinante en Burundi, la función que esta desempeñe:

“(...) no quedará satisfecha con la mera presentación de un informe donde se esclarezcan escrupulosamente los hechos investigados y se identifique a los presuntos responsables. Es necesario, además que esté facultada para hacer recomendaciones con el objeto de asegurarse de que éstos sean efectivamente juzgados con toda rectitud, así como para promover los cambios institucionales necesarios para erradicar la impunidad hacia el futuro”<sup>485</sup>.

La no viabilidad de una comisión, al estilo de la conformada en El Salvador, era la conclusión de las consultas previas realizadas por Pedro Nikken en las que identificó un cierto recelo sobre la efectividad de un instrumento orientado exclusivamente a la averiguación de la verdad y, en opinión de los consultados, con falta de competencias “para revelar la identidad de los responsables, quienes continuarían gozando de impunidad”<sup>486</sup>. Sin embargo, como ya analizamos, la comisión creada en El Salvador sí que tuvo la potestad de publicar los nombres de los victimarios y tal y como relata Pedro Nikken:

“Debe entonces destacarse que la omisión de procesos judiciales y de sanciones que siguió al informe de la Comisión no era parte de la esencia de esta. Por el contrario, su mandato contemplaba que se podrían recomendar medidas legales y,

---

<sup>485</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Informe del Enviado Especial para examinar la viabilidad de una comisión de la verdad en Burundi o de una comisión judicial de averiguación como alternativa de una comisión de la verdad*, Doc. S/1995/631, 28 de julio de 1995, anexo, párr.57.

<sup>486</sup> *Ibid.*, párr.22.

por lo tanto, someter a los responsables a la acción de la justicia. Fue el informe de la Comisión y no sus términos de referencia lo que determinó que tales procesos no eran viables. No hay lugar, en consecuencia, a la afirmación según la cual la Comisión de la Verdad de El Salvador era, a priori, un dispositivo para esclarecer los hechos sin juzgar a los culpables”<sup>487</sup>.

A pesar de que las necesidades de la sociedad burundesa fueran diferentes de las de El Salvador y, por tanto, la comisión que allí se constituyese hubiera de ser distinta, en común sí que tenían la necesidad de realizar una investigación para conocer la verdad. Las particularidades de esta comisión de investigación residirían en que:

“(…) debe completar una averiguación sobre determinados hechos; establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de los mismos, en particular los procesos judiciales a los que habría que someter a los presuntos responsables de hechos punibles; y señalar cuáles son las actividades competentes para aplicar tales consecuencias jurídicas, que serían normalmente las autoridades de Burundi”<sup>488</sup>.

En efecto, la comisión que se instauró en Burundi, aún sin ser un tribunal internacional, sí emprendió una investigación de los acontecimientos y estableció sus posteriores consecuencias jurídicas. El mandato de la comisión, aprobado por Resolución del Consejo de Seguridad, estableció que era competencia de la comisión:

- “a) Determinar los hechos relativos al asesinato del Presidente de Burundi el 21 de octubre de 1993, a las matanzas que tuvieron lugar subsiguientemente y a otros actos graves de violencia posteriores;
- b) Recomendar medidas de orden jurídico, político o administrativo, según corresponda, después de consultar con el Gobierno de Burundi, así como medidas encaminadas a someter a la justicia a las personas responsables de dichos actos, para impedir que se repitan actos semejantes a los que ha de investigar la

---

<sup>487</sup> *Ibid.*, párr.25, d).

<sup>488</sup> *Ibid.*, párr.31.



comisión y, en general, poner fin a la impunidad y fomentar la reconciliación nacional en Burundi”<sup>489</sup>.

Sin embargo, finalmente, debido a los eventos que se sucedieron en Burundi, ninguna de las recomendaciones de la comisión, entre las que se encontraba el enjuiciamiento de los culpables<sup>490</sup>, fue implementada y los episodios de violencia continuaron sucediéndose de forma posterior a la publicación del informe<sup>491</sup>.

### **1.13. Sudáfrica.**

Hablar de la práctica estatal sobre derecho a la verdad hace indispensable detenerse en la experiencia sudafricana. Sudáfrica es el ejemplo que mejor ilustra la importancia con la que cuenta el conocimiento de lo ocurrido para poder llegar a una reconciliación de la sociedad. A pesar de que aún hoy hay voces discordantes con la elección que entonces allí se tomó, no hay duda alguna de que el camino que se decidió emprender es el modelo a seguir para aquellos Estados que tras una época de conflicto o de Gobierno dictatorial pretenden recuperar la verdad sobre el pasado a cualquier precio, como base para seguir su camino hacia la paz y/o la democracia.

Sudáfrica es el modelo paradigmático de recuperación de la verdad por la radicalidad de su experiencia: intercambio íntegro de verdad por justicia. En él caben numerosas lecturas sobre las que se ha glosado ampliamente desde el mismo día de creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, posiblemente la más influyente de todas las que se han implementado hasta hoy. Empero, en lo que ahora nos ocupa, en primer lugar, intentaremos discernir los motivos por los que el Congreso Nacional Africano, su impulsor, se decidió por instaurar un organismo de recuperación de la verdad. En segundo lugar, analizaremos lo que llevó a elegir este modelo de sacrificio de justicia, en pos de conocer lo ocurrido.

Dentro de la doctrina hay un sentimiento generalizado de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica supuso uno de los intentos más loables por liderar una transición no violenta hacia la paz y la democracia. Y lo es no solo por la

---

<sup>489</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Resolución 1012 (1995)*, Doc. S/RES/1012, 28 de agosto de 1995, párr.1.

<sup>490</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Carta de fecha 25 de julio de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General*, Doc. S/1996/682, 22 de agosto de 1996, anexo, párr.488 y ss.

<sup>491</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables... op.cit.*, p.108.

propia elección de la comisión como medio referente dentro del sistema de transición, sino debido a de dónde venía Sudáfrica y hacia dónde la llevó el sistema que allí se implementó.

Una de las particularidades con las que cuenta Sudáfrica, y una de las más notables diferencias respecto a otras experiencias, es la composición misma de la propia sociedad<sup>492</sup>. En Sudáfrica convivían (y conviven) varias etnias dentro de la población negra: xhosa, zulú, pedi, tswana y sotho, entre otros; mientras que únicamente dos en la minoritaria población blanca: afrikáners (de origen holandés, primeros colonizadores de Sudáfrica) e ingleses (colonizadores del país desde el s.XIX<sup>493</sup>).

Teniendo como objetivo hacerse con el Gobierno del país, la población blanca, personificada en estas dos etnias, dejó a un lado sus diferencias internas para centrarse en remarcar las disputas existentes entre los xhosa y los zulús; con ello intentaban demostrar la falta de capacidad de la población negra para ostentar el poder en Sudáfrica<sup>494</sup>.

El régimen del apartheid<sup>495</sup> fue instaurado en 1948 por el Partido Nacional Afrikáner, que prolongó su represión contra la población negra durante cuarenta y cinco años y dejó tras de sí cruentos episodios de torturas, asesinatos, masacres y una intensa discriminación social y económica contra la población negra<sup>496</sup>.

Hasta 1990, el por entonces Presidente, De Klerk, no empezó a promover medidas destinadas a la integración de la población negra dentro de la sociedad. La legalización del Congreso Nacional Africano, la revocación de su calificativo como “grupo terrorista” y la puesta en libertad de Nelson Mandela fueron algunas de ellas.

Con las primeras elecciones en el horizonte tras un largo período de sequía democrática y la aprobación de una constitución para Sudáfrica que recogiera la pluralidad étnica del país, en 1993, dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Congreso Nacional Africano, se empezó a fraguar la idea de que era necesaria la instauración de algún mecanismo que tuviera la potestad de investigar las inmensas violaciones de

---

<sup>492</sup> VORA, J.A., VORA, E., “The effectiveness of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Perceptions of Xhosa, Africaner and English South Africans”, *Journal of Black Studies*, vol. 34, 2004, núm. 3, p.303.

<sup>493</sup> Aparte de las dos mencionadas, en Sudáfrica también conviven mestizos y una minoría de origen asiático de descendencia india. *Ibid.*

<sup>494</sup> *Ibid.*, pp.303-304.

<sup>495</sup> El término apartheid significa “vidas separadas” en afrikáner.

<sup>496</sup> La población negra ascendía a doce millones; la blanca a tres millones y medio; los mestizos a un millón setecientos mil; y la asiática a quinientos mil. SNELLEN, M., “Apartheid: Checks and Changes”, *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, vol. 43, 1967, núm. 2, p.293.

derechos humanos cometidas durante el período del apartheid. Es menester tener en cuenta que tal y como recoge Albie Sachs, antiguo juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica, con la llegada de la democracia la investigación que hubiera de realizarse tendría que abarcar no solo los hechos cometidos por el régimen del apartheid, sino también las violaciones de la resistencia armada liderada en su mayoría por el Congreso Nacional Africano, tanto dentro de Sudáfrica como en el exilio<sup>497</sup>. Kader Asmal, antiguo Ministro de Aguas de Sudáfrica, sentenció en la mencionada reunión según lo recoge Albie Sachs:

“[W]hat we need in South Africa, the only answer, is a truth commission. Only a truth commission can look at all the violations of human rights on all sides from whatever party. Human rights are human rights, they belong to human beings, whoever they might be. And torture or other violation has to be investigated on an even-handed basis across the board, not just by one political movement looking at itself, but a national level, with national resources and a national perspective”<sup>498</sup>.

En efecto, Sudáfrica contaba con un gran abanico de ejemplos de comisiones de la verdad instauradas en varias latitudes que, al igual que el Congreso Nacional Africano en aquel instante, apreciaron que el conocimiento de lo ocurrido de una forma objetiva era el único camino viable para poder arribar a la tan ansiada reconciliación social.

Sin embargo, la aparición del signo distintivo del mandato de esta comisión se empezó a gestar en el seno de las negociaciones para la conformación de la nueva constitución. En ellas, los representantes de las fuerzas armadas sostuvieron que no respaldarían ni el proceso democrático, ni al nuevo Gobierno electo si no eran exonerados de responsabilidad penal por sus acciones cometidas durante el período del apartheid<sup>499</sup>. De esta forma, la única manera de poder llegar a cumplir el objetivo de

---

<sup>497</sup> SACHS, A., “Different Kinds of Truth: The South African Truth and Reconciliation Commission”, en VV.AA (eds.), *Experiments with Truth...* *op.cit.*, pp.45-46. La reunión donde fue por primera vez tratada la idea de una comisión de la verdad fue la organizada por el Congreso Nacional Africano para tratar las consecuencias que se reprodujeron en los informes finales de las comisiones de investigación que el propio Congreso Nacional Africano instauró para investigar sus propios actos en el pasado e informar de ellos a la sociedad. Estas comisiones no han sido tratadas dentro de este trabajo debido a que no entran dentro de la práctica estatal de un Estado, al ser creadas por una organización privada. Para saber más sobre estas comisiones véase, HAYNER, P., *Verdades innombrables...* *op.cit.*, pp.97-99, 101-103.

<sup>498</sup> SACHS, A., “Different Kinds of Truth...”, *op.cit.*, p.46.

<sup>499</sup> *Ibid.*, p.47. En este mismo sentido, DE HOLLANDA, C.B., “Human rights and political transition in South Africa: the case of the Truth and Reconciliation Commission”, *Brazilian Political Science Review*, vol.7, 2013, núm.1, p.10.

averiguar lo ocurrido desde ambos puntos de vista, involucrando a toda la población y cumpliendo las exigencias demandadas por las fuerzas armadas, era que la comisión de la verdad que se constituyera para emprender las investigaciones pertinentes tuviera potestad para amnistiar a aquellos que confesaran ser los autores de determinados hechos violatorios de derechos humanos, una vez la comisión hubiese corroborado la veracidad de sus afirmaciones. Esto mismo jugaba a la vez como incentivo para la participación de los represores en los trabajos de la comisión: si aceptaban colaborar, no serían enjuiciados.

El Congreso Nacional Africano se encontraba entonces ante la disyuntiva de cómo alejarse de dos extremos enfrentados: aplicar justicia retributiva, que iría en contra de los intereses de los victimarios y era también contrario al carácter conciliador del Gobierno en transición; o amnesia general sobre lo ocurrido en forma de amnistía en blanco, que contradeciría los intereses de las víctimas y de la mayoría de la población<sup>500</sup>.

La idea de iniciar juicios penales contra los victimarios, en cualquier caso, quedó descartada. La reticencia a incoar procesamientos ha sido una de las mayores críticas que se han vertido sobre el modelo sudafricano. Desmond Tutu, Presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, averiguó una serie de problemas principales a la instauración de juicios penales como el medio que protagonizara la transición hacia la paz y la democracia.

El primer ejemplo es la ya comentada falta de colaboración de las fuerzas del orden con el proceso democrático<sup>501</sup>. La inclusión de los miembros del Partido Nacional Afrikáner dentro de las elecciones democráticas y de la propia sociedad post apartheid era una de las metas a conseguir para el Congreso Nacional Africano en aras de alcanzar una reconciliación total, algo imposible si uno de los bandos pretendía llevar a otro ante la justicia<sup>502</sup>.

---

<sup>500</sup> DE HOLLANDA, C.B, "Human rights and political transition in South Africa...", *op.cit.*, pp.10-11. Las organizaciones de defensa de derechos humanos jugaron un papel importante en la configuración de la amnistía dentro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, consiguiendo que su concesión estuviera regulada por esta e impidiendo que fuera concedida de forma indiscriminada. La presión de estas organizaciones de la sociedad consiguió que dentro del informe final de la comisión se dieran los nombres de los responsables. Véase, WILSON. R.A., "Justicia y legitimidad en la transición sudafricana", en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR, P., y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (eds.), *Las políticas hacia el pasado...* *op.cit.*, pp.297-298.

<sup>501</sup> TUTU, D., *No future without forgiveness*, Nueva York, Doubleday, 1999, p. 20.

<sup>502</sup> *Ibid.*

En segundo lugar, la falta de medios con los que contaba Sudáfrica para afrontar económicamente el gasto que supondría albergar procesos de tal envergadura<sup>503</sup>. Este problema se vio representado en los procesos que se emprendieron contra dos generales del Ejército sudafricano: Magnus Malan y Eugene de Kock. Estos procedimientos supusieron un gran desembolso al Estado en forma de trámites burocráticos, protección de testigos, pago de la defensa, etc. Sudáfrica debía de invertir sus escasos recursos en mecanismos que aportaran un mayor beneficio a su sistema transicional<sup>504</sup>.

El juicio contra el general Magnus Malan, junto con el de otros miembros del Ejército sudafricano, acusados de conspiración en la perpetración de una matanza contra trece zulús, finalizó con la absolución de todos ellos<sup>505</sup>. Este hecho contiene el tercer motivo de reticencia a la hora de que Sudáfrica albergara juicios contra los represores del apartheid: el mal funcionamiento de una justicia aún entonces dominada por la parcialidad de jueces, mayoritariamente, blancos<sup>506</sup>. Tal y como Richard Wilson ha constatado: “[e]l sistema legal no podía manejar la acumulación de unos delitos a los que antes había hecho caso omiso y, por tanto, no cabía esperar que afrontara en solitario su propia rehabilitación, cambiando radicalmente de actitud frente a los crímenes de Estado”<sup>507</sup>.

Por último, Desmond Tutu contemplaba también como determinante a la hora de desconsiderar los procesos penales la más que probable falta de evidencias de unos hechos en los que los testigos o estaban muertos o eran los propios victimarios que, muy probablemente, pudieron haber eliminado las pruebas que los incriminaran<sup>508</sup>.

Por otra parte, otro de los argumentos que más se ha enarbolado para justificar la creación de la comisión de la verdad y desechar la justicia retributiva, ha sido la necesidad de que toda la población, hubiera o no sufrido en primera persona las consecuencias del apartheid, estuviese involucrada en la recuperación de la verdad, algo que difícilmente podría ocurrir si el sistema para lograr este objetivo hubieran sido los procesos penales<sup>509</sup>. El protagonismo con el que contaron las audiencias públicas de la

---

<sup>503</sup> *Ibid.*, p.23; ASMAL, K., “International Law and Practice: Dealing With the Past in the South African Experience”, *American University International Law Review*, vol.15, 2000, núm.6, p.1227.

<sup>504</sup> TUTU, D., *No future...* p. 23.

<sup>505</sup> BERKELEY, B., “The ‘New’ South Africa. Violence Works”, *World Policy Journal*, vol.13, 1996, núm.4, pp.75-76.

<sup>506</sup> TUTU, D., *No future...op.cit.*, p. 24.

<sup>507</sup> WILSON, R.A., “Justicia y legitimidad...”, *op.cit.*, p.303.

<sup>508</sup> TUTU, D., *No future...op.cit.*, pp.23-24.

<sup>509</sup> Este factor ya fue comentado dentro de las características propias a la verdad judicial en el epígrafe 2 del capítulo III.

comisión supuso la total involucración de víctimas y victimarios en el proceso: de las víctimas porque el mero hecho de poder contar su experiencia personal de una forma abierta y sin formalismo alguno (como hubiese sido el caso en una audiencia judicial<sup>510</sup>), suponía un gran paso hacia la reparación íntegra; y del victimarios por el ya comentado “efecto reclamo” de poder ser amnistiados<sup>511</sup>.

Todos los motivos anteriormente analizados sobre la necesidad de conocer la verdad y la no pertinencia de su búsqueda a través de procesos penales, se volcaron en el considerando del mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, creada a través de la *Promotion of National Unity and Reconciliation Act* de 26 de julio de 1995<sup>512</sup>.

En el considerando de esta ley se conectaba, como ya en otras, la necesidad social de conocer la verdad tras una etapa de violaciones manifiestas de derechos humanos, con las funciones de la comisión:

“To provide for the investigation and the establishment of as complete picture as possible of the nature, causes, and extent of gross violations of human rights committed during the period from 1 March 1960 to the cut-off date contemplated in the Constitution, within or outside the Republic, emanating from the conflicts of the past, and the fate or whereabouts of the victims of such violations (...) it is deemed necessary to establish the truth in relation to past events as well as the motives for and circumstances in which gross violations of human fights have occurred, and to make the findings known in order to prevent a repetition of such acts in future”.

La Comisión para poder llegar a estos objetivos dividió su actuación en tres comités: el de violación de derechos humanos, el de reparación y el de amnistía<sup>513</sup>.

---

<sup>510</sup> DE HOLLANDA, C.B, “Human rights and political transition in South Africa...”, *op.cit.*, p.10.

<sup>511</sup> GRAYBILL, L.S., *Truth and reconciliation in South Africa: miracle or model*, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2002, p.164. Para un análisis sobre las audiencias de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, véase, PICKER, P., “Las sesiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica: perspectivas desde las víctimas”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.), *El derecho a la memoria*, Bilbao, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe – Universidad de Deusto, 2006, pp.113-137.

<sup>512</sup> Ley 95-34 de 26 de julio de 1995. Contó con la aprobación del Congreso Nacional Africano, el Partido Nacional Afrikáner y el Congreso Panafricano; el no del *Freedom Front*; y la abstención de *Inkatha Freedom Party*. Véase, GRAYBILL, L.S., *Truth and reconciliation in South Africa... op.cit.*, p.3.

<sup>513</sup> El Comité de reparación tenía la tarea de recomendar políticas al Gobierno para una entera reparación a las víctimas. El Comité de amnistía era el encargado de otorgar el perdón a aquellos que hubiesen

Parte de las críticas que se han vertido sobre el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación apuntaban a que los crímenes a investigar<sup>514</sup> iban a ser aquellos que también eran considerados delito durante el régimen del apartheid. Es decir, debido a la competencia material la comisión se estaba dejando fuera de su ámbito de investigación al propio sistema de apartheid y a los que se han considerado “los beneficiarios” de dicho sistema<sup>515</sup>. Al contrario de en Alemania, donde ya comprobamos que la comisión profundizó en exceso en lo que fue la estructura burocrática del Gobierno del SED, en Sudáfrica se desatendieron aquellos hechos que eran legales dentro de la propia administración. En cambio, fueron abordados los actos que estaban tipificados como delito en la propia legislación sudafricana. Ell redundó en que aunque sí fue atendida la verdad de las víctimas, en contraposición, una verdad más global, más centrada en el propio funcionamiento de un sistema orientado a la expulsión de los africanos de su propio país, no fue conocida a través de los trabajos de la comisión<sup>516</sup>.

En conclusión, la práctica sudafricana en materia de verdad constituye el mejor ejemplo de cómo una sociedad apela a su derecho a la verdad como forma única de reconciliarse. En efecto, la elección de sacrificar la justicia a cambio de conocer la verdad fue una decisión de la propia sociedad<sup>517</sup>. Sin embargo, a esta decisión de dejar de lado la obligación del Estado de enjuiciar a los responsables de haber cometido graves abusos contra los derechos humanos por conveniencia política<sup>518</sup>, se le puede recriminar el gran legado de impunidad que dejó tras de sí y la falta de ruptura con el régimen anterior<sup>519</sup>.

---

confesado haber cometido unos determinados hechos. El Comité de violaciones de derechos humanos tenía como misión investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1960 y 1994. Véase, BURTON, M., “Custodians of Memory: South Africa's Truth and Reconciliation Commission”, *International Journal of Legal Information*, vol. 32, 2004, pp.418-419.

<sup>514</sup> La competencia temporal de la comisión se establecía en el considerando como: “as complete a picture as possible of the nature, causes and extent of gross violations of human rights committed during the period from 1 March 1960 to the cut-off date contemplated in the Constitution, within or outside the Republic”. Ya en el capítulo 1 se disponía que por “gross violation of human rights” sería interpretado como: “the killing, abduction, torture or severe ill-treatment of any person; or (b) any attempt, conspiracy, incitement, instigation, command or procurement to commit an act referred to in paragraph (a)”.

<sup>515</sup> WILSON, R.A., *The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa. Legitimizing the Post – Apartheid State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p.35.

<sup>516</sup> *Ibid.*

<sup>517</sup> “The Commission of Truth and Reconciliation. It is the creation of a nation”. Albie Sachs, citado en: *Ibid.*, p.13.

<sup>518</sup> DE HOLLANDA, C.B., “Human rights and political transition in South Africa...”, *op.cit.*, p.9.

<sup>519</sup> *Ibid.*

La falta de justicia por la amnistía concedida por la comisión también dejaría pendiente la posibilidad de la averiguación de la verdad judicial. Los jueces de la Corte IDH, Cançado Trindade y Abreu Burelli, ya establecieron en esta época la existencia de una interrelación entre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y cómo las autoamnistías<sup>520</sup> violaban estos tres derechos, a la par que iban en contra de la obligación general de los Estados de garantizar el respeto a los derechos humanos<sup>521</sup>. En efecto, las leyes de autoamnistía impiden el conocimiento de la verdad en sede judicial, amén de violar el derecho a la justicia de las víctimas e impedir a su vez una íntegra reparación. En estos contextos, incluso el derecho a la verdad individual quedaría insatisfecho en caso de no tratarse casos individuales.

Teniendo esta base más general y las particularidades de la práctica de Sudáfrica anteriormente analizada, la pregunta sería: ¿ha violado la actuación de Sudáfrica mediante la creación de la Comisión de la Verdad y Reparación y la concesión de amnistías (con las características ya explicadas) el derecho a la verdad de las víctimas, ya fuere individual o global? La respuesta respecto a la verdad global es indiscutiblemente negativa (aún con las carencias ya señaladas de la competencia material del mandato), no obstante, la verdad individual requiere una consideración distinta.

El comité de amnistía, órgano encargado dentro de la comisión de otorgar las amnistías<sup>522</sup>, funcionaba al contrario de un tribunal judicial en este particular: en vez de decidir si la persona iba a ser o no condenada, el comité decidía lo contrario - si era o no pertinente otorgarle la amnistía<sup>523</sup>. Esta amnistía era concedida tras la confesión del victimario (el cual debía demostrar que sus actos fueron promovidos por objetivos políticos) lo que implicaba el conocimiento de su identidad por parte de la víctima e, incluso, en algunas ocasiones y bajo determinadas circunstancias, el encuentro con el

---

<sup>520</sup> Autoamnistía se denomina a la amnistía que se conceden los propios victimarios a sí mismos para que el nuevo Gobierno entrante no pueda investigar los crímenes cometidos por ellos mismos. No obstante, las consecuencias de esta medida son análogas a las que pueda generar una amnistía adoptada por un Gobierno democrático a favor de los victimarios de una etapa represiva anterior. En ambos casos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación serían conculcados.

<sup>521</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Loayza Tamayo c. Perú*, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de noviembre de 1998, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 42*, Voto razonado conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, párrs.2-4.

<sup>522</sup> Véase, capítulo IV de la Ley 95-34 de 26 de julio de 1995.

<sup>523</sup> SACHS, A., “Different Kinds of Truth...”, *op.cit.*, p.51. El funcionamiento del comité de amnistía ha sido criticado desde un punto vista legal ya que la amnistía les era concedida a los que confesaban haber cometido un crimen determinado antes de pasar por un procedimiento judicial y ser condenados. WILSON, R.A., “Justicia y legitimidad...”, *op.cit.*, pp.304-305.



perpetrador, lo que tal y como ha definido Ruth Picker: “podría contribuir a restaurar el sentido de la justicia”<sup>524</sup>.

Este tipo de amnistías difería, por tanto, de las autoamnistías que se otorgaron en Estados como Chile<sup>525</sup>, a pesar de que en ambos tipos de leyes el victimario no es condenado<sup>526</sup>. En efecto, por un lado, el derecho que en ambos casos se estaría conculcando sería el derecho de las víctimas a que el perpetrador sea condenado y que cumpla efectivamente esa pena; estos derechos entrarían dentro de un más general derecho a la justicia. Por otro lado, el derecho a la verdad no se respetaría si la investigación judicial es la que no llega a incoarse. La ejecución de la pena, en su caso, sería indiferente desde el prisma del derecho a la verdad, al ser la investigación la que traerá consigo el conocimiento de la verdad judicial e individual.

Sin embargo, dentro de la experiencia sudafricana apreciamos que aunque no hubo investigación judicial alguna, la verdad individual sí fue averiguada dentro de las audiencias públicas, al ser casos individuales los tratados en ellas. En estas audiencias las propias víctimas podían relatar su propia historia, obtener reconocimiento público e igualmente conocer de primera mano la identidad de los victimarios, que estos confesaran lo sucedió y que fuera su caso concreto el tratado<sup>527</sup>.

---

<sup>524</sup> PICKER, P., “Las sesiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica...”, *op.cit.*, p.128.

<sup>525</sup> Otro argumento al cual se apeló dentro del derecho comparado, fue la referencia a que también en otros países se ha amnistiado a los responsables de haber cometido hechos graves violatorios de derechos humanos, sin más referencia a la distinta forma que reviste la amnistía sudafricana a la otorgada por otros Gobiernos de América Latina. La recién creada Corte Constitucional, la cual tras respaldar la decisión de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de la necesidad de conocer la verdad para afrontar una reconciliación pacífica (“Secrecy and authoritarianism have concealed the truth in Little crevices of obscurity in our history. Records are not easily accesible, witnesses are often unknown, dead, unavaible or unwilling... That truth, which the victims of repression seeks so desperately to know is, in the circumstances, much more likely to be forthcoming if those responsible for such monstrous misdeeds are encouraged to disclose the whole truth with the incentive that they will not receive the punishment which they undoubtedly deserve if they do”), estableció: “Although the mechanism adopted to facilitate that process [of a transition to democracy] have differed from country to country and from time to time, the principle that amnesty should, in appropriate circumstances, be accorded to violators of human rights in order to facilitate the consolidation of new democracies was accepted in all these countries [Chile, Argentina, El Salvador] and truth commissions were also established in such countries”. *Azanian People’s Organisation (AZAPO) and Others c. President of the Republic of South Africa and Others*, caso CCt 17, sentencia de 25 de julio de 1996, pp.1027-1028, 1030.

<sup>526</sup> Los procesamientos, no obstante, seguían siendo una opción viable para aquellos quienes no solicitaran la amnistía, o para aquellos que no la solicitaran pero no les era concedida.

<sup>527</sup> Ruth Picker, en su investigación sobre la metodología llevada a cabo por las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, identificó varios puntos tanto a favor como en contra. Como puntos en contra se encuentran la falta de una reparación pecuniaria por la participación en las audiencias (expectativa de las propias víctimas); falta de cambio significativo en la vida de las víctimas (“mientras que los responsables no tenían que ‘pagar por lo que habían hecho’ de forma visible, las vidas de las víctimas no mejoraron. Todavía solían vivir en situaciones de pobreza exacerbada por las violaciones sufridas y sin perspectiva de mejorar”); en varias ocasiones las víctimas, tras su participación, no quedaron satisfechas con el nivel o cantidad de verdad conseguida o revelada en las audiencias; falta

Pese a lo entendible de las críticas que llegaron desde la doctrina especializada en DIDH<sup>528</sup> debido a la falta de justicia en Sudáfrica, desde un ángulo limitado a la consecución de la verdad, esta experiencia, con independencia de los dilemas éticos que pudiera suscitar, aporta una rica práctica por el modo en el cual se afrontó la consecución de la reconciliación nacional.

Por último, otro aspecto a resaltar dentro de la práctica sudafricana es el referente a la gestión y publicación de toda la documentación perteneciente tanto a la época del apartheid, como a la producida por la misma comisión. En los últimos años del régimen numerosos archivos fueron destruidos para evitar que cierta información saliese a la luz<sup>529</sup>; por ello, una de las principales recomendaciones y objetivos que se marcó la CVR fue dar publicidad a toda la información por ella recopilada para que estuviera a disposición de la sociedad<sup>530</sup>. En este orden ideas, la CVR recomendaba que: “victims have the right of access to their own files, regardless of whether these are publicly available or not. Victims should be provided with a copy of their file if they so wish”. En orden a hacer efectiva tal recomendación la mayor parte de la información recogida

---

de comunicación entre los trabajos posteriores de la comisión respecto a su caso concreto y las víctimas; falta de apoyo psicológico tras la participación de las víctimas en las audiencias; consecuencias negativas de la publicidad de las audiencias (pérdida de empleo, de privacidad o temor a posibles represalias). Por otro lado, en cuanto a los beneficios que originó el trabajo de la comisión, esta autora enumera los siguientes: revelación de nuevos hechos que antes no se conocían; posibilidad de encontrarse cara a cara con el perpetrador; contar públicamente la propia historia (esta posibilidad erigía pues, según se ha expuesto también como una categoría negativa, como un arma de doble filo). Véase, PICKER, P., “Las sesiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica...”, *op.cit.*, pp.119-132.

<sup>528</sup> Linda van de Vijver establece que el otorgamiento de amnistías dentro de la práctica sudafricana iría en contra de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid (aprobada por la AG el 30 de noviembre de 1973 en Nueva York. A junio de 2015 cuenta con ciento nueve Estados miembros. No ratificada ni firmada aún por España). Las amnistías en estos contextos también irían en contra de las decisiones de la Comisión IDH en las cuales este órgano argumenta que las amnistías que fueron adoptadas en numerosos Estados de América Latina son contrarios al DIDH. Igualmente, la autora se refirió a lo establecido por Diane Orentlicher para sostener que: “exists a norm of international law to prosecute ‘especially atrocious crimes’ in domestic courts”. Véase, VAN DE VIJVER, L., “The Amnesty Process”, en JAMES, W., VAN DE VIJVER, L., *After the TRC: Reflections on truth and reconciliation in South Africa*, Atenas – Ciudad del Cabo, Ohio University Press – David Philip Publishers, 2000, pp.132-133.

<sup>529</sup> GONZÁLEZ QUINTANA, A., *Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos (1995) sobre gestión de los archivos de los servicios de seguridad del estado de los desaparecidos regímenes represivos*, París, Consejo Internacional de Archivos, 2008, p.80.

<sup>530</sup> El informe final establecía que: “All commission records be accessible to the public, unless compelling reasons exist for denying such access, bearing in mind that the individual’s rights to privacy, confidentiality and related matters must be respected”. TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION OF SOUTH AFRICA REPORT, Ciudad del Cabo, vol.5, 1998, p.343.

por la comisión fue depositada en el Archivo de Historia de Sudáfrica<sup>531</sup>, el cual será la institución encargada de regular su acceso<sup>532</sup>.

#### **1.14. Checoslovaquia / República Checa.**

Como ya apuntamos en la introducción de la práctica estatal en este período, la mayor parte de los Estados del este europeo, que decidieron implementar algún tipo de política transicional en pos de hallar la verdad de lo ocurrido durante su pasado comunista, optaron por la constitución de distintos organismos que gestionaran la información relativa a las violaciones de derechos humanos a lo largo de aquella época y permitieran, igualmente, el acceso del público a la misma.

Teniendo a la ya comentada “Oficina Gauck”, creada en Alemania, como modelo de cómo habría de funcionar una institución de estas características<sup>533</sup>, en la República Checa también fue creado un mecanismo parecido. La Oficina de Documentación e Investigación de los Crímenes de la Policía Comunista fue creada mediante el Decreto 83/1994 del Ministerio del Interior el 1 de enero de 1995, a partir de la fusión de dos mecanismos anteriores: la Oficina de Documentación e Investigación de la Actividad del Estado de Seguridad (la cual formaba parte del Ministerio del Interior) y el Centro de Recursos de los Crímenes del Régimen Comunista (perteneciente al Ministerio de Justicia).

Las funciones con las que cuenta esta oficina iban dirigidas en dos direcciones, pues aunó en un organismo aquellas con las que contaban sus predecesoras. Por un lado, tenía la autoridad de poder incoar investigaciones penales contra aquellos sospechosos de haber participado en violaciones de derechos humanos durante 1948 y 1989. Por otro, y gracias al Decreto 27/1995 del Ministerio del Interior, esta oficina también adquirió potestad para recopilar y publicar documentos de aquellos actos contrarios a los derechos humanos cometidos por el régimen comunista y de la resistencia contra él. Al ser un órgano dependiente de la policía, servía, del mismo modo, de órgano

---

<sup>531</sup> La ley que regula el funcionamiento del Archivo de Historia de Sudáfrica es la 43/96 de 2 de octubre de 1996. El art. 3 de esta ley establecía: “The objects and functions of the National Archives shall be to- (a) preserve public and non-public records with enduring value for use by the public and the State; (b) make such records accessible and promote their use by the public; (c) ensure the proper management and care of all public records”.

<sup>532</sup> GONZÁLEZ QUINTANA, A., *Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos...* *op.cit.*, p.93.

<sup>533</sup> STAN, L., “Politics and Memory...”, *op.cit.*, p.400.

encargado de aportar información documental en los procesos contra los victimarios del régimen comunista<sup>534</sup>.

Es menester también referirse a la adopción de un conjunto de leyes dirigidas al acceso a los archivos y al conocimiento de ciertos extremos de interés para la sociedad, aprobadas tras la llegada de la democracia a la República Checa. En primer lugar, mediante la Ley 451/1991 de 4 de octubre de 1991 se impedía que nadie con antecedentes de haber pertenecido al antiguo régimen comunista pudiera optar a un cargo público<sup>535</sup>. En segundo lugar, la Ley 140/1996 de 26 de abril de 1996 permitía a los ciudadanos el acceso a su ficha personal; sesenta mil archivos pertenecientes a los servicios secretos fueron, de esa manera, accesibles a los ciudadanos checos. Esta ley fue posteriormente complementada con la 148/1998 de 20 de mayo de 1998, gracias a la cual archivos del Comité Central de los Partido Comunista y del Ministerio del Interior fueron desclasificados.

De esta forma y pese a que no fue creada comisión de la verdad alguna, tras la llegada de la democracia a la República Checa, varias iniciativas fueron implementadas con visos a que las víctimas individuales y la sociedad pudiera conocer lo ocurrido durante la dictadura comunista.

### **1.15. Brasil.**

La búsqueda de la verdad en Brasil por parte del Estado tiene su punto inaugural en la Ley 9.140/95 de 4 de diciembre de 1995<sup>536</sup>. Esta ley, aparte de otorgar reparaciones a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1975<sup>537</sup>, creaba la *Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos*. La función de la comisión era el reconocimiento de

---

<sup>534</sup> GONZÁLEZ QUINTANA, A., *Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos...* op.cit., pp.58-59.

<sup>535</sup> Para un análisis en profundidad sobre esta ley puede consultarse: DAVID, R., “Lustration Laws in Action...”, op.cit., pp.408-410. Esta ley fue posteriormente complementada con las leyes 279/1992, 422/2000 y 424/2000, impidiendo que miembros o colaboradores del servicio de inteligencia, del Ejército o del Partido Comunista, con anterioridad a 1989, pudieran ocupar cargos públicos.

<sup>536</sup> Los motivos de adopción de esta ley eran “reconocer, de alguna manera, la criminalidad del régimen militar, y la obligación de la Unión de indemnizar a las víctimas de la represión o a sus familiares, a través de una Comisión Especial”. Citado en CARNEIRO LEÃO, A.M., “La Comisión de la Verdad en la trayectoria de la justicia transicional en Brasil”, *Revista Derecho del Estado*, vol. 30, 2013, pp.64-65.

<sup>537</sup> Entre las reparaciones otorgadas por esta ley se encuentra reconocer como muertas a las personas desaparecidas que participaron en acciones políticas durante aquella época; indemnizaciones económicas; y la aceptación del Estado como responsable de las violaciones.

las víctimas de ese período (incluidas aquellas fallecidas por causas no naturales cuando estaban en manos del Estado<sup>538</sup>), localizar los restos de los desaparecidos y dictar informes sobre las peticiones de indemnización formuladas por los herederos de las víctimas<sup>539</sup>.

La utilidad de esta comisión en el respeto del derecho a la verdad colectivo fue puesta de manifiesto en el caso de la Corte IDH, *Gomes Lund y otros c. Brasil*. El Estado, para enfatizar el reconocimiento público de su propia responsabilidad, alegó a la promulgación de la Ley 9.140/95, “mediante la cual [se] ‘promovió el reconocimiento oficial de su responsabilidad por las muertes y por las desapariciones ocurridas durante el período del régimen militar’ y pagó indemnizaciones a los familiares de cincuenta y nueve presuntas víctimas”<sup>540</sup>. A su vez, fue alegado que la comisión: “estableció la versión oficial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales”<sup>541</sup>.

Sin embargo, a pesar de estas políticas implementadas por Brasil, el derecho a la verdad de las víctimas del período dictatorial no estaba siendo del todo respetado ya que, tal y como declararon las partes en el caso anteriormente mencionado, seguía sin conocerse ni el paradero ni las circunstancias de la desaparición<sup>542</sup>.

---

<sup>538</sup> Este inciso fue incluido mediante la Ley 10.875, del 1 de junio de 2004, que modificaba la Ley 9.170.

<sup>539</sup> Artículo 4, Ley 9.170. Un análisis de los trabajos de esta comisión puede encontrarse en: ROCHA DE ASSIS MOURA, M.T., COELHO ZILLI, M.A., MONTECONRADO HIDALEVICH, F.G., “Brasil”, en AMBOS K., MALARINO, E., ELSNER, G. (eds.), *Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Berlín – Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2009, pp.185-186; igualmente puede verse: CARNEIRO LEÃO, A.M., “La Comisión de la Verdad...”, *op.cit.*, pp.63-67. El informe final de esta comisión fue publicado en 2007 bajo el título de *Direito à Memória e à Verdade*<sup>539</sup>, y conforma el primer relato sobre los acontecimientos represivos ocurridos en Brasil realizado por un mecanismo impulsado por el Estado. COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS, *Direito à Memória e à Verdade*, 2007, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Brasília.

<sup>540</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) c. Brasil*, sentencia de 24 de noviembre de 2010, en *Serie C, Núm. 219*, párr.21. La Corte IDH, sin embargo, enfatizó que: “para que el reconocimiento interno surta plenos efectos, el Tribunal estima que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, refiriéndose a las violaciones establecidas en la presente Sentencia. El acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, en presencia de altas autoridades nacionales y de las víctimas del presente caso. El Estado deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización. Dicho acto deberá ser difundido a través de medios de comunicación y, para su realización, el Estado cuenta con el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia”, párr.277.

<sup>541</sup> *Ibid.*, párr.21.

<sup>542</sup> *Ibid.*, párr. 259.

## 1. 16. Ecuador.

La sustitución del Gobierno militar por uno civil en 1979 no significó el consecuente cambio a una política de respeto a los derechos humanos en Ecuador. La debilidad institucional con la que contaba por entonces el Estado tuvo consecuencias nefastas: falta de control de los cuerpos de seguridad privados, incapacidad para acometer la reforma de la administración de justicia o falta de control policial sobre las acciones de las bandas armadas existentes en los barrios suburbanos<sup>543</sup>.

El debate sobre la necesidad de que la sociedad debía conocer la verdad sobre los acontecimientos que se estaban sucediendo en Ecuador nació a raíz de la desaparición y posterior asesinato de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo a mano de agentes de la policía ecuatoriana. La confesión pública de uno de los implicados en el crimen destapó a toda la sociedad la existencia de todo un enjambre policial creado por y para la represión: escuelas de tortura, cementerios clandestinos, etc<sup>544</sup>. La conmoción social que se había instaurado en Ecuador no fue ajena al Presidente, Abdalá Bucaram, el cual compareció afirmando que el país “necesitaba un baño de verdad”<sup>545</sup>.

El organismo elegido para hacer efectiva la obligación del Estado de averiguar la verdad de lo ocurrido, apoyada por el propio Presidente (como se dispone en el propio mandato), fue la Comisión de la Verdad y la Justicia creada mediante el Acuerdo Ministerial 012 de 17 de septiembre de 1996. Este acuerdo establecía en su considerando:

“Que el derecho a la vida, la libertad, e integridad de las personas, así como sus garantías ciudadanas consagradas en la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales de los cuales el País es signatario<sup>546</sup>, constituyen el paradigma de la vida democrática y la sana convivencia de la población (...).

Que el país ha conocido de diversas fuentes, graves denuncias de violaciones a los Derechos Humanos desde el restablecimiento de la democracia en el año 1979, ante los cuales *el Señor Presidente Constitucional de la República ha resuelto*

---

<sup>543</sup> CURBELO, N., “Comisión Verdad y Justicia de Ecuador”, *Ko’ãga Roñe’ëtã*, serie III, 1996, p.2. Disponible en: <http://www.derechos.org/koaga/xi/2/curbelo.html> (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>544</sup> *Ibid.*, p.3.

<sup>545</sup> *Ibid.*

<sup>546</sup> El PIDCP fue ratificado por Ecuador el 6 de marzo de 1969. La CADH, el 8 de diciembre de 1977.

*promover un ‘Baño de Verdad’ que permita establecer los hechos, sancionar a los responsables y reparar los daños causados”*<sup>547</sup>.

Sin embargo, el impulso de la creación de esta comisión para recuperar la verdad de lo ocurrido no fructificó en un apoyo total al trabajo de esta. Según lo dispuesto en el informe de la Comisión IDH sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador de 1997, la Comisión de la Verdad y la Justicia rompió sus relaciones con el Gobierno en febrero de 1997, debido a la salida de la presidencia de Abdalá Bucaram<sup>548</sup> y la escasez de recursos necesarios para continuar con su labor<sup>549</sup>.

La falta de finalización de los trabajos de la comisión supuso una generalización de la impunidad en Ecuador, tal y como veremos que establecieron la Corte y la Comisión IDH más adelante.

## **1. 17. Estonia, Letonia y Lituania.**

Los mecanismos de búsqueda de la verdad implementados en Estonia, Letonia y Lituania comparten características y similitudes en sus propósitos y en sus modos de actuación con las que fueron creados en Alemania, República Checa o Polonia, al tratarse de mecanismos de investigación del pasado comunista. Y es que en estos países fueron creadas tanto comisiones de la verdad<sup>550</sup>, como instituciones dirigidas a la gestión y publicación de archivos.

---

<sup>547</sup> Recogido por CURBELO, N., “Comisión de la Verdad...”, *op.cit.*, p.4. Sin resaltado en el original.

<sup>548</sup> UNITED STATE INSTITUTE OF PEACE, *Truth Commission: Ecuador 1996*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/truth-commission-ecuador-96> (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>549</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador*, OEA/Ser.L/V/II.96 Doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997, pp.9-10.

<sup>550</sup> La doctrina especializada en justicia de transición y más aún la estudiosa de las comisiones de la verdad, como regla general, no han incluido como tal las comisiones creadas en estos Estados. Las razones argüidas para ello es que, debido a su *modus operandi* o a sus particularidades, las comisiones de Estonia, Letonia y Lituania no comparten características con las comisiones de la verdad más prominentes<sup>550</sup>, muchas de las cuales ya han sido analizadas dentro del marco de nuestro trabajo (Argentina, Chile, Guatemala o Sudáfrica). De hecho, autoras como Eva – Clarita Pattai las han definido como comisiones de la verdad históricas, no estrictas comisiones de la verdad. Para esta autora, una comisión de la verdad histórica es: “*an ad hoc academically grounded body of inquiry set up by state institutions to revisit historical records and facts about wrongs committed many decades earlier; to engage in research and interpretive negotiations in a rather closed environment and to produce a joint report that offers a more diversified and critical narrative of past events.* (...)”. Thus a historical truth commission can but does not have to be part of a political transition process”. PETTAI, E.C., “Interaction between History and Memory: Historical Truth Commissions and Reconciliation”, en KATTAGO, S. (ed.), *The Ashgate Research Companion to Memory Studies*, Farnham, Asghate Publishing Limited, 2015, p.241. Sobre esta problemática puede consultarse igualmente: BEATTIE, A.H., “Post – Communist Truth Commissions: Between Transitional Justice and the Politics of History”, en STAN, L.,

La caída del muro de Berlín y la consecuente finalización de la Guerra Fría y del régimen comunista de la Unión Soviética produjo la aparición de reclamos a favor de la reconciliación con el pasado represivo en los nuevos Estados independientes. En el caso de estos tres Estados, este se remontaba a 1940, con la primera ocupación soviética del territorio, continuaba entre 1941 y 1944 con la dictadura nazi y finalizaba en 1989 con la segunda ocupación de la Unión Soviética.

La comisión lituana (*Tarptautinė komisija Nacių ir Sovietinio okupacinio režimu nusikaltimams Lietuvoje įvertinti*) fue constituida bajo Decreto presidencial de 7 de septiembre de 1998. El 17 de noviembre del mismo año se produjo la primera reunión de la comisión donde se concretaron los comisionados (internacionales y nacionales), su presidencia (dos personalidades nacionales) y su mandato. Este iba dirigido a: “to investigate the circumstances and the scope of extermination”<sup>551</sup>.

Como también ocurriera con las otras dos comisiones bálticas, su mandato estaba dirigido a la investigación de crímenes contra la humanidad, sin embargo, ninguna de ellas se llegó a centrar solamente en este particular sino que ampliaron su actuación para poder llegar a crear un marco abierto de discusión sobre lo ocurrido en los tres Estados: contexto político, tipo de políticas implementadas, etc<sup>552</sup>. Para ello, la comisión lituana creó dos comités: uno sobre la represión nazi y otro sobre la comunista; cada uno contaba con independencia para poder coordinar y supervisar su propio trabajo<sup>553</sup>.

La presión internacional hacia la investigación de estas dos etapas era creciente. Por un lado, había un gran desconocimiento tanto dentro como fuera de Lituania sobre la extensión de los crímenes producidos por Iósif Stalin durante la ocupación soviética, lo que hacía que se produjera un baile de cifras sobre el número de víctimas durante este período. Por otro lado, las comunidades internacionales y nacionales de víctimas judías del Holocausto cuestionaban que el Gobierno lituano condenara de forma inequívoca y

---

NEDELSKY, N. (ed.), *Post – Communist Transitional Justice*, Nueva York, Cambridge University Press, 2015, pp.213-214.

<sup>551</sup> Decreto de 18 de noviembre de 1998. Un desarrollo más profundo de los propósitos de esta comisión se dio en el documento que reanudaba los trabajos de la comisión en 2012, tras su interrupción en 2007, en los que se exponía: ““Acting in accordance with Article 77 of the Constitution of the Republic of Lithuania and in view of the distinct, unprecedented nature and scale of the Holocaust; other crimes of the Nazi occupation regime, and the devastating consequences of the Soviet occupation regime for the people of Lithuania, I hereby set up the following International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania”. Decreto No 1K-1245 de 16 de octubre de 2012.

<sup>552</sup> BEATTIE, A.H., “Post – Communist Truth Commissions...”, *op.cit.*, p.221.

<sup>553</sup> STAN, L., “Truth Commissions in Post-Communism: The Overlooked Solution?”, *The Open Political Science Journal*, vol.2, 2009, p. 6.



directa la actuación de ciudadanos lituanos durante la ocupación nazi<sup>554</sup>. Mediante el inicio de una investigación al respecto, el Gobierno pretendía cerrar cualquier atisbo de duda acerca de estos temas.

Paralelamente, y como ya hicieran demás Estados post comunistas, el acceso de víctimas y sociedad a la información sobre los actuación del régimen soviético fue visto como una necesidad acuciante para poder averiguar la más completa verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura comunista. De hecho, Lituania alegó el 24 de mayo de 2013 la institución de la *Office of the Chief Archivist of Lithuania* y la Ley I-1115 sobre documentos y archivos de 5 de diciembre de 1995 como medios de respeto al derecho a la verdad en respuesta al pedido de la OACNUDH para la elaboración de su informe 21/7 sobre el derecho a la verdad y los archivos<sup>555</sup>. Esta ley regulaba la gestión y el acceso a los archivos generados durante la ocupación de la Alemania nazi y la dictadura de la Unión Soviética. En concreto, a instancias de esta fue creado el *National Documentary Fond* el cual consistía en una colección de: “documents of state and municipal institutions, agencies and enterprises, persons authorised by the state, activity documents of state agencies and enterprises which operated in Lithuania at various times, as well as the documents preserved in state archives”<sup>556</sup>.

Sin embargo, y pese a que se constataba el derecho de acceder libremente a estos archivos, según su artículo 19, se establecían unos requisitos demasiado estrictos que impedían un efectivo acceso a determinados archivos<sup>557</sup>, lo cual ponía en cuestión que

---

<sup>554</sup> PETTAI, E.C., “Interaction between History and Memory...”, *op.cit.*, pp.245-246.

<sup>555</sup> El informe de Lituania puede consultarse en: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Right to the truth – National Archives on Human Rights”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/en/issues/truth/pages/truthIndex.aspx> (Consultado el 13 de junio de 2016).

<sup>556</sup> Ley I-1115, art. 3. El contenido del *National Documentary Fond* consistía según establece el art. 3.3: The special part of the National Documentary Fond shall consist of the activity documents of the structures of the opposition (resistance) to the occupation regimes of the USSR and Germany, the People's Commissariat for Internal Affairs of the Lithuanian SSR (from 1940 to 1941 and from 1944 to 1946), the People's Commissariat for State Security of the Lithuanian SSR (in 1941 and from 1944 to 1946), the Ministry for State Security of the Lithuanian SSR (from 1946 to 1953), the Ministry of Internal Affairs of the Lithuanian SSR (from 1946 to 1954), the Committee for State Security of the Lithuanian SSR (from 1954 to 1991), the People's Commissariat for State Security of the USSR (NKGB), the Ministry for State Security of the USSR (MGB), the subdivisions of the Committee for State Security of the USSR (KGB) which operated in Lithuania from 1940 to 1991, the subdivisions of the People's Commissariat for Internal Affairs of the USSR (NKVD) and the Ministry of Internal Affairs of the USSR (MVD) which operated in Lithuania from 1946 to 1954, the subdivisions of the People's Commissariat of Defence of the USSR (NKO) and the People's Commissariat (Ministry) of the Navy (NKVMF) which operated in Lithuania in 1941, from 1943 to 1946, the subdivisions of the Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Soviet Army (GRU) which operated in Lithuania from 1940 to 1991, the Communist Party of Lithuania, as well as the structures subordinate to these organisations, services.

<sup>557</sup> Art. 20.5: “Access to the documents of the National Documentary Fond which contain information on person's private life, as well as to structured sets of personal data shall be limited for a term of 30 years after that person's death, and in the event of failure to determine the date of death – for a term of 100

se primara el derecho a conocer la verdad de lo sucedido de víctimas o sociedad sobre otros intereses como la privacidad o la seguridad nacional<sup>558</sup>.

Por su parte, en Estonia encontramos dos comisiones diferenciadas. Por un lado, el Parlamento, en marzo de 1992, creó la *Estonian State Commission on Examination of the Policies of Repression*, con el objetivo de: “(a) analyzing the repressive policies of the Soviet and Nazi occupation regimes, (b) elucidating any ‘crimes of genocide’ carried out during those occupations, and (c) formulating a ‘general assessment’ of these acts”<sup>559</sup>.

Sus investigaciones no estuvieron centradas en audiencias públicas de víctimas<sup>560</sup>, sino que consistió más bien en un trabajo puramente académico por lo que no se concretó en la sensación de que se estuviera respetando su derecho a la verdad. Esto último, unido a la presión internacional para que efectivamente se investigara lo ocurrido durante las dos ocupaciones del país<sup>561</sup>, condujo a la creación de la *Estonian International Commission for the Investigation of Crimes against Humanity*, el 2 de octubre de 1998, a cargo del Presidente, Lennart Meri.

El mandato de la comisión, así como su motivación, fueron recogidos por el propio Presidente en un discurso público, los cuales fueron repetidos durante la primera sesión de reunión de la comisión los días 26 y 27 de enero de 1999. Las causas que propiciaron su creación fueron así:

“The creation of this commission reflects our hope in Estonia that shining the bright light of truth on some of the tragedies of the past will not only contribute to reconciliation within our society and its further reintegration into the international community of nations but also help to prevent the repetition of such tragedies elsewhere. (...). This commission is committed to setting out in as clear terms as

---

years from his birth. If neither the date of birth nor the date of death of a person is determined, the access shall be limited for a term of 70 years from the creation of the documents, with the exception of the cases when the terms fixed in paragraph 3 of this Article shall apply”.

<sup>558</sup> Sobre la posibilidad de que cierta información de interés público sea limitada alegando a la “seguridad nacional”, véase epígrafe 5.2 del capítulo IX.

<sup>559</sup> Recogido en: CLOSA MONTERO, C., *Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe...* op.cit., p.234. Esta comisión concluyó sus trabajos en 2005 con la publicación de su informe final: *ESTONIAN STATE COMMISSION ON EXAMINATION OF THE POLICIES OF REPRESSION, The White Book. Losses inflicted on the Estonian nation by occupation regimes*, Tallín, 2005. Disponible en: <http://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2015/02/TheWhiteBook.pdf> (Consultado el 13 de junio de 2016).

<sup>560</sup> *Ibid.*

<sup>561</sup> PETTAI, E.C., “Interaction between History and Memory...”, op.cit., pp.245-246.

possible what crimes against humanity happened in Estonia. (...). [I]t is committed to compiling a record sufficiently well documented and complete that no one will be able to deny what happened or to avoid facing up to the facts”<sup>562</sup>.

Igualmente Lennart Meri estableció que la comisión:

“(...) is not and does not intend to act as a judicial or prosecutorial body. Its members are not judges and do not intend to act as such. They are not trying to compile a set of facts in order to launch judicial actions against anyone or any institution, either here in Estonia or elsewhere”.

Al contrario de la comisión lituana, esta únicamente contó con personal internacional. Y al igual que ocurría en otras comisiones como la de El Salvador, la incorporación de miembros internacionales suponía otorgarle un halo de legitimidad e imparcialidad a los resultados a los que las comisiones arribaran<sup>563</sup>.

Por otro lado, y como se ha comentado también sobre Lituania, la información perteneciente a los antiguos servicios secretos de Estonia pasó a propiedad del Estado en 1993, regulando este su acceso público al mismo<sup>564</sup>. Esta regulación, según ha dispuesto Antonio González Quintana:

“(...) hace un balance entre derechos colectivos e individuales, permitiendo un acceso ilimitado a las víctimas de la represión a los expedientes que les conciernen (en Estonia se reconoce el derecho legal de las víctimas de la represión a una compensación y a la restitución de las propiedades confiscadas), permite la investigación histórica, limitando el uso de los datos referentes a la intimidad de las personas. La Ley también prohíbe la destrucción de archivos del antiguo régimen represivo así como imposibilita su exportación”<sup>565</sup>.

---

<sup>562</sup> Decreto de 27 de enero de 1999.

<sup>563</sup> GRODSKY, B., “Beyond Lustration...”, *op.cit.*, p.42.

<sup>564</sup> GONZÁLEZ QUINTANA, A., *Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos...* *op.cit.*, p.107.

<sup>565</sup> *Ibid.*, p.108.

Por su parte, el 13 de noviembre de 1998 fue creada la comisión de Letonia, *Vesturnieku Komisija*<sup>566</sup>, bajo decreto presidencial del Presidente, Guntis Ulmanis. Al contrario de las anteriores comisiones, esta comisión fue, ante todo, una comisión histórica, compuesta en exclusiva por personal historiador<sup>567</sup> y con una predisposición meramente académica, alejada de cualquier debate público o político sobre el pasado<sup>568</sup>.

El mandato de la comisión se basaba en: “to coordinate, support and animate the deepening of research of those questions and explanations of Latvia’s 20th century history that are connected with the crimes against humanity of the totalitarian regimes as well as their legacies”<sup>569</sup>.

La comisión de este modo se posicionó fuera de los reclamos sociales sobre la recuperación y aclaración de los hechos ocurridos durante las dos ocupaciones de Letonia durante el s.XX. Tal y como recoge Eva – Clarita Pettai, uno de los miembros de la “comisión de historiadores” afirmó que: “the commission worked mainly as a clearing house for distributing research money, organizing conferences and publishing conference proceedings and research results”.

Como colofón a los trabajos emprendidos por esta comisión no fue publicado ningún informe final al uso, sino que se organizaron conferencias anuales abiertas al público y se publicaron monográficos y artículos académicos<sup>570</sup>, como otra manera de que la sociedad pudiera conocer lo ocurrido durante la época de represión institucional en Letonia.

En este mismo sentido, y tal y según prescribe el Ombudsman del Estado de Letonia en su respuesta a la OACNUDH para la elaboración del mencionado informe 21/7, en 1992 fue creado el Centro para la Documentación de las Consecuencias del Totalitarismo<sup>571</sup>, cuya función principal era la preservación y evaluación de los documentos de la KGB en este país durante la ocupación soviética<sup>572</sup>. Según este:

---

<sup>566</sup> Puede consultarse la página web oficial de la comisión en:

[http://www.president.lv/pk/content/?cat\\_id=7&lng=en](http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=7&lng=en) (Consultado el 13 de junio de 2016).

<sup>567</sup> La traducción al castellano del nombre oficial de la comisión sería: “comisión de historiadores”.

<sup>568</sup> PETTAI, E.C., “Negotiating history for reconciliation: a comparative evaluation of the Baltic presidential commissions”, *Europe – Asia Studies*, vol.67, 2015, núm 7, p.1092.

<sup>569</sup> Decreto de 13 de noviembre de 1998. Citado en *Ibid*.

<sup>570</sup> STAN, L., “Truth Commissions in Post - Communism..”, *op.cit.*, p.7.

<sup>571</sup> El informe de Letonia puede consultarse en: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Right to the truth – National Archives on Human Rights”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/en/issues/truth/pages/truthIndex.aspx> (Consultado el 13 de junio de 2016).

<sup>572</sup> STAN, L., NEDELSKY, N., *Encyclopedia of Transitional Justice Volume 3*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 (publicación online), pp. 26 – 114. Disponible en formato electrónico en:

“every person has the right to access any document of the former KGB containing information about him/herself. Every person can also freely access and use documents which contain no personal data of concrete person”<sup>573</sup>.

Como complemento necesario a esta institución, hay que apuntar también la adopción el 21 de octubre de 1993 de una ley de acceso a los fondos de los archivos públicos del país, así como la creación de un Archivo Nacional que regulara su preservación y acceso público.

En conclusión, hemos comprobado que la recuperación de la verdad, al menos en Estonia y Lituania, estuvo presidida por las demandas de la comunidad internacional de que fuera aclarada la actuación de estos Estados durante el Holocausto. Es decir, las comisiones que en estos Estados se constituyeron no pueden ser entendidas como meros instrumentos transicionales tras la caída del régimen comunista en Europa<sup>574</sup>, pues parte importante de su actuación tuvo que estar centrada en la ocupación nazi, ocurrida cincuenta años antes del inicio de los trabajos de las dos comisiones. Estos instrumentos fueron la respuesta otorgada por estos tres Estados para que la sociedad y las víctimas de ambos períodos totalitarios conocieran qué pasó.

Sin embargo, un complemento necesario a estas comisiones fue la adopción de distintas leyes que permitieran a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto acceder a la información generada durante la dictadura comunista. El uso público de esta información supone un gran paso adelante en la prevención de la aparición de tesis negacionistas y revisionistas que, sobre todo, irían en contra no ya solo del propio derecho la verdad de la sociedad que estas comisiones pretendían preservar, sino de la íntegra reparación de las víctimas individuales<sup>575</sup>.

---

<http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9781139226561&cid=CBO9781139226561A016>  
(Consultado el 13 de junio de 2016).

<sup>573</sup> OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Right to the truth... *op.cit.*

<sup>574</sup> BEATTIE, A.H., “Post – Communist Truth Commissions...”, *op.cit.*, p.222.

<sup>575</sup> Esto concordaría con lo que posteriormente se expondrá en el Conjunto de principios. Véase epígrafe 2.1 del capítulo VI.

## 1. 18. Uzbequistán.

La *Commission for the Promotion of the Memory of Victims* fue creada por el Presidente Islam Karimov en 1999 para analizar la represión política ocurrida durante el régimen de la Unión Soviética; se obviaba, sin embargo, la ejercida por él mismo contra sus enemigos políticos tras las elecciones de 1991<sup>576</sup>.

La motivación que desencadenó la creación de esta comisión de la verdad no estuvo, como en los casos anteriores de los países bálticos, en presiones conjuntas de la sociedad civil y la comunidad internacional, sino que fue únicamente de esta última. Tal y como Brian Godsky afirma:

“(...) empirical evidence based on a review of Uzbek newspapers printed from 1995 to 2003 revealed no (real or government-inspired) public discussion or demands concerning accountability for Soviet-era crimes. Indeed, ‘average’ Uzbeks and even current opposition and pro-human rights forces appear to be genuinely uninterested in opening the books on Soviet and tsarist-era rights abuses. Both groups of actors tend to argue that there were few, if any, rights violations during the Soviet period, and opposition forces are quick to claim that the scale of both political and economic rights violations since 1991 has increased significantly”<sup>577</sup>.

La creación de esta comisión estuvo, por tanto, muy alejada del clamor de la población; una población más preocupada por los abusos a los derechos humanos que se estaban cometiendo desde la independencia de Uzbequistán en 1991, que de los cometidos en el pasado. Fueron las relaciones internacionales del Estado, sobre todo con occidente, las que impulsaron la creación de una comisión que el Presidente utilizó para desmarcar su imagen de los abusos cometidos durante la época comunista.

El mandato de la comisión era tremendamente amplio pues abarcaba un período demasiado largo (desde sucesos del s.XIX, pasando por la Segunda Guerra Mundial, hasta finales del régimen de la Unión Soviética) para el escaso tiempo del que disponía

---

<sup>576</sup> GRODSKY, B., “Justice Without Transition: Truth Commissions in the Context of Repressive Rule”, *Human Rights Review*, vol. 9, 2008, núm.3, p.288.

<sup>577</sup> *Ibid*, p.292.

(un mes)<sup>578</sup>. Su misión consistía en: “to present a comprehensive picture of Uzbekistan’s victims” y aportar sugerencias y recomendaciones para perpetuar la memoria de las víctimas<sup>579</sup>. No obstante, la comisión nunca estuvo dirigida a la individualización de responsabilidades ni a juzgar la represión que la propia población uzbeka produjo contra sus conciudadanos durante la época comunista debido a las posibles consecuencias que esto pudiera acarrear<sup>580</sup>.

Pese a que esta comisión puede ser considerada como una mera “arma política” por parte del Presidente (claro ejemplo es la no investigación de violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo bajo su mandato), sí que produjo, por otro lado, el descubrimiento de hechos pasados que de otra forma nunca hubieran sido descubiertos; lo que redundó en un mejor conocimiento de la sociedad sobre la verdad de las violaciones de derechos humanos que allí y entonces se cometieron.

### **1.19. Nigeria.**

Nigeria alcanzó la independencia del Reino Unido el 1 de octubre de 1960. Desde entonces el país estuvo dirigido por hasta siete regímenes militares que aplicaron una dura represión contra una población caracterizada por una amplia disparidad de religiones y etnias, hasta la llegada de un Gobierno civil en 1999 tras la muerte del General Sani Abacha<sup>581</sup>. El General Olusegun Obasanjo, primer Presidente electo de Nigeria desde la finalización del conflicto, estableció, como una de sus primeras medidas, una Comisión de Averiguación para la Investigación de las Violaciones de Derechos Humanos (también conocida como *Oputa Panel*).

El mandato de la comisión estaba orientado a la averiguación de las causas que dieron lugar al inicio del período de violaciones de derechos humanos<sup>582</sup>. Ello fue confirmado por el Presidente, Olusegun Obasanjo, el cual afirmó, tras la aprobación del mandato, que esta comisión simbolizaba su compromiso: “to heal the wounds of the past... for complete reconciliation based on truth and knowledge of the truth in our

---

<sup>578</sup> GRODSKY, B., “Beyond Lustration...”, *op.cit.*, p.40.

<sup>579</sup> GRODSKY, B., “Justice Without Transition...”, *op.cit.*, p.294.

<sup>580</sup> *Ibid.*, p.295.

<sup>581</sup> YUSUF, H.O., “Travails of Truth: Achieving Justice for Victims of Impunity in Nigeria”, *International Journal of Transitional Justice*, vol. 1, 2007, núm. 2, pp.269-270.

<sup>582</sup> Statutory Instrument núm.8 de 14 de junio de 1999, enmendado por el Statutory Instrument núm. 13 de 14 de octubre de 1999.

land”<sup>583</sup>. Lo mismo fue reiterado en el informe final, en el que se expresó que: “[f]or us, we see the driving force for the setting up of the Commission is the search for the truth about our past as the basis for the establishment of a framework for a just, fair and equitable Nigerian society”<sup>584</sup>.

El mandato temporal de la comisión en un principio estuvo limitado a la investigación de abusos cometidos por el Gobierno autoritario del General Sani Abacha entre 1993 y 1998. Sin embargo, posteriormente fue ampliado hasta el golpe de Estado de 1966, período que incluía incluso el Gobierno autoritario del propio Olusegun Obasanjo entre 1976 y 1979<sup>585</sup>.

La comisión fue bien recibida tanto por el público como por la comunidad internacional ya que, en el mismo contenido del mandato, se concebía como una de las funciones de la comisión la identificación de los responsables de haber cometido violaciones de derechos humanos. Se implementaron audiencias públicas donde los victimarios podían participar acompañados de representación legal, al igual que las víctimas, que podían llevar su propio caso para que fuera tratado. Sería a partir de estas audiencias donde la verdad de los hechos era revelada, debido en su mayor parte a la alta participación tanto de víctimas como de miembros de la policía y el Ejército<sup>586</sup>.

Sin embargo, el posterior comportamiento del Presidente, que declaró que el propósito de la comisión era la reconciliación y no la retribución<sup>587</sup>, junto con la falta de presupuesto para poder llevar a cabo el mandato en su integridad, limitó el impacto de la actuación de la comisión<sup>588</sup>. Estas sospechas fueron confirmadas tras la redacción y presentación del informe a Olusegun Obasanjo en 2002: este se negó a hacerlo público y a implementar ninguna de las recomendaciones que allí se proponían como, por ejemplo, la investigación penal de doscientos cincuenta casos presentados en el informe. Es necesario hacer notar que el informe concluía que el Ejército fue el responsable de la mayoría de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el país con la

---

<sup>583</sup> Citado en: YUSUF, H.O., “Travails of Truth...”, *op.cit.*, p.273.

<sup>584</sup> HUMAN RIGHTS VIOLATIONS INVESTIGATION COMMISSION REPORT, *Summary, Conclusion and Recommendation*, 2002, párr.78.

<sup>585</sup> PERRY, J., SAYNDEE, T.D., *African Truth Commission and Transitional Justice*, Londres, Lexington Books, 2015, p. 56.

<sup>586</sup> PILLAY, S., SCANLON, H., *Peace versus Justice? Truth and Reconciliation Commission and War Crimes in Africa*, Ciudad del Cabo, Center for Conflicts Resolutions, 2007, p.21.

<sup>587</sup> GUACKER, E., *A study of the Nigerian truth commission and why it failed*, Tesis de master, Bergen, Universidad de Bergen, 2009, parte II, p. 8.

<sup>588</sup> MANGA FOMBAD, C., “Transitional Justice in Africa...”, *op.cit.*, p.11.



acquiescencia del poder económico de Nigeria, el cual había colaborado en la preparación de varios golpes de Estado<sup>589</sup>.

Esta falta de colaboración del Presidente con que la verdad una vez averiguada fuera conocida por la sociedad, muestra, como ya ocurrió en Uzbequistán, que la motivación a la hora de constituir un mecanismo de búsqueda de la verdad está íntimamente condicionada con el éxito o el fracaso del mecanismo que se pretenda implementar. La única garantía de que un mecanismo que pretenda buscar la verdad efectivamente lo consiga es que el Estado que la respalde sea un Estado que pretenda respetar el derecho a la verdad de las víctimas. Cualquier otra motivación sufrirá serio riesgo de constituir un medio para la legitimación en el poder del Gobierno de turno; un intento para diferenciarse de la actuación del régimen anterior. Tal y como han afirmado Suren Pillay y Helen Scanlon sobre la experiencia nigeriana: “The failure to release the final report of the commission officially cast doubts over Obasanjo’s political intentions in setting up the body, and fuelled speculation that it was designed to bolster his legitimacy at that time”<sup>590</sup>.

### **1.20. Argentina.**

Los juicios por la verdad constituyeron la respuesta del Estado argentino ante una situación de clara indefensión tras la adopción de las leyes de impunidad en Argentina a finales de los ochenta y comienzos de los noventa.

Tras la publicación y difusión global del informe final de la CONADEP<sup>591</sup>, “Nunca Más”, se inició el 22 de abril de 1985 un proceso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal contra nueve ex comandantes de las Juntas Militares<sup>592</sup> (conocida como “la causa 13”<sup>593</sup>). Durante el proceso la fiscalía presentó setecientos nueve casos repartidos en setenta y ocho sesiones públicas y ochocientos ochenta y tres testigos comparecieron de los mil

---

<sup>589</sup> HUMAN RIGHTS VIOLATIONS INVESTIGATION COMMISSION REPORT, *Summary, Conclusion and Recommendation*, 2002, párrs.32, 92-93.

<sup>590</sup> PILLAY, S., SCANLON, H., *Peace versus Justice?... op.cit.*, p.21.

<sup>591</sup> Véase la creación y desarrollo de los trabajos de la CONADEP en epígrafe 2.7 del capítulo II.

<sup>592</sup> A tal efecto es importante mencionar la ley 23049 de 15 de febrero de 1984 mediante la cual se incluían una serie de reformas en el Código Penal orientadas a investir de la competencia debida a los tribunales penales argentinos para que fueron ellos, y no la jurisdicción militar, los que juzgaran los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de represión de las Juntas Militares. Véase, OLLÉ SESE, M., *Justicia universal... op.cit.*, pp.293-295.

<sup>593</sup> *Ibid.*, p.295.

novecientos ochenta y cuatro inicialmente citados<sup>594</sup>. El 9 de diciembre de 1985 la Cámara dictó su sentencia condenando a prisión a cinco de los nueve ex comandantes<sup>595</sup>.

La celebración de este proceso y la posterior condena a los ya mencionados miembros de las Juntas Militares produjo la incoación de más causas en otros puntos del país. Sin embargo, trayendo a colación las palabras del juez Leopoldo Schiffrin, “el castigo de los crímenes perpetrados del poder es un anhelo que solo se realiza, por lo común, cuando quienes perpetraron los crímenes carecen ya de poder”<sup>596</sup>.

La frase anterior representa perfectamente la situación vivida en Argentina tras el inicio en 1985 de los procesos contra los miembros de las Juntas Militares. La falta de depuración de las Fuerzas Armadas tras el advenimiento de la democracia produjo, aparte de la previsible falta de colaboración de los imputados militares en los juicios<sup>597</sup>, el inicio de numerosas revueltas. Esta situación desembocaría en la adopción de dos leyes de impunidad<sup>598</sup>: la ley de Punto Final<sup>599</sup> y la ley de Obediencia Debida<sup>600</sup>.

La adopción de la primera de estas leyes ponía fecha de caducidad a los procesamientos que en ese momento estaban abiertos o que pudieran abrirse en un futuro, lo que hizo que muchos más fueran incoados con la esperanza de que se pudiera dictar sentencia antes de que expirara el plazo impuesto por la ley (sesenta días desde su

---

<sup>594</sup> *Ibid.*, p.296; CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia... op.cit.*, p.382.

<sup>595</sup> El teniente general Rafael Videla y el almirante Emilio Eduardo Massera fueron condenados a cadena perpetua; el general Roberto Viola, a diecisiete años de prisión; el almirante Armando Lambruschini, a ocho años de prisión; el brigadier general Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión. Esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 1986 (rebajando la condena únicamente de Ramón Agosti y Roberto Viola). Los otros cuatro miembros de las Juntas Militares fueron absueltos en esta causa, pero posteriormente condenados por su actuación durante la Guerra de las Malvinas. CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia... op.cit.*, p.383.

<sup>596</sup> SCHIFFRIN, L., “Argentina”, en ARNOLD, J., SIMON, J.M., WOISCHNIK, J. (eds.), *Estado de Derecho y delincuencia de Estado en América Latina*, México DF, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp.333.

<sup>597</sup> TAPPATÁ DE VALDEZ, P., “El pasado, un tema central del presente. La búsqueda de verdad y justicia como construcción de una lógica democrática”, en PACHECO OREAMUNO, G., ACEVEDO NAREA, L., GALLI, G., *Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*, San José - Estocolmo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2005, p.94.

<sup>598</sup> Para un análisis más en profundidad sobre estas leyes puede consultarse: OLLÉ SESÉ, M., *Justicia universal... op.cit.*, pp. 298-302; SCHIFFRIN, L., “Argentina”...*op.cit.*, pp.333-352; SANCINETTI, M.A., “Las leyes argentinas de impunidad y el artículo 29 de la Constitución de la nación argentina”, en ZUGALDÍA ESPINAR, J.M., LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., (coords.), *Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique Bacigalupo*, Madrid, Marcial Pons, vol.1, 2004, pp.811-826.

<sup>599</sup> Ley 23492 de 23 de diciembre de 1986.

<sup>600</sup> Ley 23521 de 4 de junio de 1987.

promulgación<sup>601</sup>). Como consecuencia, una nueva oleada de alzamientos militares fue iniciada pues veían como, lejos de que cesase la actividad de los tribunales, esta se había incrementado.

El alzamiento producido en la Semana Santa de 1987 promovió la adopción de la ley de Obediencia Debida. Esta ley daba por sentado que:

“(…) quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley N° 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida”<sup>602</sup>.

Por último, y para completar el mapa de impunidad de Argentina al que nos referíamos al principio de este epígrafe, el Presidente electo, Carlos Menem, dictó cuatro indultos entre finales de 1989 y 1990 que supusieron el cierre definitivo a cualquier responsabilidad penal por las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983 y la anulación de penas ya impuestas<sup>603</sup>.

Tras la promulgación de estas últimas medidas, será entonces cuando se llegaría a un contexto de silencio y olvido dentro del período transicional argentino. Sin embargo, el 2 de marzo de 1995 tuvo lugar un evento que produjo una reapertura del debate sobre el legado represivo. La confesión del antiguo jefe de la marina, Adolfo Scilingo, quien relató y describió el andamiaje institucionalizado por las Juntas Militares para hacer desaparecer a los “subversivos”<sup>604</sup> (ejemplo seguido posteriormente por otros militares), supuso el inicio de una nueva etapa en la búsqueda de la verdad de las víctimas, protagonizada sobre todo por las organizaciones de defensa de derechos humanos como

---

<sup>601</sup> Artículo 1, ley 23492.

<sup>602</sup> Artículo 1, ley 23521.

<sup>603</sup> Los decretos de indulto fueron los 1002, 1003, 1004 y 1005, de 7 de octubre de 1989. El 29 de diciembre de 1990 se dictarían los decretos de indulto 2741, 2745 y 2746. Trescientas personas pendientes de juicio fueron indultadas arguyendo a la ansiada “reconciliación nacional”. Para un análisis más profundo sobre estos indultos puede consultarse: OLLÉ SESÉ, M., *Justicia universal... op.cit.*, pp.302-304; CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia... op.cit.*, pp.386-387.

<sup>604</sup> Para más información véase, VERBITSKY, H., *El vuelo*, Buenos Aires, Editorial Planeta Argentina, 2ª ed., 1995.

el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)<sup>605</sup> y las Abuelas de la Plaza de Mayo<sup>606</sup>.

Como en las primeras comisiones de los años setenta y ochenta, estas confesiones destaparon de nuevo (si es que alguna vez estuvo cerrada) la necesidad social de que el Estado respetara sus obligaciones para con las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos, pues la CONADEP, como más adelante se pondrá de manifiesto, adoleció de una serie de deficiencias que no permitió que el derecho a la verdad individual de las víctimas fuese enteramente respetado.

Las leyes de impunidad y los indultos propiciaban que el procedimiento penal no pudiera ser contemplado como una opción viable para dar respuesta a las demandas de verdad de víctimas individuales y sociedad, avivadas tras las revelaciones de los antiguos miembros de las Juntas Militares. Pese a ello, los tribunales continuaron siendo considerados como el foro predilecto para recuperar la verdad de las víctimas, con independencia de que el camino de la justicia estuviera totalmente bloqueado. Así pues, numerosas demandas fueron interpuestas contra los culpables de haber cometido las violaciones de derechos humanos en Argentina durante los años setenta y ochenta, basadas todas ellas en el derecho de las víctimas a la verdad. Esta serie de procesos que se iniciaron en este período serán los conocidos, en consecuencia, como los juicios por la verdad.

Elena Maculán los ha definido como:

---

<sup>605</sup> Como la propia organización sostiene: “Entre 1970 y 1980 nació y se desarrolló en la Argentina un vasto movimiento de defensa de los derechos humanos que obtuvo, por sus singulares características, una amplia trascendencia a nivel regional e internacional y que continúa gravitando de manera preponderante aún hoy en la realidad político-institucional del país. El surgimiento de este movimiento obedeció a dos circunstancias concurrentes: el terrorismo de Estado implantado por las fuerzas armadas en el país desde el 24 de marzo de 1976, y el desarrollo del concepto universal de derechos humanos, producto de los grandes consensos políticos de la segunda post-guerra. La fundación del CELS en 1979, durante la última dictadura militar, debe ubicarse en ese contexto particular. Su creación respondió a la necesidad de encarar acciones rápidas y decisivas para detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, documentar el terrorismo de Estado y proporcionar ayuda legal y asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos-desaparecidos”. Puede consultarse: <http://www.cels.org.ar/cels/?info=detalleTpl&ids=6&lang=es&ss=133> (Consultado el 13 de junio de 2016).

<sup>606</sup> Para saber más sobre la influencia de esta asociación en la búsqueda de la verdad durante la transición argentina puede consultarse: GONZÁLEZ BRINGAS, A., “Abuelas-Madres de Plaza de Mayo: la construcción social de la memoria”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.), *El derecho a la memoria*, op.cit., pp.579-615; CARLOTTO, E., “Niños desaparecidos por motivos políticos en la república Argentina (1976-1983). La labor de abuelas de Plaza de Mayo”, en MÉNDEZ, J., ABREGÚ, M., MARIEZCURRENA, J., *Verdad y Justicia...* op.cit., pp.87-94.

“Se trata de juicios celebrados por los tribunales penales con referencia a los crímenes cometidos por la dictadura militar que regio a finales de los años Setenta [sic], pero cuya finalidad es únicamente buscar la ‘verdad’ sobre lo ocurrido y sobre el paradero final de las víctimas desaparecidas, sin que ello implique la atribución de responsabilidad por dichos crímenes ni la imposición de la correspondiente sanción”<sup>607</sup>.

No fueron (ni son) solo objeto de controversia las innovaciones (sobre todo procesales) que esta nueva institución incorporaba, sino también la misma apelación a los derechos a la verdad y al duelo como sustento jurídico principal de estos procedimientos al ser dos derechos no afianzados en el ordenamiento jurídico argentino. Sin embargo, el primero de ellos empezaba a gozar de una cierta importancia dentro del DIDH a tenor de lo que dispuso la Corte IDH en el mencionado caso *Castillo Páez c. Perú*<sup>608</sup> y de las prácticas de otros órganos como la propia Comisión IDH y el Comité DH que ya hemos estudiado. En efecto, la ausencia de reconocimiento del derecho a la verdad dentro de la jurisdicción interna hizo que la apelación al ordenamiento internacional se considerara fundamental para que los tribunales locales pudieran considerarse competentes para proteger el derecho a la verdad, con el riesgo añadido de que lo que se pretendía no era la aplicación de un tratado específico, sino “los desarrollos jurisprudenciales sobre el delito de desaparición forzada de personas y los comentarios doctrinales en torno al derecho a la verdad”<sup>609</sup>.

La fundamentación de los juicios por la verdad y el derecho a la verdad como el eje central y fin último de los mismos se basó en seis argumentos principales. Entre los fundamentos jurídicos encontramos la reforma constitucional de la Constitución argentina de 1994, el tipo de crímenes cometidos y las obligaciones internacionales del Estado. Junto a estos, aparecen una serie de fundamentos técnicos tales como la falta de una institución *ad hoc* para realizar la tarea encomendada a los juicios por la verdad, el rol de la búsqueda de la verdad dentro del proceso penal y la viabilidad de estos juicios

---

<sup>607</sup> MACULÁN, E., “Los juicios por la verdad argentinos: ¿un laboratorio para la justicia penal internacional?”, en REQUENA, M. (ed.), *Luces y sombras de la seguridad internacional en los albores del siglo XXI*, Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2010, p.263.

<sup>608</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, sentencia de 3 de noviembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 34*, párr.86.

<sup>609</sup> ABREGÚ, M., “Tutela judicial del derecho a la verdad en Argentina”, *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, vol.24, 1996, p.19.

como la única manera de poder aunar los derechos de las víctimas y el marco legal vigente.

#### ***1.20.1. Fundamentos legales de los juicios por la verdad.***

La reforma de la Constitución argentina daba una nueva posición prominente a los tratados internacionales dentro del ordenamiento argentino (por ejemplo, la CADH se introducía dentro del bloque de constitucionalidad). En concreto su artículo 31 establece que: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella”.

Esta posición se vería completada con el artículo 75.22: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. (...). [E]n las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”.

El derecho a la verdad no estaba, obviamente, recogido de forma explícita dentro de la Constitución, no obstante, esta sí recogía una protección general de los derechos humanos por parte de los tribunales en su artículo 116:

“Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”.

Igualmente, y a pesar de esta falta de reconocimiento implícito dentro de la normativa interna, se apeló al artículo 33, que reconocía la forma republicana de

Gobierno<sup>610</sup>, como el artículo integrante del derecho de la sociedad a saber toda la verdad sobre su pasado, así como el derecho de los familiares a conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos.

Por otro lado, la defensa de estos juicios se ha centrado en la apelación a una serie de argumentos jurídicos que destacaron la gravedad de los crímenes cometidos y las obligaciones internacionales a las que Argentina debía dar respuesta.

Según Martín Abregú, antiguo director ejecutivo del CELS, organismo promotor de la presentación de la primera querella ante los tribunales argentinos basada en el derecho a la verdad, la elección del proceso penal para continuar con la investigación de los hechos ocurridos en el pasado partía de la idea de que “nos estábamos refiriendo a crímenes atroces y aberrantes que jamás habían sido investigados por la Justicia”<sup>611</sup>.

Las obligaciones a las que tenían que hacer frente los Estados tras la perpetración de este tipo de crímenes ya fueron definidas en el ilustre trabajo de Juan Méndez sobre el derecho a la verdad. Y es que, tal y como mencionó Elena Maculán:

“(…) muchas de las peticiones con las que se abrieron los *juicios por la verdad* retomaban la teoría elaborada por Méndez, según el cual, tras la comisión de graves violaciones de derechos humanos, sobre el Estado recaen las obligaciones de verdad, justicia, reparación y renovación de las fuerzas armadas y de seguridad”<sup>612</sup>.

En efecto, para Juan Méndez la comisión de este tipo de crímenes genera una serie de obligaciones para el Estado que van más allá de las que pudieran originarse tras cualquier otro ilícito internacional:

“Los crímenes de lesa humanidad son violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad cometidos de manera masiva y sistemática. Las desapariciones, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la detención arbitraria prolongada, son crímenes de lesa humanidad. Si bien toda violación de una obligación internacional hace surgir una obligación de parte del

---

<sup>610</sup> “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

<sup>611</sup> ABREGÚ, M., “La tutela judicial del derecho a la verdad...”, *op.cit.*, pp.25-26.

<sup>612</sup> MACULÁN, E., “Los *juicios por la verdad* argentinos...”, *op.cit.*, p.265, nota 6. Resaltado del original.

Estado responsable de reparar el daño causado, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad la obligación del Estado es más amplia. No puede reducirse a una indemnización monetaria, porque ello implicaría permitir a los Estados mantener la impunidad a cambio de dinero. El concepto de reparación integral requeriría ante todo un esfuerzo por volver al status quo ante, remedio que en la mayoría de los casos no será posible. Pero además no puede considerarse integral la reparación si no incluye la investigación y revelación de los hechos y un esfuerzo por procesar y castigar penal y disciplinariamente a quienes resultaren responsables.

[...]

Para ser más específicos, las obligaciones del Estado que nacen de estos crímenes son cuádruples: obligación de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables (justicia); obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados (reparación); y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (creación de fuerzas de seguridad dignas de un Estado democrático)”<sup>613</sup>.

La perpetración de estos actos trae consigo de forma indisoluble una serie de obligaciones a las que el Estado en cuestión ha de hacer frente, entre ellas, la búsqueda de la verdad como derecho tanto individual como colectivo. Sin embargo, una matización es necesario realizar en la línea que ya hemos estudiado anteriormente: a pesar de que estas cuatro obligaciones (verdad, justicia, reparación y no repetición) son interdependientes, no pudiendo elegir el Estado cuál de ellas va a respetar y cuál no (pues ha de respetar a todas por igual), la falta de cumplimiento de una de ellas no podrá suponer el incumplimiento de las otras<sup>614</sup>. Traducida esta reflexión al contexto argentino: la adopción de una serie de leyes de impunidad, que irían en contra del derecho a la justicia de las víctimas, no podía redundar a su vez en una violación de su derecho a la verdad<sup>615</sup>, al estarse haciendo referencia a dos obligaciones distintas.

---

<sup>613</sup> MÉNDEZ, J., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, pp.521-522. La existencia del nacimiento de estas obligaciones tras la comisión de graves violaciones de derechos humanos también ha sido defendida por: LÓPEZ MARTÍN, A.G., “Los derechos de las víctimas de violaciones...”, *op.cit.*, p. 160.

<sup>614</sup> *Ibid.*, p.521.

<sup>615</sup> Este argumento sobre la imposibilidad de que una amnistía pudiera impedir la incoación de una investigación orientada a averiguar la verdad, ya fue argüida por la Comisión IDH en su primera referencia al derecho a la verdad dentro del Informe Anual 1985-1986. Véase epígrafe 4.2 del capítulo I.



Siguiendo con este razonamiento defendido tanto por la doctrina como por la Corte IDH, la constitución de estos juicios por la verdad supondría la respuesta del Estado argentino ante sus propias obligaciones internacionales, lo que daría muestras de la *opinio iuris* del Estado en este particular. Claramente podría ser discutible desde un punto de vista técnico-formal la forma en la que esta respuesta fue armada, como seguiremos exponiendo a continuación. No obstante, si atendemos a los fundamentos jurídicos de Derecho internacional anteriormente expuestos, encontramos que estamos ante un instrumento que pretende cubrir un vacío dejado por el Poder Ejecutivo y Legislativo. El mantenimiento de las leyes de impunidad, efectivamente, era contrario a las obligaciones anteriormente expuestas, por lo que el Poder Judicial a la hora de admitir a trámite las demandas fundamentadas en el derecho a la verdad de las víctimas individuales, lo que está haciendo es defender un derecho violado por los otros poderes del Estado.

#### ***1.20.2. Fundamentos técnico – formales de los juicios por la verdad.***

En este punto, donde ya tenemos identificado el marco jurídico al que debemos atenernos, la pregunta sería: ¿cuál hubiera sido la instancia ideal para proteger el derecho a la verdad de las víctimas?

Antes de adentrarnos en la respuesta a esta pregunta, hemos de precisar que en el contexto y en la época histórica a la que nos estamos refiriendo (entre 1995, fecha de la confesión de Scilingo y 1999, fecha del inicio del primer juicio por la verdad), Argentina ya había constituido una comisión de la verdad (con las características ya anteriormente definidas) y había incoado una serie de procedimientos penales que terminaron llevando a prisión a reconocidos violadores de derechos humanos, aunque con las salvedades posteriormente conocidas en forma de leyes de impunidad. Sin embargo, ¿cumplieron estas dos instituciones, CONADEP y Poder Judicial, con el derecho a la verdad de las víctimas?

Si nos atenemos a los trabajos y resultados de la comisión de la verdad, comprobaremos que esta, aunque constató la existencia de casi nueve mil casos de desaparición forzada<sup>616</sup>, solo unos pocos fueron puestos como ejemplo de las

---

<sup>616</sup> Durante esta época, a parte de los juicios de la verdad, Argentina también constituyó mediante su resolución 1745/1999 de 19 de agosto de 1999 del Ministerio del Interior, el Registro de Desaparecidos y

atrocidades cometidas por el Gobierno de las Juntas Militares<sup>617</sup>, por lo que la mayoría de las víctimas individuales no vieron respetado su derecho a la verdad<sup>618</sup>.

Por su parte, los juicios penales de 1985 tampoco dieron respuesta a varios de los interrogantes de las víctimas, pues, como ya hemos sostenido, la verdad no es la finalidad del proceso penal<sup>619</sup>. De este modo, contemplamos que pese a que el derecho a la verdad colectivo sí que estaba efectivamente reconocido mediante los trabajos realizados por la CONADEP, la vertiente individual seguía incompleta.

Los juicios por la verdad, habiendo sido definidos como una institución híbrida entre comisión de la verdad y procedimiento penal<sup>620</sup>, encontraron en este último el foro adecuado para la concreción del derecho a la verdad de las víctimas. Para Martín Abregú, la elección de esta vía reside en la ausencia de una alternativa viable para los fines que se intentaban alcanzar, ya que: “[l]a respuesta civil no solo no es idónea sino que está destinada a la realización de otros fines. La vía administrativa, por otra parte, si bien puede ser parcialmente adecuada, tampoco parece contar con las herramientas necesarias para la investigación de un acto criminal”<sup>621</sup>.

La elección final por una versión adulterada del proceso penal para hallar la verdad se encuentra en la conexión indisoluble entre conocimiento y sanción. Apelando

---

Fallecidos, donde se sistematiza toda esta información al respecto. Véase, GARRETÓN KREFT, F., GONZÁLEZ LE SAUX, M., LAUZÁN, S., *Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina*, Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos, 2011, p. 123.

<sup>617</sup> CAMACHO PADILLA, F., “La construcción histórica de la represión en Argentina y Chile: las Comisiones de la Verdad como instrumento de narración oficial”, *Revista de Historia Iberoamericana*, vol. 7, 2014, núm.1, p.58.

<sup>618</sup> Esta premisa ha sido afirmada por Estela Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo: “Ha quedado fehacientemente acreditado, a través de numerosos testimonios brindados ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y en causas judiciales, que existieron centros clandestinos de detención de mujeres embarazadas desaparecidas que funcionaron como verdaderas maternidades (Escuela de Mecánica de la Armada, por ejemplo), hacia donde eran trasladadas embarazadas posteriormente desaparecidas, desde distintos puntos del país para dar a luz. Concluimos entonces que la “verdad” formal contenida en los expedientes judiciales comentados, difiere sustancialmente de la “verdad histórica”, que es la que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo en sus esfuerzos por localizar y restituir a estos niños”. CARLOTTO, E., “Niños desaparecidos por motivos políticos...”, *op.cit.*, p.91.

<sup>619</sup> Véase, epígrafe 2 del capítulo III. En palabras del propio Juan Méndez respecto de los trabajos de la CONADEP estableció: “El Informe Sábato no se planteó establecer la suerte y paradero de cada una de las casi 9,000 personas desaparecidas cuya identidad comprobó, porque la continuidad natural de la actividad de la Conadep eran las causas penales que se procesarían caso por caso y con mejores posibilidades de establecer esos hechos en forma pormenorizada”. MÉNDEZ, J., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p.523. En otro trabajo de este mismo autor, sentenciaba: “[f]or all their success, however, neither the CONADEP report nor the subsequent criminal trials were able to determine what had happened to all of the more than ten thousand victims of ‘forced disappearances’. To their credit, the relatives never stopped demanding an ‘individualized truth’ to supplement the structural one uncovered by CONADEP and by the Junta trials”. MÉNDEZ J., “The Human Right to Truth...”, *op.cit.*, p.121.

<sup>620</sup> GARIBIAN, S., “Buscar a los muertos entre los vivos...”, *op.cit.*, p.34.

<sup>621</sup> ABREGÚ, M., “La tutela judicial del derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p. 26.

a la teoría formada por Daniel Pastor: si el proceso está encargado de conocer (instruir) y sancionar; si de la ecuación eliminamos la sanción, aún nos quedaría su otra función - la investigación preliminar, el conocimiento de lo ocurrido<sup>622</sup>.

Las críticas a la utilización del proceso como medio de hallar la verdad han estado principalmente dirigidas a la falta de la adecuación de las reglas propias del proceso a los objetivos a los que se quería arribar con los juicios por la verdad. Daniel Pastor ha sentenciado de manera sencilla pero contundente que: “el proceso penal no puede investigar cualquier cosa ni puede hacerlo de cualquier manera”<sup>623</sup>. La revelación de hechos dentro del proceso penal está únicamente encaminada a averiguar si el imputado es culpable o inocente<sup>624</sup>. Igualmente para este autor, otros derechos propios de las víctimas como pudieran ser averiguar el paradero de los desaparecidos (objetivo principal de los juicios por la verdad), hecho sin relevancia penal, no sería propio del juicio penal “pues toda hipótesis de investigación que exceda el supuesto que cae entre las circunstancias jurídico-penalmente relevantes es ajena al proceso penal”.

Por otro lado, la misma ausencia de condena convierte a los juicios por la verdad en un puro mecanismo de investigación; en una instrucción penal. Al carecer esta “instrucción” de los “límites y los objetivos específicos del proceso penal”<sup>625</sup>, la verdad a la que se podrá arribar estará más cerca de una verdad propia de historiadores que de una meramente jurídica.

En íntima relación con esta discusión se nos presenta el siguiente argumento, posiblemente el más polémico: “el derecho a la verdad constituye el fin inmediato del proceso penal”<sup>626</sup>.

Habiéndonos ya pronunciado sobre este tema<sup>627</sup>, constatamos que en estos juicios la función del juez penal sería una función meramente declarativa, no punitiva<sup>628</sup>; no se reclama la imposición de una pena individual a los victimarios, sino una respuesta a los interrogantes ¿qué pasó? Y ¿dónde están los desaparecidos?

---

<sup>622</sup> PASTOR, D., “¿Procesos penales solo para conocer la verdad? La experiencia argentina”, *Revista Jueces para la Democracia*, vol.59, 2007, p.112.

<sup>623</sup> *Ibid.*, p.114.

<sup>624</sup> *Ibid.*

<sup>625</sup> MACULÁN, E., “Los juicios por la verdad argentinos...”, *op.cit.*, p.275.

<sup>626</sup> OLIVEIRA, A., GUEMBE, M.J., “La verdad, derecho de la sociedad”, *op.cit.*, p.553.

<sup>627</sup> Véase epígrafe 1 del capítulo II. Sobre la conexión entre el proceso judicial y el derecho a la verdad puede verse en detalle el epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>628</sup> GARIBIAN, S., “Buscar a los muertos entre los vivos: dar cuerpo a los desaparecidos de la dictadura argentina por el Derecho”, en ANSTETT, E., DREYFUS, J.M., GARIBIAN, S. (dir.), *Cadáveres impensables, cadáveres impensados. El tratamiento de los cuerpos en las violencias de masa y los genocidios*, Buenos Aires, Ediciones Mino y Davila, 2013, p.34.

Como interpretación de los argumentos tanto de quienes opinan que el objetivo último del proceso es la averiguación de la verdad, como de quienes se oponen a ello, no compartimos que ninguno de estos argumentos puedan ser esgrimidos ni para fundamentar los juicios por la verdad, ni para oponerse a estos<sup>629</sup>. En efecto, si damos por bueno que los juicios por la verdad son un proceso penal adulterado, es decir, que no se corresponde con lo que sería un juicio penal al uso al faltar la mayoría de sus garantías<sup>630</sup>, sería imposible extrapolar la posición de la verdad en un juicio penal con la posición de la verdad en estos juicios, ya que nos encontramos ante dos instituciones distintas. El fin último del proceso no es la averiguación de la verdad pero sí lo es en los juicios por la verdad; por ello contarán con un iter procesal totalmente distinto al de un juicio penal con las debidas garantías.

Por último, desarrollaremos el último argumento esgrimido para defender la creación de los juicios por la verdad: ¿son la única vía posible para poder conciliar las leyes de impunidad y el derecho de las víctimas a la verdad?

Ya hemos apuntado que Argentina, aunque estuviera inclumpliendo con el derecho a la justicia de las víctimas mediante la vigencia de las leyes de impunidad, no podría extrapolar esta situación al respeto al derecho a la verdad, argumento que,

---

<sup>629</sup> Como ejemplo claro de argumento que sostiene que la verdad no es parte esencial del proceso y que, por tanto, el procedimiento penal no es la instancia adecuada para albergar los juicios por la verdad, encontramos el esgrimido por Daniel Pastor, el cual, se remite a lo sostenido por Nicolás Guzmán acerca de la verdad en el proceso: “Nicolás Guzmán, a partir de las bases sentadas por el sistema de Ferrajoli, ha explicado recientemente que en el proceso penal la verdad ‘ya no es un fin en sí mismo, sino que representa solamente una condición necesaria para la aplicación de una condena. Esto es lo que impone la adopción de un modelo garantista de proceso penal’. Esta explicación ha demostrado que el descubrimiento de la verdad no es más un fin del proceso penal, lo cual desmiente con máxima excelencia técnica uno de los postulados básicos de la práctica bajo estudio [los juicios por la verdad], esto es, que la búsqueda de la verdad sea un meta del derecho procesal penal”, PASTOR, D., “¿Procesos penales solo para conocer la verdad?...”, *op.cit.*, p.116. Por otro lado Elena Maculán, tras un completo análisis sobre las deficiencias procesales de los juicios por la verdad, sentencia: “Todo ello nos lleva a concluir que tal vez mejor hubiera sido encargar de la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido a un órgano diferente de los tribunales penales”. MACULÁN, E., “Los juicios por la verdad argentinos...”, *op.cit.*, p.275. Sin embargo, este argumento resulta contradictorio pues tras poner encima de la mesa las grandes diferencias entre procedimiento penal y juicios por la verdad, podría concluirse que, efectivamente, estamos ante dos foros totalmente distintos, aunque el órgano que conociera de aquéllos fuera el mismo que conozca de las causas penales típicas, pues las normas por las que se rige son diferentes en uno y otro caso. Como argumento a favor de la posición prominente de la verdad en el proceso penal se encuentra la ya apuntado por Alicia Oliveira y María José Guembe que disponían que: “[d]esde el punto de vista del derecho, el ‘derecho a la verdad’ constituye el fin inmediato del proceso penal; es el interés público el que reclama la determinación de la verdad en el juicio, es el medio para alcanzar el valor más alto, es decir, la justicia”, OLIVEIRA, A., GUEMBE, M.J., “La verdad, derecho de la sociedad”, *op.cit.*, p.553. Ante este argumento no podemos más que desmarcarnos pues consideramos que es la pena individual ante un hecho concreto el fin último del proceso penal. Esta tesis sí podría representar el objetivo final de los juicios por la verdad o de las comisiones de la verdad, instituciones cuyo fin inmediato sí es el descubrimiento de la verdad.

<sup>630</sup> En cuanto a la problemática de las pruebas tomadas bajo los estándares utilizados en los juicios por la verdad véase: MACULÁN, E., “Los juicios por la verdad argentinos...”, *op.cit.*, p.271-273.

recordemos, ya fue defendido por la Comisión IDH en 1986<sup>631</sup>. Es por ello que la única forma de poder conciliar el respeto al ordenamiento interno argentino con las obligaciones internacionales a las que Argentina se había comprometido era la creación de un organismo sin facultades penales pero con las suficientes competencias (las cuales, recordemos, la CONADEP no poseía) como para hacer efectivo el derecho a la verdad de cada una de las víctimas.

El problema principal al que se enfrentaban los tribunales que aceptaban las demandas fundadas en derecho a la verdad era la posición que iban a tener los victimarios llamados a declarar. En efecto, como ya hemos apuntado, una de las características propias de estos juicios fue la sustitución a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos de la categoría de imputado por la de testigos, al no poder interponerse una acción penal contra ellos. Los victimarios irían a comparecer en calidad de testigos ante los tribunales que requiriesen su presencia<sup>632</sup>, so pena de poder incurrir en un delito de sustracción, reticencia o falsedad en caso de no llegar a comparecer<sup>633</sup>. Sin embargo, para Daniel Pastor esta posibilidad de que los victimarios comparecieran como testigos podía contener una intención indirecta, pues el alegato que estos prestasen podría ser utilizado en el futuro en una causa penal en su contra cuando esta pudiera ya incoarse. Es decir, es posible que con estas comparecencias “los ‘acusadores’ y los funcionarios judiciales encargados de los llamados ‘juicios de la verdad’ estuvieran pensando -algo que está lejos de ser demostrable- en investigar ahora para castigar más adelante”<sup>634</sup>.

Otra crítica con la que tuvo que lidiar esta relación del victimario con los juicios por la verdad fue la posible aplicación del principio *non bis in idem*. Si un victimario había ya, por ejemplo, participado en los procesos de 1985 y había sido posteriormente indultado o se le habían aplicado las leyes de impunidad, no tendría por qué comparecer en estos juicios si ya había sido juzgado una vez por los hechos que cometió. No obstante, al no tratarse de un procedimiento penal y no ser llamado a declarar en calidad de imputado, sino como testigo (de un crimen que él mismo cometió), no se estaría violando este principio pues no hay posibilidad alguna de ser condenado. Martín Abregú sostiene ante esta posibilidad que:

---

<sup>631</sup> Véase, epígrafe 4.2 del capítulo I.

<sup>632</sup> SCHIFFRIN, L., “Argentina”, *op.cit.*, p.351.

<sup>633</sup> PASTOR, D., “¿Procesos penales solo para conocer la verdad?...”, *op.cit.*, p.107.

<sup>634</sup> *Ibid.*, p.113.

“Sería absurdo sostener que no podemos ‘molestar’ al sospechado por la comisión de un delito para que nos informe sobre la comisión de un delito –incluso en el caso de que su testimonio lo involucre, puesto que de ningún modo podrá ser perseguido–, cuando diariamente perseguimos e intimamos a los testigos para que se presten en los tribunales a dar su versión de los hechos”<sup>635</sup>.

En conclusión, los juicios por la verdad nos dejan una serie de reflexiones a tener en cuenta sobre el modo de poder dar cobertura al derecho a la verdad. Pese a consistir en un mecanismo alejado de cualquier formalismo, por saltarse toda una serie de requisitos procesales que suponen en la práctica garantías de un juicio justo, constatamos que los juicios por la verdad constituyen un ejercicio de ingeniería jurídica cuyo único fin es la búsqueda de la verdad de las víctimas. Es posible que sea cierto que este problema pudo haberse solucionado, tal y como se ha propuesto, mediante la creación de una nueva comisión de la verdad con competencias más amplias<sup>636</sup>, no obstante, la elección por esta versión del proceso penal es igualmente válida a la vista de que ofrece un foro en el cual las víctimas y la sociedad pueden ver su derecho a la verdad respetado.

---

<sup>635</sup> ABREGÚ, M., “La tutela judicial del derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p.27.

<sup>636</sup> MACULÁN, E., “Los juicios por la verdad argentinos...”, *op.cit.*, p.276.

## 2. VALORACIÓN FINAL

Tras este estudio de la práctica estatal en relación con el derecho a la verdad durante la década de los noventa, apreciamos avances significativos en la materia, pues los Estados comenzaron ya a amoldar sus comisiones a los requerimientos concretos de las víctimas (más acordes ahora al tipo de comisión que se instituyó en Argentina en los años ochenta), mediante la asunción de su creación como una obligación propia tras un período de violaciones graves de derechos humanos, lo que constituye uno de los principales avances dentro de este período con respecto al anterior. Como expondría la Comisión de la Verdad de Sierra Leona (estudiada en el siguiente capítulo sobre práctica estatal): “[t]ruth commissions have largely come about in recent years to give effect to what Joinet called ‘the inalienable right to truth’”<sup>637</sup>.

Por otro lado, al contrario de la etapa anterior donde solo se detectaron comisiones extrajudiciales de investigación como políticas destinadas al conocimiento de la verdad, la finalización de los períodos dictatoriales en distintos Estados (principalmente comunistas de Europa del este -con la caída del telón de acero-, y en varios Estados latinoamericanos) propiciaron la implementación de distintas medidas dirigidas a que la sociedad tuviera la oportunidad de acceder a cierto tipo de información sobre las épocas de represión, ya fuera mediante la desclasificación de archivos o por la creación de centros destinados a su gestión y difusión pública. Mientras que en países africanos y latinoamericanos las comisiones de la verdad fueron el instrumento primigenio para hallar la verdad de lo ocurrido, los antiguos Estados comunistas de la Europa oriental optaron por la creación de distintas instituciones cuya función era la de custodia de los archivos del antiguo régimen represor (relativa a los crímenes cometidos por este) y la puesta a disposición de información a la sociedad de manera que pudieran conocer de primera mano la verdad de lo ocurrido<sup>638</sup>.

En este mismo sentido, contemplamos que durante esta etapa destacan varias experiencias que, con el tiempo, han sido identificadas como parte de las más representativas dentro de los mecanismos de búsqueda de la verdad colectiva como, por

---

<sup>637</sup> TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, SIERRA LEONE, *Witness to truth: report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. Vol.1*, Graphic Packaging Ltd, 2004, p. 79. Sin resaltado en el original.

<sup>638</sup> STAN, L., “The Vanishing Truth? Politics and Memory in Post Communist Europe”, *East European Quarterly*, vol.40, 2006, núm. 4, p.385.

ejemplo, la chilena, la salvadoreña, la sudafricana o la guatemalteca en comisiones de la verdad; y, la alemana, la checa a la de los países bálticos en apertura de archivos.

Durante los años noventa empezaron también a surgir los primeros pronunciamientos acerca de una posible obligatoriedad jurídica del derecho a la verdad. A este respecto es interesante resaltar aquí la opinión de Leandro Despouy en 1995, por entonces Relator Especial sobre los derechos humanos y los estados de excepción, el cual en el marco de una reunión de expertos sobre los derechos no expuestos a suspensión en situaciones de emergencia y circunstancias excepcionales argumentó acerca del derecho a la verdad, que: “[l]a jurisprudencia concordante que existe en estos sistemas y las opiniones expresadas por los relatores especiales de las Naciones Unidas ponen de manifiesto la existencia de una norma de Derecho internacional consuetudinario”<sup>639</sup>.

A nuestro entender y en contraposición con lo defendido por el Relator, acabamos de comprobar como aún la práctica estatal no cumpliría los requisitos del artículo 38 del Estatuto de la CIJ destinados a que el derecho a la verdad, en su modalidad de derecho colectivo, pudiera obtener el calificativo de derecho consuetudinario. Entendemos que será necesario que una mayor generalidad de los Estados especialmente interesados se pronuncie al respecto para que la afirmación del Relator pueda compartirse plenamente.

---

<sup>639</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción. Octavo informe revisado anual y lista de Estados que desde el 1º de enero de 1985 han proclamado, prorrogado o levantado el estado de excepción, presentado por el Sr. Leandro Despouy, Relator Especial, nombrado en cumplimiento de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/20, 26 de junio de 1995, p.57, párr. 40





## **PARTE III**

# **PROGRESOS FUNDAMENTALES EN EL AFIANZAMIENTO DEL DERECHO A LA VERDAD (2000 – 2010)**



## **CAPÍTULO VI**

### **AVANCES EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU APUNTALAMIENTO EN EL MARCO CONVENCIONAL**

#### **1. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS SOBRE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DE VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES DE 2005.**

Pese a que no se mencionaba directamente el derecho a la verdad como medio específico de reparación dentro de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones<sup>640</sup> (Principios sobre reparaciones), la coincidencia de parte de su contenido material con una de las medidas concretas, la satisfacción<sup>641</sup>, hace que encuadremos este derecho como medida importante a tener en cuenta dentro de las reparaciones a la víctima; nexa al que han contribuido a forjar, como analizaremos ampliamente *infra*, órganos como la Corte IDH también durante esta época, o el Comité DH y el Comité contra la Tortura (Comité CT) más adelante.

---

<sup>640</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución 60/147, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones [Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005], Doc. A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006.

<sup>641</sup> El propio Theo van Boven en su análisis de los Principios sobre reparaciones describió las medidas de satisfacción como: “includes a broad range of measures, from those aiming at cessation of violations to *truth seeking*, the search for the disappeared, the recovery and the reburial of remains, public apologies, judicial and administrative sanctions, commemoration, and human rights training”. VAN BOVEN, T., “Victim’s Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines”, en FERSTMAN C., GOETZ, M., STEPHENS, A., (eds.), *Reparations for victims of genocide, war crimes and crimes against humanity*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p.39. Sin resaltado en el original.

El papel que juega el derecho a la verdad dentro del sistema de reparaciones<sup>642</sup> es ciertamente complejo pues reside en lo ya comentado por los jueces de la Corte IDH, Cançado Trindade y Abreu Burelli, en relación con la conexión existente entre los tres derechos principales de la justicia de transición: la verdad, la justicia y la reparación<sup>643</sup>. Esto entraña que no podrá concebirse uno sin los otros, en aras a conseguir una *restitutio ad integrum*, pese a constituir derechos autónomos. En efecto, siguiendo lo ya expuesto por Juan Méndez:

“(...) cuando se trata de violaciones que tienen carácter de crímenes de lesa humanidad, el derecho de las víctimas frente al Estado no se agota en la obtención de una compensación pecuniaria, sino que requiere una reparación integral que incluye el derecho a la justicia y al conocimiento de la verdad”<sup>644</sup>.

Es por ello que en caso de violaciones de derechos humanos, como pudiera ocurrir igualmente ante cualquier hecho ilícito internacional, para poder alcanzar esa reparación completa esta no pueda ser entendida como una mera compensación pecuniaria a la víctima, pues daría la sensación de que el Estado puede “comprar el silencio de las víctimas”<sup>645</sup>, o que estas están aceptando la falta de voluntad del Estado de no juzgar a los responsables<sup>646</sup>.

---

<sup>642</sup> LLEWELLYN, J.J., “Restorative Justice in transition and beyond. The Justice Potential of Truth-Telling Mechanisms for Post-Peace Accord Societies”, en BORER, T.A. (ed), *Telling the Truths... op.cit.*, p.91. La diferencia principal que encontramos entre la justicia restauradora y la retributiva (la basada en la justicia penal) estriba en que esta última está basada en el procesamiento penal del culpable, mientras que la justicia restauradora pretende la integración de todas las partes (víctimas y victimarios) en la comunidad. Prima la integración sobre el aislamiento. Por su parte, la diferencia entre la justicia restauradora y la transicional se encuentra en que la primera se apoya más en “principios comunitaristas”, en soluciones al conflicto de índole local, donde la sociedad civil es el centro de preocupación. Por su parte, la segunda, fija su foco de atención en el contexto internacional, el cual prima en situaciones de violación del DIH, la defensa de los derechos humanos y las exigencias de las víctimas. Véase, HOYOS, G., “Prólogo”, en HOYOS VÁSQUES, G., (ed.) *Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p.13.

<sup>643</sup> Véase epígrafe 2 del capítulo IV. En especial consúltase: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Loayza Tamallo c. Perú*, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de noviembre de 1998, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm.42*. Voto razonado conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, párrs. 2-3.

<sup>644</sup> MÉNDEZ, J., “Derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p. 520.

<sup>645</sup> DE GREIFF, P., “Justice and Reparations”, en DE GREIFF, P., (ed.), *The Handbook of reparations*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press-International Center for Transitional Justice, 2006, p.461.

<sup>646</sup> HAMBER, B., “The dilemma’s of reparations: in search of a process-driven approach”, en DE FEYTER, K., PARMENTIER, S., BOSSUYT, M., and LEMMENS, P. (eds.), *Out of the Ashes: Reparation for Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations*, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2005, p.139.

Este argumento también es válido si lo aplicamos en sentido contrario (verdad sin reparaciones): tomar medidas orientadas a conocer la verdad, sin gestos de reparación alguna, supondría *palabras vacías* (“cheap talk”<sup>647</sup>), al dar la sensación de que el Estado, por un lado, no compensa materialmente el daño causado a las víctimas y, por otro, elude responder a las cuestiones de todo superviviente tras una etapa represiva, tan básicas como complejas: quién, cómo, cuándo, dónde o por qué<sup>648</sup>.

En determinados contextos (entendiendo por “contexto” los ámbitos tanto social como familiar), el solo conocimiento de la verdad de lo ocurrido puede repercutir en una plena reparación para las víctimas. La experiencia sudafricana, aunque ya afirmamos que es demasiado radical para algunos expertos, demuestra las ansias de verdad que puede llegar a tener un pueblo que ha vivido un régimen de una dimensión criminal como la del *apartheid*; capaz, incluso, de intercambiar de forma íntegra justicia por verdad.

Según Martien Schotsmans, la verdad que buscan aquellos que sobreviven a un conflicto o a una dictadura está encaminada a intentar llegar a comprender por qué pasó lo que pasó, quién lo hizo o quién dio la orden y, posiblemente, por qué a ellos. Estas violaciones, sostiene este autor, destronan una de las concepciones básicas de una persona inocente: “bad things happen to bad people”<sup>649</sup>. Conocer la verdad de lo ocurrido es una de las maneras mediante las cuales podría volver a revertirse la situación al *status quo* anterior<sup>650</sup>. El entendimiento de qué ha pasado y el por qué ha pasado es esencial a la hora de que la víctima pueda volver a confiar en los valores sociales; en la creencia de que un mal comportamiento será siempre sancionado<sup>651</sup>.

A partir de estas premisas, y entrando ya en el análisis de los Principios sobre reparaciones, una vez sentada la obligación estatal de averiguar el paradero de la persona desaparecida dentro de la Declaración DF, el órgano plenario de las Naciones

---

<sup>647</sup> DE GREIFF, P., “Justice and Reparations”, *op.cit.*, p.461.

<sup>648</sup> SCHOTSMANS, M., “Victim’s expectations, needs and perspectives after gross and systematic human rights violations”, en DE FEYTER, K., PARMENTIER, S., BOSSUYT, M., and LEMMENS, P. (ed.), *Out of the Ashes... op.cit.*, pp.120-121.

<sup>649</sup> *Ibid.*, p.121.

<sup>650</sup> Desarrollando este argumento, para Barahona de Brito la verdad dentro de estos contextos: “has been seen as a form of social empowerment, giving to previously powerless and repressed individuals the possibility of reclaiming their lives and understanding the nature of their subjugation”, BARAHONA DE BRITTO, A., “Introduction”, en BARAHONA DE BRITTO, A., GONZALEZ ENRIQUEZ, C., AGUILAR, P., (eds), *Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies*, Oxford, Oxford University Press, 2001, p.25.

<sup>651</sup> SCHOTSMANS, M., “Victim’s expectations...”, *op.cit.*, p.121.

Unidas realizó un claro y muy destacable avance en el campo de las políticas sobre reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos<sup>652</sup> mediante la aprobación, el 16 de diciembre de 2005, de los Principios sobre reparaciones<sup>653</sup>.

Antes de adentrarnos en el papel que juega la verdad dentro de estos principios y, por ende, en la reparación de las víctimas, es necesario que nos refiramos al punto 7.º del Preámbulo de la misma Resolución 60/147. En él, la AG recuerda que los Principios sobre reparaciones no incluyen nuevas obligaciones internacionales para los Estados, sino que únicamente contienen mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de obligaciones ya existentes dentro del DIDH y el DIH. Por lo tanto, entendemos que las menciones que en ellos se hagan respecto a la verdad responden a una constatación de obligaciones de los Estados relacionadas con la reparación a las víctimas que ya estaban vigentes al momento de adopción de esta Resolución; prueba de ello es la aprobación de esta Resolución por consenso de los Estados miembros de la AG. Tal y como ha mencionado Theo van Boven, estos Principios: “serve as a tool, a guiding instrument for States in devising and implementing victim – oriented policies and programmes. They also serve as guidance to victims themselves, collectively and individually, in support of claims to remedy and reparation”<sup>654</sup>.

La primera medida que coincidía con parte del contenido material del derecho a la verdad venía encuadrada dentro de las medidas de *satisfacción*: “[l]a verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad”<sup>655</sup>.

---

<sup>652</sup> Sin embargo, dentro la AG en este período también se dieron menciones aisladas al derecho a la verdad no tan relevantes como, por ejemplo, la resolución 57/161 de 2003 en donde exhortaba al Gobierno de Guatemala a “las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, a fin de promover la reconciliación nacional, defender el derecho a la verdad y resarcir a las víctimas de la violencia y de los abusos de los derechos humanos”. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 57/161. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala*, Doc. A/RES/57/161, 28 de enero de 2003, párr.17. De igual modo, la AG defendió siempre la constitución de organismos independientes de investigación y el trabajo realizado por estos. Por ejemplo, en una resolución de 2001 expuso: “*Reafirma* la importancia de las investigaciones emprendidas por la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia para acabar con la impunidad y conseguir que el proceso de transición y de reconciliación nacional sea auténtico y efectivo, y alienta al Gobierno de Haití a que continúe sometiendo a juicio a los autores de las violaciones de los derechos humanos denunciadas por la Comisión Nacional y a que cree mecanismos eficaces de apoyo a las víctimas, en particular a las mujeres, los niños y sus familiares”, ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 55/118. Situación de los derechos humanos en Haití*, Doc. A/RES/55/118, 1 de marzo de 2001, párr.7.

<sup>653</sup> Para un estudio en profundidad sobre estos principios puede consultarse, VAN BOVEN, T., “Victim’s Rights to a Remedy...”, *op.cit.*, pp. 19-40.

<sup>654</sup> VAN BOVEN, T., “Victim’s Rights to a Remedy...”, *op.cit.*, p. 32. Un análisis detallado sobre el valor jurídico de las resoluciones de la AG puede verse en epígrafe 6 del capítulo IX.

<sup>655</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 60/147, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas*

La alusión a la “publicación de la verdad” posee especial relación con el pronunciamiento que ya realizaba el Comité DH acerca de “publicar los resultados de la sentencia” como medida intrínseca dentro del derecho a la justicia de las víctimas y que coincidía, como vimos, con lo recogido en el artículo 13.4 de la Declaración DF en su faceta colectiva; la aquí denominada “verdad judicial colectiva”<sup>656</sup>. Sin embargo, será interesante averiguar el carácter que se le pretendía dar a esta medida: si se trata solo de una decisión judicial, o pudiera ser entendida como extrajudicial, tal y como parece vaticinarse con la alusión a la verdad como “completa”.

Dentro del *Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales* realizado por el Relator Especial, Theo van Boven, presentado ante la Comisión DH en 1993<sup>657</sup> -que constituiría la base de lo que posteriormente sería la versión definitiva de los Principios sobre reparaciones-, ya se incluyó esta medida como forma de satisfacción y no repetición<sup>658</sup>. Los precedentes con los que esta medida contó se encontraban en el análisis previo realizado por el Relator acerca del trabajo de las comisiones de la verdad, la práctica de la Comisión IDH y los beneficios que para la sociedad tenía el conocimiento de esta verdad global y más completa<sup>659</sup>. No obstante, en un informe posterior realizado por Cherif Bassiouni, presentado también a la Comisión DH en 1999, este estableció que en el realizado por Theo van Boven en 1993 “no se trata ningún método de determinación de la responsabilidad que no sea de carácter penal, tales como las comisiones de la verdad”<sup>660</sup>. Es decir, pese a que Theo van Boven trató los beneficios de la verdad que emanan de los trabajos de instituciones como las comisiones de la verdad, el proceso judicial constituía el único medio que los Estados tendrían la obligación de crear según quedó recogido no solo en el informe de

---

*internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* [Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005], Doc. A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr.22.

<sup>656</sup> Véanse los epígrafes 1 y 3 del capítulo III.

<sup>657</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EXAMEN DE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LAS ESFERAS DE QUE SE HA OCUPADO LA SUBCOMISION, *Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993.

<sup>658</sup> *Ibid.*, p.64.

<sup>659</sup> *Ibid.*, párrs.114 – 125 y 134.

<sup>660</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Sr. M. Cherif Bassiouni, experto independiente sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, presentado de conformidad con la resolución 1998/43 de la Comisión de Derechos Humanos*, Doc. E/CN.4/1999/65, 8 de febrero de 1999, párr.18.



1993, sino finalmente también en los Principios sobre reparaciones. La razón pudiera residir en que la creación de estas comisiones, en seguimiento de la propia práctica estatal al respecto, no contaba, aún en esta época, con un respaldo generalizado que amparara su obligatoriedad general.

De esta forma, la medida de *satisfacción* “verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad” será interpretada en un sentido estrictamente judicial, dentro de las obligaciones de los Estados de incoar investigaciones judiciales tras una violación de derechos humanos. Por tanto, la obligación de *verificación* concordaría con el deber de iniciar esa investigación; mientras que la *revelación* se correspondería con lo ya apuntado sobre la “verdad judicial colectiva”, acerca de que el resultado de esa investigación (es decir, la sentencia) habrá de ser públicamente revelado para que la sociedad lo conozca de primera mano.

No obstante, el apelativo a que esa verdad haya de ser “completa” deja en el aire posibles interpretaciones que aludan a la necesidad de que otros mecanismos no judiciales (por ejemplo, las comisiones de la verdad o el acceso público a determinados archivos, como ya se reconocía en el Informe Joinet) hayan de ser implementados, pues, como ya expusimos<sup>661</sup>, difícilmente podría llegarse a un conocimiento íntegro de lo sucedido si solo la verdad que emana de un procesamiento judicial es la conocida por la sociedad. Sin embargo, reiteramos que de la práctica estatal analizada hasta la fecha no puede interpretarse que este comportamiento (crear mecanismos extrajudiciales de investigación tras una violación de derechos humanos) pueda ser jurídicamente oponible a los Estados al momento de aprobación de estos Principios.

En definitiva, en caso de que un Estado, tras realizar una investigación judicial acerca de una determinada violación de derechos humanos, no revele públicamente los resultados de esa investigación (es decir, la sentencia) estaría contradiciendo las obligaciones, por un lado, del derecho a la reparación en su modalidad de satisfacción, pero también parte de las que emanan del contenido propio del derecho a la verdad, en concreto, la verdad judicial colectiva.

En segundo lugar, el siguiente pronunciamiento relacionado con la verdad se encuadraba dentro del contexto de desapariciones forzadas como es la búsqueda de los

---

<sup>661</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo III sobre los modos de hallar una “verdad completa”.

desaparecidos y la recuperación de la identidad de los menores despojados de su madres al nacer; elementos que ya aparecieron en las primeras comunicaciones del Comité DH sobre casos de desapariciones forzadas, así como en casos ante la Comisión IDH y la Corte IDH desde mediados de los años ochenta, al igual que la Declaración DF en su artículo 17.1. Así lo recogieron los Principios y directrices:

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad”<sup>662</sup>.

En su siguiente mención se apelaba al derecho a la información, el cual ya aparecía relacionado el derecho a la verdad dentro del mencionado Informe 136/99 de la Comisión IDH y que también lo encontramos recogido en el artículo 13.4 de la Declaración DF. Así se establecía en los Principios y directrices:

“(…) las víctimas y sus representantes han de tener derecho a solicitar y obtener información sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del Derecho internacional humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones”<sup>663</sup>.

En este artículo, recordemos, encontramos recogida la primera referencia al derecho a la información vinculada con el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada, al contener la obligación de los Estados de brindar información sobre los resultados de la investigación. Los Principios sobre reparaciones, mediante

---

<sup>662</sup> *Ibid.* La satisfacción dentro de la reparación de las víctimas ha sido definida por Pablo de Greiff, conjuntamente con las medidas orientadas a la no repetición, como “(...) broad categories that include such dissimilar measures as the cessation of violations, verification of facts, official apologies and judicial rulings that establish the dignity and reputation of the victim, full public disclosure of the truth, searching for, identifying, and turning over the remains of dead and disappeared persons, along with the application of judicial or administrative sanctions for perpetrators, and institutional reform”, DE GREIFF, P., “Justice and Reparations”, *op.cit.*, p.452. Las medidas aquí descritas, según ha manifestado Dinah Shelton, son las vistas de forma más inapropiada por los Estados a la hora de encarar un período de transición política, sin embargo, cuentan con gran importancia dentro del respeto a los derechos humanos. SHELTON, D., “The United Nations Principles and Guidelines on reparations: context and contents”, en DE FEYTER, K., PARMENTIER, S., BOSSUYT, M., and LEMMENS, P. (ed.), *Out of the Ashes...* *op.cit.*, p.23.

<sup>663</sup> SHELTON, D., “The United Nations Principles...”, *op.cit.*, párr.24.

esta alusión, ampliaban el espectro de la información que considerarían las víctimas necesario para sentirse reparadas, pues iría más allá del simple conocimiento del resultado de la investigación.

En conclusión, estos principios suponen una útil guía que aglutina distintas medidas relacionadas con la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, las cuales coinciden, a nuestros intereses, con parte del contenido material que, poco a poco y a través de la práctica de varios órganos de protección de derechos humanos, ha empezado a ser además propio del derecho a la verdad.

## **2. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS**

### **2.1. Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad.**

Como ya pusimos de manifiesto en la época anterior respecto a la práctica de la Comisión DH (y en este caso también del Consejo DH), la lucha de las Naciones Unidas contra la impunidad fue el motivo que llevó a estos organismos al desarrollo del derecho a la verdad.

Como continuación al ya analizado Informe Joinet, la Comisión DH encargó a Diane Orentlicher una actualización de dicho informe, conocido comúnmente como Conjunto de principios<sup>664</sup>, el cual fue presentado el 8 de febrero de 2005.

Esta Resolución, al igual que el Informe Joinet en 1997, analizaba la vinculación jurídica que a ese momento tenían estos, así llamados, “principios rectores”. Para Diane Orentlicher la situación en 2005 era distinta de lo que entendió en su momento Louis

---

<sup>664</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad*, Doc. E/CN.4/2005/102, 18 de febrero de 2005. Este informe fue el informe final de una serie de documentos anteriores relacionados igualmente con la actualización del Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. Véase, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 2003/72*, Doc. E/CN.4/RES/2003/72, 25 de abril de 2003; COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 2004/72*, Doc. E/CN.4/RES/2004/72, 21 de abril de 2004; COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Estudio independiente, con inclusión de recomendaciones sobre las mejores prácticas para ayudar a los Estados a reforzar su capacidad nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad, elaborado por la Profesora Diane Orentlicher y presentado a la Comisión de Derechos Humanos por el Secretario General en cumplimiento de la resolución 2003/72*, Doc. E/CN.4/2004/88, 27 de febrero de 2004.

Joinet. Muestra de ello es la afirmación consolidada en el preámbulo acerca de que: “la evolución pertinente del Derecho internacional ha venido a confirmar categóricamente la validez de los principios y, a la vez, ha aportado mayores aclaraciones sobre el alcance de las obligaciones jurídicas establecidas de los Estados”. Entre esas declaraciones, el propio texto establece que:

“Otra categoría de revisiones es atribuible, en sentido amplio, en las novedades registradas en la práctica de los Estados que, más allá de la importancia que puedan tener para revelar principios incipientes del derecho consuetudinario o para confirmar normas establecidas, han brindado indicios valiosos sobre estrategias eficaces para luchar contra la impunidad”<sup>665</sup>.

Es decir, las normas que se encontrarán dentro del Conjunto de principios corresponderán a dos tipologías: bien a “principios incipientes del derecho consuetudinario”, bien a “normas establecidas”.

En lo referente al derecho a la verdad, Diane Orentlicher afirmó:

“Al mismo tiempo, el texto actualizado reconoce que algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho a saber se rigen por normas internacionales establecidas o incipientes. Por ejemplo, aunque la cuestión de crear o no una comisión de la verdad, o cuándo hay que hacerlo, debe resolverse, por lo general, mediante deliberaciones de ámbito nacional, el principio de que los Estados deben preservar los archivos que permitan a las sociedades ejercer su derecho a saber la verdad sobre la represión sufrida en el pasado es un asunto de importancia universal”<sup>666</sup>.

Es decir, esta autora, sin entrar a concretar la naturaleza jurídica de la vertiente colectiva del derecho a la verdad, sí realiza una separación entre las dos modalidades que se identificaron ya en el Informe Joinet como las ideales para respetarla. Siguiendo lo arriba estipulado, las comisiones de la verdad y el acceso público a los archivos contarían con distinta obligatoriedad. Según lo por ella dispuesto, el derecho a la verdad

---

<sup>665</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad*, Doc. E/CN.4/2005/102, 18 de febrero de 2005, párr. 7.

<sup>666</sup> *Ibid.*, párr. 19.

colectivo sí sería jurídicamente vinculante toda vez que se concretara únicamente a través de la posibilidad de que cualquier persona, independientemente de su condición de víctima, pudiera tener acceso a los archivos que contuvieran información acerca de violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Este principio constituía, de hecho, “un asunto de importancia universal”.

A nuestro parecer estamos ante un pronunciamiento ambiguo, en el sentido de que en vez de pronunciarse respecto a si los Estados tienen el deber de respetar una norma determinada (derecho a la verdad colectivo) lo está haciendo respecto a la medida concreta (acceso público a archivos) que la protegería. A ello se añadiría que no todas ellas (crear comisiones de la verdad) son obligatorias, sino que su aplicación queda a discrecionalidad de los propios Estados.

En este sentido apreciamos que en lo referente al derecho a la verdad colectiva y a sus diferentes modalidades de concreción hemos de mostrarnos aún cautelosos. En efecto, la extrapolación de la interpretación a este caso concreto de que estamos ante “normas jurídicas establecidas”, aunque sea simplemente referido a la cuestión de los archivos, es necesario tomarla aún con una cierta distancia. Respecto a la vertiente individual sí reconocemos su vigencia por estar estrechamente ligada con la obligación de los Estados de investigar judicialmente, a tenor del vínculo existente entre verdad individual y verdad judicial<sup>667</sup>. Sin embargo, la situación de la vertiente colectiva es diametralmente distinta debido a que, como ya afirmamos dentro del análisis de los Principios sobre reparaciones, del estudio de la práctica estatal para poder probar su raigambre consuetudinaria podemos afirmar que aún no contamos con una práctica suficientemente generalizada, ya fuera en su dimensión de permisión de acceso a los archivos, como de creación de comisiones de investigación.

Entrando ya en el análisis formal del Conjunto de principios, por impunidad, objeto central de este informe, se entendía:

“(...) la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación,

---

<sup>667</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo III e, igualmente, el epígrafe 1 del capítulo II.

detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

El Conjunto de principios entiende así la impunidad como la consecuencia de un *no hacer* por parte del Estado; una falta de persecución, detención, procesamiento y condena de los autores de las violaciones. Esta obligación de investigar del Estado está contemplada en el Principio 1:

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos; de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.

El derecho a la verdad dentro del Conjunto de principios se encuentra recogido dentro del derecho al saber (al igual que en el Informe Joinet, y volviendo incluso más atrás, en la nomenclatura propia al DIH como ya vimos), afianzado entre los Principios 2 y 5, los cuales seguidamente procederemos a analizar.

El primero de ellos<sup>668</sup> reconoce el derecho *inalienable* de cada pueblo a conocer la verdad sobre, por un lado, lo sucedido en el pasado y, por otro, las circunstancias y motivos que llevaron a su efectiva perpetración. Aparte, y como ya hicieron otros organismos de protección, vincula esta faceta colectiva del derecho a la verdad con la no repetición de tales actos en un futuro.

---

<sup>668</sup> Principio 2: “Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.

El Principio 3<sup>669</sup>, en estrecha relación con el segundo, recoge lo ya reconocido en el Informe Joinet conocido como el “deber de recordar del Estado”, remitiéndonos, por tanto, a lo analizado sobre los beneficios que para la propia sociedad tiene conocer lo ocurrido durante una etapa de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos y crear mecanismos extrajudiciales a tal efecto<sup>670</sup>. Sobre el papel del Derecho internacional en la recuperación de la memoria histórica, es menester referirse a la reflexión que al respecto ha realizado Felipe González Morales:

“Respecto a la recuperación de la memoria histórica y de la confrontación y reparación de las violaciones graves de los derechos humanos, el Derecho Internacional cumple el papel de proporcionar parámetros jurídicos. Si el Derecho Internacional renunciara a desempeñar este rol, dejaría esta materia enteramente a discreción de los gobiernos, esto es, a las posiciones políticas prevalecientes en el momento. En tal situación, no existirían estándares de referencia ni parámetros a ser seguidos en el futuro por gobiernos democráticamente electos para confrontar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por regímenes precedentes”<sup>671</sup>.

El Principio 4<sup>672</sup>, acoge la vertiente individual del derecho a la verdad, (aquí denominado derecho al saber), por lo que el sujeto activo de este derecho es tanto la víctima concreta como su familia. El contenido de este principio es asimilable al del informe de 1997, pues las víctimas tienen derecho a “conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones” y, en caso de fallecimiento o desaparición, se tendrá derecho a conocer la suerte que corrió la víctima, inciso que nos retrotrae a lo contemplado en el artículo 32 del Protocolo 1 de 1977.

---

<sup>669</sup> “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.

<sup>670</sup> Véase epígrafe 2 del capítulo III y, sobre la importancia de los archivos en la tarea de conservar el patrimonio histórico del Estado, véase epígrafe 2.3 del capítulo VI.

<sup>671</sup> GONZÁLEZ, F., “Notas sobre memoria y derechos humanos”, en RICHARD, N. (ed.), *Políticas y estéticas de la memoria*, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2006, p. 61.

<sup>672</sup> “Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.

Por último, el Principio 5<sup>673</sup> versa sobre las garantías que pueden tomarse para hacer efectivo el derecho a saber, que al igual que lo recogido en el Informe Joinet, serán dos: la constitución de comisiones independientes de investigación y la preservación de archivos, siguiendo ambas en su mayoría la estela marcada en el informe de 1997<sup>674</sup>.

En conclusión, el papel jugado por el Conjunto de principios dentro de la evolución del derecho a la verdad posee una posición relevante a tenor de que constituye un importante pronunciamiento dentro del sistema universal de protección acerca de la importancia del derecho a la verdad en la lucha contra la impunidad. No obstante, la obligación de los Estados en referencia a la protección de los archivos no podría ampararse en nuestra opinión dentro del derecho a la verdad colectivo en el sentido de lo recogido en el Conjunto de principios, ya que esta medida tendría el mismo fundamento que las comisiones de la verdad, a las que se sitúa en meras “deliberaciones de ámbito nacional”. Reiteramos, por tanto, que al contrario de lo que pareciera estipularse, en lo concerniente a la modalidad colectiva de este derecho, aún estamos ante un “principio incipiente” en el Derecho internacional, toda vez que su desarrollo en la práctica estatal no puede respaldar su oponibilidad general a los Estados.

---

<sup>673</sup> “Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber. Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial. Las sociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o sistemática pueden beneficiarse en particular con la creación de una comisión de la verdad u otra comisión de investigación con objeto de establecer los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado establezca o no un órgano de ese tipo, debe garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos”.

<sup>674</sup> En cuanto a novedades reseñables acerca de comisiones de la verdad, el Conjunto de principios establece que su objeto será: “garantizar el reconocimiento de partes de la verdad que anteriormente se negaban”; así como el principio esencial de la necesaria participación de la sociedad en la delimitación de las funciones y competencias de la comisión. Sobre la política de archivos los avances más notables responden a las personas que estarían autorizadas a acceder a esos archivos (principio 15) y la gestión del acceso por parte del Estado. Este acceso debe de estar supeditado a los estándares de “[protección de] la vida privada, incluidos en particular seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio”. La denegación alegando motivos de seguridad nacional ha de estar, bien prescrita por ley, bien justificada por el Gobierno, habiendo demostrada que esta restricción es necesaria en un sociedad democrática. Esta denegación habría de ser judicialmente examinada. No obstante, esta materia será desarrollada más en profundidad *infra* a tenor de una serie de informes publicados por la OACNUDH sobre su vinculación con el derecho a la verdad.



## **2.2. Resolución 2005/66. El vínculo entre el derecho a la verdad y el derecho a la información.**

Mes y medio después de la aprobación de los Principios sobre reparaciones, el 20 de abril de 2005, con Argentina como patrocinador principal<sup>675</sup>, la Comisión DH aprobó la Resolución 2005/66, la primera sobre el derecho a la verdad<sup>676</sup>. Esta Resolución surgió como una suerte de concreción y desarrollo de lo expuesto acerca del contenido de ambas facetas del derecho a la verdad dentro del Conjunto de principios, amén de ampliar su espectro de actuación a otras vertientes no recogidas en este.

Esta Resolución señaló uno de los puntos capitales con los que más se ha venido identificando el derecho a la verdad: el derecho a la información (que por otro lado no aparecía recogido en el Conjunto de principios). Y lo hizo estableciendo que: “la opinión pública y las personas tienen derecho a acceder a la información más completa posible sobre las medidas y los procesos de decisión de su gobierno en el marco del sistema jurídico interno de cada Estado”<sup>677</sup>.

Al contrario de otros ámbitos donde ya se puso encima de la mesa la relación entre verdad e información, como la Comisión IDH en el comentado Informe 136/99 o la Declaración DF, la Comisión DH parece alejarse ostensiblemente de estas referencias y nos conduce a un campo inexplorado que, aunque se aleja del objeto de nuestro estudio, aconseja al menos una breve mención.

La unión entre verdad e información puede abarcar un espectro muy amplio, en cuanto que esta relación puede darse ante cualquier situación en que se encuentre la sociedad: paz o guerra; democracia o dictadura, incluidas las transiciones de un estado a otro. En cualquier caso, entenderemos aquí el derecho a la verdad como el derecho de la sociedad a conocer “las medidas y los procesos de decisión de su gobierno en el marco

---

<sup>675</sup> MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y CULTO, *Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprueba por consenso resolución presentada por Argentina*, 20 de abril de 2005. Disponible en: <https://www.mrecic.gov.ar/comision-de-derechos-humanos-de-la-onu-aprueba-por-consenso-resolucion-presentada-por-la-argentina> (Consultado el 16 de marzo de 2016).

<sup>676</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 2005/66. El derecho a la verdad*, Doc. E/CN.4/RES/2005/66, 20 de abril 2005.

<sup>677</sup> *Ibid.*, Preámbulo.

del sistema jurídico interno de cada Estado”, lo que repercutirá en una mejor calidad del sistema democrático posterior<sup>678</sup>.

El derecho a la información cuenta con numerosas ramificaciones entre las cuales averiguamos *inter alia* el derecho de acceso a la información.

La principal diferencia entre el derecho a la información y el derecho de acceso a la información, en concreto a la información pública, no es baladí. Siguiendo a Ernesto Villanueva, el primero de ellos consiste en “una garantía fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y a ser informada”<sup>679</sup>. Por su parte, para este autor, el segundo derecho consiste en:

“(…) la prerrogativa de toda persona a acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática”<sup>680</sup>.

Este derecho, por ende, constituiría el derecho a la información en sentido estricto<sup>681</sup> y, citando a Carlos Insense y Jorge Muñoz, este surgiría a partir del derecho a la libertad de expresión<sup>682</sup>. En efecto, la libertad de expresión se concretaría en el derecho a recibir información pública documental, el cual debe ser ejercido directamente por el Estado, debiendo este hacer pública cierta información que, por su propio contenido, sea de interés para toda la sociedad<sup>683</sup>.

---

<sup>678</sup> Esta mención pudiera estar conectada con la mención que ya hiciera la Comisión IDH en su informe 25/98 donde se establecía “El derecho a la verdad constituye un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos”.

<sup>679</sup> VILLANUEVA, E., *Derecho a la información pública en Latinoamérica*, México DF, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p.17.

<sup>680</sup> *Ibid.*, p.24.

<sup>681</sup> Para autores como Victor Abramovich y Christian Courtis, el derecho a la verdad como el derecho a la información integraría la categoría de “la información como reclamo”, es decir, de aquellos derechos cuyo objeto central es la información en sí misma; la información no es de carácter instrumental, no es el paso intermedio para conseguir otro objetivo, sino que es el fin en sí mismo. ABRAMOVIC V., COURTIS, C., “El acceso a la información como derecho”, *Anuario de Derecho a la Comunicación*, vol.1, 2000, p.140.

<sup>682</sup> El derecho de acceso a la información pública es componente esencial del derecho a la libertad de expresión debido a que: “el derecho a la libertad de pensamiento y expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo control del Estado”, RIMASSA ISENSEE, C., MUÑOZ SEVERINO, J., “El derecho (fundamental) de acceso a la información pública como principio (de transparencia). Concepto, bloque de constitucionalidad y test de proporcionalidad”, en *Derecho y Justicia*, núm. 3, 2013, p.48.

<sup>683</sup> *Ibid.*, p.50; LUQUE RÁZURI, M., *Acceso a la información pública documental y regulación de la información secreta*, Lima, ARA Editores, 2002, p.124. Esta reflexión está íntimamente relacionada con

La conexión de este derecho a recibir información pública documental con el derecho a la verdad vendrá de la mano de la inclusión, dentro de esta ecuación, del principio de transparencia. Volviendo a estos autores, el principio de transparencia:

“(…) importaría no solo un deber de actuar diáfano o cristalino por parte de la autoridad pública, sino que también admitiría la posibilidad directa de exigir legalmente un modo de actuar transparente, con el fin de conocer la verdad acerca del actuar dentro de los organismos públicos”<sup>684</sup>.

En efecto, el conocimiento por parte de la ciudadanía de la actuación de las instituciones del Estado de derecho es una de las bases esenciales de todo sistema democrático, el cual se contrapone con la actuación de los regímenes dictatoriales, donde se actúa sin ningún tipo de participación de la sociedad en la toma de decisiones y haciendo que esta no tenga conocimiento alguno de sus actuaciones<sup>685</sup>. En el caso de Alemania, ya analizamos la forma de actuar del Gobierno dictatorial del SED y de cómo una de las primeras medidas que se tomó tras la caída de la RDA fue la desclasificación de los archivos de la Stasi y la posibilidad de que la ciudadanía accediera libremente a ellos<sup>686</sup>.

Aparte de este reconocimiento del derecho a la verdad como parte del derecho de acceso a la información pública, volviendo a la Resolución 2005/66, será interesante el pedido dirigido por parte de la Comisión DH a sus mecanismos extraconvencionales de

---

un tema ya aquí tratado como el derecho de acceso a los archivos, el cual, igualmente, será analizado en profundidad *infra*.

<sup>684</sup> RIMASSA ISENSEE, C., MUÑOZ SEVERINO, J., “El derecho (fundamental) de acceso a la información pública...”, *op.cit.*, p.50; CANALES, P., LOISEAU, V., “El derecho de acceso a la información pública gubernamental en la legislación de México, Ecuador, Suecia y Francia”, *Biblioteca Nacional del Congreso de Chile. Departamento de Estudios, extensión y publicaciones*, núm. 302, 2004, p.2.

<sup>685</sup> CARBONELL, M., “Deber de publicidad del Estado”, en VILLANUEVA, E. (coord.), *Diccionario de Derecho de la Información*, México DF, Porrúa Hermanos – Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, pp.128-131. La idea del Estado democrático como un “ente transparente” ya fue definido por Norberto Bobbio, el cual lo entendía como aquella forma de Gobierno en la que se exigía que el poder fuera visible, que “las acciones de los gobiernos se [sustrajeran] del secreto de la cámara del consejo, se [retiraran] de las sedes secretas en las que se tratan de ocultar de los ojos del público, para evitar que sean examinadas, juzgadas y criticadas”. Véase, BOBBIO, N., *Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política*, México DF, Fondo cultural de economía-Brevarios, 1996, pp.34-37. Véase, en este mismo sentido: CANÇADO TRINDADE, A.A., *State Responsibility in Cases of Massacres: Contemporary Advances in International Justice. Inaugural Address as Honorary Professor to the Chair in ‘International and Regional Human Rights Courts’ delivered on 10 November 2011 at Utrecht University*, Utrecht, Netherlands Institute of Human Rights (SIM) – Universiteit Utrecht, 2011., p.7.

<sup>686</sup> Una continuación del análisis entre el derecho a la verdad y el derecho a la información puede verse en el análisis del RELE en el epígrafe 5.2 del capítulo IX.

que “en el marco de sus mandatos, tengan en cuenta, según proceda, la cuestión del derecho a la verdad”<sup>687</sup>. Este requerimiento será seguido por algunos de los mecanismos extraconvencionales que posteriormente analizaremos.

Por otra parte, y a modo de conclusión del análisis de esta Resolución, la Comisión DH, consciente de que el alcance del derecho a la verdad iba mucho más allá de lo que allí se contemplaba y de lo contenido en el Conjunto de principios, encargó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que preparara “un estudio sobre el derecho a la verdad en el que figure información sobre los fundamentos, el alcance y el significado de ese derecho en el Derecho internacional”<sup>688</sup>.

Como cumplimiento a esta petición, un estudio publicado en 2006 será el primero de una serie de informes realizados por la propia OACNUDH sobre el derecho a la verdad. Este estudio, como parte consecutiva de la Resolución 2005/66, supuso el instrumento que desarrollaba el estado de este derecho dentro del Derecho internacional en aquel momento, junto con su alcance y características principales, habiéndose basado para ello en la práctica tanto de organismos internacionales<sup>689</sup> de protección como en la práctica de los Estados<sup>690</sup>.

Respecto a su vinculación, el estudio afirmó su autonomía y su esencia como derecho individual y colectivo<sup>691</sup>. Sobre ello nos referiremos a lo ya expuesto y analizado a lo largo del trabajo<sup>692</sup>.

En cuanto a su contenido, las vertientes alegadas por el estudio responden a las que ya aquí han sido analizadas: derecho a la justicia<sup>693</sup>, a la reparación<sup>694</sup>, el acceso a

---

<sup>687</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 2005/66. El derecho a la verdad*, Doc. E/CN.4/RES/2005/66, 20 de abril 2005, párr.7. Este pedido será tenido en cuenta por los mecanismos extraconvencionales que posteriormente analizaremos.

<sup>688</sup> *Ibid.*, párr.6.

<sup>689</sup> Como soporte del derecho a la verdad (lo que concretaría la “base jurídica e histórica del derecho a la verdad”), la OACNUDH apela a la práctica de toda una serie de órganos e instrumentos ya aquí analizados como el Conjunto de principios, el CICR, el Protocolo I, el Grupo de trabajo *ad hoc* sobre la situación de los derechos humanos en Chile, el GTDFI, el Comité DH, las Resoluciones de la AG, el Informe Joinet y la Resolución 2005/66.

<sup>690</sup> Los Estados que presentaron información fueron: Argentina, Bielorrusia, Colombia, Cuba, Georgia, Mauritania, Perú, Eslovenia, Togo, Uruguay y Venezuela. *Ibid.*, párr.2.

<sup>691</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Estudio sobre el derecho a la verdad*, Doc. E/CN.4/2006/91, 9 de enero de 2006, párrs.35-37 y 42. Sobre las formas de concretar estas vertientes, el estudio se refirió a las mismas que ya se estipularon dentro del Informe Joinet, esto es, los procesos judiciales (no solo penales, sino también civiles y administrativos, con vistas estos a hallar el paradero de las personas desaparecidas), las comisiones de la verdad (entendidas aquí también como investigaciones históricas) y los archivos, párr.50-54.

<sup>692</sup> Véase, epígrafe 2 del capítulo III y epígrafe 1 del capítulo II.

<sup>693</sup> Véase la conexión con la investigación judicial en el epígrafe 2 del capítulo III y el derecho a un recurso efectivo dentro del práctica del Comité DH en epígrafe 3.2 del capítulo I.

los archivos<sup>695</sup> o el derecho a la información<sup>696</sup>. Esta última, no obstante, será donde la OACNUDH puso más énfasis, al desarrollar lo expuesto anteriormente en la Resolución 2005/66.

Aunque se sostiene que el derecho a solicitar información es fundamental para la realización del derecho a la verdad, ambos derechos son autónomos e independientes. En efecto, si bien el primero podría ser derogado en determinadas circunstancias, cabría preguntarse lo propio sobre el derecho a la verdad. Al respecto, la OACNUDH determinó el carácter inderogable del derecho a la verdad debido a su “ámbito de aplicación material”. La angustia de los familiares ante el desconocimiento del paradero de la persona desaparecida como tortura hace que, de forma análoga a la prohibición universal de cometer torturas, se prohíba igualmente la derogación ante cualquier supuesto del derecho a ser informado sobre el paradero de la persona desaparecida. Esta inderogabilidad se extrapolaría a aquellos recursos judiciales que tengan como objeto el conocimiento de las circunstancias en que las violaciones de derechos humanos fueron cometidas, tales como el habeas corpus o el recurso de amparo<sup>697</sup>.

---

<sup>694</sup> Véase epígrafe 1 del capítulo VI.

<sup>695</sup> El acceso a los archivos ya fue contemplado por Louis Joinet como uno de los medios indicados para la concreción del derecho a la verdad colectivo. Sin embargo, se entrará más al fondo de esta cuestión en el propio informe de la OACNUDH sobre este mecanismo.

<sup>696</sup> De entre la información a la que las víctimas y la sociedad tendrían derecho a conocer, según contempla la OACNUDH, se encontraría: conocer el paradero de las personas desaparecidas; las causas que dan lugar al trato injusto que recibe la víctima; las causas y condiciones relativas a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las infracciones graves del derecho internacional humanitario; los progresos y resultados de la investigación; las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron los hechos delictivos en el derecho internacional y las violaciones manifiestas de los derechos humanos; las circunstancias en que se produjeron las violaciones; en caso de fallecimiento, desaparición o desaparición forzada, la suerte y el paradero de las víctimas; y la identidad de los autores. *Ibid.*

<sup>697</sup> *Ibid.*, párrs. 43-44. Como extensión del derecho a la verdad como derecho a recibir información, también se aludió al ya explicado derecho a conocer el funcionamiento de los sistemas democráticos y su relación con el principio de transparencia. *Ibid.*, párr.46. Una continuación en el desarrollo de la conexión entre el derecho a la verdad y el derecho a la información puede verse en el epígrafe 5.2 del capítulo IX.

### **2.3. Decisión 2/105, Resolución 9/11 y Resolución 12/12. La cuestión de los archivos y de la protección de testigos.**

Tras la publicación de este estudio, el Consejo DH pidió a la OACNUDH, a través de la Decisión 2/105, un seguimiento del mismo y que elaborara uno nuevo sobre la práctica de los Estados sobre el derecho a la verdad<sup>698</sup>.

Este nuevo estudio<sup>699</sup>, publicado solo un año después del primero (2006), recoge un compendio de práctica estatal, la cual será objeto de análisis en los siguientes epígrafes dedicados a este respecto. Igualmente, se atribuye el mismo contenido y la misma obligatoriedad a ambas modalidades del derecho a la verdad (individual y colectivo) que lo recogido en el estudio de 2006.

Tras la publicación de estos dos estudios de ámbito más general sobre la naturaleza y alcance del derecho a la verdad, el Consejo DH aprobó su segunda Resolución sobre el derecho a la verdad: la 9/11 de 24 de septiembre de 2008<sup>700</sup>.

Teniendo ya como base, no solo lo contenido en la Resolución 2005/66, sino también la Decisión 2/105 y los estudios de 2006 y 2007, el Consejo DH extrapoló un poco más el margen de aplicación del derecho a la verdad, al vincularlo con el acceso a los archivos estatales y la protección de testigos.

Sin embargo, no trataremos en profundidad y de forma específica cuestiones técnicas referidas a estas temáticas pues nos estaríamos distanciando del propósito de la presente investigación, sino que las referencias al derecho a la verdad en relación con ambas las vincularemos de la siguiente manera: con respecto al acceso a los archivos, y contando ya con lo recogido en el Informe Joinet y el Conjunto de principios, nos centraremos en aclarar el porqué de su importancia para la averiguación de la verdad dentro de un marco teórico general, sobre todo en lo concerniente a la recuperación de la verdad colectiva y la memoria de las víctimas. Sobre la cuestión de la protección de testigos, resaltaremos la importancia de que las víctimas y testigos que tengan la intención de participar en organismos tendentes a descubrir la verdad cuenten con todas las garantías de seguridad posibles para que así su participación sea completa y productiva.

---

<sup>698</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Decisión 2/105. Derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/DEC/2/105, 27 de noviembre de 2006.

<sup>699</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, Doc. A/HRC/5/7, 7 de junio de 2007.

<sup>700</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 9/11. El derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/RES/9/11, 24 de septiembre de 2008.

Ambas cuestiones fueron tratadas en un primer momento de forma unitaria en el informe 12/19 de 2009 en el que se sentaban las bases principales de su relación con el derecho a la verdad<sup>701</sup> y, posteriormente, fueron desarrolladas por separado<sup>702</sup>.

Empezando por la cuestión del acceso a los archivos y teniendo como base lo contemplado sobre este particular en el Informe Joinet y algunas experiencias nacionales ya analizadas respecto a esta materia, la importancia de la preservación de los archivos (ya sean de carácter gubernamental o privado) para el descubrimiento de la verdad es fundamental. Numerosos teóricos de lo que podríamos denominar la “disciplina archivística” han afirmado que la mera existencia de un archivo puede determinar que un hecho concreto haya ocurrido o no. Algo existe o ha existido en cuanto que está recogido en un archivo; si se asegura su propiedad, se asegura su control<sup>703</sup>. Esta situación se acentúa en una situación de post violencia en la que, más que en otros contextos, se tiende aún más a la posterior producción de silencios<sup>704</sup>.

Es debido a este poder que ejercen los archivos, y su conexión con la memoria colectiva de una sociedad, por la cual se ha afirmado que no existe poder político sin control del archivo y, por extensión, de la memoria<sup>705</sup>. La concepción de los archivos como “custodios de la memoria” hace que el propio Estado se vea tentado a limitar su libre acceso, a través de la gestión exclusiva de lo que la sociedad puede o no puede conocer sobre su propia historia e, igualmente, sobre el funcionamiento de las propias instituciones del Estado. En efecto, la importancia de los archivos no reside únicamente en su propio contenido, sino que también da muestras de las tareas y estructura interna de la administración del Estado que los han elaborado. Un archivo no se produce de una

---

<sup>701</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, Doc. A/HRC/12/19, 21 de agosto de 2009.

<sup>702</sup> La cuestión de la protección de testigos fue recogida en el informe: CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/15/33, 28 de julio de 2010. La preservación de los archivos en el informe: CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el seminario de experiencias en materia de archivos como medio de garantizar el derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/17/21, 14 de abril de 2011. Al constituir este último un informe publicado en 2011, lo trataremos en el capítulo siguiente.

<sup>703</sup> RODRÍGUEZ, L.M., “El archivo como dispositivo de poder”, en TIRADO AGOSTO, Y., (coord.), *Archivos e Investigación: la importancia de la investigación en los archivos y centros de información*, San Juan, Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED), 2011, pp.10-18.

<sup>704</sup> RAMOS, A., MUZOPAPPA, E., “La relación memoria/archivo entre sentidos enmarcados y sentidos inducidos”, *Actas del Tercer Congreso Latinoamericano de Antropología ALA*, Santiago de Chile, 2012, p.2.

<sup>705</sup> DERRIDA, J., *Archive Fever: A Freudian Impression*, Chicago, The University Chicago Press, 1995, p. 4.

manera única y aislada, desvinculada de otra serie de documentos, pues todos ellos forman parte de una misma actividad institucional<sup>706</sup>.

Este informe del Consejo DH de 2009 ponía de relieve que: “un sistema nacional de archivos sólido es esencial en una democracia a fin de garantizar la preservación de los expedientes importantes para el ejercicio de los derechos humanos”<sup>707</sup>.

Es, por lo tanto, esencial que una de las tareas que lleve a cabo un Estado a lo largo de su período de transición sea una reforma del sistema de archivos que se adapte a los estándares democráticos para permitir igualmente el acceso a las instituciones de justicia de transición, como las comisiones de la verdad o las investigaciones judiciales. Entre estos estándares se encuentra el propio acceso a ellos. Según establece el informe: “las políticas de acceso a esos archivos constituyen una cuestión de vital importancia, y que es menester promulgar nuevas leyes que permitan el acceso a esos expedientes por parte de la legislatura posterior a un cambio de régimen”<sup>708</sup>.

Esta posibilidad de acceso a los archivos se vuelve más importante si cabe durante un período de transición, debido a que será imprescindible para el conocimiento de lo ocurrido el acceso del personal investigador (ya sea en una investigación judicial o extrajudicial) a todo el material existente durante el período que se pretende investigar, como por ejemplo:

“(…) expedientes gubernamentales (especialmente de las instituciones militares, policiales y de seguridad, abiertos o encubiertos); los expedientes de ONG y organizaciones internacionales; los de iglesias y empresas, bancos, escuelas, hospitales y depósitos de cadáveres; copias de emisiones de radio y televisión; y expedientes de medios de comunicación estatales. Estas instituciones utilizan todos los tipos físicos de documentación: en forma impresa, electrónica,

---

<sup>706</sup> MUZZOPAPPA, E., VILLALTA, C., “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”, *Revista Colombiana de Antropología*, vol 47, 2011, núm.1, pp.13-42; MEMORIA ABIERTA, *Guía de archivos útiles para la investigación judicial de delitos de lesa humanidad*, Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, Buenos Aires, 2011, p.7. Disponible en: [http://www.memoriaabierta.org.ar/bases/opac/UF/archivos\\_investigacion\\_judicial.pdf](http://www.memoriaabierta.org.ar/bases/opac/UF/archivos_investigacion_judicial.pdf) (Consultado el 15 de junio de 2016).

<sup>707</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/12/19, 21 de agosto de 2009, párr.6.

<sup>708</sup> *Ibid.*, párr.10.



fotográfica, cartografía de datos, imágenes obtenidas por satélite y bases de datos”<sup>709</sup>.

En un contexto propio de búsqueda de personas desaparecidas, los archivos consultados se extenderán a: expedientes, entrevistas de personas, exhumaciones de cadáveres y realización de pruebas de ADN<sup>710</sup>.

En referencia concreta a la investigación llevada a cabo por comisiones de la verdad, el valor de los archivos cobra especial importancia debido a que los medios de prueba utilizados por estas difieren sustancialmente de los conocidos estándares utilizados dentro de un proceso. Estos estándares más laxos permiten a las comisiones de la verdad la utilización de medios de prueba más amplios como: expedientes gubernamentales, expedientes de ONGs, entrevistas, emisiones de radio y televisión o documentos personales<sup>711</sup>.

Sin embargo, en numerosas ocasiones las comisiones de la verdad han topado con grandes impedimentos a la hora de poder acceder a estos archivos. Esta situación se entiende perfectamente si recordamos lo afirmado *supra*: “no existe poder político sin control del archivo”. El ejemplo que recoge mejor esta afirmación es la necesidad que tuvieron numerosas comisiones de la verdad creadas en América Latina (en especial las de El Salvador, Guatemala y Chile) de pedir información para sustentar su investigación de lo ocurrido al Gobierno de Estados Unidos. Y es que, tal y como afirmó Priscilla Hayner, “los Estados Unidos habían respaldado o financiado directamente a gobiernos y militares responsables de la gran mayoría de abusos y telegrafiaban diariamente a Washington comentando sus actividades. Todos estos telegramas siguen archivados”<sup>712</sup>.

---

<sup>709</sup> *Ibid.*, párr.20.

<sup>710</sup> *Ibid.*, párr.23.

<sup>711</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/12/19, 21 de agosto de 2009, párr. 24.

<sup>712</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...* *op.cit.*, p.312. Esta autora recoge un gran cantidad de información acerca del vital papel que los Estados Unidos tuvieron en el mantenimiento en el poder de muchos dictadores latinoamericanos, lo que no es de extrañar que a la hora de realizar una investigación en profundidad sobre lo ocurrido en aquellos países, sea imprescindible la remisión al papel del Gobierno estadounidense y a la información que este pueda proporcionar. Priscilla Hayner establece que: “desde que el presidente Jimmy Carter ordenó al Departamento de Estado que elaborara un informe anual sobre la situación de los derechos humanos por país, el gobierno estadounidense ha ido reuniendo gran cantidad de información de todo el mundo sobre la materia. Aunque ese informe anual es público, gran parte de la información de los servicios de inteligencia en la que se basa suele estar clasificada”. En el caso concreto de la investigación llevada a cabo sobre la dictadura guatemalteca, se buscó información en bibliotecas presidenciales de los Estados Unidos (John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan), se revisaron los materiales ya desclasificados de los Archivos Nacionales del Gobierno y del Ejército y los fondos del Army War College. La directora del Proyecto Guatemala del Archivo de Seguridad Nacional, Kate Doyle, en unas declaraciones recogidas por Priscilla

Los archivos se convierten de esta manera en un elemento fundamental para poder respetar el derecho a la verdad de las víctimas, mediante la reconstrucción de la historia y la memoria colectiva. Sin embargo, es un arma fuertemente politizada al ostentar los Estados la potestad de controlar el acceso a los mismos y poder, en consecuencia, incluso destruir parte de los archivos que pudieran comprometer su actuación en las violaciones de derechos humanos. La exigencia del derecho a la verdad de las víctimas lleva así de forma implícita el acceso a los archivos de las distintas instituciones de investigación.

Pasando a continuación a la protección de testigos, esta cuestión fue abordada también en el informe 12/19 de 2009. Aunque a simple vista pudiera parecer bastante alejada a la hora de explicar el contenido del derecho a la verdad, ha sido un tema tratado de forma transversal en algunos estudios sobre este derecho. Concretamente la OACNUDH le dedicó parte de este informe donde explicaba su relación con el derecho a la verdad y, además, un informe temático de 2010<sup>713</sup>, donde analizaba las prácticas estatales referentes a esta materia.

Ya hemos reseñado en este trabajo la importancia que la AG brindó a esta cuestión en varias de sus Resoluciones, dedicadas a la cuestión de las desapariciones forzadas, en las que hacía un llamamiento a los Gobiernos interesados a: “tomar medidas para proteger a las familias de las personas desaparecidas de los actos de intimidación o malos tratos de los que puedan ser objeto”<sup>714</sup>.

La OACNUDH relacionó la eficacia de contar con un sistema adecuado de protección de testigos, con la del sistema de investigación y enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos de un Estado, hasta tal punto que llegó a afirmar que:

---

Hayner, declaró que los documentos de los Estados Unidos: “explican la naturaleza de la violencia, las relaciones entre los Estados Unidos y Guatemala, y las operaciones militares e insurgentes. Muchas de las cuestiones que preocupan a la comisión se abordan en estos documentos. Los de los años sesenta y setenta son muy francos y están llenos de detalles sobre la guerra que se desconocían hasta entonces”, p.314.

<sup>713</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/15/33, 28 de julio de 2010.

<sup>714</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *La situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Chile*, Resolución 42/147 de 7 de diciembre de 1987; ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, “Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias”, Resolución 43/159 de 8 de diciembre de 1988; Resolución 44/160, “Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias”, 15 de diciembre de 1989. La protección de víctimas y testigos también fue incluida en el informe Joinet (en referencia a la protección de víctimas y testigos dentro de las comisiones de la verdad, Principio 9); en el Conjunto de principios (Principio 10); y Principios sobre reparaciones (párr.12.b).

“la omisión de protección a los testigos puede afectar gravemente a derechos fundamentales, como el derecho a la justicia y el derecho a la verdad”<sup>715</sup>.

En efecto, como ya afirmamos al comentar a las Resoluciones de la AG, cuanta más seguridad encuentren las víctimas y testigos dentro del proceso de investigación que se esté llevando a cabo (ya sea judicial o extrajudicial), mayor colaboración aportarán al mismo.

Por último, en su informe de 2010<sup>716</sup>, publicado siguiendo la Resolución 12/12, en donde la OACNUDH entra a fondo en las medidas internas adoptadas por los Estados en referencia a sus prácticas en relación con la protección de testigos, constató que: “la protección de testigos y víctimas no puede considerarse un problema aislado, sino más bien una parte esencial de un sistema integral destinado a investigar eficazmente las violaciones de los derechos humanos y a procesar a los autores de tales violaciones”<sup>717</sup>.

En suma, tras todo lo visto en este período, podemos apreciar cómo tanto el Consejo DH como la OACNUDH, se alinearon con la práctica en derecho a la verdad imperante en los organismos de protección de derechos humanos tanto universales como, en menor medida, interamericanos. Los distintos estudios analizados, pese a que no ofrecen novedades destacables en lo que se refiere al contenido del derecho a la verdad, sí enfatizan su importancia en lo que concierne a la vinculación entre este derecho y el derecho a la información. Y es que será esta conexión, como veremos próximamente, la que ampare la vertiente colectiva del derecho a la verdad dentro de determinados tratados internacionales. Por otro lado, las alegaciones respecto a la vinculación general del derecho a la verdad colectivo, seguirán estando en el aire a la espera de una más extensa práctica estatal que se analizará *infra*.

---

<sup>715</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/12/19, 21 de agosto de 2009, párr.32.

<sup>716</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho a la verdad*, 12 de octubre de 2009, Doc. A/HRC/RES/12/12. La Resolución 12/12 pedía a la OACNUDH que: “prepare un informe, para presentarlo al Consejo en su 15º período de sesiones, sobre la base de información, incluida información proporcionada por los Estados, sobre programas y otras medidas para la protección de testigos elaborados en el marco de procedimientos penales relativos a violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, con miras a determinar si es necesario desarrollar normas comunes y promover las mejores prácticas que podrían servir de directrices a los Estados miembros para proteger a los testigos y a otras personas que prestan cooperación en los juicios por violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario”, párr.8.

<sup>717</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/15/33, 28 de julio de 2010, párr.19.

### **3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS CONTRAS LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE 2006**

Debido a que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CDF) de 20 de diciembre de 2006<sup>718</sup>, no entró en vigor sino hasta el 23 de diciembre de 2010, y que el órgano encargado de su control previsto en la misma, el Comité contra la Desaparición Forzada (Comité DF), no empezó su andadura hasta 2011<sup>719</sup>, en este período histórico no nos referiremos a la práctica de éste, pues, la misma ha tenido lugar íntegramente más allá del 2010. Sin embargo, por la importancia que la adopción de la CDF ha tenido para nuestros intereses, pues afianza en un mecanismo convencional de protección de derechos humanos el derecho a la verdad, este tratado, junto con el papel que este derecho juega en él, merecen un análisis en profundidad.

Como ya apuntamos en la primera referencia de este trabajo respecto a la práctica del Comité DH, la proliferación de la desaparición forzada supuso el nacimiento de nuevos derechos tendentes a proteger los intereses tanto de las víctimas como de toda la sociedad, ante la falta de mecanismos jurídicos que contuvieran disposiciones orientadas a este respecto. Sin embargo, no sería hasta 1980, con la creación dentro del seno de las Naciones Unidas del GTDFI (ya analizado), cuando se empezaron a constituir mecanismos de protección concretos para la investigación, sanción y protección de las víctimas de desaparición forzada como la ya también mencionada Declaración DF en 1992.

No obstante, lo profundo de la crisis que la proliferación de esta práctica produjo, y el vacío legal en el que las víctimas de este delito se hallaban, provocó la necesidad de adoptar un instrumento jurídicamente vinculante que recogiera una prohibición absoluta de la práctica de las desapariciones forzadas. En efecto, debido a que el fenómeno de la desaparición forzada, como lo entendemos hoy en día, es “relativamente nuevo”, tratados internacionales de alcance universal como el PIDCP, o de alcance regional

---

<sup>718</sup> Esta Convención fue ratificada por España el 24 de septiembre de 2009. *BOE* núm. 42 de 18 de febrero de 2011, pp.18254-18271. A junio de 2016 cuenta con 52 Estados Parte.

<sup>719</sup> El inicio de sus funciones puede fecharse el 1 de julio de 2011, fecha en la que los diez miembros del Comité DF asumieron sus funciones como tales. Véase, CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “El Comité contra la Desaparición Forzada: primeros pasos, retos y solución”, *Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional*, vol. 21, 2013, p.217.

como la CADH, la Carta Africana y la Carta Árabe de Derechos Humanos<sup>720</sup>, no contaban con una prohibición general de no ser sometido a desaparición forzada<sup>721</sup>. Incluso, siguiendo las palabras de Wilder Tayler, las desapariciones forzadas fueron concebidas como tal para evadir el entramado jurídico de la protección de los derechos humanos<sup>722</sup>.

El principal hito que puede adscribirse a la CDF fue la tipificación de la desaparición forzada como un delito autónomo y el nacimiento de un nuevo derecho humano a no ser sometido a desapariciones forzadas<sup>723</sup>. Y es que siguiendo del mismo modo las palabras de Carlos María Pelayo, la CDF constituye “un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que busca prevenir este fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación”<sup>724</sup>.

Ahora bien, en lo que nos ocupa es indiscutible que la CDF constituye también un gran paso necesario hacia el reconocimiento convencional del derecho a la verdad como un derecho autónomo jurídicamente oponible a los Estados.

Como antecedente a la necesidad de reconocimiento del derecho a la verdad en relación con un instrumento que tipifique las desapariciones forzadas, encontramos el informe del experto independiente Manfred Nowak ante la Comisión DH. En él se expresaba la ausencia del reconocimiento en un instrumento internacional del derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos, al establecer lo siguiente: “[t]odo ulterior instrumento vinculante sobre las desapariciones forzadas deberá definir

---

<sup>720</sup> Adoptada el 15 de septiembre de 1994 por el Consejo de la Liga de los Estados Árabes; aún no ha entrado en vigor.

<sup>721</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión*, Doc. E/CN.4/2002/71, 8 de enero de 2002, p.26. Recordemos que, aunque el PIDCP, contenía una protección específica de varios de los derechos que son violados por una desaparición forzada, este tratado no contenía una protección específica con relación a prevenir, investigar o a la cooperación internacional necesaria para combatir este delito. Véase, ANDREU GUZMÁN, F., “The Draft International Convention...”, *op.cit.*, p.5.

<sup>722</sup> TAYLER, W., “Antecedentes del proceso de elaboración del Proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, *Revista de la Comisión Internacional de Juristas*, núm.62 y 63, 2001, p.65.

<sup>723</sup> SCOVAZZI, T., y CITRONI, G., *The Struggle against Enforcement Disappearance...* *op.cit.*, p.265. Igualmente, aunque más en profundidad sobre la necesidad que sentía la comunidad internacional de entonces de adoptar un tratado internacional que prohibiera específicamente las desapariciones forzadas, véase: ANDERSON, K., “How effective is the *International Convention for the protection of all persons from enforced disappearance* likely to be in holding individuals criminally responsible for acts of enforced disappearance”, *Melbourne Journal of International Law*, vol.7, 2006, núm.2, pp.245-277, en especial p.268.

<sup>724</sup> PELAYO MOLLER, C.M., *La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas*, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2012, p.36.

precisamente el concepto y las consecuencias jurídicas del derecho de los familiares de las personas desaparecidas a conocer la verdad”<sup>725</sup>.

Fue así como, ya dentro de las sesiones del Grupo de Trabajo encargado de la redacción de la CDF, fue incluida “la cuestión de la verdad” dentro del artículo 11.6 (provisional) de la Convención, que finalmente se consolidó en el actual artículo 24.2:

“Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto”<sup>726</sup>.

Y finalmente también afianzada en el Preámbulo:

“*Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin*”<sup>727</sup>.

Teniendo pues ya el derecho a la verdad incluido expresamente en un texto de Derecho internacional convencional, apuntaremos seguidamente una serie de pareceres de interesante mención para poder concretar más el significado del artículo 24.2.

---

<sup>725</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión*, Doc. E/CN.4/2002/71, 8 de enero de 2002, párr.80. Igualmente, Manfred Nowak no le otorgaba vinculación jurídica a las disposiciones de la Declaración DF, párr. 46.

<sup>726</sup> Este artículo (provisional) establecía la obligación de las autoridades estatales de emprender una investigación imparcial en casos de desapariciones forzadas, bien a instancia de la víctima o bien *ex officio*; e igualmente la obligación de comunicar a los familiares regularmente y sin retraso los resultados de la investigación. ANDREU GUZMÁN, F., “The Draft International Convention...”, *op.cit.*, p.15.

<sup>727</sup> Dentro de los trabajos preparatorios de la CDF, algunas delegaciones cuestionaron la pertinencia de incluir el derecho a la verdad, debido a que dudaban de su efectiva existencia, prefiriendo incluir la obligación de los Estados de dar toda la información que sea posible conforme a la ley. Véase, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, Doc. E/CN.4/2005/66, 10 de marzo de 2005, párr.14. La discusión sobre la pertinencia o no de incluir el derecho a la verdad dentro del articulado de la CDF fue finalmente zanjada de raíz por el Presidente. Acudiendo al literal de los trabajos preparatorios: “Varias delegaciones se opusieron a toda modificación en cuanto al derecho a saber la verdad. El Presidente consideró que no era oportuno volver sobre esta cuestión, que suscitó en su momento una larga negociación y obtuvo una amplia aceptación”. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, Doc. E/CN.4/2006/57, 2 de febrero de 2006, párr.87.

Entre ellas, debemos de tener en cuenta lo apuntado por Patricio Galella en su comparación entre el artículo 32 del Protocolo I<sup>728</sup> y el artículo 24.2 de la CDF:

- Se aplica a situaciones que van más allá de las contempladas en el DIH.
- Es extensible no solo a los familiares de las víctimas, sino a cada víctima.
- No se limita al conocimiento de la suerte del familiar, sino también a las circunstancias de la desaparición y de la investigación<sup>729</sup>.

En primer lugar, y dejando a un lado la más que evidente diferencia de que la CDF va más allá de situaciones reguladas por el DIH (el conflicto armado), la principal diferencia entre ambos tratados estriba en los sujetos reconocidos como titulares de ese derecho a la verdad. Mientras que en el Protocolo I el derecho a saber era, como ya vimos, de única aplicación a los familiares de los desaparecidos, el artículo 24.1 entiende por víctima a “la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada” y teniendo, por tanto, cada una de ellas el derecho a conocer la verdad según lo contemplado el artículo 24.2.

La ampliación del concepto de *víctima*, aún en un apartado tan concreto del ordenamiento internacional como la protección contra la desaparición forzada, constituye un apunte de necesaria mención debido al tradicional olvido de las víctimas dentro del derecho internacional, debido a la posición central de los Estados en el mismo<sup>730</sup>. Los motivos del aumento del espectro terminológico de la *víctima* residen en la propia naturaleza de las personas desaparecidas, las cuales quedan privadas de la práctica totalidad de sus derechos, entre ellos, por supuesto, de la interposición de un recurso efectivo que ponga en conocimiento de las autoridades la condición en la que se encuentran<sup>731</sup>. En efecto, la facultad, por tanto, de interponer tal recurso no queda limitada al propio desaparecido, ni siquiera se restringe únicamente a sus familiares (como en el Protocolo I), sino a “toda persona física que haya sufrido un perjuicio”<sup>732</sup>.

---

<sup>728</sup> Véase epígrafe 2 del capítulo I.

<sup>729</sup> GALELLA, P., “La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Un gran paso hacia una mayor protección en la lucha contra este fenómeno”, *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, vol. 21, 2010, p.96.

<sup>730</sup> FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., “Las víctimas y el Derecho Internacional”, *Anuario de Derecho Internacional*, vol. 25, 2009, p. 3.

<sup>731</sup> Un análisis en detalle sobre el por qué de esta conexión entre desapariciones forzadas y derecho a la verdad puede verse en el capítulo I.

<sup>732</sup> MCCROY, S., “The International Convention for the Protection of all Person from Enforcement Disappearance”, *Human Rights Law Review*, núm.7, 2007, p.557. De esta forma, según Carlos Fernández de Casadevante, dentro del art. 24.1 solo se contempla a las víctimas *directas*; no obstante, dentro de ellas encontramos dos tipos: la persona desaparecida y, por otro lado, “toda persona física que haya sufrido un

En segundo lugar, el propio contenido del artículo 24.2 es también susceptiblemente más amplio que el del 32 del Protocolo I. En efecto, mientras este último se limita a reconocer el derecho a conocer el paradero de los desaparecidos, la CDF amplía el espectro y reconoce que el derecho a conocer es extensible no solo al paradero del desaparecido, sino también a las circunstancias de la desaparición y a los resultados de la propia investigación. Esta comparación es coincidente con la práctica que al respecto realizó el Comité DH y la Corte IDH durante los años ochenta ante los primeros casos de desapariciones forzadas que se les iban presentado ante sus jurisdicciones. Como ya comprobamos en lo analizado respecto a la práctica de este órgano hasta 1990, en lo relativo a sus pronunciamientos sobre casos de desapariciones forzadas, recordemos que aludía al deber de los Estados tanto de buscar el paradero del desaparecido como de averiguar “what has happened” (según la terminología del Comité DH<sup>733</sup>). El conocimiento del paradero del desaparecido es, por lo tanto, solamente uno de los elementos que componen la verdad.

Otro extremo al que debemos referirnos es el medio con el que el Estado va a hacer efectivo este derecho a la verdad. El artículo 24.2 contempla únicamente que “cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto”. Por “medidas adecuadas” entendemos que serán todas aquellas factibles para averiguar tanto “la suerte de la persona desaparecida”, como las circunstancias de la desaparición. No obstante, este último inciso del artículo pudiera percibirse como una suerte de “cláusula abierta” para que los Estados dieran el matiz que cada uno prefiriese a esa investigación, pues el artículo 24.2 no especifica de forma clara cuál debe ser su naturaleza. Más concretamente, intuimos que el artículo daría por buena la incoación de una investigación ya estuviese liderada por el Poder Judicial o por un órgano independiente de investigación.

El hecho de que este último tipo de investigación sea el elegido por el Estado, sin embargo, no significaría de ningún modo que será constituido como un mero sustituto de la acción penal. En efecto, recordemos que la propia CDF obliga a los Estados a tipificar la desaparición forzada como delito en sus propias legislaciones (artículo 4) y a punir a los responsables (artículo 6). La investigación extrapenal, por tanto, es entendida como un complemento y no como una alternativa. Si se diera el caso de que fuera

---

perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., “Las víctimas...”, *op.cit.*, p. 35.

<sup>733</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *caso Bleier c. Uruguay*, Comunicación 30/1978, Doc. CCPR/C/15/D/30/1978, 29 de marzo de 1982, párr.15.



iniciada solo una investigación extrapenal, se estaría violando el artículo 6 pues no se buscarían responsabilidades penales. La investigación judicial, por tanto, se da por supuesta. El artículo 24.2 podría entonces referirse a otro tipo de investigación complementaria a la judicial que los Estados también estarían obligados a emprender. Y es que tengamos en cuenta las dificultades de poder llegar a alcanzar el conocimiento completo de las circunstancias a través del proceso<sup>734</sup>.

Por otro lado, un factor importante a la hora de determinar la aplicación de la CDF, y en especial el artículo 24.2, a los casos de desapariciones forzadas es la naturaleza de delito continuado tan propia de la desaparición forzada.

La relación entre el derecho a la verdad y el carácter continuado del delito de desaparición forzada fue un tema de amplio debate dentro del 5.º período de sesiones del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de CDF. Como tal lo ejemplifica la posición defendida por las delegaciones de Argentina, Italia y Chile que contemplaban que:

“(…) determinados derechos y obligaciones que figuraban en el instrumento, tales como los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y los derechos relacionados con la desaparición de niños, se aplicarían a toda desaparición forzada que hubiera comenzado y que no hubiera sido aclarada antes de la entrada en vigor del instrumento, atendiendo al carácter permanente o continuado del delito de la desaparición forzada”<sup>735</sup>.

Empero, no hay constancia alguna de que tal declaración fuera finalmente realizada por ninguno de estos tres Estados.

En otro orden de cosas, hemos de referirnos a una cuestión que hasta ahora ha sido apuntada en la mayoría de los instrumentos a los que nos hemos venido refiriendo a lo largo de este trabajo: la vertiente colectiva del derecho a la verdad.

El derecho a la verdad, según se recoge en el artículo 24.2, está reconocido a las víctimas de la desaparición forzada. Por “víctima” entendemos, según prescribe el

---

<sup>734</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>735</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, Doc. E/CN.4/2006/57, 2 de febrero de 2006, párr.66.

artículo 24.1, “la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”. La sociedad, por tanto, no se reconoce como “víctima” de forma directa, sin embargo, ante situaciones de una comisión generalizada y sistemática de desapariciones forzadas, el artículo 5 de la CDF reconoce que esta práctica “entraña las consecuencias previstas por el Derecho internacional aplicable”. Ante ello nos preguntamos: ¿Se consideraría como una de esas consecuencias que la sociedad tuviera, como parte afectada por una comisión generalizada de desapariciones forzadas, el derecho a conocer la verdad de lo sucedido?

Dentro del preámbulo de la Declaración DF ya vimos que se contemplaba que la comisión sistemática de desaparición forzada afectaba a “los valores más profundos de toda sociedad” y, de hecho, sostuvimos que el contenido de su artículo 13.4 podía ser aplicable a la sociedad por considerarla “parte interesada” en el conocimiento de los resultados de una investigación que tuviera por objeto hechos generalizados de desaparición forzada. Esta misma interpretación es la que aplicaremos en el caso de la CDF, pues esta se remitirá a lo ya estipulado en Derecho internacional.

Así, a nuestro entender, dentro de un contexto de comisión sistemática y globalizada de desaparición forzada, la sociedad, al verse afectada en su totalidad por estos hechos, tendrá también el derecho a conocer la verdad de lo sucedido y el Estado, por tanto, habría de articular mecanismos adecuados a tal efecto. La práctica del Comité DF en la época siguiente (2010-2015), vendrá a confirmar la verdad como derecho colectivo dentro de la CDF.

Por último, es menester aludir al artículo 25.5 que contiene previsiones respecto a la desaparición forzada en menores, análogas a las contempladas en el artículo 20 de la Declaración DF y a la opinión, ya recogida, de la Comisión IDH al respecto<sup>736</sup>:

---

<sup>736</sup> El art. 25 establece en sus párrafos 1.º, 2.º y 4.º: “Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada; b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso a) supra. 2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables (...). 4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen el sistema de adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada”.

“En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez”.

La obligación de los Estados de tener en cuenta la opinión del menor en todo lo referido a su situación, en especial en lo referido a la restitución a sus familias de origen, evidencia, en nuestra opinión, un gran avance desde la primera mención realizada por la Comisión IDH en 1988 donde, recordemos, apelaba como única posibilidad respecto a los menores objeto de desaparición forzada la vuelta a su familia de origen<sup>737</sup>.

El deber de escuchar al menor, el hecho de que se reconozca que tiene el derecho a expresar libremente su opinión (y que esta será valorada), supone un claro paso adelante en el verdadero respeto de los derechos del menor y, en consecuencia, en una mejor gestión de su derecho a la verdad, el cual, como muchos otros, no ha de considerarse como absoluto en caso de que entre en colisión con terceros derechos.

Tras todo lo aquí relatado es claro que la adopción de la CDF ha supuesto un claro avance en lo que a la protección del derecho a la verdad se refiere, debido a su reconocimiento convencional en un tratado de protección de derechos humanos. La ampliación del espectro de aplicación del derecho a conocer la verdad, en comparación con lo recogido en el Protocolo I, constituye un gran progreso para la defensa de los derechos de las víctimas de desaparición forzada, los cuales ya no encontrarán satisfecho este derecho únicamente con el conocimiento del paradero del desaparecido, sino que también tendrán derecho a conocer las circunstancias en que el hecho fue cometido. Este desarrollo viene también dado por el afianzamiento de la vertiente colectiva del derecho a la verdad, así como por la protección del interés superior del menor en los casos de recuperación de la identidad de aquéllos que fueron sustraídos de las manos de su madre al nacer; protección que ya demandamos en las regulaciones de este mismo particular que antes realizaron la Comisión IDH y la propia en Declaración DF.

---

<sup>737</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe Anual 1987-1988*, OEA/Ser.L/V/II.74 Doc. 10 rev.1, 16 de septiembre de 1988, párr.331-345.

#### **4. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. EL AFIANZAMIENTO Y DESARROLLO DEL DERECHO LA VERDAD COLECTIVO**

Tras la primera referencia directa del Comité DH al derecho a la verdad, en su vertiente tanto individual como colectiva y la mención a que los Estados constituyan mecanismos a tal efecto<sup>738</sup>, la actuación del Comité DH durante el presente período consolidará esta modalidad colectiva de la verdad, pues incidió especialmente en su carácter extrajudicial y en los medios necesarios para que sea hallada.

En 2004 el Comité DH adoptó la OG núm. 31 sobre la naturaleza de las obligaciones jurídicas impuestas a los Estados en virtud del PIDCP<sup>739</sup>. A pesar de que hasta ahora hemos relacionado la obligación de incoar una investigación orientada al conocimiento de la verdad de los hechos únicamente en virtud del artículo 2.3, el Comité DH, a través de esta OG, vincula este artículo con el artículo 2.1 del Pacto, el cual afianza la obligación de asegurar y respetar todos los derechos reconocidos en él:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Este artículo, como puede apreciarse, contiene un alto paralelismo con el ya comentado artículo 1.1 de la CADH, que sostiene el deber de (respeto y) garantía de todos los derechos contemplados en este tratado internacional. Al igual que comentamos de aquél, el artículo 2.1 contiene dos obligaciones: “garantizar”, que sería

---

<sup>738</sup> Recordemos que el Comité DF en sus OF a Guatemala en 1996 estipuló que: “El Gobierno de Guatemala debería adoptar todas las medidas pertinentes para evitar casos de impunidad y, especialmente, para que las víctimas de violaciones de derechos humanos encuentren la verdad sobre esos actos, conozcan quiénes son sus autores y obtengan la indemnización adecuada”. Esto supondría la concreción del derecho a la verdad individual en el PIDCP, mientras que la publicidad de los resultados de esa investigación sería la afirmación de su vertiente colectiva. Además de lo anterior, el Comité DH recomendó a los Estados la creación de comisiones extrajudiciales en ciertos contextos para que determinados hechos violatorios de derechos humanos fueran esclarecidos.

<sup>739</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observación general núm.31 [80]. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto*, Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004.

una obligación positiva orientada a tomar toda clase de medidas destinadas a salvaguardar todo los derechos incluidos en el Pacto; y “respetar”: una obligación negativa la cual se entendería en el sentido de abstener de todo comportamiento que pudiera poner en peligro alguno de los derechos establecidos en el PIDCP<sup>740</sup>. En definitiva, el artículo 2.1 ha sido considerado como una *umbrella clause*, pues está orientado a asegurar el cumplimiento de todos los derechos reconocidos en el Pacto<sup>741</sup>. En este mismo sentido, Valentín Bou Franch y Mireya Castillo Daudí han afirmado que “la interpretación del artículo 2 es esencial para precisar el alcance de los compromisos asumidos por los Estados en virtud del Pacto”<sup>742</sup>.

En el caso particular del derecho a la verdad podemos leer el artículo 2.1 en ambas direcciones. Conforme a la obligación de respeto, y en relación directa con las desapariciones forzadas, los Estados deben abstenerse de cometerlas, pues pondrían en peligro el derecho a la vida del individuo y la prohibición de no ser sometido a tortura. Por su parte, con respecto a su obligación de aseguramiento, los Estados deben tomar los pasos necesarios para investigar las violaciones de derechos que componen el articulado del Pacto.

En cuanto a la relación del artículo 2.1 con el artículo 2.3 que mencionábamos anteriormente, y como ya analizamos dentro del sistema interamericano, el deber de garantía no se agota en la prevención de la comisión de violaciones de derechos humanos, sino que también encarna obligaciones *a posteriori*, por ejemplo, la obligación de investigar.

Sin embargo, no hemos de quedarnos únicamente en la obligación de emprender una investigación judicial sobre los hechos. Como hemos comprobado en la práctica del Comité DH en la época anterior, este se refirió dentro de las OF a Guatemala de 1996 a tomar medidas encaminadas a “encontrar la verdad” fuera de los tribunales. Igualmente vimos la tendencia que empezaba a mostrar el Comité DH de recomendar a los Estados construir mecanismos independientes de investigación para hallar las circunstancias de lo ocurrido en determinados contextos (ya tuvieran competencias judiciales o no). La

---

<sup>740</sup> NOWAK, M., *U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary*, Kehl, N.P. Engels, 2ªed., 2005, p.29.

<sup>741</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observación general núm.31 [80]. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto*, Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párr. 5.

<sup>742</sup> BOU FRANCH, V., CASTILLO DAUDÍ, M., *Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 73.

necesidad de utilizar este tipo de mecanismos de investigación fue igualmente afirmada en la OG núm. 31 en relación con el artículo 2.3:

“Se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar las denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cuenten con las facultades pertinentes pueden coadyuvar a tal fin. El hecho de que un Estado Parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una vulneración del Pacto”<sup>743</sup>.

El conocimiento de hechos que emanen de los mecanismos administrativos tendrá un prisma diferente a aquellos que se conozcan en un proceso penal y será la que terminemos por identificar como verdad extrajudicial.

Esta verdad fue tenida en cuenta durante el 5.º examen periódico a España. En él, en referencia al mantenimiento de la Ley de amnistía de 1977<sup>744</sup>, el Comité DH estableció que el Estado español estaba violando el artículo 7 del Pacto (según lo prescrito en la OG núm. 20, en relación con la imprescriptibilidad del delito de torturas) y los artículos 2.1 y 2.3 (según la OG núm. 31), en referencia a las obligaciones jurídicas de los Estados para con los derechos afianzados en el Pacto<sup>745</sup>.

Analizando las recomendaciones del Comité DH para España se estableció que:

“El Estado parte debería: a) considerar la derogación de la Ley de amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) *prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura*; y d)

---

<sup>743</sup> *Ibid.*, párr.15.

<sup>744</sup> Ley 46/1977 de amnistía. BOE núm.248 de 17 de octubre de 1977, pp. 22765-22766.

<sup>745</sup> Véase, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: España*, Doc. CCPR/C/ESP/CO/5, 5 de enero de 2009, párr.9. En concreto el Comité DH dispuso que: “El Comité recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señala a la atención del Estado parte sus Observaciones generales Nº 20 (1992), relativas al artículo 7, según la cual las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto, y Nº 31 (2004), sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto”.

permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”<sup>746</sup>.

Así, el Comité DH, tomando como base el contenido de ambas OG<sup>747</sup>, recomendó por primera vez a un Estado la creación de una comisión dirigida a la búsqueda de la verdad histórica<sup>748</sup>. La obligación de búsqueda de este otro tipo de verdad, la cual no se advierte en sede judicial, la consideramos igualmente obligatoria para los Estados, pues se desprende también del contenido del Pacto.

Sin embargo, un posible déficit con el que puede contar este pronunciamiento sería la ausencia de una mayor concreción del contenido de esta obligación. Es decir, teniendo presente lo que hemos venido poniendo de manifiesto durante el análisis de determinadas experiencias estatales en comisiones de la verdad, cada organismo extrajudicial orientado a la búsqueda de la verdad histórica tiene que contar con sus propias características y debe adaptarse al contexto objeto de su investigación. Por ello entendemos que, debido a la amplia discrecionalidad que tendrían los Estados para materializar este derecho, será más que probable que muchos de los organismos que se implementen no cumplan finalmente con sus funciones como, de hecho, hemos ido comprobando que ocurre en determinadas experiencias nacionales. Y es que en varias ocasiones estos órganos no contaban con las competencias mínimas necesarias para que así fuese. Lo único que el Comité DH ha mencionado al respecto es la necesidad de complementariedad entre los trabajos de la comisión extrajudicial y el proceso penal, en el sentido de que, como ya estipulaba Louis Joinet, aquellas: “no sean desviadas de su finalidad para convertirse en un pretexto que deje al margen a los tribunales”<sup>749</sup>. De hecho, el Comité DH en OG núm. 31 estableció:

---

<sup>746</sup> *Ibid.* Sin énfasis en el original.

<sup>747</sup> Recordemos lo mantenido acerca de la vinculación jurídica de las OG de los Comités. Véase epígrafe 3.1 del capítulo I.

<sup>748</sup> Al igual que ocurrió en el período histórico anterior, el Comité DH, como ya hiciera con respecto a España, recomendó a varios países, en sus OF correspondientes, la creación de comisiones extrajudiciales de investigación aunque sin mencionar que estas habrían de buscar la “verdad histórica”: COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Centroafricana*, Doc. CCPR/C/CAF/CO/2, 27 de julio de 2006, párr.8; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Guatemala*, Doc. CCPR/CO/72/GTM, 27 de agosto de 2001, párr.12; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Popular Democrática de Corea*, Doc. CCPR/CO/72/PRK, 27 de agosto de 2001, párr.15; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Brasil*, Doc. CCPR/C/BRA/CO/2, 1 de diciembre de 2005, párr.12.b.

<sup>749</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos)*

“Cuando las investigaciones a que se hace referencia en el párrafo 15 revelan la violación de ciertos derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Parte deben asegurarse de que los culpables comparezcan ante la justicia. Como sucede cuando no se abre una investigación, el hecho de que no se haga comparecer ante la justicia a los autores de violaciones puede ser de por sí una vulneración del Pacto”<sup>750</sup>.

En el caso de las OF a España, el Comité DH no fue más allá de recordar al Estado que en aplicación de los artículos 2.1, 2.3 y 7 debía “prever la creación de una comisión de expertos independientes” y, al contrario de lo que veremos que sí hizo el Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (REVJR) en su visita *in loco* a este Estado<sup>751</sup>, no especificó qué garantías, particularidades o acciones concretas habría de respetar y/o realizar esta comisión para que efectivamente pudiera dar cobertura al derecho a la verdad colectivo que, en este caso concreto, tendría la sociedad española en aplicación del PIDCP.

La falta de pronunciamientos análogos dentro de la práctica del Comité DH donde este especifique, al menos, las características generales que hubieran de tener este tipo de comisiones (salvo la independencia de sus miembros), produce que debamos intuir o interpretar cuáles hubieran de ser las que hayan de primar no solo en la comisión que el Comité DH imple a España a crear, sino las que deban estar presentes en cualquier organismo extrajudicial creado por un Estado que pretenda realizar una investigación extrajudicial tras haber sufrido violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos, en aras de que este instrumento respete el derecho de la sociedad a conocer la verdad. De esta forma el contenido de la obligación estatal que los Estados tendrían para con los artículos 2.1, 2.3 y 7 del PIDCP estaría más y mejor definido.

En primer lugar, y como principio ineludible sin el cual el trabajo de la comisión no respetaría esta obligación, encontramos la necesidad de que los hechos objeto de investigación no estén estrictamente delimitados dentro del mandato de la comisión. Un ejemplo que ilustra perfectamente su utilidad lo encontramos en lo ocurrido con la

---

*preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión, Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997, párr.20.*

<sup>750</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observación general núm.31 [80]. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto*, Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párr.18.

<sup>751</sup> Véase, epígrafe 5.4 del capítulo IX.



Comisión Rettig en Chile<sup>752</sup>. Será imprescindible que la comisión cuente con un margen de discrecionalidad lo suficientemente amplio como para que pueda investigar el origen, el desarrollo y las consecuencias de aquellos hechos que violaron los derechos humanos de las víctimas o que incidieron directa o indirectamente en ello, sin la necesidad de que fueran punibles en la legislación nacional o internacional, pues estos ya serán judicialmente investigados por el órgano competente<sup>753</sup>. Esta necesaria amplitud del mandato también permitirá a la comisión orientar su investigación en uno u otro sentido conforme vaya desarrollando sus trabajos, en caso de que lo considere necesario.

En segundo lugar, y en estrecha relación con el primero, se encontrará el requisito de que el período de investigación de la comisión (competencia *ratione temporis*) abarque todo el intervalo temporal durante el que se cometieron los hechos anteriormente descritos. En consecuencia, no debería discriminarse una etapa concreta en beneficio de otra pues, tal y como ha afirmado la OACNUDH, ello “podría hacer que la comisión fuera percibida como políticamente parcial en su ámbito de actuación”<sup>754</sup>.

En tercer lugar, y algo que sí especificó concretamente el Comité DH, será necesario que se pruebe la total independencia política de los comisionados que compongan la comisión, en aras de garantizar la objetividad del resultado al que se llegue.

Si el mecanismo que hubiera de liderar la investigación que diera cobertura al derecho a la verdad colectivo siguiera estas tres prerrogativas, podría afirmarse que el Estado está efectivamente respetando el derecho a la verdad colectivo. La falta de seguimiento de alguna de ellas redundaría inexorablemente en el incumplimiento de

---

<sup>752</sup> Esta comisión ya vimos que limitana su investigación a violaciones con resultado de muerte. Ello redundó en que las torturas cometidas por el régimen de Pinochet quedaron sin ser investigadas, lo que propició que al cabo de cierto tiempo hubiera de crearse una segunda comisión que investigara tales hechos. Véase, la práctica de Chile en derecho a la verdad en los epígrafes 1.1 del capítulo V y epígrafe 1.15 del capítulo VIII.

<sup>753</sup> Una correcta definición de la competencia *ratione materiae* de la comisión de la verdad vendría de la mano de una previa consulta a las víctimas y al conjunto de la sociedad civil de cuál hubiera de ser los hechos objeto de investigación y, en consecuencia, conocidos públicamente. La participación de la sociedad civil ya fue definida como necesaria por la OACNUDH: “Como ya se ha señalado, las comisiones de la verdad más sólidas son las que se crean tras un proceso de consultas y de cuidadoso estudio del tipo de comisión que resultaría más apropiado dadas las circunstancias. Cada comisión debe establecerse de tal forma que queden reflejadas las necesidades, los puntos fuertes y las oportunidades nacionales”. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Instrumentos del Estado de derecho...* op.cit., p.7. La importancia del rol que juega la sociedad civil en los trabajos de la comisión también fue puesto de manifiesto dentro de la Resolución de la AG sobre el derecho a la verdad en 2013. Véase: ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 68/165. El derecho a la verdad*, Doc. A/RES/69/165, 21 de enero de 2014. Esta Resolución será analizada en profundidad en el epígrafe 6 del capítulo IX.

<sup>754</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Instrumentos del Estado de derecho...* op.cit., p.8.

este derecho, ya que la sociedad vería partes de su “verdad” limitadas o alteradas, en uno u otro sentido, como se desprende de lo anteriormente analizado. Ello, bien porque ciertos hechos seguirían estando en el olvido al no ser objeto de investigación; bien porque un período concreto quedaría fuera de los trabajos de la comisión; o bien porque el carácter general de la comisión pudiera estar políticamente sesgado.

Sin embargo, a nuestro parecer sería objeto de interesante debate que a lo anterior le fuese unido la obligación de que la comisión, como parte del contenido del derecho a la verdad colectivo, hubiera de publicitar los nombres de los victimarios. Esta posibilidad, como ya vimos<sup>755</sup>, no está exenta de polémica ya que la presunción de inocencia o el derecho de defensa del acusado (pertenecientes a la esfera del proceso penal) pudieran verse perjudicados. Sin embargo, ya alegamos que el conocimiento de la identidad del victimario podría conocerse públicamente a través del informe final de la comisión siempre y cuando, y como ya vimos que dispuso Priscilla Hayner, tres mínimas garantías fuesen respetadas: que el reconocido como culpable fuese informado de las acusaciones que se le imputan, que se le dé la oportunidad de defenderse mediante, por ejemplo, la presentación ante la comisión de pruebas de descargo y que en el informe final donde se le menciona se razone el por qué se ha llegado a esa conclusión acerca de las responsabilidades individuales correspondientes<sup>756</sup>. Y es que si todo esto fuera considerado, no habría necesidad alguna de que la identidad de aquellos que cometieron los hechos objeto de investigación no fuera conocida por la sociedad a través de un organismo extrajudicial y, por lo tanto, se integre en esas prerrogativas de necesario respeto para que el derecho a la verdad colectivo (que se desprende de los artículos 2.1, 2.3 y 7 del PIDCP) sea materializado.

Por último, dentro de este período histórico no podemos dejar de referirnos al voto disidente de los miembros del Comité DH, Fabián Salvioli y Hellen Keller, en el caso *Cifuentes Elgueta c. Chile*<sup>757</sup>. Este caso fue adoptado en septiembre de 2009, es decir, ocho meses después de que el Comité DH aprobara sus OF sobre España y la vigencia como obligación estatal dentro del Pacto de averiguar la verdad histórica.

---

<sup>755</sup> Véase epígrafe 2 del capítulo III y, en concreto, la práctica de El Salvador en el epígrafe 1.4 del capítulo V.

<sup>756</sup> HAYNER P., *Verdades innombrables...* op.cit., p.181.

<sup>757</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *María Cifuentes Elgueta c. Chile*, Comunicación núm.1536/2006, Doc. CCPR/C/96/D/1536/2006, 7 de septiembre de 2009.

En lo que a nosotros nos ocupa, ha de advertirse que este voto disidente no representa una suerte de opinión minoritaria general sobre la posición del derecho a la verdad en el PIDCP, sino que se adoptó tras la negativa de la mayoría del Comité DH a admitir a trámite un caso de desaparición forzada, debido a la declaración del Estado chileno de que su competencia para con el Comité DH habría de iniciarse tras la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto<sup>758</sup>. Sin embargo, los mencionados miembros disidentes del Comité DH discrepaban debido a las particularidades con las que cuenta la comisión de una desaparición forzada, entre ellas, el nacimiento de determinados derechos que debían ser respetados para proteger a las víctimas de estos hechos, entre ellos, el derecho a la verdad.

El derecho a la verdad fue definido por ambos miembros del Comité DH, siguiendo la interpretación ya dada por el propio órgano a lo largo de su práctica:

“Entendemos que las violaciones masivas o sistemáticas a los derechos fundamentales de la persona humana ofenden a la comunidad internacional en su conjunto, generan obligaciones erga omnes y engendran el deber de investigar exhaustivamente los hechos. El derecho a la verdad posee así un doble aspecto, individual (cuyo titular son las víctimas sufrieron las violaciones y sus familiares) y colectivo (para la comunidad)”<sup>759</sup>.

Fabian Salvioli y Hellen Keller ponían así encima de la mesa la interpretación sobre el derecho a la verdad ya recogida en el Conjunto de principios y aplicada por el mismo Comité DH en las comentadas OF a España. Mediante el siguiente párrafo se resumía perfectamente la función de este derecho dentro del Pacto:

“El ‘derecho a la verdad’ conlleva, bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho de obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes; por ello, el Estado debe investigar efectivamente los hechos

---

<sup>758</sup> Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1966. *BOE* núm.79 de 2 de abril de 1985, pp. 8757-8759.

<sup>759</sup> *Ibid.*, p.14, párr.20.

constitutivos de la desaparición forzada, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales”<sup>760</sup>.

Esta interpretación del derecho a la verdad y el PIDCP se identifica perfectamente con la opinión mayoritaria del Comité DH en lo referente a las obligaciones del Estado español para con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: el Estado tiene la obligación de esclarecer la verdad acerca de los hechos violatorios de derechos humanos.

No obstante, será en la siguiente cuestión, que también afectaba al derecho a la verdad, donde estos miembros discrepaban de la opinión mayoritaria del Comité DH: la consideración de la obligación de investigar como una obligación de resultado, en vez de la clásica visión de la investigación como una obligación de medio. En opinión de estos miembros del Comité DH:

“En virtud del derecho individual y social a la verdad, el deber de investigar y juzgar hechos tales como la desaparición forzada, abandona progresivamente su naturaleza de ‘obligación de medio’ y se encuentra en tránsito de constituirse como una ‘obligación de resultado’. En este aspecto, creemos que deben distinguirse los diferentes componentes de dicha obligación estatal.

(...)

La obligación de dar a conocer el destino de las personas desaparecidas cuando dicha acción es imputable al Estado constituye, a nuestro juicio, una obligación de resultado. Cuando el Estado ha sido responsable, no solamente es inaceptable éticamente sino desde el punto de vista jurídico, que no otorgue a los familiares las respuestas necesarias para procesar el derecho al duelo en caso de que las personas desaparecidas hayan sido ejecutadas extrajudicialmente”<sup>761</sup>.

La visión de la obligación de investigar como obligación de resultado implica que el Estado únicamente cumplirá su obligación para con las víctimas de desaparición forzada cuando revele el paradero del desaparecido pues “si el Estado ha sido capaz de ‘hacer desaparecer’ una persona, entonces debe ser capaz de decir cómo lo ha hecho y

---

<sup>760</sup> *Ibid.*, p.15, párr.24.

<sup>761</sup> *Ibid.*, p.16, párr.27. En contraposición con la opinión de la Corte IDH al respecto. Véase, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, Fondo, sentencia de 29 de septiembre de 1988, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, Núm.4, párr.181.

donde se encuentra actualmente, o donde se encuentran sus restos mortales”<sup>762</sup>. Es decir, en caso de que la obligación de investigar fuera considerada como de medio, el Estado la satisfaría únicamente poniendo todos los medios a su alcance para hallar el paradero de la persona desaparecida (lo que tampoco es sencillo de comprobar plenamente, pues ¿cuándo se sabe que el Estado ha puesto en marcha todos los medios posibles?), aunque finalmente no llegase a encontrarla. El Estado, por tanto, debe por cualquier modo brindar una respuesta a los familiares del desaparecido.

Con independencia de la coherencia del argumento y de la obligación incuestionable del Estado de dar respuesta ante una desaparición que ha sido perpetrada por agentes a su cargo, la experiencia ha demostrado que hay determinadas circunstancias en las que es ciertamente imposible hallar el paradero de la persona desaparecida, pues, por ejemplo, podría darse el caso de que aquellos que saben dónde se encuentra el cadáver han fallecido. En estos casos, si considerásemos el derecho a la verdad obligación de resultado y, por tanto, el Estado solo podría responder ante él brindando información sobre el paradero del desaparecido, en situaciones como las descritas, el Estado, aunque hubiera puesto todos los medios a su alcance para hallarlo, incumpliría sistemáticamente estas obligaciones al no poder facilitar información alguna sobre el lugar donde está el cadáver del desaparecido, ni tampoco sobre las circunstancias (tiempo, modo, lugar, razones e identidad) de la desaparición.

Es por ello que entendemos que al no ser descabellado que estas situaciones pudieran darse, el derecho a la verdad debe guiar la actuación del Estado; será el medio y el fin al que las investigaciones deban estar orientadas. Y es que, en definitiva, este derecho obliga a los Estados más en la elección de los medios a utilizar que en garantizar un resultado concreto.

A modo de recapitulación de todo lo anterior, podemos afirmar que en aplicación de lo contenido en sus OG núm. 20 y 31, los artículos 2.1, 2.3 y 7 obligan a los Estados a emprender investigaciones para averiguar la verdad de lo sucedido tanto a nivel individual (lo que repercutirá en la incoación de investigaciones judiciales), como colectivo (mediante la constitución de, en lenguaje del propio Comité DH: “comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica”, con las salvedades anteriormente apuntadas). Esta obligación de investigar constituirá,

---

<sup>762</sup> *Ibid.*, p.16, párr.29.

remitiéndonos a nuestra posición ya aquí expuesta, una obligación de medio y no de resultado, al contrario de lo sostenido por los miembros del Comité DH.

## **5. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA RESOLUCIÓN 1235 (XLII) DEL ECOSOC**

### **5.1. La interrelación entre verdad con la justicia, la reparación y el acceso a la información en la práctica del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.**

Tras su inicial acercamiento al derecho a la verdad dentro de sus primeros informes, en donde contemplaba el derecho de los familiares a conocer el paradero de sus seres queridos que hubieran sido hechos desaparecer, el GTDFI a lo largo de esta década amplió su espectro y fue sucesivamente vinculando el derecho a la verdad con los derechos a la justicia, la reparación y el acceso a la información<sup>763</sup>, en correcta aplicación de los avances que al respecto han sido desarrollados por los diferentes órganos de protección hasta ahora analizados.

En primer lugar, en relación con el derecho a la justicia, la proliferación de leyes de amnistía que garantizaban *de facto* la impunidad de los victimarios en América Latina hizo que el GTDFI, en su OG sobre el artículo 18 de la Declaración DF<sup>764</sup>, mostrara preocupación sobre este particular:

“Quienes hayan perpetrado desapariciones no podrán beneficiarse de tales leyes si el Estado no ha cumplido sus obligaciones de investigar las circunstancias pertinentes de las desapariciones, identificar y detener a los responsables y velar

---

<sup>763</sup> Fuera del ámbito propio de su práctica hemos de mencionar el hecho de que en 2009, dentro del marco de la revisión a sus métodos de trabajo, el GTDFI incluyó una referencia al derecho a la verdad. Concretamente dispuso: “(...) el Grupo de Trabajo también formula observaciones sobre la aplicación de la Declaración cuando el gobierno interesado no ha cumplido sus obligaciones en lo que respecta a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/13/31, 21 de diciembre de 2009, p.124, párr.4.

<sup>764</sup> “Los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 supra no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal”.

por que se satisfaga el derecho a la justicia, la verdad, la información, el recurso, la reparación, la rehabilitación y la indemnización de las víctimas”<sup>765</sup>.

Con el anterior pronunciamiento el GTDFI incluía el conocimiento de la verdad dentro de toda una serie de obligaciones a las que los Estados tendrían que hacer frente una vez perpetradas violaciones de derechos humanos. El cumplimiento (no optativo) de las mismas condicionaba que el Estado pudiera o no aplicar una ley de amnistía<sup>766</sup>.

En segundo lugar, esta importancia dada a la verdad se encontraba relacionada estrechamente con el derecho a la reparación. Este derecho fue también uno por los cuales el GTDFI mostró preocupación acerca de la manera en cómo estaba siendo implementado en las transiciones latinoamericanas a las víctimas de desaparición forzada.

Respecto a la reparación, ya apreciamos en el análisis de los Principios sobre reparaciones y de la Declaración DF, la obligación del Estado de comunicar a los interesados los resultados de la investigación. El GTDFI, por su parte, conectó esta misma necesidad de conocimiento con la reparación, y en concreto, con la obligación de

---

<sup>765</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/13/31, 21 de diciembre de 2009, p.17, párr.8.c.

<sup>766</sup> Ahora bien, hay que aclarar que la relación entre leyes de amnistía y derecho a la verdad está únicamente ligada a la vertiente judicial de este último, pues el tipo de investigación que emprendería un órgano extrajudicial no se vería coartado por este tipo de disposiciones. Las amnistías se conciben como leyes que impiden al Poder Judicial incoar una investigación sobre determinados hechos constitutivos de delito, cerrando la puerta, en definitiva, al inicio de la acción penal. A pesar de que pueden ser también entendidas como causas de extinción de la responsabilidad penal, lo que implicaría que una investigación habría de ser incoada (al ser la única manera de que se averiguase la responsabilidad penal correspondiente), la práctica de los Estados al respecto no deja lugar a dudas de que el efecto que producen inhabilita a los tribunales a emprender investigación alguna sobre los amnistiados. Sin embargo, no todas las amnistías son limitativas de este derecho, habiendo la doctrina sentado una gran diferenciación entre los distintos tipos que pueden concebirse, así como los contextos en los que estas leyes pueden estar en concordancia con el DIDH. De hecho esto puede deducirse del simple hecho de que ningún tratado internacional prohíbe de forma específica la adopción de este tipo de disposiciones, contemplándose, por otro lado, la obligación de incoar investigaciones judiciales, de procesar a los culpables en caso de violaciones de derechos humanos o de conocer la verdad de lo ocurrido. De esta forma puede fácilmente deducirse qué tipo de amnistías son las incompatibles con la legislación internacional. Sobre estas leyes puede consultarse: ROTH-ARRIAZA, N., *Impunity and Human Rights in International Law and Practice*, Nueva York, Oxford University Press, 1995, p.57; PÉREZ GONZÁLEZ, C., “Reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y lucha contra la impunidad en el espacio iberoamericano. A propósito de las leyes de amnistía”, en DEL VALLE GÁLVEZ, A., GONZÁLEZ GARCÍA, I., ACOSTA SÁNCHEZ M. A. (coords.), *La cumbre de Cádiz y las relaciones de España con América Latina. V Jornadas iberomericanas de Estudios internacionales de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales X Reunión de la Asociación de Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos Iberoamericanos 2012 Cádiz, 26 y 27 de octubre de 2012*, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2012, pp. 206 – 2010. Disponible en: [http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/coleccion%20ED%2019\\_para%20web.pdf](http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/coleccion%20ED%2019_para%20web.pdf) (Consultado el 12 de junio de 2016).

los Estados de buscar a las personas desaparecidas. Y es que será el conocimiento del paradero junto con las circunstancias de la desaparición, y no otra cosa, lo que produzca la reparación integral de estas víctimas, en correcta aplicación de la teoría de la interrelación entre verdad, justicia y reparación ya contemplada dentro del sistema interamericano, así como por autores como Juan Méndez<sup>767</sup>. En este sentido fue en el que se pronunció el GTDFI en su informe sobre su visita a El Salvador:

“El Grupo de Trabajo considera que, en el contexto del programa integral de búsqueda que se sugiere, debería implementarse un programa de reparación integral que, en los términos del artículo 19 de la Declaración, incluya una indemnización adecuada y otros medios reparatorios, tales como una readaptación tan completa como sea posible, con pleno respeto al derecho a la justicia y a la verdad”<sup>768</sup>.

En tercer y último lugar, el GTDFI se refirió a la obligación estatal de rescatar la memoria histórica de la sociedad como parte de las exigencias al Estado en materia de acceso a información y transparencia. Relación a la cual, ya vimos, que la Comisión DH aludía en su Resolución 2005/66<sup>769</sup>.

En este mismo orden de ideas, el GTDFI prestó atención al conocimiento de la memoria histórica en su informe sobre su visita a Argentina, como una obligación localizada en los artículos 13.4 y 13.2 de la Declaración DF<sup>770</sup>. Sin embargo, pese a que el conocimiento de la memoria histórica era reconocido como una obligación dentro de la Declaración DF por el propio GTDFI, este no se pronunció sobre el tipo de institución que habría de emprender una investigación de estas características. En

---

<sup>767</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo IV.

<sup>768</sup> *Ibid.*, párr.56.

<sup>769</sup> “El Grupo de Trabajo no solamente se muestra preocupado por la existencia de un marco jurídico que puede convertirse en obstáculo para la transparencia y el acceso a la información que pudiera servir para esclarecer casos de desaparición forzada, sino, sobre todo, a causa de la ausencia de una ley que garantice de manera positiva el acceso a dicha información. El derecho comparado en la materia es abundante, por lo que el Grupo de Trabajo insta al poder legislativo salvadoreño a que, en aras de lograr una mayor transparencia informativa que conduzca al rescate de la memoria histórica relativa a las graves violaciones de derechos humanos suscitadas durante el conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, emita una ley de transparencia y acceso a la información que cumpla con los estándares internacionales en la materia”, *Ibid.*, párr. 61.

<sup>770</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Misión a Argentina*, Doc. A/HRC/10/9/Add.1, 5 de enero de 2009, párrs.63-64. El art. 13.2 contempla: “Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares”.



efecto, la memoria histórica hace referencia a una categoría de verdad extrajudicial, cuyas características propias (entre las que destacan sobre todo el conocimiento de hechos no judicializados, pero igualmente importantes para poder conocer el contexto global de violaciones de derechos humanos) hacen que para su efectiva consecución un organismo distinto del proceso judicial sea requerido. No obstante, a pesar de esta omisión, constatamos que tras sus primeras referencias al derecho a la verdad en los años ochenta y tras la aparición de la Declaración DF, el GTDFI realiza una readaptación de su entendimiento de la obligación de los Estados sobre lo que antes consideraba derecho a saber, ocupando así un lugar prominente en la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Estas interpretaciones sobre la tan comentada interrelación entre verdad y otras categorías como justicia, reparación e información vienen a confirmar los primeros pronunciamientos que realizamos sobre la posición del derecho a la verdad, en lo concreto, dentro de la Declaración DF y, en general, para cualquier hecho de desaparición forzada. Y es que estos coinciden notablemente con el contenido recogido por el articulado de la CDF antes analizada.

## 5.2. El derecho a la verdad y la detención arbitraria.

El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria (GTDA) fue establecido por la Comisión DH en 1991 en su Resolución 1991/42 de 5 de marzo de 1991<sup>771</sup>. Según sus métodos de trabajo, el GTDA tiene por mandato “investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente”<sup>772</sup>. Para ello, el GTDA se remitirá a:

“(…) las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”<sup>773</sup>.

La detención arbitraria ya estaba recogida en el artículo 9 de la DUDH mediante un contundente: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

Según lo ha contemplado el propio GTDA, las causas principales que provocan que una persona esté sometida a detención arbitraria son:

“Porque han ejercido uno de sus derechos fundamentales garantizados con arreglo a tratados internacionales, tales como su derecho a la libertad de opinión y expresión, su derecho a la libertad de asociación, o su derecho a salir del propio país y regresar a él, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; o bien porque, no pudiendo beneficiarse de las garantías fundamentales del derecho a un juicio imparcial, han sido detenidas sin que se

---

<sup>771</sup> Su mandato fue revisado por CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 24/7. La detención arbitraria*, Doc. A/HRC/RES/24/7, 8 de octubre de 2013.

<sup>772</sup> Sus métodos de trabajo revisados pueden consultarse en: CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria*, Doc. A/HRC/16/47, 19 de enero de 2011. La base jurídica para sustentar sus pronunciamientos y acciones puede encontrar en las páginas 22 y 23: DUDH, PIDCP, Convención sobre el estatuto del Refugiado de 1951, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"), Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como toda otra norma pertinente.

<sup>773</sup> El GTDA es el único mecanismo extraconvencional con la facultad para examinar denuncias individuales y para emitir dictámenes, los cuales cuentan con un valor jurídico equivalente al de los órganos convencionales. Véase, GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA, *Folleto Informativo N°26*, p.27. Documento disponible en: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf> (Consultado el 15 de junio de 2016).

dicte una orden de arresto, sin ser acusadas ni juzgadas por una autoridad judicial independiente, o sin tener acceso a un abogado; a veces se mantiene a los detenidos en régimen de incomunicación durante varios meses o años, o incluso indefinidamente; o debido a que siguen detenidas aunque se haya cumplido la medida o sanción que se les había aplicado; o, por último, debido a la práctica cada vez más difundida y preocupante de la detención administrativa, sobre todo en el caso de personas que tratan de obtener asilo”<sup>774</sup>.

A primera vista podemos entender que la conexión entre el derecho a la verdad y la detención arbitraria podría ser similar al caso de las desapariciones forzadas. En efecto, el desconocimiento por parte de las familias del lugar al que ha sido enviado preso un ser querido, o el no conocer los motivos de la detención, pueden ser algunas de las relaciones que podemos averiguar entre el derecho a la verdad y esta práctica. Sin embargo, aparte de esta relación, el GTDA ha conectado el respeto al derecho a la verdad con el respeto a los principios del debido proceso. En su opinión 31/2006 sobre Iraq y los Estados Unidos en 2007, el GTDA estableció que:

“El Grupo de Trabajo considera que también desde la perspectiva de las víctimas, quienes *en virtud del Derecho internacional tienen derecho a reparación, verdad y justicia*, es especialmente importante que la investigación de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y el procesamiento de los supuestos autores se lleven a cabo en un proceso legal transparente y legítimo”<sup>775</sup>.

El GTDA sostiene, así, que, junto con los derechos a la justicia y a la reparación, el derecho a la verdad es un derecho afianzado en el ordenamiento internacional respecto a las víctimas individuales. No obstante, para que este sea efectivamente concretado en su vertiente judicial será necesario que se respeten las garantías judiciales básicas. Un buen sistema judicial será imprescindible para el esclarecimiento objetivo y cierto de los acontecimientos del pasado. En caso contrario, se corre el riesgo de que, por un lado, ninguna investigación sea incoada, y por otro, que el resultado al que se

---

<sup>774</sup> *Ibid.*, p.2.

<sup>775</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria*, Doc. A/HRC/4/40/Add.1, 2 de febrero de 2007, p.138, párr.26. Sin resaltado en el original.

llegue sea parcial o sesgado. Tal como estimó el GTDA, “también para ellos [las autores] es fundamental que la justicia no solo sea justa sino que también lo parezca”<sup>776</sup>.

### **5.3. Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. ¿El derecho a la verdad como norma de *ius cogens*?**

El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (REIMA)<sup>777</sup>, ya en su informe inaugural presentado ante la AG, hacía referencia al derecho a la verdad pero dejando su tratamiento específico para posteriores informes<sup>778</sup>. Del mismo modo reconoció que su mandato fue extendido a raíz de otras Resoluciones adoptadas por la propia Comisión DH como, por ejemplo, la ya analizada 2005/66 referente al derecho a la verdad en el contexto de la lucha contra la impunidad y en la cual, recordemos, se hacía un llamamiento a los Relatores Especiales a que tuvieran en cuenta la cuestión de la verdad dentro de sus mandatos.

El primer pronunciamiento en el que el REIMA analizaba de forma específica el derecho a la verdad se realizó en el contexto de su íntima relación con la administración de justicia y con las medidas orientadas a la reparación y al acceso a la información en el sentido de lo ya dictaminado y visto aquí por otros órganos de protección<sup>779</sup>.

---

<sup>776</sup> *Ibid.*, p.138, párr.26.

<sup>777</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 1994/41. Independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados*, Doc. E/CN.4/RES/1994/41, 4 de marzo de 1994. Su mandato fue renovado por CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 26/7. Mandato del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados*, Doc. A/HRC/RES/26/7, 10 de julio de 2014. Entre sus fundamentos jurídicos se encuentran: la DUDH, PIDCP, Declaración y Programa de Acción de Viena, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Principios básicos sobre la función de los abogados, Directrices sobre la función de los fiscales, Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, resoluciones de la Comisión DH 8/6, 12/3, 13/19, 15/3, 1989/32, 1991/39, 1992/33 y 1993/44 y todas las anteriores de la Comisión DH y de la AG sobre independencia judicial. Véase, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 17/2. Mandato de Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados*, Doc. A/HRC/17/2, 6 de julio de 2011.

<sup>778</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la independencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad. Nota del Secretario General*, Doc. A/60/321, 31 de agosto de 2005, párr.1.

<sup>779</sup> El REIMA como ya se realizara dentro del estudio de la OACNUDH amparará la doble vertiente del derecho a la verdad (individual y colectiva), así como su íntima relación y utilidad para la efectiva concreción del derecho a la justicia y la reparación. Como ya hicieran otros anteriormente, también se refirió a la posible interacción entre un organismo judicial y otro extrajudicial como forma de concretar ambas modalidades. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados*, Leandro Despouy, Doc. E/CN.4/2006/52, 23 de enero de 2006, párrs. 14-39.

Después de repasar la evolución que ha experimentado el derecho a la verdad a lo largo de los años, y su paso de ser un derecho propio del DIH a un derecho del DIDH, el REIMA concluyó que:

“Cabe precisar que esta evolución operada en ambas ramas del Derecho internacional público ha sido complementaria y en ningún caso antagónica, al extremo de que una jurisprudencia que evoluciona en el plano nacional e internacional, identifica el derecho a la verdad como una norma internacional de *jus cogens*”<sup>780</sup>.

La referencia al derecho a la verdad como norma imperativa estaba apoyada en dos sentencias del Poder Judicial de Argentina<sup>781</sup>, una del Tribunal Constitucional de Perú<sup>782</sup> y una decisión del Comité CT donde se estipulaba la obligación del Estado argentino de ofrecer un recurso efectivo a las víctimas de tortura<sup>783</sup>. Desde nuestro punto de vista, no creemos que exista la base jurídica necesaria sobre la que poder sustentar de una forma tan contundente y firme esta afirmación. Y es que el *ius cogens*, o “norma imperativa de Derecho internacional general”, como es sabido ha sido definido según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 1969 como:

“(…) una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo carácter”<sup>784</sup>.

---

<sup>780</sup> *Ibid.*, párr. 16. Esta referencia iba a su vez enlazada a la opinión ya mencionada del propio REIMA cuando en 1995 ya se pronunció sobre la raíz consuetudinaria del derecho a la verdad. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción. Octavo informe revisado anual y lista de Estados que desde el 1º de enero de 1985 han proclamado, prorrogado o levantado el estado de excepción, presentado por el Sr. Leandro Despouy, Relator Especial, nombrado en cumplimiento de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/20, 26 de junio de 1995, p.57, párr. 40. Véase nuestra interpretación al respecto en el epígrafe 2 del capítulo V.

<sup>781</sup> CORTE SUPREMA DE ARGENTINA, causa núm. 17768 de 14 de junio de 2005; JUSTICIA FEDERAL ARGENTINA, causa núm. 6681.

<sup>782</sup> TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PERÚ, expediente 2488-2002-HC/TC de 18 de marzo de 2004, numeral 8.

<sup>783</sup> COMITÉ CONTRA LA TORTURA, comunicación núm. 1/1988, 2/1988, 3/1988, Doc. Doc. U.N. Doc. CAT/C/WG.3/DR/1, 2 and 3/1988, 23 de noviembre de 1989.

<sup>784</sup> Tal y como señaló el Relator especial de la CDI, Dire D. Tladi, con relación al *ius cogens*, el punto de partida en esta materia sigue siendo la Convención de Viena, y las mismas se definen como “1) normas 2)

Es decir, el sustento jurídico presentado por el REIMA, o su propia interpretación al respecto, no ampara o prueba el hecho de que “la comunidad internacional de Estados en su conjunto” admita el derecho a la verdad como norma de *ius cogens*; lo que, de otro lado, corroborará todo el análisis que hemos desarrollado hasta aquí. Distinto sería si la Corte Internacional de Justicia se hubiera pronunciando en este sentido, como sí lo ha hecho en alguna ocasión. Tengamos en cuenta, a este respecto, la competencia obligatoria que el artículo 66 a) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados le confiere este Tribunal con relación a controversias relativas a la aplicación o la interpretación del artículo 53 o el artículo 64, esto es, de normas de *ius cogens*.

Por ello, al carecer los Poderes Judiciales nacionales citados o el propio Comité CT de potestad en este sentido (englobar el sentir de la comunidad internacional sobre un determinado particular), no podemos sostener la interpretación que sobre el derecho a la verdad hace este procedimiento extraconvencional.

Y es que, tal y como la doctrina ha ido pronunciándose al respecto, no contamos con una enumeración de aquellos derechos y obligaciones que pudiera ostentar el carácter de norma imperativa, pues como la propia Comisión de Derecho Internacional ha establecido: “el problema no es que no haya una sola lista autorizada de normas de *ius cogens*, sino que no hay acuerdo acerca de los criterios para incluir normas en esa lista”<sup>785</sup>.

Teniendo la Corte Internacional de Justicia, como se ha advertido, la potestad de considerar qué obligaciones internacionales pudieran ser consideradas de *ius cogens*<sup>786</sup>, observamos que la Corte ha sido muy cautelosa a este respecto, de tal forma que, si bien ha afirmado de manera inequívoca la importancia de estas normas, son muy escasos los pronunciamientos en los que ha afirmado de manera inequívoca tal estatus para una norma<sup>787</sup>. Debido a ello, no solo constatamos que es imposible poder considerar al

---

aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto 3) que no admiten acuerdo en contrario” (*Informe de la 66ª sesión de la CDI* (2014), A/CN.4/678, p. 295).

<sup>785</sup> COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, *Fragmentación del Derecho Internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. Informe del Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho Internacional. Elaborado por Martti Koskenniemi*, Doc. A/CN.4/L.682, 13 de abril de 2006, párr. 375.

<sup>786</sup> REMÓN QUISPE, F., “Las normas de *ius cogens*: ausencia de catálogo”, *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. 28, 2012, p. 181.

<sup>787</sup> *Ibid.*, p. 162. Si bien, el *ius cogens* se ha invocado en varios fallos de la CIJ, así como en algunas opiniones disidentes y separadas de diversos magistrados, lo cierto es que la Corte ha sido muy parca en esta materia, limitándose, la mayoría de las veces a remitirse a otros; por ejemplo a la CDI, como hizo para calificar como *ius cogens* la prohibición del uso de la fuerza, en el asunto de la *actividades militares*

derecho a la verdad (de forma amplia) como norma de derecho imperativo, sino que también encontraremos dificultades para probar fehacientemente que ciertas conexiones del derecho a la verdad, a las que nos hemos venido refiriendo, pudieran ser así también consideradas; en concreto, aquellas que se vinculan con su vertiente individual (pues serán las que puedan presentar más dudas al respecto, ya que negamos de plano que en ningún caso la vertiente colectiva pueda ser *ius cogens*): la obligación de incoar una investigación judicial tras la comisión de una violación de derechos humanos, en aras de hallar la verdad judicial; y la obligación de búsqueda del desaparecido tras la comisión de una desaparición forzada.

Como primer apunte, podría ser más que justificable que ambos derechos pudieran integrar lo que José Antonio Pastor Ridruejo denomina como “el núcleo duro de los derechos fundamentales”<sup>788</sup>; concepto universalmente aceptado para referirse a aquellos derechos “inderogables en cualquier tiempo y circunstancia”<sup>789</sup>. Ello es así porque, tal y como afirma Florabel Quispe Remón: “[e]n pleno siglo XXI nadie duda del carácter de *ius cogens* de ciertas normas”, en las que, según esta autora, podrían incluirse, “el derecho a un juicio imparcial (...) en el marco del derecho a un juicio con las debidas garantías”<sup>790</sup>; entre las que pudieramos incluir la incoación de una investigación penal sobre los hechos. Del mismo modo, existirían dudas razonables sobre si dentro de ese marco del que “nadie duda”, podría incluirse la obligación de búsqueda de desaparecidos, debido a la importancia de la que viene gozando este particular en los últimos tiempos; empezando por las primeras referencias de la AG dentro del DIH (posteriormente incorporadas al campo propio del DIDH<sup>791</sup>), pasando por los numerosos pronunciamientos al respecto del Comité DH y la Corte IDH y, concluyendo, en la consolidación del art. 15 de la CDF que consagra este derecho dentro del Derecho internacional convencional.

---

y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. EEUU) (ICJ Reports, 1986, pa.184-190). Sin embargo, en algunos casos más recientes sí se ha mostrado más proclive a considerar determinadas normas como *ius cogens*; tal ha ocurrido en el asunto relativo a *Ciertas cuestiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar*, donde afirma que la prohibición de la tortura forma parte del Derecho internacional consuetudinario y se ha convertido en norma imperativa (ICJ Reports, 2012, pa.99).

<sup>788</sup> PASTOR RIDRUEJO, J. A., “Sobre la universalidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, *Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época*, vol. 12, 2011, p. 277.

<sup>789</sup> *Ibid.* A este respecto, según Ana Gemma López Martín, integrarían este núcleo los derechos relativos al derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el genocidio, la esclavitud, la discriminación racial o la desaparición forzada de personas. Véase, LÓPEZ MARTÍN, A. G., “Las víctimas del abuso de poder en Derecho Internacional: una aproximación a su estatuto jurídico”, *Revista General de Derecho Público Comparado*, vol. 14, 2014, p. 6.

<sup>790</sup> REMÓN QUISPE, F., “Las normas de *ius cogens*...”, *op.cit.*, p. 167.

<sup>791</sup> Véase, epígrafe 1 del capítulo I.

Pese a que somos conscientes de que estamos ante un tema de complejo y de complicado abordaje<sup>792</sup> –cuyo desarrollo en mayor detalle desbordaría los márgenes del presente trabajo–, entendemos que se puede afirmar, sin lugar a dudas, que ni uno ni otro derecho pueden ostentar la condición de norma imperativa. Y ello, no únicamente porque la Corte Internacional de Justicia no se haya pronunciado a la fecha expresamente de tal modo, sino, sobre todo, porque tampoco podría probarse que los Estados así lo hayan acordado y se hubieran comportado en consecuencia. Es decir, no creemos que exista ese necesario consenso generalizado por parte de la ‘comunidad internacional de Estados en su conjunto’, que lleve a afirmar que el derecho a la verdad –y ciertas conexiones el mismo– haya sido aceptado y reconocido como norma imperativa. De hecho, en referencia concreta a las garantías judiciales (dentro de la cual integramos la incoación de una investigación penal), pese a la posición con la que cuentan como parte nuclear del respeto y la garantía de los derechos reconocidos en determinados instrumentos internacionales, la Comisión de Derecho Internacional “no lo ha considerado expresamente en sus ejemplos como una norma de *ius cogens*”<sup>793</sup>. Argumento que podría ser igualmente válido en el caso de la obligación de búsqueda de los desaparecidos.

En otro orden de cosas, ya en 2007, el REIMA realizó una novedosa aportación en su interpretación sobre la importancia del derecho a la verdad para las víctimas de violaciones de derechos humanos, al conectar este derecho con la condena a la pena de muerte de los responsables de haber cometido grandes violaciones de derechos humanos, lo que nos muestra el valor con el que cuenta el derecho a la verdad para el conocimiento de las violaciones de derechos humanos. El contexto en el que se realizó esta conexión fue dentro del análisis sobre las deficiencias en materia de derechos humanos con las que contaba el Alto Tribunal Iraquí. Según el informe del REIMA este tribunal poseía:

“(…) una competencia personal limitada, que permite al Tribunal juzgar solo a iraquíes, así como una competencia temporal también acotada, puesto que no puede juzgar crímenes cometidos por tropas extranjeras antes de la guerra del Golfo de 1990, ni crímenes de guerra cometidos después del 1º de mayo de 2003,

---

<sup>792</sup> Complejidad que llevó a la propia CDI, tras el informe del Relator Especial de 2014, a excluir abordar, de momento, el tema del *ius cogens* (*Informe de la 67ª sesión de la CDI* (2015), A/69/10).

<sup>793</sup> *Ibid.*, p. 159.



fecha de la ocupación del Irak. Asimismo, el Estatuto no prohíbe las confesiones obtenidas bajo tortura o detención arbitraria, recoge ilícitos que fueron definidos como tales solamente después de su comisión por parte del régimen de Saddam Hussein, y no tutela el derecho a no autoincriminarse”<sup>794</sup>.

Este tribunal condenó a muerte a Sadam Hussein, Barzan al Tikriti y al antiguo jefe del Tribunal Revolucionario, Awad al Bandar, por la matanza de Dujail en la que murieron ciento cuarenta y ocho civiles chiíes. Señalando las numerosas deficiencias con las contó todo el proceso<sup>795</sup>, el REIMA afirmó que la sentencia a muerte de Sadam Hussein supuso una grave vulneración del derecho a la verdad de las víctimas de las violaciones de derechos humanos por él cometidas, pues ello privaría del conocimiento de numerosas circunstancias en las que sus crímenes fueron cometidos<sup>796</sup>. En efecto, cuando nos encontramos ante violaciones graves de derechos humanos, y más si estas se han desarrollado durante un largo período de tiempo, sus responsables no estarán involucrados únicamente en un caso concreto, sino que poseerán responsabilidad penal en varios de los hechos por los que puedan ser juzgados. Su condena a muerte en un caso específico impediría que la verdad sobre las circunstancias en las que otras fueron cometidas sea averiguada, al no contar con el testimonio de los implicados en ellas si fueron anteriormente ejecutados.

---

<sup>794</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la independencia del poder judicial, la administración de justicia y la impunidad. Nota del Secretario General*, Doc. A/62/207, 6 de agosto de 2007, párr.61.

<sup>795</sup> El REIMA destaca, entre otras, la falta de independencia judicial del tribunal, como puede observarse en las siguientes irregularidades: “Un juez, varios candidatos a jueces, tres abogados defensores y un empleado del Tribunal fueron asesinados durante ese proceso. Otro juez renunció a presidir el Tribunal tras recibir presiones por su anterior afiliación al régimen Baas”. *Ibid.*, párr.62.

<sup>796</sup> *Ibid.*, párr.64. Puede consultarse también en relación con el derecho a la verdad y la pena de muerte: CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy*, Doc. A/HRC/8/4, 13 de mayo de 2008, párr.57; ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Independencia de magistrados y abogados. Nota del Secretario General*, Doc. A/63/271, 12 de agosto de 2008, párr.65.

## **CAPÍTULO VII**

### **PROGRESOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LA CUESTIÓN DE LA AUTONOMÍA DEL DERECHO A LA VERDAD**

#### **1. RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS SOBRE EL DERECHO A LA VERDAD**

Al margen de la práctica de la Corte y Comisión IDH, el 6 de junio de 2006 fue aprobado un proyecto de Resolución denominado “El derecho a la verdad” dentro del 36.º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA<sup>797</sup>.

Esta Resolución estuvo claramente inspirada por la primera de las Resoluciones aprobada por la OACNUDH: la 2005/66, como puede apreciarse de su propio contenido: “[r]econocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos”; la creación de mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales para promover su respeto y cumplimiento, así como el cumplimiento de las recomendaciones de estos últimos; y la constitución de mecanismos de divulgación de información relativa a las violaciones de derechos humanos y el acceso a la misma<sup>798</sup>.

La adopción de esta Resolución dentro del sistema interamericano de protección supone un aliciente en la interpretación del papel del derecho a la verdad dentro de los países miembros de la OEA. Y es que, como veremos en el análisis de la práctica estatal de este período, los Estados latinoamericanos y del Caribe poseen, como venimos comprobando dentro de los epígrafes dedicados a la práctica estatal, una extensa experiencia en la creación de mecanismos de protección del derecho a la verdad. Las

---

<sup>797</sup> Doc. AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06), 6 de junio de 2006. Este proyecto, presentado por la delegación de Argentina y patrocinado por las delegaciones de Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

<sup>798</sup> En cuanto a lo concreto de esta resolución destaca el pedido a la Comisión IDH y a los Estados a que presten la asistencia adecuada a aquellos Estados que lo necesiten para la concreción del derecho a la verdad y la solicitud a la Comisión IDH de que se elabore un informe sobre los desarrollos de este derecho dentro de los países de la OEA. Este informe será analizado en el epígrafe 1 del capítulo X.

consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de esta práctica se analizarán una vez concluido el estudio sobre la práctica estatal<sup>799</sup>.

## **2. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

Tras la etapa anterior, en la cual la Comisión IDH identificó el derecho a la verdad con determinados artículos de la CADH, la década de los 2000 se inauguró en lo referente a este derecho con el informe 21/00<sup>800</sup>. En él, la peticionaria, Carmen Aguilar de Lapacó, alegó que las autoridades argentinas rechazaron su solicitud a efectos de determinar el padaredo de su hija desaparecida. Dicha petición se presentó ante la Comisión IDH amparada por los artículos 1.1, 8 y 25 que recogían el derecho a la verdad y el derecho al duelo, según hemos visto mantuvo la misma Comisión. La queja fue admitida a trámite.

El 15 de noviembre de 1999 se suscribió en Buenos Aires un acuerdo de solución amistosa entre las partes, en el cual el Estado argentino reconoció aceptar y garantizar el derecho a la verdad, comprometerse a tomar medidas para remediar las alegaciones de las partes y agotar todos los recursos para el esclarecimiento de lo sucedido con el desaparecido (obligación de medio). Con este acuerdo Argentina estaba aceptando la existencia del derecho a la verdad dentro de la CADH<sup>801</sup>.

Por otro lado, y como inicio del desarrollo de la práctica la Comisión IDH en esta época, se enfatizó el importante papel que juegan los tribunales de justicia en la

---

<sup>799</sup> Véase, epígrafe 2 del capítulo XII.

<sup>800</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 21/00. Caso 12.059, Carmen Aguilar de Lapacó c. Argentina*, 29 de febrero de 2000.

<sup>801</sup> Un caso idéntico del año 2000 es el 11.481, incluido en el informe 37/00. En él la Comisión IDH estableció: “El derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general. Tales obligaciones surgen fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13 de la Convención Americana”; igualmente se refirió a la verdad como medida de reparación: “El derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos, forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no solo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones”, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 37/00. Caso 11.481. Monseñor Óscar Arnulfo Romero c. El Salvador*, 13 de abril del 2000, párr.142 y 148. Igualmente, COMISIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 40/00. Casos 10588, 10608, 10796, 10856, 10921*, 13 de abril del 2000, párr.80.

búsqueda de la verdad de los hechos. Un ejemplo claro de ello es el pronunciamiento de la Comisión IDH en el caso 11771 de 2001. En él, la Comisión IDH se congratulaba por la constitución de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile<sup>802</sup>, ya que esta había:

“(…) reunido antecedentes sobre violaciones de derechos humanos (…), se individualizó a las víctimas (…), reconoció que los casos de estas personas constituían violaciones graves de los derechos fundamentales imputables a agentes del Estado, e intentó establecer su paradero, así como medidas de reparación y reivindicación para cada una de ellas o sus familiares”<sup>803</sup>.

Ahora bien, a pesar de que la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile realizó una encomiable labor:

“(…) no permitió la investigación de los hechos delictivos por parte de los agentes del Estado, ni la identificación y sanción de sus responsables, precisamente en virtud del Decreto-Ley de amnistía, motivo por el cual el derecho de las víctimas sobrevivientes y de los familiares a conocer la verdad de los hechos fue vulnerado por el Estado chileno”<sup>804</sup>.

La necesaria interrelación entre verdad, justicia y reparación queda aquí de nuevo puesta de manifiesto. Independientemente de la constitución de una comisión de la verdad que pudiera resarcir, en parte, las necesidades de verdad de la población, así como haber establecido una serie de reparaciones a las víctimas, la falta de una investigación judicial comporta una conculcación tanto del derecho a la justicia, como de los mismos derechos a la verdad y reparación. Como ya analizamos<sup>805</sup>, el conocimiento de la verdad que pudiera emanar del informe final de una comisión de la verdad no bastaría para solventar las deficiencias de verdad de una sociedad, debido a que, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile “no estaba habilitada para publicar los nombres de quienes cometieron los delitos ni para

---

<sup>802</sup> Sobre la práctica chilena en derecho a la verdad véanse epígrafes 1.1 del capítulo V y epígrafe 1.15 del capítulo VIII.

<sup>803</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 61/01. Caso 11771*, 16 de abril de 2001, párr.53.

<sup>804</sup> *Ibid.*, párr.81.

<sup>805</sup> Véase epígrafe 2 del capítulo III.

imponer ningún tipo de sanción”<sup>806</sup>, ni tampoco estaba facultada para la investigación de torturas sin resultado de muerte.

Esas grandes carencias, que únicamente pueden ser solventadas en un proceso judicial, suponían que ni los derechos a la justicia, a la verdad y la reparación podían ser respetados. En efecto, las comisiones de la verdad, debido a sus atribuciones, por sí solas no suponen una adecuación del Estado a las exigencias que emanan de los artículos 8 y 25 en relación el artículo 1.1 de la CADH, pues: “las obligaciones internacionales previstas en las disposiciones citadas requieren que se garantice el derecho a la justicia en el caso concreto, se sancione a los responsables y se repare adecuadamente a los familiares de la víctima”<sup>807</sup>.

El conocimiento de la verdad de los hechos a través del proceso judicial estará igualmente amparado en estas disposiciones pues entraría dentro de la reparación adecuada de las víctimas. La duda residiría en si el mero conocimiento de la verdad judicial, es decir, la falta de creación de organismos específicos para el conocimiento de la verdad histórica, repercutiría en una violación de los mismos preceptos de la CADH (artículos 1.1, 8 y 25) que sí son conculcados por la falta de una investigación judicial.

La Comisión IDH ha afirmado en varias ocasiones que:

“(…) todo proceso penal tiene la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos investigados. Por tanto, corresponde al Estado, a través de sus órganos judiciales, efectuar una investigación seria, imparcial y efectiva encaminada, primero, a determinar si dichos hechos son constitutivos de delito y, segundo, a identificar a los autores del delito, para su posterior juzgamiento y sanción”<sup>808</sup>.

Sin embargo, en un contexto de violaciones de derechos humanos hay circunstancias no constitutivas de delito (y, por tanto, no conocidas dentro de un proceso penal) que es necesario que también sean conocidas por la sociedad.

Si atendemos a lo que ha establecido la Comisión IDH, comprobaremos que el único requisito establecido para que los derechos incluidos en los artículos 1.1, 8 y 25 de la CADH no sean violados, es que la investigación estatal esté, efectivamente,

---

<sup>806</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 61/01. Caso 11771*, 16 de abril de 2001, párr.82.

<sup>807</sup> *Ibid.*, párr.55.

<sup>808</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 74/05. Caso 11887*, 15 de octubre de 2005, párr.55.

orientada a averiguar la verdad sobre lo sucedido. Como parámetro de actuación ha establecido que:

“(…) debe probarse en cada caso que la investigación realizada ha sido exhaustiva, inmediata e imparcial, de modo que el hecho de que no se hayan presentado pruebas suficientes para formular cargos criminales ‘no ha sido producto de la ejecución mecánica de ciertas formalidades procesales sin que el Estado busque efectivamente la verdad’”<sup>809</sup>.

La mera diligencia del Estado en la búsqueda de la verdad dentro de una investigación judicial supondría, según la Comisión IDH, la adecuación al contenido de lo dispuesto en la CADH. Sin embargo, el conocimiento de lo ocurrido a través de otros foros es, en nuestra opinión, igualmente necesario para la reparación íntegra de las víctimas en su faceta de satisfacción. Según Pedro Nikken:

“La impunidad por crímenes cometidos por agentes del Estado o bajo la cobertura de este no se agota en la falta de castigo a los responsables de dichos crímenes. Un componente inseparable de esa impunidad es la omisión de toda investigación, el encubrimiento y hasta la falsificación de los hechos para proteger a los responsables. No cabe duda que el descubrimiento de la Verdad, a cargo de personas independientes destruye este elemento, lo cual, si bien no es útil por sí mismo para erradicar la impunidad, cumple, por lo menos, una doble función. En primer término, sirve para que la sociedad conozca, objetivamente, lo ocurrido en el seno de su propia realidad, que se traduce en una suerte de catarsis colectiva. En segundo lugar, contribuye a crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de impedir la repetición de hechos semejantes y muestra a quienes son capaces de incurrir en ellos que, aun si pueden escapar a la acción de la justicia, no son

---

<sup>809</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 92/05. Caso 12418*, 24 de octubre de 2005, párr.83. Puede consultarse igualmente, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 80/07. Caso 11658*, 15 de octubre de 2007, párr.148; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 36/08. Caso 12487*, 18 de julio de 2008, párr.87; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 25/09. Caso 12310*, 19 de marzo de 2009, párr.109.

inmunes a que se les reconozca públicamente como responsables de gravísimos atentados contra otros seres humanos”<sup>810</sup>.

Será precisamente a lo que este autor se refiere con que “la sociedad conozca, objetivamente, lo ocurrido”, y las bondades que esta acarrearía no solo para las víctimas, sino también para toda la sociedad, lo que hace que defendamos, como la propia Comisión IDH ya lo venía haciendo desde los años ochenta (y otros órganos como el Comité DH en sus OF a España en 2009, como ya vimos), que, si bien el derecho a la verdad es también un derecho colectivo, su concreción deba ir más allá del conocimiento mediante la acción de los tribunales de justicia. Será en estos casos, tras una violación masiva o sistemática de derechos humanos, donde “los valores más profundos de la sociedad” han sido afectados, cuando es necesario que el Estado articule mecanismos específicos que estén orientados a que el conjunto de la sociedad pueda llegar a conocer lo sucedido, tanto como medida de reparación de víctimas individuales (pues el conjunto de la sociedad podrá conocer y reconocer el sufrimiento pasado) como de prevención de que los hechos no vuelvan a repetirse.

En este sentido, conviene apuntar que lo anterior plantea, en todo caso, algunas dudas adicionales. Así por ejemplo, autores como Javier Chinchón, aún entendiendo la importancia con la que cuenta el conocimiento de la verdad por parte de la sociedad, más aún dentro de un proceso de transición política, se cuestionaban la posible existencia de una auténtica obligación estatal de hallar la verdad cuyo titular fuera toda la sociedad. En este mismo sentido, sostenía que, en caso de que se reconociera esta

---

<sup>810</sup> NIKKEN, P., “El manejo del pasado y la cuestión de la impunidad en la solución de los conflictos armados de El Salvador y Guatemala”, en FIX-ZAMUDIO, H., *Liber Amicorum. Vol. I*, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998, pp. 167-168. Siguiendo esta línea, Xavier Seuba ha reconocido que el derecho a la verdad, como expresión colectiva del derecho a saber (utilizando la terminología recogida en el ya examinado Conjunto de principios): “permite obtener un conocimiento más amplio de lo acontecido y permite deslindar las que fueron violaciones particulares de la propia lógica de la represión, lo que añade también información a la violación que sufrió cada una de las víctimas”. Este autor, tras enfatizar la necesidad de que la sociedad deba de conocer una verdad global, realiza un estudio sobre los diferentes mecanismos con los que cuentan los distintos sujetos (individuos y colectivos) que poseen el derecho a la verdad para poder ejercer ante los tribunales su derecho a la verdad. Sin embargo, el autor se circunscribe únicamente a los mecanismos jurisdiccionales, por lo que se limita al conocimiento de la verdad judicial, a pesar de que en la presentación de su trabajo habla también de “verdad global”, la cual se advierte separada de la judicial. Como se sujetos activos del derecho a la verdad encuentra: víctimas y familiares; Estados; sociedad (vía ONGs y asociaciones mediante la activación de preceptos internacionales tales como los arts.20 y 24.7 de la CDF, la Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos de la AG de 1999, el principio 19 del Conjunto de principios o la competencia *ratione personae* de la Comisión IDH [art.44 de la CADH]) SEUBA HERNÁNDEZ, X., “La naturaleza colectiva del derecho a la verdad y su impacto sobre la legitimación activa”, en RIPOL CARULLA, S., VILLÁN DURÁN, C., (dirs.), *Justicia de transición... op.cit.*, p.64-74.

vertiente colectiva, “habría de enfrentar un problema respecto a la posibilidad de exigir el cumplimiento de esta obligación, en tanto que si se admite que el titular de este derecho es toda la sociedad, quizás debiera articularse una suerte de *actio popularis* para reclamar su materialización”<sup>811</sup>.

Con todo y en definitiva, la necesidad de que el conocimiento de la verdad traspase las fronteras del individuo para asentarse en el campo colectivo es vital para poder obtener una imagen global de las violaciones de derechos humanos perpetradas. La Comisión IDH, pese a que la Corte IDH no lo haya aún estipulado de forma fehaciente, seguía defendiendo la separación y complementación de los campos de verdad y justicia, con la irrenunciable creación de mecanismos específicos que pudieran hacer que tanto las vertientes individuales como colectivas fueran amparadas.

### **3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.**

Tras los primeros pronunciamientos sobre la posición del derecho a la verdad dentro de la CADH, durante esta época se dieron los avances más variados y significativos en la consolidación del derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte IDH. Para un mejor estudio y comprensión de todos los progresos ocurridos en esta época dividiremos este epígrafe en dos puntos, cada uno de ellos analizado en virtud a su evolución temporal. En primer término, la determinación de la posición y vinculación jurídica de las vertientes individual y colectiva del derecho a la verdad dentro de la CADH. Y, en segundo, un análisis específico sobre la verdad extrajudicial o histórica dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH; tema de necesario estudio a tenor de lo visto en el epígrafe anterior.

---

<sup>811</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz... op.cit.*, p. 267. Esta teoría también es la defendida por SEUBA HERNÁNDEZ, X., “La naturaleza colectiva del derecho a la verdad...”, *op.cit.*, p. 74.



### **3.1. La determinación de la posición y vinculación jurídica de las vertientes individual y colectiva del derecho a la verdad dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.**

La primera referencia al derecho a la verdad en el inicio del nuevo milenio se dio en la sentencia de fondo del caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala* en el año 2000. En ella, la Corte IDH estableció:

“De todos modos, en las circunstancias del presente caso, el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”<sup>812</sup>.

Esta interpretación seguía la línea dictada ya en la sentencia sobre reparaciones del caso *Castillo Páez c. Perú*. En ella, recordemos, que la Corte IDH se refirió al derecho a la verdad a instancias de la Comisión IDH, debido a la vigencia de una ley de amnistía que impedía la investigación de los hechos y, por ende, el conocimiento de la verdad; situación que violaba los artículos 1.1, 8 y 25 de la CADH<sup>813</sup>. La Corte IDH seguía de esta manera la interpretación del derecho a la verdad como un derecho derivado del derecho a la justicia y, por tanto, solo en su faceta judicial; opción que se reafirmaba en el reconocimiento de las víctimas o sus familiares como garantes de este derecho.

Por otro lado, esta sentencia contenía a su vez lo que podríamos considerar el primer pronunciamiento ligado a la vertiente colectiva del derecho a la verdad sobre el cual hasta ese momento no se había pronunciado. En concreto, la Corte IDH expresó que:

---

<sup>812</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Fondo, sentencia de 25 de noviembre del 2000, en *Serie C: Núm. 70*, párr. 201. Esta interpretación se reproduciría posteriormente en la mítica sentencia *Barrios Altos c. Perú* de 2001 donde se declaró, igualmente, que las leyes de amnistía eran incompatibles con las obligaciones del Estado de investigar los hechos que emanan de los arts. 1.1, 8 y 25 de la CADH. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Barrios Altos c. Perú*, Fondo, sentencia de 14 de marzo de 2001, en *Serie C, Núm. 75*, párr. 48.

<sup>813</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de noviembre de 1998, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 43*, párr. 106.

“(…) deb[a] ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables”<sup>814</sup>.

La determinación de lo que hemos denominado aquí “verdad judicial colectiva”, es decir, la publicación de los resultados de la investigación, puede ser así entendida como el primer intento de concreción del derecho a la verdad colectivo para la Corte IDH aunque esta no lo reconoció así expresamente; circunstancia que igualmente ocurrió con el Comité DH en 1997. El contenido del párrafo anterior respondería a la materialización de lo estipulado en el artículo 8.5 de la CADH donde se reconocía que: “[e]l proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. La sentencia, como eslabón y parte final e indispensable del proceso penal habría, en consencuencia, de ser igualmente pública.

Un caso posterior donde se detallaba específicamente qué métodos hubieran de utilizar los Estados, en aras de que las sentencias judiciales fueran accesibles al público en general, se dio en la sentencia del caso *Cantoral Benavides c. Perú* de 2001. En él se especificaba que:

“En cuanto a las medidas de satisfacción y no repetición solicitadas por los representantes de la víctima y la Comisión, la Corte estima que la sentencia *per se* constituye una forma de reparación. Sin perjuicio de esto, la Corte considera, como medida de satisfacción, que el Estado peruano debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una única vez, la parte resolutive de la sentencia sobre el fondo dictada el 18 de agosto de 2000”<sup>815</sup>.

En 2002, en el caso *Trujillo Oroza c. Bolivia*, la Corte IDH reiteró la manera en la que la sociedad conociera los resultados de la investigación, a través de: “publicar en el Diario Oficial la sentencia sobre el fondo”<sup>816</sup>. Sin embargo, encontramos numerosos casos en los cuales la Corte IDH no especifica medidas concretas más allá de la simple

---

<sup>814</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Fondo, sentencia de 25 de noviembre del 2000, en *Serie C: Núm. 70*, párr. 230.8.

<sup>815</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Cantoral Benavides c. Perú*, Reparaciones y costas, sentencia de 3 de diciembre de 2001, en *Serie C núm. 88*, párr. 79.

<sup>816</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Trujillo Oroza c. Bolivia*, Reparaciones y costas, sentencia de 27 de febrero de 2002, en *Serie C núm. 92*, párr. 119.

divulgación pública de la sentencia en el sentido de lo recogido en *Bámaca Velasquez*<sup>817</sup>, que, como hemos reiterado, forma parte intrínseca de las obligaciones judiciales según el artículo 8.5. Por tanto, salvo que la Corte IDH pueda especificar más concretamente esta obligación (como la publicación de la sentencia en el “Diario Oficial”), los Estados darán cobertura a esta obligación con el simple acceso del público al contenido de la sentencia.

Posteriormente, en la sentencia sobre reparaciones de *Bámaca Velasquez c. Guatemala* en 2002, la Corte IDH ya sí se pronunció directamente por vez primera acerca de esta vertiente colectiva, pese a que dentro del sistema interamericano la Comisión IDH ya lo había hecho, conviene recordarlo, a mediados de los años ochenta.

En la mencionada sentencia la Corte IDH dispuso:

“Finalmente, es obligación del Estado, según el deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención, asegurar que estas graves violaciones no se vuelvan a repetir. En consecuencia, debe hacer todas las gestiones necesarias para lograr este fin. Las medidas preventivas y de no repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las atrocidades del pasado, como lo ordenara esta Corte en la sentencia de fondo. La sociedad tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro”<sup>818</sup>.

---

<sup>817</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Caracazo c. Venezuela*, Fondo, sentencia de 29 de agosto de 2002, en *Serie C Núm. 95*, párr.118; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Humberto Sánchez c. Honduras*, Fondo, sentencia de 7 de junio de 2003, en *Serie C, Núm. 99*, párr.186; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *19 Comerciantes c. Colombia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 5 de julio de 2004, en *Serie C, Núm. 109*, párr.263; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 8 de julio de 2004, en *Serie C, Núm.110*, párr.231; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Tibi c. Ecuador*, Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 7 de septiembre de 2004, en *Serie C, Num. 114*, párr.258; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Masacre Plan de Sánchez c. Guatemala*, Reparaciones, sentencia de 19 de noviembre de 2004, en *Serie C, Núm. 116*, párr.98; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Masacre de Maripán c. Colombia*, Fondo, sentencia de 15 de septiembre de 2005, en *Serie C, Núm.134*, párr.298; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Huilca Tecse c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 3 de marzo de 2005, en *Serie C, Núm. 121*, párr.107; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gutiérrez Soler c. Colombia*, sentencia de 12 de septiembre de 2005, en *Serie C No. 132*.

párr.96; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Tiu Tojín c. Guatemala*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 26 de noviembre de 2008, en *Serie C: Núm.190*, párr.72; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Las Palmeras c. Colombia*, Reparaciones y costas, sentencia de 26 de noviembre de 2002, en *Serie C: Núm. 96*, párr.67.

<sup>818</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Reparaciones y costas, sentencia de 22 de febrero de 2002, en *Serie C: Núm. 91*, párr.77.

La Corte IDH de esta manera reconocía el conocimiento de la verdad (ya definiremos de qué naturaleza) como la primera medida a implementar dentro de las garantías de no repetición, como forma también de reparación a las víctimas.

Sin embargo, el afianzamiento dentro de la jurisprudencia de la vertiente colectiva del derecho a la verdad, en un sentido más inclusivo, se dio en el caso *Myrna Mack Chang c. Guatemala* de 2003, donde, aparte de reconocer el derecho a la verdad de las familias, la Corte IDH afirmó que:

“(...) los familiares de las víctimas y la sociedad como un todo deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho internacional de los Derechos Humanos; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, ello constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, en este caso da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad guatemalteca”<sup>819</sup>.

A destacar del párrafo anterior será la confirmación de lo que hemos venido interpretando a raíz del análisis de las sentencias anteriores, a saber: el derecho de la sociedad a saber la verdad de lo ocurrido como parte central de las medidas de reparación tras la perpetración de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos y, concretamente, para prevenir la repetición de los hechos. Por otro lado, es también digno de mención la llamada directa a los Estados a que efectivamente *satisfagan* el contenido que pueda extraerse de ese derecho a la verdad colectivo (y también individual); es decir, que pongan todos los medios a su alcance para que así sea. Todo ello se traduciría en esta época en el inicio de una investigación judicial orientada a averiguar la verdad y en la posterior la publicación de los resultados de la misma.

---

<sup>819</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Myrna Mack Chang c. Guatemala*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 25 de noviembre de 2003, en *Serie C, Núm.101*, párr.274. Igualmente, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Carpio Nicolle y otros c. Venezuela*, Fondo reparaciones y costas, sentencia de 22 de noviembre de 2004, en *Serie C: Núm. 117*, párr.128; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Trujillo Oroza c. Bolivia*, sentencia de 27 de febrero de 2002, Reparaciones y Costas, en *Serie C: Núm. 92*, párr.114.

En este mismo sentido, y dentro de la evolución propia del derecho a la verdad, merece mención especial la sentencia de 2005 del caso *Blanco Romero y otros c. Venezuela*, donde la Corte IDH se expresó en los siguientes términos:

“(...) no estima que el derecho a la verdad sea un derecho autónomo consagrado en los artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la Convención, como fuera alegado por los representantes, y por lo tanto no homologa el reconocimiento de responsabilidad del Estado en este punto. El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento”<sup>820</sup>.

La Corte IDH, así, aunque reconoció en 2002 tanto su importancia dentro de la reparación integral a la víctima, como su continuo desarrollo dentro del DIDH (ejemplificado por entonces en el Informe Joinet de 1997), no lo consideraba ahora en 2005 un derecho autónomo propio del sistema interamericano, pese a que dentro del sistema universal de protección, al que ella misma se refirió, sí se contemplaba como tal, como vimos que sucedía en el Conjunto de principios de también 2005 y en la práctica hasta la fecha desarrollada por el Comité DH. El mero hecho de que algunas de las características que el derecho a la verdad encarnaba (como son las ligadas a su vertiente judicial), coincidieran con derechos recogidos dentro de la CADH, debiera de constituir un fuerte aliciente para que la Corte IDH hubiera reconocido este derecho.

La contradicción en este punto se encuentra en que en *Myrna Mack Chang c. Guatemala* en 2003 el derecho a la verdad se consideraba “una expectativa que el Estado debe satisfacer” y, dos años después, en *Blanco Romero y otros c. Venezuela*, la Corte IDH modifica o afina su posición para entender que: “no homologa el reconocimiento de responsabilidad del Estado en este punto”, pero considerara a renglón seguido que: “constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el estado [sic] debe satisfacer”<sup>821</sup>.

---

<sup>820</sup>CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Blanco Romero y otros c. Venezuela*, sentencia de 28 de noviembre de 2005, en *Serie C: Núm. 138*, párr.62.

<sup>821</sup>*Ibid.*, párr.95. La posición argüida en esta sentencia fue posteriormente ratificada en el caso *de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia*, confirmando su posición como “parte del derecho de acceso a la justicia, como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares y como una forma de reparación”. CORTE INTERAMERICANA

La duda que quedaba entonces en el aire sería: en caso de que el Estado no satisficiera esta “expectativa”, ¿podría condenar la Corte IDH al Estado? A tenor de lo que hasta ahora hemos visto, la respuesta sería negativa, pese a la interpretación al respecto que ha venido sosteniendo la propia Comisión IDH, órgano que ya estimó su existencia en 1986 y consolidó su base convencional en 1998.

La Corte IDH, así, desde su sentencia inaugural<sup>822</sup> hasta las decisiones examinadas, no ha realizado una evolución notable en su jurisprudencia al brindarle simple acomodo como una prerrogativa (ahora sí denominada “derecho a la verdad”) a tener en cuenta en el cumplimiento de la obligación de investigar; como el fin al que debería de estar orientada la investigación: el conocimiento de la verdad de los hechos<sup>823</sup>. O, por decirlo de otro modo: toda investigación que se emprenda debe buscar la verdad sobre lo acontecido para, en caso de encontrar responsabilidades penales, juzgar a los responsables<sup>824</sup>.

Posteriormente, en julio de 2006, en la sentencia del asunto *Ximenes Lopes c. Brasil*, la Corte IDH, en cuanto a las medidas de reparación, entendió el conocimiento de la verdad en los siguientes términos:

“Los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho a un recurso efectivo. El conocimiento de la verdad de lo ocurrido en violaciones de derechos humanos como las del presente caso, es un *derecho inalienable y un*

---

DE DERECHOS HUMANOS, caso *de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia*, sentencia de 31 de enero de 2006, en *Serie C: Núm. 140*, párr. 219.

<sup>822</sup> En el caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras* de 1988 estableció: “La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

<sup>823</sup> En una sentencia posterior, de julio de 2007, la Corte IDH afirmó respecto a este particular que: “Este Tribunal ha especificado que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad”, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Zambrano Vélez y otros c. Ecuador*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 4 de julio de 2007, en *Serie C: Núm. 166*, párr. 121. Igualmente, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Escué Zapata c. Colombia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 4 de julio de 2007, en *Serie C: Núm. 165*, párr. 106. La búsqueda de la verdad dentro de la investigación, ha sido también identificada con la interpretación del deber de investigar como una obligación de medio y no de resultado. El Estado ha de poner todos los medios a su alcance para averiguar la verdad de lo ocurrido, sin embargo, el hecho de que en ocasiones, debido a las circunstancias particulares del caso, no sea posible, hace que la verdad no pueda hallarse. Véase, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Baldeón García c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 6 de abril de 2006, en *Serie C: Núm. 147*, párr. 93.

<sup>824</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Baldeón García c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 6 de abril de 2006, en *Serie C: Núm. 147*, párr. 95.

*medio importante de reparación para la víctima* y en su caso, para sus familiares y es una forma de esclarecimiento fundamental para que la sociedad pueda desarrollar mecanismos propios de reproche y prevención de violaciones como esas en el futuro”<sup>825</sup>.

El estado de cosas examinado obliga pues a tratar de realizar un esfuerzo interpretativo adicional. Y es que, a primera vista, nos topamos con apreciaciones contrapuestas sobre el derecho a la verdad, al haber pasado de ser entendido, primero, como derecho no autónomo, posteriormente, a una justa expectativa que el Estado ha de reconocer y, por último, como un derecho inalienable y un medio de reparación para las víctimas.

Una forma de intentar aunar todo ello, de forma que concentre estas tres acepciones, sería entender la verdad como un derecho incluido dentro de un organigrama más amplio; como parte de un conjunto de obligaciones específicas sometidas a una obligación general ya consolidada, como es la del derecho a investigar (siendo este incluido, a su vez, como una de las medidas del deber de garantía). El derecho a la verdad formaría, pues, parte de este conjunto de obligaciones orientadas a que la investigación penal se llegue a realizar con la debida diligencia: recursos efectivos disponibles, investigación imparcial y realizada en un plazo razonable, etc.

El derecho a la verdad (en sus dos vertientes) supondrá aquí el fin al que la investigación haya de estar dirigida. No se considera un derecho autónomo en la CADH puesto que se incorpora en un entramado procesal superior. No obstante, sí es inalienable (siguiendo el calificativo que aparecía en el Principio 2 del Conjunto de principios de 2005) en cuanto que es necesario su respeto tanto para el efectivo cumplimiento de la investigación, como para la misma reparación de la víctima, debido a la ya comentada conexión e interdependencia entre la verdad, la justicia y la reparación: la investigación *judicial* que busque la *verdad* de lo sucedido redundará en una más completa *reparación* para la víctima.

---

<sup>825</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Ximenes Lopes c. Brasil*, sentencia de 4 de julio de 2006, en *Serie C: Núm.149*, párr.245. Sin resaltado en el original.

### **3.2. La posición y concreción de la verdad extrajudicial (o histórica) en la Convención Americana de Derechos Humanos.**

De forma transversal a lo hasta ahora comentado, la Corte IDH se fue refiriendo paralelamente al papel que debía jugar la verdad que es hallada fuera de los foros judiciales, es decir, de la verdad extrajudicial. Concepto interesante en cuanto que es tema central cuando hablamos de interrelación entre verdad, justicia y reparación.

La obligación de emprender una investigación judicial orientada a conocer lo que pasó, al conocimiento de la verdad judicial (que incluirá el tiempo, el modo, el lugar, las razones de los hechos cometidos, así como la identidad de los victimarios y sus responsabilidades penales) está claramente contemplada en la CADH como se desprende de sus artículos 1.1, 8 y 25<sup>826</sup>.

Hasta el momento, cuando hemos venido hablando de verdad dentro del sistema interamericano, y más aún en la forma en la que la entiende la Corte IDH, siempre la hemos conectado con el proceso judicial, con la investigación de los hechos y el conocimiento tanto por parte de las familias, como de la sociedad de lo sucedido pero, en cualquier caso, circunscripto a la toma de medidas judiciales.

Como hemos contemplado y adelantado en el epígrafe anterior, la rama colectiva del derecho a la verdad se concretaba con la publicación de las investigaciones judiciales<sup>827</sup>, lo que podríamos considerarlo como la primera pieza de este siguiente análisis. Averiguar si los Estados cuentan con la obligación de determinar una verdad más global, alejada de la verdad judicial, es una ardua labor pues invita en ocasiones a una interpretación muy amplia del término “verdad” en determinados contextos. Sin embargo, el ámbito interamericano ofrece ejemplos muy precisos en los que se pone de relieve y de forma directa la importancia que para la sociedad tiene el conocimiento de esta verdad más extensa, también llamada verdad histórica.

---

<sup>826</sup> La Corte IDH en el caso *Zambrano Vélez y otros c. Ecuador*, que trataba un hecho de ejecución extrajudicial, estableció que los principios rectores que debían regir en una muerte de estas características debían de ser: “a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados”. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Zambrano Vélez y otros c. Ecuador*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 4 de julio de 2007, en *Serie C: Núm. 166*, párr. 121.

<sup>827</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Fondo, sentencia de 25 de noviembre del 2000, en *Serie C: Núm. 70*, párr. 230.8.



Empezando por el caso *Goiburú y otros c. Paraguay* de 22 de septiembre de 2006, la Corte IDH estimó que:

“(...) dictar una sentencia en la cual se determine la verdad de los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, constituye una forma de contribuir a *la preservación de la memoria histórica*, de reparación para los familiares de las víctimas y, a la vez, de contribuir a evitar que se repitan hechos similares”<sup>828</sup>.

En efecto, tal y como estima la Corte IDH y como ya avanzamos, la verdad judicial colectiva pudiera erigirse como el primer paso a dar en el conocimiento de la verdad histórica (o memoria histórica, en palabras de la Corte IDH), por contener aquellos detalles de un caso particular que pudieran, posteriormente, contribuir a su búsqueda.

Otro de los casos en los que se trata este particular es el caso *Almonacid Arellanos y otros c. Chile* de 26 de septiembre de 2006. En él, tras afirmar que el derecho a la verdad se encontraba subsumido dentro de la obligación del Estado de esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos y las responsabilidades correspondientes, como se desprende de los artículos 8 y 25 de la CADH (siguiendo, por tanto, la interpretación de que no es considerado un derecho autónomo<sup>829</sup>), la Corte IDH puso énfasis en la labor que habían emprendido las diversas comisiones de la verdad chilenas en la recopilación de una verdad colectiva sobre los acontecimientos ocurridos en Chile entre 1973 y 1990<sup>830</sup>.

Teniendo esta argumentación como base respecto a ambas ramas de la verdad (la que emana de un proceso judicial y la que se desprende de un mecanismo extrajudicial), la Corte IDH aclaró lo siguiente:

---

<sup>828</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Goiburú y otros c. Paraguay*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 22 de septiembre de 2006, en *Serie C: Núm. 153*, párr. 53. Sin resaltado en el original. Esta interpretación sobre la utilidad del conocimiento de la verdad judicial como reparación (que aquí, como añadido, también incluye su contribución en la preservación de la memoria histórica), también puede consultarse en: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Baldeón García c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 6 de abril de 2006, en *Serie C: Núm. 147*, párr. 56; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Masacre de Mapiripán c. Colombia*, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 7 de marzo de 2005, en *Serie C: Núm. 122*, párr. 69.

<sup>829</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Almonacid Arellanos y otros c. Chile*, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 26 de septiembre de 2006, en *Serie C Núm. 154*, párr. 148.

<sup>830</sup> *Ibid.*, párr. 149.

“No obstante, sin desconocer lo anterior, la Corte considera pertinente precisar que la ‘verdad histórica’ contenida en los informes de las citadas Comisiones no puede sustituir la obligación del Estado de lograr la verdad a través de los procesos judiciales. En tal sentido, *los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención protegen la verdad en su conjunto*, por lo que Chile tiene el deber de investigar judicialmente los hechos referentes a la muerte del señor Almonacid Arellano, atribuir responsabilidades y sancionar a todos quienes resulten partícipes”<sup>831</sup>.

La Corte IDH en este caso estaba determinando la validez del Decreto Ley Núm. 2191 por el cual se amnistiaba a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile durante el período dictatorial antes señalado. A tal efecto (y como también reiteraría en un caso casi coetáneo al que estamos analizando<sup>832</sup>) consideró que únicamente con la investigación emprendida por un órgano extrajudicial no cubría las exigencias que emanan de los artículos 1.1, 8 y 25 de la CADH pues, como ya hemos establecido *supra*, estos preceptos están orientados a la incoación de una investigación judicial encaminada a la depuración de responsabilidades penales por las violaciones de derechos humanos; fin al que no está encaminada una investigación extrajudicial.

Lo relevante de este caso a los efectos que nos interesan es la referencia a que “los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención protegen a la verdad en su conjunto”. Es decir, la Corte IDH parece entender que a pesar de que, efectivamente, el Estado chileno haya podido cubrir parte de las exigencias que emanan de estos artículos mediante la constitución de comisiones de la verdad, este esfuerzo no es suficiente pues no se concreta en la posterior sanción de los responsables que se hayan podido identificar. Lo que queda en el aire sería la afirmación contraria: si la sola y única obtención de la verdad judicial cubriría los requisitos de estos tres artículos al ampararse en ellos, según la Corte IDH, “la verdad en su conjunto”.

Otro caso que concierne al binomio verdad judicial/extrajudicial será el caso *Zambrano Vélez y otros c. Ecuador* de 4 de julio de 2007. En este caso la Corte IDH,

---

<sup>831</sup> *Ibid.*, párr.150. Sin resaltado en el original. Véase igualmente, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña c. Bolivia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 1 de septiembre de 2010, en *Serie C: Núm. 217*, párr.158; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Radilla Pacheco c. México*, Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 23 de noviembre de 2009, en *Serie C: Núm. 209*, párr.179.

<sup>832</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *La Cantuta c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 29 de noviembre de 2006, en *Serie C: Núm.162*, párr.224.

aunque no despeja el interrogante arriba planteado, se felicitó por la creación de una comisión de la verdad que contribuyera a construir, preservar y determinar las responsabilidades pertinentes<sup>833</sup> y alabó la necesaria complementariedad entre estos dos tipos de verdades. En efecto, como ya se venía reiterando, entendió que la verdad que emanara de una comisión de la verdad no debiera suponer un sustituto de las obligaciones estatales de determinación de las responsabilidades judiciales pertinentes mediante mecanismos jurisdiccionales. No obstante, como argumento para amparar la complementariedad de ambas verdades, la Corte IDH defendió el valor propio de cada una de ellas. El ejemplo con el cual amparó su posición fue ante la posibilidad de que una de ellas (la extrajudicial) pudiera ser aplicada en el foro de la otra (proceso judicial); de tal suerte que el informe final de una comisión de la verdad pueda ser utilizado como prueba de cargo que respalde la responsabilidad de un Estado en la comisión de violaciones de derechos humanos ante un tribunal<sup>834</sup>.

Ya en 2008, esta visión de la búsqueda de la verdad histórica fue de nuevo matizada por la Corte IDH en el caso *de la Masacre de la Rochela c. Colombia*. La Corte IDH, al pronunciarse sobre el modo de concreción del derecho a la verdad colectivo, dispuso:

“La Corte resalta que la satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades”<sup>835</sup>.

De este párrafo entendemos que la Corte IDH da un paso más allá en la formulación del medio y el modo en el que el derecho a la verdad colectivo hubiera de materializarse. Hasta ahora, recordemos, que esta vertiente se concreta gracias a la publicación de los resultados de la investigación judicial. Tras esta sentencia, la Corte IDH no la desliga de la sede judicial, sin embargo, sí que especifica algo más el contenido con el que debe contar esa vertiente colectiva.

---

<sup>833</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Zambrano Vélez y otros c. Ecuador*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 4 de julio de 2007, en *Serie C: Núm. 166*, párr.128.

<sup>834</sup> *Ibid.*

<sup>835</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *de la Masacre de la Rochela c. Colombia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de enero de 2008, en *Serie C: Núm. 163*, párr.195.

Si partimos de una base en la que la Corte IDH ya había reconocido el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido<sup>836</sup>, debemos entender que el sujeto activo de este derecho variará, al pasar del individuo a la sociedad. La concreción de este derecho colectivo, al que ya hemos hecho mención *supra*, mediante la publicación de los resultados de la investigación, únicamente, hará que se conozca lo sucedido en casos individuales no pudiendo llegar a conocer una verdad histórica completa<sup>837</sup>. En efecto, como bien ha dicho José Zalaquett:

“(…) no se puede confiar simplemente que la verdad histórica surja de la suma de investigaciones separadas que lleva a cabo la justicia con el objeto de esclarecer distintos casos; en la práctica, a menos que se establezcan medidas legales para entregar la competencia sobre estas materias a un solo tribunal, que cuente con los debidos recursos para cumplir su tarea, la verdad emergerá (si emerge del todo) de las investigaciones judiciales de un modo penosamente lento e inevitablemente fragmentario”<sup>838</sup>.

Pese a que es sin duda objeto de reconocimiento que la Corte IDH haya afinado más a qué se refiere y cómo ha de obtenerse esa verdad colectiva, hemos de precisar que al afectar los casos de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos a la sociedad como un todo (algo a lo que ya nos referimos en nuestra interpretación sobre la verdad colectiva dentro del análisis de la Declaración DF y la CDF), serán necesarios organismos *ad hoc* que igualmente materialicen la demanda de verdad de la sociedad.

En efecto, la definición dada por la Corte IDH sobre el contenido de la verdad colectiva, como “la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible”, resulta bastante ambigua en cuanto que se pretende fundir dentro del proceso judicial las funciones del juez penal y del historiador; con ello se pretende aglutinar en un único foro la averiguación de ambas formas de verdad<sup>839</sup>. Esto podría acarrear, por

---

<sup>836</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Reparaciones y costas, sentencia de 22 de febrero de 2002, en *Serie C: Núm. 91*, párr.77.

<sup>837</sup> Sobre las carencias que contaría la búsqueda de la verdad histórica en procesos judiciales, véase epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>838</sup> ZALAUQUETT, J., “Derechos humanos y limitaciones políticas en las transiciones democráticas del cono sur”, *Colección Estudios Cieplan*, núm.33, 1991, p.154.

<sup>839</sup> También sería interesante referirse a la poca precisión de la definición de “verdad histórica” dada por la Corte IDH, la cual según establece, “incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta”. La Corte IDH, así, limita el contenido de la verdad histórica a su vertiente judicial, obviando cualquier mención al contenido extrajudicial de la misma. Esta definición choca frontalmente con las propuestas que la doctrina especializada ha realizado acerca de qué puede entenderse por verdad histórica.

un lado, que la verdad histórica no sea tal, pues se estará intentando hallar fuera de su entorno natural e, incluso, podría llegar a limitarse su propio contenido. Por otro lado, se deformaría el curso natural del proceso, pues este no está construido para la búsqueda de la verdad histórica, sino para determinar responsabilidades penales individuales<sup>840</sup>.

En definitiva, la constitución de mecanismos extrajudiciales para concretar el derecho a la verdad colectivo es vista por la Corte IDH como un acto beneficioso para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, apreциamos que esta aún no se refiere a los mismos como el modo mediante el cual los Estados hayan de respetar sus obligaciones para con el derecho a la verdad colectivo. La Corte IDH, hasta ahora, encuentra en el proceso penal (mediante “la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible” y, posteriormente, con la publicación de esa misma sentencia) la única obligación que tendrán los Estados para con la vertiente colectiva; los órganos extrajudiciales aún tendrán carácter simplemente potestativo.

Como ejemplo ineludible de esta afirmación, y como contraste de la práctica que ya en este época estaba desarrollando el Comité DH sobre la implementación de la comisiones extrajudiciales de investigación, en el caso *Anzualdo Castro c. Perú*, de 22 de septiembre de 2009, la Corte IDH alegó lo siguiente tras referirse a la divulgación pública de los resultados de la investigación y a la “determinación procesal de la más

---

Por ejemplo, Pablo Galaín ha definido este concepto como: “la mera sucesión de hechos sin necesidad de determinar ni comprobar una culpabilidad que admita una imputación penal”. GALAÍN PALERMO, P., “Relaciones entre el ‘derecho a la verdad’ y el proceso penal...”, *op.cit.*, p. 264. Para este mismo autor, este intento de conjugar dentro de un proceso penal la búsqueda de la verdad histórica con la judicial es igualmente erróneo, por cuanto para este autor la verdad surgida de un proceso penal no es una verdad científica “sino una representación ideal de un supuesto de hecho. La verdad científica requiere de una contrastación constante de las hipótesis de las que parte (falsedad de las hipótesis), mientras que la *verdad procesal* requiere de un necesario punto de culminación (cosa juzgada)”, p.266. Según José Zalaquett por lo que él llama “verdad global”, entiende: “una conclusión de innegable autoridad moral y que pueda ser ampliamente aceptada, acerca de cómo fueron planeadas y ejecutadas las prácticas represivas en cuestión, y cuáles fueron sus efectos”, ZALAUQUETT, J., “Derechos humanos y limitaciones políticas...”, *op.cit.*, p.154. Para Alicia Oliveira y María José Guembe la verdad global es “el derecho de la comunidad a conocer su pasado, entre otras razones, como forma de resguardarse del futuro. Es el derecho de la sociedad a conocer sus instituciones, sus actores, los hechos acaecidos, para poder saber, desde el conocimiento de sus aciertos o de sus falencias cual es el camino a seguir para consolidar la democracia”, OLIVEIRA, A., GUEMBE, M.J., “La verdad, derecho de la sociedad”, *op.cit.*, p. 549. Para Javier Chinchón la verdad global será la “tendente a determinar por quién y cómo fueron planeadas y ejecutadas las prácticas represivas en cuestión, así como cuáles fueron sus efectos y víctimas”, CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz... op.cit.*, p.263.

<sup>840</sup> Esta interpretación queda demostrada mediante lo ya explicado dentro del epígrafe dedicado a los juicios de la verdad en Argentina; procesos en los que se intentaba, entre otras cuestiones, hallar la verdad global de lo ocurrido. A ellos nos referíamos como “procesos penales adulterados”, pues no seguían las formalidades típicas del proceso penal, al ser su fin y objetivo último no la determinación de las responsabilidades penales, sino la verdad histórica de lo ocurrido. Véase epígrafe 1.20 del capítulo V.

concreta verdad histórica posible”, como obligaciones para que el Estado respete el derecho a la verdad:

“Además, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a conocer la verdad, los Estados *pueden* establecer comisiones de la verdad, las que contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad”<sup>841</sup>.

De todo lo hasta ahora analizado sobre el papel de la verdad histórica en la Corte IDH, y teniendo en cuenta nuestras anteriores reflexiones sobre el contenido y concreción del derecho a la verdad colectivo, pueden surgir dos interpretaciones distintas. La primera supondría el entendimiento de que la Corte IDH para la determinación de este derecho colectivo entiende que se satisface únicamente a través de procesos judiciales cuyos resultados serán posteriormente divulgados; la búsqueda de la verdad extrajudicial, concretada en comisiones de la verdad, quedaría relegada a un acto optativo del Estado que complementa las investigaciones judiciales. La segunda, cuando la Corte IDH menciona el derecho a la verdad de la sociedad incluye en ella el conocimiento de la verdad extrajudicial, la cual es de igual modo obligatoria hallar. A raíz de ello, el Estado tendrá discrecionalidad para utilizar el mecanismo que considere más adecuado para concretarla, por ejemplo, las comisiones de la verdad.

La elección entre una interpretación u otra supondría el reconocimiento o no de la obligación estatal de búsqueda de la verdad histórica dentro de la CADH.

Así pues, según se deriva de la interpretación que la Corte IDH ha realizado hasta el momento de la CADH, el conocimiento por parte de la sociedad de la verdad extrajudicial (o histórica) será entendido como un valor al que los Estados deben aspirar en sus investigaciones judiciales, (a pesar de que no consideremos que sea el foro más adecuado para su consecución) y publicar, posteriormente, sus resultados. Lo anterior podrá ser completado con la constitución de organismos creados para este fin, los cuales tienen, aún, valor facultativo pero no carente de importancia.

---

<sup>841</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Anzualdo Castro c. Perú*, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 22 de septiembre de 2009, en *Serie C: Núm. 202*, párr.119. Sin resaltado en el original. Igualmente, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *de la Masacre de Dos Erres c. Guatemala*, Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de noviembre de 2009, en *Serie C: Núm. 211*, párrs.148-149.

De esta manera las posiciones del Comité DH y la Corte IDH, pese a que compartían un *íter* parecido en sus primeras manifestaciones sobre el derecho a la verdad durante los años ochenta y noventa, y cuáles hubieran de ser las obligaciones de los Estados a este respecto, la aparición en escena de la vertiente colectiva del derecho a la verdad supuso un distanciamiento del modo en el que estas hubieran de ser materializarlas.

## CAPÍTULO VIII

### PRÁCTICA ESTATAL. EL AUMENTO MÁS DESTACADO DE LA ACTUACIÓN ESTATAL EN ESTE ÁMBITO

Como veremos a continuación, el desarrollo promovido durante esta época en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos redundó en un mayor cumplimiento de los Estados de sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la verdad.

A finales de la primera década de los 2000 contamos con ciento veintidós Estados<sup>842</sup> que sufrieron violaciones manifiestas de derechos humanos. Durante este período fueron veintiuno los nuevos Estados que implementaron mecanismos para hallar la verdad de lo ocurrido, bien para afrontar violaciones producidas en estos años o en alguna de las épocas pasadas<sup>843</sup>. Por su parte, en cuanto a la vertiente individual, la cual ya hemos venido afirmando que se encuentra recogida dentro de la obligación que tienen los Estados de incoar investigaciones judiciales dirigidas a averiguar la verdad sobre violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos, fueron treinta y seis fueron los Estados que implementaron mecanismos judiciales para hallar la verdad judicial e individual de lo sucedido<sup>844</sup>.

---

<sup>842</sup> OLSEN, T.D., PAYNE, L.A., REITER, A.G., *Transitional Justice... op.cit.*, pp. 165 – 171.

Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbayán, Bangladesh, Bielorrusia, Birmania, Bolivia, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, España, Etiopía, Filipinas, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda del Norte, Islas Salomón, Israel, Kenia, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Lituania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Paraguay, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, República Bolivariana de Venezuela, República Centroafricana, República Checa/República Eslovaca, República Dominicana, República Democrática del Congo, República de Yemen, Ruanda, Rumanía, Rusia/URSS, Senegal, Serbia y Montenegro/Yugoslavia, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor Oriental, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Zimbabue, Zambia, Zanzíbar.

<sup>843</sup> Argelia, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Eslovaquia, Granada, Islas Salomón, Kenia, Liberia, Marruecos, México, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, República Federal de Yugoslavia, Rumanía, Sierra Leona, Tailandia, Timor Oriental. A parte de estas experiencias también se analizarán las nuevas políticas que se implementaron en: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Ghana, Guatemala, Perú, República Checa y Uruguay.

<sup>844</sup> Bangladesh, Afganistán, Alemania, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Congo, Costa de Marfil, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Estonia, Etiopía, Grecia, Guatemala, Haití, Indonesia, Irán, Iraq, Líbano, Lesoto, Macedonia, Omán, Papúa Nueva Guinea, Perú, Polonia, República Checa, Ruanda, Rusia, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Timor Oriental, Ucrania, Uzbekistán.



Como en apartados anteriores, a continuación analizaremos las políticas de los Estados que implementaron para concretar la verdad extrajudicial.

## 1. ESTUDIO DE CASOS.

### 1.1. Corea del Sur.

Corea del Sur presenta una de las prácticas más variadas y abundantes en lo que a la recuperación de la verdad se refiere. Las numerosas épocas de violación de los derechos humanos que sembraron su territorio<sup>845</sup> supusieron la proliferación, a partir del año 2000, de una serie de organismos de recuperación de la verdad (ya bajo el nombre de comisiones de la verdad, ya bajo otras denominaciones), que emprendieron investigaciones sobre diferentes acontecimientos ocurridos en el pasado.

Una de las características que resaltan entre las numerosas comisiones que allí se instauraron es la variedad de hechos que fueron objeto de investigación, junto con el período transcurrido entre que este fue acometido y la fecha de creación de la comisión. Andrew Wolman incorpora un componente cultural sobre estas iniciativas. Este autor destaca la predilección de la sociedad coreana por medidas más cercanas a la justicia restaurativa (entre las que se encontraría el conocimiento de la verdad) que retributiva. Del mismo modo incide en la honda tradición coreana de producción historiográfica como parte esencial de sus procesos de transición<sup>846</sup>.

La prolífica creación de comisiones de la verdad en Corea del Sur se inauguró con la instauración del Comité Nacional para la Investigación de la Verdad sobre los Eventos de Jeju del 3 de abril. El propósito de creación de este organismo quedó definido en el artículo 1 de la Ley 6117 de 12 de enero del 2000 que contenía el mandato de la comisión. En él se establecía:

---

<sup>845</sup> Corea del Sur sufrió desde 1910 la ocupación japonesa hasta la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. La separación de la península tras la contienda desembocó en la guerra de Corea en 1950. En 1963, el General Park Chung – ee, lideró un golpe de Estado que le mantuvo en el Gobierno hasta su asesinato en 1979. Un año más tarde el país sufrió otro golpe militar por el General Chun Doo – hwan, el cual gobernó *de facto* hasta 1987, cuando fueron convocadas las primeras elecciones presidenciales en Corea. Roh Tae – woo se convirtió en 1987 en el primer presidente electo de Corea del Sur.

<sup>846</sup> WOLMAN, A., “The evolution of truth commissions in South Korea”, *Oxford Transitional Justice Research Working Paper Series*, 2012, pp.29-30. Disponible en: <https://oxfordtransitionaljustice.wordpress.com/tag/working-paper-series/> (Consultado el 15 de junio de 2016).

“The purpose of this Act is to contribute to the promotion of human rights, the development of democracy and the national unity by discovering the truth of the Jeju 4 – 3 Incident and restoring honor of the victims related to this Incident and their bereaved families”<sup>847</sup>.

Este comité, al igual que las comisiones de la verdad más prominentes, estaba centrado en exclusiva en las víctimas, tal y como se desprende del artículo 3:

“The Committee on Discovering the Truth on the Jeju 4 – 3 Incident and the Restoration of Honor of the Victims thereof (...) shall be established under the jurisdiction of the Prime Minister to discover the truth of the Jeju 4 -3 Incident, examine and determine victims and their bereaved families, and deliberate on and decide upon matters concerning the restoration of their honor under this Act”.

Por otro lado, tres días después de la aprobación de la ley que fundaba esta comisión, fue aprobada la Ley 6179 de 15 de enero del 2000 que creaba la Comisión de la Verdad sobre Muertes Sospechosas. Al igual que en el caso anterior, el artículo 1 contenía los motivos de creación de esta comisión: “The purpose of this Act is to promote national unity and democracy through finding the truth on Suspicious Deaths that occurred in relation to the Democratization Movement against past authoritarian regimes”<sup>848</sup>.

Ninguna de las dos comisiones anteriores, como tampoco ninguna de las que se desarrollarán a continuación contaba con competencia judicial alguna. En consecuencia, no podrían citar a declarar a testigos ni sospechosos, lo que dificultaba la averiguación

---

<sup>847</sup> Los incidentes de Jeju quedan descritos en el art. 2 de esta misma ley: “An incident by which the lives of inhabitants were sacrificed in the riot that arose on April 3, 1948 starting from March 1, 1947 and in the process of armed conflicts that took place in Jeju – Do and the suppression thereof until September 21, 1954”. Para una visión más completa sobre los trabajos de esta comisión puede consultarse: KIM, H., “Seeking Truth after 50 Years: The National Committee for Investigation of the Truth about the Jeju 4.3 Events”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol. 3, 2009, núm.3, pp. 406–423.

<sup>848</sup> En el art. 2.1 de esta ley se especificaba el objeto material de la comisión: “The term “Suspicious Death” refers to the death occurred in relation to the Democratization Movement, whose actual cause has yet been revealed, and there is a reasonable ground to believe that the death might have been resulted from the direct or indirect use of power by government authorities in violation of the law”.

de cualquier “muerte sospechosa” sin la cooperación voluntaria de la ciudadanía y las instituciones del Estado<sup>849</sup>.

La llegada a la presidencia de Roh Moo Hyun propició la proliferación de estos mecanismos extrajudiciales que centraron su foco de actuación en investigar sucesos hasta ese momento no tratados<sup>850</sup>; por ejemplo, la época de colonización japonesa. Entre las comisiones que se instituyeron para la investigación de este período desde diferentes perspectivas se encuentran: la Comisión de la Verdad sobre actividades anti nacionales y pro japonesas bajo el gobierno japonés<sup>851</sup>, la Comisión para identificar la verdad sobre la servidumbre bajo la ocupación colonial japonesa<sup>852</sup> y la Comisión para la restitución del honor de los participantes en la revolución campesina Donghak<sup>853</sup>.

Del mismo modo durante este período también se crearon comisiones para la investigación del pasado autoritario: la Comisión para la restitución y la compensación de los detenidos en el campo de reeducación de Samcheong<sup>854</sup>, la Comisión para la identificación de las víctimas de No Geun Ri<sup>855</sup>, la Comisión presidencial sobre muertes sospechosas durante el servicio militar<sup>856</sup>, la Comisión de la Verdad sobre la victimización de pacientes víctimas de la enfermedad de Hansen<sup>857</sup> y la Comité para el Desarrollo a través de la identificación la verdad sobre hechos pasados del Servicio Nacional de Inteligencia<sup>858</sup>.

Esta sucesión de comisiones centradas en hechos puntuales empezaba a conllevar un arduo proceso de actividad legislativa<sup>859</sup> lo que suponía también la coincidencia de

---

<sup>849</sup> CHO, K., “Transitional Justice in Korea: Legally Copy With Past Wrongs After Democratization”, *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, vol. 16, 2007, núm. 3, p.598.

<sup>850</sup> Información sobre estas comisiones que se presentarán a continuación puede consultarse en: WOLMAN, A., “The evolution of truth commissions...”, *op.cit.*, pp.14-18.

<sup>851</sup> Ley 7203, de 22 de marzo de 2004. Esta comisión investigaba la actuación de los ciudadanos coreanos durante la ocupación colonial japonesa.

<sup>852</sup> Ley 7174, de 5 de marzo de 2004.

<sup>853</sup> Ley 7177, de 5 de marzo de 2004. A parte de estas tres también fue creada la Comisión para la confiscación de las propiedades de los pro japoneses creada mediante la Ley 7975 de 22 de septiembre de 2009. Sin embargo, las competencias de esta comisión no iban dirigidas a la búsqueda de la verdad.

<sup>854</sup> Este campo fue construido en 1979 para detener y “reeducar” a aquellos que el régimen consideraba peligrosos para la sociedad. Ley 7121, de 29 de enero de 2004.

<sup>855</sup> En No Geun Ri, localidad sita en Chungcheong del Norte, el Ejército estadounidense cometió numerosos asesinatos durante la Guerra de Corea. Ley 7175, de 5 de marzo de 2004.

<sup>856</sup> Ley 7626 de 19 de julio de 2005.

<sup>857</sup> Durante la época represiva fueron cometidas numerosos abusos de derechos humanos contra los pacientes víctimas de esta enfermedad. Ley 8644, de 17 de octubre de 2007.

<sup>858</sup> Este comité, creado en noviembre de 2004, investigaba el comportamiento del Servicio Nacional de Inteligencia durante la época represiva

<sup>859</sup> DONG – CHOON, K., “Korea’s Truth and Reconciliation Commission: An Overview and Assessment”, *Buffalo Human Rights Law Review*, vol. 19, 2012, p. 99.

mandatos muy parecidos e incluso, a veces, superpuestos<sup>860</sup>. Incluso la investigación de hechos de forma separada podía dar lugar a la falta de una visión conjunta de la historia autoritaria y represiva de Corea del Sur. De hecho, estos fueron los motivos que movieron al gabinete de Roh Moo – hyun a crear un Comité de la Verdad y la Reconciliación para la aclaración de incidentes pasados<sup>861</sup>.

El mandato de este comité incluía la investigación de las épocas que ya habían sido tratadas por las anteriores comisiones individuales como la época colonial japonesa, la Guerra de Corea o los sucesivos regímenes autoritarios. Como otras comisiones de este mismo calado que se erigieron en otras latitudes, no contó con competencias jurisdiccionales y se optó finalmente por un modelo basado en la “verdad y la reconciliación”, en vez de uno de “procesamiento y compensación” parecido a los analizados en Sudáfrica o Chile<sup>862</sup>.

Como última apreciación sobre este comité apuntar que las limitaciones de sus competencias investigadoras y el hecho de que las recomendaciones que realizase no fueran vinculantes fue producto de la composición de la Asamblea Nacional General, repartida entre conservadores y liberales. Mientras que estos últimos apoyaban la creación del comité, aquellos se oponían a su constitución por ser el ramo de la Asamblea que representaba los intereses y opiniones de los victimarios. La ley fue aprobada debido a las restricciones con las que contaba el mandato del comité, tales como: la ausencia de competencia para procesar a los culpables aunque estos fueran identificados y de instrumentos para facilitar la comparecencia de víctimas y perpetradores<sup>863</sup>.

En efecto, la falta de depuración de las instituciones después de un Gobierno autoritario puede dar lugar a una grave carencia de eficiencia en la implementación de las políticas de justicia de transición adecuadas en aras de respetar los derechos de las víctimas<sup>864</sup>.

---

<sup>860</sup> BAIK, T – U., “Fairness in transitional justice initiatives: the case of South Korea”, *Buffalo Human Rights Law Review*, vol. 19, 2012, p.180.

<sup>861</sup> Ley 7542, de 31 de mayo de 2005.

<sup>862</sup> DONG – CHOON, K., “Korea’s Truth and Reconciliation Commission...”, *op.cit.*, pp.101-102.

<sup>863</sup> *Ibid.*, pp. 105-107.

<sup>864</sup> La conexión entre los derechos a la verdad, justicia y reparación con las garantías de no repetición quedó patentada por el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición analizado *infra*. Véase el epígrafe 5.4 del capítulo IX.

## 1.2. Sierra Leona.

Como ya ocurrió en otras experiencias como en El Salvador o Guatemala, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona nació fruto de un acuerdo de paz, concretamente el firmado en Lomé (Togo) el 7 de julio de 1999 entre el Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido, partes enfrentadas en un cruento conflicto interno durante nueve años<sup>865</sup>.

Mientras que el artículo 9 de este acuerdo concedía una amnistía generalizada a los contendientes del conflicto, el artículo 26 disponía:

“A Truth and Reconciliation Commission shall be established to address impunity, break the cycle of violence, provide a forum for both the victims and perpetrators of human rights violations to tell their story, get a clear picture of the past in order to facilitate genuine healing and reconciliation”<sup>866</sup>.

Priscilla Hayner sostiene que la creación de esta comisión de la verdad responde a la búsqueda de un medio para “compensar los efectos de la amnistía”<sup>867</sup>. En este mismo sentido también se ha pronunciado William Schabas, uno de los comisionados que integraron la comisión:

“Given the impunity for perpetrators of human rights violations during the conflict that resulted from the pardon and amnesty clause in the Lomé Agreement, it was felt necessary to ensure that there was some sort of accountability, even if it would not be accompanied by penal sanctions and stigma. For this reason, the parties to the Lomé Agreement agreed to the establishment of a Truth and Reconciliation Commission”<sup>868</sup>.

---

<sup>865</sup> HAYNER, P., *Verdades innombrables...* op.cit., p. 110.

<sup>866</sup> El Consejo de Seguridad dispuso sobre la creación de una comisión de la verdad en Sierra Leona: “acoge con satisfacción las disposiciones del Acuerdo de Paz sobre el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión de Derechos Humanos en Sierra Leona, y exhorta al Gobierno de Sierra Leona y al FRU a que hagan lo necesario para que las Comisiones se establezcan rápidamente con arreglo al calendario previsto en el Acuerdo de Paz”. CONSEJO DE SEGURIDAD, *Resolución 1260 (1999)*, Doc. S/RES/1260, 20 de agosto de 1999.

<sup>867</sup> *Ibid.*, pp.110-111.

<sup>868</sup> SCHABAS, W.A., “Amnesty, the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission and the Special Court for Sierra Leone”, *University of California Davis Journal of International Law & Policy*, vol. 11, 2004, p.150.

La creación de esta comisión se encuadra, por tanto, en el cumplimiento de las obligaciones del Estado tras un período de violaciones de derechos. Como hemos venido reiterando, de la necesaria interdependencia entre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación<sup>869</sup> se desprendía el argumento de que en caso de que uno de ellos (en este caso el derecho a la justicia) no pudiera concretarse, ello no debiera ser óbice para el cumplimiento de las demás, al ser obligaciones distintas aunque conectadas. La falta de una investigación penal no debía traer como consecuencia anexa una violación del derecho a la verdad pues, incluso, y volviendo a lo sostenido por William Schabas, el propio conocimiento público de la verdad sobre lo sucedido durante el conflicto de Sierra Leona será al único tipo de responsabilidad al que se enfrenten los victimarios.

Tras numerosas reuniones con representantes de la sociedad civil y la OACNUDH<sup>870</sup>, la comisión de la verdad fue consolidada dentro de una ley nacional aprobada en el Parlamento el 10 de febrero del 2000 (aunque empezaría a operar en 2002<sup>871</sup>), en la que se establecían los términos de su mandato<sup>872</sup>.

El mandato de la comisión especificaba que su función era:

“(…) to create an impartial historical record of violations and abuses of human rights and international humanitarian law related to the armed conflict in Sierra Leone, from the beginning of the Conflict in 1991 to the signing of the Lomé Peace Agreement; to address impunity, to respond to the needs of the victims, to promote healing and reconciliation and to prevent a repetition of the violations and abuses suffered”.

El papel que jugaba el derecho a la verdad dentro de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona quedó recogido en su informe final, el cual fue presentado al Presidente, Ahmed Tijan Kabbah, el 5 de octubre de 2004.

Para un entendimiento global del valor y sentido de la recuperación de la verdad en Sierra Leona es necesario acompañarla con el trabajo realizado por el Tribunal

---

<sup>869</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo IV.

<sup>870</sup> La participación de la OACNUDH en la comisión de la verdad ha sido criticada desde algunos sectores, debido a que su implicación en la transición de Sierra Leona pudo suponer que la comisión perdiera una independencia que se le suponía ganada según lo contemplado en su mandato. Véase, PILLAY, S., SCANLON, H., *Peace versus Justice?... op.cit.*, p.25.

<sup>871</sup> ALLEN, P.J., LAHAI, S.B.S., O’CONNELL, J., *Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission and Special Court: A citizen’s handbook*, Nueva York, International Center for Transitional Justice – National Forum for Human Rights, 2003, p.2.

<sup>872</sup> The Truth and Reconciliation Commission Act 2000, 9 de febrero del 2000.

Especial de Sierra Leona, constituido a pesar de la amnistía otorgada dentro del Acuerdo de Paz de Lomé, ya que tal y como sostiene el Consejo de Seguridad en la Resolución 1315:

“(…) las Naciones Unidas consideraban que las disposiciones del Acuerdo relativas a la amnistía no se aplicarían a los crímenes internacionales de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves del Derecho internacional humanitario”<sup>873</sup>.

Esta relación es necesaria debido a que la constitución de la comisión, si nos centráramos en exclusiva en lo establecido en los Acuerdos de Paz de Lomé, pudiera parecer una institución que buscara sustituir la labor de los tribunales de justicia. Sin embargo, ambas investigaciones preservarán tanto la verdad individual como la colectiva<sup>874</sup>.

El derecho a la verdad se describía en el informe de la siguiente manera:

“The Commission holds that the right to the truth is inalienable. This right should be upheld both in national and international law. It is the exploration of the wider truth through broad-based participation that permits a nation to examine itself honestly and to take effective measures to prevent a repetition of the past”<sup>875</sup>.

---

<sup>873</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Resolución 1315 (2000)*, Doc. S/RES/1315, 14 de agosto del 2000. La relación entre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona con el Tribunal Especial para Sierra Leona puede consultarse en: ALLEN, P.J., LAHAI, S.B.S., O’CONNELL, J., *Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission... op.cit.*; SCHABAS, W.A., “Amnesty, the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission...”, *op.cit.*, pp. 145-169; SCHABAS, W.A., “A synergistic relationship: the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission and the Special Court for Sierra Leone”, *Criminal Law Forum* vol. 15, 2004, núm. 1, pp. 3-54; TEJAN-COLE, A., “The Complementary and Conflicting Relationship between the Special Court for Sierra Leone and the Truth and Reconciliation Commission”, *Yale Human Rights and Development Law Journal*, vol. 6, 2003, pp. 139-160; WIERDA, M., HAYNER, P., VAN ZYL, P., “Exploring the Relationship between the Special Court and the Truth and Reconciliation Commission in Sierra Leone”, *International Center for Transitional Justice*, 2002. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-SierraLeone-Court-TRC-2002-English.pdf> (Consultado el 15 de junio de 2016).

<sup>874</sup> En el informe final se establecía que: “The Commission worked alongside an international criminal tribunal, the Special Court for Sierra Leone. Most truth commissions have operated as an alternative to criminal prosecution. Given the pardon and amnesty provisions of the Lomé Peace Agreement, the Commission was proposed as an alternative to criminal justice in order to establish accountability for the atrocities that had been committed during the conflict. The Special Court was created after the abandonment of the amnesty provisions (or certain of them) following breaches of the Lomé Peace Agreement by elements within the RUF”. TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, SIERRA LEONE, *Witness to truth: report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. Vol.1*, Graphic Packaging Ltd, 2004, p.15.

<sup>875</sup> *Ibid.*

La comisión, como continuación al desarrollo de su mandato, identificó el nexo de unión entre el derecho a la verdad y la creación de este mismo organismo en lo contemplado respecto a la lucha contra la impunidad (artículo 6.1), con base en los trabajos de Louis Joinet y Diane Orentlicher<sup>876</sup>:

“The principles developed by Louis Joinet are grouped into three categories: the victims' right to know; the victims' right to justice; and the victims' right to reparations. The Commission can make significant contributions in all three of these areas. According to Joinet, the right to know comprises what he calls ‘*the inalienable right to the truth*’. He says: ‘*Every people has the inalienable right to know the truth about past events and about the circumstances and reasons which led, through the consistent pattern of gross violations of human rights, to the perpetration of aberrant crimes. Full and effective exercise of the right to the truth is essential to avoid any recurrence of such acts in the future.*’. This ‘right to the truth’ includes a duty to remember: “*A people's knowledge of the history of their oppression is part of their heritage and, as such, shall be preserved by appropriate measures in fulfilment of the State's duty to remember. Such measures shall be aimed at preserving the collective memory from extinction and, in particular, at guarding against the development of revisionist and negationist arguments.*’ Joinet also specifically recognises the right of victims to know, their families and dear ones to know the circumstances of violations and, if death or disappearance is the result, the fate of the victim”<sup>877</sup>.

Por último, la comisión establecía de forma directa:

“In the context of the right to the truth, Joinet recognises the special role of ‘extrajudicial commissions of inquiry’, of which truth and reconciliation commissions are certainly the most significant manifestations. Here, then, *the mandate and functions of the Commission fits squarely within the perspective outlined by Louis Joinet for combating impunity.* It is with this component of the

---

<sup>876</sup> Véase el Informe Joinet en el epígrafe 2 del capítulo III y el Conjunto de principios dentro del epígrafe 2.1 del capítulo VI.

<sup>877</sup> TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, SIERRA LEONE, *Witness to truth...op.cit.*, p.44.



struggle against impunity that truth and reconciliation commissions excel. Indeed, they can generally respond to the needs of truth-seeking better than the alternatives, such as criminal prosecutions”<sup>878</sup>.

Igualmente, la idea que llevamos largo tiempo sosteniendo sobre la complementariedad entre la verdad averiguada en el marco de una comisión de la verdad y la hallada en sede judicial (relacionado con el binomio tribunal especial – comisión de la verdad en el contexto sierraleonés<sup>879</sup>), fue también expuesta a lo largo del informe:

“Truth commissions have largely come about in recent years to give effect to what Joinet called ‘the inalienable right to truth’. There is a belief that truth can be established through mechanisms other than criminal trials which may, in the past, have been considered to be the ideal way to get at the truth. Where amnesty has been granted – this is the case of Sierra Leone, or where effective prosecution is difficult or impossible because of resource issues, or because perpetrators cannot be brought to trial, truth commissions offer a valuable alternative. But trials have their own shortcomings in establishing the truth, and the flexibility of truth commissions may in fact better suit them to this task of establishing and enforcing the ‘inalienable right to truth.

The Special Court is also in search of the truth, but the Court’s truth will necessarily be limited to the criminal responsibility of the accused. Moreover, the Court will only draw a picture of the criminal responsibility of those that ‘bear the greatest responsibility’. The Special Court and the TRC have essentially different, although complementary, roles to play. *Whereas the TRC cannot replace judicial investigations into the criminal responsibility of those that bear the greatest responsibility, the Special Court is not as well-suited for a broader inquiry into the causes, nature and circumstances of the conflict*”<sup>880</sup>.

---

<sup>878</sup> *Ibid.* Sin resaltado en el original.

<sup>879</sup> A este respecto es importante apuntar que esta relación igualitaria entre la comisión de la verdad y el tribunal especial se traducía en la práctica en la ausencia de normas concretas o determinadas sobre el funcionamiento conjunto de estas dos instituciones, es decir, no existía un criterio por el cual el trabajo desarrollado por una, era prioritario al desarrollado por la otra. Ambas convivían en un estadio de igualdad absoluta. Véase, DOUGHERTY, B.K., “Searching for Answers: Sierra Leone’s Truth & Reconciliation Commission”, *African Studies Quarterly*, vol. 8, 2004, núm. 1, p.44.

<sup>880</sup> TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, SIERRA LEONE, *Witness to truth...op.cit.*, p. 79. Sin resaltado en el original.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona, analizado todo lo anterior, resaltaba el valor de su labor y se erigía la única institución capaz de poder realizar una investigación que pudiera destapar las causas, naturaleza y consecuencias del conflicto.

### **1.3. Costa de Marfil.**

El inicio de las hostilidades en este país comenzó en 1999 cuando el General Robert Gueï participó en un golpe de Estado que le llevó a la presidencia de Costa de Marfil. Una de sus primeras medidas fue un cambio de la Constitución mediante el cual solo los nacidos en territorio nacional podían acceder a la presidencia de la nación. Con esta acción no solo eliminaba la posible oposición de uno de sus más inmediatos adversarios, sino que propició el inicio de tensiones en algunos sectores del norte del país que contaban con numerosa inmigración procedente de Burkina Faso. Las elecciones del año 2000 dieron ganador a Laurent Gbagbo, sin embargo, Robert Gueï se declaró así mismo vencedor, lo que desencadenó un espiral de violencia en la ciudad de Abidjan: ciento setenta y un ciudadanos murieron entre el 24 y el 26 de octubre del 2000.

Con Laurent Gbagbo como Presidente electo de Costa de Marfil, fue creado un Comité de Mediación para la Reconciliación Nacional mediante decreto de 20 de noviembre del 2000, en el cual se investigaría la violencia ocurrida en el período post electoral. Este comité, posteriormente, creó un Foro para la Reconciliación Nacional que realizó trabajos entre el 9 de octubre y el 18 de diciembre de 2001. No fue publicado ningún informe final<sup>881</sup>.

---

<sup>881</sup> Véanse, UNITED STATE INSTITUTE OF PEACE, *Commission of Inquiry: Côte d'Ivoire*, Disponible en: <http://www.usip.org/publications/commission-inquiry-cote-divoire> (Consultado el 15 de junio de 2016); MANGA FOMBAD, C., "Transitional Justice in Africa...", *op.cit.*, pp. 5-6.

#### 1.4. Uruguay.

Ya vimos en la Parte I<sup>882</sup> que en Uruguay ya se dieron los primeros pasos pertinentes a la búsqueda de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar. Pese a ello, también apuntamos que estos intentos no fueron muy fructíferos ni dieron los resultados esperados.

Como continuación al análisis de la experiencia uruguaya, recordemos que el artículo 4 de la Ley de caducidad establecía que: “El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos”. Será en este contexto en el que se integre la Comisión para la Paz, creada por el Presidente, Jorge Battle, mediante la Resolución de la Presidencia de la República 858/2000 de 9 de agosto del 2000.

El preámbulo de esta comisión establecía que la creación de la Comisión para la Paz (COMIPAZ) constituía una “obligación ética del Estado y una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica”. La tarea encomendada a la mencionada comisión era la de “recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen de facto”. Empero, si atendemos a los avances jurídico internacionales que se fueron dando dentro de la búsqueda de las personas desaparecidas a los que nos hemos venido refiriendo durante este trabajo<sup>883</sup> (y al propio artículo 4 de la Ley de caducidad) la creación de esta comisión, cuyo informe final fue “oficializado” por el Estado<sup>884</sup>, no puede responder simplemente a una obligación “ética”, sino también jurídica<sup>885</sup>: el respeto al derecho a las víctimas a conocer la verdad sobre lo ocurrido a sus seres queridos desaparecidos.

Del mismo modo, el mandato de esta comisión ha sido duramente criticado debido a lo restringido de su competencia material<sup>886</sup>, ya que si el propósito fundamental del Presidente era, según lo afirmado en el Decreto 858/2000, “sellar definitivamente la paz entre los uruguayos”, la constitución de una comisión de

---

<sup>882</sup> Véase los primeros casos presentados en los años ochenta ante el Comité DH, varios de ellos presentados ante la inacción del Estado uruguayo ante ciertos hechos de desapariciones forzadas; epígrafe 3.2 del capítulo I.

<sup>883</sup> Véase, los primeros avances del Comité DH (epígrafe 3.2 del capítulo I), los de la Corte IDH (epígrafe 4.3 del capítulo I) o la Declaración DF (epígrafe 1 del capítulo III).

<sup>884</sup> Decreto presidencial 448/2003, 16 de abril 2003.

<sup>885</sup> En este mismo sentido también se ha pronunciado ERRANDONEA, J., “Justicia transicional en Uruguay”, *op.cit.*, pp. 43-44.

<sup>886</sup> De hecho la COMIPAZ ha sido descrita como: “pasiva, de recolección y clasificación más que de búsqueda activa”. Véase, GARRETÓN KREFT, F., GONZÁLEZ LE SAUX, M., LAUZÁN, S., *Políticas públicas de verdad y memoria... op.cit.*, p.8.

investigación centrada únicamente en las desapariciones forzadas, dejaría sin resolver numerosos extremos acerca del pasado represivo en Uruguay, pues se impediría de esa manera que las víctimas conocieran plenamente la verdad sobre lo ocurrido<sup>887</sup>.

A parte de la creación de la COMIPAZ, durante esta década también se dieron más avances en la práctica uruguaya en derecho a la verdad. En concreto, la Ley 18435, de 12 de diciembre de 2008, creaba el Archivo Nacional de la Memoria, cuya misión era “reunir y organizar las copias de los documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos”, el cual tenía como objetivo, según su artículo 2:

“(…) promover la importancia de la vigencia de los derechos humanos y de la democracia mediante el pleno ejercicio del derecho individual y colectivo a la verdad, a la memoria y al acceso a la información pública sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, ocurridas en el período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 1º de marzo de 1985”.

Pese a la falta de varios acontecimientos por aclarar (por ejemplo, la COMIPAZ no contaba con potestad para identificar a los culpables o el paradero de los desaparecidos<sup>888</sup>), esta serie de iniciativas suponen avances notables respecto al conocimiento íntegro de la verdad.

---

<sup>887</sup> ERRANDONEA, J., “Justicia transicional en Uruguay”, *op.cit.*, p. 41, 46; MÉNDEZ, J., “The Human Right to Truth...”, *op.cit.*, p. 140.

<sup>888</sup> El Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (el cual será analizado en el epígrafe 4 del capítulo IX) en su visita a Uruguay en 2014, acerca del trabajo realizado por la COMIPAZ, estableció: “El informe final de la COMIPAZ, publicado en 2003, indica que la Comisión formó “convicción plena” acerca de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura. Sin embargo, solo reporta 26 casos de desaparición forzada de personas, cuando por ejemplo la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos habría transmitido información sobre 222 casos. En un solo caso logró determinar la ubicación de los restos de una persona desaparecida. Muchos interlocutores consideraron esos resultados insuficientes y el hecho de que algunas de las conclusiones a las cuales llegó el informe luego resultaran ser falsas apoya esta evaluación negativa. A pesar de estas limitaciones, el informe final de la COMIPAZ fue asumido por el poder ejecutivo como la versión oficial sobre la situación de los detenidos-desaparecidos. Mientras reconoce estas grandes limitaciones, el Relator Especial destaca el efecto catalizador del trabajo de la COMIPAZ, el cual potenció la visibilidad y legitimidad conferida al tema de los desaparecidos”. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Pablo de Greiff, Adición, Misión a Uruguay, Doc. A/HRC/27/56/Add.2, 28 de agosto de 2014, párr. 31.

## 1.5. México.

Como ya hemos analizado respecto a la práctica de otros Estados, en respuesta al requerimiento de la OACNUDH para la confección de su informe 21/7 sobre el derecho a la verdad y las políticas de acceso a archivos, México alegó su Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 11 de junio de 2002 como práctica estatal al respecto<sup>889</sup>. En lo concreto, el artículo 14 de esta ley alude a que: “[n]o podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.

La interpretación de este artículo es sumamente interesante pues especifica la necesidad de que la información relativa a graves violaciones de derechos humanos no pueda ser alejada del conocimiento público, debido a la importancia de su contenido. En este sentido se ha pronunciado respecto a esta ley Antonio González Quintana:

“En vista de su potencial para mejorar el acceso de los ciudadanos a la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos, se recomienda que los Estados que aún no lo hayan hecho promulguen leyes que permitan a los ciudadanos acceder a los documentos estatales, incluidos los que revelen información sobre las violaciones de los derechos humanos. Cabe citar como ejemplo la Ley federal de acceso a la información de México, promulgada en 2002, que prohíbe retener documentos que describan ‘graves violaciones’ de los derechos humanos”<sup>890</sup>.

México, de esta manera, se sumaba a la práctica de otros Estados en la permisión de que los ciudadanos tuvieran libre acceso a archivos contenedores de información acerca de violaciones manifiestas de derechos humanos como forma de respetar su derecho a la verdad. No obstante, los avances más remarcables de México en materia de derecho a la verdad serán analizados en la siguiente parte de este trabajo.

---

<sup>889</sup> Tal contestación puede consultarse en: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Right to the truth – National Archives on Human Right”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/en/issues/truth/pages/truthIndex.aspx> (Consultado el 15 de junio de 2016).

<sup>890</sup> GONZÁLEZ QUINTANA, A., *Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos... op.cit.*, p.52.

## 1.6. Eslovaquia.

Siguiendo el ejemplo de otros Estados post comunistas que aprobaron legislación para la desclasificación de documentos protegidos durante las épocas represivas, el Estado de Eslovaquia, consciente de que “those who do not know their past, are condemned to repeat it, and that no unlawful act on behalf of the State against its citizens may be protected by secrecy or forgotten”<sup>891</sup>, adoptó la denominada *Nation's Memory Act*.

Esta ley creaba el Instituto Nacional de la Memoria y establecía mecanismos de preservación, conservación y publicación de documentos dedicados a las épocas del Tercer Reich y la Unión Soviética (artículos 1 a, b).

Las competencias de este instituto eran muy asimilables a las propias de una comisión de la verdad, aunque su funcionamiento era muy distinto. Entre ellas se encontraban:

“(...) to perform complete and unbiased evaluation of the period of oppression, mainly analyze the causes and manner of loss of freedom, symptoms of the Fascist and Communist Regimes and of their ideologies, participation of domestic and foreign persons in them, b) to disclose to persecuted persons documents regarding their persecution, c) to publish data on executors of the persecution and their activity, d) to make motions for criminal prosecution of crimes and criminal offences under § 1; in cooperation with the Attorney General's Office of the Slovak Republic, e) to provide necessary information to the public authorities, f) to collect systematically, and professionally document all types of information, evidence and documents relating to the period of the oppression. (...). h) to provide the public with the results of its activity, in particular to publish and declassify information and other documents on the period of the oppression 1939 - 1989 and on the acts and destiny of individuals, publish and disseminate publications, organize exhibitions, seminars, professional conferences, discussion forums”<sup>892</sup>.

---

<sup>891</sup> Ley 553/2002, 19 de agosto de 2002.

<sup>892</sup> Artículo 8.

Las funciones, por tanto, de esta institución estaban dirigidas a que tanto las víctimas individuales como la sociedad pudieran conocer la verdad de lo ocurrido a través del trabajo que esta realiza.

### **1.7. Panamá.**

A finales de 1999 el descubrimiento de cuatro cadáveres en una antigua base militar a las afueras de la Ciudad de Panamá, pertenecientes a miembros de la oposición durante la época dictatorial, abrieron el dilema sobre la gestión del pasado en Panamá<sup>893</sup>; país que había estado controlado durante veinte años por sucesivos Gobiernos dictatoriales.

La comisión de la verdad fue creada mediante decreto de la Presidente electa, Mireya Moscoso, de 18 de enero de 2001<sup>894</sup>. Esta comisión respondía a los requerimientos de toda una ciudadanía que pedía conocer la verdad sobre las violaciones cometidas en el pasado; causa del nacimiento de la mayor parte de las comisiones de la verdad. Así mismo se recogía en el considerando del decreto fundacional de la comisión:

“Que a raíz del descubrimiento de fosas clandestinas en nuestro país, la conciencia moral de la Nación exige el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar que durante más de dos décadas gobernó, para que el conocimiento de la verdad facilite a los familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como corresponde, contribuya a que no se repitan hechos tan dolorosos y se fortalezca la democracia”.

De esta forma era tarea de la comisión:

“(...) contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos fundamentales a la vida, incluyendo desapariciones, cometidas durante el régimen militar que gobernó a la República de Panamá a partir de 1968,

---

<sup>893</sup> HAYNER, P., *Unspeakable truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, Nueva York, Routledge, 2ª ed., 2011, p.251; UNITED STATE INSTITUTE OF PEACE, *Truth Commission: Panama*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/truth-commission-panama-truth-commission-comisi-n-de-la-verdad-de-panam> (Consultado el 15 de junio de 2016).

<sup>894</sup> Decreto ejecutivo núm.2.

sin perjuicio de los procedimientos judiciales a qué puedan dar lugar tales hechos”.

Como en otras comisiones que se han venido analizando, la labor de este mecanismo de búsqueda de la verdad estuvo separada de la que podrían desempeñar los tribunales de justicia, aunque sí era admisible la colaboración entre ambas instituciones:

“En ningún caso la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia, ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento. Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delitos, los pondrá, sin más trámites, a disposición del Procurador General de la Nación”.

El papel que jugó el derecho a la verdad en la creación de la Comisión de la Verdad de Panamá se puso en evidencia en su informe final. Los primeros párrafos del informe iban dirigidos a la necesidad de conocimiento del pasado por parte de las víctimas y a la expansión de esta necesidad por gran parte de la geografía latinoamericana:

“Como otros países latinoamericanos, y aun en otros distantes de nuestra periferia continental, la creación de la Comisión de la Verdad en Panamá obedeció a un mandato expreso que descansa en la necesidad de conocer la verdad. El derecho a saber, que cada vez se incrementa más internacionalmente, tocó las puertas de la sociedad panameña para invocar un tema que no podía ser postergado por más tiempo: el de los asesinados, desaparecidos y torturados durante el Régimen Militar”<sup>895</sup>.

El párrafo anterior recoge perfectamente el camino seguido por Panamá a través del cual, una vez acaecidas las violaciones de derechos humanos, el Estado, atendiendo a sus obligaciones internacionales recordadas por la sociedad en la mayoría de las

---

<sup>895</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD DE PANAMÁ, *La verdad os hará libres*, Ciudad de Panamá, 2002, p.12.



ocasiones, decide crear mecanismos cuyo objetivo sea precisamente la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido.

Como base jurídica para este derecho, esta comisión se refirió al contenido del Informe Joinet. En aplicación de lo allí referido la comisión estableció: “[e]ste principio, expuesto en documento de Naciones Unidas, no limita el ‘derecho a saber’ a los familiares de las víctimas sino, que, además, lo hace extensivo a la sociedad”<sup>896</sup>. Igualmente se afirmó la existencia de una deuda de la nación para con el recuerdo de las víctimas y la obligación de Panamá de encontrar los restos de las víctimas de desaparición forzada<sup>897</sup>.

La obligación de que la sociedad conociera su propia historia se erigía de este modo en un deber para el Estado de inexcusable cumplimiento, separado de la también obligación paralela de llevar a los culpables ante las instancias judiciales.

### **1.8. Bosnia y Herzegovina.**

El Acuerdo de Paz de Dayton, firmado por los Estados de Croacia, Yugoslavia y Bosnia y Herzegovina el 21 de noviembre de 1995, ponía fin a la Guerra de Bosnia<sup>898</sup>. Dentro de este se encontraba un anexo el cual incluía un acuerdo entre la República de Bosnia y Herzegovina, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República de Srpska para la creación de una Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, que tuviera como cometido “consider, as subsequently described: (a) alleged or apparent violations of human rights as provided in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Protocols thereto”<sup>899</sup>.

Entre los casos presentados ante esta cámara destacan tres que podrían ser integrados como parte de práctica estatal respecto al derecho a la verdad, algo nada sospechoso debido a que, como acabamos de exponer, este tribunal tenía como cometido la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades

---

<sup>896</sup> *Ibid.*, pp.23-24. Dentro del Informe Joinet ya vimos que la verdad a la que tiene la sociedad derecho, afianzado en su Principio 1, será la que identificamos como verdad extrajudicial o histórica. A ella se llegaría, según este informe, a través de mecanismos extrajudiciales como las comisiones extrajudiciales de investigación. Véase el epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>897</sup> *Ibid.*

<sup>898</sup> ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, *General framework agreement for peace in Bosnia and Herzegovina*, Doc. A/50/790, 30 de noviembre de 1995.

<sup>899</sup> *Ibid.*, Anexo VI, art.2.2.a).

Fundamentales (CEDH)<sup>900</sup> y sus protocolos adicionales a los casos que se le presentaran ante su jurisdicción; tratado que está siendo analizado en este trabajo.

El primero de ellos en orden temporal, el caso *Avdo and Esma Palić c. The Republika Srpska* de 9 de diciembre del 2000, versaba sobre la desaparición del Coronel Palić a manos de las fuerzas serbio bosnias en julio de 1995. Como ya ocurriera dentro de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acerca de los casos de desaparición forzada<sup>901</sup>, la Cámara de Derechos Humanos condenó a la República de Srpska por haber violado los artículos 2, 3, 5 y 8 del CEDH.

En concreto sobre el artículo 3, este tribunal se refirió a una parte de la práctica de los órganos de protección de derechos humanos aquí estudiada respecto a los casos de desaparición forzada y la angustia que ello produce a los familiares de los desaparecidos<sup>902</sup>. Así estableció que:

“The Chamber notes that Ms. Palić has suffered uncertainty, doubt and apprehension for more than five years. Although she has filed an application with the competent commission of the respondent Party requesting the investigation of her husband’s fate she has been left with the anguish of knowing that her husband was detained on 27 July 1995 and that there is a complete absence of official information as to his fate after the Agreement came into force. No steps have been taken by the respondent Party to remedy these matters.

Having regard to the circumstances described above as well as to the fact that Ms. Palić is the wife of a victim of serious human rights violations and herself the

---

<sup>900</sup> Adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950, entrando en vigor en 1953. A diciembre de 2014 ha sido ratificado por 47 Estados Parte. Ratificado por España el 24 e noviembre de 1977. BOE núm. 243 de 10 de octubre de 1979, pp.23564 a 23570.

<sup>901</sup> Sobre la práctica del TEDH puede consultarse el capítulo XI.

<sup>902</sup> El tribunal dispuso: “the Chamber recalls the practice of the UN Human Rights Committee in the case of Elena Quinteros v. Uruguay where inhuman treatment was found in respect to the applicant whose daughter had disappeared. The UN Human Rights Committee stated that it understands the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts. It found that the mother of the victim had the right to know what has happened to her daughter. The Committee then concluded that, in these respects, the mother too was a victim of the violation of Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment) suffered by her daughter (Elena Quinteros v. Uruguay, Communication No. 107/1981 of 17 September 1981, Reports of the Human Rights Committee (1983), paragraph 14). However, the Chamber also recalls that, according to the European Court of Human Rights, the essence of a violation of Article 3 in relation to a family member does not so much lie in the fact of the disappearance of the family member but rather concerns the authorities’ reactions and attitudes to the situation (Eur. Court HR, Tas v. Turkey, judgment of 14 November 2000, paragraph 79)”. CÁMARA DE DERECHOS HUMANOS DE BOSNIA Y HERZEGOVINA, caso *Avdo and Esma Palić c. The Republika Srpska*, CH/99/3196, 9 de diciembre del 2000, párrs. 77 – 78.

victim of the authorities' complacency in the face of her anguish and distress, the Chamber finds that the respondent Party is in breach of Article 3 in respect of Ms. Palić"<sup>903</sup>.

En el segundo caso al que aludiremos, *Dordo Unkovic c. The Federation of Bosnia and Herzegovina* de 6 de mayo de 2002, el demandante desconocía la suerte de su hija, su yerno y sus dos nietos desde el verano de 1992, una vez iniciada la guerra. Ninguna autoridad institucional le brindó nunca información oficial acerca de los rumores que aparecían en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que sus familiares hubieran fallecido.

En la demanda presentada ante el tribunal, el demandante alegaba sobre los derechos humanos que le habían sido violados por el Estado:

"The applicant states that he cannot indicate which of his human rights have been violated: 'he is only seeking justice'. His main complaint in his application (which was filed on 10 May 1999) appears to be that the authorities failed to pursue the truth about the death of his daughter and her family in a timely manner.

(...)

In his submissions, the applicant confirms that he does not know to which provisions of the Convention his complaints pertain. He requests the assistance of the Chamber in 'seeking the truth'"<sup>904</sup>.

Debido a ello, el tribunal condenó al Estado por una violación del artículo 3 del CEDH por:

"[T]he apprehension, distress, and sorrow caused to the applicant as a result of the respondent Party failing to investigate and pursue the fate of the Golubovic family in a timely manner constitutes inhuman and degrading treatment of the applicant in violation of his right protected by Article 3 of the Convention"<sup>905</sup>.

---

<sup>903</sup> *Ibid.*, párrs. 79 - 80.

<sup>904</sup> CÁMARA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Dordo Unkovic c. The Federation of Bosnia and Herzegovina*, 6 de mayo de 2002, CH/99/2150, párr. 68 y 72.

<sup>905</sup> *Ibid.*, párr. 109.3.

Por ultimo, el caso *Srebrenica c. The Republika Srpska* de 7 de marzo de 2003, versaba sobre la masacre llevada a cabo por el Ejército de la República de Srpska en la región de Srebrenica en julio de 1995, donde murieron unas ocho mil personas.

La Cámara de Derechos Humanos recurrió a la jurisprudencia del TEDH acerca de casos de desaparición forzosa<sup>906</sup> y a la suya propia, basada en los dos antecedentes analizados<sup>907</sup> para evaluar la violación del artículo 3, el cual fue renombrado como: “Prohibition of Inhuman or Degrading Treatment *i.e.*, Right to Know the Truth”<sup>908</sup>; lo que confirma la relación de los casos anteriores con el derecho de las víctimas a saber la verdad.

El análisis de este caso seguía de este modo los precedentes ya estudiados, apuntando al sufrimiento padecido por los demandantes (la mayoría familiares supervivientes de la masacre de Srebrenica) ante el desconocimiento del paradero de sus seres queridos<sup>909</sup> y a la falta de acción de las autoridades competentes<sup>910</sup>. De este modo, se concluyó que:

---

<sup>906</sup> En concreto acerca del contencioso *Chipre c. Turquía*: “One of the leading cases applying Article 3 of the European Convention to protect the family members of missing persons from inhuman treatment as a result of the failure of the authorities to provide information on the fate and whereabouts of their missing loved ones is, once again, *Cyprus v. Turkey* (...). In the context of the Srebrenica cases, this case is particularly instructive. The case of *Cyprus v. Turkey* arose out of Turkish military operations in northern Cyprus in July and August 1974 and Turkey’s continued occupation of that area. Nearly 1500 Greek-Cypriots remain missing twenty years after the cessation of hostilities. These missing persons were last seen alive in Turkish custody, but Turkey has never accounted for their whereabouts or fate. Among numerous complaints at issue in the case, the Court considered alleged violations of the rights of Greek-Cypriot missing persons and their relatives. The Court expressly limited its inquiry to ascertaining the extent, if any, to which the authorities of the respondent State have clarified the fate or whereabouts of the missing persons. (*Cyprus v. Turkey* at paragraph 121)”. CÁMARA DE DERECHOS HUMANOS, caso “*The Srebrenica Cases*”, CH/01/8365, CH/01/8397, CH/01/8398, CH/01/8399, CH/01/8410, CH/01/8411, CH/01/8412, CH/01/8414, CH/01/8428, CH/01/8484, CH/01/8487, CH/01/8521, CH/02/8842, CH/02/8927, CH/02/9357, CH/02/9375, CH/02/9385, CH/02/9390, CH/02/9403, CH/02/9427, CH/02/9431, CH/02/9433, CH/02/9470, CH/02/9484, CH/02/9485, CH/02/9486, CH/02/9487, CH/02/9505, CH/02/9506, CH/02/9507, CH/02/9508, CH/02/9513, CH/02/9514, CH/02/9515, CH/02/9528, CH/02/9529, CH/02/9530, CH/02/9532, CH/02/9542, CH/02/9546, CH/02/9547, CH/02/9548, CH/02/9549, CH/02/9550, CH/02/9552, CH/02/9553, CH/02/9594, CH/02/9595, and CH/02/9596, 7 de marzo de 2003, párr.183.

<sup>907</sup> *Ibid.*, párr.185 – 186.

<sup>908</sup> *Ibid.*, p.40.

<sup>909</sup> *Ibid.*, párr.187.

<sup>910</sup> La Cámara de Derechos Humanos relató toda una serie de falencias en la actuación de las autoridades de la República de Srpska: “Not investigated the facts concerning the credible claim of mass killings of Bosniaks from Srebrenica in July 1995; Not undertaken any action to determine or to disclose the periods and places of detention of Bosniak prisoners captured from Srebrenica in July 1995; Not interviewed any of the participating officers, soldiers, or members of the RS Army to ascertain what happened and to publicly disclose this information; Not contacted the survivors, families of the missing persons, or other witnesses to take their statements; Not disclosed the locations of the mass gravesites (both primary and secondary); Not undertaken any investigation to locate unknown gravesites; Not undertaken any action to assist the actions of others (*e.g.*, the ICMP, the ICTY, the State Commission, the Federal Commission) in locating gravesites and identifying exhumed mortal remains; Not provided any financial support to any of the exhumation projects, identification projects, or memorial projects, such as the Srebrenica-Poto~ari

“(…) the applicants and other survivors of the Srebrenica events of July 1995 have waited for over seven years for clarification of the fate and whereabouts of their missing loved ones by the competent authorities. As no meaningful information has been forthcoming, the reaction of the authorities of the Republika Srpska can only be described as complacency, or indifference, which aggravates an already tragic situation

(…)

Taking all of the applicable factors into account, both with respect to the applicants and the respondent Party, the Chamber concludes that the respondent Party has violated the rights of the applicants to be free from ‘inhuman and degrading treatment’, as guaranteed by Article 3 of the European Convention, in that it has failed to inform the applicants about the truth of the fate and whereabouts of their missing loved ones”<sup>911</sup>.

De este modo, la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina vinculó la tortura (conectada con el desconocimiento del paradero de la víctima) con la inacción del Estado ante la desaparición de un ser querido. La actuación del Estado es la que produce la aparición de ese sentimiento que limita con la tortura, debido a la falta de instrumentos al alcance de la víctima para que se sepa la verdad de lo sucedido.

---

Memorial and Cemetery; Not undertaken any prosecutions of the persons responsible for the mass killings of Bosniaks from Srebrenica in July 1995”. *Ibid.*, párr. 188.

<sup>911</sup> *Ibid.*, párr. 189 y 191.

## 1.9. Perú.

Según Juan Méndez, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú es el mecanismo más ambicioso de búsqueda de la verdad de toda Latinoamérica<sup>912</sup>. Y lo es por varias razones, tanto cualitativas<sup>913</sup>, como cuantitativas<sup>914</sup>.

Perú vivió inmerso en dos décadas de cruentas violaciones de derechos humanos perpetradas bien por grupos terroristas, bien por el propio Gobierno. Con la salida de Alberto Fujimori del poder en el año 2000, el Gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua, con el apoyo de grupos de defensa de los derechos de humanos<sup>915</sup>, creó la Comisión de la Verdad de Perú<sup>916</sup>. El decreto fundacional fue posteriormente modificado el 4 de septiembre de 2001 por el Presidente Alejandro Toledo, el cual añadió el apelativo “Reconciliación”<sup>917</sup>.

La recuperación de la verdad jugó un papel predominante durante todo el proceso de transición peruano y, tal y como se ha afirmado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú se erigió casi como una “voz única” durante este contexto<sup>918</sup>. Ello es debido, seguramente, a que la comisión se alzó como la demanda central entre las peticiones de la mayor parte de la sociedad para gestionar una efectiva transición a la democracia. El propio informe final recoge que:

“Desde los inicios del conflicto se dejó sentir claramente la exigencia ciudadana de conocer la verdad sobre lo que ocurría en las zonas donde este era más intenso. La falta de información sobre las graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas ponía seriamente en cuestión los principios de transparencia y responsabilidad que el régimen democrático debía sostener”<sup>919</sup>.

---

<sup>912</sup> MÉNDEZ, J., “The Human Right to Truth...”, *op.cit.*, p.135.

<sup>913</sup> Estamos ante la primera y única comisión de la verdad en este territorio en albergar audiencias públicas. AMNISTÍA INTERNACIONAL, *Peru: Truth and Reconciliation Commission – a first step towards a country without injustice*, AI Index: AMR 46/003/2004, 2004, p.3.

<sup>914</sup> En esta comisión trabajaron ochocientas personas, se recogieron diecisiete mil testimonios de víctimas y se organizaron cuatrocientos testimonios durante las audiencias que acreditaron trescientos casos distintos. *Ibid.*

<sup>915</sup> AMÉS COBIAN, R., “Violencia, verdad... ¿Reconciliación en el Perú?”, en PACHECO OREAMONU, G., ACEVEDO NAREA, L., GALLI, G., *Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2005, p.205.

<sup>916</sup> Decreto 065 – 2001 de 4 de junio de 2001.

<sup>917</sup> Decreto 201 – 2001 de 4 de septiembre de 2001.

<sup>918</sup> GARRETÓN KREFT, F., GONZÁLEZ LE SAUX, M., LAUZÁN, S., *Políticas públicas de verdad y memoria... op.cit.*, p.80.

<sup>919</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE PERÚ, *Informe final*, Lima, 2003, p. 20.

Debido a ello, grupos de protección de los derechos humanos como la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de casi setenta asociaciones, tenía el pedido de la verdad como una de sus principales demandas ante los abusos de derechos humanos<sup>920</sup>. Para el conjunto de la población, y más para aquellos afectados directamente por la violencia, el conocimiento de lo ocurrido era una exigencia ética<sup>921</sup>; más aún tras haberse aprobado la Ley de amnistía de 1995<sup>922</sup> que garantizaba impunidad a los crímenes cometidos.

Como ya vimos que ocurrió en Sierra Leona, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú también tuvo estrechos lazos de relación con el Poder Judicial. La investigación que la comisión de la verdad se proponía realizar<sup>923</sup> podía suponer la realización de dos actuaciones: por un lado, poder dar a conocer hechos hasta entonces desconocidos por la ciudadanía<sup>924</sup> y, por otro, mediante la realización de esta misma investigación, recopilar pruebas que pudieran ser utilizadas en los tribunales<sup>925</sup>. Esta doble vertiente de trabajar para la recuperación de la verdad histórica y judicial fue así entendida por el propio Tribunal Constitucional de Perú:

“El Gobierno, en cumplimiento del deber de adoptar las medidas más adecuadas para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, dictó el Decreto Supremo N.º 065-2001-PCM, que creó la Comisión de la Verdad, cuyo propósito no fue el de suplantar, sustituir o superponerse al Poder Judicial; antes bien, uno de sus objetivos fundamentales fue el de identificar los hechos y las

---

<sup>920</sup> LAPLANTE, L.J., “The Peruvian Truth Commission’s Historical Memory Project: Empowering Truth-Tellers to Confront Truth Deniers”, *Journal of Human Rights*, vol. 6, 2007, p.435.

<sup>921</sup> AMÉS COBIAN, R., “Violencia, verdad...”, *op.cit.*, p.205.

<sup>922</sup> Ley 26479 de 14 de junio de 1995.

<sup>923</sup> El mandato de la comisión establecía en su art. 1 que esta se proponía: “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”.

<sup>924</sup> Una vez terminada la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, mediante Resolución de la Defensoría del Pueblo 027-2003 DP de 1 de septiembre de 2003, toda la información generada por la propia comisión pasaba a formar parte de la Defensoría del Pueblo. La gestión de toda esta información se haría a través del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos (creado mediante Resolución Defensorial 010-2004 DP), cuyo objetivo consistía en poner a disposición de toda la sociedad todo el material producido por dicha comisión, garantizando de este modo la memoria colectiva, el esclarecimiento de los casos particulares y el acceso a la información pública en derechos humanos. Véase, GARRETÓN KREFT, F., GONZÁLEZ LE SAUX, M., LAUZÁN, S., *Políticas públicas de verdad y memoria...* *op.cit.*, p. 309.

<sup>925</sup> Sobre esta relación con el Poder Judicial puede consultarse: GONZÁLEZ CUEVA, E., “The contribution of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission to prosecutions”, *Criminal Law Forum*, vol. 15, 2004, núm.1, pp. 55-66, en especial, pp.61-63.

responsabilidades de las violaciones de los derechos humanos, empeñándose, en lo posible, en tratar de determinar su real existencia y veracidad, y, complementariamente, en evitar la desaparición de pruebas vinculadas con tales hechos. Sus investigaciones, con loable criterio exhaustivo, han permitido conocer los sucesos acaecidos en nuestro país en estas últimas décadas, y contribuyen al imperativo de cumplir con la obligación internacional y constitucional de evitar la impunidad y restituir los derechos violados para conseguir la paz social y la reconciliación nacional”<sup>926</sup>.

De esta forma, el Tribunal Constitucional entendió que dentro de esta obligación del Estado de proteger los derechos humanos, se encontraba el respeto al derecho a la verdad, el cual definió:

“Así, el *derecho a la verdad*, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, *es un derecho plenamente protegido*, derivado en primer lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional (...).

El Tribunal Constitucional considera que si bien detrás del derecho a la verdad se encuentra comprometidos otros derechos fundamentales, como la vida, la libertad o la seguridad personal, entre otros, este tiene una configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto protegido, como al *telos* que con su reconocimiento se persigue alcanzar.

Sin perjuicio del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la verdad, este también ostenta rango constitucional, pues es una expresión concreta de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno.

Es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad humana, pues el daño ocasionado a las víctimas no solo se traduce en la lesión de bienes tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad personal, sino también en la ignorancia de lo que verdaderamente sucedió con las víctimas de los actos criminales. El desconocimiento del lugar donde yacen los restos de un ser querido,

---

<sup>926</sup> TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERÚ, EXP. N.º 2488-2002-HC/TC, 18 de marzo de 2004, párr. 7.



o de lo que sucedió con él, es tal vez una de las formas más perversamente sutiles, pero no menos violenta, de afectar la conciencia y dignidad de los seres humanos”<sup>927</sup>.

En cuanto a su configuración como derecho colectivo, vertiente aplicada por el Gobierno para la creación de la comisión de la verdad, aunque también pueda incidir directamente en la vertiente individual y judicial, el Tribunal Constitución estableció:

“Asimismo, el derecho a la verdad, en su dimensión colectiva, es una concretización directa de los principios del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno, pues mediante su ejercicio se posibilita que todos conozcamos los niveles de degeneración a los que somos capaces de llegar, ya sea con la utilización de la fuerza pública o por la acción de grupos criminales del terror. Tenemos una exigencia común de que se conozca cómo se actuó, pero también de que los actos criminales que se realizaron no queden impunes. Si el Estado democrático y social de derecho se caracteriza por la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es claro que la violación del derecho a la verdad no solo es cuestión que afecta a las víctimas y a sus familiares, sino a todo el pueblo peruano.

(...).

De igual forma, el Tribunal Constitucional considera que el derecho a la verdad proviene de una exigencia derivada del principio de la forma republicana de gobierno<sup>928</sup>. En efecto, la información sobre cómo se manejó la lucha antiterrorista en el país, así como de cómo se produjo la acción criminal de los terroristas, constituye un auténtico bien público o colectivo, y también contribuye con la realización plena de los principios de publicidad y transparencia en los que se funda el régimen republicano. Necesarios no solo para conocer estos luctuosos hechos, sino también para fortalecer el control institucional y social que ha de fundamentar la sanción a quienes, con sus actos criminales, afectaron a las víctimas y en general a la sociedad y el Estado.

---

<sup>927</sup> *Ibid.*, párr.13-16. Resaltado del original.

<sup>928</sup> Al concepto de forma republicana de Gobierno también se apeló para la justificación de los juicios por la verdad en Argentina al estar afianzado en el artículo 33 de la Constitución argentina.

En torno a ello, existe una obligación específica del Estado de investigar y de informar, que no solo consiste en facilitar el acceso de los familiares a la documentación que se encuentra bajo control oficial, sino también en la asunción de las tareas de investigación y corroboración de hechos denunciados”<sup>929</sup>.

El propio conocimiento de la historia individual, así como de la colectiva, suponía una obligación ya vigente a todas luces para Perú, la cual había de ser resuelta con los medios al alcance para dar así eficacia a la misma. En efecto, el Tribunal Constitucional, mediante su afirmación de que el derecho a la verdad “está plenamente protegido”, aunque no cuente con un acomodo concreto dentro del ordenamiento interno peruano, ratifica, de forma inequívoca, la vinculación jurídica del Estado con su obligación internacional de hallar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo su jurisdicción. La creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación respondió, por tanto, al cumplimiento de la misma.

La conclusión de los trabajos de la comisión precedió a la recepción de toda la documentación por ella generada (16.917 testimonios de víctimas, archivos de audio, vídeo y material fotográfico) por la Defensoría del Pueblo, encargada de la custodia y gestión de todo este acervo documental<sup>930</sup>. El 19 de abril de 2004 se inauguró el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, que ponía a disposición de toda la sociedad “la información más completa sobre la violencia política y los derechos humanos” en aras de “servir de soporte documental a las víctimas y sus familiares así como a las organizaciones defensoras de derechos humanos en su permanente búsqueda de verdad, justicia y reparación”<sup>931</sup>.

---

<sup>929</sup> *Ibid.*, párr.17-19.

<sup>930</sup> GARRETÓN KREFT, F., GONZÁLEZ LE SAUX, M., LAUZÁN, S., *Políticas públicas de verdad y memoria... op.cit.*, p.309.

<sup>931</sup> *Ibid.*

### 1.10. República Federal de Yugoslavia.<sup>932</sup>

Tras la finalización de la contienda en los Balcanes, se sucedieron una serie de medidas orientadas a la gestión de la transición en la antigua Yugoslavia. Por un lado, en el campo relativo al derecho a la justicia, fue creado el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en virtud del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas<sup>933</sup>. Por otro lado, y ocho años después de la instauración del tribunal en 1993, el Gobierno del Presidente, Vojislav Koštunica, fundó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación<sup>934</sup>. Según el borrador de las reglas que regirían el trabajo de esta comisión, esta tenía como objetivo:

“(…) contribute to general reconciliation within the Federal Republic of Yugoslavia and with neighboring nations by means of facing the truth about the conflicts in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the successor states, which caused crimes against the peace, numerous violations of human rights, of the law of war and humanitarian law”<sup>935</sup>.

Pese al intento por parte del Presidente de realizar una investigación paralela a la judicial, que ya se estaba llevando a cabo en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, hubo determinadas circunstancias en la creación de la propia comisión que produjo que esta se distanciara de su propósito, que no era otro, en un principio, que la recuperación de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos acaecidas en el territorio de la República Federal de Yugoslavia.

---

<sup>932</sup> Dentro de la doctrina esta comisión ha sido calificada indistintamente como parte de la práctica de Serbia y Montenegro o de la República Federal de Yugoslavia. Nos decantamos por esta última opción debido a que es el nombre que aparece en el mandato de la comisión y fue publicado en el Boletín Oficial de la República Federal de Yugoslavia.

<sup>933</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Resolución 827 (1993)*, Doc. S/RES/827, 25 de mayo de 1993.

<sup>934</sup> Decreto 15/2001 – Decreto 59/2002, de 30 de marzo de 2001. El decreto se limitaba a establecer de forma muy escueta la función investigadora de la comisión y los miembros que la compondrían. En concreto se establecía que la tarea de la comisión consistía en: “to organize researches and reveal evidences about social, interethnic and political conflicts which led to war and shed light on causal links between these events; to inform domestic and international audience about its work and results; to establish cooperation with similar commissions and bodies in neighboring countries and abroad, in order to exchange working experiences”. Traducción al inglés de Dejen Ilic. Véase, Ilic, D., “The Yugoslav truth and reconciliation commission. Overcoming cognitive blocks”, *Eurozine*, 2004, p.8. Disponible en: <http://www.eurozine.com/pdf/2004-04-23-ilic-en.pdf> (Consultado el 9 de junio de 2016).

<sup>935</sup> Citado en: PEJIC, J., “The Yugoslav Truth and Reconciliation Commission: A Shaky Start”, *Fordham International Law Journal*, vol.15, 2001, núm.1, p.10. Traducción al inglés del propio autor.

El mandato que finalmente se le dio a la comisión era el de un órgano de mera recopilación de información y evidencias sobre el pasado que reconstruyera el período comunista y post comunista. La falta de un gran consenso dentro del Parlamento, o de mayores poderes constitucionales del Presidente, no permitió la creación de un órgano con mayores competencias<sup>936</sup>.

Uno de los principales inconvenientes para ello fue que los comisionados eran nacionales únicamente de la parte serbia de Yugoslavia, mientras que los miembros nacionales de Montenegro fueron excluidos. Esto produjo que no fuese realmente una comisión yugoslava, al faltar la visión de “la otra parte” del territorio<sup>937</sup>. En general la comisión se concebía como un mecanismo muy cercano al Presidente<sup>938</sup>, hecho fomentado por haber sido creada bajo decreto presidencial y no mediante una ley aprobada por el grueso del Parlamento<sup>939</sup>.

En 2003, tras afrontar cambios en su composición y, sobre todo, una vez la República Federal de Yugoslavia mutó en el nuevo Estado de Serbia y Montenegro, la comisión dejó de existir incluso antes de haber comenzado sus trabajos<sup>940</sup>.

El hecho de que tras el nacimiento de Serbia y Montenegro la comisión no siguiera su camino o que una nueva con un mandato similar recogiera el testigo de la búsqueda de la verdad (extrajudicial) durante los años de violencia en los Balcanes, enfatiza la importancia de la necesidad de que una auténtica voluntad política esté detrás de la implementación del medio elegido para respetar el derecho a la verdad de las víctimas y sociedad. De hecho, según afirma Brian Grodsky, la creación de esta comisión por parte de Vojislav Koštunica respondió a un intento de desviar las presiones de varios países de occidente para que su Gobierno colaborara con el Tribunal Penal Internacional<sup>941</sup>.

---

<sup>936</sup> GRODSKY, B., “Beyond Lustration...”, *op.cit.*, p. 36-37.

<sup>937</sup> *Ibid.*, p.9.

<sup>938</sup> HAYNER, P., *Unspeakable truths...* *op.cit.*, p.252.

<sup>939</sup> PEJIC, J., “The Yugoslav Truth and Reconciliation Commission...”, *op.cit.*, p.8.

<sup>940</sup> HAYNER, P., *Unspeakable truths...* *op.cit.*, p.252; ILIC, D., “The Yugoslav truth and reconciliation commission...”, *op.cit.*, p.11.

<sup>941</sup> GRODSKY, B., “Beyond Lustration...”, *op.cit.*, pp. 35-36.

### 1.11. Timor Oriental.

Los antecedentes a la creación de la Comisión de Bienvenida, Verdad y Reconciliación de Timor Oriental se encuentran en el informe final de la Comisión Internacional de Investigación que las Naciones Unidas crearon en 1999<sup>942</sup>. En este informe, presentado el 31 de enero del 2000, se recomendaba a las Naciones Unidas la creación de un organismo independiente de investigación que, entre otras cuestiones, examinara las cuestiones de la verdad y la reconciliación en Timor Oriental<sup>943</sup>. De este mismo modo, en agosto del año 2000, el Congreso Nacional de Resistencia Timorense (una agrupación de partidos independentistas) aprobó una resolución en la que se pedía la constitución de una comisión de la verdad<sup>944</sup>.

La comisión, finalmente, fue creada en el marco de la Administración Transicional de las Naciones Unidas en Timor Oriental. Instaurada tras los disturbios ocurridos en el país durante la ocupación de Indonesia, este organismo tenía la responsabilidad de “la administración de Timor Oriental y poseer facultades para ejercer la total autoridad legislativa y ejecutiva, incluida la administración de justicia”<sup>945</sup>. En el mandato de la comisión, aprobado el 13 de julio de 2001, se estipulaba que una de sus funciones consistiría en: “establishing the truth regarding past *human rights violations*”<sup>946</sup>. Para ello, la comisión contaba con potestad para organizar audiencias públicas como herramienta necesaria para hallar esa verdad<sup>947</sup>.

Al igual que en otras comisiones que fueron concebidas como una medida paralela a acciones emprendidas en el campo de la justicia<sup>948</sup>, el informe final diferenció

---

<sup>942</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *La situación de los derechos humanos en Timor Oriental. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999/S-4/1*, Doc. E/CN.4/RES/1999/S-4/1, 28 de septiembre de 1999.

<sup>943</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Cuestión de Timor Oriental*, Doc. A/54/726, 31 de enero del 2000, párr. 152.

<sup>944</sup> BURGESS, P., “Justice and Reconciliation in East Timor. The Relationship between the Commission for Reception, Truth and Reconciliation and the Courts”, *Criminal Law Forum*, vol. 15, 2004, núm.1, p. 143.

<sup>945</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Resolución 1272 (1999)*, Doc. S/RES/1272 (1999), 25 de octubre de 1999.

<sup>946</sup> UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR, *Regulation 2001/10*, Doc. UNTAET/REG/2001/10, 13 de julio de 2001, párr. 3.1.b)

<sup>947</sup> *Ibid.*, párr. 16. La decisión de instaurar estas audiencias públicas dentro de la comisión fue debido a la influencia con la que contaba todo proceso transición que hubiera comenzado tras la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. El legado que esta dejó para la experiencia timorense puede verse en: JENKINS, C., “A truth commission for East Timor: Lesson from South Africa”, *Journal of Conflict and Security Law*, vol. 7, 2002, núm.2, pp.233-251.

<sup>948</sup> En este contexto, por ejemplo, los paneles especiales para el juzgamiento de crímenes cometidos entre el 1 de febrero de 1999 y el 25 de octubre de 1999. UNITED NATIONS TRANSITIONAL

el trabajo emprendido por la comisión como algo ajeno a la administración de justicia pero igualmente necesario para la reconciliación de la sociedad<sup>949</sup>.

### **1.12. Granada.**

La comisión de la verdad constituida en el Estado de Granada tenía como misión la investigación y recopilación de los eventos ocurridos entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1991; período que incluía la invasión de los Estados Unidos, la muerte del Primer Ministro y otros miembros del Gobierno o la cuantificación y el conocimiento de la identidad de quienes perdieron la vida en Fort Rupert.

Esta comisión fue creada por decreto de 4 de septiembre de 2001 por el Gobernador General de Granada, Sir Daniel Charles Williams, en aplicación de lo dispuesto en la sección 2 de la Ley de comisiones de investigación:

“It shall be lawful for the Governor-General, whenever he shall deem it advisable, to issue a Commission, appointing one or more Commissioners, and authorizing the Commissioners, or any quorum of them therein mentioned, to inquire into the conduct or management of any department of the public service, or of any public or local institution or the conduct of any public officer or of any parish or district of Grenada; or into any matter of which an inquiry would, in the opinion of the Governor-General, for the public welfare”.

El mandato de esta comisión establecía que aquellos que fueran llevados a declarar delante de la comisión tendrían los mismos derechos que los testigos citados ante un tribunal penal, sin embargo, el mismo mandato de la comisión especificaba que su naturaleza no era judicial, ya que su tarea estaba alejada de la búsqueda de responsabilidades penales individuales al funcionar como un órgano de búsqueda de determinados hechos<sup>950</sup>.

---

ADMINISTRATION IN EAST TIMOR, *Regulation 2000/15*, Doc. UNTAET/REG/2000/15, 6 de junio del 2000, párr. 1.3.

<sup>949</sup> COMISIÓN DE BIENVENIDA, VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE TIMOR ORIENTAL, *Chega!*, Dili, 2006, parte I, pp.8-9.

<sup>950</sup> El mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Granada, así como su informe final de 28 de marzo de 2006. “Informe de ciertos eventos políticos que ocurrieron en Granada 1976-1991”, puede encontrarse en: <http://www.thegrenadarevolutiononline.com/trccontents.html> (Consultado el 7 de junio de 2016).

### 1.13. Ghana.

Como ya se analizó, en Ghana fue creada una comisión para la investigación extrajudicial de unos hechos cometidos en 1982 bajo la presidencia de J. J. Rawlings. Tras su salida del poder y la pérdida de las elecciones por el candidato de su partido a manos de John Agyekum Kufuor, este último, ya como Presidente electo, creó en 2002 la Comisión Nacional de la Reconciliación para la investigación de los crímenes cometidos bajo los mandatos de J. J. Rawlings.

El objetivo de esta comisión era la búsqueda y la promoción de la reconciliación nacional mediante “establishing accurate, complete and historical record of violations and abuses of human rights” y “making recommendations to the President for redress of wrongs committed within the specified periods”<sup>951</sup>.

Una de sus características fundamentales y que en parte la diferencia de la sudafricana (comisión en la que se basó para realizar sus trabajos, excepto por la competencia para conceder amnistías<sup>952</sup>), fue que esta fue instaurada fuera del que podría considerarse el período transicional, es decir, ocho años después de la llegada al poder de un Gobierno civil<sup>953</sup>. Que la sociedad conociera lo ocurrido durante este período, independientemente del tiempo transcurrido una vez los hechos acontecieron, fue visto como una obligación por el nuevo Gobierno de John Agyekem Kufuor, con esta comisión como el medio elegido para buscar la verdad.

---

<sup>951</sup> National Reconciliation Act 611, 11 de enero del 2002, artículo 3.1.

<sup>952</sup> PILLAY, S., SCANLON, H., *Peace versus Justice?...* op.cit., p.22.

<sup>953</sup> AGYEMANG ATTAFUAH, K., “An overview of Ghana’s National Reconciliation Commission and its relationship with the courts”, *Criminal Law Forum*, vol. 15, 2004, núm.1, p.126.

### 1.14. Paraguay.

Ya vimos en el epígrafe de la etapa anterior al referirnos a la práctica de Paraguay sobre el derecho a la verdad que tras la finalización del período dictatorial de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, una serie de medidas fueron tomadas encaminadas a la superación y gestión de las violaciones de derechos humanos<sup>954</sup> que se sucedieron durante ese período, caracterizadas por los abusos de poder que tanto la administración por él liderada, como las Fuerzas Armadas y sus afines políticos infligieron a cualquier opositor para la permanencia indefinida del *status quo*. La jurisdicción ordinaria fue el método utilizado en su mayor parte para el conocimiento de los hechos<sup>955</sup>. Sin embargo, como ya pusimos de manifiesto anteriormente, tras el descubrimiento de los conocidos como “Archivos del Terror” se inició la aprobación de políticas dirigidas a la preservación de la memoria, entre ellas, el anteriormente comentado Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos y el Plan Nacional para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el año 2000 que incluía la creación de una comisión de la verdad<sup>956</sup>.

El mandato de la Comisión de la Verdad y la Justicia fue aprobado por el Congreso de la Nación el 15 de octubre de 2003 mediante la Ley 2225. Esta comisión, que especificaba como muchas otras que no tenía competencia judicial alguna, contaba entre sus objetivos: “contribuir a esclarecer la verdad de manera oficial, lo que implica

---

<sup>954</sup> Aunque en 1989, con la salida de Alfredo Stroessner de la presidencia, se inicia el período transicional, la lentitud de las medidas que se tomaron en esa dirección y el mantenimiento en el poder del partido afín al régimen *stroesista*, el Partido Colorado, produjo que siguiera habiendo grandes tensiones entre los sectores democráticos y los aún afines al recuerdo de dictatorial. La ruptura total con el pasado fue una tarea imposible hasta el año 2008, con la salida del Partido Colorado del poder y el consecuente inicio de una verdadera transición. Véase, VALENCIA VILLA, A., “Memorias compartidas. Las Comisiones de la Verdad de Paraguay y Ecuador”, en VV.AA, *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias de América Latina*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011, p. 218.

<sup>955</sup> ALFONSO, C., “Paraguay”, en AMBOS K., MALARINO, E., ELSNER, G. (eds.), *Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Berlín – Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2009, p.347.

<sup>956</sup> La idea de crear una comisión de estas características en Paraguay, había sido ya recomendada por la Comisión IDH en su informe de 2001 sobre la situación de derechos humanos en Paraguay: “Finalmente, y tomando en cuenta el derecho que tienen las víctimas, sus familiares y el pueblo paraguayo en general, a saber la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, la CIDH reitera su recomendación de que se cree una Comisión investigadora, independiente e imparcial, que sobre la base de los datos existentes en los ‘archivos del terror’ y en otras fuentes pertinentes, elabore un informe sobre las muertes, desapariciones, torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas en esa época”. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay*, OEA/Ser./L/VII.110 doc. 52, 9 marzo 2001, párr.42.



establecer moral y políticamente la responsabilidad del Estado”<sup>957</sup>. La creación de esta comisión de la verdad ayudaría por tanto a una preservación y respeto del derecho a la verdad de las víctimas, como bien sentenció la propia Corte IDH:

“La Corte valora como un principio de reparación la aprobación de la Ley 2225 ‘por la cual se crea la Comisión de la Verdad y Justicia’ para ‘investigar hechos que constituyen o pudieran constituir violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes estatales o paraestatales entre mayo de 1954 hasta la promulgación de la Ley’. Al respecto, el Tribunal considera que el trabajo de dicha Comisión podría contribuir a la búsqueda de la verdad de un período histórico del Paraguay, por lo que ello constituye un esfuerzo muy importante realizado por parte del Estado”<sup>958</sup>.

De la lectura del mensaje del Presidente en la entrega del informe final de la comisión, el 28 de agosto de 2008, (reproducido dentro del propio informe<sup>959</sup>) se puede deducir la predisposición del Estado de buscar la verdad como un deber ineludible. También del primer párrafo de la introducción:

“La Comisión de Verdad y Justicia constituyó un logro de la Sociedad Civil y del Estado paraguayo. Su creación respondió a una fuerza de voluntades que se inició con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional –en particular de las asociaciones de víctimas de la dictadura y los organismos de derechos humanos, agrupados en la Mesa de la Memoria y archivos de la represión– cuando cayó el dictador Stroessner y se concretó con el acuerdo del Parlamento Nacional y del Poder Ejecutivo, que derivó en la sanción de la Ley 2225/03”.

En este mismo sentido, el informe sigue dejando patente la necesidad y obligación de Paraguay por conocer la verdad:

---

<sup>957</sup> Ley 2225, artículo 2.f. La Comisión de Verdad y Justicia estaba, por otro lado, encaminada a la investigación de todo hecho que pudiera constituir violaciones de derechos humanos desde 1954 hasta la promulgación de esta ley. Artículo 1.

<sup>958</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en *Goiburú y otros c. Paraguay*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 22 de septiembre de 2006, en *Serie C: Núm. 153*, párr. 169.

<sup>959</sup> COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, *Informe final*, Asunción, 2008, Tomo I, pp.14-16.

“El necesario establecimiento de la verdad histórica debe ser la base para esclarecer la verdad jurídica de los hechos. Desde este último punto de vista, los hechos deben ser probados en expedientes formales, con pruebas establecidas mediante procedimientos previstos por la ley. La verdad jurídica o verdad del expediente busca deslindar las responsabilidades personales necesarias para un veredicto, que conduzca a la reparación de las víctimas y a la punición de los victimarios: a la justicia en sentido jurisdiccional de sanción y restitución posible del daño perpetrado.

La verdad y justicia histórica constituyen una condición necesaria para el establecimiento de la solidaridad y concordia sociales y es la base para que las víctimas y la sociedad impulsen la búsqueda de la verdad jurídica elevando los hechos al Ministerio Público para evitar la impunidad”<sup>960</sup>.

La recuperación de la verdad histórica se alzaba como una obligación a cumplir a los efectos de poder alcanzar una reconciliación y reparación completa<sup>961</sup>.

Tras la publicación del informe final, la Defensoría del Pueblo de Paraguay, mediante Resolución 179/09 de 23 de enero de 2009 crea la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación con competencias para:

- “a) Proponer al Defensor del Pueblo medidas para impulsar ante los órganos competentes del Estados, las Organizaciones no Gubernamentales y los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, la implementación de las recomendaciones formuladas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Justicia dándole el seguimiento necesario para su concreción, manteniendo informada de ello a la sociedad paraguaya;
- b) Organizar y preservar los archivos y bases de datos en todas sus formas producidos durante la investigación de la Comisión de la Verdad y Justicia, incrementando su fondo documental con nueva documentación de archivos públicos y privados, en la medida de lo posible, y poniendo los mismos a disposición de los habitantes de esta República;

---

<sup>960</sup> *Ibid.*, p.20.

<sup>961</sup> Entre las medidas impulsadas por la Comisión de Verdad y Justicia para contribuir a la reparación se encontraban la organización de seis audiencias públicas en Paraguay y dos en el extranjero (Argentina). Véase, VALENCIA VILLA, A., “Memorias compartidas...”, *op.cit.*, p. 221.

c) Continuar con la investigación y la búsqueda permanente de desaparecidos y ejecutados extrajudiciales durante la dictadura stronista, y en función a ello, conformar un equipo de antropología forense e implementar la creación de un banco de datos genéticos para dicho cometido, coordinando todas las acciones necesarias”.

Esta institución fue una a las que apeló el Ministerio de Relaciones Externas en su contestación al ya mencionado requerimiento de la OACNUDH para la composición del informe 21/7 sobre derecho a la verdad y archivos<sup>962</sup>. Junto con ella, este Ministerio se refirió también al ya analizado Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos y a la propia Defensoría del Pueblo, la cual cuenta en su haber con los expedientes de las propias víctimas de las violaciones de derechos humanos necesarios para acceder a una reparación económica.

### **1.15. Chile.**

Ya analizamos en la década anterior que la Comisión Rettig adoleció del defecto de contar con un mandato sumamente limitado, pues dejaba fuera de su investigación todo acto que no hubiera terminado con el fallecimiento de la víctima, debido a una interpretación demasiado restrictiva del mandato que facultaba a la comisión para investigar “graves violaciones de derechos humano”. Caso flagrante fue pues la falta de investigación de las torturas que no llegaron a causar la muerte de la víctima.

La ausencia de una verdad completa y el hecho de que no todas las víctimas de la represión de Pinochet fueran reconocidas como tal, fue lo que movió al Presidente de la República, Ricardo Lagos, a la creación de su política de derechos humanos *No hay mañana sin ayer*. Esta proposición tenía como una de sus medidas principales la creación de “una comisión que establezca de manera rigurosa una lista de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas”<sup>963</sup>.

---

<sup>962</sup> OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Right to the truth – National Archives on Human Right”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/en/issues/truth/pages/truthIndex.aspx> (Consultado el 7 de junio de 2016).

<sup>963</sup> Este plan de derechos humanos puede consultarse en: [http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/propuesta\\_DDHH.pdf](http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/propuesta_DDHH.pdf) (Consultado el 13 de junio de 2016).

Tal y como se recogía en el mandato de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura<sup>964</sup> (conocida popularmente como Comisión Valech):

“(…) solo en la medida que se conozca en forma completa la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro”.

La función global de la Comisión Valech, así como los motivos que llevaron a su constitución, no estaban simplemente basados en una reconstrucción global de la historia de Chile entre 1973 y 1990, sino que como ya hiciera la Comisión Rettig, muchas de sus aspiraciones estaban en la recuperación y dignificación de las víctimas individuales. Es decir, como rezaba el mandato:

“(…) determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”<sup>965</sup>.

La Comisión, por tanto, apeló no ya tanto a la necesidad de conocer lo ocurrido en Chile durante la dictadura de Pinochet a un nivel global (pues fue un trabajo que, en parte, estaba hecho por la comisión de los años noventa), sino a la necesidad de que la verdad individual de ciertas víctimas, las que habían sido excluidas de la competencia material de la Comisión Rettig, fuera ahora conocida y reconocida por la sociedad<sup>966</sup>.

---

<sup>964</sup> Decreto Supremo 1040 de 26 de septiembre de 2003.

<sup>965</sup> Artículo 1 Decreto Supremo 1040.

<sup>966</sup> En relación con la gestión, custodia y sistematización de toda la información producida por ambas comisiones, en 2009, mediante la Ley 20405 de 10 de diciembre de 2009 se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En concreto el art. 3.6 de esta ley disponía: “Le corresponderá especialmente al Instituto: (...) 6.- Custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Programa de Derechos Humanos, creado por el decreto supremo N° 1.005, de 1997, del Ministerio del Interior, todo ello una vez concluidas las funciones de éstos; por la Comisión de Prisión Política y Tortura creada por el decreto supremo N° 1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior; y por la Comisión a que se refiere el artículo 3° de las normas transitorias de esta ley, concluidas las funciones de la misma. En el cumplimiento de este objetivo, deberá recopilar, analizar y sistematizar toda información útil a este propósito; también podrá solicitar información acerca del funcionamiento de los mecanismos reparatorios e impulsar, coordinar y difundir acciones de orden cultural y simbólico destinados a complementar el respeto a los derechos humanos y a reivindicar a las víctimas y a preservar su memoria histórica. Asimismo, solicitar, reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos

Una de las consecuencias inmediatas de la publicación del informe final fue la incoación, tanto en Chile como en el extranjero, de investigaciones penales de todos aquellos hechos que quedaron probados por la Comisión Valech<sup>967</sup>.

### 1.16. Argelia.

Que la cuestión de los desaparecidos no es una problemática circunscrita a las latitudes latinoamericanas es algo que se viene demostrando desde la comisión de la verdad de Uganda de 1974. En Argelia, tras la suspensión de las elecciones de enero de 1992 por parte del Ejército una vez empezaba a ser notorio que un partido islámico iba a hacerse con el poder, se inició un espiral de violencia liderado por simpatizantes islámicos contra las fuerzas del orden y parte de la población civil. Este ataque fue respondido por el Ejército aún con mayor crudeza, con resultado de miles de muertos y desaparecidos durante los siete años que duraron los disturbios<sup>968</sup>.

Con la llegada de Abdelaziz Bouteflika a la presidencia en abril de 1999 se empezaron a tomar medidas para la gestión del pasado. Entre estas medidas destacaban la concesión de una amnistía para todos aquellos que depusieran las armas y la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos en 2001. Como órgano subsidiario de esta en 2003, el Presidente fundó la Comisión de Investigación *ad hoc* a cargo de la cuestión de los desaparecidos<sup>969</sup>, centrada únicamente en lidiar con este particular.

En materia de hallar la verdad de las víctimas desaparecidas, sin embargo, el mandato adolece de graves limitaciones en comparación con otras comisiones centradas también en derechos de las víctimas de desaparición forzada. En efecto, la competencia de la comisión argelina en relación con los desaparecidos estaba limitada a “*dentifier les cas d’allégations de disparition*” y “*de faire entreprendre par les autorités compétentes, toutes les recherches nécessaires pour localiser les personnes déclarées disparues et de faire procéder aux opérations d’identification des cadavres retrouvés*”. La comisión, por ende, no contaba con competencia alguna dirigida a la investigación de las circunstancias en las que se habían producido las desapariciones ni para la identificación

---

o privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o la violencia política a que se refiere el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero”.

<sup>967</sup> LIRA, E., “Verdad, reparación y justicia: el pasado que sigue vivo en el presente”, en VV.AA., *Contribución de las políticas de verdad...* *op.cit.*, p.101.

<sup>968</sup> MANGA FOMBAD, C., “Transitional Justice in Africa...”, *op.cit.*, p.3.

<sup>969</sup> Decreto 03-299 de 11 de septiembre de 2003.

de aquellos que habían participado en la aprehensión y posterior desaparición de las víctimas<sup>970</sup>.

El alcance de la labor que esta comisión desempeñó fue de esta manera bastante limitado. En materia de derecho a la verdad individual porque independientemente de que se hallara el paradero de la persona desaparecida, el conocimiento de las circunstancias es también obligación necesaria para un completo conocimiento de lo ocurrido<sup>971</sup>. Derivado de esto último, la sociedad no podrá contar con un marco claro de la manera en la que las violaciones de derechos humanos fueron cometidas si el respeto al derecho a la verdad únicamente se basa en identificación de las víctimas.

### **1.17. Rumanía.**

Siguiendo el ejemplo de otros Estados como Alemania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Uzbequistán, Rumanía también implementó una serie de políticas dirigidas a la investigación de los crímenes producidos durante su pasado comunista<sup>972</sup>. Entre estas políticas destaca la creación de varios mecanismos de investigación y evaluación del pasado represivo de muy distinto calado.

Tal y como expone Lavinia Stan, la aparición de teorías negacionistas a principios de la década del 2000 en la vida política de Rumanía sobre la existencia del Holocausto dentro de sus fronteras, precipitó la creación de la Comisión Internacional del Holocausto en Rumanía de octubre de 2003<sup>973</sup>. Esta comisión tenía el mandato de: “to research the facts and determine the truth about the Holocaust in Romania during World War II and the events preceding this tragedy”<sup>974</sup>.

Habiendo sido compuesta por personal tanto nacional como internacional, presentó su informe final en noviembre de 2004, el cual constituyó un claro precedente para la creación de una comisión que investigara el régimen comunista. En efecto, el 11 abril de 2006 el Presidente, Traian Băsescu, siguiendo los requerimientos que venían de

---

<sup>970</sup> Un análisis más profundo sobre las carencias del mandato de esta comisión puede encontrarse en: HUMAN RIGHTS WATCH, “Truth and Justice on Hold: The New State Commission on ‘Disappearances’”, vol. 15, 2003, núm. 11.

<sup>971</sup> Como ya vimos que arguyó el Comité DH. Véase el epígrafe 3.2 del capítulo 1.

<sup>972</sup> HOGEA, A., “Coming to Terms with the Communist Past in Romania: An Analysis of the Political and Media Discourse Concerning the Tismăneanu Report”, *Studies of Transition States and Societies*, vol. 2, 2010, núm.1, pp.20-21.

<sup>973</sup> STAN, L., *Transitional Justice in Post-Communist Romania: The Politics of Memory*, Nueva York, Cambridge University Press, 2013, p.112.

<sup>974</sup> INTERNATIONAL COMMISSION ON THE HOLOCAUST IN ROMANIA, *Final Report*, Bucarest, 2004, p.4.

la sociedad para el análisis de los cuarenta y cinco años de régimen comunista en Rumanía, creó la Comisión Presidencial para el Análisis de la Dictadura Comunista en Rumanía<sup>975</sup>, la cual estaría presidida por el académico, Vladimir Tismasneanu. Esta comisión contó con gran respaldo por parte de las instituciones y fue compuesta por diecinueve comisionados y veintiún expertos; una de las comisiones más amplias de las hasta ahora constituidas<sup>976</sup>.

El trabajo emprendido por esta comisión<sup>977</sup> brindó al Presidente información suficiente como para poder realizar una condena pública al régimen comunista y a sus crímenes como paso previo a formar parte de la Unión Europea el 1 de enero de 2007<sup>978</sup>.

Esta comisión, al igual que otras ya comentadas, realizó esta investigación para que el Gobierno presente pudiera desmarcarse de su predecesor. Sin embargo, siguiendo el modelo de comisión más académico e histórico utilizado en Alemania, se alejó de los precedentes de otras comisiones como Sudáfrica, Chile o Sri Lanka<sup>979</sup>. No obstante, el trabajo que realizó, al estilo de una comisión histórica, sí pudiera ser considerado como una medida en pos del respeto del derecho a la verdad de la sociedad, al sacar a la luz acontecimientos hasta entonces desconocidos.

De forma paralela al trabajo de esta comisión, mediante la Decisión 1724 de 21 de diciembre de 2005, se instituyó el Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo en Rumanía. Este organismo estaba orientado a realizar investigaciones, desde un punto de vista institucional y hacer públicos los crímenes y abusos cometidos durante la época comunista, así como la identidad de los miembros del Partido Comunista<sup>980</sup>. Además, dentro de sus misiones también se encontraba la recolección de

---

<sup>975</sup> Paula Ivănescu, senadora por aquel entonces, afirmó: “it would be nice to know our communist past, start with a clean slate, and not repeat past mistakes”. Citado en: STAN, L., *Transitional Justice in Post-Communist Romania... op.cit.*, p.120.

<sup>976</sup> *Ibid.*, p.126.

<sup>977</sup> El informe final: COMISIA PREZIDENȚIALĂ PENTRU ANALIZA DICTATURII COMUNISTE DIN ROMÂNIA, *Raport Final*, Bucarest, 2006. Disponible en: [https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL\\_%20CADCR.pdf](https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_%20CADCR.pdf) (Consultado el 7 de junio de 2016).

<sup>978</sup> STAN, L., *Transitional Justice in Post-Communist Romania... op.cit.*, p.112; véase, igualmente: CIOBANU, M., “Criminalising the Past and Reconstructing Collective Memory: The Romanian Truth Commission”, *Europe-Asia Studies*, vol. 61, 2009, núm. 2, p. 323.

<sup>979</sup> *Ibid.*

<sup>980</sup> GROSESCU, R., “The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile”, en STAN, L., NEDELSKY, N. (eds.), *Encyclopedia of Transitional Justice. Volume 3*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 192. En 2009, debido a temas presupuestarios, el Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo en Rumanía se unió al Instituto Nacional para la Memoria del Exilio Rumano dando lugar a una nueva institución: el Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo y la Memoria del Exilio Rumano. Al contrario de su predecesora, esta

documentos, información y testimonios de víctimas de abusos de la violación durante la represión comunista con vistas a facilitarlos posteriormente al Poder Judicial<sup>981</sup>.

### **1.18. Argentina.**

Hasta la presente, Argentina ha venido creando una completa variedad de políticas en pos de construir un relato unificado y objetivo de lo ocurrido durante la dictadura de las Juntas Militares. A las ya analizadas CONADEP, juicios por la verdad y Registro de Desaparecidos y Fallecidos, durante esta época se unen un gran abanico de políticas centradas en la gestión, sistematización y publicación de archivos e información destinadas a que las víctimas y la sociedad puedan acceder a la misma libremente. Y es que tal y como respondió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al comentario requerimiento de la OACNUDH para la confección del informe acerca del derecho a la verdad y archivos: “[e]l Estado Argentino [sic] desde el año 2003 tiene como ejes centrales de sus políticas públicas de Derechos Humanos las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”<sup>982</sup>.

Como primera medida inaugural de la práctica de Argentina en la gestión de archivos se encuentra el Archivo Nacional de la Memoria, creado en virtud del decreto presidencial 1259/2003 de 16 de diciembre de 2003.

En el preámbulo de esta norma se establecía:

“Que las experiencias repetidas de violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos fundamentales sufridas en nuestro país en distintos períodos de su historia contemporánea, alcanzaron carácter masivo y sistemático durante las dictaduras militares de seguridad nacional, e inusitada gravedad durante el régimen de terrorismo de Estado instaurado el 24 de marzo de 1976.

Que la respuesta social se ha expresado en la poderosa, persistente e indoblegable demanda de verdad, justicia y reparación a lo largo y lo ancho del país y en ocasiones muchos años después de cometidos gravísimos atentados contra la dignidad humana.

---

institución se centró en la dirección de investigaciones académicas tanto sobre la época comunista como de los primeros años de la transición. *Ibid.*

<sup>981</sup> *Ibid.*

<sup>982</sup> OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Right to the truth – National Archives on Human Right”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/en/issues/truth/pages/truthIndex.aspx> (Consultado el 13 de junio de 2016).



Que deben tenerse presentes los consiguientes deberes del Estado de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, rehabilitar a las víctimas y asegurar los beneficios del Estado democrático de derecho para las generaciones actuales y futuras”.

Entre sus objetivos, recogidos en el artículo 3, se encontraban:

- “a) Contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestro país y sus lecciones y legados en las generaciones presentes y futuras.
- b) Proporcionar un instrumento necesario en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación ante las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
- c) Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos y de sus implicancias en los planos normativo, ético, político e institucional.
- d) Preservar informaciones, testimonios y documentos necesarios para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la República Argentina, su coordinación con los países del cono sur y sus demás manifestaciones en el exterior y contribuir a la coordinación regional y subregional de los archivos de derechos humanos”.

A la creación de esta institución a nivel estatal, le siguieron la creación de numerosos centros archiveros a nivel provincial: la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba<sup>983</sup>, Archivo Provincial de la Memoria de la provincia de Chubut<sup>984</sup>, el Archivo Provincial de la Memoria de la provincia de Santa Fe<sup>985</sup>, el

---

<sup>983</sup> Ley 9286 de 22 de marzo de 2006, promulgada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Entre sus funciones se encontraba: “Proveer los instrumentos necesarios para la búsqueda de la verdad histórica, la justicia y la reparación social, ante las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, art. 3.b)

<sup>984</sup> Decreto 1661/04 de 21 de septiembre de 2004. En el considerando se establecía: “Que la respuesta social se ha expresado en la poderosa, persistente e indoblegable demanda de verdad, justicia y reparación a lo largo y lo ancho del país y en ocasiones muchos años después de cometidos gravísimos atentados contra la dignidad humana. Que deben tenerse presentes los consiguientes deberes del Estado de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, rehabilitar a las víctimas y asegurar los beneficios del Estado democrático de derecho para las generaciones actuales y futuras. Que hoy tiene vigencia en nuestro país y en nuestra provincia un amplio plexo de normas constitucionales de derechos humanos y de instrumentos internacionales universales y regionales en la materia a los que la REPUBLICA ARGENTINA y la PROVINCIA DEL CHUBUT han reconocido jerarquía constitucional, que constituyen la base normativa del derecho a la verdad de las

Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos<sup>986</sup>, la Comisión Provincial por la Memoria y Registro Único de la Verdad de la Provincia de Chaco<sup>987</sup>, el Archivo

---

víctimas y la sociedad en su conjunto, y que conllevan el correlativo deber de memoria del Estado, ambos explícitamente desarrollados en el proyecto de Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, actualmente en curso de elaboración en la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”. Como funciones se encontraban recogidas en el art. 3 las siguientes: “a) Contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestro país y sus lecciones y legados en las generaciones presentes y futuras. b) Proporcionar un instrumento necesario en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación ante las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. c) Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos y de sus implicancias”.

<sup>985</sup> Decreto 2775 de 23 de octubre de 2006. En el considerando de la norma se reproducía literalmente lo recogido en el decreto que creaba el archivo provincial de Chubut: “la respuesta social se ha expresado en la poderosa, persistente e indoblegable demanda de verdad, justicia y reparación a lo largo y lo ancho del país y en ocasiones muchos años después de cometidos gravísimos atentados contra la dignidad humana; que deben tenerse presentes los consiguientes deberes del Estado de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, rehabilitar a las víctimas y asegurar los beneficios del Estado democrático de derecho para las generaciones actuales y futuras; que hoy tiene vigencia en nuestro país un amplio plexo de normas constitucionales de derechos humanos y de instrumentos internacionales universales y regionales en la materia a los que la REPUBLICA ARGENTINA, ha reconocido jerarquía constitucional, que constituyen la base normativa del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en su conjunto, y que conllevan el correlativo deber de memoria del Estado, ambos explícitamente desarrollados en el Proyecto de Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, actualmente en curso de elaboración en la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS”. Para hacer valer tales obligaciones, el decreto establecía que las mismas funciones que le fueron concedidas al archivo de la provincia de Chubut: “Serán objetivos del Archivo Provincial de la Memoria: a) Contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestra provincia y sus lecciones y legados en las generaciones presentes y futuras. b) Proporcionar un instrumento necesario en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación ante graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. c) Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos y de sus implicancias en los planos normativo, ético, político e institucional”. Art. 3.

<sup>986</sup> Ley 9577 de 8 de julio de 2004. El art. 1 establecía: “El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, creará el “Registro Unico de la Verdad”, con los antecedentes y todo tipo de documentación referidos a la represión efectuada hasta el 10 de diciembre de 1983, a los efectos de sistematizar la información y el acceso a la misma”. Por su parte, el art. 3 contemplaba que: “La base de datos del registro es público y el acceso a la misma es gratuito, facilitándosele la labor a las entidades que acrediten su lucha en la búsqueda de la verdad y la justicia y su firme compromiso en la defensa de los derechos humanos”.

<sup>987</sup> Ley 5582 de 17 de agosto de 2005. En sus artículos 1 y 2 se establecía: “Artículo 1: establece el derecho de todo integrante de la comunidad a conocer la verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores, cambios de identidad y demás violaciones de derechos humanos ocurridos en los años de dictadura militar, autoritarismo y terrorismo de Estado, en el marco de lo preceptuado por los artículos 15 y 19 de la constitución provincial 1957-1994. Artículo 2: créase la Comisión Provincial por la Memoria que tendrá como actividad fundamental investigar, reconstruir y dar a conocer la verdad histórica de los hechos ocurridos, así como sus consecuencias sobre la realidad actual. La actuación de la comisión provincial por la memoria se enmarca en el “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos para la lucha contra la impunidad”, decisión 1996/119 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas respecto a (i) el derecho a saber de la víctima; (ii) el derecho de la víctima a la justicia; (iii) el derecho a la reparación de la víctima”. Entre sus objetivos se encontraban: (a) Contribuir a mantener viva la historia reciente de nuestro país y de nuestra provincia en la memoria de los chaqueños y a transmitir a las futuras generaciones los hechos y consecuencias de dictaduras militares, autoritarismos y terrorismo de Estado; (b) Fomentar el estudio, la investigación y difusión de las luchas sociales populares llevadas a cabo en el territorio de la provincia y de la nación; (c) Fomentar el estudio, la investigación y la difusión comparativas de las consecuencias culturales, sociales, económicas y políticas de los gobiernos autoritarios y democráticos que han regido en nuestro país”.

de la Memoria de la Provincia de La Pampa<sup>988</sup>, la Comisión Provincial de la Memoria, el Archivo Provincial de la Memoria y Registro Único de la verdad de la Provincia de Misiones<sup>989</sup> o la Comisión Provincial de la Memoria de Mendoza<sup>990</sup>.

Por otra parte, destacan las iniciativas implementadas dentro de la provincia de Buenos Aires, cuya Comisión Provincial por la Memoria<sup>991</sup> fue creada anteriormente a la aparición del Archivo Nacional de la Memoria. Junto con esta comisión se creó también un Registro Único de la Verdad<sup>992</sup>.

A parte de esta extensa lista de registros provinciales, es menester destacar también el Decreto presidencial 4/2010 de 5 de enero de 2010 por el cual se procedía a la desclasificación de toda la información vinculada a las fuerzas armadas comprendida

---

<sup>988</sup> Ley 2260 de 2 de junio de 2006. El artículo 2 modificaba el artículo 22 bis de la Ley 1666 de ministerios. Este establecía tras la modificación que: “Compete a la Secretaría de Derechos Humanos asistir al Gobernador de la Provincia en la coordinación y asesoramiento sobre aspectos referentes a la promoción y defensa de los Derechos Humanos; y en particular: 1º) Intervenir en materia de derechos humanos, su promoción y reafirmación en la sociedad y en los poderes públicos; (...) 7º) Reunir y analizar los archivos históricos de la represión ilegal en la provincia”.

<sup>989</sup> Ley IV 36 (anteriormente 4349) de 23 de marzo de 2007. Esta ley, la cual creaba estas tres instituciones, lo hacía bajo la base de: “La provincia de Misiones consagra el derecho inalienable que poseen los integrantes de la comunidad de conocer la verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muertes, sustracción de menores y toda violación a los derechos humanos relacionada con los hechos de la represión ilegal de la que fueron objeto el pueblo de la Nación entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.

<sup>990</sup> Ley 8003 de 9 de febrero de 2009. El artículo 1 de esta ley establecía que: “Créase la Comisión Provincial por la Memoria de Mendoza, que tendrá como fines esclarecer y dar a conocer la Verdad Histórica de los hechos anticonstitucionales acaecidos durante las dictaduras militares”. Los objetivos de la misma estaban identificados en su art. 2: “Contribuir a mantener viva la historia reciente de nuestro País en la memoria de los mendocinos y transmitir a las futuras generaciones las lecciones y legados de esas épocas. b) Fomentar el estudio, la investigación y difusión de las luchas sociales y populares llevadas a cabo en el territorio de la Provincia y la Nación toda. c) Contribuir a la educación y difusión de este tema. Diseñar contenidos curriculares para la enseñanza básica, media y superior, así como planes de divulgación en los medios de comunicación”.

<sup>991</sup> Ley 12483 de 13 de julio del 2000, modificada por la ley 12611 de 20 de diciembre del 2000. Entre los objetivos de esta comisión se encontraban: “(a) Contribuir a mantener viva la historia reciente de nuestro país en la memoria de los bonaerenses y a transmitir a las futuras generaciones las lecciones y legados de esas épocas; (b) Fomentar el estudio, la investigación y la difusión de los hechos vinculados con el autoritarismo durante todos los golpes militares y, en particular, con el terrorismo de estado durante la dictadura militar instaurada a partir de 1976. Asimismo, fomentar el estudio, investigación y difusión de las luchas sociales y populares llevadas a cabo en el territorio de la Provincia y la Nación toda. (...). (d) Recopilar, archivar y organizar toda la documentación relacionada con los artículos precedentes con el fin primordial de garantizar la preservación (...)”.

<sup>992</sup> Decreto 12498 de 12 de octubre del 2000. La creación de esta institución se hacía sobre la base de: “el Derecho de todo integrante de la comunidad a conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y demás violaciones de Derechos Humanos ocurridos en relación con los hechos de la represión ilegal desarrollada entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983” (art. 1). Siendo su objetivo: “la creación de una base de datos unificada que reúna la información obtenida a la fecha y la que continúe obteniendo sobre la verdad de lo acontecido en todos los casos de personas que hayan sido víctimas de la desaparición forzada, muerte, sustitución de identidad y otras violaciones a los derechos humanos como consecuencia del accionar represivo de las fuerzas armadas o de seguridad en el período Indicado en el artículo 1º” (artículo 3).

en el período entre 1976 y 1983, debido a que, tal y como se expresaba en el considerando de este decreto:

“(…) cualquier limitación al acceso de información y documentación podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables, ubicando al ESTADO ARGENTINO por fuera del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del Derecho internacional de los derechos humanos”.

Como puede desprenderse de todo lo anterior, las políticas archivísticas llevadas a cabo tanto por el Gobierno central, como por las distintas provincias iban dirigidas de forma específica a que víctimas y sociedad vieran satisfecho su derecho a la verdad.

#### **1.19. Marruecos.**

Una vez lograda la independencia de Francia en 1956, el Rey Hassan II gobernó con dureza el país desde 1961 como ya hiciera su padre, y antecesor en el trono, Mohamed V.

Tras su muerte en 1999 su hijo, Mohamed VI, en respuesta a las presiones sociales que pedían acciones dirigidas a la gestión de las violaciones del pasado<sup>993</sup>, creó bajo decreto presidencial la Comisión de la Equidad y la Reconciliación<sup>994</sup>. Esta comisión nació como un acuerdo entre Mohammed VI con sectores de la izquierda marroquí, antiguos oponentes al régimen de Hassan II, la mayoría de los cuales había pasado tiempo en prisión<sup>995</sup>.

La comisión fue creada pues como un instrumento para dar respuesta a las demandas de verdad de las víctimas. Y es que pese a que no portaba el apelativo

---

<sup>993</sup> En 1999 la sociedad civil marroquí ya empezó a organizarse para pedir al Gobierno entrante la investigación de los crímenes cometidos durante régimen anterior. Muestra de ello es la unión de un grupo de antiguos presos políticos que formaron el llamado *Forum Vérité et Justice*. Entre sus miembros destaca Driss Benzekri, futuro presidente de la Comisión de la Equidad y la Reconciliación. Véanse, OPGENHAFFEN, V., FREEMAN, M., “Transitional Justice in Morocco: A Progress Report”, *International Center for Transitional Justice*, 2005, p. 12. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Progress-Report-2005-English.pdf> (Consultado el 13 de junio de 2016); SLYOMOVICS, S., “Torture, Recovery, and Truth in Morocco”, en VV.AA (eds.), *Experiments with Truth...* op.cit., pp.213-230.

<sup>994</sup> Decreto real 1.04.42 de 10 de abril de 2004.

<sup>995</sup> HAZAN, P., “The nature of sanctions: the case of Morocco’s Equity and Reconciliation Commission”, *International Review of the Red Cross*, vol. 90, 2008, núm. 870, p.403.

“verdad” en su nombre propio, Mohammed VI sí que específico en su discurso de presentación que esta comisión haría las veces de comisión de la verdad<sup>996</sup>.

La fundamentación de su creación estaba perfectamente delimitada en su mandato:

“Inspired by the principals and provisions of the international legislation of human rights and the regulations and rules provided for within the context of the United Nations in that regard, as well as the principal lessons drawn from the different experiences of the nations involved in reconciliation processes, in order to preserve the memory, to do justice to the victims and consolidate the national unity by the creation of truth and reconciliation commissions governed by the rules of justice and equity, through an extrajudicial settlement of the cross human rights abuses”<sup>997</sup>.

Así mismo se especificaba en las tareas encomendadas a la comisión:

“To establish the nature and the scale of the gross human rights abuses committed in the past, examined within their context and in the light of the human rights rules and values as well as the principles of democracy and the rule of law, through investigation, information gathering, consulting the official archives and collecting from any party information and data useful to determine the truth”<sup>998</sup>.

La Comisión de la Equidad y la Reconciliación de Marruecos se convertía de esta manera en el primer organismo de estas características creado en un país árabe<sup>999</sup>.

---

<sup>996</sup> En el propio informe final de la comisión se recoge en el mismo inicio que: “La Instancia Equidad y Reconciliación (IER) fue instalada oficialmente por Su Majestad el Rey Mohamed VI el 7 de enero de 2004. En el discurso que pronunció en esta ocasión, el Soberano otorgó a la Instancia una dimensión histórica y le confió importantes responsabilidades al definirla como una comisión para la verdad y la equidad”. INSTANCE EQUITÉ ET RÉCONCILIACION, *Rapport Final*, 2005.

<sup>997</sup> Decreto real 1.04.42, Preámbulo.

<sup>998</sup> *Ibid.*, artículo 9.1.

<sup>999</sup> OPGENHAFFEN, V., FREEMAN, M., “Transitional Justice in Morocco...”, *op.cit.*, p. 2.

## 1.20. República Democrática del Congo.

Lograda la independencia de Bélgica en 1960, Sese Seko tomó el control *de facto* del país desde 1965 hasta 1997. Tras su salida del poder se inició un largo período de guerra civil que derivaría en conflicto internacional, lo que obligó a la entrada de las Naciones Unidas y a la creación de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo<sup>1000</sup>.

De entre los acuerdos de paz que fueron firmados, el Acuerdo de Pretoria incluía entre sus cláusulas la creación de una comisión de la verdad como institución que ayudara a democratizar el país<sup>1001</sup>. La comisión de la verdad posteriormente fue incluida en el artículo 154 de la “constitución de transición”, firmada el 4 de abril de 2003, como institución “de apoyo” a la democracia.

La ley de creación de la comisión, atendiendo a los requerimientos del artículo 160 de la constitución<sup>1002</sup>, fue adoptada el 30 de julio de 2004 por el Presidente Joseph Kabila<sup>1003</sup>. La exposición de motivos de ley definía la comisión de la verdad como:

“(…) une des Institutions d’appui à la démocratie pendant la période de transition, et lui confie comme mission de rétablir la vérité et de promouvoir la paix, la justice, la réparation, le pardon et la réconciliation, en vue de consolider l’unité nationale (...). Cette phase de quête de la vérité est la condition majeure pour la création d’un climat harmonieux et confiant dans lequel la réconciliation et la paix prospéreront”.

La verdad, a los efectos de entender su posición dentro del mandato, fue definida en su artículo 4 como:

“(…) la manifestation claire et objective de la réalité historique des faits, crimes et violations des droits de l’homme ayant directement ou indirectement, dans la

---

<sup>1000</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Resolución 1279 (1999)*, Doc. S/RES/1279 (1999), 30 de noviembre de 1999.

<sup>1001</sup> Inter – Congolese Dialogue. Political Negotiation on the Peace Process and on Transition in the DRC. Pretoria, 16 de diciembre de 2002.

<sup>1002</sup> Este artículo establecía que todas las atribuciones de las llamadas “instituciones de apoyo a la democracia” serían determinadas mediante ley.

<sup>1003</sup> Ley 04/108 de 30 de julio 2004.

période concernée, causée à une personne ou à un groupe de personnes un préjudice tant moral, physique, social que matériel”.

A esta comisión, sin embargo, como relata Mark Freeman, le faltó credibilidad debido a que, aunque contaba con un mandato lo suficientemente amplio y completo que le facultaba a emprender investigaciones serias para hallar la verdad de lo ocurrido, estuvo compuesta únicamente por representantes de los partidos involucrados en la guerra, por lo que no se llevó a cabo investigación seria alguna sobre los abusos cometidos en el pasado, o dicho de otra manera: “[se] pretendió lograr la reconciliación sin establecer la verdad”<sup>1004</sup>.

### **1.21. Colombia.**

Colombia constituye uno de los escenarios más paradigmáticos dentro de la práctica estatal en derecho a la verdad, debido a la complejidad de su situación política y del mismo conflicto, cuyo inicio se remonta a los años sesenta.

Desde hace largo tiempo, aunque en especial desde 2005 con la adopción de la Ley 975 (“de Justicia y Paz”), ha venido sucediéndose la aprobación de un conjunto de medidas típicamente transicionales, muchas de ellas encaminadas al conocimiento de la verdad, aunque fuera del prototipo de este contexto, debido a que el conflicto seguía aún latente cuando se implementaron.

Las medidas adoptadas por Colombia a este respecto se enmarcan dentro de lo que la propia Comisión IDH ha denominado “marco normativo en justicia de transición”, por tratarse de medidas, como ya hemos comentado, encuadradas dentro de dicha disciplina.

En efecto, dentro de su cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Comisión IDH identificó como leyes integrantes del “marco normativo colombiano en justicia transicional” las siguientes: Ley 975 de 2005<sup>1005</sup>, Ley 1312 de

---

<sup>1004</sup> FREEMAN, M., “Africa y sus comisiones de la verdad y la reconciliación”. Disponible en: [http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/1720\\_2.pdf?view=1](http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/1720_2.pdf?view=1) (Consultado el 13 de junio de 2016). En este mismo sentido se ha pronunciado acerca de esta comisión Eduardo González Cueva: GONZÁLEZ CUEVA, E., “¿Hacia dónde van las comisiones...”, *op.cit.*, p.352.

<sup>1005</sup> Ley 975 25 de julio de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

2009<sup>1006</sup>, Ley 1424 de 2010<sup>1007</sup>, Acto Legislativo núm.1 de 2012<sup>1008</sup> y Ley 1592 de 2012<sup>1009</sup>.

El presente epígrafe lo conformará un análisis de la primera de ellas, mientras que el Acto Legislativo núm. 1 y la Ley 1424 serán incorporados al punto dedicado a este Estado en la siguiente parte junto con la Ley 1448 de 2011<sup>1010</sup>, reconocida esta última por la Comisión IDH como un mecanismo de reparación<sup>1011</sup>.

Colombia, como los demás Estados tras una etapa de violaciones manifiestas de derechos humanos, cuenta con la obligación de investigar las causas que dieron origen al conflicto como medio de salvaguardar el derecho a la verdad de víctimas y sociedad. Sin embargo, el cumplimiento de esta obligación por parte de Colombia no fue emprendido dentro del período al que podemos calificar como “transicional”, es decir, una vez finalizadas las violaciones; sino que estas medidas fueron adoptadas mientras el conflicto aún seguía latente. Y es que, al contrario de la práctica de otros Estados, en el caso colombiano la verdad fue utilizada como un medio de pacificación, o como bien ha descrito Alejandro Aponte, como medio de “superación de un presente conflictivo”<sup>1012</sup>.

La exigencia social a la que aludíamos en el epígrafe inaugural de este trabajo acerca del desarrollo de la práctica de los Estados en derecho a la verdad, estaba presente, por supuesto, también en Colombia. Empero, esta exigencia no solo incluía el conocimiento de los hechos, sino también un valor superior como es la consecución de la paz. En este mismo sentido se han pronunciado Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon, al aludir a que la inclusión dentro de la Ley 975 del derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad venía referida a que:

---

<sup>1006</sup> Ley 1312 de 9 de julio de 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el principio de oportunidad.

<sup>1007</sup> Ley 1424 de 29 de diciembre de 2010, por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.

<sup>1008</sup> Acto Legislativo núm.1 de 31 de julio de 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

<sup>1009</sup> Ley 1592 de 3 de diciembre de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.

<sup>1010</sup> Ley 1448 de 10 de junio de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

<sup>1011</sup> La Ley 1312 no será objeto de análisis alguno al carecer de referencia alguna al derecho a la verdad. La Ley 1592 únicamente contenía una serie de modificaciones de la Ley 975.

<sup>1012</sup> APONTE CARDONA, A., “Colombia”, en AMBOS K., MALARINO, E., ELSNER, G. (eds.), *Justicia de transición... op.cit.*, p.237.



“(…) solo si se conoce y comprende la verdad acerca de las estructuras que hicieron posible que el paramilitarismo surgiera y se convirtiera en un grave factor del conflicto armado en Colombia, tales estructuras podrán ser efectivamente desmontadas y podrán comenzar a idearse mecanismos institucionales que impidan su reproducción”<sup>1013</sup>.

La necesidad de que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación fueran respetados en un escenario de construcción de una sociedad pacífica, fue lo que motivó la incorporación de políticas de justicia de transición a la solución del conflicto colombiano. Colombia entendió que para alcanzar la paz era necesario, como paso previo ineludible, conocer la verdad.

El derecho a la verdad dentro de la Ley 975 venía reconocido en los artículos 1 (como uno de los objetivos a alcanzar de la propia ley<sup>1014</sup>), 4<sup>1015</sup>, 7<sup>1016</sup> y 15<sup>1017</sup>. La conjugación entre el respeto a este derecho y la pacificación del conflicto se centraba en

---

<sup>1013</sup> UPRINMY YEPES, R., SAFFON SANÍN, M.P., “La ley de ‘justicia y paz’: ¿una garantía de justicia y paz y de no repetición de las atrocidades?”, en VV.AA, *¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia*, Bogotá, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2006, p.185.

<sup>1014</sup> “La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

<sup>1015</sup> “El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”.

<sup>1016</sup> “La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad”.

<sup>1017</sup> “Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la ver dad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos. La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura”.

el otorgamiento de beneficios penitenciarios (entre cinco y de ocho años de pena) a quien voluntariamente confesara y ayudara así al conocimiento de la verdad.

Empero, no es baladí apuntar, como recogía el artículo 7 original, que los procedimientos judiciales no limitaban los esfuerzos que pudieran iniciarse para averiguar la verdad extrajudicial, no obstante, la verdad cuya averiguación se priorizaba en esta ley era una verdad eminentemente judicial. El proceso de investigación (artículos 16-28) se iniciaba con la rendición libre de los hechos del desmovilizado ante el fiscal, el cual, posteriormente, incoaba una investigación para comprobar la veracidad de los mismos. En caso de confirmación, se le formulaban los cargos, los cuales podían ser o no aceptados. En caso afirmativo se le propondría una pena ajustada a los beneficios penales que correspondiera, nunca superior a los ocho años<sup>1018</sup>.

La gran limitación con la que contaba esta ley para lograr una averiguación plena de la verdad era la falta de mecanismo alguno que pudiera garantizar una confesión plena de los hechos por parte del victimario. En efecto, si nos atenemos al literal del artículo 17 podemos apreciar que los paramilitares podrían acogerse a los beneficios otorgados por la ley sin una confesión plena; incluso con información con la que ya contaba la fiscalía<sup>1019</sup>. La verdad conocida por las víctimas, según lo contemplado en esta ley estaría, por ende, limitada a aquello a lo que los paramilitares quisieran que se supiera.

Estas limitaciones al conocimiento de la verdad fueron denunciadas ante la Corte Constitucional de Colombia, la cual, en aplicación del “principio propio de la justicia transicional”, ha venido a establecer unos baremos más justos entre paz y justicia. Es decir, que en la búsqueda del equilibrio entre la paz y la reconciliación (términos no siempre bien utilizados en contextos transicionales, al ser en numerosas ocasiones sinónimos de impunidad), los derechos de las víctimas pueden ser limitados “pero no sacrificados desproporcionadamente en favor de la paz”<sup>1020</sup>. Por ello, la Corte

---

<sup>1018</sup> Un análisis en profundidad del procedimiento recogido por esta ley puede verse en: LAPLANTE, L.J., THEIDON, K., “Transitional justice in times of conflict: Colombia’s Ley de Justicia y Paz”, *Michigan Journal of International Law*, vol. 28, 2006, pp.49-108.

<sup>1019</sup> GÓMEZ ISA, F., “Justicia, verdad y reparación en el proceso de desmovilización en Colombia”, en, GÓMEZ ISA, F. (dir.), *Colombia en su laberinto. Una mirada al conflicto*. Madrid, Catarata, 2008, PP.115-116.

<sup>1020</sup> UPRINMY YEPES, R., SAFFON SANÍN, M.P., “Usos y Abusos de la Justicia Transicional en Colombia”, *Anuario de Derechos Humanos*, núm. 4, 2008, p. 181.

Constitucional pretendió una adecuación lo más cercana posible de la Ley 975 a los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación<sup>1021</sup>.

En lo concreto, y respecto al problema planteado, la Corte Constitucional reconoció la pertinencia de otorgar beneficios penales tales como reducción de penas, amnistías o indultos en pos de alcanzar la paz<sup>1022</sup>. Sin embargo, igualmente, afirmó la existencia de “normas mínimas” a respetar, las cuales aparecen:

“(…) como el límite constitucional inquebrantable del ejercicio del poder de negociación del Estado (...) reconocidas adicionalmente en disposiciones internacionales que han sido libre y soberanamente incorporadas al derecho interno, vinculan al Estado al cumplimiento de una serie de obligaciones irrenunciables relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de infracciones al Derecho internacional Humanitario<sup>1023</sup>”.

Entre estas normas a las que se refería la Corte Constitucional se encontraba, como límite al estándar de investigación propuesto por la Ley 975, el “derecho a la justicia – en particular sobre el componente de verdad individual y colectiva que incorpora este derecho”<sup>1024</sup>. Como desarrollo de la importancia del derecho a la verdad dentro del proceso de negociación entre Estado y paramilitares, la Corte Constitucional reconoció varias de sus vertientes como “el derecho a que los delitos más graves sean investigados” (su contenido mínimo); “el derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los delitos fueron cometidos”; en caso de desaparición forzada, “el derecho a conocer el destino final de la persona desaparecida”; y, en su vertiente colectiva, la necesidad de las sociedades de conocer su propia historia. Habiendo definido estos derechos como vinculantes para el Estado, la Corte Constitucional sentenció:

“(…) los poderes públicos no están autorizados para desconocer estos derechos en nombre de otro bien o valor constitucional, pues los mismos constituyen el límite

---

<sup>1021</sup> Para un análisis de este principio, véase lo ya analizado sobre él bajo los argumentos de los jueces de la Corte IDH, Cançado Trindade y Martín Abregú, y de Juan Méndez. Véase el epígrafe 2 del capítulo IV.

<sup>1022</sup> CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, sentencia C-370/2006 del 18 de mayo de 2006, Expediente D-6032, párr. 6.2.2.1.7.2.

<sup>1023</sup> *Ibid.*, párr. 6.2.2.1.7.3.

<sup>1024</sup> *Ibid.*, párr. 6.2.2.1.7.4.

al poder de configuración del congreso, de gestión del gobierno y de interpretación judicial. Se trata, como se señaló en la parte anterior de esta decisión, de normas constitucionalmente vinculantes para todos los poderes públicos, cuya eficacia no se reduce ni suspende por encontrarse el Estado en tiempos de excepción o en procesos de paz”<sup>1025</sup>.

La Corte reconocía la obligación del Estado de respetar el derecho a la verdad de las víctimas, incluso no habiendo concluido el propio conflicto. En consecuencia, y para una mejor aplicación de los estándares en derecho a la verdad, la Corte Constitucional sentenció que la “versión libre” a la que se hace referencia en el artículo 17 de la Ley 975, habría de ser “completa y veraz”<sup>1026</sup>.

Por su parte, esta falta de respeto a los derechos de las víctimas por parte de la Ley 975 también llegó hasta la Corte IDH. En el caso *Masacre de la Rochela c. Colombia* se le pedía a la Corte IDH “establecer principios generales que permitan un proceso de desmovilización que respete los principios y estándares establecidos en materia de verdad, justicia y reparación”<sup>1027</sup>.

Con respecto al papel que jugaba al derecho a la verdad como freno a políticas que pudiera emprender el Estado para alcanzar una posible pacificación del conflicto, la Corte IDH afirmó que:

“En casos de graves violaciones a los derechos humanos, las obligaciones positivas inherentes al derecho a la verdad exigen la adopción de los diseños institucionales que permitan que este derecho se realice en la forma más idónea, participativa y completa posible y no enfrente obstáculos legales o prácticos que lo hagan ilusorio”<sup>1028</sup>.

De esta manera, ningún plan de pacificación podría sacrificar de forma completa el derecho a la verdad de víctimas y sociedad, como tampoco favorecer una impunidad total como el medio idóneo para alcanzar la reconciliación nacional. Límites al derecho a la justicia sí podrían ser concedidos pero siempre y cuando las competencias

---

<sup>1025</sup> *Ibid.*, párr. 6.2.2.1.7.11.

<sup>1026</sup> *Ibid.*, apartado VII, párr.12.

<sup>1027</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *de la masacre de la Rochela c. Colombia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de enero de 2008, en *Serie C: Núm. 163*, párr.191.

<sup>1028</sup> *Ibid.*, párr.195.

investigadoras del Estado, que le facultarán para hallar la verdad de lo ocurrido, no sean por completo eliminadas.

En conclusión, la adopción de la Ley 975, junto con la matización de su alcance por la Corte Constitucional, sientan las bases de la práctica de Colombia en derecho a la verdad.

## **1.22. Tailandia.**

Alejada del estereotipo común de comisión de la verdad, en Tailandia los graves altercados ocurridos en el sur del país desde finales de 2003 propiciaron que el Gobierno del Primer Ministro, Thaksin Shinawatra, tras numerosas consultas con académicos sobre propuestas para gestionar los numerosos altercados<sup>1029</sup>, optara por instaurar la Comisión Nacional de Reconciliación como un órgano tanto para la investigación de estos sucesos como para crear puentes para la reconciliación de la sociedad. Constituida por decreto presidencial de marzo de 2005<sup>1030</sup>, los motivos que se adujeron presentaban la creación de la comisión de la verdad como la respuesta ante la acuciante necesidad de la sociedad de conocer lo ocurrido, como ocurriera ya en otros contextos aquí estudiados:

“Following the unrest, many people in Thailand and in the international community wanted an explanation of the incidents and the issues surrounding them. In order to provide such an explanation, the incidents must be investigated to clearly determine the truth about the root causes of the conflict and violence; whether related to violence in political demonstrations, violations of human rights, loss of life, physical or mental injuries, loss of property, or other forms of damage that occurred. Such an investigation should help clarify to everyone the reasons for the conflict so that they will better understand why such division occurred in our society. It will also assist us in providing restoration to those affected and help prevent such violence and loss from ever occurring again”.

Por ello, esta comisión tenía como cometido:

---

<sup>1029</sup> HUMAN RIGHTS WATCH, “No One Is Safe. Insurgent Attacks on Civilians in Thailand’s Southern Border Provinces”, vol. 19, 2007, núm. 13, p.38.

<sup>1030</sup> Decreto presidencial 104/2548 de 28 de marzo de 2005.

“Pursuant to the Prime Minister’s Order establishing the National Reconciliation Commission (NRC), charged with recommending policies, measures, mechanisms and ways conducive to reconciliation and peace in Thai society, particularly in the 3 southern border provinces, as well as submitting a report to the Prime Minister and the public, details as referenced”<sup>1031</sup>.

Las facultades que les fueron concedidas a esta comisión difieren de las que tradicionalmente hemos venido comprobando que le han sido otorgadas a las comisiones de la verdad, como se estableció en su propio informe final:

“(…) the reconciliation process in Thai society differs from the work of truth commissions elsewhere. It is more than solving the ongoing violence in the southern border provinces, as it is an effort to use peaceful means to build a desirable political community that is strong and secure, where everyone has dignity and all live together in friendship”<sup>1032</sup>.

En efecto, y es que, aparte de su competencia para investigar los abusos de derechos humanos y publicar un informe que recogiera la verdad sobre los hechos y recomendaciones para su no repetición, debido a que esta comisión realizó su trabajo en medio del conflicto, contó con competencias más amplias de lo acostumbrado para una comisión de la verdad<sup>1033</sup>. De esta manera, la Comisión Nacional de Reconciliación de Tailandia se configuró como un organismo casi multidisciplinar donde hallar la verdad sobre lo ocurrido ocupaba una de las partes del trabajo de la comisión.

---

<sup>1031</sup> NATIONAL RECONCILIATION COMMISSION (TAILAND), *Overcoming Violence Through the Power of the Reconciliation* (Unofficial translation), Bangkok, 2006, p.4. Disponible en: [http://www.geneva-academy.ch/RULAC/pdf\\_state/NRC-Report-Overcoming-Violence-through-the-Power-of-Reconciliation-nrc-report-en.pdf](http://www.geneva-academy.ch/RULAC/pdf_state/NRC-Report-Overcoming-Violence-through-the-Power-of-Reconciliation-nrc-report-en.pdf) (Consultado el 13 de junio de 2016).

<sup>1032</sup> REPORT OF THE NATIONAL RECONCILIATION COMMISSION (NRC), *Overcoming Violence... op.cit.*, p.133.

<sup>1033</sup> Esta comisión creó, por ejemplo, la *NRC Fund* (Fondo de la Comisión Nacional de Reconciliación en sus siglas en inglés) que distribuía una pequeña cantidad de dinero a las víctimas para ayudarlas con los gastos derivados de los funerales y otros gastos de inmediata cobertura. Los miembros de esta sección de la comisión se trasladaban para entrevistarse con las víctimas de un incidente concreto, siendo así la primera visita “oficial” que recibían, y rellenaban un informe con la situación que se encontraban. Esta acción era, no obstante, en la práctica un trámite para justificar el gasto monetario más que para dar voz a las víctimas sobre su versión de lo ocurrido. Véase, MCCARGO, D., “Thailand's National Reconciliation Commission: a flawed response to the Southern Conflict”, *Global Change, Peace & Security*, vol.22, 2010, núm. 1, p.77.

### 1.23. Liberia.

El Acuerdo de Paz de Accra, controlado en su aplicación por las Naciones Unidas y su misión en Liberia<sup>1034</sup>, fue firmado el 18 de agosto de 2003 como un intento para la pacificación de un Estado envuelto en conflictos de distinta índole desde 1980.

El artículo 13 de este acuerdo identificaba la creación de una comisión de la verdad como el método adecuado para llegar a una reparación completa de la sociedad<sup>1035</sup>.

El mandato de la comisión, que recogía el pedido del acuerdo de paz<sup>1036</sup>, concretaba que sus objetivos eran: “promote national peace, security, unity and reconciliation”, mediante: “investigating gross human rights violations and violations of international humanitarian law as well as abuses that occurred, including massacres, sexual violations, murder, extra-judicial killings and economic crimes (...) during the period January 1979 to October 14, 2003”.

Como muchas otras comisiones africanas instauradas tras la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, fue seguido este modelo mediante la organización de audiencias públicas. Característico de esta comisión y su tratamiento del derecho a la verdad fue la posibilidad de dar nombres de los responsables y, en concreto, la publicación de la identidad de toda una serie de individuos a los cuales se recomendaba su expulsión de cualquier puesto público. Por otra parte, otra recomendaba que determinados individuos, corporaciones o instituciones fueran juzgados en un hipotético tribunal penal internacional de Liberia<sup>1037</sup>.

---

<sup>1034</sup> CONSEJO DE SEGURIDAD, *Resolución 1509 (2003)*, Doc. S/RES/1509 (2003), 19 de septiembre de 2003.

<sup>1035</sup> Este artículo establecía: “to provide a forum that will address issues of impunity, as well as an opportunity for both the victims and perpetrators of human rights violations to share their experiences, in order to get a clear picture of the past to facilitate genuine healing and reconciliation”.

<sup>1036</sup> Truth and Reconciliation Commission Act, 12 de mayo de 2005. En el preámbulo se disponía: “Recognizing that introspection, national healing and reconciliation will be greatly enhanced by a process which seeks to establish the truth through a public dialogue which engages the nation about the nature, causes and effects of the civil conflicts and the impact it has had on the Liberian nation in order to make recommendations which will promote peace, justice and reconciliation; Recalling that Article XIII of the CPA provides for the establishment of a Truth and Reconciliation Commission to provide a forum that will address issues of impunity, as well as an opportunity for both the victims and perpetrators of human rights violations to share their experiences in order to get a clear picture of the past to facilitate genuine healing and reconciliation”.

<sup>1037</sup> MANGA FOMBAD, C., “Transitional Justice in Africa...”, *op.cit.*, pp. 9-10.

#### **1.24. Bulgaria.**

En 2006 el Parlamento búlgaro aprobó la *Law on Access to and Disclosure of the Documents and Announcement of Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army*, en cuyo artículo 1 se disponía:

“This Act shall provide for access, disclosure, use and keeping the documents of the State security and of the intelligence services of the Bulgarian National Army, including their predecessors and assignees for the period from 9 September 1944 till 16 July 1991”.

El derecho de acceso a esta información, como disposición en la que se sustentaba la creación de esta ley, se recogía en su artículo 31, el cual disponía:

“Anyone shall have the right to:

1. access to the information, collected about him/her or his/her deceased spouse or relatives on direct line up to second level, including in the bodies under Artículo 1;
2. request to be conducted a check up for hem/her or for his/her deceased spouse or relatives on direct line up to second level, including for establishing affiliation to the bodies under Artículo 1;
3. access to the documents of the bodies under Artículo 1 for scientific public and research activity, as provided by the Access to Public Information Act”.

Como mecanismo para concretar el contenido de la ley, esta creó en su artículo 4 la *Commission for disclosure of the documents and for announcement of affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and the intelligence services of the Bulgarian National Army* cuyo cometido era “performs the policy of the Republic of Bulgaria for disclosure, announcement and keeping the documents of the State Security and the intelligence services of the Bulgarian National Army”.

El acceso a los archivos constituía, así, el modo en el modo en el que Bulgaria, junto con otros Estados post comunistas, defendía el derecho a la verdad de sus víctimas y sociedad.



### **1.25. República Checa.**

Herederio de la anteriormente analizada Oficina de Investigación y Documentación de los Crímenes del Comunismo, en 2007 el Parlamento aprobó la Ley 181/2007 de 8 de junio que creaba el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios.

El preámbulo de dicha ley, que comenzaba con una declaración de intenciones (“Those who do not know their past are doomed to repeat it”), establecía que:

“The Parliament of the Czech Republic, aware of its duty to cope with the consequences of the totalitarian and authoritative regimes of the 20th century, hereby expresses its will to investigate and recall the consequences of the activity of criminal organizations based on the Communist and Nazi ideologies advocating suppression of human rights and rejecting the principles of a democratic state in the years 1938 - 1945 and 1948 – 1989”.

Igualmente, este preámbulo hacía referencia a: “the need to preserve the memory of the huge number of victims and of the losses and damage suffered by the Czech people and other peoples in the territory of the Czech Republic at the time of totalitarian dictatorships” y:

“[T]he state’s obligation to allow the public maximum possible access to the secret activity of the totalitarian and authoritative regimes security services, as an expression of its conviction that unlawful acts of any totalitarian or authoritative regime against citizens must not be protected by secrecy or forgotten, has agreed on the following Act”.

Como forma de concretar las obligaciones del Estado y las necesidades de la población y víctimas a las que esta ley hacía referencia, las funciones de las que disfrutaría el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios se asemejaban a las que tradicionalmente les fueron concedidas a las comisiones de la verdad, a saber: estudiar y evaluar de forma objetiva el totalitarismo comunista e investigar los crímenes producidos por las fuerzas del Estado y el Partido Comunista de Checoslovaquia; analizar las causas de la caída del régimen democrático a manos del comunismo y

documentar la implicación de los nacionales y extranjeros tanto en las actividades del régimen como en su oposición a él; custodiar y hacer accesibles los documentos públicos relacionados con la época represiva (tanto comunistas como nacionalsocialistas) y los pertenecientes a los servicios de seguridad de entonces; publicar los resultados de las investigaciones de la época de violación de derechos humanos y hacerlos accesible al público a través de publicaciones, exhibiciones, seminarios, conferencias, etc<sup>1038</sup>.

Vemos, por tanto, como pese a que no se constituyó una comisión de la verdad en la República Checa, la creación de este tipo de institución, en ánimo de respetar el derecho a la verdad de víctimas y sociedad, recogía las tareas de investigación que le son propias a estas comisiones, así como la sistematización y la publicación de información relacionada con la época represiva; acciones, todas ellas, necesarias para una correcta aplicación del derecho a la verdad.

### **1.26. Ecuador.**

La impunidad generalizada, que produjo la no finalización de los trabajos de la comisión de la verdad de 1996, supuso la intervención de los órganos de la OEA.

La Corte IDH en el caso *Benavides Cevallos c. Ecuador*<sup>1039</sup> y la Comisión IDH en el caso *Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy*<sup>1040</sup>, condenaron al Estado de Ecuador por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Incluso, en el último de estos, Ecuador asumió su responsabilidad internacional.

Como respuesta a estas peticiones, el Gobierno de Rafael Correa el 3 de mayo de 2007 creó una comisión de la verdad “para impedir la impunidad”<sup>1041</sup>. En el preámbulo de la comisión se especificaba que:

“Que en todos los casos e informes de comisiones se recomendó al Ecuador investigar todas las violaciones a los derechos humanos.

---

<sup>1038</sup> Artículo 4, Ley 181/2007.

<sup>1039</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Benavides Cevallos c. Ecuador*, 19 de junio de 1998, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, Núm. 38.

<sup>1040</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *informe núm. 99/00. Caso 11868*, 5 de octubre de 2000.

<sup>1041</sup> Acuerdo Ministerial núm. 305 de 3 de mayo de 2007.

Que numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos no han tenido la oportunidad de ser escuchadas ni tenidas en cuenta, ni se ha hecho nada en el Ecuador para reconocer la memoria de las mismas.

Que una Comisión de la Verdad es el medio idóneo, como se ha demostrado en otros países, para esclarecer violaciones graves a los derechos humanos y para fortalecer la democracia”.

Como se desprende de lo anterior, la obligación de Ecuador de respetar el derecho a la verdad de sus víctimas propició la aparición de su comisión de la verdad.

La prueba que mejor respalda esta afirmación se da, tal y como Jorge Enrique Ibáñez ha analizado<sup>1042</sup>, en la sentencia, ya tratada en este trabajo, de la Corte IDH del caso *Zambrano Vélez y otros c. Ecuador* del 4 de julio de 2007<sup>1043</sup>. Ante la afirmación de este tribunal de emprender una investigación de los hechos “por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad”,

“(...) demuestra su interés de tutelar estos derechos toda vez que el Presidente de la República creó[...] ‘La Comisión de la Verdad’, entidad encargada de investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre los años 1984 y 1988 y otros periodos”<sup>1044</sup>.

La Corte IDH condicionó el respeto del Estado de Ecuador al derecho a la verdad de las víctimas y sociedad a que la comisión de la verdad cumpliera con una serie de requisitos. Primero, que las características propias de esa comisión (objeto, procedimiento, estructura y finalidad del mandato) puedan preservar efectivamente la memoria histórica, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Y segundo, que en ningún caso la creación de la comisión de la verdad pudiera producir la extinción de la acción de la justicia, pues:

---

<sup>1042</sup> IBÁÑEZ NAJAR, J.E., *Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad*, Madrid, Instituto Berg, 2014, p.148.

<sup>1043</sup> Ver análisis sobre esta sentencia en el epígrafe 3 del capítulo VII.

<sup>1044</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Zambrano Vélez y otros c. Ecuador*, 4 de julio de 2007, en *Serie C: Núm. 166*, párr. 127.

“Las verdades históricas que a través de ese mecanismo se logren, no deben ser entendidas como un sustituto del deber del Estado de asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales por los medios jurisdiccionales correspondientes, ni con la determinación de responsabilidad internacional que corresponda a este Tribunal. Se trata de determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí, pues tienen todas un sentido y alcance propios, así como potencialidades y límites particulares, que dependen del contexto en el que surgen y de los casos y circunstancias concretas que analicen”<sup>1045</sup>.

La comisión de la verdad de Ecuador cumplía, por tanto, con las obligaciones que el Estado estaba llamado a respetar en materia de verdad siempre y cuando su mandato estuviera en condiciones de satisfacerlas, como en efecto hizo.

En clave de acceso a los archivos, la comisión de la verdad recomendó, dentro de las recomendaciones orientadas a la “revelación pública y completa de la verdad” la creación de un “[a]rchivo de la memoria de las violaciones de derechos humanos en el Ecuador que tenga como punto de partida el conjunto de documentos oficiales desclasificados y otros medios de prueba en poder de la Comisión de la Verdad”<sup>1046</sup>. Teniendo esta recomendación presente, en 2010, se firmó un convenio interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado y el Archivo Nacional de Ecuador “para el manejo archivístico y custodia de cerca de 500.000 folios incautados, que permiten profundizar la investigación sobre violaciones de los derechos humanos y el acceso a la sociedad a conocer dichos archivos”<sup>1047</sup>.

Este conjunto de medidas suponen un gran avance en el respeto integral del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad ecuatoriana.

---

<sup>1045</sup> *Ibid.*, párr.128.

<sup>1046</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD DE ECUADOR, *Informe final – Sin verdad no hay justicia (Resumen ejecutivo)*, Quito, 2010, p.406.

<sup>1047</sup> VARGAS, J., “Verdad, Justicia y Reparación en Ecuador”. Disponible en: [https://www.academia.edu/12029581/Justicia\\_transicional\\_en\\_Ecuador](https://www.academia.edu/12029581/Justicia_transicional_en_Ecuador) (Consultado el 10 de junio de 2016). Otras institución surgida de recomendaciones de la comisión de la verdad fue la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad, la cual pasa a ser desde 2012 la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, unidad especial de la Fiscalía, cuyo objetivo es “coordinar, apoyar e investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad con competencia en todo el territorio nacional”. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos*. Disponible en: <http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/servicios/fiscalias-especializadas/comision-de-la-verdad.html> (Consultado el 10 de junio de 2016).

### 1.27. Kenia.

El camino hacia la creación de una comisión de la verdad en Kenia fue largo. Pese a que la comisión fue creada en 2008<sup>1048</sup>, los primeros intentos se dieron en abril de 2003 con la creación de un Cuerpo Especial para el establecimiento de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación. Este órgano realizó audiencias públicas alrededor de todo el país y constató que la mayoría de la población vería con buenos ojos que una comisión de la verdad fuera constituida para investigar los abusos a los derechos humanos cometidos tras su independencia en 1963 hasta 2002, es decir, bajo el mandato de Danial Arab Moi<sup>1049</sup>.

Sin embargo, a pesar de la evidente voluntad popular al respecto, no sería hasta los disturbios post electorales de 2007 cuando varias comisiones de investigación fueron instauradas<sup>1050</sup>. Su creación fue favorecida por la mediación liderada por la comunidad internacional, representada por un panel en el que participaban eminentes personalidades africanas, entre las que destacaba Kofi Annan, antiguo Secretario General de la ONU<sup>1051</sup>.

La Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de Kenia fue fundada bajo compromiso de las dos partes en conflicto (Mwai Kibaki, del partido PNU y Raila Odinga, del partido ODM) de lidiar con el pasado de violencia. El mandato de esta comisión era:

“(…) establishing an accurate, complete and historical record of violations and abuses of human rights and economic rights inflicted on persons by the State, public institutions and holders of public office, both serving and retired, between 12<sup>th</sup> December, 1963 and 28<sup>th</sup> February 2008.

(…)

---

<sup>1048</sup> Ley para la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación, 23 de octubre de 2008.

<sup>1049</sup> TRUTH, JUSTICE AND REPARATION COMMISSION, *Final report*, Nairobi, 2013, pp.7-8.

<sup>1050</sup> Entre estas comisiones, la mayoría de ellas con mandato de investigar los disturbios de 2007, destacan: *Commission of Inquiry on Post-election violence* y la *Independent Review Commission on the Elections* y la *National Ethnic and Race Relation Commission*.

<sup>1051</sup> OBEL HANSEN, T., “Transitional Justice in Kenya? An Assessment of the Accountability Process in Light of Domestic and Security Concerns”, *California Western International Law Journal*, vol. 42, 2011, núm. 1, p. 5-7.

Establishing as complete a picture as possible of the causes, nature and extent of the gross violations of human rights and economic rights which were committed during the period between the 12<sup>th</sup> December, 1963 and 28<sup>th</sup> February 2008”<sup>1052</sup>.

El papel que el derecho a la verdad jugaba dentro del mandato de la comisión quedaba claro a raíz de la lectura de los objetivos perseguidos por esta, pese a que el término “verdad” no aparecía más que en el nombre propio de la comisión. El informe final de 2013, por su parte, sí dejaba sentado que la creación de la comisión respondía al cumplimiento de las exigencias que emanaban de la consagración del derecho a la verdad como derecho dentro del organigrama del DIDH:

“The right to the truth is now [2013] an established right in international human rights law. Indeed, there is a burgeoning jurisprudence and literature recognizing and affirming the right of victims of gross violations of human rights to know and be informed of the truth. (...). As such, the mandate of the Commission in relation to establishing the truth is drawn from the spirit and totally of the Act and in particular, from the provisions of section 5 (a) and (b) of the Act”<sup>1053</sup>.

Independientemente de la falta de mención al derecho a la verdad dentro del mandato de la comisión, de lo estudiado hasta ahora tanto en la práctica comparada como en la internacional, se desprende que la comisión instaurada en Kenia, tras lo contenido en su mandato, cumpliría con los estándares internacionales en materia de derecho a la verdad.

---

<sup>1052</sup> Ley para la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación, 23 de octubre de 2008, art. 5 a) y b).

<sup>1053</sup> TRUTH, JUSTICE AND REPARATION COMMISSION, *Final report... op.cit.* p.41.

### 1.28. Islas Salomón.

El archipiélago vivió sumido en una cruenta guerra civil entre 1998 y 2003 que dejó un saldo de doscientos muertos y más de veinte mil desplazados. Entre las medidas de justicia de transición que se implementaron<sup>1054</sup>, y dentro del campo de derecho a la verdad, encontramos la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Islas Salomón; comisión auspiciada por Desmond Tutu, Presidente de su homónima sudafricana.

Esta comisión fue creada por una ley *ad hoc* de 28 de agosto de 2008<sup>1055</sup>. En el preámbulo de la misma se establecía:

“**AND WHEREAS** since the end of the conflict numerous informal traditional and church reconciliation ceremonies have been held at different levels:

**AND WHEREAS** the overwhelming desire and aspirations of the people is for the customary reconciliation process to be supplemented by establishing a forum in which, both the victims and the perpetrators of human rights violations could share their experiences so as to get a Clearer understanding of the past in order to facilitate healing and true reconciliation within the communities”.

Para la concreción de lo anterior, entre las funciones de la comisión se encontraban:

“(a) to investigate and report on the causes, nature and extent of the violations and abuses referred to in subsection; (...), (b) to inquire into and report on the facts and circumstances surrounding the raid of police armouries and the destruction or damage caused to public property for the purposes of reconciliation; (...), (c) to work to help restore the human dignity of victims and promote reconciliation”<sup>1056</sup>.

Al igual que ocurría en la comisión de Kenia, la falta de mención al derecho a la verdad dentro del mandato no restó ápice de importancia al papel que este derecho contó en la formación de esta comisión. El propio informe final matizó que “[t]he

---

<sup>1054</sup> Para un análisis más profundo sobre la transición en Islas Salomón puede consultarse: JEFFERY, R., “Enduring tensions: transitional justice in the Solomon Islands”, *The Pacific Review*, vol. 26, 2013, núm. 2, pp. 153-175.

<sup>1055</sup> Ley para la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación, núm.5 de 2008, 28 de agosto de 2008.

<sup>1056</sup> *Ibid.*, artículo 5.2.

powers of the TRC related to the implementation of its mandate concerning the promotion of national unity and reconciliation through the process of truth seeking”<sup>1057</sup>.

El respeto al derecho a la verdad de las víctimas se veía pues como herramienta fundamental para arribar a una plena reconciliación social.

### 1.29. Guatemala.

Pese a que tras la publicación del informe final de la CEH, ninguna de sus recomendaciones fue implementada, constatamos que en esta época hubo algunos avances en materia de derecho a la verdad. En este sentido se ha pronunciado Mónica Leonardo: “siendo que el acceso a la información facilita el ejercicio del derecho a la verdad, las pruebas documentales que aporta el Archivo Histórico de la Policía Nacional, así como la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, constituyen pasos significativos”<sup>1058</sup>.

Este primer archivo, surgido de un registro efectuado por la Procuraduría General de la Nación de una antigua instalación de la Policía Nacional en 2005, contiene una ingente cantidad de información sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado desde 1882 hasta 1997, lo cual supone un gran avance en el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado en el país<sup>1059</sup>.

La titularidad de este archivo pasó en 2009 a manos del Archivo General de Centro América<sup>1060</sup> y su acceso está regulado desde 2008 por la Ley de Acceso a la Información Pública, en cuyo artículo 24 se contempla: “[e]n ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad”<sup>1061</sup>.

---

<sup>1057</sup> SALOMON ISLANDS TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, *Confronting the Truth for a better Solomon Islands*, Honiara, 2012, p.13.

<sup>1058</sup> LEONARDO, M., “Luces y sombras en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación”, en VV.AA., *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011.p. 196.

<sup>1059</sup> *Ibid.*

<sup>1060</sup> Creado mediante Decreto 1768 de 25 de junio de 1968.

<sup>1061</sup> Con motivo del tercer aniversario de la publicación de esta ley, la Vicenpresidencia de la República, ocupada por entonces (junio de 2011) por Rafael Espada, publicó una versión comentada de la Ley de Acceso a la Información Pública. En el comentario dedicado a este art. 24 podía leerse: “Los resultados de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos no son confidenciales. Los sujetos obligados no pueden restringirlos argumentando que se trata de asuntos de seguridad nacional. Ejemplo de ello son los archivos policiales, en donde se registra a las personas que son privadas de libertad. Lo anterior se fundamenta en cuatro principios: 1. *Toda persona tiene derecho a conocer la verdad*. 2. El Estado debe elaborar informes sobre las violaciones a los derechos humanos. 3. El Estado está obligado a crear y conservar los archivos en donde haya registros de violaciones a los derechos humanos. 4. El



Por último, Guatemala también respondió al pedido de la OACNUDH sobre información acerca de buenas prácticas en materia de acceso a archivos en relación con el derecho a la verdad. Junto con el ya mencionado Archivo Histórico de la Policía Nacional y el Archivo Histórico de Centroamérica, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos alegó también el Archivo de la Secretaría de la Paz<sup>1062</sup>, cuyo acceso está regulado por los artículos 10 y 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Siguiendo con el acceso a los archivos, el 5 de marzo de 2009 mediante el acuerdo gubernativo 64-2009, se creó la Comisión de Desclasificación de los Archivos Militares, encargada de revistar documentación perteneciente a las fuerzas armadas entre 1954 y 1996 y permitiendo el libre acceso a la misma<sup>1063</sup>.

Como puede desprenderse del análisis de todas estas actuaciones, la práctica de Guatemala en derecho a la verdad es sumamente variada debido a la implementación de distintas políticas dirigidas a que las víctimas y la sociedad pudieran conocer la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, encontramos graves deficiencias para lograr un íntegro respeto al derecho a la verdad no ya solo con una mejora en el acceso a los archivos que han sido desclasificados, sino también con la creación de un registro unificado de personas desaparecidas<sup>1064</sup>.

En este mismo sentido y como último apunte en la práctica de Guatemala en derecho a la verdad, es importante mencionar el bloqueo del que adolece la Iniciativa de Ley 3590 que crea la Comisión de Búsqueda de Personas, Víctimas de la Desaparición

---

Estado debe permitir el acceso a los archivos en los cuales haya información relacionada con violaciones a los derechos humanos”. Esta versión está disponible en: [http://uip.mingob.gob.gt/images/leyesuip/DIRECCIONSUP\\_LEY\\_DE\\_ACCESO\\_A\\_LA\\_INFORMACION\\_PUBLICA\\_VERSIONCOMENTADA\\_AGOSTO\\_2011.pdf](http://uip.mingob.gob.gt/images/leyesuip/DIRECCIONSUP_LEY_DE_ACCESO_A_LA_INFORMACION_PUBLICA_VERSIONCOMENTADA_AGOSTO_2011.pdf) (Consultado el 10 de junio de 2016). Sin resaltado en el original.

<sup>1062</sup> “La Secretaría de la Paz fue creada en 1997, mediante el Decreto Número 17-97, del 12 de marzo de 1997, el cual fue sustituido por el Acuerdo Gubernativo Número 115-2001, del 13 de marzo de 2001, que la concibe como una entidad de apoyo, asesoría y coordinación del cumplimiento de los compromisos gubernamentales originados de los Acuerdos de Paz, con dependencia inmediata del Presidente de la República y su actuación es regulada a través del Reglamento Orgánico Interno, el cual fue aprobado por medio del Acuerdo Gubernativo Número 430-2001, de fecha 18 de Octubre de 2001”. Véase, GOBIERNO DE GUATEMALA, *Secretaría de Paz*. Disponible en: <http://sepaz.gob.gt/index.php/antecedentes-historicos> (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>1063</sup> Como complemento a esta, en 2011, fuera del objeto temporal de este capítulo, se inauguraría el Centro de Desclasificación de Archivos del Ejército, el cual, sin embargo, cuenta con un sistema de consulta con numerosos obstáculos “ya que se requiere indicar exactamente qué documento se necesita, sin haber tenido posibilidad de examinar los fondos documentales ni revisar un índice o una base de datos previamente. Entonces, no se cuenta con garantías legales de acceso a la información relevante contenida en los archivos militares”. LEONARDO, M., “Luces y sombras en el camino hacia la verdad...”, *op.cit.*, p. 198.

<sup>1064</sup> *Ibid.*, p.199.

Forzada y otras Formas de Desaparición, que al momento de redacción de este trabajo aún no ha sido aprobada. El objetivo de esta iniciativa es:

“(…) regular y establecer las disposiciones dirigidas a determinar la verdad acerca de las circunstancias del tiempo, modo y lugar en la que se dieron las desapariciones forzadas y otras formas de desaparición ocurridas durante el conflicto armado interno y el paradero o destino de las más de cuarenta y cinco mil víctimas dentro del marco de la Constitución Política de Guatemala y los Acuerdos de Paz. Es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público”.

La creación de una comisión de estas características, que averigüe el paradero de las personas desaparecidas, es esencial para un completo respeto del derecho a la verdad pues, en efecto, se trata de la más primigenia de las obligaciones del Estado a este respecto.

### **1.30. Brasil.**

Durante esta época se reconoce el nacimiento de un nuevo organismo, dirigido al conocimiento de la verdad sobre la violación de derechos humanos en Brasil, como es el *Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas*.

Esta institución, creada mediante la ordenanza 204 de 13 de mayo de 2009, tenía como competencia:

“(…) tornar-se espaço de convergência e difusão de documentos ou informações produzidos ou acumulados sobre o regime político que vigorou no período de 1º de abril de 1964 a 15 de março de 1985, bem como pólo incentivador e dinâmico de estudos, pesquisas e reflexões sobre o tema”.

Lo que se pretendía mediante ello era “reunir información sobre los hechos de la historia política reciente de Brasil, y de poner a disposición de la población los archivos

sobre el período comprendido entre las décadas del '60 y '80, y sobre las luchas de resistencia a la dictadura militar”<sup>1065</sup>.

La motivación que llevó al ejecutivo de Dilma Rousseff a la creación de un mecanismo de estas características fue, y apelando a lo establecido en el preámbulo de la ordenanza:

“Considerando que o acesso à informação é parte dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição; Considerando a necessidade de apoiar a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a gestão, preservação e divulgação do patrimônio documental nacional, *valorizando a memória como direito humano fundamental*”.

El acceso del público a esta información era (y es) parte fundamental del respeto íntegro al derecho a la verdad de las víctimas.

---

<sup>1065</sup> GARRETÓN KREFT, F., GONZÁLEZ LE SAUX, M., LAUZÁN, S., *Políticas públicas de verdad y memoria... op.cit.*, p. 221.

## **2. VALORACIÓN FINAL.**

Como síntesis de lo visto a lo largo de esta época dentro con relación a la práctica estatal, debemos constatar primeramente que es más que evidente que se ha producido el mayor registro de actividad estatal dentro de este campo, así como una amplia variedad de políticas dirigidas a su efectiva concreción. Comisiones de la verdad, leyes de acceso a información pública o creación de instituciones dirigidas a preservar archivos son algunas de las iniciativas que se pusieron en marcha al respecto; muchas de ellas como medidas pioneras en este sentido.

Destacables son, sin duda, algunas experiencias que venían a completar o a paliar las deficiencias de las que adolecieron algunos de los mecanismos que se implementaron durante los años ochenta o noventa, pues estos, como ya hemos indicado, no llegaron a cumplir con los requerimientos en derecho a la verdad colectivo. Estos fueron los casos de Uruguay, Perú, Ghana, Paraguay, Chile (el que sería el caso más claro), Argentina, República Checa, Guatemala o Brasil.

Igualmente, se aprecia ya una alta proliferación de Estados latinoamericanos inclinados hacia el respeto del derecho a la verdad colectivo, cuestión que analizaremos con mayor detalle en la siguiente parte. Baste reseñar que, en este período, de los treinta Estados identificados con práctica en la materia, doce proceden de esta región. No obstante, habremos de esperar a finalizar el análisis del conjunto de la práctica estatal (es decir, la práctica estatal hasta 2015) para entrar a valorar la posibles consecuencias jurídicas que esta circunstancia pudiera traer consigo.



## **PARTE IV**

# **CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD Y PROBLEMAS PARTICULARES SURGIDOS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO (2010-2015)**



## **CAPÍTULO IX**

### **SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LA DEFINITIVA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD COLECTIVO EN EL MARCO CONVENCIONAL.**

Por motivos expositivos, abordaremos inicialmente en este capítulo la práctica de los mecanismos convencionales del sistema de Naciones Unidas, en tanto que sobre los documentos que dimanen de, especialmente, la Asamblea General realizaremos un análisis que prestará especial atención al Derecho internacional general.

#### **1. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. LA ACTUALIZACIÓN DEL SIGNIFICADO DEL ARTÍCULO 2.3. DEL PIDCP**

En 2010 el derecho a la verdad era entendido por el Comité DH como la obligación de los Estados de investigar los abusos de derechos humanos tanto en un plano individual, que obligaba a los Estados a incoar investigaciones judiciales, como colectivo, por el cual los Estados cuentan con la obligación de instituir comisiones independientes de investigación para recuperar la verdad histórica.

Como hemos analizado, la existencia de esta obligación vino ya determinada dentro del PIDCP en las OF a España en 2009, y se verá complementada y ratificada un año después en el marco de las OF a Colombia de 2010, acerca del (escaso) alcance de su programa de reparaciones.

En efecto, el Comité DH recomendó a este Estado “que garanti[zara] plenamente el derecho a un recurso efectivo y a una reparación integral”<sup>1066</sup>. Como ejemplo de reparación efectiva, el Comité DH se remitió a los ya estudiados Principios sobre reparaciones<sup>1067</sup> y a “considerar los cinco elementos de este derecho: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no-repetición”<sup>1068</sup>. Recordemos que dentro de estos principios, parte del contenido material del derecho a la verdad (en concreto, la que denominamos verdad judicial colectiva) coincidía con una

---

<sup>1066</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Colombia*, Doc. CCPR/C/COL/CO/6, 6 de agosto de 2010, párr.10.

<sup>1067</sup> Véase el epígrafe 1 del capítulo VI.

<sup>1068</sup> *Ibid.*



de sus medidas destinadas a la satisfacción: “la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad”<sup>1069</sup>.

A pesar de que la verdad se incluye como parte importante de esta “reparación integral” que pregona el Comité DH, no encontramos ninguna referencia directa a ella en este contexto. Sí la encontramos, en cambio, en relación a la decisión del ejecutivo colombiano de extraditar a Estados Unidos a jefes paramilitares para que allí se les juzgara. El Comité DH entendió que una extradición en estas condiciones: “impiden el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y contravienen la responsabilidad del Estado parte de investigar, enjuiciar y castigar las violaciones de los derechos humanos”<sup>1070</sup>.

Esta mención, en referencia al incumplimiento de los artículos 2, 6 y 7 del PIDCP, recuerda a lo que ya establecimos respecto al REIMA en 2007<sup>1071</sup>, donde debido a la condena a muerte de determinadas personas sospechosas de haber cometido violaciones de derechos humanos, no se pudo determinar lo ocurrido. De hecho, este fue el razonamiento llevado a cabo por el Comité DH: con la extradición de algunos jefes paramilitares colombianos a Estados Unidos, se corría el riesgo de que estos fueran condenados a la pena de muerte y, por tanto, no pudieran ser juzgados en su propio Estado y de esa manera se conociera la verdad.

De ese modo, y teniendo en cuenta a su vez lo establecido acerca de las reparaciones en el contexto colombiano, la verdad se constituiría en parte importante dentro de las reparaciones a los Estados Parte del PIDCP según su artículo 2.

Sin embargo, una de las menciones del Comité DH en esta época que mejor contempla el papel que juega el derecho a la verdad dentro del PIDCP, se produjo en varias comunicaciones individuales sobre Argelia en comentario al significado del artículo 2.3.

Tras la aprobación en Argelia de la Disposición legislativa 6/01, numerosos casos llegaron ante el Comité DH ante la falta de investigación de violaciones de derechos

---

<sup>1069</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 60/147, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* [Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005], Doc. A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr.22.

<sup>1070</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Colombia*, Doc. CCPR/C/COL/CO/6, 6 de agosto de 2010, párr.11.

<sup>1071</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la independencia del poder judicial, la administración de justicia y la impunidad. Nota del Secretario General*, Doc. A/62/207, 6 de agosto de 2007, párr. 64 y ss.

humanos por parte de las autoridades argelinas, en alegación a su derecho de acceso a un recurso efectivo según lo estipulado en el artículo 2.3 del PIDCP.

El Comité DH ante estos hechos realizó la siguiente interpretación del contenido del artículo 2.3 del PIDCP:

“De conformidad con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo que incluya: a) la investigación exhaustiva y rigurosa de la desaparición de Kamel Djebrouni; b) la facilitación a la autora de información detallada sobre los resultados de la investigación; c) la puesta en libertad inmediata de su hijo, en caso de que siga recluido en régimen de incomunicación; d) en el caso de que Kamel Djebrouni haya fallecido, la entrega de sus restos a la familia; e) el encausamiento, enjuiciamiento y castigo de los responsables de las infracciones cometidas; y f) una indemnización adecuada a la autora por las violaciones cometidas, así como a Kamel Djebrouni si sigue vivo. El Estado debería igualmente, a pesar de la Disposición legislativa N° 6/01, asegurarse de no atentar contra el derecho a un recurso efectivo de las víctimas de delitos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Además, tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”<sup>1072</sup>.

De entre estas medidas, las dos primeras, tendentes a que las víctimas conozcan lo ocurrido, estarían claramente relacionadas con el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada recogido en el artículo 24.2 de la CDF que recordemos que

---

<sup>1072</sup> *Ibid.*, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Ahmed Zerrougui c. Argelia*, Comunicación 1796/2008, Doc. CCPR/C/108/D/1796/2008, 11 de diciembre de 2013, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Taous Azouz c. Argelia*, Comunicación 1798/2008, Doc. CCPR/C/108/D/1798/2008, 11 de diciembre de 2013, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Djelloul Larbi c. Argelia*, Comunicación 1831/2008, Doc. CCPR/C/108/D/1831/2008, 25 de noviembre de 2013, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Mériem Zarzi c. Argelia*, Comunicación 1780/2008, Doc. CCPR/C/101/D/1780/2008, 19 de mayo de 2011, párr.9; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Yamina Guezout y otros c. Argelia*, Comunicación 1753/2008, Doc. CCPR/C/105/D/1753/2008, 20 de septiembre de 2012, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Taous Djebbar y Saadi Chihoub c. Argelia*, Comunicación 1811/2008, Doc. CCPR/C/103/D/1811/2008, 24 de enero de 2012, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Khirani c. Argelia*, Comunicación 1905/2009, Doc. CCPR/C/104/D/1905/2009, 25 de junio de 2012, párr.9; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Al Khazmi c. Libia*, Comunicación 1832/2008, 4 de septiembre de 2013, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Shanta Sedhai c. Nepal*, Comunicación 1865/2009, Doc. CCPR/C/108/D/1865/2009, 28 de octubre de 2013, párr.10; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Rizvanović c. Bosnia Herzegovina*, Comunicación 1997/2010, Doc. CCPR/C/110/D/1997/2010, 23 de abril de 2014, párr.11.

ampara: “el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”.

Así es, el contenido recogido en el artículo 24.2 de la CDF se integra en su totalidad en dos de las disposiciones que el Comité DH interpreta como propias del artículo 2.3 del PIDCP; a saber: investigación exhaustiva y rigurosa de la desaparición y la facilitación de información detallada sobre los resultados de la investigación<sup>1073</sup>.

De esta opinión fueron también los miembros del Comité DH Fabián Salvioli<sup>1074</sup> y Víctor Manuel Rodríguez Rescia, que establecieron en un voto particular sobre el caso *Ahmed Zerrougui c. Argelia* (en el cual también recoge la interpretación del Comité DH del artículo 2.3)<sup>1075</sup> que:

“Los artículos 45 y 46 del Decreto N° 06-01 favorecen la impunidad y privan a las víctimas de esas graves infracciones, así como a sus familiares, del derecho a un recurso judicial efectivo, impidiéndoles conocer la verdad, hacer valer su derecho fundamental a recurrir a la justicia y a interponer recursos, y obtener una reparación completa”<sup>1076</sup>.

Para estos miembros del Comité DH la falta de posibilidad de interponer un recurso efectivo produce una violación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Por último, y teniendo como base esta interpretación dada sobre la verdad dentro del artículo 2.3, nos referiremos a la OF a Albania de 2013, en donde ante la falta de colaboración de las autoridades albanesas con las griegas por la desaparición de quinientos dos niños romaníes de Albania a manos de la policía griega, el Comité DH estableció: “[e]l Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por cooperar con las

---

<sup>1073</sup> Otro de los requisitos (entrega de los restos en caso de fallecimiento) correspondería al art.24.3 de la CDF (“Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”).

<sup>1074</sup> Este miembro del Comité DH recordemos que fue el también coautor del voto particular, jnto con Helen Keller, en el caso *María Cifuentes Elgueta c. Chile*, donde se recogían las vertientes que, según ellos, poseía el derecho a la verdad dentro del PIDCP.

<sup>1075</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Ahmed Zerrougui c. Argelia*, Comunicación 1796/2008, Doc. CCPR/C/108/D/1796/2008, 11 de diciembre de 2013, párr.10.

<sup>1076</sup> *Ibid.*, p.18, párr.9; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso *Taous Azouz c. Argelia*, Comunicación 1798/2008, Doc. CCPR/C/108/D/1798/2008, 11 de diciembre de 2013, p.18, párr.9.

autoridades griegas a fin de establecer la verdad respecto de la desaparición de esos niños y determinar su paradero”<sup>1077</sup>.

La pregunta aquí podría ser: ¿A qué estaría haciendo referencia el Comité DH al hablar de *verdad* en este contexto? Trayendo aquí lo tratado *supra* sobre el artículo 2.3, este derecho a la verdad quedaría plenamente confirmado en cuanto que será necesaria la incoación de investigaciones penales que den de esta manera respuesta a la verdad requerida por las víctimas. Por otro lado, esta verdad (judicial) serviría como una necesaria reparación a las víctimas, en aplicaciones de lo dispuesto en los Principios sobre reparaciones de 2005 a los que el propio Comité DH se refirió en las OF a Colombia.

Como apelación necesaria para dirigirnos a la vertiente colectiva del derecho a la verdad nos remitiremos a las OF a Togo de 2011 en donde el Comité DH se refirió a la necesidad de que el Estado ayudase a: “(...) perseverar en sus esfuerzos por lograr la pronta conclusión de los trabajos de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación” y a “instruir (...) investigaciones independientes e imparciales para esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidas en 2005 y enjuiciar a los responsables”<sup>1078</sup>.

Ya vimos que el Comité DH en 2009 contempló que España, en correcta aplicación de los artículos 2.1 y 7, debía constituir una “comisión de expertos independientes encargada de establecer la verdad histórica”<sup>1079</sup>. A pesar de que una de

---

<sup>1077</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Albania*, Doc. CCPR/C/ALB/CO/2, 22 de agosto de 2013, párr.20.

<sup>1078</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Togo*, Doc. CCPR/C/TGO/CO/4, 18 de abril de 2011, párr.10. Puede consultarse el informe de la sociedad civil togolese en respuesta a la lista de cuestiones del Comité DH (Doc. CCPR/C/TGO/Q/4) para el cuarto examen periódico a Togo. Disponible: [http://ccprcentre.org/doc/HRC/Togo/TOGO\\_NGO%20Report%20Final%20%2803.03.2011%29.pdf](http://ccprcentre.org/doc/HRC/Togo/TOGO_NGO%20Report%20Final%20%2803.03.2011%29.pdf) (Consultado el 13 de junio de 2016), pp.7 y 9. La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación de Togo fue constituida en 2009 como consecuencia de los acontecimientos que tuvieron lugar durante las elecciones presidenciales de 2005 donde murieron entre cuatrocientas y quinientas personas según estimaciones de la ONU. Esta comisión tenía competencia *ratione temporis* para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en tal acontecimiento.

<sup>1079</sup> En sus últimas OF sobre España de 2015, el Comité DH recordó a España sus recomendaciones de 2009, pese a que no se pronunció de forma expresa sobre su obligación de respetar el derecho a la verdad de víctimas y sociedad, ni sobre la creación de una comisión de la verdad. Sobre medidas orientadas en este sentido dispuso: “El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado” (sin especificar el cariz de dicha investigación, aunque sí se refirió a la obligación de investigar y perseguir penalmente a los culpables); respecto a los hechos de desaparición forzada: “El Estado parte debe revisar su legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”; y, por último, en referencia a la gestión de los archivos contenedores de información acerca de violaciones de derechos humanos: “el Estado parte debe establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos y permitir la apertura de los archivos sobre la base de criterios claros y públicos, de acuerdo con los derechos garantizados por el Pacto”. COMITÉ

las premisas principales de una comisión de la verdad es que esta ha de ajustarse íntimamente a la situación que está investigando al no poder extrapolar de forma íntegra un modelo de comisión de un contexto a otro, el Comité DH también apeló al artículo 2 para indicar que Togo debía, en cumplimiento de este artículo, tanto apoyar los trabajos de la comisión ya construida, como iniciar nuevas investigaciones independientes. En concreto, el Comité DH argumentó que: “el establecimiento de un sistema judicial de transición no excusa el enjuiciamiento penal de las violaciones graves de los derechos humanos”<sup>1080</sup>.

Una vez analizadas ambas caras del derecho a la verdad, no podemos más que constatar que el Comité DH ha realizado una adecuada progresión en lo que al significado del derecho a la verdad se refiere, al haberlo situado, a través de su práctica, dentro de los artículos 2.1, 2.3 y 7, según la vertiente del mismo al que el propio Comité DH se refiera y con las salvedades apuntadas sobre el modo en el que la vertiente colectiva del derecho a la verdad se materializaría<sup>1081</sup>. Del mismo modo, el cumplimiento de los Estados de las obligaciones que emanan de estos artículos supondría de forma paralela un respeto a los derechos de las víctimas a la justicia (en materia de recurso efectivo) y a la reparación (su derecho al conocimiento de los hechos).

---

DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España*, Doc. CCPR/C/ESP/CO/6, 14 de agosto de 2015, párr. 21.

<sup>1080</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Togo*, Doc. CCPR/C/TGO/CO/4, 18 de abril de 2011, párr.10.

<sup>1081</sup> Véase el epígrafe 4 del capítulo VI.

## 2. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

No será hasta 2010 cuando el Comité CT se pronuncie por primera vez sobre el derecho a la verdad. Sin embargo, de todo lo analizado anteriormente se desprende que este Comité pudiera haberse referido con anterioridad a este particular debido a la proliferación de hechos de tortura en multitud de Estados y a la necesidad de que estos fueran investigados para que víctimas y sociedad conocieran la verdad de lo ocurrido. Con todo, hasta los pronunciamientos que a continuación se analizan, el Comité CT se centró en exclusiva en las obligaciones judiciales de los Estados y dejó a un lado el conocimiento de la verdad extrajudicial.

A modo de contextualizar el análisis de la práctica del Comité CT en derecho a la verdad, nos referiremos brevemente a los antecedentes que dieron lugar la aprobación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT)<sup>1082</sup>, texto del que este órgano es garante.

Desde 1948 la preocupación por la proliferación de actos de tortura, y el deseo de castigarla y erradicarla internacionalmente como práctica de Estado, han estado presentes en numerosos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, lo que revela la repulsa y la condena directa e inequívoca de la comunidad internacional ante “una de las violaciones más odiosas de los derechos humanos”<sup>1083</sup>.

El primer texto de vocación universal que introdujo la prohibición de la tortura fue la DUDH en su artículo 5, que prohibía que nadie “fuera sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Sin embargo, parte de la doctrina

---

<sup>1082</sup> Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada el 10 de diciembre de 1984, en BOE de 9 de noviembre de 1987. Ratificada por España el 21 de octubre de 1987. BOE 268 de 9 de noviembre de 1987. Como referencia a los trabajos preparatorios de la Convención CT puede consultarse: NOWAK, M., y McARTHUR, E., *The United Nations Convention against Torture. A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp.18-22. De este mismo autor, NOWAK, M., “Obligations of States to Prevent and Prohibit Torture in an Extraterritorial Perspective”. En GIBNEY, M., y SKOGLY, S., (eds) *Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations*, Pensilvania, University of Pennsylvania Press, 2010, pp.11-29. Para una versión más condensada véase, GRIMA LIZANDRA, V., *Los delitos de tortura y de tratos degradantes por funcionarios públicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pp.456-458.

<sup>1083</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y en particular: la tortura y otros o penas crueles, inhumanos o degradantes. Informe del Relator Especial, Mr. P. Koojimans*, Doc. E/CN.4/1993/26, 15 de diciembre de 1992, párr.9.

consideraba incompleta esta prohibición pues, entre otras carencias reseñables, no establece una mención concreta y clara de qué actos pueden ser considerados tortura<sup>1084</sup>.

Esta misma redacción fue transcrita en el artículo 7 del PIDCP (ya comentado) que volvía a reproducir las mismas carencias que las apuntadas con respecto al artículo 5 de la DUDH<sup>1085</sup>.

La necesidad de concretar qué actos pueden constituir tortura, así como la búsqueda de responsabilidad individual por la comisión de estos crímenes, dieron lugar al inicio de una amplia campaña internacional en contra de la proliferación de esta práctica<sup>1086</sup>. Dicha campaña propició la adopción, por consenso, en el seno de la AG de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes<sup>1087</sup> (Declaración contra la Tortura).

Esta Declaración contiene una definición de tortura más amplia que cualquiera de las dadas hasta entonces. Cualquier acto de tortura era considerado así como “una ofensa de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la DUDH” (artículo 2). Igualmente, se incluyó una disposición que recogía la imposibilidad de justificar, debido a circunstancias excepcionales, la comisión de un acto de tortura (artículo 2.2).

Sin embargo, un paso hacia adelante en la lucha contra la impunidad de los actos de tortura se dio con la Resolución 32/62 de la AG:

“Pide a la Comisión de Derechos Humanos que elabore un proyecto de convención contra la tortura y otros actos y penas crueles, inhumanos o degradantes a la luz de los principios contenidos en la Declaración sobre la

---

<sup>1084</sup> PIÑOL i RULL, J., “Art.5”, en POLS RAFOLS, X., *La Declaración Universal de Derechos Humanos. Comentario artículo por artículo*, Barcelona, Icaria, 1998, p.150. Este mismo autor se cuestiona la concreción de esta prohibición/definición de tortura, pues, a parte de la falta de tipificación de conductas que pueden ser consideradas tortura, tampoco cuenta con una obligación de identificación de los sujetos activos ni pasivos.

<sup>1085</sup> FERNÁNDEZ PUYANA, D., “La noción de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco del Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas”, *American University International Law Review*, núm.21, 2005, p.104. Con respecto al PIDCP, esta noción de tortura ha de ser completada con lo dispuesto en el art. 10.1 para el trato para con las personas privadas de libertad.

<sup>1086</sup> INGELSE, C., *The United Nations Committee Against Torture: An Assessment*, Dordrecht, Kluwer Law International, 2001, p.2.

<sup>1087</sup> Adoptada por la AG en su Resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975. Según lo afirmado por Geoffrey Robertson, será el golpe de Estado perpetrado por el General Pinochet contra el Gobierno democrático de Allende, y la proliferación de actos de tortura como parte de su política de Estado, lo que llevará a la AG a dotar de eficacia a la mera prohibición establecida en la DUDH y el PIDCP. Véase, ROBERTSON G., *Crimes Against Humanity*, Nueva York, New York New Press, 4ªed., 2013, p.376.

Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes”<sup>1088</sup>.

El 10 de diciembre de 1984 fue adoptada la CCT, que mantenía la esencia de la definición de tortura del artículo 1 de la Declaración contra la Tortura:

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas”<sup>1089</sup>.

Como ya anunciáramos al principio de este epígrafe, la inclusión de la práctica del Comité CT en este período, como órgano garante de la CCT, responde a la inclusión del derecho a la verdad en unas OF a Colombia de 2010. Este Comité, a raíz de la

---

<sup>1088</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Proyecto de convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, Resolución 32/62, Doc. A/RES/32/62, 8 de diciembre de 1977, párr.1.

<sup>1089</sup> Siguiendo lo analizando por el José Luís de la Cuesta Arzamendi, la definición de tortura contenida en este art. 1, desde el prisma penal, contenía las siguientes características: delito pluriofensivo, especial, de resultado, doloso, de tendencia (en sentido estricto) y susceptible de comisión por omisión. Véase, DE LA CUESTA ARZAMENDI, J., “Torturas y otros atentados contra la integridad moral” *Harlax*, núm.26, 1998, pp.93 y ss. Para una versión más extendida también del mismo autor, véase, DE LA CUESTA ARZAMENDI, J., *El delito de tortura*, Barcelona, Bosch, 1990, pp.24 y ss. Para David Fernández Puyana de la lectura del art. 1 y 16 (que consagra la prohibición de trato o pena cruel, inhumano o degradante) de la CCT se desprende que “el concepto jurídico internacional de ‘tortura’ y trato o pena cruel, inhumano o degradante requiere de la presencia de tres elementos constitutivos: el material (‘dolores o sufrimientos graves’ infligidos intencionalmente a una persona), el sujeto activo cualificado (funcionario público implicado de manera directa o indirecta) y el elemento teleológico (los dolores o sufrimientos graves deben infligirse con unos fines u objetivos determinados, a decir, obtener de ella -la víctima- o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de determinación)”. FERNÁNDEZ PUYANA, D., “La noción de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...”, *op.cit.*, pp.106-107.



interpretación de la anteriormente comentada Ley 975/2005 de Justicia y Paz<sup>1090</sup>, afirmó lo siguiente:

“Al Comité le preocupa que los mecanismos establecidos por la Ley 975 de 2005 no garanticen plenamente el derecho a la verdad, a pesar de las referencias al mismo en la Ley, y que se limite en la práctica a la verdad procesal. Si bien el Comité reconoce la labor de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, observa que está principalmente integrada por entidades estatales (artículo 14 de la Convención).

*El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas eficaces para garantizar el derecho a la verdad y que considere el establecimiento de una comisión de la verdad autónoma e independiente”*<sup>1091</sup>.

La alegación en estas OF a lo que el Comité CT llama “verdad procesal”, y su inclusión dentro del artículo 14<sup>1092</sup>, hace que debamos precisar, primero, qué se entiende por este concepto y, segundo, qué conexión encontramos entre la verdad “no procesal” y el artículo 14 de la CCT.

En el epígrafe dedicado a Colombia y a la Ley de Justicia y Paz ya afirmamos que el contenido de la misma, en lo que a la verdad se refiere, estaba destinado en su mayor parte a la verdad judicial. Dejando a un lado la obligatoriedad de emprender procesos judiciales en caso de comisión de violaciones de derechos humanos donde se despachen responsabilidades individuales y se conozcan las circunstancias en las que estos hechos concretos fueron cometidos, el Comité CT también entendió que el derecho a la verdad respondería a una realidad más amplia, la cual debe ser conocida fuera del proceso penal.

A este respecto, un importante cariz a tener en cuenta para conocer la valía del conocimiento de la verdad extrajudicial, o extraprocesal, es su conexión con el derecho a la reparación del artículo 14 de la CCT.

---

<sup>1090</sup> Para una análisis de esta ley véase el epígrafe 1.21 del capítulo VIII.

<sup>1091</sup> COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Colombia*, Doc. CAT/C/COL/CO/4, 4 de mayo de 2010, párr.27. El resaltado es del original.

<sup>1092</sup> “Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.

La conexión entre conocimiento de la verdad y la reparación ya la contemplamos dentro del análisis de los Principios sobre reparaciones de 2005 y dentro del sistema interamericano, donde concluimos que esa relación se debía a que el propio desconocimiento de la verdad tanto a nivel individual como colectivo (en consecuencia, por ejemplo, del mantenimiento de una ley de amnistía) impedía a las víctimas ser efectivamente reparadas<sup>1093</sup>. Ambas referencias se fundamentaban *inter alia* en la propia interrelación entre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que defendían Juan Méndez y los jueces de la Corte IDH Cançado Trindade y Abreu Burelli<sup>1094</sup>. Así mismo, acabamos de ver en lo que respecta a la práctica del Comité DH, que él también se pronunció en 2010 respecto a Colombia y la necesidad de averiguar la verdad como una forma de reparación a las víctimas.

La primacía con la que ha contado el proceso judicial en la búsqueda de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ha puesto de manifiesto las carencias de este medio para este propósito<sup>1095</sup>. Y debido sobre todo a la proliferación de los casos de impunidad de los que se han visto beneficiados aquellos que cometieron actos de tortura, como ya comprobamos que hizo el Comité DH, el Comité CT también ha recomendado a los Estados la creación de órganos independientes de investigación, distintos al propio Poder Judicial, para que investiguen casos de tortura producidos en sus jurisdicciones<sup>1096</sup>.

<sup>1093</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Castillo Páez c. Perú*, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de noviembre de 1998, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm.43*, párr.105; ; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe 25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.657, 11. 675 y 11.705. Chile*, 7 de abril de 1998, párr.88.

<sup>1094</sup> Véase, el epígrafe 2 del capítulo IV y el epígrafe 1 del capítulo VI.

<sup>1095</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo III. En este mismo sentido, según Josep Tamarit Sumalla, el motivo reside en las altas expectativas que entraña el proceso vinculado a su dimensión simbólica. Este autor afirma a su vez que “si el Estado no ofrece otros mecanismos mediante los cuales se pueda dar respuesta a la demanda social de verdad, la presión social sobre el sistema penal será inevitable”, TAMARIT SUMALLA, J., “Justicia penal, justicia reparadora y comisiones de la verdad”, en TAMARIT SUMALLA, J., *Justicia de transición, justicia penal internacional y justicia universal*, Barcelona, Atelier, 2010, p.63.

<sup>1096</sup> COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Benin*, Doc. CAT/C/BEN/CO/2, 19 de febrero de 2008, párr.9; COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Honduras*, Doc. CAT/C/HND/CO/1, 23 de junio de 2009, párr.11; COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Hungría*, Doc. CAT/C/HUN/CO/4, 6 de febrero de 2007, párr.16.a; COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Israel*, Doc. CAT/C/ISR/CO/4, 23 de junio de 2009, párr.34; COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Italia*, Doc. CAT/C/ITA/CO/4, 16 de julio de 2007, párr.19; COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Kazajistán*, Doc. CAT/C/KAZ/CO/2, 12 de diciembre de 2008, párr.24; COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Montenegro*, Doc. CAT/C/MNE/CO/1, 19 de enero de 2009, párr.17; COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Nepal*, Doc. CAT/C/NPL/CO/2, 15 de diciembre de 2005, párr.25; COMITÉ CONTRA LA

Siguiendo con esta línea sentada en las OF a Colombia de 2010, una progresión se dio con la OG núm.3 de 2012 sobre el artículo 14. En ella se dedicaba un punto monográfico a la “satisfacción y derecho a la verdad”, cuyo cumplimiento venía precedido del seguimiento a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 (incoar investigaciones judiciales), amén de medidas para la “verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad”<sup>1097</sup>.

Recordemos que esta misma medida era la que ya se encontraba incorporada dentro de los Principios sobre reparaciones de 2005 en calidad de “satisfacción”, la cual se correspondía con la verdad judicial colectiva, esto es, con la incoación de una investigación judicial y la publicación del contenido de la sentencia. No obstante, ya contemplamos que la apelación a una verdad “completa” dejaba abierta la puerta a que cupiera la posibilidad de que fuera otro mecanismo el encargado de dar cobertura a ese tipo de verdad, habida cuenta de las dificultades del proceso penal para ello. De este modo, la pregunta sería ¿cuál sería el medio para hallar una verdad “completa” dentro de la CCT?

Trayendo aquí de nuevo la OF a Colombia de 2010, vemos que el Comité CT, en el marco del artículo 14 de la CCT, se preocupaba porque los mecanismos de reparación de la Ley 975 de 2005 se limitaban a garantizar la “verdad procesal”, lo que propició que recomendara al Estado a que “consider[ara] el establecimiento de una comisión de la verdad autónoma e independiente”<sup>1098</sup>. Y es que, si la verdad judicial es aquella que ampara los derechos individuales de la víctima, en casos de graves violaciones de derechos humanos, donde la tortura ha constituido una práctica generalizada y sistemática, como hemos venido largamente analizando dentro de los mecanismos reguladores de los derechos de las víctimas de desaparición forzada, la verdad judicial no sería considerada como una verdad completa pues la sociedad se alzaría también como sujeto afectado en tales situaciones<sup>1099</sup>.

En efecto, tras una comisión sistemática de violaciones de derechos humanos, para poder cubrir los estándares de reparación afianzados en el artículo 14, en concreto los referentes a la “verdad completa”, serán necesarios mecanismos *ad hoc* con

---

TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Sri Lanka*, Doc. CAT/C/LKA/CO/2, 15 de diciembre de 2005, párr.12.a; COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones del Comité contra la Tortura: Uzbekistán*, Doc. CAT/C/UZB/CO/3, 26 de febrero de 2008, párr.6.b.

<sup>1097</sup> COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observación general N°3 (2012). Aplicación del artículo 14 por los Estados partes*, Doc. CAT/C/GC/3, 13 de diciembre de 2012, párrs.16-17.

<sup>1098</sup> COMITÉ CONTRA LA TORTURA, *Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Colombia*, Doc. CAT/C/COL/CO/4, 4 de mayo de 2010, párr.27. El resaltado es del original.

<sup>1099</sup> Véase el epígrafe 1 del capítulo III y el epígrafe 3 del capítulo VI.

competencia suficiente para estos propósitos, al igual que hemos interpretado que ocurre dentro de la práctica del Comité DH. Y es que, al compartir contenido esta obligación del artículo 14 de la CCT con la identificada dentro del PIDCP, las características que creemos necesarias para su efectivo cumplimiento serían análogas a las identificadas dentro del anterior tratado<sup>1100</sup>.

En conclusión, como ya determinamos respecto al Comité DH conforme a la verdad colectiva, respaldamos que ante situaciones de graves violaciones de derechos humanos donde se han dado casos de tortura sistemática, hallar la verdad extrajudicial se ha de encuadrar como una obligación de los Estados dentro de las medidas de reparación pertinentes, tanto para las víctimas individuales como para la sociedad en su conjunto.

### **3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA.**

Según lo estipulado en el artículo 29.3 de la CDF:

“Cada informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios, observaciones o recomendaciones que considere apropiados. El Estado Parte interesado será informado de dichos comentarios, observaciones o recomendaciones, a los que podrá responder, por iniciativa propia o a solicitud del Comité”.

A fecha de junio de 2016, únicamente contamos con once OF a países: Alemania, Argentina, Armenia, Bélgica, España, Francia, Holanda, Iraq, México, Paraguay y Uruguay, que nos podrán servir de guía para intentar dilucidar de qué modo este órgano ha entendido y entiende el derecho a la verdad recogido en el artículo 24.2.

Del estudio de tales OF se desprende la importancia dada por el Comité DF a la adecuación, dentro de la legislación interna de los Estados Parte, del estatuto de la víctima. En efecto, en caso de un entendimiento restrictivo de lo que podemos considerar “víctima” (no adecuado a lo recogido en el artículo 24.1 de la CDF), las

---

<sup>1100</sup> Véase el epígrafe 4 del capítulo VI.

futuras medidas que podrían adoptarse, con vistas al reconocimiento del derecho a la verdad, “no [podrían] alcanzar a todas las personas físicas que hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”<sup>1101</sup>.

En respuesta al informe presentado por Francia<sup>1102</sup>, el Comité DF expresó su preocupación por el hecho de que para ser considerado “víctima” en el derecho penal francés sea necesario haber sufrido un daño “personal y directo”<sup>1103</sup> por la desaparición; condiciones estas, por tanto, más restrictivas que las recogidas en el artículo 24.1, las cuales amparan a “la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”<sup>1104</sup>.

De igual modo, no solo una definición gramatical del concepto “víctima” limitaría los efectos de medidas orientadas a satisfacer el derecho a la verdad, también una limitación temporal. Tal es el caso de Argentina, en el que, según se recoge en su ordenamiento jurídico, víctimas serán solo aquellos que hayan sufrido una violación de sus derechos por actos ocurridos hasta diciembre de 1983, sin que exista una legislación específica en materia de víctimas para casos ocurridos tras esta fecha<sup>1105</sup>.

Sin embargo, un detenido análisis del contenido del artículo 24.2 nos es brindado en las OF a España de 2013. En efecto, previa recomendación al Estado español de adecuación del estatuto de víctima a lo contemplado en el párrafo 1.º del artículo 24, el Comité DF:

---

<sup>1101</sup> COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA, *Observaciones finales sobre el informe presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, Doc.CED/C/ESP/CO/1, 12 de diciembre de 2013, párr.29.

<sup>1102</sup> COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA, *Observaciones finales sobre el informe presentado por Francia en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, Doc.CED/C/FRA/CO/1, 8 de mayo de 2013.

<sup>1103</sup> *Ibid.*, párr.34.

<sup>1104</sup> *Ibid.*, párr.35.

<sup>1105</sup> COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA, *Observaciones finales sobre el informe presentado por Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, Doc. CED/C/ARG/CO/1, 12 de diciembre de 2013. La recomendación por parte del Comité DF a los Estados de amoldar su legislación interna a la definición de víctima recogida en el art.24.1 es una constante, como se recoge en la mayoría de sus OF. Véase, aparte de las dos ya comentadas: COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA, *Observaciones finales sobre el informe presentado por Uruguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, Doc. CED/C/URY/CO/1, 3 de mayo de 2013, párr.32. COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA, *Observaciones finales sobre el informe presentado por Armenia*, Doc. CED/C/ARM/CO/1, 13 de marzo de 2015, párr.25.

“(…) toma nota que las medidas que esa ley [Ley 52/2007]<sup>1106</sup> prevé para la localización e identificación de las personas desaparecidas dependen de la iniciativa de los familiares. Asimismo, le inquieta la información recibida sobre los diversos obstáculos con los que los familiares se habrían enfrentado en sus búsquedas”<sup>1107</sup>.

El Comité DF dividió la obligación de amparar el derecho a la verdad, de “quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, en dos; a saber: conocer la suerte de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición<sup>1108</sup>.

Como “medida adecuada” (utilizando terminología de la propia CDF), destinada a la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior represión franquista, el Comité DF recomendó:

“(…) que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva”<sup>1109</sup>.

Esta medida, tendente únicamente a la búsqueda de los desaparecidos (en cumplimiento con una de las obligaciones del artículo 24.2), estaría complementada con una segunda:

---

<sup>1106</sup> Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2007, pp. 53410-53426.

<sup>1107</sup> COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA, *Observaciones finales sobre el informe presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, Doc. CED/C/ESP/CO/1, 12 de diciembre de 2013, párr.31.

<sup>1108</sup> A este respecto véase el análisis de, GALELLA, P., “La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas...”, *op.cit.*, p.96.

<sup>1109</sup> COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA, *Observaciones finales sobre el informe presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, Doc. CED/C/ESP/CO/1, 12 de diciembre de 2013, párr.32. Para una ampliación sobre el papel de las exhumaciones de fosas comunes dentro de la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil española y el franquismo, puede consultarse: FERRÁNDIZ, F., *El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil*, Barcelona, Anthropos, 2014, 336pp.

“Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a contemplar de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada en línea con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo 2, de la Convención y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente de ese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”<sup>1110</sup>.

Con este párrafo el Comité DF reconocía expresamente el derecho a la verdad de las víctimas en los términos del artículo 24.2 que ya analizamos, es decir, el derecho reconocido tanto a las víctimas de la desaparición a conocer no solo el paradero, sino también las circunstancias de la desaparición y los resultados de la investigación. Igualmente, y a pesar de que no se refiere explícitamente a ella, a tenor de lo que ya expusimos sobre el artículo 5 de la CDF (situación de una comisión sistemática de desapariciones forzadas), la sociedad tendría también el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido y el Estado la obligación de aplicar las medidas adecuadas para que así sea. La apelación en el caso de España a la creación de una “comisión de expertos independientes” confirma, por tanto, cuál habría de ser “la medida adecuada al respecto” (según dispone el artículo 24.2) para que ambas vertientes fueran respetadas.

Siguiendo con esta misma línea de análisis y en comparación con las obligaciones que se han estudiado anteriormente de los Estados para respetar el derecho a la verdad dentro del PIDCP y la CCT respectivamente, en ambas concluimos que la constitución de una comisión de la verdad (o una “comisión de expertos independientes”) daría respuesta a los requerimientos de verdad de las víctimas y la sociedad (sobre todo a esta última) según lo prescrito en ambos tratados internacionales.

En efecto, tal y como analizamos, el Comité CT en 2010 recomendó a Colombia que “consider[ara] el establecimiento de una comisión de la verdad autónoma e independiente”; mientras que el Comité DH determinó en 2009, en el caso concreto de España, que esta *debería prever* una comisión de la verdad para respetar el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad de la Guerra Civil y el franquismo. ¿Estaría el

---

<sup>1110</sup> *Ibid.*

Comité DF afirmando en este sentido que una comisión extrajudicial daría cumplimiento a las demandas de verdad de las víctimas, o podría tratarse únicamente de acto dispositivo del Estado?

El Comité DF con la *invitación* al Estado español a que crease este mecanismo no hace más que aplicar el último inciso del artículo 24.2: “cada Estado tomará las medidas adecuadas al respecto”. El único mecanismo específico que el texto de la CDF contempla expresamente para averiguar la verdad de lo sucedido es el proceso judicial. No obstante, volvemos a reiterar las limitaciones con las que cuentan los tribunales para poder llegar a las demandas de verdad que exigen tanto las víctimas individuales como la sociedad ante determinados contextos<sup>1111</sup>. En efecto, tal y como expusimos al respecto, la investigación penal, en aplicación de los artículos 4 y 6 de la CDF, se da por supuesta, por lo que el artículo 24.2 estaría haciendo mención a otro tipo de mecanismo, por ejemplo, una comisión de expertos independientes, aun sin especificar qué características serían con las que debería contar este mecanismo para materializar este derecho a la verdad colectivo. Para ello, nos remitiremos, como también hicimos para la interpretación del contenido de esta misma obligación en la CCT, a lo ya afirmado al respecto en las OF a España del Comité DH en 2009<sup>1112</sup>.

La pregunta que surgiría entonces es: ¿se incumplirían las obligaciones de los Estados para con el artículo 24.2 si no se instituyera una comisión de la verdad tras una etapa de comisiones sistemáticas de desapariciones forzadas?

La respuesta sería negativa pero siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a esa verdad extrajudicial a través de otros cauces que también cumplan los requisitos estipulados en el artículo 24.2 y que los principios mínimos identificados para las comisiones de la verdad, fueran también seguidos por estos otros instrumentos. Las comisiones extrajudiciales son solo uno de los medios que tienen los Estados para poder llegar a ella, sin embargo, si se cumple esta misma obligación a través de, por ejemplo, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o cualquier otra institución que respete el derecho de las víctimas y sociedad a una verdad completa, también se estaría cumpliendo con lo requerido en dicho artículo<sup>1113</sup>.

---

<sup>1111</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>1112</sup> Véase el epígrafe 4 del capítulo VI.

<sup>1113</sup> La viabilidad de crear mecanismos alternativos a las comisiones de la verdad que también respeten el derecho a la verdad de la sociedad y las víctimas ya la expusimos al comienzo de este trabajo al señalar los motivos que nos llevaron a considerar estos mecanismos como el elemento principal de examen de la práctica estatal de los Estados en materia de derecho a la verdad.



De este modo, la obligación de los Estados de preservar el derecho a la verdad de las víctimas, tanto en lo referente a la búsqueda de los desaparecidos, como al conocimiento de las circunstancias (tanto judiciales, como no judiciales) en que esta tuvo lugar, es considerada una obligación vigente para los Estados Parte de la CDF.

#### **4. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS.**

Durante esta época el Consejo DH publicó un informe sobre varias experiencias nacionales en políticas de acceso a los archivos<sup>1114</sup> y una nueva Resolución sobre el derecho a la verdad que decía:

“*Solicita a la Oficina del Alto Comisionado que invite, dentro de los límites de los recursos disponibles, a los Estados Miembros, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales a facilitar información sobre buenas prácticas para el establecimiento, la preservación y el suministro de acceso a los archivos nacionales sobre los derechos humanos, y a que pongan la información recibida a disposición del público en una base de datos en línea*”<sup>1115</sup>.

Este informe recoge varias experiencias nacionales en prácticas de preservación de archivos, amén de destacar la importancia, ya puesta en este trabajo de manifiesto, de proteger los archivos de violaciones de derechos humanos para una mejor preservación de la memoria de la sociedad y como elemento indispensable para la no repetición. El Consejo DH entiende que:

---

<sup>1114</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el seminario de experiencias en materia de archivos como medio de garantizar el derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/17/21, 14 de abril de 2011. Este informe, al igual que el ya citado en el epígrafe anterior sobre las resoluciones de la Comisión DH y el Consejo DH, fue presentado a raíz de la resolución 12/12 del Consejo DH sobre el derecho a la verdad de 12 de octubre de 2009.

<sup>1115</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 21/7. El derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/RES/21/7, 10 de octubre de 2012. En cuanto al contenido general de la resolución no discierne del contenido de las resoluciones 2005/66 o 9/11 y, en cualquier caso, nos remitiremos a lo ya analizado en el resolución de la AG 68/165 sobre el derecho a la verdad, pues, excepto las omisiones allí apuntadas, el contenido y las referencias a los instrumentos normativos son idénticas.

“Los archivos son fundamentales para el ejercicio de los derechos individuales, como la rehabilitación de personas condenadas por motivos políticos, el derecho de las familias a conocer el paradero de sus parientes desaparecidos, y el derecho de los presos políticos a una amnistía. Los archivos permiten además a cada nación ejercer su derecho a la integridad de su memoria escrita y a todo pueblo ejercer su derecho a conocer la verdad sobre su pasado”<sup>1116</sup>.

De este modo, encontramos una confirmación de lo que ya se ha expuesto anteriormente. Acerca de la relación entre los archivos y el derecho a la verdad nos remitiremos a lo ya expuesto a lo largo del trabajo, en especial a los informes aprobados en el seno del Consejo DH durante la década anterior<sup>1117</sup>.

## **5. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA RESOLUCIÓN 1235 (XLII) DEL ECOSOC.**

### **5.1. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Especial referencia al comentario general sobre el derecho a la verdad y las desapariciones forzadas.**

Durante la década anterior el GTDFI fue reconociendo mediante su práctica el derecho a la verdad como un derecho inderogable, habida cuenta de su estrecha relación con los derechos a la justicia, la reparación y la información y habiendo sido incluido en 2009 dentro de sus métodos de trabajo.

Ya en 2010<sup>1118</sup>, a través de un comentario general sobre el derecho a la verdad y las desapariciones forzadas<sup>1119</sup>, el GTDFI, enfocando su análisis en lo dispuesto en la

---

<sup>1116</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el seminario de experiencias en materia de archivos como medio de garantizar el derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/17/21, 14 de abril de 2011, párr.5.

<sup>1117</sup> Véase el epígrafe 2.3 del capítulo VI.

<sup>1118</sup> El mandato del GTDFI fue renovado por CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 27/1. Desapariciones forzadas o involuntarias*, 1 de octubre de 2014. En esta renovación se establecía: “Recordando que en la Convención se establece el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida, y se señalan las obligaciones de los Estados partes de tomar medidas adecuadas a este respecto”; “Tomando nota con interés también de las observaciones generales del Grupo de Trabajo sobre el derecho a conocer la verdad en relación con las desapariciones forzadas”; “Acogiendo con beneplácito la decisión de la Asamblea General de declarar el 30 de agosto Día Internacional de las

Declaración DF, se refirió a la ya conocida y reconocida relación de aquel derecho con esta práctica.

Entrando ya de lleno dentro del comentario general, en su punto 1.º afirma que el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas implica: “[e]l derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición”<sup>1120</sup>.

Esta definición de derecho a la verdad en el contexto de desapariciones forzadas coincide exactamente con la dada en el artículo 24.2 de la CDF, con la salvedad de que en esta última, explícitamente, no se recoge el conocimiento de la identidad del autor de la desaparición. Sin embargo, en este contexto interpretamos que dentro del conocimiento de las “circunstancias” de la desaparición estaría incluido el conocer la identidad de los autores<sup>1121</sup>; algo que ya formaba parte de las competencias de las comisiones extrajudiciales que los Estados parte del PIDCP, la CCT y la CDF estaban obligados a crear tras una comisión sistemática o masiva de violaciones de derechos humanos.

En el párrafo 2.º se realiza una diferenciación entre el derecho a la verdad y el derecho a la información. Sin embargo, esta distinción difiere un poco de la que hemos venido apuntando hasta ahora<sup>1122</sup> al establecer que:

“(…) el derecho a la información no debe confundirse con el derecho a la verdad, concretamente con el derecho de los familiares y de las personas con un interés legítimo en la desaparición (aparte de abogados y representantes) a obtener información sobre una persona privada de libertad”<sup>1123</sup>.

---

Víctimas de Desapariciones Forzadas, así como la decisión adoptada por la Asamblea en su resolución 65/196, de 21 de diciembre de 2010, de proclamar el 24 de marzo Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas, conforme a la recomendación hecha por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 14/7, de 17 de junio de 2010, y su llamamiento a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, para que observen estos días”. Estas disposiciones serán analizadas *infra*.

<sup>1119</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/16/48, 26 de enero de 2011, pp.13-18.

<sup>1120</sup> *Ibid.*, párr.1.

<sup>1121</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>1122</sup> Véase el epígrafe 2.2 del capítulo VI.

<sup>1123</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/16/48, 26 de enero de 2011, p.14, párr.2.

La principal diferencia entre ambos derechos reside en el sujeto pasivo: mientras en el derecho a la verdad el sujeto pasivo es una persona desaparecida, de la cual se desconoce su paradero, para el GTDFI el derecho a la información se refiere a una persona privada de libertad, un preso o un detenido; alguien del que se sabe efectivamente dónde se encuentra, aunque puede que se desconozca en qué condiciones. Este derecho hace mención, por tanto, a obtener información acerca de la situación del detenido dentro del centro penitenciario o de detención donde se encuentre. Por ello, el GTDFI reconoce los derechos a la información y hábeas corpus como fundamentales en la prevención de desapariciones forzadas<sup>1124</sup>.

El derecho a la información tiene por objeto prevenir que se cometa la violación pues recoge la obligación del Estado de facilitar información sobre el estado y la situación en la que se encuentra el reo. En cambio, el derecho a la verdad actúa cuando ya se ha perpetrado el delito, es decir, cuando se desconoce su paradero.

Seguidamente el GTDFI se refiere al contenido del artículo 13.4 de la Declaración DF, al que ya aludimos dentro de nuestro análisis sobre esta resolución y respecto a la práctica del GTDFI en el decenio anterior. Recordemos que este artículo se presentó como el primero que recogió la conexión entre verdad e información dentro del ámbito de las desapariciones forzadas; posteriormente esta relación fue matizada por la OACNUDH en su informe sobre el derecho a la verdad de 2006.

Ahondando en el significado de este artículo, el GTDFI entendió en su comentario general que este debiera entenderse en el sentido de que las víctimas tuvieran el derecho a conocer todas las medidas que el Estado ha adoptado para esclarecer la suerte y el paradero del desaparecido; en consecuencia, sería insuficiente el mero conocimiento de las cuestiones sobre procedimiento<sup>1125</sup>.

La denegación de esta información por parte del Estado debe responder únicamente a un criterio: evitar poner en peligro la instrucción de la causa, las víctimas o los testigos<sup>1126</sup>. En cualquier caso, si el Estado puede justificar la denegación de

---

<sup>1124</sup> *Ibid.*

<sup>1125</sup> *Ibid.*, p.15, párr.3.

<sup>1126</sup> En referencia a un tema ya aquí analizado como es el de protección de testigos, el GTDFI estableció en este comentario general: “Por último, el derecho a la verdad asegura también que el Estado tiene la obligación de proporcionar la protección y la asistencia necesarias a las víctimas, los testigos y otras personas interesadas. La búsqueda de la verdad suele tener como consecuencia que los autores y otras personas traten de evitar que se revele la verdad mediante amenazas e incluso agresiones a las personas que participan en la investigación. Así pues, el Estado tiene la obligación de velar por una eficaz protección de los afectados. En el párrafo 3 del artículo 13 se establece con toda claridad que los Estados ‘tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de

información, el ordenamiento interno debe de prever recursos adecuados para revistar esta decisión<sup>1127</sup>.

En el párrafo 4.º del comentario general el GTDFI introduce una nueva matización a este acceso a la información por parte de las víctimas. Si bien la comunicación de los resultados de la investigación únicamente podía restringirse en un caso puntual, el Estado no podrá denegar a las víctimas en ningún momento información acerca del paradero del desaparecido, por ser considerado un derecho absoluto y parte esencial del derecho a la verdad en casos de desapariciones forzadas. Este carácter tiene relación con el ya comentado lazo de unión entre la desaparición forzada y la tortura por el desconocimiento del paradero de un ser querido como un sentimiento situado en el umbral de la tortura<sup>1128</sup>.

En definitiva, entre las medidas que el GTDFI ha definido como pertinentes para amparar el derecho a la verdad a las víctimas de desaparición forzada se encuentran, en primer lugar, la obligación de investigar la suerte del desaparecido hasta que se esclarezca su situación<sup>1129</sup>.

---

intimidación o represalia'. En particular, el Estado puede crear un programa de protección de testigos a través de una institución independiente", *Ibid.*, párr.10.

<sup>1127</sup> *Ibid.*, párr.3.

<sup>1128</sup> Dentro del epígrafe dedicado al REIMA ya consideramos que esta parte del contenido del derecho a la verdad, debido a su relación con la prohibición de ser sometido a tortura, podría ser considerada como de *ius cogens*, aunque a la fecha no contamos con pronunciamientos contundentes que puedan amparar esta afirmación. Véase el epígrafe 5.3 del capítulo VI. Por otro lado, respecto a la búsqueda de la persona desaparecida, el GTDFI ha contemplado que: "El derecho a la verdad implica que el Estado tiene la obligación de dar pleno acceso a la información disponible para permitir la búsqueda de las personas desaparecidas. En el párrafo 2 del artículo 13 de la Declaración se señala que 'la autoridad competente [debe disponer] de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares'. Esas facultades deben incluir el pleno acceso a los archivos del Estado. Tras el fin de las investigaciones, los archivos de esa autoridad deben preservarse y ponerse a disposición del público". *Ibid.*, párr.9. En caso de que la persona hubiera muerto, la recuperación de los restos mortales también entraría dentro de las medidas tendentes a proteger el derecho a la verdad de los familiares de los desaparecidos. Concretamente el GTDFI estableció: "El derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero incluye, cuando se descubre que la persona desaparecida ha fallecido, el derecho de la familia a recuperar los restos mortales de su ser querido y organizar el entierro de acuerdo con sus tradiciones, religión o cultura. Los restos de la persona deben identificarse con claridad y sin margen de error, recurriendo incluso a un análisis del ADN si fuera necesario. El Estado, o cualquier otra autoridad, deberán abstenerse de iniciar el proceso de identificación de los restos o disponer de ellos sin la plena participación de la familia y sin informar abiertamente a la opinión pública de esas medidas. Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles, incluso con asistencia y cooperación internacional", *Ibid.*, párr.6. Sobre la relación entre verdad e información también véase nuestro análisis de la Resolución 2005/66 en el epígrafe 2.2 del capítulo VI.

<sup>1129</sup> Esta obligación fue entendida por el GTDFI como de medio y no de resultado, dentro del entendimiento clásico de la obligación de investigar. En concreto, el GTDFI defendió esta concepción de esta investigación como sigue: "Una persona puede haber sido objeto de una ejecución sumaria, pero quizá resulte imposible encontrar sus restos porque la persona que enterró el cadáver haya fallecido y

En segundo lugar, cumpliendo lo recogido en el artículo 13.4 de la Declaración DF, comunicar los resultados de las investigaciones a las partes interesadas. No obstante, dentro de este punto hemos de remitirnos a lo que ya consideramos en caso de comisión sistemática de desapariciones forzadas: la sociedad en conjunto es considerada “parte interesada” y, por lo tanto, tiene el derecho a conocer lo sucedido.

En tercer y cuarto lugar, el GTDFI recoge dos categorías a las cuales ya se refirió el Consejo DH en sus estudios sobre el derecho a la verdad: el acceso a los archivos y la protección de testigos, como elementos clave en la consecución de la verdad de las víctimas<sup>1130</sup>.

Como último apunte, el GTDFI, haciendo referencia al artículo 20 de la Declaración DF<sup>1131</sup>, contempló que el derecho a conocer la suerte y paradero de la persona desaparecida era igualmente aplicable a los casos de los niños nacidos durante la desaparición de la madre y posteriormente objeto de adopción ilegal. A este respecto, nos remitiremos a nuestra interpretación sobre este asunto donde sentenciamos, al igual que hizo en el GTDFI en el comentario general que, independientemente de que en cualquier caso haya que preservar el interés superior del niño, esto no supone

---

nadie más disponga de información sobre la suerte que ha corrido la víctima. Con todo, el Estado tiene la obligación de investigar hasta que pueda determinar, por presunción, la suerte o el paradero de la persona”. Del mismo modo el GTDFI sostuvo que pueden darse ocasiones en las que los Estados han preferido ocultar parte de lo sucedido como medida de fomento de la reconciliación nacional como, por ejemplo, el conocimiento del nombre de los victimarios dentro de un proceso extrajudicial de búsqueda de la verdad<sup>1129</sup>. Sin embargo, en palabras del propio GTDFI: “las restricciones del derecho a la verdad no afectan al derecho de las víctimas a que se haga justicia”. Es decir, el hecho de que determinadas circunstancias no sean conocidas dentro de un foro no judicial, no es óbice para que, en caso de que tuvieran relevancia penal, las responsabilidades judiciales pertinentes sean depuradas. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/16/48, 26 de enero de 2011, pp.15-16, párr.5 y 8.

<sup>1130</sup> *Ibid.*, pp.15-16, párr.5. Sobre estas medidas véase nuestro análisis de la Resolución 9/11 en el epígrafe 2.3 del capítulo VI.

<sup>1131</sup> “1. Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres de víctimas de una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de la desaparición forzada y se esforzarán por buscar e identificar a esos niños para restituirlos a su familia de origen.

2. Habida cuenta de la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el párrafo precedente, deberá ser posible, en los Estados que reconocen el sistema de adopción, proceder al examen de la adopción de esos niños y, en particular, declarar la nulidad de toda adopción que tenga origen en una desaparición forzada. No obstante, tal adopción podrá mantener sus efectos si los parientes más próximos del niño dieran su consentimiento al examinarse la validez de dicha adopción.

3. La apropiación de niños de padres víctimas de desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de una madre víctima de una desaparición forzada, así como la falsificación o supresión de documentos que atestigüen su verdadera identidad, constituyen delitos de naturaleza sumamente grave que deberán ser castigados como tales.

4. Par tal fin, los Estados concluirán, según proceda, acuerdos bilaterales o multilaterales”.

“prejuzga[r] el derecho a conocer la verdad sobre la familia de origen o el paradero del menor”<sup>1132</sup>.

Tras este análisis sobre la posición del GTDFI relativa al derecho a la verdad en las desapariciones forzadas, este órgano reiteró su importancia en numerosos pronunciamientos posteriores. La mayoría de estas recomendaciones responden a la necesidad de establecer programas administrativos adecuados orientados a la búsqueda de los desaparecidos, así como eliminar toda barrera legal que impida el inicio de una investigación de los hechos<sup>1133</sup>.

En conclusión, la práctica del GTDFI es ampliamente favorable al reconocimiento del derecho a la verdad (tanto individual como colectivo) como derecho autónomo y vinculante dentro del ordenamiento internacional. Su completo y ambicioso comentario general sobre el derecho a la verdad en materia de desapariciones forzadas supone un completo análisis sobre la situación general del derecho a la verdad y la desaparición forzada debido a la concreción de medidas específicas en favor del respeto de este derecho para las víctimas.

Según todo lo dispuesto anteriormente, y conociendo ya el contenido del articulado de la CDF en materia de verdad, contemplamos que las obligaciones para los Estados a este respecto, según ambos textos, son muy similares. La única diferencia reseñable trata de la obligación de permitir el acceso a los archivos, no recogida explícitamente en el articulado de la CDF pero pudiendo ser amparada bajo el artículo 24.3 como parte de las medidas a las que el Estado ha de adoptar para buscar, localizar y liberar a la persona desaparecida. Salvo esta excepción, la CDF ampara literalmente la totalidad de las obligaciones que el GTDFI ha considerado pertinentes para respetar este derecho. A saber: el conocimiento de las víctimas tanto del paradero como de toda circunstancia que rodeara la desaparición, la obligación de continuar investigando hasta que se conozca el paradero de la víctima y la protección de los testigos y todo

---

<sup>1132</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/16/48, 26 de enero de 2011, p.16, párr.7.

<sup>1133</sup> En concreto puede consultarse: CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a México*, Doc. A/HRC/19/58/Add.2, 20 de noviembre de 2011, párrs.102-107; CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/19/58/Rev.1, 2 de marzo de 2012, párr.58; CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/27/49, 4 de agosto de 2014, párrs. 74, 77, 78, 86, 87, 96, 101 y 108; CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a España*, Doc. A/HRC/27/49/Add.1, 2 de julio de 2014, párrs.67 j)-z).

participante en la investigación. El deber de dar cumplimiento a estas obligaciones es considerado, pues, inexcusable para los Estados, a tenor del reconocimiento con el que cuenta a nivel internacional.

## **5.2. Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. La concreción del acceso a la información dentro del contenido del derecho a la verdad.**

Este procedimiento extraconvencional fue uno de los que recogió el mandato de la Resolución de la Comisión DH 2005/66 en la que se “invitaba a los relatores y otros mecanismos de la Comisión a que, en el marco de sus mandatos, [tuvieran] en cuenta (...) la cuestión de la verdad”<sup>1134</sup>.

El Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión (RELE), constituido mediante la Resolución 1993/45 de la Comisión DH, tiene por objeto, *inter alia*, promover el respeto por parte de los Estados de este derecho ya afianzado en los artículos 19 y 19.2 de la DUDH y del PIDCP respectivamente<sup>1135</sup>.

Objeto especial de estudio en este epígrafe será, debido al contenido del mandato de este procedimiento extraconvencional, la interrelación realizada por el RELE entre el derecho a la verdad y el acceso a información respecto a graves violaciones de derechos humanos<sup>1136</sup>. Para ello contamos ya con el análisis que sobre esta misma conexión han realizado los estudios de la OACNUDH o lo dispuesto por el GTDFI.

---

<sup>1134</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 2005/66. El derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/RES/2005/66, 20 de abril de 2005, párr.7. Este párrafo fue incorporado en otras resoluciones del Consejo DH sobre el derecho a la verdad como la 9/11 en su párr.10; y 12/12 en su párr.10.

<sup>1135</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Derecho a la libertad de opinión y expresión*, Doc. E/CN.4/RES/1993/45, 5 de marzo de 1993. Mandato renovado por, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 25/2. Libertad de opinión y expresión: mandato del Relator Especial sobre la promoción y protección a la libertad de opinión y expresión*, Doc. A/HRC/RES/25/2, 9 de abril de 2014. Entre sus fundamentos jurídicos se encuentran: DUDH, PIDCP, resoluciones del Consejo DH 7/36, 12/16, 16/4 y 23/2 y resoluciones anteriores de la Comisión DH y del Consejo DH sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión,

<sup>1136</sup> Sin embargo, es necesario apuntar que trataremos únicamente aquellos aspectos que sean relevantes a efectos de nuestro estudio, discriminando por tanto los que pudieran, a nuestro entender, no estar relacionados con el fin al que pretendemos arribar o aquellos que ya han sido anteriormente tratados. Para una visión acerca de este particular dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos (parte esencial de trabajo) puede consultarse con especial interés: GONZÁLEZ MORALES, F., “Censura judicial y libertad de expresión: sistema interamericano y derecho chileno”, en GONZÁLEZ IBÁÑEZ, J. (dir.), *Protección Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho*, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2009, pp.171 – 208.



Para poder estudiar la práctica de este mecanismos extraconvencional sobre el derecho a la verdad nos referiremos casi exclusivamente al informe que presentó ante la AG el 4 de septiembre de 2013 el por entonces RELE, Frank La Rue, en el cual prestó especial atención al derecho a la verdad como mecanismo de un mejor acceso a la información sobre violaciones de derechos humanos<sup>1137</sup>.

Como primera referencia, el RELE, en una clara remisión a las Resoluciones de la Comisión DH y Consejo DH, describió al derecho a la verdad en el plano nacional “como el derecho a saber o a ser informado o a la libertad de información”<sup>1138</sup>.

El RELE, al igual que otros mecanismos de protección de derechos humanos durante esta época (como los ya vistos Comité DH, Comité CT, Comité DF o el GTDFI), consideró al derecho a la verdad como un derecho específico e independiente del derecho a la justicia; todo ello sustentado en el principio 4 del Conjunto de principios y la práctica tanto de la Comisión IDH como de la Corte IDH<sup>1139</sup>.

En efecto, a pesar de que el RELE encuentra el derecho a la verdad claramente consolidado en el organigrama internacional, en relación con la obligación que tienen los Estados de emprender investigaciones judiciales, este fue además interpretado dentro de un espectro que va más allá de las diligencias judiciales que se hubieran de incoar, habiendo reconocido la ya reiterada necesidad de que el respeto al derecho a la verdad no se consiga únicamente en sede judicial<sup>1140</sup>; opinión que a la fecha ya habían amparado el Comité DH, el Comité DF, el Comité CT, la Comisión IDH y el GTDFI.

---

<sup>1137</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión*, Frank La Rue, Doc. A/68/362, 4 de septiembre de 2013, párr.5.

<sup>1138</sup> *Ibid.*, párr.14.

<sup>1139</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión*, Frank La Rue, Doc. A/68/362, 4 de septiembre de 2013, párrs. 12-17.

<sup>1140</sup> El RELE estableció: “No obstante, no basta con la investigación judicial de casos concretos: el derecho a la verdad implica no solo la determinación de las circunstancias inmediatas de violaciones concretas, sino también la aclaración del contexto general, las políticas y deficiencias institucionales y las decisiones que las hicieron posibles. Además, el ejercicio del derecho a la verdad puede exigir la divulgación de información sobre las violaciones a fin de restablecer la confianza en las instituciones estatales y evitar la repetición de esos actos”. *Ibid.*, párr.30. En este mismo sentido, en un informe de 2010, el RELE ya estableció: “Un aspecto importante del acceso a la información pública es el acceso a la información y archivos históricos o a la información de procedimientos actuales que puedan esclarecer las violaciones de derechos humanos. Esto constituye el ejercicio del derecho a la verdad que tienen las víctimas, recordando además que la verdad es la primera etapa para llegar al derecho a la justicia y luego al derecho a la reparación que son los derechos fundamentales de las víctimas. Las víctimas no solo tienen el derecho a establecer la verdad —de por qué, cómo y quién violó sus derechos humanos— sino además tienen el derecho a hacerlo público si así lo desean, especialmente para honrar la memoria de aquellos cuyo derecho a la vida fue violado”. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión*, Sr.

Las novedades introducidas por el RELE en derecho a la verdad venían en la senda, que ya abrió la Comisión DH en su Resolución 2005/66, acerca del derecho de “la opinión pública y las personas tienen derecho a acceder a la información más completa posible sobre las medidas y los procesos de decisión de su gobierno” y reafirmando la inclusión dentro del nexo entre verdad e información del, ya por nosotros alegado, principio de transparencia<sup>1141</sup>.

Para el RELE ese derecho de información cobra aún más importancia si se trata de información perteneciente a una época de violación de derechos humanos, ante el cual serían pocas las limitaciones que el Estado podría interponer, tal y como hemos comprobado dentro de la práctica del GTDFI. Y es que, tal y como dictaminó el RELE: “toda la información en posesión del Estado pertenece al público, con excepciones limitadas y matizadas que deben ser justificadas por las autoridades estatales”<sup>1142</sup>. En concreto, estas limitaciones han de estar prescritas en la ley, ser accesibles, concretas, claras e inequívocas, así como compatibles con las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos<sup>1143</sup>.

Uno de los motivos principales por los cuales los Estados han negado sistemáticamente información a la sociedad acerca de las violaciones ocurridas en el pasado ha sido debido a la así (mal) llamada “seguridad nacional”. Sobre este particular el RELE ha entendido que:

“En ausencia de una justificación detallada, las alegaciones de que la información referente a esas violaciones pasadas puede poner en peligro la seguridad nacional tienen poca credibilidad. El Relator Especial considera que es difícil justificar un interés público continuado en imponer limitaciones a la información procedente de regímenes anteriores. Como ya se ha señalado, las autoridades de los países que se encuentran en un proceso de justicia de transición tienen obligación concreta de garantizar activamente la conservación y divulgación de la

---

*Frank La Rue*, Doc. A/HRC/14/23, 20 de abril de 2010, párr.34. Sobre este tema puede consultarse nuestro análisis en sobre el Informe Joinet en el epígrafe 2 del capítulo III.

<sup>1141</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión*, Sr. Frank La Rue, Doc. A/HRC/14/23, 20 de abril de 2010, párr.37. Véase, el epígrafe 2.2 del capítulo VI.

<sup>1142</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión*, Frank La Rue, Doc. A/68/362, 4 de septiembre de 2013, párr. 50.

<sup>1143</sup> *Ibid.*, párr.51.

información referente a las violaciones graves de los derechos humanos y el derecho humanitario que tuvieron lugar en el pasado”<sup>1144</sup>.

En efecto, el acceso a la información sobre las violaciones de derechos humanos supone una pretensión legítima por parte de la sociedad y, por tanto, los argumentos que aludan a un concepto ciertamente tan vago como la “seguridad nacional” podrían poner en entredicho la transparencia de las instituciones del Estado. Ello es debido, como afirma el RELE, a que en determinadas ocasiones aquellos mismos que deciden ocultar cierta información, serán los mismos responsables de haber cometido las violaciones<sup>1145</sup>.

Siguiendo con los posibles argumentos que pudieran darse para restringir el conocimiento de la verdad por parte de la sociedad, como ya vimos que hizo el GTDFI, el RELE estableció que ellas podrían darse únicamente cuando todos los demás derechos humanos fueran respetados. Esta afirmación es análoga a la sostenida acerca de la adopción de leyes de amnistía pues, como estableció la Comisión IDH en 1986, será permitida su adopción pero siempre y cuando no vaya en contra de los derechos de la víctima y la sociedad a la verdad. Igualmente, limitaciones que en ocasiones se han dado respecto al derecho a la verdad como la de no conocer dentro de un mecanismo extrajudicial de investigación el nombre de los autores, no deberían coartar en ningún caso el derecho a la justicia de las víctimas<sup>1146</sup>.

En conclusión, este tipo de interpretaciones sobre los posibles obstáculos que cabrían al derecho a la verdad en su modalidad de acceso a la información, moldean la diferenciación que hemos estado manteniendo sobre su carácter inalienable o absoluto y que, por tanto, alejarían o afinaría la definición dada por el RELE “como el derecho a saber o a ser informado o a la libertad de información”, pues las mismas restricciones aplicables al derecho a la información no serían oponibles al derecho a la verdad.

Con independencia de la estrecha vinculación existente entre información y verdad, el ámbito material de aplicación de cada uno de estos derechos condiciona la aplicación de uno u otro a según qué circunstancias. El conocimiento de lo ocurrido durante una etapa de violación de derechos humanos no es un contexto propio de aplicación del derecho a la información de la sociedad, sino del derecho a la verdad. En

---

<sup>1144</sup> *Ibid.*, párr.55.

<sup>1145</sup> *Ibid.*, párr.58.

<sup>1146</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*, Doc. A/HRC/16/48, 26 de enero de 2011, p.17, párr.8.

caso contrario, se correría el riesgo de que el acceso a dicha información pudiera ser limitado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 del PIDCP, algo no admisible si el derecho a implementar fuera el derecho a la verdad.

### **5.3. Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. La “rendición de cuentas” y el derecho a la verdad.**

Otro procedimiento extraconvencional que recogió el mandato de la Resolución de la Comisión DH 2005/66 de que trataran, en el marco de su mandato, la cuestión de la verdad, fue el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo<sup>1147</sup> (RELT).

Este mecanismo extraconvencional fue constituido por la preocupación de la comunidad internacional ante los numerosos casos de violación de derechos humanos y las libertades fundamentales cometidas por los Estados en el contexto de la lucha contra terrorismo<sup>1148</sup>.

Al igual que ya hicimos con el RELE, para analizar el contenido del derecho a la verdad en relación con el mandato del RELT, nos referiremos casi en exclusiva a un informe concreto. En este informe, de 17 de abril de 2013, se establecían los principios marco para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos por las violaciones manifiestas o sistemáticas de los derechos humanos cometidas en el transcurso de iniciativas de lucha contra el terrorismo respaldadas por los Estados. Este

---

<sup>1147</sup> Constituido mediante COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 2005/80. Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo*, Doc. E/CN.4/RES/2005/80, 21 de abril de 2005, donde se establecen sus fundamentos jurídicos: Carta de Naciones Unidas; DUDH; PIDCP; las resoluciones de la AG 2004/87, 59/191, 59/195, 2004/44 y 58/187; la resolución del Secretario General de Naciones Unidas, 1456(2003) y su informe E/CN.4/2004/91; el informe final sobre terrorismo y derechos humanos del Relator Especial de la Subcomisión de Protección y Protección de los Derechos Humanos (E/CN.4/Sub.2/2004/40); el informe de la OACNUDH A/59/428 y su estudio sobre la protección de los derechos humanos y las libertades individuales en la lucha contra el terrorismo. Mandato renovado por, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 22/8. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo: mandato del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo*, Doc. A/HRC/RES/22/8, 9 de abril de 2013.

<sup>1148</sup> *Ibid.* Para un análisis profundo sobre el papel del terrorismo dentro del DIDH, consúltense: FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., JIMÉNEZ GARCÍA, F., *Terrorismo y Derechos Humanos. Una aproximación desde el Derecho Internacional*, Madrid, Dykinson, 2005. Especialmente pp. 66 – 78.

informe se centró especialmente en lo que el RELT denominó “la CIA de la era Bush”<sup>1149</sup>.

Dentro del mandato del RELT el derecho a la verdad se encuentra dentro de los principios orientados a la rendición de cuentas. Como ya se hiciera en otros mecanismos, el RELT realiza un recorrido por los distintos instrumentos del DIDH que recogen “el derecho jurídico de la víctima y de la sociedad a conocer la verdad”<sup>1150</sup>. Según el RELT este derecho jurídico faculta a las víctimas y a la sociedad:

“(…) a buscar y obtener toda la información pertinente relativa a la comisión de la presunta vulneración, incluida la identidad de su autor, la suerte y el paradero de la víctima y, cuando proceda, el proceso mediante el cual se autorizó oficialmente dicha vulneración. También incluye el derecho de la víctima a una reparación adecuada (del cual forma parte indispensable el establecimiento de la verdad). No basta con el pago de una indemnización monetaria sin que quede plenamente expuesta, públicamente, la verdad”<sup>1151</sup>.

El principal contexto donde se desarrolló el análisis del derecho a la verdad por parte del Relator fue en el contexto las medidas derivadas de la rendición de cuentas. Por ejemplo: “recabar todas las pruebas pertinentes y permitir identificar y, si procede, castigar a los responsables y a aquellos bajo cuya autoridad se hayan cometido las violaciones”<sup>1152</sup>.

---

<sup>1149</sup> Por esta expresión el RELT se refiere a todo un entramado construido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América en el marco de un programa de torturas, entregas y detenciones secretas de sospechosos de terrorismo ejecutado durante la presidencia de George W. Bush (...), así como tampoco por los actos cometidos por funcionarios públicos de otros Estados que colaboraron en dicho programa”. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson. Principios marco para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos por las violaciones manifiestas o sistemáticas de los derechos humanos cometidas en el transcurso de iniciativas de lucha contra el terrorismo respaldadas por los Estados*, Doc. A/HRC/22/52, 17 de abril de 2013, párr.1.

<sup>1150</sup> *Ibid.*, párr.23.

<sup>1151</sup> *Ibid.* Entre los mecanismos en los que el RELT ha fundamentado esta afirmación se encuentran: el art.24.2 de la CDF, los Principios sobre reparaciones, las resoluciones del Consejo DH 12/12 y 9/11, el estudio de 2006 de la OACNUDH, la práctica de otros mecanismos extraconvencionales y la Comisión Africana, así como la jurisprudencia de la Comisión IDH, la Corte IDH y el TEDH.

<sup>1152</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson. Principios marco para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos por las violaciones manifiestas o sistemáticas de los derechos humanos cometidas en el transcurso de iniciativas de lucha contra el terrorismo respaldadas por los Estados*, Doc. A/HRC/22/52, 17 de abril de 2013, párr.28.

La rendición de cuentas está como vemos íntimamente ligada con la obligación de los Estados de realizar una investigación efectiva. El RELT entiende por investigación efectiva los estándares ya afianzados en el DIDH como garantizar el acceso de los familiares a los tribunales; independencia e imparcialidad del órgano que dirige la investigación (en el sentido de que ninguno de los implicados deba tener competencia directa o indirecta en la misma); o que el fin último de la investigación debe ser averiguar lo que ocurrió<sup>1153</sup>.

Otra relación entre la rendición de cuentas y el derecho a la verdad se da con la necesidad de que el público tenga acceso completo al seguimiento de la investigación de forma que pueda garantizarse total y completamente una rendición pública de cuentas. Para el RELT esto supone que: “las conclusiones de las investigaciones se deben hacer públicas, con excepción de las partes que se censuren previa autorización de un tribunal independiente u otro órgano cuasijudicial por considerarse estrictamente necesario para la seguridad nacional”<sup>1154</sup>.

En estos principios que inspiran lo que el RELT llama rendición de cuentas, vemos que se reproducen de forma literal lo que a lo largo del trabajo hemos identificado como la verdad judicial colectiva, en el sentido de que esa verdad judicial sea conocida por el público. La rendición de cuentas se presenta así como otra de las atribuciones que pueden serle atribuidas al derecho a la verdad, junto con las ya afianzadas en otros organismos de protección de derechos humanos como la justicia, la reparación, el acceso a la información o la no repetición.

Como ya argüimos respecto a la práctica del RELE, la diferencia del ámbito material de aplicación de las medidas de rendición de cuentas, conectadas con el derecho a la verdad (tras una época de violaciones de derechos humanos), difieren de las que se implementan normalmente dentro del ámbito de libertad de información, el cual sí puede ser limitado por el Estado en determinadas ocasiones. Estamos, en consecuencia, ante derechos distintos.

Según el RELT, en el caso concreto de “la CIA de la era Bush”, la dicotomía verdad/rendición de cuentas supone:

“De aplicarse fielmente, este conjunto de derechos y deberes habría asegurado ya la rendición de cuentas no solo de los funcionarios públicos que participaron de

---

<sup>1153</sup> *Ibid.*, párr.29-30.

<sup>1154</sup> *Ibid.*, párr.31.

manera directa en el programa de detenciones secretas, entregas y torturas llevado a cabo por la CIA de la era Bush, sino también de sus superiores y de cualquier otro funcionario o exfuncionario de alto rango que planificaron esas estrategias o autorizaron a funcionarios subordinados a participar en ellas”<sup>1155</sup>.

A lo largo del trabajo ya nos hemos referido a la experiencia alemana como una de las prácticas principales que mejor ejemplifican el modo en el que se concretaron ciertos derechos de la sociedad a acceder a archivos contenedores de importante información sobre el pasado represivo y cómo ello redunda en un correcto respeto del derecho a la verdad y, en consecuencia, de las garantías de no repetición. Los estándares en rendición de cuentas establecidos por el RELT responden a la misma motivación que el Gobierno de transición alemán arguyó para crear la Oficina Gauck y, en general, la mayor parte de los Estados que implementaron medidas de este calado: apertura de los archivos para que la sociedad tuviera conocimiento de aquellos que, ocupando cargos públicos, ejercieron acciones represivas contra su propia población. La rendición de cuentas ocupa así parte de las medidas que se encuadran dentro de las garantías de no repetición.

---

<sup>1155</sup> *Ibid.*, párr.35.

#### **5.4. Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Concreción y avances en su interrelación con los derechos a la justicia, reparación y no repetición y en la materialización de su modalidad colectiva.**

El 29 de septiembre de 2011 el Consejo DH adoptó la Resolución 18/7 (aprobada por consenso y con el apoyo de casi 80 Estados miembros), por la cual se establece por un período de tres años el mandato del REVJR<sup>1156</sup> el cual se ocupará del modo de aplicación de medidas que promuevan la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición tras situaciones en las que se haya habido violaciones manifiestas de derechos humanos<sup>1157</sup>.

Como expuso el Relator en su primer informe presentado a la AG, el carácter jurídicamente vinculante de estos cuatro elementos reside en: “los documentos citados en la resolución y otros documentos pertinentes que enuncian las obligaciones legales de los Estados de subsanar las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del Derecho internacional humanitario”<sup>1158</sup>.

En este sentido, según el REVJR la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: “constituyen una serie de áreas de acción interrelacionadas que pueden reforzarse mutuamente en el proceso de subsanar las secuelas del abuso y la vulneración masivos de los derechos humanos”<sup>1159</sup>. La interrelación entre estas cuatro disposiciones será, a ojos del REVJR, la clave para una verdadera subsanación de los

---

<sup>1156</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Pablo de Greiff, Doc. A/HRC/21/46, 9 de agosto de 2012. Su mandato fue renovado por, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Resolución 27/3. Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Doc. A/HRC/RES/27/3, 3 de octubre de 2014. Entre los fundamentos jurídicos de este mandato se encuentran: la Carta de Naciones Unidas; la DUDH; el PIDCP; PIDESC; Convenios de Ginebra de 1949; los Protocolos Adicionales de 1977; la Declaración y Programa de Acción de Viena; las resoluciones 60/147 y 4/102 de la AG; las resoluciones de la Comisión DH 2005/70, 2005/81 y 2005/66; las resoluciones del Consejo DH 9/10, 12/11, 21/15, 9/11, 12/12, 21/7, 10/26, 15/5; las decisiones del Consejo DH 2/105; la CDF; y los informes del Secretario General de Naciones Unidas S/2011/634, A/61/636-S/2006/980 y Corr.1, A/66/749, S/2013/341.

<sup>1157</sup> *Ibid.*, párr.10.

<sup>1158</sup> *Ibid.*, párr.21. Entre estos documentos se encuentran: la Carta de Naciones Unidas, la DUDH, el PIDCP, el PIDESC, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, la Declaración y Programa de Acción de Viena, el Conjunto de principios, la resolución de la AG 60/147, las resoluciones de la Comisión DH 2005/70, 2005/81 y 2005/66, las resoluciones del Consejo DH 12/11, 9/11, 12/12, 10/26 y 15/15, las decisiones del Consejo DH 2/105 y 4/102 y la CDF.

<sup>1159</sup> *Ibid.*. En la resolución del Consejo DH en la cual se adoptaba el mandato del REVJR se apelaba a la resolución 60/147 de la AG; las resoluciones de la Comisión DH 2005/70, 2005/81 y 2005/66; las resoluciones del Consejo DH 12/11, 9/11, 12/12, 10/26 y 15/5; las decisiones del Consejo DH 2/105 y 4/102; el art.24.2 de la CDF; el informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos.



abusos de derechos humanos, pues no se puede entender la aplicación de uno como sustitutiva de otro.

Debido a que el objeto de esta investigación reside en el derecho a la verdad, seguidamente analizaremos cómo ha conjugado el REVJR dentro del contenido de su mandato la verdad con los otros tres derechos, de forma que podamos complementar lo ya estudiado hasta ahora con la interpretación que al respecto le merece a este Relator.

Empezando por la relación entre verdad y justicia, traeremos a colación el argumento, ya defendido en este trabajo, por el cual la labor de las comisiones de la verdad no pueden sustituir la acción de la justicia penal, sino que han de ser utilizadas como complemento al sistema judicial y no como medio sustitutivo<sup>1160</sup>.

Esta idea ha sido recogida por el propio REVJR, el cual alega que: “si se desarrollan en forma aislada, ni siquiera los procesos más rigurosos de búsqueda de la verdad son equiparados a justicia”<sup>1161</sup>. En efecto, se debería evitar a toda costa la toma de medidas de búsqueda de la verdad que supongan un mero sustituto en materia de derecho a la justicia, pues se corre el riesgo de que se pretenda generalizar un estado de impunidad bajo el auspicio de la “búsqueda de la verdad” sin consecuencias judiciales ulteriores<sup>1162</sup>.

Sin embargo, el REVJR abogó por lo que podemos llamar “una calle de doble sentido”, es decir, si han de implementarse junto con medidas de justicia, medidas de verdad, será igualmente necesario que se haga a la inversa: que las medidas judiciales sean complementadas con las que buscan simplemente la verdad. Así lo ha interpretado el REVJR:

“Los procesos penales, en especial teniendo en cuenta su escasez, pueden con todo ser interpretados por las víctimas como medidas de justicia si van acompañados por otras iniciativas de búsqueda de la verdad (...) las víctimas tendrán razones para creer que los procesos penales hacen justicia si los juicios constituyen una entre varias medidas de exigencia de responsabilidades adoptadas

---

<sup>1160</sup> Este tema ya fue tratado y analizado en profundidad en el epígrafe dedicado al Informe Joinet (epígrafe 2 del capítulo III).

<sup>1161</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Pablo de Greiff, Doc. A/HRC/21/46, 9 de agosto de 2012, párr.23.

<sup>1162</sup> *Ibid.*, párr.25.

por las autoridades, entre las que se cuenta la investigación y el despido de los funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos”<sup>1163</sup>.

La mera implementación de procesos penales puede dejar un vacío dentro de las necesidades de las víctimas para poder alcanzar una reparación integral, como vimos ya en su momento. A pesar de que los procesos de búsqueda de la verdad extrajudicial no revelen datos conocidos de antemano, sí pueden apartar el velo de la negación que en determinados contextos cubre las verdades que no se mencionan (puede que tampoco en sede judicial por no tratarse de un hecho judicializado) pero que todo el mundo conoce. En concreto, esa actitud de firme negación puede estar presente en aquellos países en los que un Gobierno represivo ha dependido del apoyo tácito o pasivo de la población, o de ciertos sectores de la misma, para llevar a cabo sus políticas represivas y mantenerse en el poder<sup>1164</sup>.

Por otro lado, la implicación de la verdad en la reparación es imprescindible y, en cualquier caso, obligatoria<sup>1165</sup>. Los Estados no pueden escudarse detrás de leyes de amnistía que impidan el conocimiento de los hechos en sede judicial y simplemente constituir procesos extrajudiciales de revelación de verdad. Ambos son necesarios pues, solo así, una reparación será completa e íntegra. En este mismo sentido, la falta de toma de medidas concretas destinadas a la reparación producirá que los mecanismos de búsqueda de la verdad sean percibidos como un mero brindis al sol<sup>1166</sup>.

Por último, en cuanto a la relación entre verdad y no repetición, el REVJR no realiza una vinculación individual de cada derecho por separado con las medidas de no repetición, sino que entiende que las medidas específicas orientadas a la no repetición de los hechos como la reforma de las instituciones o la investigación de antecedentes, (denominada por el RELT como “rendición de cuentas”), “resultarán insuficientes a

---

<sup>1163</sup> *Ibid.*

<sup>1164</sup> Véase, IGNATIEFF, M., “Articles of faith”, *Index on Censorship*, vol. 25, 1996, núm. 5, pp. 110-122.

<sup>1165</sup> Para un análisis en profundidad sobre la relación entre los derechos a la verdad y la reparación véase, epígrafe 1 del capítulo VI.

<sup>1166</sup> En un informe temático sobre las reparaciones concedidas a víctimas de violaciones de derechos humanos, el REVJR afirmó: “Para que un beneficio se considere reparación y se entienda como medida de justicia, debe ir acompañado de un reconocimiento de responsabilidad y ha de estar vinculado con otras iniciativas de justicia, como los esfuerzos dirigidos a alcanzar la verdad, los enjuiciamientos penales y las garantías de no repetición. El Relator Especial insiste en que cada uno de estos tipos de medidas constituye una obligación legal y advierte contra la tendencia de compensar una medida con las otras. Ofrecer reparaciones a las víctimas no debe ser parte de una iniciativa tendiente, por ejemplo, a hacer que la impunidad resulte más aceptable”. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Pablo de Greiff, Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014, párr. 83.

falta de los demás mecanismos, tanto para hacer frente a las violaciones como para garantizar que no se repitan”<sup>1167</sup>.

Sin embargo, habiendo ya constatado la necesaria interdependencia entre los cuatros objetos principales del mandato, el REVJR pone énfasis en la titularidad individual de cada uno de estos derechos; en que, a pesar de que es necesaria su aplicación conjunta para aspirar a una verdadera reconciliación, cada uno de ellos cuenta con una independencia propia.

Con respecto al derecho a la verdad, y hablando del mismo en un contexto global, es decir, más allá del meramente judicial, el REVJR entendió, como ya lo hicieran los tres Comités anteriormente estudiados y el GTDFI, que la defensa del derecho a la verdad debería traer consigo la constitución de mecanismos que buscaran la verdad de lo sucedido, como medio a su vez de lucha contra la impunidad<sup>1168</sup>.

Como hemos venido comprobando a través sobre todo de las OF y OG de los Comités, la obligación con la que contaban los Estados para con el derecho a la verdad no se basaba en exclusiva en la incoación de investigaciones judiciales pues ya para el conocimiento íntegro de la verdad, ya para el respeto del derecho a la verdad colectivo, es necesario constituir un organismo alternativo. La aplicación de esta interpretación será la que también sostenga el REVJR en sus visitas *in loco* a países.

La referencia más clara a este respecto la dio el REVJR en su informe final de 2014 sobre la visita realizada a España. En él, en sus recomendaciones sobre “verdad”, el REVJR estableció:

“Atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad, establecer algún mecanismo para ‘oficializarla’ y resolver la excesiva fragmentación que caracteriza la construcción de la memoria en España. Restablecer, si no aumentar, los recursos en esta materia. Un mecanismo oficial para el esclarecimiento de la verdad deberá cumplir al menos con las siguientes funciones:

- Sistematizar la información existente;

---

<sup>1167</sup> *Ibid.*, párr.23.

<sup>1168</sup> En concreto dispuso: “(...) the right to truth should be understood to require States to *establish institutions, mechanisms and procedures that are enabled to lead to the revelation of the truth*, which is seen as a process to seek information and facts about what has actually taken place, to contribute to the fight against impunity, to the reinstatement of the rule of law, and ultimately to reconciliation”. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff*, Doc. A/HRC/24/42, 28 de agosto de 2013, párr.20. Sin resaltado en el original.

- Superar la fragmentación y dispersión de la información y esfuerzos;
- Trazar un plan ordenado de investigaciones;
- Establecer metodologías y la homologación de las mismas;
- Acceder a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales;
- Incluir un proceso oficial de validación, presentación formal y diseminación de sus conclusiones que ofrezca un reconocimiento oficial a las víctimas;
- Promover la participación de las víctimas y sus familiares en el proceso y registrarse por la noción de derechos, independientemente de la identidad o filiación política tanto de víctimas como de perpetradores”<sup>1169</sup>.

El REVJR, al contrario de lo que hicieron los mecanismos convencionales (Comité DH, Comité CT y Comité DF), define cuáles habrían de ser las características y funciones con las que tendría que contar el organismos de investigación extrajudicial que se implementase en aras de respetar el derecho a la verdad colectivo de, en este caso, la sociedad española. La especificación de esta serie de particularidades a las que debería hacer frente, hace que surja la duda de si en caso contrario (esto es, que en caso de que se formalizase una comisión de la verdad en España pero sin respetar las garantías esgrimidas por el REVJR), se estaría respetando, de igual modo, el derecho a la verdad de las víctimas y sociedad; algo que, como ya afirmamos anteriormente, no creemos posible. Y es que de nada serviría crear un organismo extrajudicial de investigación en el caso de España si, por ejemplo, este no “sistematiza la información existente” o si, debido a una competencia limitada no puede “acceder a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales”.

Los procesos judiciales han de respetar escrupulosamente toda una serie de obligaciones internacionalmente consolidadas, sin embargo, en lo que respecta a comisiones de la verdad, a pesar de que existen diferentes estudios sobre todo en cuanto a aspectos técnicos<sup>1170</sup> (no a cuestiones de fondo), la adaptación de la comisión al medio investigado resulta fundamental para el éxito de la misma (junto con un núcleo

<sup>1169</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Misión a España*, Doc. A/HRC/27/56/Add.1, 22 de julio de 2014, párr.104 g)

<sup>1170</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Instrumentos del Estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la verdad*, Nueva York – Ginebra, 2006; GONZÁLEZ, E., VARNEY, H. (ed.), *En busca de la verdad. Elementos para la creación de una comisión de la verdad*, Brasilia-Nueva York, Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil-Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2013.

central que entendemos común en cualquiera de los casos<sup>1171</sup>) y el consiguiente respeto al derecho a la verdad de la sociedad y víctimas.

En este sentido, dentro de la práctica del propio REVJR, encontramos un caso en el cual el propio mecanismo parece alejarse de su vía principal de interpretación de esta obligación estatal. En este estudio, en dos epígrafes ya analizamos las deficiencias con las que contaron las comisiones de la verdad implementadas en Uruguay por el Gobierno, con la COMIPAZ del año 2000 como la última creada<sup>1172</sup>. De forma paralela a esta práctica gubernamental de intento de recuperación de la verdad, la sociedad civil, encarnada en el Servicio Paz y Justicia, creó su propia comisión con medios suficientes como para producir un informe final en 1989: “Uruguay Nunca Más”, considerado por el REVJR como “la única iniciativa que haya intentado y logrado construir un relato sistematizado acerca de lo que ocurrió durante la dictadura”<sup>1173</sup>.

No obstante, independientemente de que la comisión no gubernamental fuera la que cumpliría con las demandas de verdad de las víctimas en ausencia del Estado, el REVJR sentenció en su informe sobre la visita a Uruguay que:

“En el campo de la verdad, aun en ausencia de mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad y de la cooperación de sectores importantes del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad, la realidad de las desapariciones en el Uruguay, ha quedado plenamente establecida”<sup>1174</sup>.

Hemos sostenido (en concreto con respecto al Comité DF) que el Estado tendría a la hora de responder a las demandas de verdad de las víctimas y sociedad, libertad en la elección del órgano que dé cumplimiento a las obligaciones de verdad para con víctimas y sociedad. Sin embargo, hemos de matizar que entenderíamos por “cumplir”, el hecho de que se otorgara dicha competencia a algún órgano estatal creado *ad hoc*, o a alguno ya existente que contara con las competencias adecuadas al respecto. En efecto, serán al final los propios actos del Estado los que den contenido a las obligaciones

---

<sup>1171</sup> Sobre las características mínimas de las comisiones de la verdad consúltase epígrafe 4 del capítulo VI.

<sup>1172</sup> Sobre esta comisión el REVJR reconoció los argumentos que afirmaban que no contaba con competencias suficientes como para poder respetar el derecho a la verdad de víctimas y que algunas de sus conclusiones a posteriori fueron consideradas como falsas. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Adición. Misión al Uruguay*. Doc. A/HRC/27/56/Add.2, 28 de agosto de 2014, párrs. 30 – 31.

<sup>1173</sup> *Ibid.*, párr.28.

<sup>1174</sup> *Ibid.*, párr. 70 b).

internacionales a las que este se haya obligado, no las iniciativas privadas. Así lo reconoció, de hecho, el propio Pablo de Greiff en su visita a España:

“El Relator Especial destaca iniciativas valiosas en favor de la verdad, que *aunque no suplen las necesidades de una política de Estado y de mecanismos oficiales de verdad*, podrían caracterizarse como buenas prácticas, por su calidad metodológica, la cantidad y variedad de sus fondos documentales y accesibilidad al público”<sup>1175</sup>.

El hecho de que iniciativas privadas cubran obligaciones estatales por dejación de funciones del Estado, no hace que estas le dejen de ser exigibles. En tal caso, y entre los numerosos inconvenientes a esta situación, se correría el riesgo de que la sociedad civil fuera la encargada de asumir ciertos compromisos para los cuales no cuenta con medios suficientes. Pues tal sería el principal inconveniente con el que contaría una comisión extrajudicial no gubernamental: la escasez de medios, tanto económicos como de personal para poder realizar con eficacia su función y poder así cumplir con las exigencias derivadas del derecho a la verdad del conjunto de la sociedad; entre otras cosas porque la colaboración del funcionariado público en la búsqueda de la verdad sobre acontecimientos del pasado se asemeja fundamental.

Sostenemos, por tanto, que independientemente de que mediante una iniciativa privada se haya constatado la verdad de lo ocurrido, ello no es eximente para que el Estado haga dejación de sus obligaciones internacionales como es, en este caso, constituir un mecanismo de averiguación de la verdad con competencias suficientes para un efectivo cumplimiento de esta tarea.

En cualquier caso, el REVJR, a pesar de que en este caso concreto de Uruguay haya entendido que “la realidad de las desapariciones ha quedado plenamente establecida” (siendo una comisión no gubernamental la encargada de realizar la mayor parte de este trabajo), sigue defendiendo de forma general y directa la obligación de los Estados de constituir mecanismos con competencias suficientes para que esclarezcan la verdad completa sobre lo ocurrido y den una respuesta clara a los requerimientos de las víctimas.

---

<sup>1175</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Pablo de Greiff. Misión a España, Doc. A/HRC/27/56/Add.1, 22 de julio de 2014, párr. 48. Sin resaltado en el original.

## **6. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. ESPECIAL ATENCIÓN AL VALOR JURÍDICO DE LA RESOLUCIÓN 68/165.**

En 2010, mediante la Resolución 65/196, la AG declaró a propuesta del Consejo DH el 24 de marzo<sup>1176</sup> como Día Internacional del Derecho a la Verdad. Esta proclamación da muestras de hasta qué punto la comunidad internacional empezó a estar concienciada o, mejor dicho, empezó a otorgarle la importancia necesaria y merecida a los contenidos y características que encarnaba el derecho a la verdad. Con ella se iniciaba un camino dentro del seno de la AG que desembocaría en 2014 con la adopción de la Resolución sobre este derecho.

La Resolución 65/196 concluía haciendo un llamamiento a:

“(...) todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales, así como a las entidades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Internacional”<sup>1177</sup>.

---

<sup>1176</sup> La fecha fue escogida en honor a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, religioso salvadoreño, “quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980”. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 65/196. Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas* [Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010], Doc. A/RES/65/196, 3 de marzo de 2011. Puede consultarse: <http://www.un.org/es/events/righttotruthday/> (Consultado el 17 de marzo de 2016). Dentro del fondo de la Resolución 65/196, como sustento jurídico que respaldara el dilatado tratamiento con el que ha contado el derecho a la verdad dentro de la práctica internacional de protección de derechos humanos (y también, como hemos visto en el DIH), la AG hacía referencia a los siguientes instrumentos: Carta de las Naciones Unidas, la DUDH, el PIDCP, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, los arts. 32 y 33 del Protocolo I y el art. 24.2 de la CDF. Por otro lado, recogía el tratamiento y desarrollo del que el derecho a la verdad había sido objeto dentro de la Comisión y Consejo de DH (cuyas resoluciones temáticas sobre el derecho a la verdad serán tratadas *infra*), y los informes temáticos sobre este mismo derecho preparados por la OACNUDH, que serán igualmente analizados.

<sup>1177</sup> *Ibid.*, párr.2.

Como continuación a esta Resolución, dentro del marco del 68.º período de sesiones de la AG, el representante de Argentina<sup>1178</sup> presentó un proyecto de resolución titulado “El derecho a la verdad”<sup>1179</sup>. Dicho proyecto fue posteriormente revisado<sup>1180</sup> y tras ello aprobado sin necesidad de votación el 18 de diciembre de 2013, como la Resolución de la AG 68/165 sobre el derecho a la verdad<sup>1181</sup>.

La aprobación de esta Resolución de la AG posee un gran interés a los efectos del presente estudio pues como cualquiera de ellas, por la propia composición de este órgano<sup>1182</sup>, constituyen útiles instrumentos para determinar la opinión y el sentir de los Estados de la comunidad internacional respecto a un particular concreto. Tal y como ha establecido Aimé Vallat, la AG supondría una suerte de “town meeting of the world. It was to be a forum for discussion, a focus for world opinion”<sup>1183</sup>.

A este respecto, como veremos posteriormente, la adopción de una Resolución de la AG en determinadas condiciones<sup>1184</sup> puede acarrear consecuencias jurídicas, pues tal y como ha afirmado José Antonio Carrillo Salcedo: “las declaraciones de la Asamblea

---

<sup>1178</sup> En nombre de ese Estado y de Armenia, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Liechtenstein, México, Noruega, Perú, República Checa, la República de Corea, Suiza y Uruguay, ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe de la Tercera Comisión*, Doc. A/68/456/Add.2, 10 de diciembre de 2013, párr.73.

<sup>1179</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Argentina: proyecto de resolución. El derecho a la verdad*, Doc. A/C.3/68/L.43, 1 de noviembre de 2013.

<sup>1180</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Argentina, Armenia, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Líbano, Liechtenstein, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Perú, República Checa, República de Corea, Suiza, Uruguay, Vanuatu y Venezuela (República Bolivariana de): proyecto de resolución revisado. El derecho a la verdad*, Doc. A/C.3/68/L.43/Rev.1, 20 de noviembre de 2013. Esta revisión fue presentada por, aparte de los aquéllos que ya respaldaron el primer proyecto, por Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Marruecos, Montenegro, Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Túnez, Ucrania, Vanuatu y Venezuela.

<sup>1181</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Sexagésimo octavo período de sesiones 70ª sesión plenaria Miércoles 18 de diciembre de 2013, a las 15.00 horas Nueva York*, Doc. A/68/PV.70, p.21. Texto final disponible en: ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *El derecho a la verdad*, Doc. A/RES/68/165, 21 de enero de 2014.

<sup>1182</sup> La AG es el órgano plenario de la ONU, donde tienen representación todos los Estados miembros (193 a junio de 2016). Esta universalidad de composición se une al principio de voto igualitario: a cada Estado se le otorga un voto (art.18.1 de la Carta), siendo independiente su tamaño, población o riqueza. Otra característica propia es que la adopción de sus Resoluciones son adoptadas por mayoría absoluta. Véanse, PASTOR RIDRUEJO, J.A., *Curso de Derecho Internacional público y organizaciones internacionales*, Madrid, Tecnos, 19ª ed., 2015, p.757y ss.; AIMÉ VALLAT, F., “The competence of the United Nations General Assembly”, *R. des C.*, núm.97, 1959, pp.224 y ss.

<sup>1183</sup> AIMÉ VALLAT, F., “The competence of the United Nations...”, *op.cit.*, p.225.

<sup>1184</sup> Esta posibilidad puede darse, por ejemplo, si esa Resolución es aprobada sin votación (es decir, por consenso), por unanimidad o amplia mayoría de al menos dos tercios, según lo dispuesto en el art.18.2 de la Carta de Naciones Unidas.



General relativas a derechos humanos, en tanto que expresión de aspiraciones comunitarias, han favorecido la consolidación de normas consuetudinarias y de principios generales del Derecho internacional”<sup>1185</sup>. Es por ello que la interpretación del contenido de la Resolución puede suponer un importante indicador en aras de poder discernir la vinculación jurídica con la que a finales de 2013 contaba el derecho a la verdad, en concreto, su vertiente colectiva; en correcta continuación y complemento necesario de lo que hemos podido ir interpretando sobre ello tras el estudio de la práctica estatal en las diferentes épocas analizadas.

El análisis de esta Resolución nos ofrece también una útil oportunidad para, sea si quiera en parte, confirmar o refutar los diferentes pronunciamientos doctrinales que se han venido sucediendo en los últimos tiempos en referencia a la raíz consuetudinaria del derecho a la verdad; y es que, como bien apuntó en 2011 Juan Méndez acerca de esta temática: “la discusión recién ha comenzado en la comunidad internacional”<sup>1186</sup>.

Dentro de esta “discusión” varios autores han aludido a que a la luz del desarrollo tanto internacional como nacional del que han disfrutado las dos vertientes del derecho a la verdad a lo largo de los años, puede afirmarse o confirmarse su naturaleza consuetudinaria. Como ejemplo, el autor recién mencionado constató la existencia de opiniones como la citada en este trabajo de Leandro Despouy, que alegaba que el derecho a la verdad ya en 1995 era costumbre internacional<sup>1187</sup>. Esta será, igualmente, la línea seguida por las otras opiniones doctrinales<sup>1188</sup>. Así, en 2006 Yasmin Naqvi, aún con algunas reservas, admitía:

---

<sup>1185</sup> CARRILLO SALCEDO, J.A., *Soberanía de los Estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo*, Madrid, Tecnos, 2ªed., 2001, p.76.

<sup>1186</sup> MÉNDEZ, J., “Responsabilización por los abusos...”, *op.cit.*, p.202.

<sup>1187</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, *La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción. Octavo informe revisado anual y lista de Estados que desde el 1º de enero de 1985 han proclamado, prorrogado o levantado el estado de excepción, presentado por el Sr. Leandro Despouy, Relator Especial, nombrado en cumplimiento de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/20, 26 de junio de 1995, p.57, párr. 40.

<sup>1188</sup> También podría traerse aquí la opinión al respecto de Patricia Tappatá de Valdez: “Dar a conocer públicamente la verdad obedece a una necesidad doble: cumplir parte de la obligación estatal de investigar, perseguir, procesar y castigar a los autores de violaciones a los derechos humanos, y dar respuesta a la verdad requerida por las víctimas. Ambas obligaciones están claramente establecidas por la normativa del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso, la creación de una Comisión de la Verdad, no constituye un acto facultativo de los estados ni es una concesión graciosa hacia los ciudadanos”. TAPPATÁ DE VALDEZ, P., “Comisiones de la Verdad...”, *op.cit.*, pp.1-2. En este sentido, Klaas Dykmann hablaba sobre el origen consuetudinario del derecho a la verdad como algo generalmente asentado: “The drafting of such a legal document would go beyond the commonly stated acceptance of the right to truth as a customary norm of international law”. DYKMANN, K., “Impunity and the Right to Truth...”, *op.cit.*, p.63.

“Como conclusión de la proposición de que el derecho a la verdad es un derecho consuetudinario, puede argüirse que, aunque no haya una mención explícita de este derecho en los instrumentos de derechos humanos (salvo en los Principios actualizados para la lucha contra la impunidad), los órganos y los tribunales de derechos humanos han inferido reiteradamente este derecho de otros derechos humanos fundamentales. El efecto acumulativo de esas decisiones, sumado a la difundida práctica de instituir mecanismos destinados a descubrir la verdad en países donde se han cometido crímenes graves, así como algunas leyes nacionales, y la reiteración constante, por parte de los órganos internacionales y nacionales, de la importancia de conocer la verdad, son indicios de la aparición de algo que se aproxima a un derecho consuetudinario (aunque con diferentes formas).

También cabe tener en cuenta que los derechos más esenciales para la protección de la dignidad humana y los valores de humanidad universalmente aceptados exigen menor cantidad de pruebas que confirmen su índole consuetudinaria”<sup>1189</sup>.

En este mismo sentido, pero de forma más contundente, Vivian Newman – Pont declaró en 2009:

“Para el segundo indicador propuesto por el mencionado autor, la confirmación de la práctica reiterada, pública y uniforme en el nivel nacional es una fórmula indicativa del reconocimiento o de la conciencia que tienen los pueblos de que una práctica es derecho. En materia de verdad, debemos anotar aproximadamente 30 comisiones de verdad que se han instaurado en diferentes Estados que han protagonizado conflictos o violaciones masivas de derechos humanos, lo que resulta una clara indicación del convencimiento y de la importancia de tal concepto jurídico”<sup>1190</sup>.

Y Luís Andrés Fajardo Arturo en 2012:

“El derecho a la verdad es un verdadero derecho, cuyo reconocimiento a nivel mundial se fundamenta en la costumbre internacional, constituida porque existe una *opinio juris* desarrollada a través de principios, declaraciones y

---

<sup>1189</sup> NAQVI, Y., “El derecho a la verdad en el derecho internacional...”, *op.cit.*, p.27.

<sup>1190</sup> NEWMAN – PONT, V., “Falso o verdadero...”, *op.cit.*, p. 61.

jurisprudencia, y consolidada por una práctica que se traduce en la creación de comisiones de la verdad, que tan solo en la región [América Latina] puede verificarse con 12 casos importantes”<sup>1191</sup>.

La base que comparten los argumentos de los anteriores autores se encuentra en cómo interpretan la práctica estatal en derecho a la verdad colectivo, la cual está centrada en exclusiva, para dos de los tres autores anteriores, en la reiterada creación de comisiones de la verdad. Sin embargo, parecen obviar la existencia de mecanismos análogos, complementarios a estas comisiones, que también contarían con la potestad de concretar el derecho a la verdad colectivo. Igualmente, las afirmaciones anteriores no contemplan plenamente los requisitos necesarios amparados por el artículo 38 del Estatuto de la CIJ para que evaluar un derecho u obligación como Derecho internacional general.

Todas estas cuestiones son, en todo caso, más propias de los capítulos de este trabajo donde centramos nuestra atención en la práctica estatal<sup>1192</sup>, pero consideramos que es importante traerlas a colación en el siguiente sentido: aunque ya hemos mantenido que a nuestro entender, en el momento en que tales afirmaciones fueron hechas, es abiertamente discutible que el derecho a la verdad, en su dimensión colectiva, pudiera ser entendido como derecho consuetudinario, la cuestión a abordar ahora es si con la Resolución de la AG citada, el estado de cosas pudiera haber cambiado. Dicho de otro modo, para aquellos que estiman que antes de la aprobación de esta Resolución, ya habían concurrido los elementos necesarios para la creación de una obligación consuetudinaria, la Resolución 68/165 podría no ser un elemento de importancia destacable. En nuestro caso, obviamente, sí lo es o, al menos, podría serlo; lo que justifica que la analizamos en detalle.

Para acometer esta labor habremos de partir de que, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Carta de la ONU, la Asamblea General puede hacer recomendaciones a los Estados miembros, lo que se traduce en que, desde el punto de vista jurídico, sus Resoluciones no son vinculantes *per se* para los mismos. Por otro lado, y como afirmamos anteriormente, está igual de asentado que en determinadas circunstancias

---

<sup>1191</sup> FAJARDO ARTURO, L.A., “Elementos estructurales...”, *op.cit.*, p. 30.

<sup>1192</sup> Nuestras conclusiones sobre el conjunto de la práctica estatal, donde, *inter alia*, se comprobará si se respeta el requisito de generalidad del efecto material de la costumbre se desarrollarán en el epígrafe 2 del capítulo XI.

estas sí pueden influir, tanto en la consolidación, como en la creación de normas consuetudinarias.

A este respecto, valga recordar brevemente que la CIJ en el caso de la *Plataforma continental del Mar del Norte* sostuvo distintas posibilidades dentro de lo que se ha denominado, en teoría general, la interacción entre tratado (aunque *infra* veremos que también puede ser aplicable a una Resolución de la AG) y costumbre internacional; o, dicho de otro modo, la influencia que entre sí pueden brindarse ambas formas de creación de obligaciones internacionales.

Como se sostiene en la anterior sentencia, encontramos diferentes posibilidades de que esto pueda llegar a darse<sup>1193</sup>. La primera es lo que comúnmente se ha denominado efecto *cristalizador*. En el caso de la CIJ, este mismo fue alegado por Holanda y Dinamarca:

“The first of these questions can conveniently be considered in the form suggested on behalf of Denmark and the Netherlands themselves in the course of the oral hearing, when it was stated that they had not in fact contended that the delimitation article (Article 6) of the Convention ‘embodied already received rules of customary law in the sense that the Convention was merely declaratory of existing rules’ (...) the process of the definition and consolidation of the emerging customary law took place through the work of the International Law Commission, the reaction of governments to that work and the proceedings of the Geneva Conference’ (...) and this emerging customary law became ‘crystallized in the adoption of the Continental Shelf Convention by the Conference’”<sup>1194</sup>.

---

<sup>1193</sup> Luís Ignacio Sánchez Rodríguez ha indicado que, en caso de contar con las circunstancias adecuadas, puedan darse otras dos posibilidades. Por un lado, los denominados efectos generador o declarativo, que constituyen “procesos iniciales, intermedios o cristalizadores del proceso de formación de una costumbre consuetudinaria” pero careciendo de autonomía obligacional. Y, por otro lado, el efecto constitutivo que ampara la posibilidad de que un misma Resolución de la AG pueda suponer “un acto normativo autónomo” basado, irremediabilmente, en el consentimiento de los Estados. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., *Derecho Internacional y Crisis Internacionales*, Madrid, Iustel, 2005, p.74. Lino Di Qual, por su parte, habla también de dos tipos de resoluciones las “‘résolutions déclaratives’, qui prétendent déclarer une coutume et qui en réalité la consolident ou en amorcent le processus créateur”. Y las “‘résolutions – recommandations’ qui, insérées dans une suite de précédents d’origine organique, peuvent avoir une valeur coutumière”. DI QUAL, L., *Les effets des résolutions des Nations Unies*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1967, p.251.

<sup>1194</sup> I.C.J. Reports 1969. Asunto relativo a la *Plataforma continental del mar del norte*, sentencia de 20 de febrero de 1969, párr. 61.

La CIJ contempló que, efectivamente, lo anterior era atribuible a determinados artículos de la Convención de Ginebra pues eran: “the ones which, it is clear, were then regarded as reflecting, or as crystallizing, received or at least emergent rules of customary international law relative to the continental shelf”<sup>1195</sup>.

En este efecto el inicio del proceso de formación de la costumbre recae sobre la práctica de los Estados, los cuales actúan en un determinado sentido ante una situación dada. La costumbre, no obstante, no llega a consolidarse al estar *in status nascendi* pues, por ejemplo, no ha sido seguida por una generalidad de Estados. La *cristalización* de la norma se dará durante todo el proceso de elaboración de un tratado internacional, concluyendo con su posterior adopción, en cuyo articulado se recoja una norma que coincida con el contenido de esa costumbre en formación.

El efecto *generador* es otro de los recogidos en la mencionada sentencia. Según la CIJ, se trata de “one of the recognized methods by which new rules of customary international law may be formed”<sup>1196</sup>. La CIJ señaló al respecto:

“In so far as this contention is based on the view that Article 6 of the Convention has had the influence, and has produced the effect, described, it clearly involves treating the Article as a norm-creating provision which has constituted the foundation of, or has generated a rule which, while only conventional or contractual in its origin, has since passed into the general *corpus* of international law, and is now accepted as such by the *opinio iuris*, so as to have become binding even for countries which have never, and do not, become parties to the Convention. There is no doubt that this process is a perfectly possible one and does from time to time occur”<sup>1197</sup>.

---

<sup>1195</sup> *Ibid.*, párr.63.

<sup>1196</sup> *Ibid.*, párr. 71. Este efecto es el que Juan Antonio Carrillo Salcedo ha denominado como *incitatorio*: “las declaraciones operan como instrumentos de incitación a una modificación del orden jurídico, en la medida en que sirven para poner en cuestión el Derecho establecido y apuntar hacia el Derecho deseado por la comunidad internacional de Estados en su conjunto”. CARRILLO SALCEDO, J.A., *Soberanía de los Estados... op.cit.*, p.75. Este mismo autor ha apuntado que: “l’opinion de l’Assemblée générale sur les conséquences des engagements pris dans la Charte n’oblige pas les Etats qui sont libres d’en penser autrement. Les résolutions expriment donc un avis, qui n’est past contraignant, en principe, mais qui a néanmoins une importance politique considérable parce qu’il s’agit d’une opinion concerté émanant d’une majorité d’Etats”. CARRILLO SALCEDO, J.A., “Cours général de droit international public”, *R. des C.*, núm. 257, 1996, p.166.

<sup>1197</sup> I.C.J. Reports 1969. Asunto relativo a la *Plataforma continental del mar del norte*, sentencia de 20 de febrero de 1969, párr. 71.

Este efecto se desarrolla a través del constante seguimiento por parte de una generalidad de Estados de un determinado comportamiento previamente incluido dentro de una norma convencional, cuyo contenido en tanto que tal y en un inicio, es oponible solo a aquellos que manifestaron su consentimiento en obligarse. Tal y como han determinado González Campos, Sánchez Rodríguez y Sáenz de Santa María:

“(...) el término *a quo* del proceso está constituido por un tratado internacional (...) pero el contenido de la conducta que sus disposiciones establecen, comienza a ser aplicado en el grupo social internacional, de forma general, por los Estados. De este modo se genera una práctica generalmente aceptada como derecho”<sup>1198</sup>.

Por último, y como tercer efecto, encontramos el *declarativo*, donde una norma consuetudinaria, ya asentada, pasa a formar parte del contenido de un tratado internacional. Pese a que comparten contenido, la norma de validez general seguirá desplegando sus efectos, mientras que el tratado solo será de obligado cumplimiento para aquellos Estados que manifestaron su consentimiento en ese sentido. La CIJ se refirió a esta posibilidad de la siguiente manera:

“More important is the fact that the doctrine of the just and equitable share appears to be wholly at variance with what the Court entertains no doubt is the most fundamental of all the rules of law relating to the continental shelf, *enshrined* in Article 2 of the 1958 Geneva Convention”<sup>1199</sup>.

Teniendo esta teoría como base necesaria, y como indicamos al inicio de este análisis, los tres efectos anteriores pueden ser aplicables a las Resoluciones de la AG en determinadas circunstancias, tal y como dictaminó por ejemplo la misma CIJ en su opinión consultiva *sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares* de 1996. Aquí, la CIJ estableció que para comprobar si las Resoluciones de la AG cuentan con valor normativo y pueden, por ende, producir alguno de los mencionados efectos, es especialmente necesario examinar su contenido (del cual nos ocuparemos *infra*) y su

---

<sup>1198</sup> GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Curso de Derecho Internacional... op.cit.*, p.212.

<sup>1199</sup> *Ibid.*, p.22. Sin resaltado en el original.

modo de aprobación<sup>1200</sup>. Esta misma posibilidad ha sido refrendada por la doctrina<sup>1201</sup> y por el propio Instituto de Derecho internacional, al haber establecido:

“Although the Charter of the United Nations does not confer on the General Assembly the power to enact rules binding on States in their relations *inter se*, the Assembly may make recommendations contributing to the progressive development of international law, its consolidation and codification. This may be accomplished through a variety of resolution”<sup>1202</sup>.

Habiendo sentado así la posibilidad de que las Resoluciones de la AG puedan *cristalizar, generar o declarar* normas de Derecho internacional consuetudinario, nos dispondremos a comprobar si tal situación puede ser aplicable a lo recogido en la Resolución 68/165 sobre el derecho a la verdad, en concreto, en aquellos puntos referentes a su dimensión colectiva, la cual aquí nos ocupa.

---

<sup>1200</sup> I. C. J. *Reports* 1996. Opinión consultiva *sobre la legalidad o de la amenaza o el empleo de armas nucleares*, 8 de julio de 1996, párr. 70.

<sup>1201</sup> Siguiendo la tesis de Eduardo Jiménez de Aréchaga, las resoluciones de la AG pueden dar lugar a: “(...) source of rules of international law in a way similar to the formation of a consensus in conferences for the codification and progressive development of international law. As with such conferences, it is possible to find also in respect of certain General Assembly Declarations the three effects in respect of customary law”, JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., “International Law in the past third of a century”, *Recueil de Cours*, vol. 159, 1978, p. 31. Esta posición también ha sido seguida por Theodor Meron: “The intermediate position is taken by those who recognize that certain resolutions may, in certain circumstances, contribute to the formation of customary law, or at least indicate developing trends of international law”, MERON, T., “International Law in the age of human rights”, *Recueil des Cours*, vol. 301, 2003, p. 410. Igualmente, para Abi Saab: “a growing consensus in literature to the effect that normative resolutions interact with customs exactly in the same way as codification treaties. They can thus potentially have a declaratory, a crystallizing or a generating effect”, ABI SAAB, G., “Reflexions on the contemporary process of developing international law”, *Lecture delivered at the International Law Commission on the 20<sup>th</sup> of June 1985*, p.13.

<sup>1202</sup> ANNUAIRE DE L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, “Session du Caire 1987”, vol. 62, 1987, núm. 2, pp. 274 – 289. La cláusula general acerca de la validez jurídica de las Resoluciones de la AG se encontraba contenida en su primera conclusión, la cual alegaba a que: “Although the Charter of the United Nations does not confer on the General Assembly the power to enact rules binding on States in their relations *inter se*, the Assembly may make recommendations contributing to the progressive development of international law, its consolidation and codification. This may be accomplished through a variety of resolution”. El último párrafo de esta conclusión 5ª se refería a la posibilidad de que las Resoluciones pudieran desplegar efectos jurídicos: “The following law – developing resolutions may be distinguished: Resolutions contributing to the creation of international custom; Resolutions contributing to the emergence of general principles of law; Resolutions defining the scope of negotiations on a multilateral treaty of general interest, in particular resolutions setting forth rules to be included in a future treaty; Resolutions laying down policies that determine the substance of future law, whether customary or treaty”. Un análisis sobre el conjunto de esta resolución del Instituto de Derecho Internacional puede encontrarse en: SOHN, L.B., “Enhancing the role of the General Assembly of the United Nations in crystallizing International Law”, en MAKARCZYK, J. (ed.), *Theory of International Law at the threshold of the 21th century. Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski*, The Hague, Kluwer Law International, 1996, pp.549 – 561.

El primer paso será distinguir de entre los tres efectos de interacción descritos, cuál es el que más se acerca al contexto que estamos analizando. En primer lugar, el efecto *declarativo* quedaría descartado debido a que de la práctica estatal hasta ahora estudiada acerca de esta materia, no hemos podido confirmar que el derecho a la verdad en su vertiente colectiva pueda ser considerado como derecho consuetudinario.

Por su parte, en segundo lugar, dada la fecha de adopción de la referida Resolución -2013- y la necesidad, ya apuntada, de que la aparición de una norma consuetudinaria necesita de una práctica continuada y prolongada en el tiempo, resulta prácticamente imposible que el efecto generador haya podido fructificar. Pues, tal y como se estudiará *infra*<sup>1203</sup>, dado el breve lapso de tiempo transcurrido –poco más de dos años- aún no contamos con una práctica estatal lo suficientemente constante, general y uniforme que nos permita plantear esta posibilidad.

En consecuencia, es el efecto *cristalizador* nuestro objetivo de análisis, y al respecto es menester que nos detengamos un momento en la existencia de otra posibilidad de interacción entre este tipo de Resoluciones y la costumbre, no tan extendida como las tres anteriores pero también existente; la conocida como “costumbre instantánea” y cuyas características pueden ser confundidas con la aplicación de este último efecto.

La aparición de esta posibilidad surge de lo que se ha denominado un “desplazamiento del centro de gravedad de ella [la costumbre] hacia el elemento espiritual u *opinio iuris*”<sup>1204</sup>. Es decir, en oposición a la concepción clásica de prueba de la aparición de una nueva costumbre internacional (práctica estatal más *opinio iuris*), el elemento espiritual tiene prelación sobre el material, siendo aquel manifestado justo en el momento de adopción de la Resolución<sup>1205</sup>. Sin embargo, también podemos

---

<sup>1203</sup> La práctica estatal entre 2010 y 2015 será estudiada en el epígrafe XII.

<sup>1204</sup> PASTOR RIDRUEJO, J.A., *Curso de Derecho Internacional Público... op.cit.*, 18.ª ed., 2014, p.154.

<sup>1205</sup> Ya apuntamos que Luís Ignacio Sánchez Rodríguez se refirió a la posibilidad de que una Resolución de la AG pudiera ser considerada como un “acto normativo autónomo”; efecto denominado como *constitutivo*. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., *Derecho Internacional...op.cit.*, p.74. Antonio Remiro Brotons ha manifestado al respecto que: “La rapidez con que los miembros de la sociedad internacional pueden asumir los principios enunciados en una determinada resolución como parte del Derecho vigente condujo a afirmar a algunos autores que nos encontrábamos ante *costumbres instantáneas*, cuyo único soporte era el elemento espiritual: la *opinio iuris communis*, manifestada en el momento de la adopción de la resolución. Las consecuencias eran obvias. Al desaparecer la *práctica* del esqueleto de la costumbre la AG se convertía en un órgano *cuasilegislativo*, capaz de adoptar resoluciones que, apoyadas pero no aplicadas –todavía – por la generalidad de los Estados, se convertía casi automáticamente en normas de DI general”. REMIRO BROTONS, A. *et al.*, *Derecho Internacional*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p.552. En este mismo sentido José Antonio Pastor Ridruejo se ha pronunciado a favor de la importancia de la *opinio iuris* dentro de la determinación de un derecho como consuetudinario. En concreto, acerca de la aparición del derecho sobre el espacio ultraterrestre: “para la consolidación de estas normas



interpretar que el comportamiento de los Estados en un foro universal como la AG, donde toda la comunidad internacional puede posicionarse de forma igualitaria a favor o en contra de un determinado particular, es también considerado como parte del elemento material, lo que implicaría, de este modo, un cumplimiento de las exigencias de ambos elementos para la determinación de la costumbre.

En todo caso, la principal diferencia entre el efecto *cristalizador* y la “costumbre instantánea” se da en el tiempo o, para más precisión, en el transcurso del mismo. La concentración del elemento material y espiritual en un único comportamiento como es el voto a favor de una Resolución, se opone a la teoría clásica del efecto *cristalizador* basada en la anterior existencia de una “emerging rule of customary law”<sup>1206</sup>. Es decir, ya hemos visto que la *cristalización* presupone la existencia de una práctica estatal y una *opinio iuris* en desarrollo aunque sin haber alcanzado todavía los requisitos exigidos para consagrarse como norma de Derecho internacional general. En ambos supuestos encontramos dos similitudes principales: la inexistencia de una norma de derecho consuetudinario al momento de adopción de la Resolución (como hemos demostrado a través de la práctica estatal hasta 2010, extrapolable al momento de aprobación de la Resolución) y la importancia del consentimiento prestado en, este caso, la AG<sup>1207</sup>.

No obstante, aunque, sin adelantarnos, la conclusión final será similar en ambas dimensiones, siguiendo con el análisis que estamos realizando sobre el comportamiento

---

consuetudinarias no importó la falta de antigüedad y generalidad de la práctica. Lo esencial fue el consentimiento de la comunidad internacional, o lo que es lo mismo, el elemento espiritual de la costumbre u *opinio iuris* colectiva, manifestada a través de un foro universal”. PASTOR RIDRUEJO, J.A., *Curso de Derecho Internacional Público...* *op.cit.*, 18.<sup>a</sup> ed., 2014, p.153. Yoram Dinstein, por su parte, ha calificado las polémicas doctrinales que versan sobre la supuesta superioridad de uno de los elementos de la costumbre sobre el otro como “irrelevante”, pues tanto la práctica estatal como la *opinio iuris* son esenciales para la prueba de la costumbre internacional, como viene estando establecido en el DI. DINSTEIN, Y., “The interaction between...”, *op.cit.*, p.294.

<sup>1206</sup> JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., “International Law...”, *op.cit.*, p. 31.

<sup>1207</sup> Sobre la importancia del consentimiento en la formación del derecho internacional general, Juan Antonio Carrillo Salcedo ha afirmado: “En última instancia, es el consenso de los Estados lo que realmente cuenta en la elaboración del Derecho internacional general: ahora bien, en la gestación y consolidación de este consenso no es posible ignorar la adopción de tratados multilaterales y de instrumentos jurídicos no convencionales – como es el caso de las resoluciones –, ni la indiscutible institucionalización de la diplomacia normativa. En definitiva, el consentimiento y la voluntad de los Estados soberanos son esenciales cuando se trata de determinar las obligaciones precisas que vinculan jurídicamente a un Estado; en cambio, en la etapa final del proceso de elaboración de principios y normas de carácter general, lo que cuenta es la existencia de un *consensus generalis* de los Estados, cualquiera que sea la forma técnica de la que los Estados se sirvan para expresar el consenso en cuestión. El consenso de los Estados, en efecto, puede quedar expresado a través de distintos cauces jurídicos, de diferente naturaleza: tratados o convenciones multilaterales; prácticas generalmente aceptadas como Derecho (...); o declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se enuncian principios generales del Derecho internacional”. CARRILLO SALCEDO, J.A., *Soberanía de los Estados...* *op.cit.*, pp.78 – 79.

de los Estados respecto al derecho a la verdad colectivo antes de la aprobación de la Resolución 68/16, nuestro examen aquí debe centrarse en la posibilidad de considerarla como *cristalizadora*<sup>1208</sup> del derecho a la verdad.

A partir de lo anterior, el contenido de la Resolución será el factor al que ahora nos deberemos ceñir para determinar si esta puede generar efectos jurídicos, como ya dispuso la CIJ en su opinión consultiva sobre *la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares*. En efecto, su interpretación será imprescindible como medio para comprobar si cuenta con carácter normativo, es decir, si “la resolución – o partes de ella – (...) se ha gestado con la intención de enunciar principios jurídicos de alcance abstracto y general, y no meramente políticos”<sup>1209</sup>. En caso de que concluyamos esta última opción (simple alcance político) será imposible sostener que la Resolución pueda *cristalizar* efecto jurídico alguno pues en su *ánimo* no estará el desarrollo de nuevas normas de Derecho internacional general.

Hasta el momento los pronunciamientos con los que contamos de órganos de protección de derechos humanos sobre el derecho a la verdad colectivo, sobre todo dentro del sistema universal, han ido en la dirección de que los Estados tienen la obligación de constituir mecanismos (comisiones de la verdad y políticas archivísticas, principalmente) orientados a que la sociedad, como parte afectada cuando se perpetran violaciones de derechos humanos, pueda conocer la verdad sobre ellas. A este respecto, como inicio del siguiente análisis, debemos identificar cuáles son los párrafos en los que la AG se ha pronunciado sobre el derecho a la verdad colectivo para interpretar, posteriormente, si los Estados miembros de la AG pretendieron mediante dichos pronunciamientos *cristalizar* una obligación general en este ámbito.

La primera mención la encontramos en el preámbulo:

---

<sup>1208</sup> Sobre la posibilidad de que las Resoluciones de la AG puedan *cristalizar* normas de derecho internacional consuetudinario, Eduardo Jiménez de Aréchaga se ha pronunciado de esta manera: “Thus in a General Assembly declaration rules of customary law may be recognized as pre-existing norms and declared to be so; an emerging rule of customary law in *status nascendi* may crystallize thanks to a unanimously adopted General Assembly declaration; a resolution by the General Assembly which is clearly of *lege ferendae* may however provide the basis for a subsequent and concordant practice of States which will transform the resolution into a rule of customary international law”. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., “International Law...”, *op.cit.*, p. 31. El propio Instituto de Derecho Internacional, en su conclusión 14, a la sesión de El Cairo de 1987, también se refirió al efecto cristalizador: “In situations where a rule of customary law is emerging from State practice or where there is still doubt whether a rule, though already applied by an international organ or by some States, is a rule of law, a resolution adopted without negative vote or abstention may consolidate a custom or remove doubts that might have existed”.

<sup>1209</sup> REMIRO BROTONS, A. *et al.*, *Derecho Internacional...* *op.cit.*, p. 549. En este mismo sentido, SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., *Derecho Internacional...* *op.cit.*, p.74.

“*Convencida* de que los Estados deberían preservar los archivos y otras pruebas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario para facilitar el conocimiento de tales violaciones, la investigación de las denuncias y el acceso por las víctimas a un recurso efectivo de conformidad con el Derecho internacional”.

Ya en la parte dispositiva de la Resolución se refirió a la constitución de comisiones de la verdad en los siguientes términos:

“2. *Acoge con beneplácito* la creación en varios Estados de mecanismos judiciales específicos y mecanismos no judiciales, como las comisiones de la verdad y la reconciliación, que complementan el sistema judicial, para investigar las violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, y valora la preparación y publicación de los informes y decisiones de esos órganos;

3. *Alienta* a los Estados interesados a que difundan, apliquen y vigilen la aplicación de las recomendaciones formuladas por mecanismos no judiciales como las comisiones de la verdad y la reconciliación, y a que faciliten información sobre el cumplimiento de las decisiones de los mecanismos judiciales;

4. *Alienta* a otros Estados a que estudien la posibilidad de crear mecanismos judiciales específicos y, en su caso, comisiones de la verdad y la reconciliación que complementen el sistema judicial para investigar y abordar las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del Derecho internacional humanitario”.

Por último, en relación con los archivos:

“10. *Alienta* a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que establezcan una política archivística nacional que garantice la preservación y protección de todos los archivos que guarden relación con los derechos humanos y a que promulguen leyes que declaren que el legado documental de la nación debe conservarse y preservarse y establezcan el marco para la gestión de los registros del Estado desde su creación hasta su destrucción o su preservación, y toma nota a este respecto de las medidas que están tomando el Consejo de Derechos Humanos, la

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las organizaciones regionales y otros interesados para sistematizar las normas existentes en la esfera del acceso a la información, la protección y la preservación de los registros y la gestión de archivos”.

Para poder identificar el *ánimo* con el que fue adoptada esta Resolución serán elementos clave: el lenguaje y los términos utilizados en ella<sup>1210</sup>.

Poniendo énfasis en el cuarto y el décimo párrafo por ser aquellos que recogen la creación de las comisiones de la verdad y las políticas de archivos (los dos mecanismos que desde el Informe Joinet en 1997 se han asimilado con la forma más eficaz de proteger y concretar el derecho a la verdad colectivo<sup>1211</sup>), a continuación procederemos a comparar su contenido con el de algunas de las Resoluciones de la AG que fueron consideradas por la CIJ como instrumentos que *generan, cristalizan o declaran* normas de Derecho internacional consuetudinario. Posteriormente, comprobaremos si al contenido de la Resolución 65/168 podrían serles adscritas estas mismas interpretaciones.

En primer término, tomaremos como referencia la Resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970 que contiene la “Declaración relativa a los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. En la misma, apreciamos cómo se alude directamente al modo en el que los Estados “deben” comportarse ante una situación concreta. A este respecto, dispone: “Todo Estado *tiene el deber* de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las líneas internacionales de

---

<sup>1210</sup> La CIJ se pronunció acerca de la importancia de interpretar el contenido de las Resoluciones para conocer si a través de ellas se pudieran identificar auténticas normas jurídicas: “[i]t would in the first place be necessary that the provision concerned should at all events potentially, be of a fundamentally *normcreating character* such as could be regarded as forming the basis of a general rule of law”. I.C.J. Reports 1969. Asunto relativo a la *Plataforma continental del mar del norte*, sentencia de 20 de febrero de 1969, párr. 72. Sin resaltado en el original. En este mismo sentido, Yoram Dinstein ha sostenido: “[i]t is not essential to asseverate the normative goal of a resolution in its title. But the choice of words in the operative clauses must be consistent with a recital of legal rights and obligations”. DINSTEIN, Y., “The interaction between...”, *op.cit.*, p. 306. Esta opinión ha sido también refrendada por Theodor Meron al hablar de que: “[t]he language of the resolution may provide important indications”, MERON, T., “International Law...”, *op.cit.*, p.411.

<sup>1211</sup> Estas mismas referencias aparecían también en el Conjunto de principios y en las Resoluciones de la Comisión y Consejo DH, al igual que en los estudios de la OACNUDH.

demarcación”<sup>1212</sup>; o: “Todo Estado *tiene el deber* de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado”<sup>1213</sup>.

Acerca de esta Resolución, la CIJ en el asunto *relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua*, afirmó:

“The Court has however to be satisfied that there exists in customary international law an *opinio juris* as to the binding character of such abstention. This *opinio juris* may, though with all due caution, be deduced from, inter alia, the attitude of the Parties and the attitude of States towards certain General Assembly resolutions, and particularly resolution 2625 (XXV) entitled ‘Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations’. The effect of consent to the text of such resolutions cannot be understood as merely that of a ‘reiteration or elucidation’ of the treaty commitment undertaken in the Charter. On the contrary, it may be understood as an acceptance of the validity of the rule or set of rules declared by the resolution by themselves”<sup>1214</sup>.

Por su parte, en la Resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 (Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales), la AG alegaba a que: “A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, *deberá cesar* toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y *deberá* respetarse la integridad de su territorio nacional”; o: “En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia

---

<sup>1212</sup> ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, *Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Resolución 2625 (XXV)*. 24 de octubre de 1970.

<sup>1213</sup> Otro de los puntos clave que se han identificado para poder llegar a conocer si el carácter de una determinada Resolución de la AG es normativo, es el modo en el que se interpela o alude a los Estados. Para Luke T. Lee la mención a “every State” o “all States”, dentro de una Resolución de la AG, puede suponer la pretensión de la propia AG de extender el contenido de la misma al conjunto de los Estados, a modo de una obligación de carácter general que vincule a toda la comunidad internacional por igual, en vez de reducirlo a los Estados miembros de las AG. Véase, LEE, L., “The Law of the Sea Convention and Third States”, *The American Journal of International Law*, vol. 77, 1983, núm. 3, p. 549. En este mismo sentido, CZAPLIJSKI, W., “Sources of International Law in the *Nicaragua Case*”, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 38, 1989, p. 161.

<sup>1214</sup> I. C. J. *Reports* 1986. Asunto relativo a las *actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua*, sentencia de 27 de junio de 1986, párr. 188.

*deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios*”<sup>1215</sup>.

Sobre esta Resolución la CIJ, en su opinión consultiva sobre *Namibia*, estableció:

“A further important stage in this development [international law in regard to non-self-governing territories] was the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960), which embraces all peoples and territories which ‘have not yet attained independence’. (...) the Court must take into consideration the changes which have occurred in the supervening half-century, and its interpretation cannot remain unaffected by the subsequent development of law, through the Charter of the United Nations and by way of customary law”<sup>1216</sup>.

La comparación del contenido de la Resolución 68/165 sobre el derecho a la verdad (incidiendo en los dos párrafos antes señalados) con alguna de las anteriores, no deja lugar a dudas de que la terminología utilizada en aquella no es concordante con lo que podemos identificar con una obligación estatal, pues no encontramos ninguna referencia directa e inequívoca a cuál ha de ser el comportamiento al que los Estados tienen el deber de adaptarse tras un período de violación de derechos humanos en cumplimiento del derecho a la verdad colectivo. En lugar de ello, encontramos simplemente meras recomendaciones de comportamiento, tales como: “*reconocer* la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad”, o: “*alentar a estudiar la posibilidad* de crear mecanismos judiciales específicos y, en su caso, comisiones de la verdad”. Algo que contrasta en comparación con las Resoluciones con un verdadero “normcreating character”, anteriormente identificadas por la CIJ.

Por otro lado, cabría plantearse lo contrario en referencia a lo que se recoge en el preámbulo acerca de la protección de archivos contenedores de información sobre

---

<sup>1215</sup> ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, *Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Resolución 1514(XV)*, 14 de diciembre de 1960.

<sup>1216</sup> I. C. J. Reports 1971. Opinión consultiva sobre *consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África sudoccidental)*, no obstante lo dispuesto en la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, 21 de junio de 1971, párr. 52. Eduardo Jiménez de Aréchaga ha interpretado que la referencia de este párrafo a “must take into consideration the changes which have occurred in (...) customary law”, se refería sin duda a la Resolución 1514 (XV). JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., “International Law...”, *op.cit.*, p. 33.

violaciones de derechos humanos<sup>1217</sup>. La traducción inglesa del párrafo anteriormente citado, en aras de poder realizar una mejor interpretación de los términos en él utilizado, es: “*Convinced that States should preserve archives and other evidence concerning gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian*”. El Instituto de Derecho internacional ha interpretado que el uso del término *shall* determina la existencia de “statement of legal obligations”<sup>1218</sup>; mientras que *should*, comporta “the rule as a standard still to be achieved”<sup>1219</sup>, o “wishes and recommendations”<sup>1220</sup>. Esta interpretación también ha sido seguida por autores como Vladimir Đuro Degan<sup>1221</sup> o Yoram Dinstein<sup>1222</sup>.

En definitiva, no puede sostenerse que a través de la Resolución de la AG el derecho a la verdad colectivo haya cristalizado en una norma de Derecho internacional general, habida cuenta de que no era intención de los Estados miembros de la AG cristalizar una norma de Derecho internacional general que les obligara, tras una época de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos, a constituir comisiones extrajudiciales de investigación o permitir el acceso público a archivos contenederos de información sobre estos hechos, en amparo del derecho a la verdad colectivo.

Ahora bien, esto nos plantea una serie de interrogantes: ¿por qué Estados con una larga tradición de respeto al derecho a la verdad colectivo (entre ellos, Argentina, patrocinadora principal de la Resolución 68/165), acordaron y adoptaron una Resolución en tales términos, sin entender que la búsqueda de la verdad global habría de constituir una obligación con alcance general? ¿Por qué no votaron en contra de esta Resolución y/o propusieron una alternativa que contuviera auténticos mandatos para los Estados?

---

<sup>1217</sup> De hecho, recordemos que en el Conjunto de principios, Diane Orentlicher se refirió a los archivos como “un asunto de importancia universal”.

<sup>1218</sup> ANNUAIRE DE L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL 1985, Helsinki, vol 60-I, p.230. Dentro de la Resolución 2625 (XXV) podía leerse: “The territory of a State *shall* not be object of military occupation”, o: “International disputes *shall* be settled on the basis of the sovereign equality of States”. Por su parte, la Resolución 1514 (XV) estipulaba: “All armed action or repressive measures of all kinds directed against dependent peoples *shall* cease”, o: “All States *shall* observe faithfully and strictly the provisions of the Charter of the United Nations”. Sin énfasis en los originales.

<sup>1219</sup> *Ibid.* El Instituto de Derecho Internacional aplicará esta misma interpretación para los términos “recommendation” o “recommend”, los cuales pueden igualmente, en sus palabras: “calls upon States to recognize the rule; commends the rule to States; or makes the observance of the rule dependent on the taking of voluntary measures”. *Ibid.*, pp.230-231.

<sup>1220</sup> *Ibid.*, p.320.

<sup>1221</sup> DEGAN, V.D., *Sources of International Law*, The Hague, Kluwer Law International, 1997, p.198.

<sup>1222</sup> DINSTEIN, Y., “The interaction between...”, *op.cit.*, p. 306.

Como inicio de nuestra interpretación al respecto, traeremos aquí lo declarado por Argentina al momento de presentación de su proyecto de Resolución, donde describía los motivos que la llevaron a ello:

“**El Sr. Fernández Valoni** (Argentina), tras presentar el proyecto de resolución, dice que el derecho a la verdad se ha convertido en uno de los pilares de la política de la Argentina en materia de derechos humanos, cuya protección y promoción a nivel internacional constituye una de las directrices de la política exterior del país. Con el incremento progresivo del número de copatrocinadores, ha llegado el momento apropiado para que la Asamblea General reconozca, por consenso, el alcance universal del derecho a la verdad. La Argentina ha aprendido que las consecuencias de la impunidad son duraderas y que las sociedades necesitan enfrentarse a su pasado para poder mirar hacia el futuro. Conscientes del hecho de que cada país tiene sus propias especificidades internas, no es intención de los patrocinadores imponer ninguna receta. El principal objetivo del proyecto de resolución es establecer que cada persona y la sociedad en su conjunto tienen derecho a la verdad y que es deber de los Estados respetar y asegurar ese derecho”<sup>1223</sup>.

La pretensión de Argentina era la de, efectivamente, favorecer la *cristalización*<sup>1224</sup> de un derecho a la verdad consuetudinario, tanto individual (aunque ya afirmamos que este se encontraría subsumido dentro de las obligaciones generales y convencionales de los Estados en derecho a la justicia) como colectivo. Conocido este punto, causa aún más incertidumbre los motivos que llevaron a Argentina a utilizar tales términos en la Resolución y, sobre todo, la manera de referirse al modo en el que este derecho se concretaría, como hemos comprobado anteriormente. En efecto, y es que si Argentina pretendía “que la Asamblea General recono[ciera], por consenso, el alcance universal

---

<sup>1223</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Tercera Comisión Acta resumida de la 47ª sesión. Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 19 de noviembre de 2013, a las 10.00 horas*, Doc. A/C.3/68/SR.47, 20 de enero de 2014, p.2.

<sup>1224</sup> En la declaración anterior, Argentina estipulaba que “ha llegado el momento apropiado para que la Asamblea General reconozca, por consenso, el alcance universal del derecho a la verdad”. Es decir, con anterioridad a la adopción de la Resolución no estaba generalmente aceptado que el derecho a la verdad tuviera “alcance universal” o, por decirlo de otro modo, que la generalidad de los Estados aceptara el derecho a la verdad como derecho consuetudinario. Argentina, por tanto, pretendía en un primer momento consolidar este derecho en el derecho internacional general.



del derecho a la verdad”, ¿no debería haberlo recogido en el texto de la Resolución como una auténtica obligación, al igual que los medios para implementarlo?

Los únicos motivos que encontramos para tal circunstancia los volvemos a situar en la declaración anterior, al haberse establecido que “cada país tiene sus propias especificidades internas, [y] no es intención de los patrocinadores imponer ninguna receta”. Es decir, pese a haber declarado que los Estados “deben asegurar y respetar” el derecho de cada persona y sociedad a la verdad, Argentina les otorga discrecionalidad para que apliquen las medidas que ellos consideren más oportunas.

Esto presenta nuevas incertidumbres pues, si Argentina considera (como declaró) el derecho a la verdad individual y colectivo como una auténtica obligación general, se necesitarían mecanismos *ad hoc* para concretarlo los cuales, en consecuencia, serían también obligatorios. Pues, por ejemplo, no entenderíamos que esta misma interpretación fuera aplicada a derechos jurídicamente vinculantes (tanto general como convencionalmente) como el derecho a la justicia<sup>1225</sup>, el cual es claro que necesita de una investigación con unas garantías específicas que deben ser respetadas para su correcta aplicación; o el derecho a la reparación<sup>1226</sup>, ya que hay afianzadas toda una serie de medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición<sup>1227</sup> que habrían de implementarse para darle efectiva cobertura. Serán esas y no otras.

En el caso del proyecto de Resolución (y de la Resolución en sí<sup>1228</sup>) Argentina sí identifica las comisiones de la verdad y los archivos como las medidas que darían cobertura al derecho a la verdad colectivo. No obstante, como afirmamos tras el análisis de su contenido, no puede determinarse que sean de obligatoria constitución para los Estados, pues no era intención de Argentina (ni de ningún patrocinador) fijar verdaderas obligaciones de hacer a los Estados en esta materia.

---

<sup>1225</sup> Sobre la obligatoriedad general del derecho a la justicia véase el epígrafe 1 del capítulo II.

<sup>1226</sup> Sobre la obligatoriedad general del derecho a la reparación véase, FALK, R., “Reparations, international law and global justice: a new frontier”, en DE GREIFF, P. (ed.), *The Handbook... op.cit.*, p.483; LÓPEZ BARRERO, E., “La obligación del Estado de reparar las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las formas de reparación”, en RIPOL CARULLA, S., VILLÁN DURÁN, C. (dirs.), *Justicia de transición... op.cit.*, p. 138-139.

<sup>1227</sup> ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 60/147, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* [Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005], Doc. A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párrs. 15-23. Igualmente, Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad Internacional del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, arts. 34-37.

<sup>1228</sup> El proyecto presentado por Argentina únicamente adoleció de cambios muy sustanciales antes de ser aprobado que no afectaron en ningún caso a los pasajes objeto de nuestro análisis; fueron aprobados tal cual fueron redactados por Argentina sin que hubiera ningún debate de fondo al respecto.

Las particularidades de cada Estado y las circunstancias propias de cada conflicto recomiendan, en efecto, que estas hayan de ser tenidas en cuenta para un mejor desarrollo de los trabajos del medio elegido. De hecho, las experiencias nacionales estudiadas dan buena muestra de la importancia de que cada organismo elegido para que la sociedad conozca lo ocurrido (ya sea comisión o políticas de archivos) deba amoldarse al contexto objeto de análisis. No obstante, es necesario anotar que, independientemente del mecanismo que se escoja, existe un núcleo central, un fin último específico e innegociable, que habrá de ser amparado: hallar la verdad extrajudicial de lo ocurrido en ese contexto determinado. Y es que esta hubiera de haber sido la tónica que debería haber sido recogida en la Resolución: la obligación de los Estados de implementar mecanismos extrajudiciales con competencias suficientes orientados a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado; con la única salvedad de que cada uno ellos pueda y deba contar con unas características y unas potestades propias, que ya averiguamos necesarias dentro de la práctica de la Comité DH en caso de comisiones de la verdad<sup>1229</sup>, que le permitan ejercer mejor su función.

Sin embargo, lo que se afianza en esta Resolución, la no imposición de “ninguna receta” a los Estados, va en una dirección distinta, más radical que lo anterior, pues de ella ni siquiera se desprende que estos tengan obligación alguna para con el derecho a la verdad colectivo. La discrecionalidad de la que parecen disfrutar los Estados en la elección del medio más apropiado para materializar el derecho a la verdad colectivo, pareciera como si se hubiera “instalado” en el terreno propio del seguimiento de la misma obligación. Es decir, según se desprende de lo sostenido por Argentina al presentar el proyecto, se aprecia como si los Estados pudieran elegir entre seguir o no una obligación que, según aquel, estos tienen. Nos encontramos, por tanto, ante una grave contradicción porque pese a que Argentina sostiene que esa obligación existe, tras el análisis del contenido de la Resolución, hemos podido corroborar que el *ánimo* con el que esta se redactó y aprobó prueba finalmente lo contrario.

La anterior interpretación contrasta con la importancia que le ha venido siendo reconocida al derecho a la verdad colectivo dentro de los distintos sistemas de protección de derechos humanos y por la propia práctica de determinados Estados. No

---

<sup>1229</sup> Ya vimos que de la obligación que se desprende de los artículos 2.1, 2.3 y 7 del Comité DH de crear comisiones extrajudiciales de investigación, será necesario el respeto de una serie de particularidades imprescindibles para que estas cumplan efectivamente su función: hallar la verdad global de lo ocurrido. Véase el epígrafe 4 del capítulo VI.

obstante, esta no se traducirá por ahora en la vigencia de una obligatoriedad general de este derecho. La Resolución, en efecto, hubiera supuesto un medio y un momento inmejorable para ampliar la vinculación jurídica del derecho a la verdad colectivo, ya obligatorio como hemos visto según distintos mecanismos convencionales del sistema universal de protección, y afianzarlo como una norma de Derecho internacional general tras todo el desarrollo que hemos venido analizando a lo largo del trabajo.

## **CAPÍTULO X**

### **EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. AVANCES EN LA AUTONOMÍA DEL DERECHO A LA VERDAD**

#### **1. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

El 13 de agosto de 2014 la Comisión IDH aprobó un informe llamado “Derecho a la verdad en América”<sup>1230</sup>, con el objetivo de sistematizar el marco jurídico del derecho a la verdad dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos y analizar las experiencias ya implementadas en determinados contextos americanos. Para amparar su análisis la Comisión IDH se valió tanto de su numerosa práctica como la de la propia Corte IDH, ambas ampliamente analizadas durante este trabajo.

En aras de sistematizar la información recogida en este informe estableceremos que la Comisión IDH se refirió a tres puntos clave, en relación con las diferentes conexiones con las que cuenta el derecho a la verdad: garantías y protección judiciales, acceso a la información y derecho a la reparación.

Respecto a la primera referencia, la Comisión IDH centró su análisis en el desarrollo del contenido de los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1, (en la línea que ya hemos estudiado<sup>1231</sup>), haciendo una alusión especial a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con el cumplimiento de las obligaciones que de aquí emanan y con la ilegitimidad de la jurisdicción penal militar para juzgar casos de violaciones de derechos humanos<sup>1232</sup>.

---

<sup>1230</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Derecho a la verdad... op.cit.*

<sup>1231</sup> Durante esta época, la Comisión IDH también se pronunció sobre este particular en: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 11.324. Narciso González Medina y otros c. la República Dominicana*, 2 de mayo de 2010, párrs.202-204.

<sup>1232</sup> Este extremo, no apuntado aún en este trabajo, es considerado como otra forma de limitar el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la justicia y, como consecuencia directa, a la verdad. A este respecto, la Comisión IDH sentencia que “la jurisdicción militar debe aplicarse únicamente cuando se atente contra bienes jurídicos penales castrenses (...), nunca para investigar violaciones de derechos humanos”. *Ibid.*, p.48.

Acerca de la segunda, el derecho de acceso a la información<sup>1233</sup>, la Comisión IDH identificó en esta vertiente el carácter colectivo del derecho a la verdad: “Asimismo, tanto la CIDH como la Corte han resaltado que el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de acceder a la información también incluye a la sociedad en general en tanto resulta esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos”<sup>1234</sup>.

Para la Comisión IDH el acceso a la información permite:

“(...) reconstruir el pasado, reconocer los errores cometidos, reparar a las víctimas y formar una opinión pública vigorosa que contribuya a la recuperación democrática y a la reconstrucción del Estado de Derecho. (...) la garantía del derecho de acceso a la información en supuestos de graves violaciones de derechos humanos es fundamental para disolver los enclaves autoritarios que pretenden sobrevivir a la transición democrática y constituye una condición necesaria para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, así como para prevenir la corrupción y el autoritarismo”<sup>1235</sup>.

De forma derivada de las anteriores, la Comisión IDH también mencionó la reparación que aporta el conocimiento de la verdad en casos de violaciones de derechos humanos, en cuanto que, como ya hemos constatado dentro del sistema interamericano, el conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo, lugar, motivos e identidad son elementos fundamentales para la íntegra reparación de las víctimas de derechos humanos<sup>1236</sup>.

Acerca de los medios con los que cuenta un Estado para concretar el derecho a la verdad, ya vimos en la etapa pasada, en lo que a la Corte IDH se refiere, que las comisiones de la verdad dentro del sistema interamericano poseen únicamente carácter

---

<sup>1233</sup> Para un entendimiento completo del derecho de acceso a la información dentro del sistema interamericano véase, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho de acceso a la información pública en las Américas. Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales*, Doc. OEA/Ser.L/V/II.CIDH/RELE/INF.7/12, 30 de diciembre de 2011.

<sup>1234</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Derecho a la verdad...* op.cit., p.50.

<sup>1235</sup> *Ibid.*, p.51-52. Igualmente véase, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 11.324. Narciso González Medina y otros c. la República Dominicana*, 2 de mayo de 2010, párr.159. Una opinión muy en la línea de lo aquí sostenido por la Comisión IDH es la de Pablo de Greiff al afirmar que los mecanismos de búsqueda de la verdad, en el sentido de que son los que posteriormente brindarán información a la sociedad sobre lo ocurrido, “can contribute to the establishment and entrenchment of the rule of law”, DE GREIFF, P., “Truth telling and the rule of law”, en BORER, T.A. (ed.), *Telling the truths...* op.cit., p.194

<sup>1236</sup> Véase el epígrafe 1 del capítulo VI.

potestativo. No obstante, el REVJR ya constató en relación a España la obligación de este Estado de constituir una comisión de la verdad con unas características determinadas y exclusivas para que se diera respuesta a las demandas de verdad de la sociedad española; algo que también creímos indispensable que fuera recogido en la práctica de los órganos convencionales de protección del sistema universal. En efecto, el hecho de no contar con un estándar fijo donde estén recogidas las competencias mínimas con las que ha de contar la comisión o los hechos que deban ser investigados por esta (pues cada comisión de la verdad ha de estar sujeta al contexto donde va a realizar su trabajo), pudiera hacer que la Comisión IDH tenga que examinar caso por caso si la comisión de la verdad creada *ad hoc*, en ese determinado contexto, cubre las obligaciones de los Estados para con el derecho a la verdad de víctimas y sociedad.

Al contrario que en el sistema universal, donde ya vimos que la constitución de una comisión extrajudicial de investigación sí es obligatoria en ciertos contextos, dentro del sistema interamericano, aunque su creación no constituye una obligación, la colaboración del Estado con ellas sí lo es. Esta colaboración se ejemplificaría mediante la permisión de acceso del personal de la comisión a determinados archivos o no entorpeciendo su labor. Así lo dispuso la propia Comisión IDH en la demanda del caso *Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) c. Guatemala*:

“Cuando un Estado decide crear una comisión extrajudicial de investigación como mecanismo para contribuir al derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto, debe garantizar el acceso de dicha comisión a toda la información necesaria para asegurar el adecuado cumplimiento de su mandato. En particular, dicha comisión debe tener acceso pleno a los archivos del periodo que le corresponde investigar, incluyendo con ello el acceso a la información ‘secreta’ o ‘reservada’ sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho periodo”<sup>1237</sup>.

La falta de entrega de esta información fue, de hecho, reconocida por la Comisión IDH como una violación del artículo 13 de la CADH. De opinión contraria, como veremos posteriormente, fue la Corte IDH, ya que este hecho lo entendió como una violación de los artículos 5.1 y 5.2. En esta disparidad de criterios por la comisión de los

---

<sup>1237</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Núm. 12.590, José Miguel Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) c. Guatemala*, 18 de febrero de 2011, párr. 464.

mismos hechos, junto con la heterogeneidad de características de las comisiones de la verdad, puede que se encuentre, como ya apreciamos en el epígrafe anterior sobre la Corte IDH, la falta de consolidación de una obligación estatal dentro de la CADH de construir un organismo extrajudicial de investigación.

A nuestros intereses, el artículo 13 constituye un precepto importante para la consolidación de la vertiente colectiva del derecho a la verdad, al ampararse dentro de este la obligación de los Estados de colaborar con instituciones como la CEH, como órgano de concreción del mismo. A este respecto, continuaremos el análisis en el epígrafe siguiente con la decisión de la Corte IDH sobre este caso.

## **2. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

En 2010, el derecho a la verdad estaba reconocido dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH como un derecho ligado al derecho a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos y a la sociedad en su conjunto, derivado de la obligación de los Estados de emprender acciones judiciales eficaces que condujeran al conocimiento de las circunstancias de lo ocurrido, así como que se conozca la identidad de los culpables. Esta situación contrastaba con la interpretación sostenida por los Comités anteriormente estudiados acerca de la modalidad colectiva de este derecho, los cuales sí amparaban la necesidad de crear órganos extrajudiciales. Sin embargo, la polémica que todavía estaba (y está) presente versaba sobre la cuestión que ya planteamos en la década anterior dentro del análisis del caso *Almonacid Arellano y otros c. Chile*: si la sola y única obtención de la verdad judicial a través de procesos judiciales cumpliría con los requisitos de los artículos 1.1, 8 y 25, al ampararse en ellos, según lo estipula la propia Corte IDH, *la verdad en su conjunto*<sup>1238</sup>. Para ello, ya sostuvimos que sería necesario el conocimiento tanto de la verdad judicial como de la extrajudicial. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, será necesario averiguar también cuáles serán los mecanismos que la Corte IDH estima oportuno aplicar para determinar la verdad global tras una etapa de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos.

---

<sup>1238</sup> Véase el epígrafe 3 del capítulo VII.

Ya fueron sentadas dos lecturas distintas acerca del papel que podía jugar la verdad histórica dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH, ambas relacionadas a su vez con el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre lo sucedido. Por un lado, que el carácter colectivo del derecho a la verdad sería concretado únicamente a través de la publicación de resoluciones judiciales (según prescribe el artículo 8.5), mientras que la constitución de otros mecanismos extrajudiciales tendría carácter potestativo. Por otro, que dentro del carácter colectivo del derecho a la verdad fueran incluidos tanto la verdad judicial como la extrajudicial, es decir, que no se ampare simplemente como modalidad colectiva la verdad judicial colectiva. Ello implicaría crear métodos específicos orientados a la consecución de ambas vertientes.

La mayoría de los pronunciamientos en esta época continúan por la senda marcada por la jurisprudencia del decenio anterior<sup>1239</sup>, sin embargo, apreciamos importantes avances en torno a la consolidación del derecho a la verdad como derecho autónomo, sin ya depender o estar subsumido dentro de las obligaciones judiciales del Estado.

El primer caso donde apreciamos esta suerte de cambio de tendencia es en el caso *Gomes Lund y otros c. Brasil* de 24 de noviembre de 2010. En él se discutía la aprobación de una ley de amnistía por parte de Brasil y su consecuente falta de investigación de los hechos del pasado, lo que redundó en la imposibilidad de que los interesados (tanto víctimas directas como sociedad) obtuvieran información acerca de lo ocurrido entonces.

---

<sup>1239</sup> Entre los pronunciamientos de esta época donde la Corte IDH apela al derecho a la verdad como un derecho concretado dentro de las obligaciones judiciales del Estado se encuentra: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Chitay Nech y otros c. Guatemala*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 25 de mayo de 2010, en *Serie C: Núm. 212*, párr. 206; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gelmán c. Uruguay*, Fondo y Reparaciones, sentencia de 24 de febrero de 2011, en *Serie C, Núm. 211*, párrs.192, 243; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *González Medina y familiares c. República Dominicana*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de febrero de 2012, *Serie C, Núm. 240*, párr.204; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Masacres de El Mozote y lugares aledaños c. El Salvador*, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de octubre de 2012, en *Serie C, Núm. 252*, párr.297; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Contreras y otros c. El Salvador*, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 31 de agosto de 2011, en *Serie C, Núm. 232*, párr.173; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Defensor de Derechos Humanos y otros c. Guatemala*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 28 de agosto de 2014, en *Serie C, Núm. 283*, párr.199; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *García Lucero y otras c. Chile*, Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones, sentencia de 28 de agosto de 2013, *Serie C No. 267*, párr.121; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Osorio Rivera y Familiares c. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 26 de noviembre de 2013, en *Serie C, Núm. 274*, párr.220.



La Corte IDH se remitió, como en otras ocasiones, al derecho a la verdad de víctimas y sociedad. La novedad que se aporta en este caso es la mención al derecho a la información (artículo 13), como parte integrante de este.

Sobre este artículo, la Corte IDH determinó que:

“(…) ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso y conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando, por algún motivo permitido por la Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que la información circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla”<sup>1240</sup>.

El artículo 13 contaba así con un componente global en cuanto que permitía que la sociedad como un todo pudiera beneficiarse del conocimiento de cierta información. A efectos de integrarse dentro del derecho a la verdad, este precepto aportaba una base legal para poder interpelar al Estado a suministrar información, o emprender acciones encaminadas a su recuperación, pero sin que necesariamente estuviera presente ese componente judicial característico de la “verdad” que hasta ahora ha pedido la Corte IDH que fuera hallada.

Sobre el papel del derecho a ser informado dentro del derecho a la verdad la Corte IDH afirmó en este mismo caso:

“Asimismo, este Tribunal ha determinado que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas, y la sociedad, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones”<sup>1241</sup>.

---

<sup>1240</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”)* c. *Brasil*, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de noviembre de 2010, en *Serie C. Núm. 219*, párr.197.

<sup>1241</sup> *Ibid.*, párr.200.

A la luz de todo ello podemos afirmar que la mención al artículo 13 dentro del caso *Gomes Lund y otros c. Brasil* supone la primera referencia que ampara la vertiente colectiva<sup>1242</sup> (y no judicial) del derecho a la verdad, tal y como se desprende de lo siguiente:

“El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 8.1 y 25 de dicho instrumento, por la afectación del derecho a buscar y a recibir información, así como del derecho a conocer la verdad de lo ocurrido”<sup>1243</sup>.

En la parte dispositiva de la sentencia se recogían además una serie de medidas no judiciales orientadas a la recolección de información:

“El Estado debe continuar desarrollando las iniciativas de búsqueda, sistematización y publicación de toda la información sobre la *Guerrilha do Araguaia*, así como de la información relativa a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, garantizando el acceso a la misma en los términos del párrafo 292 de la presente Sentencia”<sup>1244</sup>.

---

<sup>1242</sup> Según Pablo Galaín Palermo, un factor clave a la hora de que la Corte IDH reconociera el carácter colectivo del derecho a la verdad fue la proliferación de casos donde es muy difícil cuantificar con exactitud el número concreto de víctimas por ser los afectados grupos étnicos o culturales minoritarios en vez de víctimas concretas. Parecido ocurre con las reparaciones recomendadas por la Corte IDH, las cuales cuentan en numerosas ocasiones con marcado carácter colectivo, sobre todo aquellas encaminadas a la satisfacción de las víctimas y las medidas de no repetición, en las que se integra el conocimiento de la verdad de los hechos. GALAÍN PALERMO, P., “Relaciones entre el ‘derecho a la verdad’ y el proceso penal...”, *op.cit.*, p.256. Destacamos a raíz de esto lo expuesto por la Corte IDH en el caso *Masacre de Plan Sánchez c. Guatemala*: “Es preciso recordar que cuando se está en presencia de un caso contencioso ante la Corte es preciso que la parte interesada comunique quién o quiénes son los beneficiarios. Al respecto, en el párrafo 48 de la Sentencia dictada el 29 de abril de 2004, esta Corte consideró como víctimas a las personas señaladas en el párrafo 42.48 de la citada Sentencia, e indicó que también podrían serlo aquellas que fueran identificadas con posterioridad. Si bien los representantes y la Comisión señalaron que han tenido dificultades para identificar a las víctimas, y el Estado indicó la necesidad de identificarlas conforme al derecho interno, sin que ofreciera otros elementos de prueba para tal fin, esta Corte, siguiendo el criterio establecido en otra ocasión, considera que no está en condiciones de fijar indemnización alguna respecto de víctimas que no hayan sido individualizadas a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte se reserva la posibilidad de determinar, en el apartado correspondiente, otras formas de *reparación a favor de todos los miembros de las comunidades afectadas* por los hechos del caso”. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Masacre de Plan Sánchez c. Guatemala*, Reparaciones, sentencia de 19 de noviembre de 2004, párr.62. Sin resaltado en el original.

<sup>1243</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) c. Brasil*, Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de noviembre de 2010, en *Serie C: Núm. 219*, párr.325.6.

<sup>1244</sup> *Ibid.*, párr.325.16.

Por otro lado, a la Corte IDH también se le planteó, como medida de reparación a las víctimas, la creación de una comisión de la verdad<sup>1245</sup>. La Corte IDH consideró, en la línea que ha venido sosteniendo que:

“(…) es un mecanismo importante, entre otros existentes, para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. En efecto, el establecimiento de una Comisión de Verdad, dependiendo del objeto, el procedimiento, la estructura y el fin de su mandato, puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, al esclarecimiento de hechos y a la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad. Por ello, el Tribunal valora la iniciativa de creación de la Comisión Nacional de Verdad y exhorta al Estado a implementarla de acuerdo con criterios de independencia, idoneidad y transparencia en la selección de sus miembros, así como a dotarla de recursos y atribuciones que le permitan cumplir eficazmente su mandato. No obstante, la Corte estima pertinente destacar que las actividades e informaciones que, eventualmente, recabe dicha Comisión no sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad y asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales a través de los procesos judiciales penales”<sup>1246</sup>.

Esta sentencia supuso un cambio radical en la tendencia que ya veníamos viendo en casos analizados en el década pasada como el de *Masacre de la Rochela c. Colombia* de 2008 donde, recordemos, se refería en todo momento al “derecho a la verdad colectivo” y a la “verdad histórica” como conceptos ligados al proceso judicial. En este caso, en contraposición, se apoyaba en los beneficios que para la verdad colectiva e histórica tendría la constitución de mecanismos de naturaleza no judiciales.

Esta interpretación se vio confirmada en el caso *Gelmán c. Uruguay* de 24 de febrero de 2011 donde, aunque consideró violados “los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma”, es decir, no

---

<sup>1245</sup> Un análisis sobre la comisión de la verdad de Brasil puede verse en epígrafe 1.7 del capítulo XII.

<sup>1246</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) c. Brasil*, Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de noviembre de 2010, en *Serie C: Núm. 219*, párr. 297.

el derecho a la verdad como derecho autónomo<sup>1247</sup>, volvió a apelar al artículo 13 como precepto contenedor de ciertas obligaciones del Estado en materia de derecho a la verdad. La Corte IDH apeló a este derecho en los siguientes términos:

“Toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en determinadas circunstancias al artículo 13 de la Convención, el derecho a conocer la verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados de lo sucedido”<sup>1248</sup>.

La alusión a “determinadas circunstancias” respalda que, en caso de que el escenario presentado en *Gomes Lund c. Brasil* se repitiera (haberse impedido que las familias y la sociedad conocieran ciertos extremos acerca de su pasado), el artículo 13 se alzaría como el mecanismo idóneo para ampararlo.

De su lado, en noviembre de 2012, en el caso *Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) c. Guatemala*, se denunciaba al Estado por la ocultación de una serie de documentos a la CEH de Guatemala, lo que impedía que la sociedad conociera la verdad sobre parte de su historia y, de forma específica, que los familiares conocieran el paradero de sus seres queridos.

En la demanda de la Comisión IDH ante la Corte IDH, ya establecimos que aquella encontró violado el artículo 13 de la CADH. Su fundamentación se amparaba en que el Estado no había facilitado información a la propia comisión de la verdad y, como consecuencia, a las víctimas. Ante estos hechos la Corte IDH, habiendo sentado de antemano la complementariedad de la labor de las comisiones de la verdad con los procesos judiciales, estableció:

“(...) la Corte concluye que, al impedir a los familiares el esclarecimiento de la verdad histórica, a través la vía extrajudicial establecida por el propio Estado en los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional, sumado a la impunidad que persiste en este caso, el Estado violó el derecho a la integridad personal,

---

<sup>1247</sup> Sobre el derecho a la verdad, la Corte IDH estimó que “se enmarca en el derecho de acceso a la justicia y la obligación de investigar como forma de reparación para conocer la verdad en el caso concreto”. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gelmán c. Uruguay*, Fondo y Reparaciones, sentencia de 24 de febrero de 2011, en *Serie C, Núm. 211*, párr. 243.

<sup>1248</sup> *Ibid.*

consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y de las víctimas desaparecidas”<sup>1249</sup>.

Y con respecto al artículo 13, aludido por la Comisión IDH:

“(…) esta Corte considera que esta falta de colaboración del Ministerio de la Defensa con la CEH y las autoridades encargadas de la investigación ha constituido un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos de este caso, y de tal forma fue analizado en esta Sentencia, al pronunciarse sobre las investigaciones de las desapariciones forzadas y la muerte de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, así como las consecuentes violaciones a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana (*supra* párrs. 248 a 252) y en el análisis del derecho a la integridad personal de los familiares (*infra*. párrs. 295 a 302). Por tanto, el Tribunal considera que no corresponde analizar las referidas negativas de información de forma autónoma para determinar si configuran violaciones del artículo 13 o, de ser el caso, el artículo 23 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas y de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz”<sup>1250</sup>.

De los párrafos anteriores se desprende que la falta de información fue lo que propició ese sentimiento en las víctimas y lo que produjo que la Corte IDH correctamente lo ligara con el contenido de los artículos 5.1<sup>1251</sup> y 5.2<sup>1252</sup>. Esta sentencia supuso, de igual forma, la segunda vez, tras *Gomes Lund*, que la Corte IDH consideraba el derecho a la verdad violado de forma autónoma y separada a las garantías judiciales.

La contradicción, no obstante, la encontramos en que la Corte IDH, una vez hubo afirmado el derecho de las víctimas y sociedad a “ser informados de los sucedido”<sup>1253</sup>, obviara los precedentes analizados en *Gomes Lund* donde sí aplicó el artículo 13 por

---

<sup>1249</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) c. Guatemala*, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 20 de noviembre de 2012, en *Serie C: Núm. 253*, párr.300-302.

<sup>1250</sup> *Ibid.*, párr. 269.

<sup>1251</sup> “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

<sup>1252</sup> “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

<sup>1253</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) c. Guatemala*, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 20 de noviembre de 2012, en *Serie C: Núm. 253*, párr. 301.

estos mismos motivos. La novedad que aquí se presenta respecto al caso anterior es que lo que produce esa sensación a las víctimas es el desconocimiento de la verdad histórica, es decir, una verdad no judicial que, como expusimos anteriormente, pudiera verse jurídicamente amparada dentro del artículo 13. Por ello nos cuestionamos que si efectivamente la Corte IDH entiende que la sociedad, en el caso que nos ocupa, tiene derecho al conocimiento de los hechos y que debe ser informada de lo sucedido, ¿por qué no la considera víctima<sup>1254</sup> del artículo 13?

Esta circunstancia entendemos que está relacionada con la manera con la que hasta la fecha la Corte IDH ha concretado y entendido el derecho a la verdad: el proceso penal. Que este tribunal haya independizado el derecho a la verdad del derecho a la justicia en dos casos (uno, amparado en los artículos 1.1, 8, 13 y 25; otro, en los artículos 5.1 y 5.2) es sin duda un comienzo con respecto a un posible cambio de interpretación acerca del papel del derecho a la verdad colectivo dentro de la CADH. Sin embargo, si realizamos un estudio comparado entre la práctica de la Corte IDH y los mecanismos de protección del sistema universal, podemos apreciar que aquella peca de falta de concreción en lo relativo a esta vertiente del derecho a la verdad.

Ya vimos que cada uno de los tres Comités estudiados, junto con otros mecanismos de protección pertenecientes al sistema universal, recomendaron la creación de comisiones de la verdad a distintos Estados como forma de respetar el

---

<sup>1254</sup> Acerca del término “víctima”, dentro de la CADH no encontramos una referencia directa a los requisitos necesarios para ser considerado como tal (no confundir con la legitimación activa ante el sistema interamericano), no obstante, sí hay pronunciamientos indirectos sobre las cualidades requeridas. Por ejemplo, el art. 1.1 contempla: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda *persona* que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Es necesario anotar también que tanto la Corte IDH como la Comisión IDH han precisado la necesidad de que la/s víctima/s del hecho ilícito del Estado deban de ser determinadas e individualizadas, es decir, que se den nombres y apellidos de los afectados para que la Corte IDH pueda pronunciarse respecto al caso concreto. Sin embargo, a pesar de que la Corte IDH únicamente se ha pronunciado en un caso concreto sobre víctimas no individualizadas (caso *Mayagna (sumo) Awas Tingni c. Nicaragua* de 31 de agosto de 2001), a la hora de determinar reparaciones, sí que ha contemplado algunas que afectaban, no solo al individuo concreto, sino a la sociedad en su conjunto, independientemente de que de forma paralela la víctima del caso hubiera sido una persona física. Concretamente en el caso *Masacres de El Mozote y lugares aledaños c. El Salvador* de 25 de octubre de 2012, la Corte IDH al referirse a las reparaciones de las víctimas estableció: “Previamente, la Corte estima pertinente reiterar que, con motivo de la denegación de justicia en perjuicio de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como lo es una masacre, se presenta una diversidad de afectaciones tanto en la esfera individual como colectiva”.

derecho a la verdad de la sociedad<sup>1255</sup>. De esta manera se entendieron estas comisiones como el medio específico para concretar el derecho a la verdad colectivo.

Del estudio de la jurisprudencia de la Corte IDH podemos inferir que esta sí reconoce la existencia de un derecho a la verdad. No obstante, la falta de mención directa dentro de su jurisprudencia a la obligación de instituir un mecanismo independiente extrajudicial para hallar la verdad de lo ocurrido, hace que nos preguntemos si la consecución de esa verdad es considerada por la Corte IDH como un fin en sí mismo (en el sentido de que pueda ser apreciada su conculcación de una manera autónoma) o, por el contrario, es un mero derecho derivado del acceso a la justicia; tendencia que empezamos a ver cambiante en ocasiones puntuales.

El Comité DH respecto a España ya consideró la creación de una comisión encaminada a hallar la verdad histórica; el Comité CT con ocasión de sus OF a Colombia, preocupado por que se estuviera garantizando solamente la “verdad procesal”, recomendó a aquel Estado la constitución de “una comisión de la verdad autónoma e independiente”; el Comité DF, por su parte, y también respecto a España, recomendó “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado”; opinión de la que también fueron defensores el REVJR, con sus características ya apuntadas, y el GTDFI. En definitiva: en el sistema universal se llegó a la conclusión de que la verdad no ha de ser “subsidiaria necesariamente de la suerte del proceso penal”<sup>1256</sup>.

Será la ausencia de pronunciamientos análogos a los anteriores, salvo en *Gomes Lund*<sup>1257</sup>, lo que haga que veamos una deficiencia notable en el modo en el que la Corte

---

<sup>1255</sup> Las características con las que deberían contar estas comisiones pueden verse desarrolladas en el epígrafe 4 del capítulo VI.

<sup>1256</sup> FILLIPINI, L., MARGARRELL, L., “Instituciones de la justicia de transición y contexto político”, en RETTBERG, A. (ed.), *Entre el perdón y el paredón. Preguntas y dilemas de la justicia transicional*, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2005, p.146.

<sup>1257</sup> Un caso análogo donde pudo repetirse un pronunciamiento similar fue el de 14 de noviembre de 2014, *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) c. Colombia*. En él se departía acerca de los desaparecidos en los conocidos como “los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia” en Bogotá en 1985 y la falta de esclarecimiento de los mismos por parte del Estado, así como sobre la falta de colaboración del Estado con las distintas investigaciones, tanto judiciales como no judiciales, que se habían emprendido para averiguar la verdad de lo ocurrido. Según la Corte IDH esta actuación del Estado “imp[idió] a las víctimas y familiares ver satisfecho su derecho al establecimiento de la verdad por vía de dicha comisión extrajudicial”. Y, habiendo sentado la complementariedad entre mecanismos judiciales y extrajudiciales, sentenció: “aún no existe una versión oficial de lo ocurrido a la mayoría de las víctimas del caso”. Aunque todo parecía augurar que podría repetirse un pronunciamiento parecido al del caso *Gomes Lund c. Brasil*, la Corte IDH decidió acogerse a su conocida interpretación de la verdad judicial y desechó tratar este caso como una violación del derecho a la verdad, no solo colectivo, sino ni siquiera individual: “(...) la Corte reitera que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves

IDH pretende averiguar el derecho a la verdad colectivo. Este tribunal vincula el logro de la verdad, en su mayoría, al éxito o al fracaso del proceso judicial, al conectar inexorablemente la consecución de un derecho (justicia) con otro (verdad)<sup>1258</sup>. Un

---

violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención, el derecho a conocer la verdad (...). No obstante, considera que en el presente caso el derecho a conocer la verdad se encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de las víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los artículos 8 y 25 de la Convención, lo cual constituye además una forma de reparación. En consecuencia, en este caso este Tribunal no hará un pronunciamiento adicional respecto de la violación del derecho a la verdad formulada por los representantes”. La Corte IDH daba también aquí por amparado el derecho a la verdad en la investigación judicial que se procedería a hacer sobre los hechos objeto del caso. La vertiente colectiva quedaría, en su caso, consolidada en la simple publicación de la sentencia (aunque no se pronunciara sobre el tema, su jurisprudencia anterior en derecho a la verdad avala que es esa, y no otra, el modo de concreción del derecho a la verdad colectivo) y por ciertas formas de reparar a la colectividad afectada por las violaciones de derechos humanos. Véase, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) c. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 14 de noviembre de 2014 en *Serie C, núm. 287*, párrs. 267, 511 y 615.19. Igualmente véanse casos posteriores donde también se repite esta fórmula: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Cruz Sánchez y otros c. Perú. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 17 de abril de 2015 en *Serie C, núm. 292*, párr. 426-430; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Omar Humberto Maldonado y otros c. Chile*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2015 en *Serie C, núm. 300*, párrs. 106-108.

<sup>1258</sup> Un ejemplo reciente donde la Corte IDH vuelve a vincular el derecho a la justicia con el derecho a la verdad, pese a haber reconocido la violación de este último, se da en el caso *Comunidad Campesina de Santa Bárbara c. Perú*, de 1 de septiembre de 2015. En este caso, la Corte IDH se pronunció acerca del derecho de los familiares a conocer el paradero de sus seres queridos, presuntamente hechos desaparecer por miembros del Ejército peruano el 4 de julio de 1991. Este tribunal alegó que: “De lo anterior se desprende que, si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, aquel tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la Convención Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso”. Sin embargo, encontramos un punto de inflexión y de novedad al haber la Corte IDH fundamentado también este derecho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Perú, ya aquí analizada<sup>1258</sup>. Y es que, tras haber apuntado este extremo, y siendo aquí donde residen las novedades de este caso, la Corte IDH se refirió a los arts. 29.b y c de la CADH (“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (...) b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”. c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”). Con la alusión a estos artículos la Corte IDH pretendía dar amparo y reconocer la eficacia de los desarrollos habidos a nivel estatal, los cuales serían perfectamente aplicables a este caso, habida cuenta de la eficacia jurídica con la que contaba el derecho a la verdad en el ordenamiento nacional peruano. Igualmente, en este inciso la Corte IDH pudiera estar alegando la vigencia e interdependencia de las obligaciones estatales en contextos de violaciones de derechos humanos, las cuales ya analizamos que no son optativas, sino de cumplimiento autónomo. El Estado, de esta manera, debería de cualquier forma respetar el derecho a la verdad de las víctimas, tal y como se desprende no solo de la jurisprudencia de la Corte IDH, sino de su propio ordenamiento. La Corte IDH finaliza apuntando: “Al respecto, es necesario resaltar que en el marco de desapariciones forzadas, el derecho a conocer el paradero de las víctimas desaparecidas constituye un componente esencial del derecho a conocer la verdad. La incertidumbre sobre lo sucedido a sus seres queridos es una de las principales fuentes de sufrimientos psíquico y moral de los familiares de las víctimas desaparecidas. En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte declara la violación del derecho a conocer la verdad, en perjuicio de los familiares de las quince víctimas de desaparición forzada. En este caso, como en otros, dicha violación se enmarca en el derecho de acceso a la justicia”. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Comunidad Campesina de Santa Bárbara c. Perú*, Excepciones



verdadero reconocimiento del derecho a la verdad colectivo, dentro del sistema interamericano, supondría, por un lado, la consideración de la sociedad como víctima ante la negativa del Estado de proporcionarle información sobre los acontecimientos violatorios de derechos humanos, (según contempla el artículo 13 de la CADH). Por otro lado, los órganos extrajudiciales de investigación deberían tener carácter obligatorio por ser el medio en el que el derecho de la sociedad a la verdad tras un período de violaciones masivas y sistemáticas haya de ser concretado. La publicación de una sentencia judicial que recogiera los hechos, y el consecuente conocimiento de la verdad judicial colectiva, no es suficiente, a tenor de todo lo que hemos venido analizando sobre las limitaciones del proceso judicial para cumplir con los estándares internacionales en materia de derecho a la verdad<sup>1259</sup>.

---

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015 en *Serie C, núm. 299*, párrs. 264 – 267.

<sup>1259</sup> Véase el epígrafe 2 del capítulo III.

## **CAPÍTULO XI**

### **ESTADO DEL DERECHO A LA VERDAD DENTRO DEL SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LAS PRIMERAS DECISIONES DEL TEDH.**

#### **1. CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.**

Al igual que ocurrió dentro del sistema universal de protección de derechos humanos y en el sistema interamericano, el sistema europeo, constituido en el seno del Consejo de Europa<sup>1260</sup>, no reconocía en un primer momento el derecho a la verdad dentro de su estructura de protección de derechos humanos, fundamentada sobre el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH)<sup>1261</sup>, y su principal órgano garante: el TEDH<sup>1262</sup>.

Como ya ocurriera anteriormente en Latinoamérica, el fenómeno de las desapariciones forzadas fue el origen de una evolución en la manera en la que el TEDH interpretó ciertas disposiciones. La inclusión de nuevos Estados no totalmente democratizados dentro del Consejo de Europa supuso que el TEDH tuviera que amoldarse a estas nuevas situaciones para, de ese modo, dar cobertura legal a las víctimas y familiares de desapariciones forzadas e, igualmente, obligar a los Estados a prevenir tales hechos<sup>1263</sup>.

Durante la década de los noventa y principios de los 2000 (al ser en 1987 cuando aceptara la presentación de denuncias de particulares ante el TEDH), el TEDH comenzó a amoldar su jurisprudencia para que, como ya aconteció con otros organismos como el Comité DH y la Corte IDH, las denuncias que llegaban ante su jurisdicción referentes a

---

<sup>1260</sup> Constituido por el Tratado de Londres en 1949. A diciembre de 2014 cuenta con 47 Estados miembros.

<sup>1261</sup> Adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950, entrando en vigor en 1953. A junio de 2016 ha sido ratificado por 47 Estados Parte. Ratificado por España el 24 de noviembre de 1977. *BOE* núm. 243 de 10 de octubre de 1979, pp.23564 a 23570.

<sup>1262</sup> Apuntar que al no apreciar ningún pronunciamiento de interés para el presente estudio por parte de la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos, nos referiremos a partir de aquí, y en exclusiva en lo que concierne al sistema europeo de protección de los derechos humanos, a la práctica del TEDH.

<sup>1263</sup> ANGOITIA GOROSTIAGA, V., LASAGABARTE, I., “Artículo 2. Derecho a la vida”, en LASAGABASTER HERRARTE, I. (dir.), *Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático*, Navarra, 2ª ed., Civitas, 2009, pp.39-40.

actos de desapariciones forzadas pudieran ser admitidas a trámite y conocidas por este tribunal.

De esta forma, una progresiva interpretación del articulado del CEDH que afectaba a los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tortura) y 5 (la libertad y seguridad personales), en sus conocidas como vertientes procesales, pudo sostener la obligación de los Estados de investigar no ya solo actos concretos de desaparición forzada, sino de cualquier violación de derechos humanos. La vertiente procesal se articula en el momento en el que algún hecho conculca el contenido de alguno de los artículos anteriores y el Estado obvia su obligación de investigar. En consecuencia, esta obliga a los Estados a incoar dicha investigación<sup>1264</sup>.

---

<sup>1264</sup> Sobre esta cuestión puede consultarse: CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “Las desapariciones forzadas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en CASADO, M., LÓPEZ ORTEGA, J.J. (coords.), *Desapariciones Forzadas de niños en Europa y Latinoamérica. De lo conveniente de la ONU en las búsquedas a través del ADN*, Barcelona, Observatorio de Bioética y Derecho- Universidad de Barcelona, 2015, pp. 341-359; CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “La competencia *ratione temporis* del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la obligación de investigar (art. 2. Derecho a la vida). Teoría y práctica: de *Becker c. Bélgica* a *Canales Bermejo c. España*”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 66, 2014, núm.1, pp. 126-158; VAN PACHTENBEKE, A., HAECK, Y., “From de Becker to Varnava: the state of continuing situations in the Strasbourg case law”, *European Human Rights Law Review*, núm.1, 2010, pp. 47-58; ANGOITIA GOROSTIAGA, V., LASAGABARTE, I., “Artículo 2...”, *op.cit.*; CHEVALIER-WATTS, J., “Effective Investigations under Article 2 of the European Convention on Human Rights: Securing the Right to Life or an Onerous Burden on a State?”, *The European Journal of International Law*, vol. 21, 2010, n.º. 3, pp.701-721; CASADEVALL, J. OVEY, C., WHITE, R., *The European Convention on Human Rights*, Oxford-Nueva York, 4ªed., Oxford University Press, 2006; GRABENWARTER, C., *European Convention on Human Rights. Commentary*, Munich, Verlag C.H. Beck oHG, 2014; VAN DIJK, P., VAN HOOFF, F., VAN RIJN, A., ZWAAK, L., (eds.), *Theory and Practice of the ECHR*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 4ªed., 2006; LOUCAIDES, L.G., *The European Convention on Human Rights. Collected Essays*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007. En cuanto a jurisprudencia concreta del TEDH acerca de la obligación de los Estados de investigar puede consultarse: TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *McCann y otros c. Reino Unido*, Demanda Núm. 18984/91, sentencia de 27 de septiembre de 1995; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *Kaya c. Turquía*, Demanda Núm. 22729/93, sentencia de 19 de febrero de 1998; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *Assenov c. Bulgaria*, Demanda Núm. 24760/94, sentencia 28 de octubre de 1998; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *Kurt c. Turquía*, Demanda Núm. 24276/94, sentencia de 25 de mayo de 1998; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *Çakici c. Turquía*, Demanda Núm. 23657/94, sentencia de 8 de julio de 1999; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *Aydin c. Turquía*, Demanda Núm. 23178/94, sentencia de 25 de septiembre de 1997; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (GS), caso *Chipre c. Turquía*, Denuncia núm. 27781/94, sentencia de 10 mayo de 2001; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (Sección Primera), caso *Imakayeva c. Rusia*, Demanda 7615/02, sentencia de 9 de febrero de 2007, párr.171; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (Sección Primera), caso *Khashiyev y Akayeva c. Rusia*, Demandas 57942/00 y 57945/00, sentencia de 24 de febrero de 2005, párr. 133; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (Sección Primera), caso *Utsayeva c. Rusia*, Demanda 29133/03, sentencia de 1 de diciembre de 2008, párr.162; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (Sección Primera), caso *Alikhadzhiyeva c. Rusia*, Demanda 68007/01, sentencia de 30 de enero de 2008; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (GS), caso *Silih c. Eslovenia*, Demanda 71463/01, sentencia de 9 de abril de 2009; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (GS), caso *Varnava y otros c. Turquía*, Demandas Núm. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90, sentencia de 18 de septiembre de 2009.

## 2. EL DERECHO A LA VERDAD EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.

Entrando en las referencias concretas del TEDH sobre el derecho a la verdad, desde una perspectiva temporal la primera referencia del TEDH al derecho a la verdad se dio en la sentencia de la Sección Tercera del asunto *Association '21 de diciembre 1989' y otros c. Rumania*, de 25 de mayo de 2011. En este caso, habiendo constatado la falta de investigación de los hechos alegados por parte del Estado, el TEDH encontró violado el artículo 2 en su vertiente procesal. Sobre el derecho a la verdad estableció simplemente:

“The Court has already emphasised the importance of the right of victims and their families and heirs to know the truth about the circumstances surrounding events involving a massive violation of rights as fundamental as that of the right to life, which implies the right to an effective judicial investigation and a possible right to compensation”<sup>1265</sup>.

Sin embargo, tras esta referencia el TEDH no ofrece un desarrollo más amplio sobre la posición de la verdad dentro del CEDH. Tampoco cita a qué sentencias se refiere cuando establece que “has already emphasised the importance of the right (...) to know the truth”. Por ello sostenemos que esta alegación se referirá a los casos en los que el TEDH ya interpretó la existencia de la vertiente procesal de los artículos 2, 3 y 5.

La sentencia en la cual nos centraremos más en profundidad será la del caso de Gran Sala *El-Masri c. la ex república yugoslava de Macedonia* de 13 de diciembre de 2012<sup>1266</sup>, pues en ella encontramos una referencia más completa al derecho a la verdad que la recogida por la Sección Tercera en el caso anterior.

Los hechos que en este asunto se juzgaban versaban sobre la detención de un ciudadano alemán por las fuerzas de seguridad estadounidenses con la aquiescencia de funcionarios macedonios. Posteriormente fue trasladado a un centro de internamiento en

---

<sup>1265</sup> TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *Association '21 de diciembre 1989' y otros c. Rumania* (Sección Tercera), Denuncia 33810/07, 25 de mayo de 2011, párr.106.

<sup>1266</sup> TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *El-Masri c. ex república yugoslava de Macedonia* (GS), Denuncia núm. 39630/09, 13 de diciembre de 2012. Un análisis muy completo de esta sentencia, así como del papel que juega el derecho a la verdad dentro de la jurisprudencia del TEDH puede encontrarse en: LÓPEZ ULLA, J.M., “El ‘derecho a la verdad’ en la jurisprudencia del Tribunal...”, *op.cit.*, pp. 127-169.

el extranjero donde fue sistemáticamente torturado. En esta sentencia el TEDH estableció:

“Having regard to the parties’ observations, and especially the submissions of the third-party interveners, the Court also wishes to address another aspect of the inadequate character of the investigation in the present case, namely its impact on the right to the truth regarding the relevant circumstances of the case. In this connection it underlines the great importance of the present case not only for the applicant and his family, but also for other victims of similar crimes and the general public, who had the right to know what had happened. The issue of ‘extraordinary rendition’ attracted worldwide attention and triggered inquiries by many international and intergovernmental organisations, including the United Nations human rights bodies, the Council of Europe and the European Parliament. The latter revealed that some of the States concerned were not interested in seeing the truth come out. The concept of ‘State secrets’ has often been invoked to obstruct the search for the truth (...). State secret privilege was also asserted by the US government in the applicant’s case before the US courts (...). The Marty Inquiry found, moreover, that ‘[t]he same approach led the authorities of the former Yugoslav Republic of Macedonia to hide the truth’”<sup>1267</sup>.

Aquí la Gran Sala entiende el derecho a la verdad como un derecho con una vertiente ligada a la obligación del Estado de investigar judicialmente los hechos para averiguar así la verdad sobre las circunstancias de lo ocurrido. Los sujetos activos del mismo serán la víctima directa, sus familiares, las víctimas de casos similares y la sociedad en general.

Este pronunciamiento recuerda a la primera ocasión en la que la Corte IDH mencionó la verdad como una mera disposición que había de ser tomada en cuenta a la hora de emprender la investigación de los hechos. No obstante, la referencia que hace la Gran Sala a la titularidad del mismo, al mencionar que el “general public” tiene el derecho a saber lo ocurrido, produce la inclusión de ciertos matices en la interpretación

---

<sup>1267</sup> *Ibid.*, párr.191.

del concepto de verdad del TEDH: la sociedad aparece como parte interesada en el conocimiento de estos extremos.

En este caso, el TEDH encontró violada la dimensión procesal del artículo 3 del CEDH debido a la falta de actividad investigadora del Estado una vez este tuvo constancia de los hechos. A esto se unió también la necesidad de que hubiera un necesario escrutinio público de las investigaciones o de sus resultados para asegurar así la responsabilidad individual de los hechos<sup>1268</sup>. El TEDH enfatiza a su vez que la falta de una investigación adecuada privó a la víctima del conocimiento íntegro de lo ocurrido y del papel que jugaron los responsables en los hechos<sup>1269</sup>. En conclusión, el TEDH sentenció que el artículo 3 fue violado debido al “procedural limb” en el que se encontraba la víctima<sup>1270</sup>.

Por otro lado, la Gran Sala no consideró violado el artículo 10<sup>1271</sup> debido a que se solapaba con lo que se acababa de determinar en el artículo 3<sup>1272</sup>. Esta circunstancia hace que nos surjan algunas dudas respecto a que el carácter colectivo del derecho a la verdad fuera aquí claramente reconocido por razones que se expondrán más adelante.

Un punto a tener también en cuenta es el relativo al rol del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo). Este artículo cuenta con importancia en lo relativo a la obligación del Estado de investigar y, por ende, también dentro del derecho a la verdad. La conexión entre el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la verdad ya lo establecimos en relación con lo que dispusieron tanto el Comité DH como la Corte IDH: un medio que posee la víctima para interpelar al Estado a que inicie una investigación sobre unos hechos determinados. En esta sentencia, la Gran Sala respecto al contenido del artículo 13 estableció:

“The Court further reiterates that the requirements of Article 13 are broader than a Contracting State’s obligation under Articles 3 and 5 to conduct an effective

---

<sup>1268</sup> *Ibid.*, párr.192.

<sup>1269</sup> *Ibid.*

<sup>1270</sup> *Ibid.*, párr.194.

<sup>1271</sup> “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”. La importancia de este artículo para con nuestros intereses será comentada *infra*.

<sup>1272</sup> *Ibid.*, párr.264.

investigation into the disappearance of a person who has been shown to be under their control and for whose welfare they are accordingly responsible”<sup>1273</sup>.

Como ya establecimos en el inicio de este epígrafe, la vertiente procesal de los artículos 2, 3 y 5 implicaba que los Estados debían emprender una investigación sobre los hechos que hubiera violado el contenido sustantivo de estos artículos, lo que a primera vista constituía una obligación análoga a atribuida al artículo 13. Y es que tal y como sostiene Juan Manuel López Ulla: “sorprende (...) que el Tribunal no explique a continuación [del párrafo anteriormente citado] dónde reside la diferencia”<sup>1274</sup>.

La sentencia de este caso presentó dos votos particulares, donde se muestran las dos posiciones sobre el rol que ocupa el derecho a la verdad en su jurisprudencia. El primero de estos votos fue firmado por los jueces Tulkens, Spielmann, Silicilianos y Keller<sup>1275</sup>. En él, los jueces se lamentaban del escaso desarrollo llevado a cabo por el TEDH sobre el derecho a la verdad a la vista de la falta de investigación de los hechos por parte del Estado. Estos consideraron a su vez que el derecho a la verdad no era un concepto nuevo, sino que estaba integrado dentro del articulado del CEDH y afianzado dentro de la jurisprudencia del TEDH<sup>1276</sup>. Al contrario que lo contemplado por la Gran Sala, sostuvieron que el derecho a la verdad se encontraba recogido en el artículo 13 del CEDH, junto con las vertientes procesales de los artículos 2, 3, 5<sup>1277</sup>.

La mención al artículo 13 por todo lo explicado con anterioridad parece acertada en cuanto que, efectivamente, se trata del instrumento primario con el que cuentan las

---

<sup>1273</sup> *Ibid.*, párr.256.

<sup>1274</sup> LÓPEZ ULLA, J.M., “El ‘derecho a la verdad’ en la jurisprudencia del Tribunal...”, *op.cit.*, p. 141.

<sup>1275</sup> La jueza Helen Keller fue la también firmante, junto con Fabián Salvioli, del voto disidente al caso *María Cifuentes Elgueta c. Chile* del Comité DH donde se analizaba el derecho a la verdad dentro del PIDCP.

<sup>1276</sup> A tal efecto estos miembros del TEDH citan la sentencia de la Sección Tercera del asunto *Association '21 de diciembre 1989' y otros c. Rumania*, de 25 de mayo de 2011, en donde recordemos que ya se establecía que el TEDH “has already emphasised the importance of the right of victims and their families and heirs to know the truth about the circumstances surrounding events involving a massive violation of rights as fundamental as that of the right to life”.

<sup>1277</sup> En una primera mención, los citados miembros del TEDH establecen: “We consider, however, that the right to the truth would be more appropriately situated in the context of Article 13 of the Convention, especially where, as in the present case, it is linked to the procedural obligations under Articles 3, 5 and 8. The scale and seriousness of the human rights violations in issue, committed in the context of the secret detentions and renditions system, together with the widespread impunity observed in multiple jurisdictions in respect of such practices, give real substance to the right to an effective remedy enshrined in Article 13, which includes a right of access to relevant information about alleged violations, both for the persons concerned and for the general public”, pp.82-83, párr.4. A renglón seguido dispusieron: “The right to the truth is not a novel concept in our case-law, nor is it a new right. Indeed, it is broadly implicit in other provisions of the Convention, in particular the procedural aspect of Articles 2 and 3, which guarantee the right to an investigation involving the applicant and subject to public scrutiny”, p.83, párr.5.

víctimas dentro de sus ordenamientos internos para que sus autoridades inicien una investigación sobre lo ocurrido. La relación de este artículo con respecto a los demás es también notable, en cuanto que, en palabras de estos jueces: “[i]n practice, the search for the truth is the objective purpose of the obligation to carry out an investigation and the *raison d’être* of the related quality requirements (transparency, diligence, independence, access, disclosure of results and scrutiny)”<sup>1278</sup>.

De su lado, también se realizó una mención dentro de este voto conjunto al derecho a la verdad colectivo, estableciéndose que para la sociedad en general: “the desire to ascertain the truth plays a part in strengthening confidence in public institutions and hence the rule of law”<sup>1279</sup>.

Pese a que esta valoración es totalmente válida, parece incompleta al dar por supuesto que la verdad que conocerá la sociedad será aquella que salga de un proceso judicial. Como ya hiciera la Gran Sala, estos jueces obvian la consideración del artículo 10 como parte integrante del derecho a la verdad, algo que demandamos en lo que concernía a su homólogo de la CADH, el artículo 13. La importancia con la que cuenta este artículo, que ampara el derecho a recibir información, es que bajo su espectro puede sustentarse el derecho a conocer una verdad de tipo extrajudicial por ser, al contrario que los artículos anteriormente mencionados, un artículo que ni posee vertiente procesal, ni realiza referencia alguna al proceso judicial.

El segundo de los votos particulares que acompañaba a la sentencia de la Gran Sala sobre el asunto *El-Masri c. ex república yugoslava de Macedonia*, fue firmado por los jueces Casadevall y López Guerra. En él, estos jueces se desmarcaron de la mayoría de la Gran Sala cuando esta consideró que el derecho a la verdad constituía algo distinto o adicional a realizar una investigación con las debidas garantías<sup>1280</sup>. El reconocimiento del derecho a la verdad como un derecho independiente de la obligación del Estado de respetar ciertos requisitos dentro de una investigación es, según lo dispuesto por estos jueces, redundante<sup>1281</sup>. Ellos sostienen que el derecho a la verdad y el derecho a una investigación con las debidas garantías son sinónimos si se tiene en cuenta que la investigación va efectivamente encaminada a averiguar la veracidad de los hechos y la

---

<sup>1278</sup> *Ibid.*, p.83, párr.6.

<sup>1279</sup> *Ibid.*

<sup>1280</sup> “The Court also wishes to address another aspect of the inadequate character of the investigation in the present case, namely its impact on the right to the truth”, *Ibid.*, p. 85.

<sup>1281</sup> *Ibid*



identidad de los culpables, objetivos que se desprenden de la lectura de los artículos 2 y 3 del CEDH.

Ahondando en esta vertiente, Juan Manuel López Ulla, habiendo hecho un profundo análisis tanto de la sentencia del TEDH, como de ambos votos particulares, se ha posicionado en la línea defendida por estos últimos jueces. Este autor afirma sobre lo comentado en el primer voto particular que: “los argumentos que emplean estos jueces para subrayar la entidad de este derecho coinciden, en nuestra opinión, con los que utiliza la Sentencia [sic] cuando se refiere a la necesidad de abrir una investigación efectiva siempre que la denuncia parezca fundada”<sup>1282</sup>. Y es que: “el recurso no es efectivo si no da lugar a una investigación capaz de conducir a la verdad”<sup>1283</sup>; y concluye con: “[a]l igual que los firmantes del segundo de los votos, nosotros tampoco entendemos que este derecho pueda ser concebido como algo distinto del derecho a una investigación efectiva”<sup>1284</sup>.

En contraposición a lo sostenido por este autor, y pese a que es correcto sostener la existencia de una similitud entre el concepto de investigación (judicial) orientada a conocer la verdad con *una* de las obligaciones que encarnaría el mismo derecho a la verdad, constatamos que su reducción (como un todo) a la incoación de una investigación judicial con las debidas garantías sería amputar de su contenido gran parte de su importancia. Como ya hemos sostenido como crítica respecto al primero de los votos particulares, la defensa de la existencia de una vertiente colectiva del derecho a la verdad no puede ampararse con la mera publicación de los resultados de la investigación (a la par de lo argumentado sobre este particular en relación con el Comité DH y, sobre todo, con la Corte IDH, es decir, la reducción del contenido del derecho a la verdad colectivo a la verdad judicial colectiva) debido a lo ya estudiado respecto a las dificultades que encontramos a la hora de obtener un conocimiento global de lo sucedido a través de únicamente sentencias judiciales.

---

<sup>1282</sup> Entre estos requisitos se encuentran: “la verdad constituye la finalidad objetiva de la obligación de abrir una investigación; que esta ha de ser transparente, independiente, llevada a cabo de manera diligente y sus resultados han de ser públicos; que el conocimiento de la verdad contribuye a reforzar la confianza de la sociedad en las instituciones y en el Estado de Derecho; que para las personas afectadas, la familia y los allegados de las víctimas, conocer lo que pasó constituye una forma de reparación a veces más importante que el reconocimiento de una indemnización; y que el silencio no contribuye, sino todo lo contrario, al restablecimiento de la normalidad”. LÓPEZ ULLA, J.M., “El ‘derecho a la verdad’ en la jurisprudencia del Tribunal...”, *op.cit.*, pp. 146-147.

<sup>1283</sup> *Ibid.*, p.147.

<sup>1284</sup> *Ibid.*, p.148.

En caso de que se pretenda reconocer la existencia de una vertiente colectiva del derecho a la verdad será necesario acompañarla de una propuesta que no incluya en exclusiva remedios judiciales para su concreción; afirmar esto, anula la posibilidad de que tal vertiente en efecto exista, o que lo haga de una manera incompleta. Es por ello que, aunque correcta, la equiparación de la verdad como un todo con una investigación con las debidas garantías es contraria a igualarlo con el total del significado y contenido de este derecho.

En un caso posterior, de 24 de julio de 2014, la Sección Cuarta del TEDH tuvo una nueva oportunidad para pronunciarse sobre la posición del derecho a la verdad dentro del CEDH, en el asunto *Al Nashiri c. Polonia*<sup>1285</sup>. En este caso se trataba el (mal) uso por parte de la CIA de países europeos (uno de ellos, Polonia) para el transporte ilegal de personas a centros clandestinos de detención donde sistemáticamente eran torturados.

En la audiencia pública del caso, el RELT, en representación del Consejo DH y de la OACNUDH, recalcó la importancia del derecho a la verdad dentro del CEDH con inciso en su dimensión colectiva. El RELT contempló que en casos de violaciones graves de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de informar no solo a las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto sobre lo sucedido<sup>1286</sup>. En estos contextos, el derecho a la verdad supondría la clarificación de las circunstancias de las violaciones y también el contexto general en el que se produjeron<sup>1287</sup>. El conocimiento de estos extremos, sentenciaba el RELT, supondría la difusión de información sobre las violaciones para recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado<sup>1288</sup>. En definitiva, el derecho a la verdad se encontraba afianzado en los artículos 3 (como parte de la llamada “adjectival obligation”), 10 (como reconocimiento de su vertiente colectiva) y 13 (como forma de reparación).

En lo referente a la problemática que planteábamos con anterioridad en referencia al derecho a la verdad y el artículo 10 del CEDH, el RELT enfatizó que el hecho de que se reconociera este derecho únicamente dentro del artículo 3 supondría que ante casos de violaciones graves de derechos humanos solo pudiera ser invocado

---

<sup>1285</sup> TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, caso *Al Nashiri c. Polonia* (Sección Cuarta), Denuncia núm. 28761/11, 24 de julio de 2014.

<sup>1286</sup> *Ibid.*, párr.482.

<sup>1287</sup> *Ibid.*

<sup>1288</sup> *Ibid.*

por las víctimas directas de la violación, es decir, aquellas que según este artículo tuvieran el derecho a un recurso efectivo. Sin embargo, su ubicación dentro del artículo 10 podría suponer que ese derecho fuera invocado por otros sectores de la sociedad que también tuvieran interés legítimo en conocer lo sucedido<sup>1289</sup>. En definitiva, para el RELT, tal y como nosotros también defendemos, la omisión del artículo 10 supondría la negación de la vertiente colectiva del derecho a la verdad.

Una laguna que sin embargo apreciamos en este último razonamiento sobre el significado del artículo 10 fue el tipo de información al que tendría acceso la sociedad según este artículo que, como ya recogimos, sería el único que ampararía el conocimiento de una verdad extrajudicial; una verdad diferente a la que se llegaría a conocer según los artículos 3 y 13. Y es que, según lo recogido por el RELT, el público tendría derecho a recibir información sobre lo ocurrido, sí, pero esa información se alcanzaría únicamente a través de mecanismos judiciales.

Entrando ya en las consideraciones de la sentencia de la Sección Cuarta respecto al derecho a la verdad dentro de este caso, esta reconoció la existencia del carácter colectivo del derecho a la verdad en los siguientes términos:

“Furthermore, where allegations of serious human rights violations are involved in the investigation, the right to the truth regarding the relevant circumstances of the case does not belong solely to the victim of the crime and his or her family but also to other victims of similar violations and the general public, who have the right to know what has happened”<sup>1290</sup>.

Los motivos de este reconocimiento estribaban en:

“(…) maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of impunity, collusion in or tolerance of unlawful acts (...), there must be a sufficient element of public scrutiny of the investigation or its results to secure accountability in practice as well as in theory”<sup>1291</sup>.

---

<sup>1289</sup> *Ibid.*, párr.483.

<sup>1290</sup> *Ibid.*, párr. 495.

<sup>1291</sup> *Ibid.*, párr.495.

Sin embargo, amparándose en los motivos que ya se alegaron en el caso *El-Masri c. ex república yugoslava de Macedonia*, el TEDH consideró la demanda infundada respecto al artículo 10 y el derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad<sup>1292</sup>; únicamente el artículo 3 fue considerado violado debido a la falta de una investigación efectiva sobre los hechos probados<sup>1293</sup>.

Estos pronunciamientos del TEDH nos dejan la conclusión de que el derecho a la verdad sí se encuentra amparado dentro del CEDH dentro de la dimensión procesal de los artículos 2, 3, 5, en conexión con el artículo 13, según los hechos que se traten en el caso concreto, así como en ambas vertientes, tanto individual como colectiva. No obstante, a pesar de su reconocimiento, el TEDH aún no se ha pronunciado de una manera clara e inequívoca acerca de la manera en la que se concretaría, pues únicamente se ha referido a “sufficient element of public scrutiny of the investigation”<sup>1294</sup>; pronunciamiento demasiado amplio, que pudiera coincidir con lo expresado por otros organismos de protección de derechos humanos, como la propia Corte IDH, cuando apelaban a la publicación de los resultados de la investigación para que la sociedad conociera lo ocurrido.

Por otro lado, acerca del rol que ocuparía la verdad extrajudicial dentro del CEDH, al contrario que la Corte IDH, el TEDH aún no se ha declarado al respecto y tampoco ha mencionado mecanismos alternativos de búsqueda de la verdad como lo hicieran los Comités y otros organismos de protección del sistema universal de protección.

De esta forma, aunque podemos congratularnos de que el TEDH haya reconocido la existencia del derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad, la falta de concreción en determinados aspectos (en materia sobre todo de su vertiente colectiva) es todavía notable para que los estándares europeos se igualen a los universales, tal y como hemos examinado y concluido.

---

<sup>1292</sup> *Ibid.*, párrs.580-582.

<sup>1293</sup> *Ibid.*, párr.499.

<sup>1294</sup> *Ibid.*, párr.495.



## CAPÍTULO XII

### PRÁCTICA ESTATAL. EXPERIENCIAS RECIENTES Y VALORACIÓN DE CONJUNTO

Hasta el año 2015 se han identificado ciento treinta y seis Estados<sup>1295</sup> que han sufrido violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos. Y durante el intervalo temporal ahora examinado contamos únicamente con nueve Estados que instituyeron nuevos mecanismos para la defensa del derecho a la verdad de la sociedad<sup>1296</sup>. Por otro lado, constatamos que en veinticuatro Estados se emprendieron investigaciones judiciales para preservar el derecho a la justicia y la verdad judicial e individual de las víctimas<sup>1297</sup>.

---

<sup>1295</sup> La información respecto a estos casos entre los años 2010 y 2015 ha sido extraída de los informes de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo respecto a los años 2010 (Índice Amnistía Internacional POL 10/001/2011), 2011 (Índice Amnistía Internacional POL 10/001/2012), 2012 (Índice Amnistía Internacional POL 10/001/2013), 2013 (Índice Amnistía Internacional POL 10/001/2014), 2014/2015 (Índice Amnistía Internacional POL 10/0001/2015) Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Birmania, Bolivia, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, España, Etiopía, Filipinas, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda del Norte, Islas Salomón, Israel, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kósovo, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Lituania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Mali, Marruecos, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Paraguay, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Bolivariana de Venezuela, República Centroafricana, República Checa/República Eslovaca, República Dominicana, República Democrática del Congo, República de Yemen, Ruanda, Rumanía, Rusia/URSS, Senegal, Serbia y Montenegro/Yugoslavia, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suriname, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Timor Oriental, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbequistán, Zimbabue, Zambia, Zanzíbar.

<sup>1296</sup> Colombia, Costa de Marfil, Honduras, Nepal, Tailandia, Túnez, República Bolivariana de Venezuela. También se estudiarán las experiencias de Corea del Sur, Brasil y México al suponer complementos a los instrumentos que ya analizaron en épocas pasadas. Por su parte, Burundi y Mali aunque sí son incluidas como experiencias a tener en cuenta dentro de la práctica estatal, no han formado parte del análisis pues sus comisiones aún no han empezado a desarrollar actividad alguna. El 15 de mayo de 2014 fue aprobada una ley para la creación de una nueva comisión de la verdad en Burundi para la investigación de los hechos ocurridos entre 1962 y 2008. En diciembre de 2014 fueron elegidos sus miembros: seis hutus, cuatro tutsis y un twa. Sin embargo, a fecha de redacción de este trabajo aún no hay constancia de que la comisión haya empezado a desarrollar trabajo alguno. Caso parecido es el de Mali, cuya comisión, *Truth, Justice and Reconciliation Commission*, fue fundada el 15 de enero de 2014 con el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1960 y 2013. El 4 de agosto de 2015 fue elegido el que será su presidente, Ousmane Oumarou Sidibe, académico y antiguo ministro del país.

<sup>1297</sup> Argentina, Bangladesh, Brasil, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Croacia, Ecuador, Egipto, Finlandia, Guatemala, Irán, Iraq, Líbano, República Democrática del Congo, Serbia, Sierra Leona, Timor Oriental, Túnez, Uruguay.

## **1. ESTUDIO DE CASOS.**

### **1.1. Colombia.**

Como continuación a la Ley 975, dentro de las políticas implementadas para el cumplimiento y respeto de su obligación de búsqueda de la verdad de las víctimas, se aprobó el 29 de diciembre de 2010 la Ley 1424 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Esta ley, conocida popularmente como “Ley para el acuerdo de contribución a la verdad histórica”, tenía el objetivo de “contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional”<sup>1298</sup>, mediante la creación de un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación. Este acuerdo era definido en el artículo 4 de la Ley como “un instrumento de transición para poner en vigor los principios de verdad, justicia y reparación como complemento a los instrumentos jurídicos que se han establecido para tal efecto, y contribución al proceso de reconciliación nacional”. Como complemento a este acuerdo, se crearía “un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar”.

La finalidad que perseguía esta ley era la concesión de una serie de beneficios penitenciarios a los desmovilizados que, habiendo cometido crímenes calificados como “simples” o “agravados” perteneciendo a un grupo armado organizado al margen de la ley, contribuyan al esclarecimiento de la verdad histórica de Colombia.

Mención especial merece el artículo 4.2 de esta ley. Este artículo impedía que la información que emanara de estos acuerdos pudiera ser utilizada en un proceso judicial. Sin embargo, al entenderse que lo que se estaba intercambiando en esta ley era verdad por justicia, la Corte Constitucional hubo de intervenir. Este tribunal alegó sobre este tema que la imposibilidad de utilizar tal información en un proceso penal venía derivada

---

<sup>1298</sup> Artículo 1 de la Ley 1424 de 2010.

del derecho constitucionalmente reconocido a la no incriminación<sup>1299</sup>. Del mismo modo, la Corte Constitucional tampoco creyó que esta situación afectase a las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia o resocialización de los combatientes<sup>1300</sup>. Por otro lado, la situación en caso de información referida a terceros es diferente. En este sentido la Corte Constitucional precisó que:

“(...) impedir que la información que surja de los *Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación*, sea utilizada contra otras personas, resultaría contrario al deber que tienen los asociados de colaborar con la administración de justicia y desconocería los derechos de la víctima a la reparación, la verdad y la justicia, que también atañen a la colectividad”<sup>1301</sup>.

La situación en la que quedaba la ley era similar al del caso de Sudáfrica donde la verdad era conocida (en este caso la verdad que el desmovilizado quiera confesar) pero no era posible proceder a juzgar penalmente al ya reconocido culpable.

Un paso hacia adelante se dio con la Ley 1448 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Quizás el mayor progreso de esta ley sea el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado como tal en Colombia<sup>1302</sup>, no obstante, contiene toda una serie de medidas en favor de reconocer y respetar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición a las víctimas de este ya oficial conflicto armado.

El derecho a la verdad quedó recogido como uno de los derechos integrados dentro de las medidas de justicia de transición (“justicia transicional” siguiendo el literal

---

<sup>1299</sup> CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, sentencia C-771/2011, 14 de octubre de 2011, párr. 6.4.1.

<sup>1300</sup> *Ibid.*

<sup>1301</sup> *Ibid.*, párr. 6.4.2. Las únicas salvedades que se puso a esta interpretación fueron en caso de que los terceros fueran cónyuge, compañero permanente y parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o que fueran desmovilizados del mismo grupo armado.

<sup>1302</sup> Amparado por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad C-280 de 2013. Las consecuencias de este reconocimiento, según expuso la Comisión IDH en su informe anual de 2011, es permitir “la reparación de las víctimas y la devolución de tierras que habrían sido despojadas por grupos paramilitares y, en ocasiones, con la connivencia de las fuerzas de seguridad”. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Informe Anual 2011*, Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69, 30 de diciembre de 2011, p. 342.



de la ley) a respetar<sup>1303</sup>. Este derecho fue posteriormente desarrollado en el artículo 23 de la siguiente manera:

“Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas.

El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial”<sup>1304</sup>.

La titularidad de este derecho quedaba resuelta de la lectura del artículo 28 en relación con el artículo 3. Así, tendrían derecho a la verdad según la Ley 1448:

“(…) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

---

<sup>1303</sup> En su artículo 8, se definió la justicia transicional como: “los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible”.

<sup>1304</sup> Dentro de la propia definición y utilidad del derecho a la verdad dentro de esta ley destaca también su inclusión dentro del art. 4 referente a la dignidad de las víctimas, siendo este mismo concepto “el fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”. Atendiendo a la reforma de la Ley 975 realizada en 2012 por la Ley 1592, la definición del derecho a la verdad afianzada en el artículo 7 de la Ley de Justicia y Paz quedaba derogada en favor de este artículo 23.

Como concreción del derecho a la verdad colectivo, el artículo 143 recogía el deber de memoria del Estado, recogiendo así lo reconocido en el Informe Joinet<sup>1305</sup>:

“El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”.

Este derecho también apareció vinculado a las garantías de no repetición, del modo en el que entre las obligaciones del Estado en este aspecto se encontraba en el artículo 149: “La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad”.

Teniendo ya el derecho a la verdad de las víctimas reconocido legalmente dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de entre las medidas propuestas para su defensa y concreción, se encuentra la comisión de la verdad propuesta dentro del Acto Legislativo núm. 1 de 31 de julio de 2012.

Esta ley otorgaba rango constitucional a la obligación del Estado de crear una comisión de la verdad, al modificar, el artículo 1 de este Acto, el artículo 66 de la Constitución colombiana que pasaría a tener la siguiente redacción:

“Una ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección”.

---

<sup>1305</sup> Recordemos que este deber estaba recogido en el principio 2 del Informe Joinet donde se alentaba a los Estados a recuperar la propia historia como medio para evitar el surgimiento de tesis revisionistas y negacionistas. Véase epígrafe 2 del capítulo III.

Las motivaciones que llevaron al Estado a adoptar esta nueva legislación las ha recogido la Comisión IDH en el ya mencionado informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia:

“El Estado manifestó que, por el contrario, el Acto Legislativo: i) pretende que las graves violaciones a los derechos humanos no queden impunes, a través de una estrategia integral de investigación de crímenes de sistema, que permita la identificación, investigación, juzgamiento y sanción de los ‘máximos responsables’ de ‘todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática’; ii) potencia el derecho de las víctimas a la protección judicial a través de su participación en los procesos penales de investigación de los ‘máximos responsables’ y una amplia participación de las víctimas en los mecanismos extra-judiciales que diseñará en su momento la ley; iii) pretende esclarecer la verdad y combatir el ‘olvido’ de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, lo cual no resulta posible sin la existencia de incentivos claros a todos los actores para participar en la construcción de esta verdad y sin la existencia de mecanismos complementarios a los judiciales justamente diseñados para esclarecer la verdad histórica que tanto necesitan las víctimas y la sociedad; iv) pretende fortalecer el orden democrático a través de una discusión amplia sobre el diseño y la implementación de los instrumentos de justicia transicional que necesita Colombia; v) tiene como uno de sus objetivos principales la no repetición de los hechos que han generado violaciones a los derechos humanos en el país, pues solo a través de una estrategia integral de ‘cierre’ será esto posible, pensando no solo en las víctimas del pasado sino también en las víctimas que queremos evitar en el futuro; y vi) antes que obstruir el sistema investigativo, lo potencia con la creación de estrategias integrales de investigación judicial y el diseño e implementación de mecanismos extra-judiciales complementarios que descarguen al sistema judicial de las labores que no solo no le corresponden, sino que no está diseñado para satisfacer en contextos de décadas de masivas violaciones a los derechos humanos”<sup>1306</sup>.

---

<sup>1306</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*, Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13, 31 diciembre 2013, párr.343.

Consolidada la base legal de la comisión de la verdad, los pasos que el Gobierno hubiera de dar para alcanzar la paz y la terminación del conflicto deberían concluir, irremediablemente, en la creación de una comisión de la verdad.

Avances significativos, y que se siguen sucediendo durante la redacción de este trabajo, llegaron dentro del marco preparado en la Mesa de Conversaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC, donde fue aprobado el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”<sup>1307</sup> el 26 de agosto de 2012 y cuyo punto quinto se refería en exclusiva a los “derechos humanos de las víctimas” y a la “verdad”.

Este punto fue posteriormente concretado por la mesa el 7 de junio de 2014, donde se estipulaba que en lo referente a la “verdad” se pretendía:

“Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad”<sup>1308</sup>.

Los primeros avances significativos al respecto llegaron de la mano de un comunicado conjunto de 4 de junio de 2015, donde se estipulaba que la forma de concretar el punto anterior sería mediante la creación de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición<sup>1309</sup>, la cual “hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”<sup>1310</sup>.

---

<sup>1307</sup> Puede consultarse el Acuerdo en: <http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/acuerdo-general/Paginas/inicio.aspx> (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>1308</sup> Véase: [http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/Documents/Principios\\_discusion\\_victimias.pdf](http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/Documents/Principios_discusion_victimias.pdf) Documento de 7 de junio de 2014. (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>1309</sup> INFORME CONJUNTO DE LA MESA DE CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJÉRCITO DEL PUEBLOS, *Avance de la discusión del punto 5: Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición*. Véase, <https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/informe-conjunto-de-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-nacional-y-las-fuerzas?ver=es> (Consultado el 10 de junio de 2016).

<sup>1310</sup> *Ibid.*, p. 1. Sin embargo a pesar de que esta comisión de la verdad supondría (o parece suponer) la primera comisión que de forma efectiva respetara en su totalidad el derecho de víctimas y sociedad a la verdad, un primer intento, sobre la base misma de las Conversaciones de La Habana, se materializó el 21 de agosto de 2014: la llamada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Esta comisión tuvo el objetivo “de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno”.

A renglón seguido, el 23 de septiembre de 2015 se generó un acuerdo para la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz”, el cual tendría como corolario la firma de un Acuerdo Final para la paz y la dejación de las armas por parte de las FARC–EP. Este acuerdo, no solo se basaba en el desarrollo de las medidas penales que se tomarían al respecto, sino que se adelantaba que esta Jurisdicción Especial se enmarcaría dentro un más general “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, del que ya se adelantaba en el comunicado de septiembre la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad<sup>1311</sup>).

---

COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS, *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*, La Habana, 2015, p.4. Disponible en: [http://www.coljuristas.org/documentos/adicionales/version\\_final\\_informes\\_CHCV.pdf](http://www.coljuristas.org/documentos/adicionales/version_final_informes_CHCV.pdf) (Consultado el 10 de junio de 2016). Sin embargo, aunque sobre el papel sí puede desprenderse que constituyó un medio idóneo para hallar la verdad de lo sucedido en Colombia, de su propia composición y método de trabajo se aprecia su esencia como mero esfuerzo formal por aglutinar distintas visiones acerca de los orígenes y desarrollo del conflicto. En efecto, esta comisión, compuesta por doce expertos y dos relatores, estaba facultada para emitir doce visiones distintas del conflicto, obviándose de esa forma una producción integradora pero unificada que pudiera aglutinar un relato conjunto con el que todos los sectores de la sociedad se sintieran identificados. Siguiendo esta misma idea, Jefferson Jaramillo denominó a esta comisión como “un consejo técnico de diagnóstico del conflicto”. JARAMILLO, J., “La Comisión Histórica de La Habana: antecedentes y retos”, *Razón Pública*, 1 de septiembre de 2014. Disponible en: <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7855-la-comision-historica-de-la-habana-antecedentes-y-retos.html> (Consultado el 10 de junio de 2016). En el mismo sentido, Bartolomé Clavero ha sostenido que el trabajo de esta comisión “no ha dado lugar a indagación, análisis y reflexión en común, sino a una serie de dictámenes de despacho en los que además pesa la política del conflicto más que la ciencia de la academia. ‘El Informe’ solo constituye en suma una *contribución* más a la *victimología* y a la *pazología*”. CLAVERO, B., “¿Comisión de la Verdad en Colombia?”, *El Diario*, 1 de marzo de 2015. Disponible en: [http://www.eldiario.es/contrapoder/comision\\_falsedad\\_colombia\\_6\\_361923824.html](http://www.eldiario.es/contrapoder/comision_falsedad_colombia_6_361923824.html) (Consultado el 10 de junio de 2016). Resaltados del original). Su informe final, publicado en febrero de 2015, siguió la tónica sostenida por estos dos autores en lo que a la definición de los trabajos de esta comisión se refiere, sosteniendo que este informe constituye “un insumo básico para una futura comisión de la verdad y como una contribución a la discusión del punto 5 [derechos de las víctimas] de la agenda de negociación sobre víctimas”.

<sup>1311</sup> Sobre el funcionamiento de esta nueva comisión extrajudicial simplemente apuntar que encontramos graves deficiencias que pudieran afectar al modo en el que otros derechos (sobre todo la justicia) pudieran ser respetados. En este sentido, mencionar sobre todo la falta de capacidad de colaborar con el Poder Judicial. Tal y como menciona el comunicado: “La Comisión será un mecanismo extra-judicial. En este sentido, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”. Por tanto, la identificación de aquellos victimarios que por las razones que fuere no sean identificados como tal en sede judicial (también a tenor de las competencias del Poder Judicial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz) pero sí les sea reconocida responsabilidad en los hechos a través de los trabajos de la comisión de la verdad, no serán, en ningún caso, procesados. Véase: <http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/documentos-y-comunicados-conjuntos/paginas/inicio.aspx#> (Consultado el 10 de junio de 2016). Por otro lado, una crítica más general a la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido pronunciada desde Human Rights Watch: HUMAN RIGHTS WATCH, *Análisis de Human Rights Watch sobre ‘El Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto’ alcanzado por el Gobierno y las FARC*, 21 de diciembre de 2015. Disponible en:

El desarrollo del Sistema Integral fue conocido mediante un nuevo comunicado conjunto de 15 de diciembre de 2015. Este amplio sistema estará compuesto, además de por la ya mencionada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, por la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y toda una serie de medidas de reparación y no repetición.

Según este comunicado, el Sistema Integral:

“(...) combina mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho internacional Humanitario, en los términos que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros”.

La base de este Sistema, por tanto, se construía sobre la ya conocida y estudiada interacción entre ambos tipos de verdad: la judicial y la no judicial, con vistas a que las víctimas individuales y la sociedad conocieran la verdad más completa posible.

Los siguientes pasos que se den serán esenciales para averiguar si este nuevo Sistema consigue, por fin, poner fin al conflicto mediante el íntegro respeto de los derechos de las víctimas.

## 1.2. Honduras.

El 28 de junio de 2009 se produjo un golpe de Estado en Honduras que concluyó con el derrocamiento del por entonces Presidente electo, José Manuel Zelaya Rosales. Este acto se unía al espiral de violencia que ya venía asolando el país durante la década de los noventa y principios del nuevo milenio<sup>1312</sup>.

Como medida para solucionar la crisis política se organizó el llamado “Diálogo Guaymuras”, en el que tomaron parte representantes del depuesto José Manuel Zelaya Rosales y las autoridades *de facto*<sup>1313</sup>. Este diálogo concluyó con la suscripción del Acuerdo Tegucigalpa – San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras el 30 de octubre de 2009. Una de las medidas incluidas en dicho acuerdo fue una comisión de la verdad “que identifique los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”. Esta vez, al contrario de la experiencia analizada en los noventa, Honduras creó de forma expresa una comisión extrajudicial de investigación.

En cumplimiento de esta cláusula, el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, mediante el Decreto ejecutivo núm. PCM – 011-2010 de 13 de abril de 2010, creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aludiendo como motivos para su creación:

“CONSIDERANDO Que Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y el afianzamiento de la paz y la democracia universal”.

CONSIDERANDO: Que en tal sentido, el Gobierno de Honduras ha tomado la decisión de asumir como responsabilidad de su actual Administración, la organización y la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, siguiendo la recomendación que acordaran los negociadores de las partes en el referido Acuerdo de Tegucigalpa San José y en los términos en que fuera negociada por las partes en Octubre [sic] de 2009”<sup>1314</sup>.

---

<sup>1312</sup> IBÁÑEZ NAJAR, J.E., *Justicia Transicional... op.cit.*, p.154.

<sup>1313</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010*, Doc. OEA/Ser.L/V/II Doc. 68, 3 de junio de 2010, párr. 111.

<sup>1314</sup> Decreto posteriormente corroborado por el Decreto ejecutivo núm. 001 – 2010 de 4 de mayo de 2010.

Pese a que el Gobierno de Honduras, asumió su obligación internacional de “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”<sup>1315</sup>, la constitución de esta comisión a manos del Gobierno no contentó ni a todos los sectores de la sociedad<sup>1316</sup> ni a las asociaciones de defensa de los derechos humanos, al ver en ella un intento para exonerar de la acción de la justicia a los golpistas por las graves limitaciones de su mandato. En efecto, entre otros asuntos, el mandato limitaba tanto la participación de las víctimas en el proceso de recuperación de la verdad, como su competencia *ratione temporis* a los acontecimientos del 28 de junio, en vez de cumplir la investigación completa a todas las violaciones de derechos humanos<sup>1317</sup>.

Por tanto, la verdad a la que esta comisión llegó (la inconstitucionalidad y condena al golpe de Estado contra el Presidente, José Manuel Zelaya Rosales) fue una verdad incompleta; una verdad sobre únicamente parte de las violaciones que se sucedieron en Honduras y que, por tanto, no respeta en su totalidad el derecho a la verdad de las víctimas.

Como contrapunto ante la comisión gubernamental, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras promovió la creación de una comisión de la verdad alternativa (denominada Comisión de Verdad “Sin verdad no hay Justicia”), la cual realizó sus trabajos de forma paralela a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y que estuvo apoyada, entre otros, por las embajadas de Dinamarca y Alemania. El mandato de esta comisión consistía en: “Esclarecer la verdad de los hechos asociados al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Promover la justicia a las víctimas de graves violaciones a los

---

<sup>1315</sup> *Ibid.*, art.1.

<sup>1316</sup> El Frente Nacional de Resistencia Popular, partido que respaldaba al Gobierno del depuesto José Manuel Zelaya Rosales, expresó a través de un comunicado su frontal rechazo a la comisión promovida por el Gobierno de Porfirio Lobo; calificándola como ilegal “al promulgarse cuando el orden constitucional no ha sido restablecido, e ilegítimo porque no cuenta con los estándares internacionales de buenas prácticas y principios establecidos mediante el ejercicio de más de 30 comisiones de la verdad en el mundo. Tampoco cuenta con la credibilidad y confianza del pueblo hondureño y de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros”. El comunicado completo puede consultarse en la página web del Frente Nacional de Resistencia Popular: [http://www.resistenciahonduras.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=414:comunicado-no-62-&catid=51:comunicados&Itemid=259](http://www.resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&view=article&id=414:comunicado-no-62-&catid=51:comunicados&Itemid=259) (Consultado el 11 de junio de 2016).

<sup>1317</sup> CENTRO PARA LA JUSTICIA Y LEY INTERNACIONAL, *Comisión de la Verdad de Honduras nace con graves carencias jurídicas*, 4 de mayo del 2010. Disponible en: <https://cejil.org/comunicados/comision-de-la-verdad-de-honduras-nace-con-graves-carencias-juridicas> (Consultado el 11 de junio de 2016).



derechos humanos y libertades fundamentales. Promover la reparación integral a las víctimas”<sup>1318</sup>.

Sin embargo, al no haber sido fruto de acto alguno de ningún poder del Estado, no puede ser considerada como práctica estatal en derecho a la verdad<sup>1319</sup>.

### 1.3. Tailandia.

Entre marzo y mayo de 2010 numerosas manifestaciones, lideradas por el movimiento “redshirt” (aliado del depuesto Presidente Thaksin Shinawatra), tomaron las calles de Bangkok. La represión contra estas, a manos de las fuerzas del orden, tuvo como consecuencia la muerte de noventa y dos personas<sup>1320</sup>.

Como consecuencia, ante estos hechos, el por entonces Primer Ministro, Abhisit Vejjajiva, creó una serie de comités que tuvieron como objetivo lidiar con estos acontecimientos. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Tailandia era uno de ellos, instaurada mediante reglamento de 6 de julio del 2010<sup>1321</sup>. Esta comisión estaba facultada para:

- “1) Investigate and determine the truth regarding the violence that occurred during April and May 2010. Also to identify issues which are root causes of the conflict and violence in the country.
- 2) Recommend both short-term and long-term measures for restoration and rehabilitation based on restorative and social justice for individuals, groups, organizations, and institutions that were affected by the violence so as to promote national reconciliation.

---

<sup>1318</sup> COMISIÓN DE VERDAD SIN VERDAD NO HAY JUSTICIA, *Informe de la Comisión de la Verdad. La voz más autorizada es la de las víctimas*, Tegucigalpa, 2012, p.32.

<sup>1319</sup> En el ya tratado informe de la Comisión IDH sobre el derecho a la verdad en América, en la parte dedicada a la práctica estatal, incluyó como tal la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada por el decreto PCM – 011 – 2010 y obvió la creada por la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho a la verdad... op.cit.*, p.87.

<sup>1320</sup> MCCARGO, D., THABCHUMPON, N., “Wreck/Conciliation? The Politics of Truth Commissions in Thailand”, *Journal of East Asian Studies*, vol. 14, 2014, p.377.

<sup>1321</sup> Regulation of the Office of the Prime Minister on the Truth for National Reconciliation B.E. 2553

3) Recommend measures to reduce social conflict and prevent future violence and loss from occurring”<sup>1322</sup>.

Su creación se dio en un contexto distinto al de las constituidas en una etapa transicional, pues el Gobierno que la creó fue el mismo que cometió los hechos que la comisión se proponía a investigar. Del mismo modo, Tailandia afrontaba un dilema parecido al caso de Colombia con la adopción de la Ley de Justicia y Paz al estar el conflicto aún latente en el momento de creación de la comisión.

El informe final venía a amparar la idoneidad de aplicar políticas típicas de justicia de transición al caso tailandés:

“In Thailand, the conflict was not as violent as in some countries and it was still continuing. However, TRCT believed it was helpful for us to learn from the experience of other countries and to adjust some elements of transitional justice to suit our unique situation.

(...).

The principles of transitional justice are implemented by establishing a commission to investigate and seek the truth and bring about reconciliation”<sup>1323</sup>.

La búsqueda de la verdad se asemejaba al camino idóneo para poder alcanzar la reconciliación de la sociedad tras los incidentes, algo que incluso podía intuirse del propio nombre dado a la comisión: *Truth for Reconciliation* Commission.

---

<sup>1322</sup> TRUTH FOR RECONCILIATION COMMISSION OF THAILAND, *Final report*, Bangkok, 2012, pp.4-5.

<sup>1323</sup> *Ibid.*, pp. 5, 8.

#### **1.4. República Bolivariana de Venezuela.**

El 25 de noviembre de 2011 la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobaba la llamada Ley para sancionar los crímenes, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período 1958 – 1998<sup>1324</sup>, conocida comúnmente como Ley contra el silencio y el olvido.

Esta ley tenía como objetivo brindar los mecanismos necesarios para respetar el derecho a la verdad de las víctimas y sancionar a los culpables de las violaciones de derechos humanos que habían sido cometidas en el país durante el período de la IV República (desde el Gobierno de Wolfgang Larrazábal el 23 de enero de 1958, hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999).

Tal y como quedó establecido en el artículo 2 de esta ley, la motivación de su promulgación fue: “la obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, así como los delitos de lesa humanidad cometidos por sus autoridades”. Por otra parte, el marco judicial en el que se enmarcaba dicha ley era:

“(…) en primera instancia la Constitución de la República, pudiendo las víctimas, en caso de denegación de justicia, acudir a las normas contenidas en los tratados, pactos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y Derecho internacional humanitario suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela”<sup>1325</sup>.

El derecho a la verdad estaba recogido en el artículo 9 de esta ley de la siguiente manera:

“El pueblo tiene derecho a conocer las causas de la violencia e identificar a los elementos en conflicto que existieron en el período al que hace referencia la presente Ley, visibilizando las estructuras del terrorismo de Estado, modalidades y sus ramificaciones, impuestas en las diversas instancias de la sociedad como mecanismo de no repetición de estos hechos”.

---

<sup>1324</sup> Gaceta oficial 38.808 de 25 de noviembre de 2011.

<sup>1325</sup> La República Bolivariana de Venezuela ratificó el PIDCP el 10 de mayo de 1978 y la CADH el 23 de junio de 1977 pero la denunció el 10 de septiembre de 2012.

Y como mecanismo para la preservación de este derecho, según el artículo 8:

“Se crea la Comisión por la Justicia y la Verdad, como órgano descentralizado con autonomía funcional, con dependencia administrativa y presupuestaria del Consejo Moral Republicano y cuya duración será de tres años, prorrogables por un año, lapso dentro del cual deberá elaborar el correspondiente informe con el objeto de realizar la investigación del período al cual se refiere la presente Ley, para contribuir al esclarecimiento de la verdad; recomendando los mecanismos de reivindicación del honor y la dignidad de las víctimas y el rescate de la memoria histórica; promoviendo en la sociedad la valoración de la preeminencia de los derechos humanos y el reconocimiento de las luchas históricas del pueblo, a fin de superar la profunda crisis y los traumas generados por la violencia del terrorismo de Estado, así como procurando que nunca más se repitan estos delitos de lesa humanidad y otras violaciones contra los derechos humanos”.

El mandato de esta comisión consistía en la investigación de los hechos violatorios de derechos humanos, la preservación de la memoria, la reivindicación del honor de las víctimas y la localización de los restos de los caídos. Paralelamente, la comisión poseía un estrecho lazo de actuación con el Poder Judicial, al tener competencia para recibir denuncias sobre cualquier información de interés para la investigación por parte de víctimas tanto directas como indirectas, o de otros colectivos, las cuales serán trasladadas al Ministerio Público. La Ley contra el Silencio y el Olvido buscaba de esta manera un completo respeto al derecho a la verdad, tanto en su vertiente individual y judicial, como colectiva y extrajudicial.

## 1.5. Corea del Sur.

Con la llegada de Lee Myung Bak en 2008 el mandato del Comité de la Verdad no fue renovado, sin embargo, dos comisiones más fueron creadas en 2010: la Comisión para la restitución del honor de los perseguidos budistas<sup>1326</sup>, la Comisión para hallar la verdad de los daños de movilización forzosos y para el apoyo a las víctimas de ultramar durante la guerra anti japonesa<sup>1327</sup> y el Comité de secuestros durante la Guerra de Corea<sup>1328</sup>.

Más allá de las comisiones extrajudiciales de investigación, el Gobierno creó en marzo de 2011 el *North Korean Human Rights Documentation Center and Archive*<sup>1329</sup>, la cual se encuadraba dentro de la *National Human Rights Commission of (South) Korea*.

Este centro, en palabras de Won Jae-chun, director general de la comisión, constituye: “the first national effort by the government of Korea to document the human rights violations of the North Korean government”<sup>1330</sup>. Igualmente se ha dicho de él que: “became the first state-run institution to compile individual cases amounting to criminal offenses and to document them from comprehensive and systematic management and preservation”<sup>1331</sup>.

La importancia del registro de toda la actividad represiva del régimen de Corea del Norte es vital ya que, según ha afirmado Kim Tae-hoon, miembro de *Human Rights Commission of (South) Korea*:

“North Korea’s ruling class looks to be firmly united from the outside, but in fact they must feel very uneasy about the fate of the Kim Jong-un regime. As they fret about regime collapse, the message that the world is watching their evil deeds and

---

<sup>1326</sup> Ley 9947 de 25 de enero de 2010.

<sup>1327</sup> Ley 10143 de 22 de marzo de 2010.

<sup>1328</sup> Ley 10190, de 26 de marzo de 2010.

<sup>1329</sup> LOGIE, A., *The Answers. North Korea: How do you solve a problem like North Korea*, Singapur, Marshall Cavendish International, 2012, p. 168. Véase igualmente: WOLMAN, A., “South Korea’s response to human rights abuses in North Korea : an analysis of policy options”, *Asia Pacific Issues*, núm.10, 2013, p.5.

<sup>1330</sup> RAMSTAD, E., “Hey Kim Jong Il, Seoul Is Now Taking Names”, *The Wall Street Journal*, 16 de marzo de 2011. Disponible en: <http://blogs.wsj.com/korearealtime/2011/03/16/hey-kim-jong-il-seoul-is-now-taking-names/> (Consultado el 11 de junio de 2016).

<sup>1331</sup> TAE – HOOM, K., “Reasons to Record and Remember North Korea’s Tragic Human Rights Situation”, *Korea Focus*, vol. 20, 2012, núm. 5. Disponible en: [http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content\\_print.asp?group\\_id=104031](http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=104031) (Consultado el 11 de junio de 2015).

documenting them would have tremendous repercussions. The impact would be even stronger than what East Germany felt about the activity of the West German registry on its human rights violations.

If the North Korean Human Rights Documentation Center and Archives produces 'letters of indictment' against North Korea's new leader, who ordered the execution of any defector during the mourning period for Kim Jong-il, and officers in charge of carrying out his orders to systematically abuse the fundamental rights of their population, the center will effectively compile historical records on brutal crimes committed by the communist regime. Thus its very existence will help reduce human rights violations in the North and send hope and comfort to victims"<sup>1332</sup>.

El registro de información acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen del Corea del Norte producirá que toda la comunidad internacional pueda conocer de primera mano las acciones por este cometidas, lo que repercutirá, no ya solo en una forma de reparación a las víctimas, sino, como bien apunta el mencionado autor, en una posible reducción de las violaciones sistémicas de derechos humanos en aquel país debido a las posibles consecuencias que ello pudiera acarrear.

---

<sup>1332</sup> *Ibid.*

## 1.6. Costa de Marfil.

Una vez finalizadas las elecciones presidenciales de 2010, la Junta electoral, apollada por la comunidad internacional, proclamó ganador a Alassane Ouatarra, algo no aceptado por su contrincante, y Presidente en aquel momento, Laurent Gbagbo, lo que dio lugar al inicio de un espiral de violencia que tuvo como consecuencia tres mil muertos<sup>1333</sup>.

Pocos meses después de que finalizaran los altercados, el 13 de julio de 2011, siendo ya Presidente electo, Alassane Ouatarra creó la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación<sup>1334</sup>. La finalidad de esta comisión era: “determinar con total independencia la verdad sobre los acontecimientos sociopolíticos nacionales pasados y recientes con miras a la reconciliación nacional sobre la base del respeto de las diferencias y la convivencia del pueblo de Côte d'Ivoire”<sup>1335</sup>.

Esta comisión publicó un informe preliminar el 21 noviembre de 2013, que se centró en las causas del conflicto, pero no realizó audiencia pública alguna, algo que sí ocurrió en septiembre de 2014 tras la renovación de su mandato por un año<sup>1336</sup>, como ya pedían desde el sistema universal de protección<sup>1337</sup>.

El informe final de la comisión fue presentado ante el Presidente el 15 de diciembre de 2014, sin embargo, a 28 de abril de 2015, fecha de adopción de las OF del Comité DH a Costa de Marfil, este aún no había sido hecho público<sup>1338</sup>, como tampoco durante el período de redacción de este trabajo.

---

<sup>1333</sup> CRAWFORD, J., “Transitional Justice in Cote d’Ivoire – In Brief”, *Justice Info*, 31 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.justiceinfo.net/en/live-feed/406-transitional-justice-in-cote-d%E2%80%99ivoire-%E2%80%93-in-brief.html> (Consultado el 11 de junio de 2016).

<sup>1334</sup> Orden núm. 2011-167, de 13 de julio de 2011.

<sup>1335</sup> Debido a la falta de documentos oficiales, nos hemos referido al contenido del informe sobre del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Côte d'Ivoire, Doudou Diène. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Côte d'Ivoire*, Doudou Diène, Doc. A/HRC/19/72, 9 de enero de 2012, párr. 40. Por su parte, el Comité DH, en examen al informe presentado por Costa de Marfil en 2013, afirmó que: “trabajar con total independencia por la reconciliación y el fortalecimiento de la cohesión social entre todas las comunidades que viven en Côte d'Ivoire. Su misión fundamental consiste en identificar las violaciones y sus autores y proponer reparación para las víctimas”. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto. Côte d'Ivoire*, Doc. CCPR/C/CIV/1, 21 de mayo de 2013, párr. 222.

<sup>1336</sup> CRAWFORD, J., “Transitional Justice in Cote d’Ivoire...”, *op.cit.*

<sup>1337</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, *Informe del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Côte d'Ivoire*, Doudou Diène, Doc. A/HRC/25/73, 13 de enero de 2014, párr. 16.

<sup>1338</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, *Observaciones finales sobre el informe inicial de Côte d'Ivoire*, Doc. CCPR/C/CIV/CO/1, 28 de abril de 2015, párr. 7.

## 1.7. Brasil.

Las críticas sufridas por la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos<sup>1339</sup> y la carencia de políticas que favorecieran la averiguación de la verdad<sup>1340</sup> propiciaron la aprobación de la Ley 12.528 de 18 de noviembre de 2011, que contenía el mandato de la Comisión Nacional de Verdad<sup>1341</sup>. Las funciones de esta comisión eran, atendiendo al artículo 1 de esta ley, esclarecer las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1988 a fin de dar cumplimiento a los derechos a la memoria y a la verdad histórica, junto con la promoción de la reconciliación nacional.

Un aspecto en el cual se incidió fue en el factor de que la aprobación de la comisión de la verdad viniera de la mano de una ley apoyada por todos los partidos políticos, “lo cual le confiere autoridad para dejar atrás un ambiente de negación histórica y permite tratar de los temas dolorosos de la patria de manera legítima y plural”<sup>1342</sup>.

Dentro del mandato legal de la Comisión Nacional de Verdad la obligación de respetar el derecho a la verdad se asentó como el sustento principal de la comisión, tal y como se dispuso en su informe final:

“O reconhecimento da memória e da verdade como direito fundamental do ser humano é dever do Estado, estabelecido internacionalmente pela ONU e pela Organização dos Estados Americanos (OEA). O artigo 1o da Lei no 12.528/2011 coloca a CNV no restrito rol das comissões da verdade cujo funcionamento foi justificado com base no exercício do direito à verdade, como foi o caso da Comissão para o Esclarecimento Histórico da Guatemala (1999) e da Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru (2001). Tratando-se de um direito, há de se ter por certo que o encerramento dos trabalhos da CNV não importa sua revogação e será incumbência de outros sujeitos os desdobramentos do seu exercício”<sup>1343</sup>.

---

<sup>1339</sup> Véase el epígrafe 1.15 del capítulo V.

<sup>1340</sup> CARNEIRO LEÃO, A.M., “La Comisión de la Verdad...”, *op.cit.*, p. 75.

<sup>1341</sup> Un completo resumen sobre la actividad de esta comisión puede leerse en: WEICHERT, M.A., “Comissões da Verdade e Comissões de Reparação no Brasil”, en DE SOUSA JUNIOR, J.G., MOREIRA DA SILVA FILHO, J.C., PAIXAO, C., GIMENES DIAS DA FONSECA, L., DIAS RAMPLIN, T.T., (dirs.), *O Direito Achado na Rua. Vol. 7. Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina*, Brasília, Comissão de Anistia, 2015, p.314 – 318.

<sup>1342</sup> CARDOSO, J. E., ABRAO, P., citado en *Ibid.*, p.76.

<sup>1343</sup> COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, *Relatório. Volume I*, Brasília, 2014, p.34.



Teniendo como base el reconocimiento del derecho a la verdad como derecho fundamental, en sus vertientes tanto individual como colectiva, el informe final de la comisión consideró su mandato como el modo de dar efecto a ambas:

“Ao orientar seus trabalhos visando à efetivação do direito à memória e à verdade histórica, a CNV, respaldada na lei que a instituiu, procurou considerar o direito em sua dimensão coletiva, apresentando à sociedade brasileira a reconstrução histórica dos casos de graves violações de direitos humanos, tornando públicos os locais, as estruturas, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de graves violações de direitos humanos e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade. A CNV também promoveu esforços, igualmente com fundamento em sua lei de criação, para estabelecer a dimensão individual do direito à verdade, ao perseguir o esclarecimento circunstanciado dos casos de tortura, morte, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver, esclarecendo, ainda, na medida do possível, a identidade dos autores”.

En conclusión, el mandato de la comisión poseía facultades suficientes para poder, por un lado, dar cobertura al derecho a la verdad colectivo, haciendo públicos los lugares, las estructuras, las instituciones y las circunstancias relacionadas con la práctica de las graves violaciones de derechos humanos. Y por otro, cubrir la dimensión individual mediante el esclarecimiento de las circunstancias de los casos individuales.

## **1. 8. México.**

El 23 de diciembre de 2011 el Estado de Guerrero aprobaba la Ley 932 por la que se crea la Comisión de la verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta del Estado de Guerrero.

La base de creación de este mecanismo se establecía en su artículo 1:

“La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero es un organismo de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con domicilio legal en la ciudad Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, para cumplir con la garantía del derecho a la verdad de los ciudadanos guerrerenses en la investigación de los hechos específicos que se indican”.

El derecho a la verdad se encontraba definido en su artículo 5:

“Se entiende por derecho a la Verdad [sic] la facultad de las víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos y a su dignidad, así como de sus familiares y amigos, de demandar y obtener del Estado, de forma directa o por medio de organismos defensores de Derechos Humanos o de la sociedad civil, información veraz y sin restricciones ni reserva alguna acerca de las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se perpetraron dichas violaciones. Por ser autónomo e inalienable, el Derecho a la Verdad no podrá ser suspendido en ninguna circunstancia, ni declarado estado de excepción”.

Nótese aquí que, pese a que este artículo vincula al derecho a la verdad con el derecho a la información, el cual ya apuntamos que, leído dentro del articulado del PIDCP, podría ser restringido en determinadas ocasiones (artículo 19 PIDCP); el derecho a la verdad, debido a la estrecha vinculación con la dignidad de las víctimas, no puede ser “suspendido en ninguna circunstancia”.

El artículo 6 contempla cuál será el contenido del derecho a la verdad dentro de la Ley 932:

El derecho a la verdad implica la facultad de conocer:

“a) Las causas que dieron lugar al trato injusto que recibe la víctima, con el fin de prever su no repetición;

b) las causas y condiciones relativas a las violaciones denunciadas;

c) los progresos y resultados de la investigación;

d) las circunstancias y motivos por los que se perpetraron los hechos;

e) el contexto en que se produjeron las violaciones y delitos;

f) la verdad histórica y jurídica en todos aquellos casos en los que se cometieron o pudieron haberse cometido crímenes de lesa humanidad por parte de servidores públicos;

g) en caso de muerte o desaparición forzada, la suerte y el paradero de las víctimas, incluyendo la identidad de los autores materiales e intelectuales”.

El derecho a la verdad, por tanto, justificaba la creación de esta comisión que tenía por mandato, según su artículo 2:

“(…) investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de violaciones a derechos humanos, y hechos probablemente constitutivos de delitos, y delitos de lesa humanidad, contra ciudadanos guerrerenses o personas radicadas o que se hayan encontrado en territorio guerrerense”.

Posteriormente, y con fecha de 9 de enero de 2013, México aprobaba la Ley General de Víctimas<sup>1344</sup>. Esta ley, por su parte, reconocía el derecho a la verdad en su artículo 18 en los siguientes términos:

“Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.

Y lo concretaba en su artículo 19:

---

<sup>1344</sup> Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación de 9 de enero de 2013. Modificada el 3 de mayo de 2013.

“Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate”.

Por otro lado, la ley amparaba, en concreto, la verdad global y extrajudicial dentro de su artículo 20, como “el derecho a conocer la verdad histórica de los hechos” de víctimas y sociedad, así como el derecho de las víctimas a participar en el mecanismo de búsqueda de la verdad pertinente.

Para la concreción de ambas vertientes el artículo 22 establece que “el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente”. Entre los objetivos que habría de tener este mecanismo se encontraba: el esclarecimiento histórico de las violaciones de derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica; la responsabilidad individual y de las instituciones; reabrir el debate para el reconocimiento de las víctimas; y realizar recomendaciones para una reparación íntegra de las víctimas y promover reformas de las instituciones. Una comisión extrajudicial se convertía en el modelo mediante el cual México habría de lidiar con el derecho a la verdad colectivo, más allá de los procesos judiciales que, a través de esta ley estaba obligado también a emprender<sup>1345</sup>.

Por último, esta ley también incorporaba en su artículo 24 el deber del Estado de preservar los archivos relativos a las graves violaciones de derechos humanos, así como las obligaciones del Estado de impedir su sustracción, destrucción, falsificación, disimulación y de garantizar su libre acceso. Las limitaciones para dicho acceso estribarán únicamente en razones de seguridad de víctimas y testigos y en la vida privada, no pudiendo ampararse en la seguridad nacional o en formalidades que favorezcan la censura.

---

<sup>1345</sup> La comisión de la verdad analizada anteriormente se refería solamente a una investigación extrajudicial dentro del Estado de Guerrero.

A pesar de que México no creó una comisión de la verdad al modo de las que han venido siendo desarrolladas en este trabajo, pues la analizada en este apartado se refería únicamente al Estado de Guerrero, esta ley sí incorporaba estándares internacionales en derecho a la verdad que deberían ser concretados posteriormente en medios específicos para colmar de eficacia su contenido y cumplir con sus obligaciones internacionales al respecto.

### 1.9. Nepal.

Tras las comisiones instauradas en Nepal en 1990 para la investigación de los hechos ocurridos durante el “período *panchayat*”, en 1996 comenzó una época de graves disturbios que se prolongó hasta 2006 y que dejó tras de sí trece mil muertos y mil trescientos desaparecidos<sup>1346</sup>.

Como medio de tránsito hacia una completa pacificación del país fue firmado el 21 de noviembre de 2006 un acuerdo de paz entre las dos partes del conflicto (el Gobierno y el Partido Comunista de Nepal). Este acuerdo estipulaba la creación de una comisión con la misión de investigar las violaciones de derechos humanos acaecidas en ese período para alcanzar la reconciliación<sup>1347</sup>.

Este pedido fue concretado con el Decreto de la Comisión de Investigación de Personas, Verdad y Reconciliación de 14 de marzo de 2013<sup>1348</sup>. Sin embargo, este texto obtuvo duras críticas por parte tanto internas, por medio del Tribunal Supremo de la nación; como de la comunidad internacional, materializadas en la OACNUDH<sup>1349</sup>.

En sentencia de 2 de junio de 2014, el Tribunal Supremo en el caso *Madhav Kumar Basnet c. the Government of Nepal* estableció los grandes déficits de los que adolecía el decreto de creación de la comisión nepalí, entre las que se encontraba la posibilidad de otorgar amnistías a los culpables de haber cometido graves violaciones de derechos humanos. Por otra parte, el Alto Tribunal sentenció que era necesaria la

---

<sup>1346</sup> INTERNATIONAL COMMISSION OF JURIST, *Justice Denied: The 2014 Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Act*, 2014, p.3.

<sup>1347</sup> Comprehensive Peace Agreement, 21 de noviembre de 2006, párr. 5.2.5.

<sup>1348</sup> Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Ordinance – 2069 (2013), 14 de marzo de 2013.

<sup>1349</sup> Véase, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *OHCHR Comments on the Nepal “Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Ordinance – 2069 (2013)”*, 3 de abril 2013. Disponible en: [http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHRComments\\_TRC\\_Ordinance.docx](http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHRComments_TRC_Ordinance.docx) (Consultado el 11 de junio de 2016).

adopción de una nueva legislación que creara dos comisiones diferenciadas: una, para la búsqueda del paradero de los desaparecidos y otra que relatar la verdad sobre los acontecimientos de la década anterior. En este mismo sentido, en ningún caso, la comisión podría otorgar amnistías a quien hubiera cometido actos graves violatorios de derechos humanos.

Sería así, en atención a estos requerimientos, por los cuales se aprobaría una nueva ley que corrigiera las deficiencias con las que contaba la comisión anterior. De esa forma, el 25 de abril de 2014 se aprobó el Decreto de la Comisión de Investigación de Personas, Verdad y Reconciliación<sup>1350</sup>, el cual contenía dos comisiones: la Comisión para la Investigación de las Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Empero, a pesar de que son evidentemente dos comisiones con mandatos claramente diferenciados, la ley no especificaba de forma clara y notoria las funciones de ninguna de las dos<sup>1351</sup>.

En este mismo orden de ideas, y aunque el Tribunal Supremo ya reiteró la necesidad de adoptar la nueva legislación en comisiones de la verdad a los estándares internacionales, la actualización de 2014 siguió contando con graves deficiencias en este campo. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la falta de concreción de determinados conceptos como “graves violaciones de derechos humanos”, “desaparición de personas” y “reparaciones”. Del mismo modo, la ley seguía permitiendo la concesión de amnistías por la violación de derechos humanos<sup>1352</sup>.

Siendo beneficiosa la creación de un organismo de estas características para la recuperación de la verdad de los eventos ocurridos en Nepal entre 1996 y 2006, la necesidad de que ambas comisiones cuenten con un mandato específico, que clarifique sus funciones y competencias, hace que su impacto sea aún muy limitado y sea más cercano a una alternativa a la vía penal que a un medio para hallar la verdad.

---

<sup>1350</sup> Esta comisión sería la primera creada tras la aprobación de la resolución de la AG sobre el derecho a la verdad el 18 de diciembre de 2013.

<sup>1351</sup> BINGHAM CENTRE FOR THE RULE OF LAW, *Transitional Justice in Nepal: The Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Act 2014*, Londres, 2014, p. 6.

<sup>1352</sup> *Ibid.*, p.4.

### 1.10. Túnez.

El 15 de diciembre de 2013, tres días antes de la aprobación por la AG de la Resolución sobre el derecho a verdad, el Parlamento de Túnez aprobó una ley (*Organic Law on Establishing and Organizing Transitional Justice*) por la cual se precisaban los distintos mecanismos a implementar para una correcta averiguación de lo ocurrido en el país desde su independencia de Francia en 1955.

Según esta ley el papel de la verdad dentro de un período de transición era: “[a] right guaranteed by law to every citizen taking into consideration the respect of the victims’ interest and dignity and the protection of private information”<sup>1353</sup>. El artículo 4 ampliaba este concepto añadiendo:

“Revealing the truth shall consist of a series of methods, procedures and research used to dismantle the authoritarian system by identifying and determining all the violations as well as determining their causes, conditions, sources, surrounding circumstances, and repercussions. In cases of death, missing persons, and enforced disappearance, it shall uncover the fate and whereabouts of the victims as well as the identity of the perpetrators and those responsible for such acts”.

Estos “métodos”, “procedimientos” e “investigaciones” a los que se refiere el artículo anterior, cristalizaron en la Comisión de la Verdad y la Dignidad, la cual tendrá competencias para la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 1 de julio de 1955 hasta la fecha de aprobación de la ley.

También es menester señalar la creación de las cámaras especiales, las cuales garantizarán no ya solo la averiguación completa de la verdad, sino que también evitará la impunidad de los actos investigados. Según se estipula en el artículo 8: la creación de cámaras especiales podrán conocer de casos remitidos por la comisión de la verdad, quedando así preservada a su vez la verdad judicial e individual.

---

<sup>1353</sup> Organic Law on Establishing and Organizing Transitional Justice, art. 2.

## 2. VALORACIÓN DE CONJUNTO.

A modo de recapitulación global de lo que nos deja la práctica estatal desde 1970 hasta 2015, han sido ciento treinta y seis los Estados con relación a los cuales se ha producido alguna violación grave de los derechos humanos<sup>1354</sup>, es decir, los llamados al inicio de la presente investigación los ‘especialmente interesados’. De ellos, hemos examinado a lo largo del trabajo la práctica estatal de cincuenta y seis<sup>1355</sup>; aquellos que crearon algún mecanismo (ya tuviera un recorrido más largo o más corto, o cumplieran mejor o peor con sus funciones) de búsqueda de la verdad colectiva.

Esta primera exposición puede ya ofrecer una conclusión evidente, pues como ya establecimos, para determinar la existencia de una norma de Derecho internacional consuetudinario es necesario atender a una serie de requisitos que deben estar presentes en la práctica de los Estados. La generalidad, constancia y la uniformidad de la práctica junto con la *opinio iuris*.

Ahora bien, previo a presentar un balance final, es importante señalar brevemente algunas cuestiones. De lo analizado, encontramos que elementos como la constancia no tienen un diagnóstico fácil, en el sentido de que el mismo comportamiento (en nuestro caso, creación de mecanismos que permitan a la sociedad conocer la verdad de lo ocurrido) ha de ser repetido siempre que el Estado se encuentre ante la misma circunstancia que motivó su creación (a nuestros intereses, violaciones masivas o

---

<sup>1354</sup> Afganistán, Arabia Saudí, Argentina, Albania, Alemania, Angola, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Birmania, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Croacia, Cuba, Chad, Congo, Chile, China, Colombia, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda del Norte, Islas Salomón, Israel, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kósovo, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Lituania, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Maldivas, Marruecos, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Papúa Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Bolivariana de Venezuela, República Centroafricana, República Checa, República Democrática del Congo, República Dominicana, República de Yemen, Ruanda, Rumanía, Rusia/URSS, Senegal, Serbia y Montenegro/República Federal de Yugoslavia, Sierra Leona, Somalia, Siria, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suriname, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Timor Oriental, Trinidad y Tobago, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbequistán, Zimbabue, Zanzíbar, Zambia.

<sup>1355</sup> Argentina, Alemania, Argelia, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burundi, Chad, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Estonia, Filipinas, Ghana, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, India, Islas Salomón, Kenia, Letonia, Liberia, Lituania, Mali, Marruecos, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Bolivariana de Venezuela, República Checa, República Democrática del Congo, República Federal de Yugoslavia, Rumanía, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia, Timor Oriental, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbequistán, Zimbabue y Zanzíbar.



sistemáticas de derechos humanos). La dificultad aquí estriba en que, pese al estudio y distinción que hemos realizado, lidiamos con situaciones en las que no es sencillo ubicar un mismo escenario fáctico para poder entrar a considerar la actuación del Estado. Es decir, aunque como ya hemos apuntado al exponer algunas valoraciones doctrinales en el apartado dedicado al análisis de la Resolución de la AG 68/165, en una primera visión puede estimarse como válida, en lo que nos ocupa, la práctica de un Estado debe atenderse a una visión que contemple si éste implementó alguna de estas políticas tras una situación de violaciones de derechos humanos y, una vez volvió a sufrir este escenario, cuál fue su comportamiento; esto es: si fue o no *constante* en su práctica; si implementó, en nuestro caso, órganos extrajudiciales que garantizaran que la sociedad conociera la verdad. Si ello no fue así; si no “repitió” este comportamiento, cabría mantener que realmente el requisito de la *constancia* no será cumplido.

Caso idéntico es el de la *opinio iuris*, pues hemos podido comprobar cómo en determinadas circunstancias el motivo que movió a los Estados a crear algún mecanismo de búsqueda de la verdad no fue la conciencia de que estaban jurídicamente obligados a ello, sino otro tipo de consideraciones, tales como, intentar ganar rédito político, o desmarcarse de la gestión del régimen anterior<sup>1356</sup>. Esta situación dejaría al elemento espiritual sin amparo.

Así las cosas, la aplicación estricta de estos condicionantes nos lleva a sostener que únicamente veintisiete son los Estados que consideramos las cumplen a ciencia cierta<sup>1357</sup>; lo que supone un número ciertamente exiguo de Estados –siendo, por otro lado, solo un 19,8 por 100 de los Estados especialmente interesados-. No se cumpliría, por tanto, el requisito de generalidad y no habría lugar para afirmar que el derecho a la verdad colectivo posee naturaleza consuetudinaria.

Desde una visión menos restrictiva, contamos con doce Estados<sup>1358</sup> sobre los cuales, debido a la conjunción de las circunstancias anteriormente referidas, es

---

<sup>1356</sup> La CIJ en su caso sobre *el derecho al asilo* negó la existencia de un derecho consuetudinario debido a que la práctica al respecto: “there has been so much inconsistency in the rapid succession of conventions on asylum, ratified by some States and rejected by others, and the practice has been so much influenced by considerations of political expediency in the various cases, that it is not possible to discern in all thiç any constant and uniform usage, accepted as law, with regard to the alleged rule of unilateral and definitive qualification of the offence”. I. C. J. Reports 1950. Asunto relativo al *Derecho al asilo*, 20 de noviembre de 1950., p.277. La práctica del Estado motivada por razones políticas no concordaría con la necesaria para determinar la existencia de una *opinio iuris* sobre ese parecer.

<sup>1357</sup> Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Chad, Chile, Corea del Sur, Ghana, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Estonia, Islas Salomón, Kenia, Marruecos, Nepal, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Bolivariana de Venezuela, República Checa, Sudáfrica, Tailandia, Túnez y Uruguay.

<sup>1358</sup> Costa de Marfil, Colombia, Eslovaquia, Granada, Honduras, Liberia, Lituania, México, Portugal, República Democrática Del Congo, Rumanía, Timor Oriental.

sumamente complicado poder probar o refutar (ya fuera por la ausencia de datos o información contundente a este respecto, o por lo particular del contexto) que estos elementos quedan efectivamente probados. La suma de esta serie de Estados con los anteriores daría, en cualquier caso, una proporción del 28,6 por 100; igualmente insuficiente.

Por último, contamos con diecisiete Estados<sup>1359</sup> sobre los cuales entendemos que incumplen sin lugar a dudas alguno de los anteriores requisitos. Incluso con su suma (en el caso más optimista de que se demostrara que cuentan con una práctica constante y uniforme y que se da la *opinio iuris*), ello correspondería, únicamente, a un 41,1 por 100.

En definitiva, independientemente del rigor del baremo que se utilizara para interpretar el elemento material y espiritual de los Estados respecto al derecho a la verdad colectivo, a nuestro juicio la conclusión no variaría, pues en ninguno de los casos tendríamos una generalidad suficiente para afirmar la existencia de una norma de Derecho internacional general.

Por otro lado, y como forma de completar la anterior afirmación, hemos de constatar que no solo la posición tomada por los Estados especialmente interesados (esto es, aquellos que sufrieron violaciones graves de derechos humanos) da pie a las anteriores conclusiones, sino que ello pudiera ser también extrapolable para el conjunto de los Estados interesados, es decir, para la totalidad de los Estados de la comunidad internacional (pues todos ellos pueden sufrir en un momento u otro una situación de violaciones graves de derechos humanos). En efecto, si aplicamos aquí lo que ya concluimos tras el examen de la Resolución 65/168 de la AG<sup>1360</sup>, podemos afirmar que el conjunto de los Estados (hayan sufrido o no una situación de violación grave de derechos humanos) no contempla que dar cobertura al derecho a la verdad colectivo pueda ser entendido como una obligación general, pues ningún Estado ha instado la existencia de una norma consuetudinaria que obligue, así, a un tercero a crear mecanismos que materializasen el contenido adscrito al derecho a la verdad colectivo tras una comisión de violaciones graves de derechos humanos; distinto, como ya vimos, sería el caso de sus obligaciones que emanan del Derecho internacional convencional. En definitiva, de la práctica de la generalidad de los Estados (ya expresa, ya tácita) no

---

<sup>1359</sup> Argelia, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Filipinas, Haití, India, Letonia, Malí, Nigeria, Pakistán, Sierra Leona, Sri Lanka, Uganda, Uzbequistán, República Federal de Yugoslavia, Zanzíbar, Zimbabue.

<sup>1360</sup> Véase, epígrafe 6 del capítulo IX.

puede concluirse en ningún caso que el derecho a la verdad colectivo pueda ostentar el rango de derecho consuetudinario.

Ahora bien, si examinamos los Estados que, habiendo sufrido una violación grave de derechos humanos, sí cuentan con una práctica constante, uniforme y una *opinio iuris* favorable, constatamos que un número importante de ellos pertenece a Estados de América Latina y el Caribe<sup>1361</sup>. De hecho, de los veintidós Estados especialmente interesados de esta región<sup>1362</sup>, doce<sup>1363</sup> crearon comisiones extrajudiciales de investigación al sufrir violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos con convicción de que tal era su obligación; mientras que solo siete aprobaron políticas encaminadas a la apertura de archivos.

Por otro lado, existen dudas razonables respecto a si la práctica de tres de ellos (Colombia, México y Honduras), basada en la creación de comisiones extrajudiciales de investigación, pudiera concordar con los requisitos de constancia, uniformidad y *opinio iuris*; algo que en nuestro caso resulta hartamente complicado que pudiera llegar a probarse de forma irrefutable respecto a estas tres experiencias<sup>1364</sup>. Por ello, rechazamos que, por ahora, exista un derecho a la verdad regional latinoamericano.

Sin embargo, somos de la opinión de que no resultaría descabellado cuestionar esta posición, es decir, que pudiera acreditarse que la práctica de Colombia, Honduras y México sí entraría dentro de los cánones del artículo 38 del Estatuto CIJ y que, estaríamos, en tal caso, ante una obligación consuetudinaria regional al verse cumplido el requisito de la generalidad de la práctica. Ello nos lleva a detenernos a analizar el contenido y las consecuencias de este (aún) potencial derecho regional.

---

<sup>1361</sup> Este grupo de Estados lo componen dentro de la AG: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay.

<sup>1362</sup> Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay.

<sup>1363</sup> Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, Uruguay.

<sup>1364</sup> Las reticencias al respecto residen en el requisito de constancia para los casos de Colombia y México, debido a que sería complicado poder afirmar que estos Estados siempre que sufrieron periodos de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos han creado comisiones de la verdad en aras de que la sociedad conociera la verdad de lo sucedido; independientemente de que hayamos comprobado que sí lo hicieron en determinados casos. Por su parte, la dudas en el caso de Honduras se encuentran en la *opinio iuris* de la investigación emprendida por el comisionado Leo Valladres (epígrafe 1.7 del capítulo V) debido a que dentro de las competencias brindadas por el Estado a este mecanismo no se encontraban la investigación de los hechos. Esta investigación fue incoada por el comisionado de mutuo propio, sin que el Estado considerase que tuviera esa obligación. De hecho, Leo Valladares afirmó que la situación de Honduras no exigía crear una comisión de la verdad.

La determinación de la generalidad de la práctica latinoamericana con relación al derecho a la verdad conllevaría la existencia de una obligación para quince Estados latinoamericanos de crear comisiones extrajudiciales de investigación que contaran con las competencias necesarias para dar a conocer a la sociedad la verdad de lo ocurrido. Esta obligación, sin embargo, no incluiría las políticas archivísticas pues incluso antes de que la práctica de los tres Estados anteriores fuera considerada, contábamos únicamente con ocho que actuaron de tal manera sobre los veintidós especialmente interesados.

La posible existencia de esta costumbre regional se alinearía de esta forma con la aparición de nuevos desarrollos en Derecho internacional regional dentro de la protección de los derechos humanos. Y es que, como ya afirmó Juan Antonio Carrillo Salcedo, esta constante es “más intensa en los ámbitos regionales que en el universal, (...) por su mayor homogeneidad y cohesión internas”<sup>1365</sup>. De hecho, la influencia de América en el desarrollo del Derecho internacional no es nueva, sino que históricamente la práctica y acuerdos entre Estados americanos han devenido en la aparición de normas de posterior aplicación universal, por ejemplo, el *uti possidetis iuris* o la no injerencia en asuntos internos<sup>1366</sup>.

Al comienzo de este trabajo apelábamos a la exigencia o necesidad social como el germen de la aparición de los nuevos progresos en Derecho internacional que, posteriormente, podrían desembocar en la aparición de un derecho consuetudinario si se cumplían toda una serie de condiciones. No obstante, el surgimiento de lo que podríamos denominar como “necesidades regionales” o “particularidades especiales” por razones geográficas, económicas, políticas o de seguridad, puede dar como consecuencia la creación de un derecho de ámbito regional, el cual vincule en exclusiva a los Estados de una determinada zona geográfica que hubieran participado en el surgimiento de esa norma.

Comentamos al inicio del desarrollo de la parte dedicada al DIDH cómo la desaparición forzada fue una práctica utilizada por los distintos regímenes represivos en su política de eliminación del enemigo, con especial énfasis en las dictaduras del continente americano. De hecho, con excepción de Costa Rica, la mayor parte de estos

---

<sup>1365</sup> CARRILLO SALCEDO, J.A., *Dignidad frente a barbarie. La Declaración Universal de Derechos Humanos, cincuenta años después*, Madrid, Minima Trotta, 1999, p.137.

<sup>1366</sup> GONZALEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Curso de Derecho Internacional... op.cit.*, p.137.

Estados sufrieron algún período de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos, lo que da muestras de la consecuente necesidad de crear mecanismos para respetar los derechos de las víctimas dentro de este grupo de Estados. La Comisión IDH expuso al respecto:

“(…) la historia de los países del Hemisferio se ha caracterizado por múltiples y reiteradas rupturas del orden democrático e institucional, situaciones de conflicto armado de carácter no internacional, guerras civiles y situaciones de violencia generalizada que se desarrollaron por largos períodos de tiempo, y que en algunos casos, todavía continúan vigentes. En esas circunstancias, ha sido frecuente la violación masiva y sistemática de derechos humanos y la comisión de graves infracciones al Derecho internacional humanitario (...) por parte de agentes estatales, particulares que operaron con apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado, y miembros de grupos armados ilegales. La falta de información completa, objetiva y veraz sobre lo sucedido durante esos períodos ha sido una constante, una política de Estado e incluso una ‘estrategia de guerra’, como en el caso de la práctica de las desapariciones forzadas. Así, la Comisión ha señalado que ‘un difícil problema que han debido afrontar las recientes democracias es el de la investigación de las anteriores violaciones de derechos humanos y el de la eventual sanción a los responsables de tales violaciones’”<sup>1367</sup>.

¿Por qué esta reacción uniforme de los Estados americanos ante este escenario? Sin remontarnos a referencias muy pasadas, la coincidencia temporal a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX de Gobiernos dictatoriales en la mayoría de estos Estados, así como de posteriores períodos de transición política, pudo haber favorecido la aparición de una reacción conjunta a la hora de lidiar con su legado, donde las nuevas administraciones democráticas eran conscientes de la necesaria implementación de políticas que estuviesen destinadas a averiguar la verdad sobre lo ocurrido. La base del regionalismo es, de hecho, la aplicación de “normas especiales” que regulen situaciones específicas de un conjunto concreto de Estados, aunque esas puedan ser posteriormente recogidas o adaptadas por terceros países con el paso del tiempo. Este mismo razonamiento ha sido seguido por James Crawford, el cual ha argumentado que: “[e]ven

---

<sup>1367</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Derecho a la verdad en América*, Doc. OEA/Ser.L/V/II.152, 13 de agosto de 2014.

when States focus on questions of apparently universal concern, their approach is likely to be influenced by *regional postures* and implications”<sup>1368</sup>.

Un apunte de interés es que la posible existencia de una norma consuetudinaria de estas características traería en consecuencia la obligación de que estos (quince) Estados crearan comisiones de la verdad siempre que sufrieran violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos, algo a lo que, de hecho, no están obligados según la interpretación jurisdiccional de la propia CADH, como hemos comprobado. En efecto, la Corte IDH, en contraposición a lo sostenido por la Comisión IDH y por los distintos mecanismos convencionales y extraconvencionales del sistema universal de protección, interpreta que como forma de materialización del derecho a la verdad colectivo únicamente habría de publicitarse los resultados de la sentencia; pues este tipo de comisiones, recordemos, contaban para ella solo con carácter potestativo. Estos Estados, así, estarían yendo con su práctica más allá de la interpretación dada por la Corte IDH sobre la forma de materializar el derecho a la verdad colectivo, al haber generado una obligación que ellos mismos habrán de respetar y que este tribunal, sin embargo, no considera como tal. Ello llevaría a que, por ejemplo, en caso de que alguno de los Estados vinculados por esta norma no constituyera una comisión de estas características, contraería responsabilidad internacional no para con la CADH, sino para con esta norma consuetudinaria; amén de para con sus obligaciones convencionales dentro de los distintos mecanismos del sistema universal.

Dando el último paso, a partir de lo anterior tendríamos que afrontar la problemática relativa a qué características o competencias serían las que estos Estados habrían de respetar en relación con el mandato o las funciones de estas comisiones. Al respecto, consideramos que esta posible norma regional se vería materializada mediante la aplicación de los mismos estándares que ya interpretamos imprescindibles para este mismo particular, siguiendo la actuación estatal así como especialmente a los mecanismos convencionales del sistema universal: amplia competencia material y temporal, independencia de sus miembros, un objetivo centrado en investigar y publicar las causas, desarrollo y consecuencias de los graves actos de violencia que han tenido impacto en la sociedad y de las violaciones que han formado parte de una pauta

---

<sup>1368</sup> CRAWFORD, J., “Chance, order, change...”, *op.cit.*, p. 243. Sin cursiva en el original.

generalizada de abuso, y la potestad de publicar la identidad de los victimarios previo respeto de unos elementales derechos de defensa<sup>1369</sup>.

---

<sup>1369</sup> Para un desarrollo mayor de estas características véase lo estudiado en el epígrafe 4 del capítulo VI.

## CONCLUSIONES

**I.** El germen del actual derecho a la verdad se encuentra dentro de la regulación de los conflictos armados y, más concretamente, en las desapariciones de personas perpetradas dentro de estos contextos. Las propias características de estos actos (en especial, la privación de libertad, la denegación de información y la sustracción de la protección de la ley) fueron las que propiciaron el nacimiento de distintos mecanismos destinados a prevenir y reparar el daño causado por ellas.

Pese a que los Convenios de Ginebra de 1949 obligaban ya a los Estados a buscar a los heridos y náufragos en conflicto armado, fue la proliferación de los desaparecidos en combate lo que llevó al nacimiento de toda una serie de Resoluciones dentro del seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (AG) sobre estos hechos. La primera de ellas fue la Resolución 3220 [XXIX] de 6 de noviembre de 1974 sobre “Asistencia y cooperación para localizar a las personas desaparecidas o muertas en conflicto armado”, destinadas *inter alia* a que los Estados adoptaran “todas las medidas a su alcance para ayudar a localizar e identificar las tumbas de los muertos”.

La necesidad de un mecanismo específico que previniera y protegiera a las víctimas de desaparición forzada fue concretada en el Protocolo I en 1977. Su artículo 32 recogía el (ya) derecho dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que “asiste a las familias de personas desaparecidas a conocer la suerte de sus miembros”. Ello se corresponde con la primera obligación que los Estados tendrían para con lo que será conocido, posteriormente, como el derecho a la verdad.

**II.** A finales de la década de los setenta y principios de los años ochenta, las desapariciones dejaron de ser cuestión exclusiva de la regulación de los conflictos armados para instalarse dentro de la protección de los derechos humanos. Los regímenes totalitarios que aparecieron en toda América Latina utilizaron esta práctica como técnica de opresión contra el enemigo político, lo que redundó en que la AG aprobara su Resolución 33/173 de 20 de diciembre de 1978 sobre personas desaparecidas, como la piedra inaugural del camino del derecho a la verdad dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).



Poco después de la aprobación de esta Resolución, el Comité de Derechos Humanos (Comité DH) haría lo propio e iniciaría su práctica en derecho a la verdad, en 1982, con el caso *Bleier c. Uruguay*. Tanto en este como en casos coetáneos, el Comité DH interpretó los artículos 2.3 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de manera que sus Estados Parte tuvieran la obligación de incoar una investigación judicial dirigida a que los familiares de las víctimas conocieran no solo el paradero del desaparecido (como se estipulaba en el Protocolo I), sino también las circunstancias en las que esa desaparición se produjo; la investigación se prolongaría hasta que el paradero del desaparecido fuera hallado. Esta interpretación constituía un entendimiento más amplio del concepto “verdad” que el dado dentro del DIH pues amparaba que no solo el paradero fuera hallado, sino también las circunstancias de esa desaparición; algo que desde la aparición de estos pronunciamientos comenzaremos a asimilar con la vertiente **individual** del derecho a la verdad.

Esta misma concepción de la “verdad” fue también recogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su primera sentencia contenciosa dentro del caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras* en 1988. En este caso, el tribunal encontró violado el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) donde afianzó el deber de los Estados de investigar hasta averiguar la verdad de lo sucedido, lo que haría que los caminos durante esta época del Comité DH y la Corte IDH fueran paralelos.

Una interpretación similar a la del Comité DH, aunque basada solo en lo recogido en el Protocolo I (es decir, no recogía nada en relación con el conocimiento de las circunstancias en las que se cometió la desaparición) también apareció en el primer informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de 1981. No obstante, lo novedoso que encontramos dentro de este informe (y que después fue ampliado en uno posterior de 1983) fueron los derechos concernientes a los menores sustraídos de sus madres al nacer, concretados en el derecho a la protección de la identidad personal. Los derechos tanto de los menores como de los padres privados de sus hijos ocuparán, más adelante, su propio espacio dentro del contenido del derecho a la verdad, en especial en los mecanismos reguladores de las desapariciones forzadas.

La falta de mecanismos generales para la prevención e investigación de desapariciones forzadas llevó a que algunos Estados empezaran a crear organismos específicamente orientados a la búsqueda de los desaparecidos y al conocimiento de lo sucedido tras una etapa de violaciones graves de los derechos humanos. Entre ellos, el

primero identificado en este trabajo, la *Hamoodur Rahman Commission* creada en Pakistán en 1970, y las comisiones extrajudiciales de Bolivia y Argentina de 1981 y 1982 respectivamente, como prototipos inaugurales de lo que se instaurarán en años venideros en distintos Estados para averiguar la verdad de lo ocurrido. Estos mecanismos se corresponden con lo que serán popularmente conocidas como comisiones de la verdad.

**III.** Dejando a un lado estos primeros inicios de la definición de la vertiente individual del derecho a la verdad, su modalidad **colectiva** aparece por vez primera dentro del Informe Anual 1985-1986 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH). Dentro de este Informe, este organismo ya apeló al derecho de toda la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido tras haber sufrido una etapa de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, como una medida orientada a la no repetición de los hechos. Este pronunciamiento posee un gran interés debido a dos circunstancias. La primera, como hemos mencionado, nos encontramos ante la primera alusión al derecho a la verdad como derecho colectivo; a un derecho cuyo titular no es ya solo la víctima individual, sino también la colectividad afectada por una violación de derechos humanos. La segunda se encuentra recogida en este último inciso: la afección del derecho a la verdad no se dará en exclusiva debido a la comisión de las desapariciones forzadas, sino por cualquier violación de un derecho humano. De esta forma, el margen de aplicación del derecho a la verdad se vio aumentado tanto en su contenido material, como en su titularidad.

La Comisión IDH en este informe aludió igualmente al derecho de los padres a conocer el destino y el paradero de sus hijos sustraídos al nacer, sin atender a las posibles dificultades que ello podría acarrear para el menor; obligado, según este órgano, en cualquier caso, a conocer su origen con independencia de que este pudiera preferir ejercer su derecho a no saber.

A su vez, el seguimiento de las novedades referentes al contenido del derecho a la verdad se pudo comprobar en la práctica de los años noventa del Comité DH y la Corte IDH. Dentro de los desarrollos de su vertiente individual ambos organismos entendían que la misma supondría una prerrogativa a tener en cuenta a la hora de incoar una investigación judicial con las debidas garantías. Es decir, cualquier investigación emprendida por el Poder Judicial habría de estar destinada a “hallar la verdad de lo ocurrido”. En este sentido, a destacar es la decisión de la Corte IDH en el caso *Castillo*

*Páez c. Perú* de 1997, donde pese a que la Comisión IDH en sus alegatos finales se refirió tanto al contenido del derecho a la verdad individual (presidido por obligaciones de estricto calado judicial) como colectivo (aún sin un sustento convencional definido), la Corte obvió referirse directamente a este derecho y lo calificó de concepto “en desarrollo doctrinal y jurisprudencial”. Sin embargo, sí encontró violado el total del contenido que la Comisión IDH le adscribió a la vertiente individual del derecho a la verdad, lo que, indirectamente, repercutiría en la consolidación del derecho a la verdad individual dentro de la CADH en sus artículos 8 y 25, por tanto, ya de carácter vinculante.

Por su parte, ambos organismos, dentro de su propia competencia, empezaron a distanciarse poco a poco del modo en el que la vertiente colectiva del derecho a la verdad habría de ser tratada. Mientras que la Corte IDH, como acabamos de mencionar, obviaba por entonces (finales de los 90) referirse a él, sí encontramos referencias, aunque aún algo indirectas, del Comité DH que coinciden con la definición que la Comisión IDH hizo de la vertiente colectiva del derecho a la verdad en el Informe anteriormente mencionado. Concretamente, en unas Observaciones Finales (OF) a Iraq de 1997, este órgano reconoció la necesidad de que la sociedad conociera la verdad de lo sucedido a través de la publicación de los resultados de la investigación, algo que se encontraba en concordancia con el artículo 14 del PIDCP, así como con su Observación General (OG) núm.13. Este conocimiento social de la verdad judicial ya lo identificamos y denominamos como “verdad judicial colectiva”, la cual apareció por primera vez, aunque circunscrita en exclusiva a la regulación de las desapariciones forzadas, en el artículo 13.4 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Declaración DF).

**IV.** El Informe Joinet en 1997 supuso un hito importante para el objeto de este trabajo. En el mismo se establecieron cuatro “principios rectores” a tener en cuenta por los Estados tras la comisión de violaciones graves de derechos humanos. Entre ellos el derecho a la verdad colectiva e individual, consignados en sus Principios 1 y 3, respectivamente. De esta manera, en este documento se aunaban las dos vertientes del derecho a la verdad que ya se empezaban a apreciar en la práctica del Comité DH y la Comisión IDH.

La división del derecho a la verdad en dos vertientes, auguraba, igualmente, la existencia de dos medios o modos en los que cada una de estas habría de concretarse.

Ello repercutía en la existencia de dos modalidades: la *verdad judicial* y la *verdad extrajudicial*. La primera de ellas se corresponde con el derecho de la víctima a que los órganos judiciales emprendan una investigación con las debidas garantías para determinar qué y cómo ocurrió y, en caso de desaparición forzada, dónde se encuentra el paradero de la víctima. Todo ello comporta un derecho individual de la víctima. Se forma, por ende, una conexión entre el derecho a la verdad individual con la verdad judicial por ser el Poder Judicial el medio adecuado para dar cobertura a este derecho. De esta forma, la vinculación jurídica de la vertiente individual quedaría amparada por las obligaciones tanto convencionales como generales de los Estados en materia de derecho a la justicia, que ya encontrábamos, igualmente, amparada por el articulado del PIDCP y la CADH, así como por la práctica del Comité DH y la Corte IDH, respectivamente.

Por su parte, la verdad extrajudicial, ligada a la vertiente colectiva de la verdad, implicará la necesidad, tras un período de violaciones masivas y/o sistemáticas de derechos humanos, de crear mecanismos no centrados en exclusiva en hallar aquellos hechos que fueron constitutivos de delito, sino otros que pese a no coincidir con ilícitos penales internos o internacionales, sí son imprescindibles para llegar a tener un conocimiento completo y global de lo sucedido (contexto social, político e histórico; sufrimiento vivido por las víctimas; causas y consecuencias del conflicto; repercusión internacional, etc.). Tal y como la Comisión IDH ya arguyó en 1986, el necesario conocimiento de todos ellos sería esencial para evitar la repetición de los hechos.

En lo más concreto, el mismo Informe Joinet reconoce las comisiones de la verdad y las políticas archivísticas como los medios apropiados para concretar este tipo de verdad, los cuales coincidían con los que hasta ahora los Estados venían creando para que la sociedad pudiera conocer la verdad de lo ocurrido. Por otro lado, la complementación de estos dos mecanismos con los medios destinados a la verdad judicial e individual (proceso penal) será imprescindible para alcanzar una “verdad global”, es decir, un conocimiento completo e íntegro de lo sucedido durante un período de violaciones masivas de derechos humanos.

La entrada de la vertiente colectiva dentro de este Informe no supuso, sin embargo, su afianzamiento como norma internacional de alcance general, pues como se disponía en su epílogo no estábamos ante estrictas obligaciones jurídicas, sino ante un conjunto de medidas orientadas a obtener una mejor gestión del período que sucede a una etapa de violación masiva de derechos humanos, en aras de favorecer una

“reconciliación fuerte y duradera” de la sociedad. La falta de obligatoriedad de estos “principios rectores” o “emergentes”, donde se encontraba recogido el derecho a la verdad colectivo, se reafirmaba con el estado de la práctica estatal al respecto de aquella década de los noventa, tal y como estudiamos.

En efecto, antes abordar su propia valoración, apreciamos un notable aumento de la práctica estatal sobre este particular, donde podemos destacar experiencias en comisiones de la verdad tan remarcables como la sudafricana, la salvadoreña, la chilena, la guatemalteca, o en apertura de archivos como la polaca, la checa o la alemana. Aunque, quizás, la experiencia más novedosa en este período la encontremos en Argentina y la creación de una instancia tan compleja como los juicios por la verdad. En ellos, la institución (en este caso los tribunales) se puso al servicio del fin (hallar la verdad), en respeto, eso sí, a la legalidad formalmente vigente a tal efecto, en aquel momento representada en las leyes de amnistías que aún surtían efectos en 1999. La combinación de intentar respetar el derecho a la verdad, que Argentina reconocía propio de las víctimas y la sociedad, y el ordenamiento jurídico del Estado, dieron fruto a un proceso judicial de naturaleza declarativa, no punitiva, libre de toda condena penal. Una suerte de proceso de investigación o una fase de instrucción donde se averiguaría la verdad de cada caso que se propusiera investigar, pero que en ningún momento seguiría los formalismos o el *íter* procesal propio del proceso penal.

Pese a todas estas experiencias, constatamos que los estándares necesarios para confirmar la existencia de una norma consuetudinaria, no se cumplen. Y es que, ciñéndonos a las cifras, de los ciento dieciocho Estados con relación a los cuales se produjeron episodios de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos hasta la década de los noventa, solo treinta y tres fueron implementaron algún tipo de mecanismo orientado a conocer la verdad colectiva y extrajudicial de lo sucedido. El requisito de la generalidad, por tanto, no se cumpliría en ningún caso.

V. Tras la prueba de la existencia de dos vertientes dentro del derecho a la verdad en el Informe Joinet, en la década de los 2000 las diferencias en la interpretación de este derecho de la Corte IDH y el Comité DH se agudizaron en lo concerniente, sobre todo, a su modalidad colectiva. Teniendo presente que la verdad individual ya se traducía para ambos organismos con la obligación de los Estados de incoar investigaciones judiciales tras la perpetración de violaciones de derechos humanos, a lo largo de esta época la Corte IDH cambiaría su posición inicial y reconocería

expresamente el derecho a la verdad individual y colectiva, como medidas necesarias para la reparación de la víctima y la no repetición de los hechos, aunque subsumidas siempre dentro de las obligaciones de los Estados para con el derecho a la justicia en general y la obligación de investigar en particular. En concreto, este tribunal, como medio de materialización de la vertiente colectiva del derecho a la verdad, indicó que los Estados tenían la obligación de publicitar los resultados de las sentencias, tal y como prescribía el artículo 8.5 de la CADH. Es decir, se daba cobertura en exclusiva a la verdad judicial colectiva; opción que, a nuestro juicio, limitaría que la sociedad pudiera conocer la verdad extrajudicial, pues los Estados no contarían con la obligación de crear mecanismos orientados a conocer este tipo de verdad, al tener, según la Corte IDH, carácter potestativo.

En contraposición con lo anterior, y siguiendo con la evolución del derecho a la verdad colectivo, durante esta misma época varios órganos del sistema universal comenzaron a reconocer la existencia y vigencia de la modalidad colectiva y extrajudicial de este derecho en la medida en la que su mandato y competencia lo permitían. Así, en 2005 la Comisión DH aprobó el Conjunto de principios, que suponía la actualización del Informe Joinet, en el que se reconocía, como ya se hizo en 1997, a las comisiones de la verdad y los archivos como los medios indicados para respetar el derecho a la verdad de la sociedad, pero con un alcance y carácter distinto. En efecto, aquí el derecho a la verdad colectivo se definía como la obligación de los Estados de articular medios para que la ciudadanía pudiera acceder libremente a los archivos contenedores de información sobre violaciones masivas o sistemáticas ocurridas en el pasado; mientras que instituciones como las comisiones de la verdad suponían simplemente “deliberaciones de ámbito nacional” y, por tanto, no obligatorias. Contemplamos, así, como la naturaleza que el Conjunto de principios otorga al derecho a la verdad colectivo es ambigua pues ante un mismo derecho reconoce dos formas diametralmente opuestas (en lo que concierne a la vinculación de los Estados para con ellas) de concretarlo, en vez de pronunciarse directamente sobre cuál es la naturaleza jurídica de este derecho. No obstante, y en directa remisión al análisis sobre la práctica estatal en esta época, seguimos, como en la anterior, sin poder afirmar que la generalidad de los Estados especialmente interesados amparara la vigencia de esta obligación.

En efecto, pese a que durante la década de los 2000 encontramos un aumento significativo del número de Estados que habiendo sufrido violaciones graves de

derechos humanos crearon mecanismos orientados a respetar el derecho a la verdad de sus sociedades, hasta ese momento ciento veintidós Estados fueron los que sufrieron violaciones manifiestas de derechos humanos y, únicamente, cincuenta y cuatro implementaron mecanismos para concretar el derecho a la verdad colectivo. Como ya se argumentó acerca de su posible vigencia como Derecho internacional general a finales de los noventa, por aquel entonces seguíamos sin constatar que pudiera darse el requisito de la generalidad necesaria.

**VI.** El derecho a la verdad colectivo también fue reconocido dentro de toda una serie de Resoluciones de la Comisión y del Consejo de Derechos Humanos (Comisión DH – Consejo DH) sobre el derecho a la verdad, lo que redundó posteriormente en la publicación de distintos estudios por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La primera de ellas, la Resolución 2005/66, hizo mención a que el derecho a la verdad fuera tenido en cuenta dentro del mandato de los distintos mecanismos extraconvencionales, lo propició que su contenido fuera progresivamente abriéndose a distintas esferas hasta ahora no tratadas.

A lo largo de la década de los 2000, la más estrecha conexión del derecho a la verdad, junto con el derecho a la justicia, se fija con el derecho a la reparación. Esta fue afianzada en 2005 dentro de los Principios sobre reparaciones en su forma de satisfacción, en concreto, como “la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad”. Esta dimensión coincidía con lo aquí denominado “verdad judicial colectiva”, lo que significaría que en caso de que no se publicasen los resultados de la investigación, se estaría violando no solo parte del derecho a la reparación de las víctimas, sino también parte del contenido del derecho a la verdad.

El derecho a la información cuenta también con una estrecha conexión con este derecho. A este respecto, dentro de la Resolución 2005/66 la Comisión de DH apeló a la necesidad de que tanto la sociedad como las personas individuales pudieran “acceder a la información más completa posible sobre las medidas y los procesos de decisión de su gobierno”. De forma más específica, el nexo de unión entre el derecho a la información y el derecho a la verdad vendría sustentado en el acceso a la información, y más concretamente, a la información pública y documental en aplicación del principio de transparencia. La conjunción de estos dos derechos daría como resultado el derecho de la ciudadanía a acceder a cualquier tipo de información tras una violación de derechos humanos, en aras de conocer lo sucedido y, en atención a lo dispuesto por la Comisión

DH, a cuál fue la actuación de su Gobierno durante ese período. No obstante, nos encontramos ante dos derechos distintos cuya diferencia cardinal reside en el ámbito material. Esta diferencia es fundamental pues en el caso del derecho a la información los Estados tendrían la opción de suspender su aplicación según lo recogido en el artículo 19 del PIDCP. Por su parte, la unión del derecho a la verdad con situaciones de violación de derechos humanos repercute en una mayor protección de su contenido, al cual no pueden serle aplicados los mismos criterios que a aquel.

La relación entre información y verdad también fue lo que llevó a la OACNUDH a publicar el informe 12/19 sobre dos medidas destinadas a favorecer el conocimiento de los hechos tras violaciones de derechos humanos: los archivos y la protección de testigos. Los primeros, debido a la capacidad de estos instrumentos como transmisores de la memoria, pues en determinadas circunstancias pueden constituir el único vestigio de que un hecho concreto ocurrió en realidad. Los segundos, porque a mayor seguridad, mayor será el nivel de participación de los testigos y víctimas dentro de los procesos de recuperación de la verdad, ya fueran judiciales o extrajudiciales.

Otra conexión interesante del derecho a la verdad fue la establecida por el REIMA: la condena a la pena de muerte. Ello sobre la base de que aquellos que hubieran perpetrado violaciones sistemáticas de derechos humanos no pudieran ser interrogados acerca de su participación en dichas actuaciones en caso de que fueran condenados a la pena capital por un suceso determinado.

**VII.** La década de los 2000 también nos dejó avances significativos dentro del Derecho internacional convencional. En 2006 fue adoptada la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CDF), en cuyo artículo 24.2 se recogía el derecho a la verdad individual de las víctimas de desaparición forzada, ya no solo circunscrito convencionalmente al PIDCP y la CADH, como hemos venido señalando. No obstante, de la lectura completa del tratado consideramos que la vertiente colectiva del derecho a la verdad se encuentra igualmente amparada, debido a la conexión entre el mencionado artículo con el contenido del artículo 5, que recogía que la comisión sistemática de desapariciones forzadas comportaría un crimen de lesa humanidad que como tal, activaría las consecuencias previstas en el Derecho internacional aplicable.

Otro extremo a tener en cuenta dentro de la CDF es el derecho de los menores a conocer su identidad en caso de haber sido sustraídos de sus padres biológicos al nacer.



En estas situaciones la CDF recogía, al fin, que será el interés superior del menor y su propia opinión lo que determinará los pasos a seguir en este particular, algo que veníamos demandando desde que este tema fuera tratado por vez primera dentro del Informe Anual 1985 - 1986 de la Comisión IDH.

Acerca de avances concretos sobre el derecho a la verdad colectivo, y continuando dentro del Derecho internacional convencional, fue en 2009 cuando el Comité DH interpeló a España en sus OF a constituir “una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura”, en aplicación de sus interpretaciones sobre los artículo 7 (realizada en su OG núm. 20), 2.1 y 2.3 (en su OG núm. 31). De esta manera, el Comité DH concretaba cuál sería para los Estados Parte del PIDCP la manera en la que la vertiente colectiva del derecho a la verdad habría de ser materializada. Este hecho es destacable pues tal interpretación superaba la anterior, basada únicamente en la verdad judicial colectiva, la cual era la seguida aún en esta época por la Corte IDH. De esta forma, ambas vertientes del derecho a la verdad quedaban afianzadas en su totalidad dentro del PIDCP.

En este mismo sentido, se establecieron de manera más precisa cuáles serían las características necesarias para que esas comisiones pudieran efectivamente respetar el derecho a la verdad colectivo en su integridad. Entre ellas se encontraban, por un lado, contar con una competencia material y temporal que no limitara de ningún modo la posibilidad de que todas las violaciones de derechos humanos fueran primero investigadas y luego conocidas por la sociedad. Y, por otro lado, también sería necesario que los comisionados contaran con independencia política reconocida y que, en caso de que se garantizaran ciertas garantías, el informe final pudiera recoger y publicar la identidad de los victimarios.

**VIII.** La evolución experimentada por el derecho a la verdad dentro de la práctica de los órganos de protección de derechos humanos y por parte de los Estados a finales de la primera década de los 2000, redundó en que desde sectores de la doctrina y de ciertos órganos de protección fuera considerada probada su naturaleza consuetudinaria e, incluso, se llegara a afirmar su naturaleza de *ius cogens*, tal y como hizo el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados (REIMA) en 2006.

Estos pronunciamientos, sin embargo, a nuestro entender adolecían de falta de respaldo de una práctica estatal sólida que pudiera amparar la obligatoriedad de la vertiente colectiva del derecho a la verdad dentro del Derecho internacional general. Y no solo de esta, sino también de la de la Corte Internacional de Justicia, tribunal que ostenta la competencia obligatoria al respecto según el artículo 66 a) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Igual interpretación será aplicable a otras obligaciones internacionales derivadas del derecho a la verdad, como la obligación de búsqueda de los desaparecidos y la obligación de incoar una investigación penal tras la violación de derechos humanos; las cuales, en ningún caso, pudieran ser consideradas de *ius cogens*.

**IX.** La evolución señalada en el Derecho internacional convencional siguió progresando a partir de 2010, liderada por la práctica de los Comités. Los avances en derecho a la verdad colectivo, ya acometidos por el Comité DH, fueron asimilados por el Comité contra la Tortura (Comité CT) y el Comité contra la Desaparición Forzada (Comité DF).

El Comité CT realizó en 2010 las primeras interpretaciones que reconocían el contenido del derecho a la verdad colectivo dentro del articulado de la Convención contra la Tortura (CCT) como una medida destinada a la reparación de las víctimas de tortura. Y como ya hiciera el Comité DH determinó, en unas OF a Colombia, que tras una comisión de violaciones masivas y/o sistemáticas de derechos humanos los Estados tendría la obligación de constituir una comisión de expertos independientes en aras de que la sociedad no conociera únicamente la “verdad procesal” de lo ocurrido, en correcta aplicación del artículo 14 de la CCT. Las características ya identificadas para que una comisión de la verdad diera efectiva cobertura a este derecho dentro del PIDCP, serán extrapolables al contenido del derecho a la verdad colectivo dentro de la CCT y también la de la CDF. Al respecto, es importante destacar que lo dicho fue lo también acordado por el Comité DF en sus OF a España en 2013, al impeler a este Estado a crear “una comisión de expertos independientes”, la cual sería la forma en la que se concretaría el carácter colectivo del derecho a la verdad, cuya existencia ya se confirmó así dentro de la CDF en su artículo 24.2 en relación con el 5. De esta forma, los Estados tendrían la obligación, según el contenido del PIDCP, la CCT y la CDF, de crear mecanismos extrajudiciales de investigación que tuvieran las suficientes garantías como para que la sociedad conociera la verdad sobre las violaciones masivas y/o sistemáticas

de derechos humanos ocurridas (en el pasado). Así, la vertiente colectiva quedaba ya, y junto con la individual (incluida en la obligación de investigar penalmente con las debidas garantías, recogida en el articulado de ambos tratados), amparada en la CCT y la CDF.

**X.** Las comisiones de la verdad empezaron a ser consideradas como los mecanismos ideales para dar cobertura al derecho a la verdad colectivo. No obstante, estuvo cada vez más extendida la idea de que su sola constitución no redundaría en un cumplimiento inmediato de este derecho, al igual que, como venía estipulando la Corte IDH, estas no comportarían su intercambio por la obligación del Estado de incoar investigaciones judiciales sobre los mismos hechos objeto de investigación extrajudicial. Y es que, en nuestra opinión, la obligación que reconocieron los tres Comités también pudiera ser respetada por cualquier otro mecanismo con competencia suficiente para concretar el contenido del derecho a la verdad colectivo.

En este sentido, debemos subrayar que la necesidad de que una comisión de la verdad deba adaptarse a la realidad del contexto donde va a ejercer sus funciones produce que, en caso de que se instaure una comisión que no las cumpla, pese a haber sido creada, no satisfaría las obligaciones que, se supone, ha venido a dar cobertura. De esta misma opinión fue el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (REVJR), el cual dentro de sus recomendaciones, también a España, describió las características y funciones con la que habría de contar una comisión extrajudicial orientada a respetar efectivamente el derecho a la verdad colectivo de la sociedad española, como forma de recalcar la importancia de que la comisión, o cualquier órgano que se instaure, hubiera de adaptarse al medio y a las circunstancias donde se crea.

**XI.** A lo largo de los inicios de la segunda década de los 2000 y en contraste con los avances contemplados en el sistema universal, y de lo que ya venía disponiendo la Comisión IDH desde 1986, la Corte IDH continuó sosteniendo su interpretación sobre el derecho a la verdad como un derecho incorporado en sus dos vertientes en el proceso judicial, con la publicación de las sentencias judiciales como el modo de concretar el derecho a la verdad colectivo. No obstante, la Corte realizó en alguna decisión pequeños avances que, ya fuera por la apelación al artículo 13 de la CADH, o a los artículos 5.1 y 5.2, encontraron violado este derecho sin que ello conllevara inexcusablemente una

violación de la obligación de investigar, en lo concreto, y del derecho a la justicia, en general. Pese a que ello supuso un importante precedente que da lugar a la esperanza de que la Corte IDH pudiera llegar a considerar violado el derecho a la verdad colectivo de forma autónoma en casos posteriores, lo cierto es que este tribunal no siguió esta tendencia y volvió a recurrir al derecho a la justicia como el entorno principal que sustentaría el derecho a la verdad colectivo. Sin volver, en suma, a apelar a ningún artículo que no estuviera ligado con las obligaciones de los Estados en materia de derecho a la justicia.

A la luz de todo ello, consideramos que para una protección completa y autónoma del derecho a la verdad colectivo es preciso, por un lado, que se entienda como obligatorio para todo Estado Parte de la CADH el establecimiento de un instrumento extrajudicial de investigación, por ejemplo, comisiones de la verdad, ante violaciones sistemáticas y/o masivas de derechos humanos. Y, por otro lado, que este derecho de la sociedad a conocer la verdad quede amparado en el contenido del artículo 13.

Una interpretación similar a la de la Corte IDH es la que apreciamos en los primeros casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunció sobre el derecho a la verdad. La vertiente procesal de los artículos 2, 3, 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Individuales (CEDH), junto con el artículo 13, será donde el TEDH reconozca las dos vertientes del derecho a la verdad. Es decir, al igual que la Corte IDH, el derecho a la verdad estará subsumido dentro de la obligación de los Estados tras una violación de derechos humanos de incoar investigaciones judiciales y publicar las sentencias para que la sociedad conozca los resultados de la investigación. Como ya ocurría con el artículo 13 de la CADH, la falta de mención al artículo 10 del CEDH, y a cualquier medio no judicial para materializar la vertiente colectiva del derecho a la verdad, redundaba en que el derecho a la verdad se encuentre en cualquier caso subsumido en el derecho a la justicia también para el TEDH.

**XII.** La práctica de los Estados en la última etapa de este estudio ha contado con importantes puntos de interés que nos han permitido comprobar, de manera condensada, cuál es la opinión de los Estados respecto al derecho a la verdad. En concreto, tras el análisis realizado de la Resolución 65/168 de la AG, la primera Resolución temática de este organismo sobre este particular, no cabe afirmar que estemos ante la cristalización de una norma general sobre el derecho a la verdad colectivo. A su vez, esta Resolución

supuso un útil complemento en el que apoyar nuestras conclusiones sobre la práctica de los Estados a lo largo de todo el intervalo temporal examinado en este estudio (1970 – 2015). Y es que pese a contar con una práctica incipiente a este respecto, confirmamos que la falta del requisito de la generalidad de la práctica conlleva que no podamos acreditar que el derecho a la verdad colectivo posea (aún) naturaleza consuetudinaria.

Sin embargo, del propio estudio de la práctica estatal se deriva que sí pudiera plantearse la posibilidad de estar ante una norma de Derecho internacional regional latinoamericano, que determinaría que (al menos) quince Estados de esta región estarían jurídicamente obligados a crear comisiones extrajudiciales de investigación tras haber sufrido una etapa de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos. En este sentido, pese a que consideramos que la práctica concreta de tres Estados (Colombia, México y Honduras) no cumpliría con los requisitos de constancia y *opinio iuris* y, por tanto, tampoco se daría el requerimiento de la generalidad de la práctica, es interesante remarcar que en tal caso, estaríamos ante la consolidación de una obligación que iría más allá de lo que ha dispuesto la Corte IDH sobre el derecho a la verdad colectivo en atención a la CADH.

**XIII.** Tras todo lo estudiado, podemos concluir que hoy en día no contamos con una respuesta unitaria a la pregunta: ¿de conformidad al Derecho internacional vigente, qué es el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos?

Este derecho, en su estado actual, y pese a la convergencia que hemos ido analizando, responde a una vinculación y contenido variables según en qué ámbito del ordenamiento internacional nos movamos. Habiendo demostrado la vinculación con la que cuenta la vertiente individual del derecho a la verdad dentro del Derecho internacional convencional, derivada del estudio del contenido del PIDCP, la CCT, la CDF, la CADH y el CEDH (vinculación sin duda también extrapolable al Derecho internacional general, debido a lo extendido de la obligación de los Estados de investigar tras la comisión de una violación de derechos humanos), la modalidad colectiva nos lleva a un escenario complejo y fragmentado.

Pese a que los Estados, tras haber sufrido un episodio de violaciones masivas y/o sistemáticas de derechos humanos, no cuentan con la obligación general de atender al contenido propio de la verdad colectiva, será a partir de la interpretación adecuada de unas (u otras) de sus obligaciones convencionales que podrá aseverarse que la verdad colectiva, que aquí defendemos, cobra plena obligatoriedad jurídica. Y es que según a

qué instrumentos convencionales nos remitamos encontraremos diferencias en los modos en los que se ha entendido, que cada uno de ellos obliga a materializar este derecho; oscilando entre unos más tímidos (publicación de las sentencias judiciales) y otros más avanzados (creación de comisiones de la verdad e instituciones análogas). A nuestro juicio, aquellos que han afirmado que estos últimos mecanismos son los que realmente permiten concretar el derecho a la verdad colectivo, han mantenido y mantienen la posición correcta.



## **ANEXOS**





## I. BIBLIOGRAFÍA

### 1. MONOGRAFÍAS

ALLEN, P.J., LAHAI, S.B.S., O'CONNELL, J., *Sierra Leone's Truth and Reconciliation Commission and Special Court: A citizen's handbook*, Nueva York, International Center for Transitional Justice – National Forum for Human Rights, 2003.

AMIN, A.H., *India Pakistan Wars-1947 to 1971- A Strategic and Operational Analysis*, Strategicus and Tacticus, 2010.

ARENDT, H., *Eichmann en Jerusalén*, Barcelona, Debolsillo, 9ª ed., 2013.

BARAHONA DE BRITO, A., *Human Rights and Democratization in Latin America, Uruguay and Chile*, Nueva York, Oxford University Press, 1997.

BEATTIE, A., *Playing Politics with History: The Bundestag Inquiries into East Germany*, Nueva York-Oxford, Berghahn Books, 2008.

BOBBIO, N., *Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política*, México DF, Fondo cultural de economía-Brevarios, 1996.

BURGORGUE-LARSEN, L., ÚBEDA DE TORRES, A., *Las decisiones básicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y jurisprudencia*, Pamplona, Civitas-Thompson Reuters, 2009.

BUTLER, G., MACCOBY, S., *The Development of International Law*, Londres, Longmans, Greens and Co., 1928.

CABRERA OROZCO, F., PASUY MITICANOY, L.A., *Los archivos y el deber de memoria del Estado colombiano en casos de violación de derechos humanos en el conflicto armado. La construcción del contexto y metodología para el estudio del caso. Tomo I*, Bogotá, Secretaría General - Alcaldía de Bogotá, 2011.

CANÇADO TRINDADE, A.A., *State Responsibility in Cases of Massacres: Contemporary Advances in International Justice. Inaugural Address as Honorary Professor to the Chair in 'International and Regional Human Rights Courts' delivered*

on 10 November 2011 at Utrecht University, Utrecht, Netherlands Institute of Human Rights (SIM) – Universiteit Utrecht, 2011.

CARRILLO SALCEDO, J.A., *Dignidad frente a barbarie. La Declaración Universal de Derechos Humanos, cincuenta años después*, Madrid, Minima Trotta, 1999.

\_\_\_\_\_ *Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho internacional contemporáneo*, Madrid, Tecnos, 2ªed., 2001.

CASADEVALL, J. OVEY, C., WHITE, R., *The European Convention on Human Rights*, Oxford-Nueva York, 4ªed., Oxford University Press, 2006.

CASADO, M., LÓPEZ ORTEGA, J.J. (coords.), *Desapariciones Forzadas de niños en Europa y Latinoamérica. De lo conveniente de la ONU en las búsquedas a través del ADN*, Barcelona, Observatorio de Bioética y Derecho- Universidad de Barcelona, 2015.

CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: Hacia un modelo para el castigo de los crímenes del pasado a través de la experiencia latinoamericana*, Madrid, Ediciones Parthenon, 2007.

CHIGARA, B., *Legitimacy Deficit in Custom: A Deconstructionist Critique*, Aldershot, Ashgate, 2001.

CLOSA MONTERO, C., *Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States*, Madrid, Instituto de Políticas y Bienes Públicos – CSIC, 2008.

DEGAN, V.D., *Sources of International Law*, The Hague, Kluwer Law International, 1997.

DE LA CUESTA ARZAMENDI, J., *El delito de tortura*, Barcelona, Bosch, 1990.

DERRIDA, J., *Archive Fever: A Freudian Impression*, Chicago, The University Chicago Press, 1995.

DI QUAL, L., *Les effets des résolutions des Nations Unies*, Paris, Librairie Général de Droit et de Jurisprudence, 1967.

EPPEL, S., NDLELA, D., RAFTOPOULOS, B., RUPIYA, M., *Developing a Transformation Agenda for Zimbabwe*, Ciudad del Cabo, Idasa's States in Transition Observatory- Zimbabwe Institute, 2009.

ESPINOZA CUEVAS, V., ORTIZ ROJAS, M.L., ROJAS BAEZA, P., *Comisiones de la Verdad, ¿un camino incierto? Estudio comparativo de Comisiones de la Verdad en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Sudáfrica desde las víctimas y las organizaciones de derechos humanos*, Santiago de Chile, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - Asociación para la Prevención de la Tortura, 2003.

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., JIMÉNEZ GARCÍA, F., *Terrorismo y Derechos Humanos. Una aproximación desde el Derecho Internacional*, Madrid, Dykinson, 2005.

FERRÁNDIZ, F., *El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil*, Barcelona, Anthropos, 2014.

FREEMAN, M., *Truth Commissions and Procedural Fairness*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

GARRETÓN KREFT, F., GONZÁLEZ LE SAUX, M., LAUZÁN, S., *Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina*, Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos, 2011.

GARCÉS, M., NICHOLLS, N., *Para una Historia de los DD.HH en Chile*, Santiago de Chile, LOM Ediciones – Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, 2005.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, R., *El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanos y degradantes*, Granada, Editorial Universidad de Granada, 1998.

GONZÁLEZ QUINTANA, A., *Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos (1995) sobre gestión de los archivos de los servicios de seguridad del estado de los desaparecidos regímenes represivos*, París, Consejo Internacional de Archivos, 2008.

GONZÁLEZ, E., VARNEY, H. (ed.), *En busca de la verdad. Elementos para la creación de una comisión de la verdad*, Brasilia-Nueva York, Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil-Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2013.

GRABENWARTER, C., *European Convention on Human Rights. Commentary*, Munich, Verlag C.H. Beck oHG, 2014.

GRAYBILL, L.S., *Truth and reconciliation in South Africa: miracle or model*, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2002.

GREEN, L.C., *The contemporary law of armed conflict*, Manchester, 3ªed., Manchester University Press, 2008.

GRIMA LIZANDRA, V., *Los delitos de tortura y de tratos degradantes por funcionarios públicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998.

HANSKI, R., y SCHEIN M., *Leading Cases of the Human Rights Committee*, Turku, 2ªed, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, 2007.

HAYNER, P., *Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad*. México, FCE, 2008.

\_\_\_\_\_ *Unspeakable truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, Nueva York, Routledge, 2ª ed., 2011.

IBÁÑEZ NAJAR, J.E., *Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad*, Madrid, Instituto Berg, 2014.

INGELSE, C., *The United Nations Committee Against Torture: An Assessment*, Dordrecht, Kluwer Law International, 2001.

KRITZ, N.J. (ed.), *Transitional Justice: how emerging democracies reckon with former regimes. Vol.I, II & III*, Washington, United State Institute of Peace, 1995, p. 241.

LOGIE, A., *The Answers. North Korea: How do you solve a problem like North Korea*, Singapur, Marshall Cavendish International, 2012.

LOUCAIDES, L.G., *The European Convention on Human Rights. Collected Essays*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

LUQUE RÁZURI, M., *Acceso a la información pública documental y regulación de la información secreta*, Lima, ARA Editores, 2002.

MEDINA QUIROGA, C., *The Battle of Human Rights. Gross, Systematic Violations and the Inter-American System*, Londres, Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

MINOW, M., *Between Vengeance and forgiveness*, Boston, Bacon Press Books, 1998.

NOWAK, M., *U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary*, Kehl, N.P. Engels, 2ªed., 2005.

NOWAK, M., McARTHUR, E., *The United Nations Convention against Torture. A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

OLLÉ SESÉ, M., *Justicia universal para crímenes internacionales*, Madrid, La Ley, 2008.

OTT, L., *Enforced Disappearance in International Law*, Cambridge, Intersentia, 2011.

PELAYO MOLLER, C.M., *La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas*, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2012.

PERRY, J., SAYNDEE, T.D., *African Truth Commission and Transitional Justice*, Londres, Lexington Books, 2015.

PILLAY, S., SCANLON, H., *Peace versus Justice? Truth and Reconciliation Commission and War Crimes in Africa*, Ciudad del Cabo, Center for Conflits Resolutions, 2007.

PINTO-JAYAWARDENA, K. (ed.), *A Legacy to remember; Sri Lanka's commission of inquiry 1963-2002. A reference guide to commission reports with a Tabulated list of recommendations*, Homagama, Law and Society Trust, 2010.

POPOKIN, M., *Peace without justice: obstacles to building the rule of law in El Salvador*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2000.

PRASAD PANT, D., WASTI, P., LAMA, N. (eds.), *Profile of Disappeared Persons – Profile of the persons subjected to enforced disappearances during armed conflict in Nepal*, Kathmandu, Informal Sector Service Center, 2011.

PEREZ SOLLA, M.F., *Enforced Disappearance in International Human Rights*, Carolina del Norte, McFarland & Company Publishers, 2006.

ROBERTSON G., *Crimes Against Humanity*, Nueva York, New York New Press, 4ªed., 2013.

ROTH-ARRIAZA, N., *Impunity and Human Rights in International Law and Practice*, Nueva York, Oxford University Press, 1995.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., *Derecho internacional y Crisis Internacionales*, Madrid, Iustel, 2005.

SANDOZ, Y., SWINARSKI, C., ZIMMERMANN, B., (eds), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Ginebra, Martinus Nijhoff Publishers – Comité Internacional de la Cruz Roja, 1987.

SANFORD, V., *Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala*, Nueva York, Palgrave MacMillan, 2003.

SCOVAZZI, T. y CITRONI, G., *The Struggle against Enforcement Disappearance and the 2007 United Nations Convention*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

STAN, L., *Transitional Justice in Post-Communist Romania: The Politics of Memory*, Nueva York, Cambridge University Press, 2013.

STAN, L., NEDELSKY, N., *Encyclopedia of Transitional Justice. Volume 3*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

TRIFFTERER, O., (ed), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: 'ObserverS', Notes, Article by Article*, Baden, Nomos, 1991.

TUTU, D., *No future without forgiveness*, Nueva York, Doubleday, 1999.

QUINN, J.R., *The politics of acknowledgement: truth commission in Uganda and Haiti*, Vancouver, University of British Columbia Press, 2010.

VAN DIJK, P., VAN HOOFF, F., VAN RIJN, A., ZWAAK, L., (eds.), *Theory and Practice of the ECHR*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 4ªed., 2006.

VERBITSKY, H., *El vuelo*, Buenos Aires, Editorial Planeta Argentina, 2ª ed., 1995.

VILLANUEVA, E., *Derecho a la información pública en Latinoamérica*, México DF, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

WILSON, R.A., *The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa. Legitimizing the Post – Apartheid State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

## **2. OBRAS GENERALES**

BOU FRANCH, V., CASTILLO DAUDÍ, M., *Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.

CARRILLO SALCEDO, J.A., “Cours général de droit international public”, *R. des C.*, núm. 257, 1996.

FÁUNDEZ LEDESMA, H., *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales*, San José, Instituto Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 3ªed, 2004.

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., (dir.), *Derecho internacional de los Derechos Humanos*, Madrid, 4ªed., Dilex, 2011.

GONZALEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Curso de Derecho internacional Público*, Navarra, Thomson-Civitas, 4ªed., 2008.



HENCKAERTS, J.M., DOWALD-BECK, L., *El Derecho internacional humanitario consuetudinario, Práctica: vol.II*, Cambridge, Comité Internacional de la Cruz Roja – Cambridge University Press, 2005.

HIGGINS, R., *Problems and Process: International Law and How We Use It*, Oxford, Oxford University Press, 1994.

JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., “International Law in the past third of a century”, *Recueil de Cours*, vol. 159, 1978.

KELLER, H., ULFSTEIN, G., *UN Human Rights Treaty Bodies. Law and Legitimacy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

MAKARCZYK, J. (ed.), *Theory of International Law at the threshold of the 21th century. Essays in honour of Krysztof Skubiszewski*, The Hague, Kluwer Law International, 1996.

MERON, T., “International Law in the age of human rights”, *Recueil des Cours*, vol. 301, 2003.

PASTOR RIDRUEJO, J.A., *Curso de Derecho internacional público y organizaciones internacionales*, Madrid, Tecnos, 19ª ed., 2015.

REMIRO BROTONS, A. *et al.*, *Derecho internacional*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.

VILLÁN DURÁN, C., *Curso de Derecho internacional de los derechos humanos*, Madrid, Trotta, 2002.

### 3. ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS ESPECIALIZADAS

ABRAMOVIC V., COURTIS, C., “El acceso a la información como derecho”, *Anuario de Derecho a la Comunicación*, vol.1, 2000, pp. 137-159.

ABREGÚ, M., “Tutela judicial del derecho a la verdad en Argentina”, *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, vol.24, 1996, pp. 11 – 47.

AGYEMANG ATTAFUAH, K., “An overview of Ghana’s National Reconciliation Commission and its relationship with the courts”, *Criminal Law Forum*, vol. 15, 2004, núm.1, pp. 125-134.

AIMÉ VALLAT, F., “The competence of the United Nations General Assembly”, *R. des C.*, núm.97, 1959.

ANDERSON, K., “How effective is the *International Convention for the protection of all persons from enforced disappearance* likely to be in holding individuals criminally responsible for acts of enforced disappearance”, *Melbourne Journal of International Law*, vol.7, 2006, núm.2, pp.245-277.

ASMAL, K., “International Law and Practice: Dealing With the Past in the South African Experience”, *American University International Law Review*, vol.15, 2000, núm.6, pp. 1211 – 1230.

AYLWIN, P., “La Comisión chilena sobre la Verdad y la Reparación”, *Ius et Praxis*, vol. 13, 2007, núm. 1, pp. 425 – 434.

AMAYA VILLARREAL, A F., “Efecto reflejo: La práctica judicial en relación con el derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, *International Law. Revista Colombiana de Derecho internacional*, núm.10, 2007, pp.131-152.

ANDREU GUZMÁN, F., “The Draft International Convention on the Protection of All Persons from Forced Disappearance”, *The Review of the ICJ - Impunity, crimes against humanity and forced disappearance*, núm.62 – 63, 2001, pp. 1-22.

ARDILA MUÑOZ, D., “Las comisiones de la verdad en América Latina y South África: una comparación”, *Instituto de estudios para el desarrollo y la paz*. Versión electrónica disponible en: [http://www.setianworks.net/indepazHome/index.php?view=article&id=147%3Alas-comisiones-de-la-verdad-en-america-latina-y-south-africa-una-comparacion&option=com\\_content&Itemid=74](http://www.setianworks.net/indepazHome/index.php?view=article&id=147%3Alas-comisiones-de-la-verdad-en-america-latina-y-south-africa-una-comparacion&option=com_content&Itemid=74)

BERKELEY, B., “The ‘New’ South Africa. Violence Works”, *World Policy Journal*, vol.13, 1996, núm.4, pp. 73-80.

BRODY, R., GONZALEZ, F., “Nunca Más: An Analysis of International Instruments on ‘Disappearance’”, *Human Rights Quarterly*, vol. 19, 1997, núm.2, pp. 365-405.

BONET PÉREZ, J., ALIJA FERNANDEZ R. A., “Impunidad, derechos humanos y justicia transicional”, *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos*, núm. 53, 2009.

BUERGHENTAL, T., “La Comisión de la Verdad para El Salvador”, *Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Estudios Especializados en Derechos Humanos*, vol. 1, 1996, pp. 11-62.

BURGES, P., “Justice and Reconciliation in East Timor. The Relationship between the Commission for Reception, Truth and Reconciliation and the Courts”, *Criminal Law Forum*, vol. 15, 2004, núm.1, pp. 135-158.

BURTON, M., “Custodians of Memory: South Africa's Truth and Reconciliation Commission”, *International Journal of Legal Information*, vol. 32, 2004, pp.417 – 425.

CAMACHO PADILLA, F., “La construcción histórica de la represión en Argentina y Chile: las Comisiones de la Verdad como instrumento de narración oficial”, *Revista de Historia Iberoamericana*, vol. 7, 2014, núm.1, pp. 35 – 74.

CARNEIRO LEÃO, A.M., “La Comisión de la Verdad en la trayectoria de la justicia transicional en Brasil”, *Revista Derecho del Estado*, vol. 30, 2013, pp. 55 -92.

CARVER, R., “Called to Account: How African Governments Investigate Human Rights Violations”, *African Affairs*, vol.89, 1990, núm. 156, pp. 391 – 415.

CASSEL, D., “Lecciones de las Américas: Lineamientos para una Respuesta Internacional ante la Amnistía de Atrocidades”, *Revista IIDH*, vol.24, 1996, pp. 277-323.

CHAPMAN, A.R., BALL, P., “The Truth of Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa, and Guatemala”, *Human Rights Quarterly*, vol. 23, 2001, pp. 1-43.

CHEVALIER-WATTS, J., “Effective Investigations under Article 2 of the European Convention on Human Rights: Securing the Right to Life or an Onerous Burden on a State?”, *The European Journal of International Law*, vol. 21, 2010, n°. 3, pp.701-721.

CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “El Comité contra la Desaparición Forzada: primeros pasos, retos y solución”, *Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional*, vol. 21, 2013, pp. 215-240.

---

“La competencia *ratione temporis* del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la obligación de investigar (artículo 2. Derecho a la vida). Teoría y práctica: de *Becker c. Bélgica* a *Canales Bermejo c. España*”, *Revista Española de Derecho internacional*, vol. 66, 2014, núm.1, pp. 126-158.

CHO, K., “Transitional Justice in Korea: Legally Copy With Past Wrongs After Democratization”, *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, vol. 16, 2007, núm. 3, pp. 579 – 611.

CIOBANU, M., “Criminalising the Past and Reconstructing Collective Memory: The Romanian Truth Commission”, *Europe-Asia Studies*, vol. 61, 2009, núm. 2, pp. 313-336.

CRAWFORD, J., “Chance, order, change: the course of International Law. General Course on Public International Law”, *Recueil Des Cours*, vol. 365, 2013.

CURBELO, N., “Comisión Verdad y Justicia de Ecuador”, *Ko’ãga Roñe’ëtã*, serie III, 1996, p.2. Disponible en: <http://www.derechos.org/koaga/xi/2/curbelo.html>

CUYA, E., “Las comisiones de la verdad en América Latina”, *Ko’ãga Roñe’ëtã*, vol.3, 1996.

CZAPLIJSKI, W., “Sources of International Law in the *Nicaragua Case*”, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 38, 1989, pp. 151-166.

DAVID, R., “Lustration Laws in Action: The Motives and Evaluation of Lustration Policy in the Czech Republic and Poland (1989-2001)”, *Law & Social Inquiry*, vol. 28, 2003, núm. 2, pp. 387-439.

DE HOLLANDA, C.B., “Human rights and political transition in South Africa: the case of the Truth and Reconciliation Commission”, *Brazilian Political Science Review*, vol.7, 2013, núm.1, pp. 8-30.

DINSTEIN, Y., “The interaction between customary law and treaties”, *Recueil des Cours*, vol. 322, 2006.

DEODHAR, N.S., “Recent developments in international organizations. First contentious case before the Inter-American Court of Human Rights”, *American University Journal of International Law Review*, vol.3, 1988, núm.283, pp. 283-297.

DOUGHERTY, B.K., “Searching for Answers: Sierra Leone's Truth & Reconciliation Commission”, *African Studies Quarterly*, vol. 8, 2004, núm. 1, pp. 39-56.

DYKMANN, K., “Impunity and the Right to the Truth in the Inter-American System of Human Rights”, *Iberoamericana*, vol.7, 2007, núm.26, pp. 45-66.

ENSALACO, M., “Truth Commissions for Chile and El Salvador: A Report and Assessment”, *Human Rights Quarterly*, vol. 16, 1994, núm. 4, pp.656-675.

ERRANDONEA, J., “Justicia transicional en Uruguay”, *Revista del Instituto Interamericano de Derechos humanos*, vol. 47, 2008, pp. 13-69.

FAJARDO ARTURO, L.A., “Elementos estructurales del derecho a la verdad”, *Civilizar*, vol. 12, 2012, pp. 15 – 33.

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., “Las víctimas y el Derecho Internacional”, *Anuario de Derecho Internacional*, vol. 25, 2009, pp. 3 – 66.

---

“La obligación de investigación efectiva en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: especial referencia a la práctica española”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, vol. 26, 2013, pp. 1 – 42.

FERNÁNDEZ PUYANA, D., “La noción de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco del Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas”, *American University International Law Review*, núm.21, 2005, pp. 101 – 148.

FORSYTHE, D.P., “The 1974 Diplomatic Conference on Humanitarian Law: some observations”, *American Journal of International Law*, vol.69, 1975, pp.77-91.

GACUK, J., “Dealing with Stasi Past”, *Deadlus*, vol.123, 1994, núm.1, pp. 277-284.

GALELLA, P., “La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Un gran paso hacia una mayor protección en la lucha contra este fenómeno”, *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, vol. 21, 2010, pp. 77-100.

GAJA, G., “The protection of general interests in the international community. General Course on Public International Law”, *Recueil Des Cours*, vol. 364, 2012.

GLATTE, S., “Judging the (east) German Past. A Critical Review of Transitional Justice in Post-Communist Germany”, *Oxford Transitional Justice Research*, vol.5, 2011.

GÓMEZ CAMACHO, J.J., “La desaparición forzada de personas: avances en el Derecho internacional”, *Revista Mexicana de Política Exterior*, núm.66, 2007, pp. 27-49.

GONZÁLEZ CUEVA, E., “The contribution of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission to prosecutions”, *Criminal Law Forum*, vol. 15, 2004, núm.1, pp. 55-66.

GONZÁLEZ MORALES, F., “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros aspectos”, *Anuario de Derechos Humanos*, vol. 5, pp. 35 – 57.

GRODSKY, B., "Beyond Lustration. Truth-Seeking Efforts in the Post-Communist Space", *Taiwan Journal of Democracy*, vol. 5, 2009, núm. 2, pp. 21-43.

\_\_\_\_\_, "Justice Without Transition: Truth Commissions in the Context of Repressive Rule", *Human Rights Review*, vol. 9, 2008, núm.3, pp. 281-297.

HAZAN, P., "The nature of sanctions: the case of Morocco's Equity and Reconciliation Commission", *International Review of the Red Cross*, vol. 90, 2008, núm. 870, pp. 399-407.

HATCHER, R., "Truth and forgetting in Guatemala: an examination of *Memoria del Silencio* and *Nunca Más*", *Canadian Journal of Latin American & Caribbean Studies*, vol. 34, 2009, núm. 67, pp. 131-162.

HAYNER, P., "Fifteen Truth Commissions – 1974 to 1994: A Comparative Study", *Human Rights Quarterly*, vol. 16, 1994, núm.4, pp. 597-655.

HOGEA, A., "Coming to Terms with the Communist Past in Romania: An Analysis of the Political and Media Discourse Concerning the Tismăneanu Report", *Studies of Transition States and Societies*, vol. 2, 2010, núm.1, pp. 16 – 30.

IGNATIEFF, M., "Articles of faith", *Index on Censorship*, vol. 25, 1996, núm. 5, pp. 110-122.

ILIC, D., "The Yugoslav truth and reconciliation commission. Overcoming cognitive blocks", *Eurozine*, 2004, p.8. Disponible en: <http://www.eurozine.com/pdf/2004-04-23-ilic-en.pdf>

JEFFERY, R., "Enduring tensions: transitional justice in the Solomon Islands", *The Pacific Review*, vol. 26, 2013, núm. 2, pp. 153-175.

JENKINS, C., "A truth commission for East Timor: Lesson from South Africa", *Journal of Conflict and Security Law*, vol. 7, 2002, núm.2, pp.233-251.

JOWDY, G., "Truth Commissions in El Salvador and Guatemala: A proposal for truth in Guatemala", *Boston College Third World Law Journal*, vol. 17, 1997, pp. 285 – 330.

KIM, H., “Seeking Truth after 50 Years: The National Committee for Investigation of the Truth about the Jeju 4.3 Events”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol. 3, 2009, núm.3, pp. 406–423.

LAPLANTE, L.J., “The Peruvian Truth Commission’s Historical Memory Project: Empowering Truth-Tellers to Confront Truth Deniers”, *Journal of Human Rights*, vol. 6, 2007, pp. 433-452.

LAPLANTE, L.J., THEIDON, K., “Transitional justice in times of conflict: Colombia’s Ley de Justicia y Paz”, *Michigan Journal of International Law*, vol. 28, 2006, pp.49-108.

LEE, L., “The Law of the Sea Convention and Third States”, *The American Journal of International Law*, vol. 77, 1983, núm. 3, pp. 541 – 568.

LOISEAU, V., “El derecho de acceso a la información pública gubernamental en la legislación de México, Ecuador, Suecia y Francia”, *Biblioteca Nacional del Congreso de Chile. Departamento de Estudios, extensión y publicaciones*, núm. 302, 2004.

LÓPEZ MARTÍN, A.G., “Los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de Derechos Humanos en Derecho internacional”, *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, vol. 47, 2014, pp. 133-162.

\_\_\_\_\_, “Las víctimas del abuso de poder en Derecho Internacional: una aproximación a su estatuto jurídico”, *Revista General de Derecho Público Comparado*, vol. 14, 2014, pp. 1 – 26.

LÓPEZ ULLA, J.M., “El ‘derecho a la verdad’ en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, *Persona y Derecho*, vol. 69, 2014, pp. 127-169.

LUDWIN KING, E. B., “A Conflict of Interests: Privacy, Truth, and Compulsory DNA Testing for Argentina’s Children of the Disappeared”, *Cornell International Law Journal*, vol. 44, 2011, núm. 535, pp. 535-568.

MANGA FOMBAD, C., “Transitional Justice in Africa: The Experience with Truth Commissions”, *Hauser Global Law School Program, retrieved*, vol. 21, 2012.



Publicación electrónica disponible en:  
[http://www.nyulawglobal.org/globalex/Africa\\_Truth\\_Commissions1.html](http://www.nyulawglobal.org/globalex/Africa_Truth_Commissions1.html)

MCCARGO, D., “Thailand's National Reconciliation Commission: a flawed response to the Southern Conflict”, *Global Change, Peace & Security*, vol.22, 2010, núm. 1, pp. 75-91.

MCCARGO, D., THABCHUMPON, N., “Wreck/Conciliation? The Politics of Truth Commissions in Thailand”, *Journal of East Asian Studies*, vol. 14, 2014, pp. 377-404.

MCCROY, S., “The International Convention for the Protection of all Person from Enforcement Disappearance”, *Human Rights Law Review*, núm.7, 2007, pp. 545-566.

MEIJERS, H., “How Is International Law Made? – The Stage of Growth of International Law and the Use of Its Customary Rules”, *Netherlands Yearbook of International Law*, vol. 9, 1978, núm. 3, pp. 3-26.

MICHELINI, F., “El largo camino a la verdad”, *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, vol. 24, 1996, pp. 157-172.

MUZZOPAPPA, E., VILLALTA, C., “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”, *Revista Colombiana de Antropología*, vol 47, 2011, núm.1, pp. 13-42.

NAQVI, Y., “El derecho a la verdad en el Derecho internacional: ¿realidad o ficción?”, *International Review of the Red Cross*, núm.862, 2006, pp. 161-193.

NEWMAN – PONT, V., “Falso o verdadero (¿El derecho a la verdad es norma imperativa internacional?)”, *International Law: Revista Colombiana de Derecho internacional*, vol. 14, 2009, pp. 43-69.

OBEL HANSEN, T., “Transitional Justice in Kenya? An Assessment of the Accountability Process in Light of Domestic and Security Concerns”, *California Western International Law Journal*, vol. 42, 2011, núm. 1, pp. 1 – 36.

PASIPANODYA, T., “A Deeper Justice: Economic and Social Justice as Transitional Justice in Nepal”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol. 2, 2008, pp. 378-397.

PASQUALUCCI, J. M., “The whole truth and nothing but the truth: truth commissions, impunity and inter inter-American human right system”, *Boston University International Law Journal*, vol.12, 1994, núm.321, pp.321-370.

PALMER, N.D., “India in 1975: Democracy in Eclipse”, *Asian Survey*, vol. 16, 1976, núm.2, pp. 95-110.

PASTOR, D., “¿Procesos penales solo para conocer la verdad? La experiencia argentina”, *Revista Jueces para la Democracia*, vol.59, 2007, pp. 95-127.

PASTOR RIDRUEJO, J. A., “Sobre la universalidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, *Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época*, vol. 12, 2011, pp. 2 67-286

PEJIC, J., “The Yugoslav Truth and Reconciliation Commission: A Shaky Start”, *Fordham International Law Journal*, vol.15, 2001, núm.1, pp. 1 – 22.

PETTAI, E.C., “Negotiating history for reconciliation: a comparative evaluation of the Baltic presidential commissions”, *Europe – Asia Estudios*, vol.67, 2015, núm 7, pp. 1079-1101.

POPKIN, M., ROTH – ARRIAZA, N., “Truth as Justice: Investigatory Commissions in Latin America”, *Law & social inquiry*, vol. 20, 1995, núm.1, pp. 79-116.

QUINN, J.R., “Constraints: The Un-Doing of the Ugandan Truth Commission”, *Human Rights Quarterly*, vol.26, 2004, pp. 401-427.

REMÓN QUISPE, F., “Las normas de *ius cogens*: ausencia de catálogo”, *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. 28, 2012, pp. 143-183.

---

“Haiti's Failed Truth Commission: Lessons in Transitional Justice”, *Journal of Human Rights*, vol. 8, 2009, núm. 3, pp. 265-281.

RAMOS, A., MUZOPAPPA, E., “La relación memoria/archivo entre sentidos enmarcados y sentidos inducidos”, *Actas del Tercer Congreso Latinoamericano de Antropología ALA*, Santiago de Chile, 2012.

RIMASSA ISENSEE, C., MUÑOZ SEVERINO, J., “El derecho (fundamental) de acceso a la información pública como principio (de transparencia). Concepto, bloque de constitucionalidad y test de proporcionalidad”, *Derecho y Justicia*, núm. 3, 2013, pp. 45-72.

SCHABAS, W.A., “Amnesty, the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission and the Special Court for Sierra Leone”, *University of California Davis Journal of International Law & Policy*, vol. 11, 2004, pp. 145 – 169.

\_\_\_\_\_ “A synergistic relationship: the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission and the Special Court for Sierra Leone”, *Criminal Law Forum* vol. 15, 2004, núm. 1, pp. 3-54.

SCHWEDERSKY, L., “Memory Politics in Guatemala: Linking the Battle over Truth with the Pursuit of Justice”, *Oxford Transitional Justice Research Working Paper Series: Debates*, febrero 2012.

SNELLEN, M., “Apartheid: Checks and Changes”, *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, vol. 43, 1967, núm. 2, pp. 293-306.

STAN, L., “The Vanishing Truth? Politics and Memory in Post Communist Europe”, *East European Quarterly*, vol.40, 2006, núm.4, pp. 383-408.

\_\_\_\_\_ “Truth Commissions in Post-Communism: The Overlooked Solution?”, *The Open Political Science Journal*, vol.2, 2009, pp. 1 – 13.

TAE – HOOM, K., “Reasons to Record and Remember North Korea’s Tragic Human Rights Situation”, *Korea Focus*, vol. 20, 2012, núm. 5.

TAPPATÁ DE VALDEZ, P., “Comisiones de la Verdad: un instrumento de las transiciones a la democracia”, *CPA ESTUDIOS / WORKING PAPERS*, vol. 6, 2003.

TAYLER, W., “Antecedentes del proceso de elaboración del Proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, *Revista de la Comisión Internacional de Juristas*, núm.62 y 63, pp. 63-72.

TEJAN-COLE, A., “The Complementary and Conflicting Relationship between the Special Court for Sierra Leone and the Truth and Reconciliation Commission”, *Yale Human Rights and Development Law Journal*, vol. 6, 2003, pp. 139-160.

TOMUSCHAT, C., “Clarification Commission in Guatemala”, *Human Rights Quarterly*, vol. 23, 2001, núm. 2, pp. 233-258.

UPRINMY YEPES, R., SAFFON SANÍN, M.P., “Usos y Abusos de la Justicia Transicional en Colombia”, *Anuario de Derechos Humanos*, núm. 4, 2008, pp. 165 – 195.

VAN PACHTENBEKE, A., HAECK, Y., “From de Becker to Varnava: the state of continuing situations in the Strasbourg case law”, *European Human Rights Law Review*, núm.1, 2010, pp. 47-58.

VANDERGINSTE, S., “Transitional Justice for Burundi: A Long and Winding Road”, *Workshop 10 – Alternative Approaches to Dealing with the Past*, 2007.

VORA, J.A., VORA, E., “The effectiveness of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Perceptions of Xhosa, Africaner and English South Africans”, *Journal of Black Studies*, vol. 34, 2004, núm. 3, pp. 301-322.

VRACKX, A., “A long road towards universal protection against enforced disappearance”, *International Peace Information Service*, 2006, pp.1-19. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/265422157\\_A\\_long\\_road\\_towards\\_universal\\_protection\\_against\\_enforced\\_disappearance](https://www.researchgate.net/publication/265422157_A_long_road_towards_universal_protection_against_enforced_disappearance)

WEIGEND, T., “Is the criminal process about the truth?: A German perspective”, *Harvard Journal of Law and Public Policy*, vol. 26, 2003, pp. 157 – 173.

WIERDA, M., HAYNER, P., VAN ZYL, P., “Exploring the Relationship between the Special Court and the Truth and Reconciliation Commission in Sierra Leone”,

*International Center for Transitional Justice*, 2002. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-SierraLeone-Court-TRC-2002-English.pdf>

WOLMAN, A., “The evolution of truth commissions in South Korea”, *Oxford Transitional Justice Research Working Paper Series*, 2012. Disponible en: <https://oxfordtransitionaljustice.wordpress.com/tag/working-paper-series/>

\_\_\_\_\_ “South Korea's response to human rights abuses in North Korea : an analysis of policy options”, *Asia Pacific Issues*, núm.10, 2013.

YUSUF, H.O., “Travails of Truth: Achieving Justice for Victims of Impunity in Nigeria”, *International Journal of Transitional Justice*, vol. 1, 2007, núm. 2, pp. 268-286.

ZALAUQUETT, J., “Derechos humanos y limitaciones políticas en las transiciones democráticas del cono sur”, *Colección Estudios Cieplan*, núm.33, 1991, pp. 147-186.

ZAMOC, L., “Introductory note”, *Chelmino Extermination Camp*, University of San Diego. Disponible en: <http://pages.ucsd.edu/~lزامosc/gchelmino.html>

#### **4. CONTRIBUCIONES EN OBRAS COLECTIVAS**

ALFONSO, C., “Paraguay”, en AMBOS K., MALARINO, E., ELSNER, G. (eds.), *Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Berlín – Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2009.

AMBOS, K., BÖHM, M.L., “Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Tribunal tímido y tribunal audaz?”, en STEINER, C., *Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional*, Berlín, Konrad Adenauer Stiftung e.V., 2011.

AMÉS COBIAN, R., “Violencia, verdad... ¿Reconciliación en el Perú?”, en PACHECO OREAMONU, G., ACEVEDO NAREA, L., GALLI, G., *Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*, San José, Instituto

Interamericano de Derechos Humanos – Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2005.

ANGOITIA GOROSTIAGA, V., LASAGABARTE, I., “Artículo 2. Derecho a la vida”, en LASAGABASTER HERRARTE, I. (dir.), *Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático*, Navarra, 2ª ed., Civitas, 2009.

APONTE CARDONA, A., “Colombia”, en AMBOS K., MALARINO, E., ELSNER, G. (eds.), *Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Berlín – Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2009.

BAIK, T – U., “Fairness in transitional justice initiatives: the case of South Korea”, *Buffalo Human Rights Law Review*, vol. 19, 2012, pp. 169 – 191.

BARAHONA DE BRITTO, A., “Introduction”, en BARAHONA DE BRITTO, A., GONZALEZ ENRIQUEZ, C., AGUILAR, P., (eds), *Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

BEATTIE, A.H., “Post – Communist Truth Commissions: Between Transitional Justice and the Politics of History”, en STAN, L., NEDELSKY, N. (ed.), *Post – Communist Transitional Justice*, Nueva York, Cambridge University Press, 2015.

CARBONELL, M., “Deber de publicidad del Estado”, en VILLANUEVA, E. (coord.), *Diccionario de Derecho de la Información*, México DF, Porrúa Hermanos – Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.

CARLOTTO, E., “Niños desaparecidos por motivos políticos en la república Argentina (1976-1983). *La labor de abuelas de Plaza de Mayo*”, en MÉNDEZ, J., ABREGÚ, M., MARIEZCURRENA, J., *Verdad y Justicia. Homenaje a Emilio F. Mignone*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001.

CARNERERO CASTILLA, R., “Las normas consuetudinarias internacionales”, en LÓPEZ MARTÍN, A.G. (ed.), *Derecho internacional Público*, 3ª ed., Dilex, Madrid, 2015.

CASSEL, D., “La lucha contra la impunidad ante el sistema interamericano de derechos humanos”, en MÉNDEZ, J., ABREGÚ, M., MARIEZCURRENA, J., *Verdad y Justicia*.

*Homenaje a Emilio F. Mignone*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001.

CERNA, C., “The Interamerican Commission on Human Rights: its Organization and Examination of Petitions and Communications”, en HARRIS D., LIVINGSTONE S., (eds), *The Inter-American System of Human Rights*, Nueva York, Clarendon Press-Oxford, 1998.

CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “La obligación internacional del Estado de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado”, en RIPOL CARULLA, C., VILLÁN DURÁN, C., (dirs.), *Justicia de transición. El caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, 2011.

COSTA PINTO, A., “Settling Accounts with the Past in a Troubled Transition to Democracy: The Portuguese Case”, en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR, P., GONZÁLEZ – ENRÍQUEZ, C., *The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratizing Societies*, Nueva York, Oxford University Press, 2001.

DE GREIFF, P., “Justice and Reparations”, en DE GREIFF, P., (ed.), *The Handbook of reparations*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press-International Center for Transitional Justice, 2006.

\_\_\_\_\_ “Truth telling and the rule of law”, en BORER, T.A. (ed.), *Telling the truths: Truth telling and peace building in post-conflict societies*, Notre Dame, Notre Dame University Press, 2006.

DE LA CUESTA ARZAMENDI, J., “Torturas y otros atentados contra la integridad moral” *Harlax*, núm.26, 1998, pp. 40-116.

DONG – CHOON, K., “Korea’s Truth and Reconciliation Commission: An Overview and Assessment”, *Buffalo Human Rights Law Review*, vol. 19, 2012, pp. 97 – 124.

ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los Derechos Humanos (I)”, en DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones de Derecho internacional Público*, Madrid, Tecnos, 18.<sup>a</sup> ed., 2013.

FALEH PÉREZ, C., “La obligación internacional del Estado de prevenir e investigar los casos de desaparición forzada o involuntaria de personas”, RIPOL CARULLA, C., VILLÁN DURÁN, C., (dirs.), *Justicia de transición. El caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, 2011.

FALK, R., “Reparations, international law and global justice: a new frontier”, en DE GREIFF, P. (ed.), *The Handbook of Reparations*, Oxford – Nueva York, Oxford University Press, 2006.

FILLIPINI, L., MARGARRELL, L., “Instituciones de la justicia de transición y contexto político”, en RETTBERG, A. (ed.), *Entre el perdón y el paredón. Preguntas y dilemas de la justicia transicional*, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2005.

GALAIN PALERMO, P., “Relaciones entre el ‘derecho a la verdad’ y el proceso penal. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en STEINER, C., (ed.) *Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional*, Berlín, Konrad Adenauer Stiftung e.V., 2011.

GARCÍA RAMÍREZ, S., “Reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, en VV.AA, *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Memoria del Seminario*, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2ªed., 2003, Tomo I.

GARIBIAN, S., “Derecho a la verdad. El caso argentino”, en RIPOL CARULLA, C., VILLÁN DURÁN, C., (dirs.), *Justicia de transición. El caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, 2011.

\_\_\_\_\_ “Buscar a los muertos entre los vivos: dar cuerpo a los desaparecidos de la dictadura argentina por el Derecho”, en ANSTETT, E., DREYFUS, J.M., GARIBIAN, S. (dir.), *Cadáveres impensables, cadáveres impensados. El tratamiento de los cuerpos en las violencias de masa y los genocidios*, Buenos Aires, Ediciones Mino y Davila, 2013.

GÓMEZ DEL PRADO, J.L., “The Extra-conventional protection of human rights”, en GÓMEZ ISA, F., y DE FEYTER, K., (eds.), *International Human Rights Law in a Global Context*, Bilbao, Universidad de Deusto, 2009.



GÓMEZ ISA, F., “Justicia, verdad y reparación en el proceso de desmovilización en Colombia”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.), *Colombia en su laberinto. Una mirada al conflicto*. Madrid, Catarata, 2008.

GONZÁLEZ, F., “Notas sobre memoria y derechos humanos”, en RICHARD, N. (ed.), *Políticas y estéticas de la memoria*, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2006.

GONZÁLEZ BRINGAS, A., “Abuelas-Madres de la Plaza de Mayo: la construcción social de la memoria”, en GÓMEZ ISA, F., (dir.) *El derecho a la memoria*, Bilbao, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. Universidad de Deusto, 2006.

GONZÁLEZ CUEVAS, E., “¿Hacia dónde van las comisiones de la verdad”, en REÁTEGUI, F. (ed.), *Justicia transicional. Manual para América Latina*, Brasilia – Nueva York, Centro Internacional para la Justicia de Transición, 2011.

GONZÁLEZ MORALES, F., “Censura judicial y libertad de expresión: sistema interamericano y derecho chileno”, en GONZÁLEZ IBÁÑEZ, J. (dir.), *Protección Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho*, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2009.

GROSESCU, R., “The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile”, en STAN, L., NEDELSKY, N. (eds.), *Encyclopedia of Transitional Justice. Volume 3*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

HAMBER, B., “The dilemma’s of reparations: in search of a process-driven approach”, en DE FEYTER, K., PARMENTIER, S., BOSSUYT, M., and LEMMENS, P. (eds.), *Out of the Ashes: Reparation for Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations*, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2005.

HOYOS, G., “Prólogo”, en HOYOS VÁSQUES, G., (ed.) *Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2007.

JIMÉNEZ PIERNAS, C., “La práctica internacional y sus medios de prueba (guía breve para abogados jóvenes)”, en JIMÉNEZ PIERNAS, C. (ed.), *Iniciación a la práctica en*

*Derecho internacional y Derecho comunitario europeo*, Madrid, Marcial Pons – Universidad de Alcalá, 2003.

LEONARDO, M., “Luces y sombras en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación”, en VV.AA., *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011.

LIRA, E., “Verdad, reparación y justicia: el pasado que sigue vivo en el presente”, en VV.AA., *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias de América Latina*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011.

LÓPEZ BARRERO, E., “La obligación del Estado de reparar las violaciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos. Las formas de reparación”, en RIPOL CARULLA, C., VILLÁN DURÁN, C. (dirs.), *Justicia de transición. El caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, 2011.

LÓPEZ MARTÍN A. G., “ El estatuto jurídico de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos en Derecho Internacional”, en FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C. (dir.), *Nuevos desarrollos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: los derechos de las víctimas*, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2014.

LUTZ, E., “Responses to Amnesties by the Inter-American System for the Protection of Human Rights”, en HARRIS D., LIVINGSTONE S., (eds), *The Inter-American System of Human Rights*, Nueva York, Clarendon Press-Oxford, 1998.

MACULÁN, E., “Los juicios por la verdad argentinos: ¿un laboratorio para la justicia penal internacional?”, en REQUENA, M. (ed.), *Luces y sombras de la seguridad internacional en los albores del siglo XXI*, Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2010.

MCGONIGLE LEYH, B., “The right to the truth in international criminal proceedings: an indeterminate concept from human rights law”, en HAECK, Y., MCGONIGLE LEYH, B., BURBANO-HERRERA, C., CONTRERAS, D., *The Realization of Human*

*Rights: When Theory Meets Practice. Studies in Honour of Leo Zwaak*, Utrecht, Intersentia, 2014, pp. 293-312.

MÉNDEZ, J., “The Human Right to Truth: Lessons Learned From Latin America Experiences With Truth Telling”, en BORER, T.A. (ed.), *Telling the Truths: Truth telling and peace building in post-conflict societies*, Notre Dame, Notre Dame University Press, 2006.

\_\_\_\_\_ “Responsabilización por los abusos del pasado”, en REÁTEGUI, F. (ed.), *Justicia transicional. Manual para América Latina*, Brasilia – Nueva York, Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil - Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011.

\_\_\_\_\_ “Derecho a la verdad frente a las graves violaciones de derechos humanos”, en ABREGÚ, M., y COURTIS, C., (coords.), *La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997.

\_\_\_\_\_ “Responsabilización por los abusos del pasado”, en GONZALEZ VOLIO, L., (ed.), *Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Ensayos en honor al profesor Fernando Volio Jiménez*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998.

MÜLLER, J.W., “Alemania del Este: incorporación, verdad corrompida y doble división”, en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR, P., y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (eds.), *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002.

NIKKEN, P., “El manejo del pasado y la cuestión de la impunidad en la solución de los conflictos armados de El Salvador y Guatemala”, en FIX-ZAMUDIO, H., *Liber Amicorum. Vol. I*, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998.

NOWAK, M., “The International Covenant on Civil and Political Rights”, en GÓMEZ ISA, F., y DE FEYTER, K., (eds.), *International Human Rights Law in a Global Context*, Bilbao, Universidad de Deusto, 2009.

\_\_\_\_\_ “Obligations of States to Prevent and Prohibit Torture in an Extraterritorial Perspective”. En GIBNEY, M., y SKOGLY, S., (eds) *Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations*, Pensilvania, University of Pennsylvania Press, 2010.

OLIVEIRA, A., GUEMBE, M.J., “La verdad, derecho de la sociedad”, en ABREGÚ, M., COURTIS, C., *La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997.

PÉREZ GONZÁLEZ, C., “Reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y lucha contra la impunidad en el espacio iberoamericano. A propósito de las leyes de amnistía”, en DEL VALLE GÁLVEZ, A., GONZÁLEZ GARCÍA, I., ACOSTA SÁNCHEZ M. A. (coords.), *La cumbre de Cádiz y las relaciones de España con América Latina. V Jornadas iberomericanas de Estudios internacionales de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales X Reunión de la Asociación de Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos Iberoamericanos 2012 Cádiz, 26 y 27 de octubre de 2012*, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2012. Disponible en: [http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/coleccion%20ED%2019\\_para%20web.pdf](http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/coleccion%20ED%2019_para%20web.pdf)

PETTAI, E.C., “Interaction between History and Memory: Historical Truth Commissions and Reconciliation”, en KATTAGO, S. (ed.), *The Ashgate Research Companion to Memory Studies*, Farnham, Asghate Publishing Limited, 2015.

PETIT DE GABRIEL, E.W., “El Derecho internacional Público: ¿necesidad o utopía?”, en RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J., PÉREZ VERA, E. (coords.), *Soberanía del Estado y Derecho internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. Tomo II*, Sevilla – Córdoba – Málaga, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2005.

PICKER, P., “Las sesiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica: perspectivas desde las víctimas”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.), *El derecho a la memoria*, Bilbao, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2006.

PIÑOL i RULL, J., “Artículo5”, en POLS RAFOLS, X., *La Declaración Universal de Derechos Humanos. Comentario artículo por artículo*, Barcelona, Icaria, 1998.

RIPOL CARULLA, S., “La respuesta desde el sistema universal de los derechos humanos a las violaciones graves de los derechos y libertades fundamentales”, en SOROETA LICERAS, J., *Cursos de Derechos Humanos de Donostia – San Sebastian. Volumen III*, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 2002.

ROCHA DE ASSIS MOURA, M.T., COELHO ZILLI, M.A., MONTECONRADO GHIDALEVICH, F.G., “Brasil”, en AMBOS K., MALARINO, E., ELSNER, G. (eds.), *Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Berlín – Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2009.

RODRÍGUEZ, L.M., “El archivo como dispositivo de poder”, en TIRADO AGOSTO, Y., (coord.), *Archivos e Investigación: la importancia de la investigación en los archivos y centros de información*, San Juan, Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED), 2011.

SACHS, A., “Different Kinds of Truth: The South African Truth and Reconciliation Commission”, en VV.AA (eds.), *Experiments with Truth. Transitional Justice and the Processes of Truth and Reconciliation*, Nueva Delhi, Documenta 11\_Platform2, 2001.

SANCINETTI, M.A., “Las leyes argentinas de impunidad y el artículo 29 de la Constitución de la nación argentina”, en ZUGALDÍA ESPINAR, J.M., LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., (coords.), *Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique Bacigalupo*, Madrid, Marcial Pons, vol.1, 2004.

SARKIN, J., “Integrating transitional justice and disarmament, demobilisation and reintegration. The need to achieve rehabilitation, reintegration and reconciliation for child soldiers and child victims of enforced disappearances”, en DERLUYN, I., MELS, C., PARMENTIER S., VANDENHOLE W., *Re-Member. Rehabilitation, Reintegration and Reconciliation of War-Affected Children*, Cambridge, Intersentia, 2012.

SCHIFFRIN, L., “Argentina”, en ARNOLD, J., SIMON, J.M., WOISCHNIK, J. (eds.), *Estado de Derecho y delincuencia de Estado en América Latina*, México DF,

Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006.

SCHOTSMANS, M., “Victim’s expectations, needs and perspectives after gross and systematic human rights violations”, en DE FEYTER, K., PARMENTIER, S., BOSSUYT, M., and LEMMENS, P. (eds.), *Out of the Ashes: Reparation for Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations*, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2005.

SHELTON, D., “The United Nations Principles and Guidelines on reparations: context and contents”, en DE FEYTER, K., PARMENTIER, S., BOSSUYT, M., and LEMMENS, P. (ed.), *Out of the Ashes: Reparation for Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations*, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2005.

SEUBA HERNÁNDEZ, X., “La naturaleza colectiva del derecho a la verdad y su impacto sobre la legitimación activa”, en RIPOL CARULLA, C., VILLÁN DURÁN, C., (dirs.), *Justicia de transición. El caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, 2011.

SIEDER, R., “Políticas de guerra, paz y memoria en América Latina”, en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR, P., y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (eds.), *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002.

SLYOMOVICS, S., “Torture, Recovery, and Truth in Moroco”, en VV.AA (eds.), *Experiments with Truth. Transitional Justice and the Processes of Truth and Reconciliation*, Nueva Delhi, Documenta 11\_Platform2, 2001.

STACEY, R.C., “The age of chivalry”, en HOWARD, M., *The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World*, New Haven CT, Yale University Press, 1994.

TAMARIT SUMALLA, J., “Justicia penal, justicia reparadora y comisiones de la verdad”, en TAMARIT SUMALLA, J., *Justicia de transición, justicia penal internacional y justicia universal*, Barcelona, Atelier, 2010.

TAPPATÁ DE VALDEZ, P., “El pasado, un tema central del presente. La búsqueda de verdad y justicia como construcción de una lógica democrática”, en PACHECO OREAMUNO, G., ACEVEDO NAREA, L., GALLI, G., *Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*, San José - Estocolmo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2005.

UPRINMY, R., SAFFON, M.P., “Verdad judicial y verdades extrajudiciales: la búsqueda de una complementariedad dinámica”, en HOYOS VÁSQUEZ, G., (ed.), *Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia*, Bogotá, Goethe-Institut e Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, 2007.

\_\_\_\_\_ “Derecho a la verdad: alcance y límites de la verdad judicial”, en UPRIMNY YEPES, R., (dir.), *Justicia transicional sin transición. Verdad, justicia y reparación para Colombia*, Bogotá, Ediciones Antropos, 2006.

\_\_\_\_\_ “La ley de ‘justicia y paz’: ¿una garantía de justicia y paz y de no repetición de las atrocidades”, en VV.AA, *¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia*, Bogotá, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2006.

URIBE DE HINCAPIÉ, M.T., “Esclarecimiento histórico y verdad jurídica: notas introductorias sobre los usos de la verdad”, en DE GAMBOA TAPIAS, C. (ed.), *Justicia transicional: teoría y praxis*, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2006.

VALENCIA VILLA, A., “Memorias compartidas. Las Comisiones de la Verdad de Paraguay y Ecuador”, en VV.AA, *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias de América Latina*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011.

VAN BOVEN, T., “Victim’s Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines”, en FERSTMAN C., GOETZ, M., STEPHENS, A., (eds.), *Reparations for victims of genocide, war crimes and crimes against humanity*, Leiden-Boston, Marthinus Nijhoff Publishers, 2009.

VAN DE VIJVER, L., “The Amnesty Process”, en JAMES, W., VAN DE VIJVER, L., *After the TRC: Reflections on truth and reconciliation in South Africa*, Atenas – Ciudad del Cabo, Ohio University Press – David Philip Publishers, 2000.

VARGAS CARREÑO, E., “Prólogo”, en PINTO, M., *La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993.

VILLÁN DURÁN, C., “El funcionamiento de los mecanismos extraconvencionales de protección internacional de los derechos humanos”, en JIMÉNEZ PIERNAS, C. (ed.), *Iniciación a la práctica en Derecho internacional y Derecho comunitario europeo*, Madrid, Marcial Pons – Universidad de Alcalá, 2003.

WEICHERT, M.A., “Comissões da Verdade e Comissões de Reparação no Brasil”, en DE SOUSA JUNIOR, J.G., MOREIRA DA SILVA FILHO, J.C., PAIXAO, C., GIMENES DIAS DA FONSECA, L., DIAS RAMPLIN, T.T., (dirs.), *O Direito Achado na Rua. Vol. 7. Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina*, Brasília, Comissão de Anistia, 2015.

WILSON, R.A., “Justicia y legitimidad en la transición surafricana”, en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR, P., y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (eds.), *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002.

ZALAQUETT, J., “Procesos de transición a la democracia y políticas de derechos humanos en América Latina” en GONZÁLEZ VOLIO, L. (ed.), *Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Ensayos en honor al profesor Fernando Volio Jiménez*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998.



## II. JURISPRUDENCIA

### 1. Jurisprudencia Internacional

#### 1.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, Fondo, sentencia de 29 de septiembre de 1988, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, N° 4.

Caso *Godínez Cruz c. Honduras*, Fondo, sentencia de 20 de enero de 1989, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias*, No. 5.

Caso *Neira Alegría y otros c. Perú*, Fondo, sentencia de 19 de septiembre de 1996, en *Serie C: núm.20*.

Caso *Loayza Tamayo c. Perú*, Fondo, sentencia de 17 de septiembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencia Núm. 33*.

Caso *Castillo Páez c. Perú*, Fondo, sentencia de 3 de noviembre de 1997, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 34*.

Caso *Blake c. Guatemala*, Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998, en *Serie C No. 36*.

Caso *Benavides Cevallos c. Ecuador*, 19 de junio de 1998, en *Serie C: Resoluciones y Sentencias, Núm. 38*.

Caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Fondo, sentencia de 25 de noviembre del 2000, en *Serie C: Núm.70*.

Caso *Barrios Altos c. Perú*, Fondo, sentencia de 14 de marzo de 2001, en *Serie C, Núm. 75*.

Caso *Cantoral Benavides c. Perú*, Reparaciones y costas, sentencia de 3 de diciembre de 2001, en *Serie C núm. 88*.

Caso *Trujillo Oroza c. Bolivia*, Reparaciones y costas, sentencia de 27 de febrero de 2002, en *Serie C núm. 92*.

Caso *Caracazo c. Venezuela*, Fondo, sentencia de 29 de agosto de 2002, en *Serie C Núm. 95*.

Caso *Las Palmeras c. Colombia*, Reparaciones y costas, sentencia de 26 de noviembre de 2002, en *Serie C: Núm. 96*.

Caso *Humberto Sánchez c. Honduras*, Fondo, sentencia de 7 de junio de 2003, en *Serie C, Núm. 99*.

Caso *Myrna Mack Chang c. Guatemala*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 25 de noviembre de 2003, en *Serie C, Núm. 101*.

Caso *19 Comerciantes c. Colombia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 5 de julio de 2004, en *Serie C, Núm. 109*.

Caso *Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 8 de julio de 2004, en *Serie C, Núm. 110*.

Caso *Tibi c. Ecuador*, Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 7 de septiembre de 2004, en *Serie C, Num. 114*.

Caso *Masacre Plan de Sánchez c. Guatemala*, Reparaciones, sentencia de 19 de noviembre de 2004, en *Serie C, Núm. 116*.

Caso *Carpio Nicolle y otros c. Venezuela*, Fondo reparaciones y costas, sentencia de 22 de noviembre de 2004, en *Serie C: Núm. 117*.

Caso *Huilca Tecse c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 3 de marzo de 2005, en *Serie C, Núm. 121*.

Caso *Gutiérrez Soler c. Colombia*, sentencia de 12 de septiembre de 2005, en *Serie C No. 132*.

Caso *Masacre de Maripán c. Colombia*, Fondo, sentencia de 15 de septiembre de 2005, en *Serie C, Núm. 134*.

Caso *Blanco Romero y otros c. Venezuela*, sentencia de 28 de noviembre de 2005, en *Serie C: Núm. 138*.

*Caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia*, sentencia de 31 de enero de 2006, en *Serie C: Núm.140*.

*Caso Baldeón García c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 6 de abril de 2006, en *Serie C: Núm.147*.

*Caso Ximenes Lopes c. Brasil*, sentencia de 4 de julio de 2006, en *Serie C: Núm.149*.

*Caso Goiburú y otros c. Paraguay*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 22 de septiembre de 2006, en *Serie C Núm. 153*.

*Caso Almonacid Arellanos y otros c. Chile*, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 26 de septiembre de 2006, en *Serie C Núm. 154*.

*Caso La Cantuta c. Perú*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 29 de noviembre de 2006, en *Serie C: Núm.162*.

*Caso Escué Zapata c. Colombia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 4 de julio de 2007, en *Serie C: Núm. 165*.

*Caso Zambrano Vélez y otros c. Ecuador*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 4 de julio de 2007, en *Serie C: Núm.166*.

*Caso Tiu Tojín c. Guatemala*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 26 de noviembre de 2008, en *Serie C: Núm.190*.

*Caso de la Masacre de la Rochela c. Colombia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de enero de 2008, en *Serie C: Núm. 163*.

*Caso Anzualdo Castro c. Perú*, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 22 de septiembre de 2009, en *Serie C: Núm. 202*.

*Caso Radilla Pacheco c. México*, Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 23 de noviembre de 2009, en *Serie C: Núm. 209*.

*Caso de la Masacre de Dos Erres c. Guatemala*, Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de noviembre de 2009, en *Serie C: Núm. 211*.

Caso *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña c. Bolivia*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 1 de septiembre de 2010, en *Serie C: Núm. 217*.

Caso *Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) c. Brasil*, sentencia de 24 de noviembre de 2010, en *Serie C, Núm. 219*.

Caso *Chitay Nech y otros c. Guatemala*, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 25 de mayo de 2010, en *Serie C: Núm. 212*.

Caso *Gelmán c. Uruguay*, Fondo y Reparaciones, sentencia de 24 de febrero de 2011, en *Serie C, Núm. 211*.

Caso *Contreras y otros c. El Salvador*, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 31 de agosto de 2011, en *Serie C, Núm. 232*.

Caso *González Medina y familiares c. República Dominicana*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de febrero de 2012, *Serie C, Núm. 240*.

Caso *Masacres de El Mozote y lugares aledaños c. El Salvador*, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de octubre de 2012, en *Serie C, Núm. 252*.

Caso *García Lucero y otras c. Chile*, Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones, sentencia de 28 de agosto de 2013, en *Serie C No. 267*.

Caso *Osorio Rivera y Familiares c. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 26 de noviembre de 2013, en *Serie C, Núm. 274*.

Caso *Defensor de Derechos Humanos y otros c. Guatemala*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 28 de agosto de 2014, en *Serie C, Núm. 283*.

Caso *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) c. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014 en *Serie C. núm. 287*.

Caso *Cruz Sánchez y otros c. Perú*. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015 en *Serie C*, núm. 292.

Caso *Comunidad Campesina de Santa Bárbara c. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015 en *Serie C*, núm. 299.

Caso *Omar Humberto Maldonado y otros c. Chile*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2015 en *Serie C*, núm. 300.

## **1.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos**

Caso *McCann y otros c. Reino Unido*, Demanda Núm. 18984/91, sentencia de 27 de septiembre de 1995.

Caso *Kaya c. Turquía*, Demanda Núm. 22729/93, sentencia de 19 de febrero de 1998.

Caso *Assenov c. Bulgaria*, Demanda Núm. 24760/94, sentencia 28 de octubre de 1998.

Caso *Kurt c. Turquía*, Demanda Núm. 24276/94, sentencia de 25 de mayo de 1998.

Caso *Çakici c. Turquía*, Demanda Núm. 23657/94, sentencia de 8 de julio de 1999.

Caso *Aydin c. Turquía*, Demanda Núm. 23178/94, sentencia de 25 de septiembre de 1997.

Caso *Chipre c. Turquía*, Denuncia núm. 27781/94, sentencia de 10 mayo de 2001.

Caso *Imakayeva c. Rusia*, Demanda 7615/02, sentencia de 9 de febrero de 2007.

Caso *Khashiyev y Akayeva c. Rusia*, Demandas 57942/00 y 57945/00, sentencia de 24 de febrero de 2005. caso *Utsayeva c. Rusia*, Demanda 29133/03, sentencia de 1 de diciembre de 2008.

Caso *Alikhadzhiyeva c. Rusia*, Demanda 68007/01, sentencia de 30 de enero de 2008.

Caso *Silih c. Eslovenia*, Demanda 71463/01, sentencia de 9 de abril de 2009.

Caso *Varnava y otros c. Turquía*, Demandas Núm. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90, sentencia de 18 de septiembre de 2009.

Caso *Association '21 de diciembre 1989' y otros c. Rumania* (Sección Tercera), Denuncia 33810/07, 25 de mayo de 2011.

Caso *El-Masri c. ex república yugoslava de Macedonia* (GS), Denuncia núm. 39630/09, 13 de diciembre de 2012.

Caso *Al Nashiri c. Polonia* (Sección Cuarta), Denuncia núm. 28761/11, 24 de julio de 2014.

### **1.3. Comité de Derechos Humanos**

Caso *Bleier c. Uruguay*, Comunicación 30/1978, Doc. CCPR/C/15/D/30/1978, 29 de marzo de 1982.

Caso *Hugo Dermitt c. Uruguay*, Comunicación 84/1981, Doc. CCPR/C/17/D/84/1981, 21 de octubre de 1982.

Caso *Almeida de Quinteros c. Uruguay*, Comunicación 107/1981, Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, 21 de julio de 1983.

Caso *S.E c. Argentina*, Comunicación 275/1988, Doc. CCPR/C/38/D/275/1988, 4 de abril de 1990.

Caso *R. A. V. N c. Argentina*, Comunicación 345/1988, Doc. CCPR/C/38/D/345/1988, 5 de abril de 1990.

Caso *José Vicente y Amado Villafañe Chaparro et al c. Colombia*, Comunicación núm.612/1995, Doc. CCPR/C/60/D/612/1995, 14 de junio de 1994.

Caso *Hugo Rodríguez c. Uruguay*, Comunicación núm. 322/1988, Doc. CCPR/C/51/D/322/1988, 9 de agosto de 1994.

Caso *Federico Andreu c. Colombia*, Comunicación núm. 563/1993, Doc. CCPR/C/55/D/563/1993, 13 de noviembre de 1995.

Caso *Katombe L. Tshishimbi c. Zaire*, Comunicación núm.542/1993, Doc. CPR/C/56/D/542/1993, 4 de abril de 1996.

Caso *Celis Laureano c. Perú*, Comunicación núm. 540/193, Doc. CCPR/C/56/D/540/193, 16 de abril de 1996.

Caso *María Cifuentes Elgueta c. Chile*, Comunicación núm.1536/2006, Doc. CCPR/C/96/D/1536/2006, 7 de septiembre de 2009.

Caso *Mériem Zarzi c. Argelia*, Comunicación 1780/2008, Doc. CCPR/C/101/D/1780/2008, 19 de mayo de 2011.

Caso *Taous Djebbar y Saadi Chihoub c. Argelia*, Comunicación 1811/2008, Doc. CCPR/C/103/D/1811/2008, 24 de enero de 2012.

Caso *Khirani c. Argelia*, Comunicación 1905/2009, Doc. CCPR/C/104/D/1905/2009, 25 de junio de 2012.

Caso *Yamina Guezout y otros c. Argelia*, Comunicación 1753/2008, Doc. CCPR/C/105/D/1753/2008, 20 de septiembre de 2012.

Caso *Al Khazmi c. Libia*, Comunicación 1832/2008, 4 de septiembre de 2013.

Caso *Shanta Sedhai c. Nepal*, Comunicación 1865/2009, Doc. CCPR/C/108/D/1865/2009, 28 de octubre de 2013.

Caso *Djelloul Larbi c. Argelia*, Comunicación 1831/2008, Doc. CCPR/C/108/D/1831/2008, 25 de noviembre de 2013.

Caso *Ahmed Zerrougui c. Argelia*, Comunicación 1796/2008, Doc. CCPR/C/108/D/1796/2008, 11 de diciembre de 2013.

Caso *Taous Azouz c. Argelia*, Comunicación 1798/2008, Doc. CCPR/C/108/D/1798/2008, 11 de diciembre de 2013.

Caso *Rizvanović c. Bosnia Herzegovina*, Comunicación 1997/2010, Doc. CCPR/C/110/D/1997/2010, 23 de abril de 2014.

#### **1.4. Comité contra la Tortura**

Comunicación núm. 1/1988, 2/1988, 3/1988, Doc. Doc. U.N. Doc. CAT/C/WG/3/DR/1, 2 and 3/1988, 23 de noviembre de 1989

#### **1.5. Corte Internacional de Justicia**

I.C.J. *Reports* 1950. Asunto relativo al *Derecho al asilo* (Colombia c. Perú), 20 de noviembre de 1950.

I.C.J. *Reports* 1986. Asunto relativo a las *actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua* (Nicaragua c. EEUU), sentencia de 27 de junio de 1986.

I.C.J. *Reports* 2012. Asunto relativo a *Cuestiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar* (Bélgica c. Senegal), 20 de julio de 2012.

I.C.J. *Reports* 1969. Asunto relativo a la *Plataforma continental del mar del Norte* (República Federal de Alemania, Dinamarca y Países Bajos), sentencia de 20 de febrero de 1969.

I.C.J. *Reports* 1971. Opinión consultiva sobre *consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad*, 21 de junio de 1971.

I.C.J. *Reports* 1996. Opinión consultiva sobre *la legalidad o de la amenaza o el empleo de armas nucleares*, 8 de julio de 1996.

I.C.J. *Reports* 2004. Opinión consultiva sobre las *consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*, 9 de julio de 2004.



### **1.6. Tribunales penales mixtos**

CÁMARA DE DERECHOS HUMANOS PARA BOSNIA Y HERZEGOVINA, caso *Avdo and Esma Palić c. The Republika Srpska* de 9 de diciembre del 2000.

\_\_\_\_\_ caso *Dordo Unkovic c. The Federation of Bosnia and Herzegovina* de 6 de mayo de 2002.

\_\_\_\_\_ caso *Srebrenica c. The Republika Srpska* de 7 de marzo de 2003.

## **2. Jurisprudencia interna**

### **2.1. Argentina**

CORTE SUPREMA DE ARGENTINA, causa núm. 17768 de 14 de junio de 2005; JUSTICIA FEDERAL ARGENTINA, causa núm. 6681.

### **2.2. Chile**

CORTE SUPREMA DE CHILE, caso *Insunza Bascuña, Iván Sergio (recurso de inaplicabilidad)*, 24 de agosto de 1990.

### **2.3. Colombia**

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, sentencia C-370/2006 del 18 de mayo de 2006, Expediente D-6032.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, sentencia C-771/2011, 14 de octubre de 2011.

### **2.4. Nepal**

TRIBUNAL SUPREMO, caso *Madhav Kumar Basnet c. the Government of Nepal*, 2 de junio de 2014.

## **2.5. Paraguay**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución 81 de 26 de marzo de 1993.

## **2.6. Perú**

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PERÚ, expediente 2488-2002-HC/TC de 18 de marzo de 2004.

## **2.7. Sudáfrica**

CORTE CONSTITUCIONAL, *Azanian People's Organisation (AZAPO) and Others c. President of the Republic of South Africa and Others*, caso CCt 17, sentencia de 25 de julio de 1996.

# **III. LEGISLACIÓN**

## **1. Tratados internacionales**

Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, adoptado en Roma, 4 de noviembre de 1950.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José (Costa Rica) el 22 de noviembre de 1969.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1966.

Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977.

Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada el 10 de diciembre de 1984.

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

## **2. Legislación interna**

### ***1. Alemania***

StUG, ley de 20 de diciembre de 1991.

Ley 12/2597 de 14 de mayo de 1992.

### ***2. Argelia***

Decreto 03-299 de 11 de septiembre de 2003.

### ***3. Argentina***

Ley 22924 de 22 de septiembre de 1983.

Decreto presidencial 187 de 14 de diciembre de 1983.

Ley 23492 de 23 de diciembre de 1986.

Ley 23521 de 4 de junio de 1987.

Decretos 1002, 1003, 1004 y 1005, de 7 de octubre de 1989.

Decretos 2741, 2745 y 2746, 29 de diciembre de 1990.

Ley 12483 de 13 de julio del 2000.

Decreto 12498 de 12 de octubre del 2000.

Decreto presidencial 1259/2003 de 16 de diciembre de 2003.

Ley 9577 de 8 de julio de 2004.

Decreto 1661/04 de 21 de septiembre de 2004.

Ley 5582 de 17 de agosto de 2005.

Ley 9286 de 22 de marzo de 2006.

Ley 2260 de 2 de junio de 2006.

Decreto 2775 de 23 de octubre de 2006.

Ley IV 36 (anteriormente 4349) de 23 de marzo de 2007.

Ley 8003 de 9 de febrero de 2009.

Decreto presidencial 4/2010 de 5 de enero de 2010.

#### **4. *Bolivia***

Decreto supremo núm. 19241 de 28 de octubre de 1982.

#### **5. *Brasil***

Ley 9.140/95 de 4 de diciembre de 1995.

Ley 10.875, del 1 de junio de 2004.

Ordenanza 204 de 13 de mayo de 2009.

#### **6. *Bulgaria***

Law on Access to and Disclosure of the Documents and Announcement of Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army, 6 de diciembre de 2006.

## **7. *Chad***

Decreto presidencial núm. 014/P.CE/CJ/90, 29 de diciembre de 1990.

## **8. *Chile***

Decreto de amnistía núm. 2191, 18 de abril de 1978.

Decreto supremo 355, 25 de abril 1990.

Decreto Supremo 1040 de 26 de septiembre de 2003.

Ley 20405 de 10 de diciembre de 2009.

## **9. *Colombia***

Ley 975 25 de julio de 2005.

Ley 1312 de 9 de julio de 2009.

Ley 1424 de 29 de diciembre de 2010.

Acto Legislativo núm.1 de 31 de julio de 2012.

Ley 1592 de 3 de diciembre de 2012.

Ley 1448 de 10 de junio de 2011.

## **10. *Corea del Sur***

Ley 7174, de 5 de marzo de 2004.

Ley 7177, de 5 de marzo de 2004

Ley 7203, de 22 de marzo de 2004.

Ley 7121, de 29 de enero de 2004.

Ley 7626 de 19 de julio de 2005.

Ley 7542, de 31 de mayo de 2005.

Ley 8644, de 17 de octubre de 2007.

Ley 9947 de 25 de enero de 2010.

Ley 10143 de 22 de marzo de 2010.

Ley 10190, de 26 de marzo de 2010.

### ***11. Costa de Marfil***

Orden núm. 2011-167, de 13 de julio de 2011.

### ***12. Ecuador***

Acuerdo Ministerial 012 de 17 de septiembre de 1996.

Acuerdo Ministerial núm. 305 de 3 de mayo de 2007.

### ***13. El Salvador***

Decreto legislativo núm. 486 de 20 de marzo de 1993.

### ***14. Eslovaquia***

Ley 553/2002, 19 de agosto de 2002.

### ***15. España***

Ley 46/1977, 17 de octubre de 1977.

Ley 52/2007, de 27 de diciembre de 2007.

### ***16. Ghana***

The Special Investigation Board (Kidnapping and Killing of Specified Persons) Law, 1982 (PNDC Law 15).

National Reconciliation Act 611, 11 de enero del 2002.

### ***17. Guatemala***

Decreto 1768 de 25 de junio de 1968.

Decreto núm. 145-1996, 27 de diciembre de 1996.

Decreto Número 17-97, del 12 de marzo de 1997.

Acuerdo gubernativo 64-2009, 5 de marzo de 2009.

### ***18. Haití***

Decreto presidencial de 28 de marzo de 1995.

### ***19. Honduras***

Decreto núm. 26-92, de 8 de junio de 1992.

Decreto Ejecutivo 6/51-92 de 8 de septiembre de 1992.

Decreto ejecutivo núm. PCM – 011-2010 de 13 de abril de 2010.

### ***20. India***

Ministry of Home Affairs Notification, Nueva Delhi, 28 de mayo de 1977.

### ***21. Islas Salomón***

Ley núm.5 de 2008, 28 de agosto de 2008.

### ***22. Kenia***

Ley para la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación, 23 de octubre de 2008.

### ***23. Liberia***

Truth and Reconciliation Commission Act, 12 de mayo de 2005.

#### **24. *Lituania***

Ley I-1115 de 5 de diciembre de 1995

Decreto presidencial de 7 de septiembre de 1998.

Decreto de 18 de noviembre de 1998.

Decreto núm. 1K-1245 de 16 de octubre de 2012.

#### **25. *Marruecos***

Decreto real 1.04.42 de 10 de abril de 2004.

#### **26. *México***

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 11 de junio de 2002.

Ley 932 (Estado de Guerrero), 23 de diciembre de 2011.

Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación de 9 de enero de 2013.

#### **27. *Nepal***

Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Ordinance – 2069 (2013), 14 de marzo de 2013.

Decreto de la Comisión de Investigación de Personas, Verdad y Reconciliación, 25 de abril de 2014.

#### **28. *Nigeria***

Statutory Instrument núm.8 de 14 de junio de 1999.

#### **29. *Perú***

Ley 26479 de 14 de junio de 1995.



Decreto 065 – 2001 de 4 de junio de 2001.

Decreto 201 – 2001 de 4 de septiembre de 2001.

### **30. *República Checa***

Decreto 83/1994 del Ministerio del Interior, 1 de enero de 1995.

Decreto 27/1995 del Ministerio del Interior.

Ley 451/1991 de 4 de octubre de 1991.

Ley 140/1996 de 26 de abril de 1996.

Ley 148/1998 de 20 de mayo de 1998.

Ley 181/2007 de 8 de junio de 2007.

### **31. *República Democrática del Congo***

Ley 04/108 de 30 de julio 2004.

### **32. *República Federal de Yugoslavia***

Decreto 15/2001 – Decreto 59/2002, de 30 de marzo de 2001.

### **33. *Rumania***

Decisión 1724 de 21 de diciembre de 2005.

### **34. *Sierra Leona***

The Truth and Reconciliation Commission Act 2000, 9 de febrero del 2000.

### **35. *Sri Lanka***

Disposición presidencial 855/20, 25 de enero de 1995.

### **36. Sudáfrica**

Ley 95/34 de 26 de julio de 1995.

Ley 43/96 de 2 de octubre de 1996.

### **37. Tailandia**

Decreto presidencial 104/2548 de 28 de marzo de 2005.

### **38. Túnez**

*Organic Law on Establishing and Organizing Transitional Justice*, 15 de diciembre de 2013.

### **39. Pakistán**

*Hamoodur Rahman Commission Supplementary Report to the Commission's Official Inquiry into the 1971 India-Pakistan War*, Rockville, Arc Manor, 2007.

### **40. Panamá**

Decreto ejecutivo núm.2, 18 de enero de 2001.

### **41. Paraguay**

Ley 1099/97 de 21 de agosto de 1997.

Ley 2225 de 15 de octubre de 2003.

Defensoría del Pueblo de Paraguay, Resolución 179/09 de 23 de enero de 2009.

### **42. Perú**

Resolución suprema de 27 de enero de 1983.

### **43. Polonia**

Ley 45 – 195 de 5 de abril de 1991.

#### **44. Uganda**

Disposición legal núm. 2, 30 de junio de 1974.

Legal Notice núm. 5, 16 de mayo de 1986.

#### **45. Uruguay**

Ley 15848 de 22 de diciembre de 1986.

Resolución de la Presidencia de la República 858/2000 de 9 de agosto del 2000.

Decreto presidencial 448/2003, 16 de abril 2003.

Ley 18435, 12 de diciembre de 2008.

#### **46. República Bolivariana de Venezuela**

Gaceta oficial 38.808 de 25 de noviembre de 2011.

### **IV. DOCUMENTACIÓN**

#### **1. DOCUMENTOS DE LA ONU**

##### ***1.1. Asamblea General de las Naciones Unidas***

*Resolución 1514(XV), “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, 14 de diciembre de 1960.*

*Resolución 2625 (XXV), “Declaración sobre los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas”, 24 de octubre de 1970.*

*Resolución 3220 (XXIX), “Asistencia y cooperación para localizar a las personas muertas o desaparecidas en conflicto armado”, 6 de noviembre de 1974.*

*Resolución 32/19 (XXI), “Protección de los Derechos Humanos en Chile”, 6 de noviembre de 1974.*

*Resolución 34/179 (XXX), “Derechos Humanos en Chile”, 9 de diciembre de 1975.*

*Resolución 31/124, “Protección de los Derechos Humanos en Chile”, 16 de diciembre de 1976.*

*Resolución 32/62, “Proyecto de convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, 8 de diciembre de 1977.*

*Resolución 32/118, “Protección de los Derechos Humanos en Chile”, 16 de diciembre de 1977.*

*Informe del Consejo Económico y Social. Protección de los derechos humanos en Chile, Doc. A/33/331, 25 de octubre de 1978.*

*Resolución 33/175, “Protección de los Derechos Humanos en Chile”, 20 de diciembre de 1978.*

*Resolución 33/173, “Personas desaparecidas”, 20 de diciembre de 1978.*

*Resolución 34/49, “Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”, 23 de noviembre de 1979.*

*Resolución 34/179, “Protección de los Derechos Humanos en Chile”, 17 de diciembre de 1979.*

*Resolución 35/188, “Protección de los Derechos Humanos en Chile”, 15 de diciembre de 1980.*

*Resolución 36/157, “Protección de los Derechos Humanos en Chile”, 16 de diciembre de 1981.*

*Resolución 37/183, “La situación Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Chile”, 17 de diciembre de 1982.*

*Resolución 38/102, “Situación Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Chile”, 16 de diciembre de 1983.*

*Resolución 39/121, “Situación Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Chile”, 14 de diciembre de 1984.*

*Resolución 40/145, “Situación Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Chile”, 13 de diciembre de 1985.*

*Resolución 42/147, “Situación Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Chile”, 7 de diciembre de 1987.*

*Resolución 43/158, “Situación Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Chile”, 8 de diciembre de 1988.*

*Resolución 43/159, “Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias”, de 8 de diciembre de 1988.*

*Resolución 44/160, “Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias”, 15 de diciembre de 1989.*

*Resolución 44/166, “Situación de los Derechos Humanos en Chile”, 15 de diciembre de 1989.*

*Resolución 45/165, “Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias”, 18 de diciembre de 1990.*

*La situación en Centroamérica: procedimiento para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, Doc. A/48/954, 1 de julio de 1994*

*Carta de fecha 8 de marzo de 1995 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Burundi ante las Naciones Unidas, Doc. A/50/94, 8 de marzo de 1995.*

*General framework agreement for peace in Bosnia and Herzegovina, Doc. A/50/790, 30 de noviembre de 1995.*

*Cuestión de Timor Oriental*, Doc. A/54/726, 31 de enero del 2000.

*Resolución 57/161, “Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala”*, 28 de enero de 2003.

*Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la independencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad. Nota del Secretario General*, Doc. A/60/321, 31 de agosto de 2005.

*Resolución 55/118, “Situación de los derechos humanos en Haití”*, 1 de marzo de 2001.

*Resolución 60/147, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”*, 21 de marzo de 2006.

*Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la independencia del poder judicial, la administración de justicia y la impunidad. Nota del Secretario General*, Doc. A/62/207, 6 de agosto de 2007.

*Independencia de magistrados y abogados. Nota del Secretario General*, Doc. A/63/271, 12 de agosto de 2008.

*Resolución 65/196. “Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”*, 3 de marzo de 2011.

*Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue*, Doc. A/68/362, 4 de septiembre de 2013.

*Argentina: proyecto de resolución. El derecho a la verdad*, Doc. A/C.3/68/L.43, 1 de noviembre de 2013.

*Sexagésimo octavo período de sesiones. 70ª sesión plenaria Miércoles 18 de diciembre de 2013, a las 15.00 horas Nueva York*, Doc. A/68/PV.70.

*Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe de la Tercera Comisión, Doc. A/68/456/Add.2, 10 de diciembre de 2013.*

*Tercera Comisión Acta resumida de la 47ª sesión. Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 19 de noviembre de 2013, a las 10.00 horas, Doc. A/C.3/68/SR.47, 20 de enero de 2014.*

*Resolución 68/165, “El derecho a la verdad”, 21 de enero de 2014.*

*Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014.*

## **1.2. Comisión de Derechos Humanos**

*Resolución 8 (XXXI), 27 de febrero de 1975.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Doc. E/CN.4/1435, 22 de enero de 1981.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Doc. E/CN.4/1983/14, 21 de enero de 1983.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Doc. E/CN.4/1984/21, 9 de diciembre de 1983.*

*Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y en particular: la tortura y otros o penas crueles, inhumanos o degradantes. Informe del Relator Especial, Mr. P. Koojimans, Doc. E/CN.4/1993/26, 15 de diciembre de 1992.*

*Informe del Experto independiente sobre El Salvador, Sr. Pedro Nikken, designado por el Secretario General de conformidad con la resolución 1992/62, de 3 de marzo de*

1992, de la Comisión de Derechos Humanos, Doc. E/CN.4/1993/11, 15 de febrero de 1993.

*Derecho a la libertad de opinión y expresión*, Doc. E/CN.4/RES/1993/45, 5 de marzo de 1993.

*Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993.

*Resolución 1994/41. Independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados*, Doc. E/CN.4/RES/1994/41, 4 de marzo de 1994.

*Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de la resolución 1994/82 de la Comisión de Derechos Humanos*, Doc. E/CN.4/1995/61, 14 de diciembre de 1994.

*La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción. Octavo informe revisado anual y lista de Estados que desde el 1º de enero de 1985 han proclamado, prorrogado o levantado el estado de excepción, presentado por el Sr. Leandro Despouy, Relator Especial, nombrado en cumplimiento de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/20, 26 de junio de 1995.

*Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión*, Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997.

*Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de la resolución 1997/61 de la Comisión de Derechos Humanos*, Doc. E/CN.4/1998/68/Add.2, 12 de marzo de 1998.



*Informe del Sr. M. Cherif Bassiouni, experto independiente sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, presentado de conformidad con la resolución 1998/43 de la Comisión de Derechos Humanos, Doc. E/CN.4/1999/65, 8 de febrero de 1999.*

*La situación de los derechos humanos en Timor Oriental. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999/S-4/1, Doc. E/CN.4/RES/1999/S-4/1, 28 de septiembre de 1999.*

*Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión, Doc. E/CN.4/2002/71, 8 de enero de 2002.*

*Resolución 2003/72, Doc. E/CN.4/RES/2003/72, 25 de abril de 2003.*

*Estudio independiente, con inclusión de recomendaciones sobre las mejores prácticas para ayudar a los Estados a reforzar su capacidad nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad, elaborado por la Profesora Diane Orentlicher y presentado a la Comisión de Derechos Humanos por el Secretario General en cumplimiento de la resolución 2003/72, Doc. E/CN.4/2004/88, 27 de febrero de 2004.*

*Resolución 2004/72, Doc. E/CN.4/RES/2004/72, 21 de abril de 2004.*

*Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, Doc. E/CN.4/2005/102, 18 de febrero de 2005.*

*Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Doc. E/CN.4/2005/66, 10 de marzo de 2005.*

*Resolución 2005/66. El derecho a la verdad*, Doc. E/CN.4/RES/2005/66, 20 de abril 2005.

*Resolución 2005/80. Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo*, Doc. E/CN.4/RES/2005/80, 21 de abril de 2005.

*Estudio sobre el derecho a la verdad*, Doc. E/CN.4/2006/91, 9 de enero de 2006.

*Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy*, Doc. E/CN.4/2006/52, 23 de enero de 2006.

*Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, Doc. E/CN.4/2006/57, 2 de febrero de 2006.

### **1.3. Comisión de Derecho Internacional**

*Fragmentación del Derecho Internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. Informe del Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho Internacional. Elaborado por Martti Koskenniemi*, Doc. A/CN.4/L.682, 13 de abril de 2006.

*Informe de la 66ª sesión de la CDI (2014)*, A/CN.4/678.

*Informe de la 67ª sesión de la CDI (2015)*, A/69/10.

### **1.4. Consejo de Derechos Humanos**

*Decisión 2/105. Derecho a la verdad*, Doc. A/HRC/DEC/2/105, 27 de noviembre de 2006.

*Opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria*, Doc. A/HRC/4/40/Add.1, 2 de febrero de 2007.

*El derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, Doc. A/HRC/5/7, 7 de junio de 2007.

*Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, Doc. A/HRC/8/4, 13 de mayo de 2008.*

*Resolución 9/11. El derecho a la verdad, Doc. A/HRC/RES/9/11, 24 de septiembre de 2008.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Misión a Argentina, Doc. A/HRC/10/9/Add.1, 5 de enero de 2009.*

*El derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Doc. A/HRC/12/19, 21 de agosto de 2009.*

*El derecho a la verdad, Doc. A/HRC/RES/12/12, 12 de octubre de 2009.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Doc. A/HRC/13/31, 21 de diciembre de 2009.*

*Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Frank La Rue, Doc. A/HRC/14/23, 20 de abril de 2010.*

*Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad, Doc. A/HRC/15/33, 28 de julio de 2010.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Doc. A/HRC/16/47, 19 de enero de 2011.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Doc. A/HRC/16/48, 26 de enero de 2011.*

*Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el seminario de experiencias en materia de archivos como medio de garantizar el derecho a la verdad, Doc. A/HRC/17/21, 14 de abril de 2011.*

*Resolución 17/2. Mandato de Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Doc. A/HRC/17/2, 6 de julio de 2011.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a México, Doc. A/HRC/19/58/Add.2, 20 de noviembre de 2011.*

*Informe del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Côte d'Ivoire, Doudou Diène, Doc. A/HRC/19/72, 9 de enero de 2012.*

*Informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Doc. A/HRC/19/58/Rev.1, 2 de marzo de 2012.*

*Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, Doc. A/HRC/21/46, 9 de agosto de 2012.*

*Resolución 21/7. El derecho a la verdad, Doc. A/HRC/RES/21/7, 10 de octubre de 2012.*

*Resolución 22/8. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo: mandato del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Doc. A/HRC/RES/22/8, 9 de abril de 2013.*

*Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson. Principios marco para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos por las violaciones manifiestas o sistemáticas de los derechos humanos cometidas en el transcurso de iniciativas de lucha contra el terrorismo respaldadas por los Estados, Doc. A/HRC/22/52, 17 de abril de 2013.*

*Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, Doc. A/HRC/24/42, 28 de agosto de 2013.*

*Resolución 24/7. La detención arbitraria, Doc. A/HRC/RES/24/7, 8 de octubre de 2013.*

*Informe del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Côte d'Ivoire, Doudou Diène, Doc. A/HRC/25/73, 13 de enero de 2014.*

*Resolución 25/2. Libertad de opinión y expresión: mandato del Relator Especial sobre la promoción y protección a la libertad de opinión y expresión, Doc. A/HRC/RES/25/2, 9 de abril de 2014.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a España, Doc. A/HRC/27/49/Add.1, 2 de julio de 2014.*

*Resolución 26/7. Mandato del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Doc. A/HRC/RES/26/7, 10 de julio de 2014.*

*Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Misión a España, Doc. A/HRC/27/56/Add.1, 22 de julio de 2014.*

*Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Doc. A/HRC/27/49, 4 de agosto de 2014.*

*Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, Adición, Misión a Uruguay, Doc. A/HRC/27/56/Add.2, 28 de agosto de 2014.*

*Resolución 27/1. Desapariciones forzadas o involuntarias, 1 de octubre de 2014.*

*Resolución 27/3. Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Doc. A/HRC/RES/27/3, 3 de octubre de 2014.*

### **1.5. Consejo Económico y Social**

*Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes, Resolución 1235 (XLII), 6 de junio de 1967.*

## **1.6. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos**

“Right to the truth – National Archives on Human Right”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/en/issues/truth/pages/truthIndex.aspx>

*Instrumentos del Estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la verdad*, Nueva York – Ginebra.

*OHCHR Comments on the Nepal “Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Ordinance – 2069 (2013)”*, 3 de abril de 2013.

## **1.7. Comité de Derechos Humanos**

### **a) Observaciones generales.**

*Observación General N° 24*, Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 de noviembre de 1994.

*Observación general núm.31 [80]. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto*, Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004.

*Observación general núm. 33. Obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, Doc. CCPR/C/GC/33, 25 de junio de 2009.

### **b) Observaciones finales a países.**

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Senegal*, Doc. CCPR/C/79/Add.10, 28 de diciembre de 1992.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Niger*, Doc. CCPR/C/79/Add.17, 29 de abril de 1993.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Irán*, Doc. CCPR/C/79/Add.25, 3 de agosto de 1993.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: El Salvador*, Doc. CCPR/C/79/Add.34, 18 de abril de 1994.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Burundi*, Doc. CCPR/C/79/Add.41, 3 de agosto de 1994.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Argentina*, Doc. CCPR/C/79/Add.46, 5 de abril de 1995.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Zambia*, Doc. CCPR/C/79/Add.62, 3 de abril de 1996.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Guatemala*, Doc. CCPR/C/79/Add.63, 3 de abril de 1996.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Perú*, Doc. CCPR/C/79/Add.67, 25 de julio de 1996.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Líbano*, Doc. CCPR/C/79/Add.78, 1 de abril de 1997.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Colombia*, Doc. CCPR/C/79/Add. 76, 5 de mayo de 1997.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Francia*, Doc. CCPR/C/79/Add.80, 4 de agosto de 1997.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Iraq*, Doc. CCPR/C/79/Add.84, 12 de noviembre de 1997.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Zimbawe*, Doc. CCPR/C/79/Add.89, 4 de abril de 1998.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Uruguay*, Doc. CCPR/C/79/Add.90, 8 de abril de 1998.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Argelia*, Doc. CCPR/C/79/Add.95, 10 de agosto de 1998.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Macedonia, Doc. CCPR/C/79/Add.96, 18 de agosto de 1998.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile, Doc. CCPR/C/79/Add.104, 30 de marzo de 1999.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Lesotho, Doc. CCPR/C/79/Add.106, 8 de abril de 1999.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Camboya, Doc. CCPR/C/79/Add.108, 27 de julio de 1999, párr.10.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: México, Doc. CCPR/C/79/Add.109, 27 de julio de 1999.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República de Corea, Doc. CCPR/C/79/Add.114, 1 de noviembre de 1999.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Camerún, Doc. CCPR/79/Add. 116, 4 de noviembre de 1999.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Hong Kong, Doc. CCPR/C/79/Add.117, 12 de noviembre de 1999.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República del Congo, Doc. CCPR/C/79/Add.118, 25 de abril del 2000.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Guatemala, Doc. CCPR/CO/72/GTM, 27 de agosto de 2001.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Popular Democrática de Corea, Doc. CCPR/CO/72/PRK, 27 de agosto de 2001.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Brasil, Doc. CCPR/C/BRA/CO/2, 1 de diciembre de 2005.*

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Centroafricana, Doc. CCPR/C/CAF/CO/2, 27 de julio de 2006.*



*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: España*, Doc. CCPR/C/ESP/CO/5, 5 de enero de 2009.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Colombia*, Doc. CCPR/C/COL/CO/6, 6 de agosto de 2010.

*Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Togo*, Doc. CCPR/C/TGO/CO/4, 18 de abril de 2011.

*Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Albania*, Doc. CCPR/C/ALB/CO/2, 22 de agosto de 2013.

*Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España*, Doc. CCPR/C/ESP/CO/6, 14 de agosto de 2015.

*Observaciones finales sobre el informe inicial de Côte d'Ivoire*, Doc. CCPR/C/CIV/CO/1, 28 de abril de 2015.

**c) Observaciones generales.**

*Observación General núm. 20. Prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7)*, Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 10 de marzo de 1992.

*Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos*, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 12 de mayo de 2004.

**d) Otros documentos**

*Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto. Côte d'Ivoire*, Doc. CCPR/C/CIV/1, 21 de mayo de 2013.

## **1.8. Comité contra la Tortura**

### **a) Observaciones finales a países**

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Nepal*, Doc. CAT/C/NPL/CO/2, 15 de diciembre de 2005.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Sri. Lanka*, Doc. CAT/C/LKA/CO/2, 15 de diciembre de 2005.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Hungría*, Doc. CAT/C/HUN/CO/4, 6 de febrero de 2007.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Italia*, Doc. CAT/C/ITA/CO/4, 16 de julio de 2007.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Benin*, Doc. CAT/C/BEN/CO/2, 19 de febrero de 2008.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Uzbequistán*, Doc. CAT/C/UZB/CO/3, 26 de febrero de 2008.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Kazajistán*, Doc. CAT/C/KAZ/CO/2, 12 de diciembre de 2008.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Montenegro*, Doc. CAT/C/MNE/CO/1, 19 de enero de 2009.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Honduras*, Doc. CAT/C/HND/CO/1, 23 de junio de 2009.

*Observaciones del Comité contra la Tortura: Israel*, Doc. CAT/C/ISR/CO/4, 23 de junio de 2009.

*Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Colombia*, Doc. CAT/C/COL/CO/4, 4 de mayo de 2010.

## **b) Observaciones generales**

*Observación general N°3 (2012). Aplicación del artículo 14 por los Estados partes, Doc. CAT/C/GC/3, 13 de diciembre de 2012.*

### **1.9. Comité contra la Desaparición Forzada**

*Observaciones finales sobre el informe presentado por Uruguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, Doc. CED/C/URY/CO/1, 3 de mayo de 2013.*

*Observaciones finales sobre el informe presentado por Francia en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, Doc. CED/C/FRA/CO/1, 8 de mayo de 2013.*

*Observaciones finales sobre el informe presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, Doc. CED/C/ESP/CO/1, 12 de diciembre de 2013.*

*Observaciones finales sobre el informe presentado por Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, Doc. CED/C/ARG/CO/1, 12 de diciembre de 2013.*

*Observaciones finales sobre el informe presentado por Armenia, Doc. CED/C/ARM/CO/1, 13 de marzo de 2015.*

### **1.10. Consejo de Seguridad**

*Carta de fecha 29 de marzo de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General. De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador, Doc. S/25500, 1 de abril de 1993.*

*Resolución 827 (1993), Doc. S/RES/827, 25 de mayo de 1993.*

*Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad, Doc. S/PRST/1995/10, 9 de marzo de 1995.*

*Informe del Enviado Especial para examinar la viabilidad de una comisión de la verdad en Burundi o de una comisión judicial de averiguación como alternativa de una comisión de la verdad*, Doc. S/1995/631, 28 de julio de 1995.

*Resolución 1012 (1995)*, Doc. S/RES/1012, 28 de agosto de 1995.

*Carta de fecha 25 de julio de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General*, Doc. S/1996/682, 22 de agosto de 1996.

*Resolución 1260 (1999)*, Doc. S/RES/1260, 20 de agosto de 1999.

*Resolución 1272 (1999)*, Doc. S/RES/1272 (1999), 25 de octubre de 1999.

*Resolución 1279 (1999)*, Doc. S/RES/1279 (1999), 30 de noviembre de 1999.

*Resolución 1315 (2000)*, Doc. S/RES/1315, 14 de agosto del 2000.

*Resolución 1509 (2003)*, Doc. S/RES/1509 (2003), 19 de septiembre de 2003.

*El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*, Doc. S/2004/616, 3 de agosto de 2004.

### **1.11. Otros documentos**

UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR, *Regulation 2001/10*, Doc. UNTAET/REG/2001/10, 13 de julio de 2001.

CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS, *Declaración y Programa de Acción de Viena*, Doc. A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993.

UNESCO, *Memoria del Mundo. Archivos del Terror*. Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-terror/>

UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR,  
*Regulation 2000/15*, Doc. UNTAET/REG/2000/15, 6 de junio del 2000.

## **2. DOCUMENTACIÓN DEL ÁMBITO REGIONAL AMERICANO**

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, *Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Acta Final*, Doc. OEA.Ser.F/II.5, Santiago de Chile, 12-19 de agosto de 1959.

### **2.1. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos**

Resolución AG/RES 809 (XVII'0787).

Resolución “El derecho a la verdad”, Doc. AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06), 6 de junio de 2006

### **2.2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

*Resolución 22/86*, caso 7920, 18 de abril de 1986.

*Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina*, Doc. OEA/Ser.L/V/II.49 doc. 19, 11 de abril de 1980.

*Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia*, Doc. OEA/Ser.L/V/II.53 doc.6 rev.2, 13 de octubre de 1981.

*Informe Anual 1985-1986*, OEA/Ser.L/V/II.68 Doc. 8 rev. 1, 26 de septiembre de 1986.

*Informe Anual 1987-1988*, OEA/Ser.L/V/II.74 Doc. 10 rev.1, 16 de septiembre de 1988.

*Informe sobre la situación de derechos humanos en Haití*, Doc. OEA/Ser.L/V.88, 9 de febrero de 1995.

*Informe 10/95. Caso 10.580. Ecuador*, 12 de septiembre de 1995.

*Informe 1/1997. Caso 10.258, Ecuador, 12 de marzo de 1997.*

*Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96 Doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997.*

*Alegatos finales caso Ernesto Rafael Castillo Páez, 30 de junio de 1997.*

*Informe 25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705. Chile, 7 de abril de 1998.*

*Informe 136/99, Caso 10.480, El Salvador, 22 de diciembre de 1999.*

*Informe 140/99, Caso 11.275, Guatemala, 21 de diciembre de 1999.*

*Informe 1/99, Casos 10.480. El Salvador, 27 de enero de 1999.*

*Informe 21/00. Caso 12.059, Carmen Aguilar de Lapacó c. Argentina, 29 de febrero de 2000.*

*Informe 37/00. Caso 11.481. Monseñor Óscar Arnulfo Romero c. El Salvador, 13 de abril del 2000.*

*Informe 40/00. Casos 10588, 10608, 10796, 10856, 10921, 13 de abril del 2000.*

*Informe núm. 99/00. Caso 11868, 5 de octubre de 2000.*

*Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, OEA/Ser.L/VII.110 doc. 52, 9 marzo 2001.*

*Informe 61/01. Caso 11771, 16 de abril de 2001.*

*Informe 74/05. Caso 11887, 15 de octubre de 2005.*

*Informe 92/05. Caso 12418, 24 de octubre de 2005.*

*Informe 80/07. Caso 11658, 15 de octubre de 2007.*

*Informe 36/08. Caso 12487, 18 de julio de 2008.*

*Informe 25/09. Caso 12310, 19 de marzo de 2009.*

*Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 11.324. Narciso González Medina y otros c. la República Dominicana, 2 de mayo de 2010.*

*Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010, Doc. OEA/Ser.L/V/II Doc. 68, 3 de junio de 2010.*

*Caso Núm. 12.590, José Miguel Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) c. Guatemala, 18 de febrero de 2011.*

*El derecho de acceso a la información pública en las Américas. Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales, Doc. OEA/Ser.L/V/II.CIDH/RELE/INF.7/12, 30 de diciembre de 2011.*

*Informe Anual 2011, Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69, 30 de diciembre de 2011.*

*Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13, 31 diciembre 2013.*

*Derecho a la verdad en América, Doc. OEA/Ser.L/V/II.152, 13 de agosto de 2014.*

### **3. INFORMES DE COMISIONES DE LA VERDAD**

COMISIA PREZIDENȚIALĂ PENTRU ANALIZA DICTATURII COMUNISTE DIN ROMÂNIA, *Raport Final*, Bucarest, 2006.

COMISIÓN DE BIENVENIDA, VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE TIMOR ORIENTAL, *Chega!*, Dili, 2006.

COMISIÓN DE LA VERDAD DE ECUADOR, *Informe final – Sin verdad no hay justicia (Resumen ejecutivo)*, Quito, 2010.

COMISIÓN DE LA VERDAD DE PANAMÁ, *La verdad os hará libres*, Ciudad de Panamá, 2002.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN DE GRANADA, *Informe de ciertos eventos políticos que ocurrieron en Granada 1976-1991*, 28 de marzo de 2006.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE PERÚ, *Informe final*, Lima, 2003.

COMISIÓN DE VERDAD SIN VERDAD NO HAY JUSTICIA, *Informe de la Comisión de la Verdad. La voz más autorizada es la de las víctimas*, Tegucigalpa, 2012.

COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, *Informe final*, Asunción, 2008.

COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS, *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*, La Habana, 2015, p.4. Disponible en: [http://www.coljuristas.org/documentos/adicionales/version\\_final\\_informes\\_CHCV.pdf](http://www.coljuristas.org/documentos/adicionales/version_final_informes_CHCV.pdf)

COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS, *Nunca Más*, Buenos Aires, 8ª ed., Eudeba, 2009.

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO, *Guatemala, memoria del silencio*, Guatemala, Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, 1999.

COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, *Los hechos hablan por sí mismos: Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993*, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 2.ª ed., 2002.

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS, *Direito à Memória e à Verdade*, 2007, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Brasília.

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, *Relatório*, Brasília, 2014.

ESTONIAN STATE COMMISSION ON EXAMINATION OF THE POLICIES OF REPRESSION, *The White Book. Losses inflicted on the Estonian nation by occupation regimes*, Tallín, 2005.



HUMAN RIGHTS VIOLATIONS INVESTIGATION COMMISSION REPORT (NIGERIA).

INSTANCE ÉQUITÉ ET RÉCONCILIATION, *Rapport Final*, 2005.

INTERNATIONAL COMMISSION ON THE HOLOCAUST IN ROMANIA, *Final Report*, Bucarest, 2004.

NATIONAL RECONCILIATION COMMISSION (THAILAND), *Overcoming Violence Through the Power of the Reconciliation* (Unofficial translation), Bangkok, 2006.

SALOMON ISLANDS TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, *Confronting the Truth for a better Solomon Islands*, Honiara, 2012.

TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION OF SOUTH AFRICA REPORT, 7 volúmenes, Ciudad del Cabo, 1998.

TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, SIERRA LEONE, *Witness to truth: report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. Vol.1*, Graphic Packaging Ltd, 2004.

TRUTH FOR RECONCILIATION COMMISSION OF THAILAND, *Final report*, Bangkok, 2012.

TRUTH, JUSTICE AND REPARATION COMMISSION, *Final report*, Nairobi, 2013.

#### **4. DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES**

AFRICA WATCH, “Ghana: Revolutionary Injustice - Abuse of the Legal System Under the PNDC Government”, Human Rights Watch, vol. IV.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, *Peru: Truth and Reconciliation Commission – a first step towards a country without injustice*, AI Index: AMR 46/003/2004, 2004.

---

*Informe 2010 – Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo. Índice Amnistía Internacional POL 10/001/2011.*

\_\_\_\_\_*Informe 2011 – Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo.* Índice Amnistía Internacional POL 10/001/2012.

\_\_\_\_\_*Informe 2012 – Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo.* Índice Amnistía Internacional POL 10/001/2013.

\_\_\_\_\_*Informe 2013 – Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo.* Índice Amnistía Internacional POL 10/001/2014.

\_\_\_\_\_*Informe 2014/2015 – Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo.* Índice Amnistía Internacional POL 10/0001/2015.

BINGHAM CENTRE FOR THE RULE OF LAW, *Transitional Justice in Nepal: The Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Act 2014*, Londres, 2014.

CENTRO PARA LA JUSTICIA Y LEY INTERNACIONAL, *Comisión de la Verdad de Honduras nace con graves carencias jurídicas*, 4 de mayo del 2010. Disponible en: <https://cejil.org/comunicados/comision-de-la-verdad-de-honduras-nace-con-graves-carencias-juridicas>

HUMAN RIGHTS WACHT, “El Salvador. Accountability and Human Rights: the report of the United Nations Commission on the truth for El Salvador”, *News From Americas Watch*, vol IV, 1993, núm. 7.

\_\_\_\_\_*“Truth and Justice on Hold: The New State Commission on ‘Disappearances’”*, vol. 15, 2003, núm. 11.

\_\_\_\_\_*“No One Is Safe. Insurgent Attacks on Civilians in Thailand’s Southern Border Provinces”*, vol. 19, 2007, núm. 13.

\_\_\_\_\_*“Análisis de Human Rights Watch sobre ‘El Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto’ alcanzado por el Gobierno y las FARC”*, 21 de diciembre de 2015. Disponible en: <https://www.hrw.org/es/news/2015/12/21/analisis-de-human-rights-watch-sobre-el-acuerdo-sobre-las-victimas-del-conflicto>

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURIST, *Justice Denied: The 2014 Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Act*, 2014.

JONES, S., “Will to Prosecute Past Offenders Lost in the Philippines”, *Human Rights Watch*, vol. 4, 1989.

MEMORIA ABIERTA, *Guía de archivos útiles para la investigación judicial de delitos de lesa humanidad*, Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, Buenos Aires, 2011.

OPGENHAFFEN, V., FREEMAN, M., “Transitional Justice in Morocco: A Progress Report”, *International Center for Transitional Justice*, 2005, p. 12. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Progress-Report-2005-English.pdf>

XXII CONFENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA, Resolución V, Tehrán, 1973. Disponible en: <http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdln8.htm>

TRIAL, *Truth Commission in Uganda*. Disponible en: <http://www.trial-ch.org/index.php?id=962&L=5>

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, *Truth Commission: Uganda, 1974*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/truth-commission-uganda-74>

\_\_\_\_\_ *Commission of Inquiry: Nepal 90*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/commission-inquiry-nepal-90>

\_\_\_\_\_ *Commission of Inquiry: Sri Lanka*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/commissions-inquiry-sri-lanka>

\_\_\_\_\_ *Truth Commission: Ecuador 1996*. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/truth-commission-ecuador-96>

\_\_\_\_\_*Commission of Inquiry: Côte d'Ivoire*, Disponible en:  
<http://www.usip.org/publications/commission-inquiry-cote-divoire>

\_\_\_\_\_*Truth Commission: Panama*. Disponible en:  
<http://www.usip.org/publications/truth-commission-panama-truth-commission-comision-de-la-verdad-de-panam>

## 5. OTRA DOCUMENTACIÓN

ANNUAIRE DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, "Session du Caire 1987", vol. 62, 1987, núm. 2.

\_\_\_\_\_*Helsinki*, 1985, vol 60-I.

CLAVERO, B., "¿Comisión de la Verdad en Colombia?", *El Diario*, 1 de marzo de 2015.

CRAWFORD, J., "Transitional Justice in Cote d' Ivoire – In Brief", *Justice Info*, 31 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.justiceinfo.net/en/live-feed/406-transitional-justice-in-cote-d%E2%80%99ivoire-%E2%80%93-in-brief.html>

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA, *Folleto Informativo N°26*, p.27. Documento disponible en:  
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf>

FREEMAN, M., "Africa y sus comisiones de la verdad y la reconciliación". Disponible en: [http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/1720\\_2.pdf?view=1](http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/1720_2.pdf?view=1)

GUACKER, E., *A study of the Nigerian truth commission and why it failed*, Tesis de master, Bergen, Universidad de Bergen, 2009.

INFORME CONJUNTO DE LA MESA DE CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJÉRCITO DEL PUEBLOS, *Avance de la discusión del punto 5: Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición*.

Véase,

[http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/comunicados/Documents/comunicados\\_conjuntos/comunicado-conjunto-53-4-de-junio-de-2015.pdf](http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/comunicados/Documents/comunicados_conjuntos/comunicado-conjunto-53-4-de-junio-de-2015.pdf)

JARAMILLO, J., “La Comisión Histórica de La Habana: antecedentes y retos”, *Razón Pública*, 1 de septiembre de 2014.

REGISTRO OFICIAL DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA EN LA REAFIRMACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS, VOL.XI, Ginebra, 1975, Doc. CDDH/II/SR.19.

REGISTRO OFICIAL DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA EN LA REAFIRMACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS, VOL.XI, Ginebra, 1975, Doc. CDDH/II/SR.35.

REGISTRO OFICIAL DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA EN LA REAFIRMACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS, VOL.XII, Ginebra, Doc. CDDH/II/SR.76, 1976.

VARGAS, J., “Verdad, Justicia y Reparación en Ecuador”. Disponible en: [https://www.academia.edu/12029581/Justicia\\_transicional\\_en\\_Ecuador](https://www.academia.edu/12029581/Justicia_transicional_en_Ecuador)

RAMSTAD, E., “Hey Kim Jong Il, Seoul Is Now Taking Names”, *The Wall Street Journal*, 16 de marzo de 2011.